

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA



**EL PODER PARAMILITAR EN COLOMBIA O DE CÓMO
LOS PARAMILITARES LLEGARON A COOPTAR EL
ESTADO COLOMBIANO (1980-2010)**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR**

Miriam Álvaro Rodríguez

Bajo la dirección de la doctora

Esther del Campo García

MADRID, 2013



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
ORTEGA Y GASSET

Programa de Doctorado en América Latina Contemporánea:

Los Retos de la Integración Política, Social y Económica

TESIS DOCTORAL

***El poder paramilitar en Colombia o de cómo los paramilitares llegaron a cooptar el
Estado colombiano (1980-2010)***

Miriam Álvaro Rodríguez

Directora

Dra. Esther del Campo García

Madrid

Primavera, 2013

Índice

Agradecimientos.....	6
Introducción.....	8
Capítulo 1. Aspectos teórico-metodológicos: el conflicto desde la Sociología Política.....	17
1.1 Teoría de la acción colectiva.....	18
1.1.1 Los antiguos paradigmas de los Movimientos Sociales.....	21
1.1.2 Cambio de enfoque: el actor racional frente a la masa.....	24
1.1.3 Teoría de la movilización de recursos.....	25
1.1.3.1 Enfoque organizativo-empresarial de John D. McCarthy y Mayer N. Zald.....	27
1.1.3.2 El modelo político de Charles Tilly.....	30
1.1.3.3 Estructura de Oportunidad Política.....	32
1.1.3.4 Sidney Tarrow y el ciclo de acción colectiva.....	37
1.1.3.5 Tilly y Tarrow y el repertorio de acción.....	41
1.1.4 Los Nuevos Movimientos Sociales y la acción colectiva.....	47
1.1.5 Confluencia teórica: la unión de varias perspectivas en el análisis de los grupos paramilitares.....	56
1.2 Esta investigación.....	63
Capítulo 2.¿Quiénes son los grupos paramilitares?: Composición y evolución...	69
2.1 La interpretación de la violencia en Colombia: su dimensión histórica....	69
2.2 Origen y evolución del paramilitarismo colombiano.....	75
2.3 Debate en torno al concepto paramilitar.....	89
2.3.1. ¿Cómo se pueden definir a los grupos paramilitares desde el punto de vista teórico?.....	89
2.3.2 Profundización en el tratamiento de determinados autores.....	95
2.3.3 Los paramilitares como grupos paraestatales.....	111
2.4 Conclusión.....	115
Capítulo 3. Orígenes y antecedentes del fenómeno paramilitar en Colombia....	117
3.1 La Violencia y el primer paramilitarismo.....	114
3.2 Paramilitarismo y Frente Nacional	127

3.3 Conclusión.....	135
Capítulo 4. Los grupos paramilitares en Colombia.....	137
4.1 Colombia como ciclo de conflicto.....	138
4.1.1 Intensificación y difusión de la acción en el conflicto colombiano..	140
4.1.2 Repertorio y marco de la acción colectiva.....	150
4.1.3 Viejas y nuevas organizaciones dentro del conflicto.....	158
4.1.4 Aumento de la información y de la interacción.....	160
4.1.5 Desmovilización de la acción ¿el fin del conflicto?.....	163
4.1.6 Conclusión.....	169
4.2 ¿Qué oportunidades del sistema político colombiano aprovecharon los paramilitares para consolidarse?.....	171
4.2.1 Los paramilitares y las oportunidades estructurales.....	171
4.2.2 Los paramilitares y las oportunidades coyunturales.....	183
4.2.2.1 Origen.....	184
4.2.2.2 Expansión (1988-1997).....	189
4.2.2.3 Consolidación desde 1997.....	199
4.3 ¿Qué recursos utilizaron los paramilitares para movilizarse?.....	236
4.3.1 Fuentes de financiación e inversión paramilitar.....	236
4.3.2 Recursos organizacionales.....	258
4.3.3 Recursos tácticos.....	262
4.3.4 Recursos humanos.....	264
4.4 Ideología y simbología paramilitar.....	277
4.5 El ascenso de los grupos paramilitares en el ámbito político.....	287
4.5.1 La parapolítica.....	293
4.5.2 La influencia en los procesos electorales.....	313
4.5.3 ¿Por qué surge el escándalo de la parapolítica en el año 2006?.....	322
4.5.4 Casos de estudio.....	327
4.5.4.1 Los paramilitares en la costa atlántica: el caso de Jorge 40.....	327
4.5.4.2 El paramilitarismo en Medellín.....	334
4.5.4.3 El Bloque Central Bolívar.....	343
4.5.4.4 Las Autodefensas Campesinas del Ortega.....	346
4.5.4.5 Carlos Castaño y las Autodefensas Unidas de Córdoba	

y Urabá.....	348
Conclusiones generales	358
Resumen/Summary	378
Anexos	393
Listados	403
Bibliografía	446

Índice de figuras

Figura 1. Ciclo de conflicto.....	139
Figura 2. Evolución de los efectivos de las FARC y ELN de 1964 a 2004.....	141
Figura 3. Número de hombres y frentes del ELN de 1978 a 2000.....	141
Figura 4. Heridos y Muertos durante el conflicto armado de 1976 a 2006.....	143
Figura 5. Total de muertes en ataques por autor 1988-2005.....	143
Figura 6. Asesinatos de candidatos y dirigentes, 1986-2001.....	144
Figura 7. Homicidios de periodistas por autor.....	146
Figura 8. Homicidios a sindicalistas de 1986 a 2009.....	147
Figura 9. Número de desplazados de 1997 a 2009.....	148
Figura 10. Desaparecidos de 2007 a 2009.....	148
Figura 11. Ataques de la guerrilla, paramilitares y gobierno de 1989 a 2005.....	149
Figura 12. Acciones unilaterales de cada grupo de 1989 a 2005.....	150
Figura 13. Responsables de masacres, 1990-2005.....	152
Figura 14. Acciones de los grupos paramilitares de 1988 a 2004.....	153
Figura 15. Ciclo de conflicto colombiano.....	162
Figura 16. Fase de desmovilización del conflicto colombiano.....	169
Figura 17. Hectáreas de coca cultivada de 1999 a 2006.....	214
Figura 18. Consumo de cocaína percibida por expertos, 1999-2006.....	215
Figura 19. Cantidad estimada de cocaína en tránsito hacia EEUU, 2000-2006.....	215
Figura 20. Precio de la cocaína al por mayor.....	215

Figura 21. Precio de la cocaína al detal.....	215
Figura 22. Informe Bandas Criminales Emergentes, BACRIM.....	228
Figura 23. Cultivos ilícitos por regiones en 1998, áreas y empleo.....	246
Figura 24. Geografía de los cultivos ilícitos en 1998.....	246
Figura 25. Número de secuestros por autor.....	251
Figura 26. Participación del número total de extorsiones según autor por categorías, 1998-2004.....	252
Figura 27. Masacres cometidas por grupos paramilitares, 1997-2003.....	263
Figura 28. Motivos para incorporarse al grupo paramilitar.....	285
Figura 29. Símbolo de las Autodefensas Unidas de Colombia.....	286
Figura 30. Grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar.....	286
Figura 31. Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Colombianas de Córdoba y Urabá.....	287
Figura 32. Situación judicial de los senadores.....	295
Figura 33. Senadores implicados en parapolítica.....	296
Figura 34. Senadores implicados en parapolítica.....	296
Figura 35. Situación judicial de los representantes.....	297
Figura 36. Representantes implicados en parapolítica.....	298
Figura 37. Representantes implicados en parapolítica.....	299
Figura 38. Situación judicial de los funcionarios regionales.....	299
Figura 39. Funcionarios regionales implicados en parapolítica.....	300
Figura 40. Situación judicial de los funcionarios locales.....	301
Figura 41. Funcionarios locales implicados en parapolítica.....	301
Figura 42. Partidos políticos de los senadores implicados en parapolítica.....	303
Figura 43. Partidos políticos de los representantes a Cámara implicados en parapolítica.....	304
Figura 44. Partidos políticos de los funcionarios regionales implicados	

en parapolítica	305
Figura 45. Partidos políticos pertenecientes a los funcionarios locales implicados en parapolítica.....	306
Figura 46. Partidos políticos y número de funcionarios implicados en parapolítica.....	308
Figura 47. Funcionarios implicados en parapolítica por departamento.....	309
Figura 48. Homicidios en Medellín 1990-2009.....	341

Índice de tablas

Tabla 1. Tipología de paramilitarismo.....	90
Tabla 2. Definición de paramilitarismo según diferentes autores.....	106
Tabla 3. ¿Son los paramilitares actores políticos?.....	114
Tabla 4. Homicidios políticos de 1966 a 2007.....	145
Tabla 5. Tipología de los nuevos grupos armados surgidos tras la desmovilización paramilitar.....	227
Tabla 6. Comparación de informes sobre nuevos grupos paramilitares.....	229
Tabla 7. Departamentos y municipios con presencia de BACRIM.....	230
Tabla 8. Comparativo de departamentos con mayor afectación de grupos paramilitares 2008-2011.....	231
Tabla 9. Presencia de BACRIM de 2008 a 2011.....	231
Tabla 10. Empresas que han colaborado con los grupos paramilitares.....	238
Tabla 11. Número de secuestros de 1996 a 2011.....	250
Tabla 12. Masacres cometidas por grupos paramilitares de 1998 a 2003.....	315

Agradecimientos

La decisión por hacer un doctorado, siempre me fue difícil. Embarcarme después de realizar una licenciatura y un máster en esta aventura fue más que arriesgada. Pero, durante la realización de la misma aprendí mucho, no sólo desde el punto de vista académico, con grandes profesores, sino también desde el punto de vista personal, sobre todo cuando observo el gran acompañamiento que he tenido y el ánimo que he recibido. Esta aventura que empezó en México D.F. concluye en Madrid, agradeciendo a un número importante de personas e instituciones su apoyo en la realización y culminación de mi tesis.

En primer lugar quisiera agradecer a la dirección de la Fundación Ortega-Marañón y del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset su respaldo en este ejercicio. Dentro de esta Institución, ha sido muy importante, en el desarrollo de esta investigación, el apoyo de Esther del Campo, directora de tesis, jefa y amiga. Su soporte, su inteligencia y su fuerza fueron imprescindibles. Ludolfo Paramio, Director del Doctorado en América Latina Contemporánea, con su ánimo, estuvo siempre atento al proceso de la misma. Junto con Esther y Ludolfo, Laura Ruiz, coordinadora del programa durante mi formación, con su amistad me enseñó a esforzarme mucho más. Además de estos pilares fundamentales, a todos mis compañeros de la Fundación e Instituto, les agradezco sus buenas palabras para conmigo. Entre ellos, sin duda, Lucía Nieto y Julián, merecen todo mi reconocimiento y amistad, sobre todo Lucía, por su fortaleza e inteligencia en ayudarme a desenmarañar el inicio de mi investigación.

Indudablemente, Iván Rodríguez, fue el apoyo más decisivo e incondicional para el desarrollo y finalización de esta tesis. Su esfuerzo y su paciencia han logrado que ahora pueda estar escribiendo estos agradecimientos. Por su incondicional apoyo y cariño, le agradezco cada palabra de aliento que me dio.

Entre las instituciones colombianas que me asistieron durante mi investigación, destaca el apoyo recibido por la Cámara de Representantes de la República de Colombia, el Palacio de Justicia de Antioquia en Medellín, la Comisión Colombiana de Juristas, la Alcaldía de Medellín, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Centro de Investigación y Educación Popular, la Alta Conserjería para la Reinserción, la Fundación Seguridad y Democracia, la Defensoría del Pueblo en Bogotá, la Corporación Nuevo Arcoíris, la sede del periódico El Tiempo y El Colombiano, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia.

La financiación de mi estancia en Colombia fue gracias a la Beca Glamour de Ediciones CondeNet Ibérica. Gracias a su aportación pude continuar con el desarrollo de esta investigación.

Una especial mención merece el senador Luis Fernando Velasco, alumno del Ortega y amigo. Gracias a su colaboración logré establecer importantes vínculos con congresistas colombianos.

A Pedro Medellín, por su amabilidad y destreza en apoyar mi proyecto en el inicio y ayudarme en mi estadía en Colombia.

El Profesor Gabriel Murillo, merece un especial reconocimiento por abrirme sus puertas en la Universidad de los Andes.

Evidentemente, no puedo dejar de mencionar a Andrés García, Antonio Sanguino, Laura Bonilla, León Valencia y Jorge Blanco. Colombianos que me echaron una mano durante mi estancia en Colombia. Una especial mención a la Corporación Nuevo Arco Iris por su interés en mi y su gran atención recibida durante y después de mi viaje.

A Adriana González, por su amistad, cariño y compromiso con mi tesis durante mi estancia en la Universidad de Antioquia. De esta misma institución, merece mención los conocimientos y cariños de Juan Carlos Vélez y Manuel Alberto Alonso.

La familia Rey me brindó todo aquello que pude necesitar en Colombia. Cariño, amistad y un eterno agradecimiento por acogerme como una hija más. Todo mi agradecimiento y cariño para Luzma, Diana, Camilo, María Isabel, Martha y Olga.

Durante la elaboración de esta tesis, me han acompañado en el camino mis alumnos de las universidades estadounidenses de SMU, IWU y USD. Pero, especial mención requieren mis alumnos del Liceo Versailles: gracias chicos por alegrarme cada día con vuestra presencia, espontaneidad y cariño. Dentro del Liceo, no quiero dejar de nombrar a la titular del mismo, Carmen Martín Rubio, la directora, M^a Carmen Rubio, y mis compañeros profesores, por el empuje y ánimo que me dieron durante la conclusión de la investigación.

Mis amigas y amigos, también han jugado un papel importante y han ido viendo cómo maduraba mi investigación. Sobre todo a mis amigas del Colegio Santa Gema Galgani, por su incondicional amistad y creencia en este objetivo académico. A mis amigos y amigas de Vicálvaro, a mi amiga Palmi, mi amigo Miranda, a mis amigos del Doctorado, a todos ellos mi agradecimiento y amistad.

Por mi condición de historiadora, tengo que agradecer a mi profesor del colegio, Gabriel Sanz, el haberme inculcado el amor a la historia, el saber apreciar sus buenas clases donde tanto aprendí y que ahora intento enseñar como él a mis alumnos.

En último lugar, agradezco a mi familia el apoyo y el esfuerzo que ha realizado por darme la oportunidad de sobre educarme, por permitirme estudiar en una sociedad que garantizaba la igualdad de oportunidades y por enseñarme la cultura del esfuerzo, tan pertrecha en estos momentos. Al Maestro Álvaro, por acompañarme con su guitarra allí donde estaba.

Madrid, abril de 2013

Introducción

Recientemente apareció en la prensa colombiana la noticia de que el General del Ejército Mauricio Santoyo fue acusado de estar involucrado en la parapolítica durante la Presidencia de Álvaro Uribe, es decir, se le acusaba de haber mantenido relaciones con grupos paramilitares¹. De este modo, parecía confirmarse la idea de que estas relaciones no solamente se dieron a principios de los años ochenta, cuando los hermanos Castaño fueron apoyados en Córdoba por el Batallón XI, el Batallón Bomboná y el General Rito Alejo del Río frente a la agresión de las guerrillas y a la incapacidad estatal para manejar esta situación. De esta manera, el ejército tuvo que apoyarse en los paramilitares, calificados por los propios militares como la Sexta División del Ejército.

Esta noticia constituye en sí misma una pequeña muestra de la relevancia de este trabajo de investigación. La actual coyuntura política colombiana es también un claro ejemplo de la significación de esta investigación. Tras la desmovilización de los grupos paramilitares, las relaciones entre los grupos paramilitares y la clase política colombiana trascendieron a los medios de comunicación de masas. En un primer momento, se pensó que los paramilitares habían coaccionado a determinados políticos para obtener determinados beneficios. Con posterioridad, el número de implicados en la clase política comenzó a crecer de manera desmesurada y se vislumbró que quizá no era del todo cierta la anterior afirmación de coacción. Aunque era un secreto a voces, por primera vez se mostraron los nombres, cada vez más numerosos, de congresistas, alcaldes, concejales, gobernadores que habían colaborado con estos grupos. Incluso se vislumbró que existían determinados partidos políticos más afines que otros a los grupos paramilitares, como el Movimiento Popular Unido, el Movimiento Cambio Radical, el Movimiento Convergencia Popular Cívica o el Movimiento Convergencia Ciudadana. Como consecuencia de estas incipientes investigaciones en prensa, en algunos partidos se comenzó a expulsar a los recién investigados; tal es el caso de Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, jefes del partido de 'la U' y Cambio Radical, respectivamente, que anunciaron la expulsión de Habib Merheg, Jorge Luis Caballero, Jorge Castro, Dieb Maloof, y Luis Eduardo Vives, de sus movimientos, en enero de 2006, a raíz de las acusaciones realizadas contra ellos por supuestos vínculos con grupos paramilitares². Podemos afirmar así que a partir de este momento se empezó a indagar en las redes que habían conformado estos grupos armados.

¹ ¿Cuáles verdades contará el general Mauricio Santoyo?, *Semana*, 21 de agosto de 2012.

² “Gobierno respalda expulsión de candidatos de Cambio Radical y el Partido de la U”, *El Tiempo*, 18 de enero de 2006.

Además de la injerencia paramilitar en las fuerzas armadas y en la clase política, quedó de manifiesto una relación cada vez más intensa con empresarios, hacendados y agencias de ámbito nacional e internacional como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) y la Central de Inteligencia Americana (CIA). Es decir, que estamos ante un fenómeno complejo y dinámico, que no puede interpretarse sólo como una alianza de los paramilitares con el sector militar o el narcotráfico.

Al mismo tiempo, este fenómeno paramilitar es continuo en el tiempo. Es decir, la injerencia de los grupos paramilitares en el territorio colombiano es patente desde la década de los años ochenta y había sido incluso reconocida en ocasiones por las autoridades del Departamento de Magdalena (Medina, 1994). Desde entonces, estos grupos aumentaron en número, coordinación, capacidad, estrategia e influencia política y geográfica. El surgimiento de los diversos núcleos de paramilitares y autodefensas tuvo dinámicas diferentes en las distintas regiones donde hoy tienen influencia. Dentro de esta dinámica, el Departamento de Córdoba acogió un intenso trabajo organizativo interno que permitió a estos grupos conformar un perfil político más definido de lo que hasta el momento eran diferentes grupos paramilitares y de autodefensas, primero a través de la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), a finales de 1994 y, posteriormente, con la aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en abril de 1997, bajo la comandancia de Carlos Castaño. Las ACCU construyeron una sólida red de apoyo e influencia local y regional que compitió con las lealtades que mantenía el gobierno central y el proyecto político de la insurgencia guerrillera. Una vez que se extendieron y controlaron determinados territorios a finales de la década de los noventa, sometieron a la población, dirigieron la economía y mandaron en el ámbito político. Es decir, para entender la influencia del paramilitarismo es necesario retroceder hasta la década de los años ochenta, para ver su evolución y su posterior expansión y control en los diferentes ámbitos.

En síntesis, la actual coyuntura colombiana denota una permanente transmisión informativa relacionada con los grupos paramilitares y su infiltración en el ámbito local, regional y nacional. Esta difusión permite acercarnos a comprender el poder paramilitar en la sociedad colombiana, su organización, sus redes de expansión y su dinámica de acción. El estudio en profundidad del fenómeno paramilitar proporciona un acercamiento más preciso para entender la actual coyuntura, ampliando las posibilidades de intervención efectiva de actuación desde el Estado y

demostrando así su valor para el conocimiento de la realidad histórica en Colombia. Como señalaba Giovanni Sartori en *La política. Lógica y método de las ciencias sociales* (FCE, México, 1984):

“Los problemas de la acción remiten a un conocimiento dirigido a los fines de la acción, es decir, a un conocimiento para aplicar” (Sartori, 1984:47).

Este trabajo de investigación pretende hacer una aproximación a la complejidad del fenómeno paramilitar. Por tanto, se examina la influencia de los grupos paramilitares en Colombia y su injerencia en el gobierno local colombiano. Se trata de un estudio preliminar que intenta poner de manifiesto la cooptación del ámbito local por los grupos armados paramilitares desde el gobierno presidido por Belisario Betancur (1980-1984) hasta la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).

Para llevar a cabo este estudio, se plantean las siguientes **preguntas** que intentan ser respondidas a lo largo de este trabajo:

- A) ¿Cómo se puede definir a los grupos paramilitares colombianos?
- B) ¿Qué tratamiento han recibido por parte de diferentes autores?
- C) ¿Se pueden establecer diferencias entre los grupos paramilitares colombianos?
- D) ¿Cuáles fueron los antecedentes del surgimiento en la década de los ochenta de los grupos paramilitares en Colombia?
- E) ¿Cuál ha sido la dinámica del conflicto armado interno y cómo ha afectado a los grupos paramilitares?
- F) ¿Cuáles han sido las oportunidades coyunturales y estructurales para el surgimiento y consolidación de estos grupos en determinados departamentos colombianos?
- G) ¿Qué estrategias y recursos han desarrollado para consolidarse como actor hegemónico en determinados departamentos?
- H) ¿Cómo lograron extender sus redes desde el ámbito local, pasando por el ámbito regional y nacional?
- I) ¿Cuáles fueron sus acciones políticas más visibles?
- J) ¿Por qué estalló el escándalo de la parapolítica en el año 2006?
- K) ¿Qué partidos políticos y qué departamentos han sido señalados por parapolítica?
- L) ¿Qué puede aportar el estudio de la presencia paramilitar en el nivel local para mejorar el rendimiento de la democracia colombiana?

Por tanto, el objetivo general de esta investigación es describir, analizar y evaluar el fenómeno paramilitar en Colombia desde la década de los ochenta hasta la actualidad con el propósito de diagnosticar el grado de penetración del paramilitarismo en el ámbito local. Entre los **objetivos específicos** se cuentan los siguientes:

- a) Definir y diferenciar los grupos paramilitares en Colombia.
- b) Establecer los antecedentes del paramilitarismo en Colombia.
- c) Analizar diacrónicamente la dinámica del conflicto armado interno, partiendo de las características específicas de un determinado contexto político e institucional.
- d) Describir el entorno institucional y político en el que se produce el fenómeno paramilitar a partir de la dimensión estructural y coyuntural del sistema político colombiano.
- e) Identificar las estrategias de acción de las autoridades colombianas en función de la forma y capacidad para actuar de las instituciones políticas ante situaciones de conflicto político.
- f) Analizar las estrategias, recursos y organización que favorecen el surgimiento, desarrollo, fortalecimiento y consolidación del paramilitarismo.
- g) Establecer las diferentes acciones políticas de los grupos paramilitares y señalar los partidos políticos y departamentos más afectados por la parapolítica.
- h) Abordar cinco casos de estudio ilustrativos que permitan corroborar y describir el tipo de relación entre paramilitarismo y el ámbito local.

A lo largo de esta investigación se intentan corroborar los siguientes **presupuestos de partida**, que se pueden resumir en las siguientes:

- a) Se parte de una concepción diferente sobre los grupos paramilitares. Debido a la evolución que han tenido desde los años ochenta su organización y articulación con la sociedad y con otros poderes así como su estructura ha ido cambiando. Se hace difícil encasillarlo como un grupo contrainsurgente ofensivo que obtuvo la ayuda de las Fuerzas Militares para frenar las actuaciones de la guerrilla. Bien es cierto que esa definición formó parte de su origen más no de su evolución pues los grupos paramilitares tuvieron funciones estatales, es decir, relacionadas con el monopolio legítimo de la fuerza, el monopolio legítimo de la administración de justicia y el monopolio legítimo del control de impuestos. Su estructura abarcó desde el ámbito local al ámbito nacional e influyó en diferentes sectores de la sociedad, la economía y la política. Por tanto, es un fenómeno muy dinámico, complejo, con estructuras paramilitares diferentes que lleva a la conclusión de que construyeron un para-Estado. Por ello, son grupos que podrían ser calificados como grupos paraestatales.

- b) Dentro de la definición de grupos paramilitares hay varias realidades. Por una parte están las autodefensas que son grupos defensivos, como las Autodefensas Campesinas del Ortega. Por otra parte están los grupos paramilitares, que son grupos ofensivos que cuentan con la ayuda del Estado y las Fuerzas Militares como el imperio paramilitar de Jorge 40 en la costa atlántica y, en último lugar, están los grupos narco-paramilitares, que son grupos contrainsurgentes insertados en la economía cocalera como el liderado por Don Berna en Medellín. Estos tres tipos de grupos paramilitares son sincrónicos y diacrónicos en el tiempo. Es decir, se puede establecer una línea de evolución desde las autodefensas a los paramilitares y de éstos a los narcoparamilitares como el grupo paramilitar de los hermanos Castaño.
- c) La injerencia de los grupos de paramilitares o paraestatales sobre el ámbito local se encuentra determinada por varios factores. En primer lugar, la presencia de un *ciclo de conflicto* en Colombia dinamiza las acciones de los actores en un contexto cambiante que intensifica y difunde el conflicto, hace surgir nuevos actores, aumenta la interacción entre ellos y establece estrategias de acción cambiantes.

En segundo lugar, los grupos paramilitares aprovecharon las oportunidades políticas que el contexto les proporcionó para movilizarse, expandirse y consolidarse en el ámbito local y regional. La mayor parte de las oportunidades estructurales están relacionadas con la construcción del Estado en Colombia. La fragmentación del poder, la crisis de los partidos políticos, la influencia del sistema bipartidista en la sociedad y el clientelismo favorecieron la inserción en la sociedad de otros poderes, como los grupos paramilitares. Entre estas oportunidades destaca *el proceso descentralizador* que provocó una intensificación y expansión de los grupos paramilitares en el ámbito local cuyas consecuencias más visibles fueron la influencia en los procesos electorales, el aumento de la violencia hacia dirigentes políticos y la apropiación de los bienes y recursos públicos.

No obstante, otra serie de oportunidades políticas coyunturales favorecieron la cooptación del poder local derivadas de la *división entre las élites* y el gobierno central; el apoyo de determinados *aliados* provenientes de los testaferros, ganaderos y empresarios rurales, narcotraficantes y todo ello bajo *el tratamiento facilitador del Estado y la Fuerza Pública* respecto a su colaboración en el surgimiento de estos grupos armados. Otras oportunidades que favorecieron el desarrollo de

los paramilitares fueron los procesos de colonización interna, la complejidad geográfica de Colombia y el monopolio de la violencia ejercida por el Estado.

Además de estas oportunidades, desde la creación de estos grupos se vinieron dando diferentes oportunidades coyunturales desde el gobierno de Betancur hasta Álvaro Uribe como la creación de las Convivir, la Ley 48 de 1968, la división entre las elites y el campesinado en Córdoba, el debilitamiento del cartel de Medellín etc. También, *la movilización de recursos* formó parte de la estrategia de los movimientos para financiar sus actividades e invertirlas en negocios rentables para el grupo. Los grupos de paramilitares recurrieron a varias fuentes de financiación, tanto legales como ilegales, que pudieran otorgarle el financiamiento necesario para su movilización. La financiación obtenida se debió en parte al apoyo de determinados sectores de la sociedad civil y militar que permitió a estos grupos organizarse en redes reticulares con un centro organizativo situado en las zonas rurales y elaborar las estrategias necesarias para controlar las zonas locales y regionales desde el punto de vista militar, económico y político. Igualmente se sirvieron de recursos tácticos, humanos y organizacionales para desarrollar y consolidarse como grupo armado. Envolvieron sus actuaciones mediante recreaciones simbólicas e ideológicas de su comportamiento. Elaboraron un discurso para legitimar sus actuaciones en búsqueda de una nueva Colombia, un nuevo contrato social con los pobladores, siendo ellos los garantes de la seguridad. Se vistieron con un mismo uniforme y portaron banderas con sus emblemas.

- d) Una de las estrategias de los paramilitares fue adentrarse en la arena política. Para ello comenzaron cooptando el ámbito local, después el regional y finalmente el ámbito nacional. Influyeron en las elecciones legislativas de 1998/2002, 2002/2006 y 2006/2010 y en las elecciones locales y regionales de 2000/2003, 2003/2007 y 2007/2011. Compraron candidatos afines a su causa, impusieron candidatos en las elecciones, intimidaron a representantes para que se presentaran a las elecciones mientras que colocaban candidatos únicos y establecieron relaciones estrechas con determinados partidos políticos. De esta manera se produjeron reuniones con políticos, pactos, negocios, se impusieron candidatos en ciertas instituciones para robarse el dinero para la causa paramilitar etc. Fueron conformando una red de contactos en el ámbito político para controlar determinadas regiones, sobre todo del atlántico. Esta vinculación fue llamada parapolítica -relación entre políticos y paramilitares-, que tuvo su réplica con la Farcpolítica, en este caso la relación de algunos políticos con el grupo armado de las FARC. Aunque era un hecho sobradamente conocido en

ciertos departamentos fue en el año 2006 cuando aparecieron los primeros casos de parapolítica que vieron la luz por el desencuentro entre las elites regionales y las elites nacionales.

- e) Se observa un mayor involucramiento de pequeños partidos (terceras fuerzas políticas) en relación a los grupos paramilitares (aproximadamente, representaron un 57% del total de partidos políticos implicados frente a un 43% que correspondió a los partidos tradicionales, Partido Liberal y Partido Conservador). Por otra parte, la mayor parte de los funcionarios implicados pertenecían a los departamentos del norte de Colombia, es decir, donde más influencia tuvo el fenómeno paramilitar.

En cuanto al **tipo de investigación** cabe señalar que este estudio corresponde a un tipo de investigación que inicialmente es empírica-descriptiva, cuyos objetivos son la exploración y descripción de un fenómeno relevante. Es decir, sirven para analizar cómo es y se manifiesta el fenómeno paramilitar y sus componentes. Posteriormente, se procede al estudio empírico-explicativo, es decir, porqué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da. Para llevarla a cabo se examina el problema planteado bajo perspectiva sociológica con el objetivo de que nos dé las herramientas necesarias para abordar dicho estudio y así se convierta en un instrumento de análisis que pudiera aplicarse en otras coyunturas. Dentro de este enfoque sociológico se analiza el tema propuesto desde *la teoría de la acción colectiva*. Desde esta posición, los actores armados paramilitares son analizados como actores racionales, sociales que actúan de manera colectiva en función de sus intereses tras el cálculo de costes y beneficios que le supone la actuación como grupo armado al margen del marco institucional. Por tanto, para estudiar estos actores bajo la perspectiva planteada y acercarnos a la comprensión de la estructura paramilitar, se propone un marco teórico que describe y analiza las oportunidades y limitaciones políticas de estos actores armados para llevar a cabo su movilización; el flujo de recursos necesarios para su supervivencia, desarrollo y consolidación de sus actividades en un marco de acción caracterizado por la presencia del conflicto armado interno; las ideas y símbolos que utilizaron los grupos paramilitares para legitimar su actuación y analizar el conflicto como un ciclo de conflicto dinámico donde los actores y las instituciones vinculantes se interrelacionan. El marco teórico y metodológico será ampliamente abordado en el Capítulo 1.

Finalmente, es necesario en esta introducción especificar la **estructura de esta investigación**, que se ha subdividido en cuatro capítulos. El primero de ellos arranca con los aspectos teórico-

metodológicos de la investigación. Se analizan los diferentes paradigmas de la teoría de la acción colectiva a fin de evaluar el mejor enfoque para analizar los grupos paramilitares. De ahí se obtuvo que la teoría de la movilización de recursos, la estructura de oportunidades políticas, el ciclo de conflicto y el paradigma de los Nuevos Movimientos Sociales conforman un desarrollo teórico-metodológico relevante para analizar a los grupos paramilitares desde la perspectiva de la Sociología Política. Partiendo del significativo aporte que llevan a cabo Tarrow, Tilly y MacAdam (2005) presentando un análisis dinámico de la contienda política que permita estrechar la relación entre los diferentes actores, instituciones y contexto, en la tesis se profundiza en el origen, desarrollo y consolidación de los grupos paramilitares y su influencia en la arena política. En este mismo capítulo, se lleva a cabo un resumen de cómo se ha realizado la investigación, es decir, se explica el plan de trabajo, especificando las instituciones que se han visitado, las entrevistas que se han realizado y, en general, con qué información se contó para realizar esta investigación.

En el segundo capítulo, se trata de responder a la pregunta quiénes son los grupos paramilitares. Para ello se hace en un primer momento un recorrido sobre los primeros estudios de la violencia que hubo en Colombia partiendo de una preocupación por la violencia y sus causas en el ámbito nacional. Posteriormente se analiza la literatura más representativa sobre el paramilitarismo en diferentes contextos y, especialmente en el caso colombiano, para identificar las diferencias y semejanzas entre los presupuestos e hipótesis de los distintos autores. Dentro de esta comparación entre autores, se propone una definición sobre los grupos paramilitares, sobre su terminología y sus actuaciones en Colombia. Se señala que el fenómeno paramilitar es mucho más complejo y dinámico que la acotación circunscrita al paramilitarismo. Los diferentes grupos que componen este fenómeno así como su desarrollo y evolución imprimen a este grupo un comportamiento más de grupos paraestatales, que vienen a sustituir al Estado en determinadas funciones.

Tras el marco teórico y un recorrido por el estado del arte de los grupos paramilitares se realiza una revisión de los antecedentes de estos grupos regresando a la época de la Violencia y del Frente Nacional. El sectarismo partidista de la Violencia provocó, entre otras cosas, la pérdida de legitimidad del Estado y su precaria presencia en el territorio colombiano. Los poderes locales y regionales, alguno de ellos armados como los pájaros o chulavitas, sustituyeron al Estado y debilitaron aún más la estructuración social existente. El pacto del Frente Nacional vino a legitimar el bipartidismo y el clientelismo existente. Frente a la débil vertebración estatal, frente al aumento de los grupos de bandoleros, pájaros, incrementado por la incorporación de grupos

guerrilleros, en 1968 se creó una ley que legitimó la creación de grupos de autodefensas, la Ley 48. Por tanto, ¿cabe afirmar que el Estado colombiano facilitó y justificó la creación de estos grupos que comenzarían a formarse en la década de los años ochenta? Este capítulo pretende finalmente responder a esta pregunta; en todo caso, cabe decir que los grupos paramilitares aprovecharon esta oportunidad para incorporarse a la red clientelar e influir en diferentes ámbitos de la sociedad.

El último capítulo corresponde al núcleo central de la investigación. Se analiza el conflicto armado mediante el ciclo del conflicto, es decir, mediante un contexto dinámico y cambiante donde los actores interactúan en un contexto determinado. Dentro ese contexto se estudia tanto la fase de movilización como la fase de desmovilización. Posteriormente se describen las oportunidades políticas que los grupos paramilitares utilizaron para movilizarse y consolidarse en el territorio colombiano. A estas oportunidades se añade la movilización de recursos, el marco y repertorio de la acción para mantener a estos grupos. La inclusión de los grupos paramilitares en la arena política comenzó a llamarse parapolítica con la idea de que los paramilitares azuzaban a los políticos a fin de que cumplieran con sus objetivos. Posteriormente se demostró, como se hace también en esta investigación, que los políticos recibieron dádivas y que muchos de ellos no fueron coaccionados, sino que formaban parte del entramado político del fenómeno paramilitar. La mayor parte de ellos obtuvieron beneficios electorales, es decir, los paramilitares influyeron en determinadas elecciones con el fin de que esos políticos obtuvieran réditos electorales. Tanto senadores como representantes, concejales, alcaldes, gobernadores fueron influenciados por estos grupos. En último lugar, se analizan diferentes casos de estudio para comparar las diferencias entre los grupos de la costa atlántica en el caso de Jorge 40, con Medellín con Don Berna, Córdoba con los hermanos Castaño y el Bloque Central Bolívar que ocupó los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Santander, Caldas, Antioquia y Nariño y las Autodefensas Campesinas del Ortega en el Cauca.

Capítulo 1. Aspectos teórico-metodológicos: el conflicto desde la Sociología Política

La aproximación al estudio de los grupos paramilitares se hace desde la Sociología Política. Corresponde al campo de estudio que se ocupa de las múltiples y variadas relaciones existentes entre el ámbito de lo social y el ámbito de lo político, basándose para ello en una doble premisa: por una parte, es preciso entender la política en su contexto social y, por otra, la realidad social está intrínsecamente moldeada por los elementos políticos. De este modo, se configura como un área de estudio fronteriza que pretende integrar las aportaciones provenientes de la sociología y de la ciencia política, además de las de otras ciencias sociales afines como la historia, la economía o la antropología.

El principal objeto de investigación en el campo de la sociología es el tema del poder, tanto desde el punto de vista teórico como práctico: las características y formas del poder, sus bases sociales, su ubicación institucional, su distribución en la sociedad contemporánea o las consecuencias derivadas del ejercicio del poder por las diferentes instituciones sociales y políticas.

La reflexión sobre los vínculos de relación entre sociedad y política se hace por primera vez posible en los siglos XVIII y XIX en el momento en el que la sociedad empieza a ser pensada como una entidad autónoma, separada del Estado, de ahí que los inicios de la sociología política se sitúe en los mismos inicios del pensamiento sociológico, para el cual no hay duda de que lo político constituye un elemento central dentro de la indagación de lo social (Giner, 1998: 749-751).

Mediante esta aproximación el objetivo a alcanzar es describir, evaluar y analizar los recursos humanos de los grupos paramilitares en Colombia con especial interés en la clase política con el propósito de diagnosticar el grado de inserción política de estos grupos en la sociedad colombiana.

Para alcanzar este objetivo y dentro de la perspectiva sociología política se analiza el tema propuesto desde la teoría de la acción colectiva. En esta elección, la clase de acción colectiva más acorde para estudiar el fenómeno paramilitar es a partir de las aportaciones de los teóricos que contribuyeron en el marco de los movimientos sociales. De esta manera, se eligió varias teorías dentro del ámbito de los movimientos sociales a modo de sincretismo para analizar el paramilitarismo. La literatura aplicada a los movimientos sociales permite analizar este fenómeno

en el tiempo a partir de la evolución del fenómeno paramilitar mediante los “ciclos de acción colectiva o ciclos de conflicto” de Sydney Tarrow. Los medios que posibilitan la movilización y la consecución de objetivos por parte de los paramilitares es elaborado a partir de la Teoría de la Movilización de Recursos y la Estructura de Oportunidad Política. La forma de actuación del Estado frente al paramilitarismo y la actuación de los grupos paramilitares se examina a través del “repertorio de acción” de Charles Tilly. Por último, la dimensión cognitiva se analiza a través del concepto de ideología y el proceso de enmarcamiento de Melucci y Touraine.

Por tanto, el estudio de los grupos paramilitares se hace mediante teorías aplicadas a los movimientos sociales que ayuden a describir, analizar y explicar este caso práctico para arrojar nuevas perspectivas de análisis. Los movimientos sociales son un tipo de acción colectiva, es decir, “hace referencia a las acciones que emprende un grupo de individuos que tiene intereses comunes con el objetivo de satisfacerlos”. La interacción violenta entre un grupo de individuos también forma parte de la acción colectiva. Por tanto, la acción colectiva violenta puede formar parte de un grupo de individuos para alcanzar sus objetivos. Este tipo de acción forma parte del repertorio de acción que cuentan los actores en sociedades avanzadas. El tipo de acción colectiva está estrechamente unido al tipo de poder imperante en una sociedad determinada. Podemos entender el tipo de repertorio de esos actores cuando analizamos el marco político en el que ellos se insertan. Es decir, el tipo de acción está en relación con la forma que asuma el poder político en una sociedad determinada. Así, la acción colectiva violenta abre nuevas vías para la obtención del poder de una sociedad. Por tanto, las diferentes variables utilizadas desde la perspectiva de la acción colectiva se aplican a la relación entre paramilitarismo y poder político.

1.1.- Teoría de la acción colectiva

Las disciplinas de la sociología y las ciencias sociales, definen acción como aquella que está conectada con la acción de otros y otros seres humanos aunque éstos lo ignoren. En este sentido, dichas disciplinas entienden que la acción contribuye a poner de manifiesto las expresiones objetivas que los sujetos de la acción ignoran, haciéndoles conscientes de su conducta. En esta misma línea, Max Weber, expone en *Economía y Sociedad* (1921) que acción es la conducta que posee un significado subjetivamente intencional. La causalidad de la acción de los seres humanos debe explicarse de acuerdo a las intenciones que la inspiran y las consecuencias esperadas, es decir

su propósito, y no en términos de sus consecuencias reales³. Talcott Parsons recogió en su obra *Estructura de la acción social* de 1937 la concepción weberiana expuesta junto con las de Pareto, Durkheim y Alfred Marshall. Posteriormente Parsons evolucionó hacia una posición donde la estructura y los procesos sociales poseían más peso que el de la intencionalidad. En referencia a estos aspectos externos, se ha recurrido también a la noción de *la lógica de la situación*. Este concepto acuñado por Karl Popper desde 1973 retiene la posición voluntarista, sin ignorar nunca el marco en el que se encuentra el actor o sujeto de la acción⁴. Sin dejar de lado estas aportaciones que van así creando una definición más desarrollada de acción, desde Max Weber, se considera la acción como imbricada en una vasta red de interdependencias recíprocas. En este sentido, debe entenderse la *acción como social*, es decir, como aquella que se encuentra conectada con la acción de otro u otros seres humanos, aunque el propio actor lo ignore (Giner, 1998: 5-6).

Esta definición esgrime que la acción no es individual, sino colectiva, dado que se realiza en relación con otros individuos y frente a otros. Desde el punto de vista de la sociología, la acción colectiva hace referencia a las acciones que emprende un grupo de individuos que tiene intereses comunes con el objetivo de satisfacerlos. Sin embargo, dentro de esta misma lógica de acción colectiva, Mancur Olson demuestra en su libro *Logic of Collective Action* (1965) que la lógica no puede reducirse a la lógica de la acción individual, es decir, no basta que un grupo de individuos comparta un interés común para que éstos se comprometan en una acción colectiva para satisfacer dicho interés. La entrada en la acción colectiva implica para cada uno de los miembros un cierto coste de participación, como tiempo, dinero etc. En la aparición de la acción colectiva juegan un papel muy importante los incentivos morales y solidarios, que se encuentran recogidos en la teoría de la elección racional, basada en el paradigma económico. Estos incentivos permiten que los grupos organizados limiten las deserciones o las no colaboraciones de ciertos miembros del grupo (Garvía, 1998: 9; Boundon, 1995: 15).

A propósito de este tema, Tarrow (1998) precisa que la acción colectiva surgió en respuesta a los cambios en las oportunidades y restricciones políticas y sus participantes responde a múltiples incentivos, como incentivos materiales, ideológicos, partidistas y grupales, prolongados y episódicos, etc. En esta misma línea, un aspecto fundamental es coordinar, mantener y dotar de significado a la acción colectiva (Tarrow, 1998: 33).

³ Aunque esta definición sobre las intenciones ya se trató desde Aristóteles a Marx, otra cosa bien distinta es dotar de significado a esas intenciones.

⁴ Popper escribió en 1934 *Logik der Forschung*, pero hasta su traducción al inglés en 1959 no tuvo casi influencia.

Partiendo de esta primera aproximación, con posterioridad se han producido otras aportaciones. En la edición de la *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (2001) editada por Neil Smelser y Paul B. Baltes, se describe y analiza diferentes tipos de acción colectiva como comportamiento colectivo, grupos de interés, movimientos sociales y normas e instituciones (Smelser, 2001: 49-54). Sin embargo, otros estudios, como el llevado a cabo por Oberschall (1973), utiliza como sinónimo acción colectiva y movimientos sociales para hacer referencia a una forma de acción poco organizada y no institucional (Revilla, 1994: 183-184). Frente a estas posiciones, la opción más adecuada es la primera porque admite diferentes clases de acción colectiva y, por tanto, establece límites entre las distintas formas de acción colectiva, evitando definir las y analizarlas todas ellas como movimientos sociales.

En los debates académicos se ha venido discutiendo la definición de movimiento social con relación a las fronteras de otras formas de acción colectiva, pues, la definición de un concepto es, sobre todo, el establecimiento de los límites. Así, el término de movimiento social, se ha aplicado con especial amplitud a una variedad de intentos colectivos para producir cambios en las instituciones sociales, desde el proyecto revolucionario de crear un nuevo orden social hasta toda clase de transformaciones en el sistema de normas, significados y relaciones sociales. Su difusión inicial depende de la primera opción y hace referencia a los conflictos de clase que se producen en Europa desde la revolución industrial, lo que explica la carga política que tuvo desde su origen (Giner, 1998: 511). Por tanto, los criterios para definir este concepto, han de variar a lo largo del tiempo y han surgido recientemente debates entre diferentes concepciones como el de los viejos y nuevos movimientos sociales o, entre éstos y los grupos de intereses⁵.

Por su parte, Joseph Gusfield (1994) señala que las diversas definiciones y teorías guardan estrecha relación con los hechos y los contextos históricos que despiertan el interés de la opinión pública. Sin embargo, esto no significa que los estudios sociológicos sean un reflejo de los acontecimientos históricos ni que persigan dar solución a las cuestiones políticas, sino que el desarrollo de los hechos históricos atrae la atención de los investigadores (Gusfield, 1994: 93-94).

⁵ Pedro Ibarra (2000), señala uno de los debates más conocido en la sociología que fue el que se formuló entre viejos y nuevos movimientos sociales. El factor en debate era el de la autenticidad. Los nuevos movimientos sociales como el ecologismo, el pacifismo, etc., eran los verdaderos movimientos, los auténticos porque se compartían valores, creencias, decisiones, acción. Además se encontraban fuera del sistema. Pero, los viejos movimientos como el obrero, habían dejado de ser movimientos sociales en cuanto se decía que había perdido esa autenticidad pues se habían burocratizado, jerarquizado y sólo actuaba para incrementar sus intereses. El debate se superó pues se llegó a la conclusión que los nuevos movimientos sociales eran y son una fase en la evolución de los movimientos sociales. Asimismo, un debate reciente es el de la institucionalización de los movimientos sociales que cada vez se asemejan más a los grupos de interés. Así, los movimientos se han acogido a las exigencias culturales, normativas y políticas del Sistema.

Siguiendo a estos teóricos, se puede establecer que los grupos paramilitares forman parte de esta definición de acción. Estas teorías señalaron la acción como la clave de la definición de cada teoría. Por ello, todo movimiento social comprende una acción, que tras varias aportaciones, se entendió como colectiva. Es decir, la acción está conectada con otros actores, creando una red de reciprocidades. De igual manera, los grupos paramilitares están formados por diferentes actores que recíprocamente colaboran, se ayudan, se intercambian información, favores, etc. Creando así una red de colaborares en diferentes ámbitos y campos profesionales y sociales. Al adentrarse en este grupo y colaborar de una manera u otra, cada individuo se mueve por unos determinados incentivos que pueden ser económicos, políticos, sociales, grupales, al igual que los señalara Tarrow (1998). Por tanto, cada individuo tiene unos incentivos que les mueve a adentrarse en este grupo. Olson señaló que la participación de un individuo tiene para él mismo y para el grupo un coste de participación personal y grupal. En este sentido, los grupos paramilitares también asumen un costo por participar en su accionar o en tener una colaboración estrecha o no con este grupo.

1.1.1 Los antiguos paradigmas de los Movimientos Sociales

El surgimiento de las nuevas ciencias sociales a finales del siglo XIX inició la búsqueda de dar respuestas científicas a los fenómenos de acción de masas. El problema central en estas primeras formulaciones sobre las masas se centró en la explicación de la participación individual en los movimientos sociales. Así, teorías como *la sociedad de masas*, *la privación relativa* o *el comportamiento colectivo*, apuntaban que la participación individual era poco frecuente, el descontento transitorio, los agravios eran producto de las tensiones sociales y los actores del movimiento actuaban de un modo irracional (Jenkins, 1994: 7). Asimismo, estas teorías no prestaban atención a la importancia de la movilización de los seguidores de los movimientos a través de acciones colectivas organizadas, que eran consideradas esenciales para la aparición y eficacia de los movimientos.

En este sentido, la primera teoría relacionada con los fenómenos de acción de masas es la *teoría de psicología de masas*, representada por Gustave Le Bon en su obra *La psicología de las multitudes* (1895), Gabriel Tarde en *Las leyes de la imitación* y posteriormente en Sigmund Freud. Este enfoque centró su análisis en la actuación del individuo frente a la masa. Cuando se une a la masa actúa de manera irracional, se deja llevar por la sugestión del discurso y el carisma del líder. Se caracteriza

por la primacía de las emociones, la credulidad y la tendencia a la imitación. Las protestas, rebeliones y situaciones similares se entendieron como respuestas irracionales a las tensiones producidas por el sistema.

La *teoría de sociedad de masas* inicialmente fue desarrollada con el fin de explicar el surgimiento y la naturaleza de los movimientos totalitarios, no democráticos en las sociedades de Occidente. Subraya la caída de los grupos de clase o de intereses y la importancia de aquellos lejanos de las instituciones sociales, no controlados por las elites y abiertos a formas de liderazgo que proyectaban elementos emocionales y expresivos en la vida pública (Gusfield, 1994: 110). Esta teoría fue planteada ya por José Ortega y Gasset en *La rebelión de las masas* (1929), que tuvo como principales exponentes a Hannah Arendt y William Kornhauser. Estos teóricos, observan la sociedad como atomizada y, no es sino esta atomización social, la que conduce al estallido de movimientos de protesta, ya que el aislamiento y la ausencia de formas de integración y solidaridad, produce individuos particularmente vulnerables a la llamada de movimientos radicales y antidemocráticos⁶.

A partir de la década de los veinte y treinta, adquirió gran relevancia la *teoría del comportamiento colectivo* desarrollada en la Escuela de Chicago, cuyos representantes más destacados fueron Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Herbert Blumer. Acorde con los principales teóricos de dicha perspectiva, enfocó su interés en la participación individual en los movimientos sociales, contemplando los agravios y valores como respuesta al rápido cambio social y en el origen de la solidaridad e identidad. Los movimientos surgen como resultado de la desorganización, el malestar social. Estos teóricos acentuaron el estudio de las reacciones psicológicas, la volatilidad de objetivos y los modos de comunicación ordinarios⁷ (Cohen 1985: 672).

Dentro de las teorías del comportamiento colectivo, se desarrolló durante los años cincuenta y sesenta un nuevo enfoque: *el estructural-funcionalismo*, con Neil J. Smelser y Talcott Parsons como principales exponentes. Su objetivo fue establecer una explicación sociológica del comportamiento colectivo, dejando atrás cualquier enfoque psicológico, para centrarse en los determinantes sociales de la protesta. Definen comportamiento colectivo como “acción colectiva

⁶ La aportación de Hannah Arendt a este enfoque de los movimientos sociales se resume en su obra *The Origins of Totalitarianism* (Harcourt, New York, 1951). Por su parte, William Kornhauser hizo lo propio en *The Politics of Mass Society* (The Free Press, Illinois, 1959).

⁷ Robert Park y Ernest Burgess definen los preceptos de esta teoría en la obra dirigida por R. Turner, *Robert Park on Social Control and Collective Behavior* (University of Chicago Press, Chicago, 1967). La aportación de Herbert Blumer se aprecia en la obra de Robert Park, *An Outline of the Principle of Sociology* (Barnes and Nobles, Inc, New York, 1939).

no institucionalizada que intenta modificar una situación de tensión para la reconstitución de un componente de la acción”⁸ Enfocaron esta teoría hacia el campo estructural de las relaciones que proporciona los recursos y los marcos para la acción. Esta teoría explica el surgimiento del movimiento social como consecuencia de tensiones derivadas del desarrollo desigual en determinados subsistemas (industrialización, democratización, secularización, etc.).

Así, mientras que los autores de la Escuela de Chicago influenciados por el interaccionismo simbólico, centraron su preocupación en el origen de la solidaridad e identidad colectiva o en los efectos de la movilización sobre los individuos, Smelser y Parsons, desde el estructural-funcionalismo, pusieron énfasis en el contexto estructural en el que la movilización tiene lugar (Rubio, 2004: 5).

No obstante, estas teorías incidieron en la concepción de un movimiento social donde el individuo actuaba de manera irracional, se guiaba por el líder del movimiento, atraídos por la sugestión y contagio del movimiento que tenía unos objetivos volátiles. La concepción de grupos paramilitares disiente de este tipo de definición de movimiento social como algo irracional. Los paramilitares abandonan esta concepción pues sus acciones están organizadas, controladas, con objetivos claros de tal manera que no actúan de manera irracional. Esta primera concepción de movimiento social dista mucho de las posteriores teorías donde se cambió completamente el modelo expuesto.

Los movimientos acontecidos durante la década de los sesenta y setenta, como los estudiantiles, feministas y ecologistas, pusieron de manifiesto la incapacidad de las teorías del comportamiento político y la sociedad de masas para explicar estos fenómenos desde la perspectiva de la conducta irracional para interpretar modelos de acción que se imponían en Estados Unidos y Europa como producto del contexto democrático que se había desarrollado en las últimas décadas. No obstante, la violencia de alguno de esos movimientos, fue motivo por el cual los teóricos recalcaron un modelo basado en la conexión entre violencia y frustración. Esta nueva perspectiva fue bautizada por Ted Gurr bajo el *modelo de la privación relativa*. En este modelo, se entendió la movilización como expresión de la insatisfacción del orden social fruto de la relación entre la privación relativa de recursos económicos o sociales y el ejercicio de la violencia relativa (Rivera, 1995: 277). Esta teoría consideró a los movimientos sociales como un fenómeno racional.

⁸ Fragmento de la obra de Smelser (1963) *Theory of collective behavior*. (Mac Millan, Nueva York) citado en: Garrido, Javier (1996): *Redes de acción colectiva en Bogotá y Caracas*. Facultad Ciencias Políticas y Sociología. UCM. Tesis doctoral. Madrid.

A finales de los años setenta, teóricos como Charles Tilly, J. Craig Jenkins, C. Perrow y A. Oberschall argumentaron que los agravios eran relativamente constantes, que derivaban de conflictos de intereses de orden estructural articulados en las instituciones sociales y, que los movimientos surgían a partir de cambios a largo plazo en los recursos del grupo, en su organización y en las oportunidades de desarrollar formas de acción colectiva. No obstante, destacaron que los agravios eran necesarios de cara a la formación de un movimiento mediante los cambios que operaban en las relaciones de poder o a través de conflictos de intereses culturales (Jenkins 1994: 10). A pesar de la existencia de agravios, se estaba apuntando a una nueva visión de los movimientos sociales más articulado, estructurado. Es decir, la relación causal entre movimiento y frustración, apuntada por la teoría de la privación relativa, fue innecesaria a la hora de analizar desde esa relación la globalidad de las manifestaciones a las que hacía referencia. Pues muchos de los movimientos se caracterizaban por definir objetivos concretos, articular claramente valores e intereses y calcular estrategias racionales (Cohen, 1985: 674).

En esta misma línea, los grupos paramilitares se insertan en esta concepción en la cual se define a los actores y a sus acciones como racionales, organizadas y estructuradas, donde los agravios por movilizarse y actuar son constantes pero éstos no pueden explicar por si mismos la formación del grupo. Por tanto, el fenómeno paramilitar se incluye dentro de la acción social y racional de un movimiento.

En resumen, el paradigma teórico hasta los setenta estaba inscrito en la tradición psicosocial, que encontraba la explicación de los excesos del comportamiento de masas en el contagio y la sugestión (Cohen, 1985: 671). Sin embargo, la organización y estructuración de los nuevos movimientos sociales desde los sesenta empezó a cuestionar con serenidad las teorías previas.

1.1.2 Cambio de enfoque: el actor racional frente a la masa

Los movimientos de los años sesenta y setenta cuestionaron la aproximación que sobre la acción colectiva se estaba aplicando. Entre otros factores que incidieron en el cambio de actitud merece la pena señalar la realización de análisis históricos más refinados y la influencia del pensamiento económico en la sociología y ciencias política. Por lo tanto, se produjo un cambio de enfoque, de paradigma que se asentó en la lógica utilitarista: el actor racional sustituyó a la masa como referente central de los análisis (Garrido, 1996: 29).

Dentro de este contexto destaca *la teoría de la elección racional* a través de la aportación de la obra de Mancur Olson (1965) *The logic of collective action*, que estableció una nueva perspectiva, individualista y racional, de aproximación a la acción colectiva. En esta ocasión, el actor se define como racional. Así, el actor racional, individual o grupal, empleaba estrategias y razonamientos instrumentales que reemplazaban la masa de gente como referencia central del análisis de la acción colectiva. Olson plantea que la acción se produce si de ella se desprenden incentivos como beneficios divisibles, individuales, o si los actores se involucran en grupos reducidos como para que los beneficios individuales sean superiores a los costos. Con esta cuestión de los incentivos, trata de solucionar el problema del free-rider o gorrón. No obstante, esta argumentación no responde a la pregunta de porqué los individuos racionales se involucran en grupos mucho mayor de lo que Olson permitió suponer (Garrido, 1996: 42). Sin entrar en más detalles, se puede decir que Olson plantea que el individuo participa en la acción colectiva en función de sus intereses y tras el cálculo de costes y beneficios que le supone dicha participación y siempre y cuando los beneficios esperados superen a los costes de actuación. La participación del actor es, por tanto, estratégica, racional e instrumental. Y esto supone, sin duda, un cambio radical frente a la etapa anterior. Sin embargo una de las críticas hacia esta teoría es que desde su perspectiva individualista se hace desaparecer la noción de la identidad, las culturas, las ideologías o las estructuras sociales en la acción colectiva.

Bajo esta perspectiva los individuos de los grupos paramilitares se presentan como participantes dentro de una acción colectiva donde evalúan su participación en función de los costes y beneficios de la acción. Por tanto, los beneficios tienen que superar a los costes. Dentro de la acción los individuos emplean estrategias, razonamientos que le ayuden en su acción. Por tanto, los grupos paramilitares son racionales, estratégicos, sus acciones están organizadas, estructuradas y se movilizan tras evaluar los costes y beneficios de la acción.

1.1.3 Teoría de la movilización de recursos

En esta misma línea conceptual, e influido por las críticas al enfoque clásico vigente en los años setenta y por el aporte teórico de M. Olson, se inició una profunda renovación teórica en el campo del estudio de los movimientos sociales. Este contexto de renovación estuvo marcado por dos teorías que se desarrollaron en ámbitos geográficos diferentes y, por tanto, con necesidades de aplicación diferentes. Por un lado apareció en Estados Unidos la *Teoría de Movilización de*

Recursos (TMR), que se centra en los recursos, la organización y las oportunidades como medios que posibilitan la movilización y la consecución de objetivos, se trata en estudiar el cómo de la acción colectiva. Por otro lado en Europa, tomó cuerpo la *Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales* que enfatiza los cambios culturales y macroestructurales que han ocasionado la formación de nuevas identidades, preguntándose así por la causalidad del origen y la construcción identitaria. No obstante y a pesar de sus diferencias, ambas teorías coinciden en resaltar el nivel organizativo y racional de los actores sociales en el enfrentamiento colectivo.

Desde el paradigma de la TMR, la acción colectiva es interpretada en función del potencial organizador necesario para encauzar y completar los intereses difusos de los ciudadanos (Rivera, 1995: 278). Los teóricos estudiaron por tanto las capacidades organizativas necesarias para transformar el conflicto potencial en acción colectiva. Todas las interpretaciones de la TMR analizan la acción colectiva en términos de la lógica de interacción estratégica y cálculo de costes y beneficios.

Los enfoques que presenta la TMR van desde la pura lógica racional, planteada por Olson, hasta la aproximación organizativo-empresarial de McCarthy y Zald, o los modelos de proceso político de Tilly, Oberschall, Klandermans o Tarrow. Estos enfoques, analizan la acción colectiva en términos de la lógica de la interacción estratégica y del cálculo coste-beneficio.

Los teóricos anteriormente mencionados fueron especialmente importantes en la subsiguiente reorientación de los presupuestos teóricos y de los factores analíticos de la TMR de los movimientos sociales. Estos analistas comparten los siguientes presupuestos teóricos (Cohen 1985: 675; Jenkins 1994: 7.):

- Racionalidad de la acción colectiva llevada a cabo por los movimientos, en base a cálculos de costes y beneficios.
- No hay diferenciación entre acción colectiva institucional y no institucional, ya que ambas se inscriben en conflictos de intereses formados dentro de las relaciones de poder institucionalizadas.
- Los agravios que dichos conflictos generan son elementos siempre presentes en las relaciones de poder y, por tanto, no pueden explicar por sí mismos la formación de movimientos sociales. Esta depende de cambios en la disponibilidad de los recursos, de la organización del grupo y del marco de oportunidades existente para la acción colectiva.

- Las organizaciones formales y centralizadas son más eficaces a la hora de movilizar recursos y, por lo tanto, de asegurar el éxito, en el que juegan un papel importante los factores estratégicos y los procesos políticos en los que los movimientos tienen lugar.
- El éxito de la movilización se evidencia en el reconocimiento del grupo como actor político o en el logro de beneficios materiales.

A partir de estos presupuestos, la TMR presenta dos enfoques diferenciados en función del énfasis expuesto en algunas de las características anteriores. Por una parte, hace hincapié en la organización, los recursos y la movilización mediante la “estructura de movilización” y, por otro, se enfatiza el contexto político e institucional en la llamada “estructura de oportunidad política”. Sin embargo esta teoría no se preguntaba por el porqué de la participación de los individuos o la naturaleza de su comportamiento sino que partió de la premisa de que el grado de descontento y conflictividad es más o menos constante.

1.1.3.1 Enfoque organizativo-empresarial de John D. McCarthy y Mayer N. Zald

McCarthy y Zald, focalizan su análisis en las organizaciones económicas, por ello este nuevo paradigma se orienta al análisis de la organización, asumiendo que los movimientos sociales están organizados por elites y por la disposición de recursos exteriores al propio grupo. Es decir, ambos autores coinciden en señalar una teoría empresarial de la formación de movimientos sociales en la que el factor fundamental es la disponibilidad de recursos. De este modo se genera el concepto tan criticado de empresario político y, que quería reflejar la necesidad de un impulso inicial que promoviera y sustentara el nacimiento de la movilización (Rivera, 1995: 277).

La estructura de movilización hace referencia a los canales colectivos tanto formales como informales mediante los cuales la gente se moviliza e implica en la acción colectiva. Es decir, se caracteriza por el tipo de recursos y organización que cuenta un grupo para movilizarse y por tanto, responde a la pregunta cómo se organiza un movimiento. Toda organización debe contar con recursos que le permitan trabajar en el logro de los objetivos del movimiento y, por tanto, debe asegurarse el flujo de recursos necesarios para su supervivencia y desarrollo dentro del contexto en el que desarrolla su actividad.

El primer teórico que propuso la movilización como un problema de gestión de recursos fue Anthony Oberschall en *Social Conflict and Social Movement* (1973). En esta misma línea, John D.

McCarthy y Mayer N. Zald (1977) elaboraron en profundidad esta dimensión y se elevaron como máximos exponentes de esta teoría que, por primera vez utiliza el término “resource mobilization approach”. Por tanto son los recursos, la accesibilidad y gestión de los mismos, los que ayudan a explicar la formación de movimientos sociales.

Zald y McCarthy enumeran, aunque no los definen, una serie de recursos que facilitan el desarrollo y organización del movimiento, entre ellos destacan los recursos materiales, humanos, organizativos (líderes, miembros, grupos intermedios, redes informales, redes de comunicación) y tácticos.

Tradicionalmente los analistas asumieron que los recursos de los movimientos que se emplazaron fuera de la política institucionalizada derivaban de fuentes no institucionales. Pero en los movimientos que aparecen en las décadas sesenta y setenta, siguiendo a McCarthy y Zald, los recursos provenían tanto de fuentes institucionales como instituciones de asistencia social, fundaciones privadas, medios de comunicación, universidades, agencias gubernamentales y corporaciones empresariales (Jenkins, 1994: 15). De ahí que los teóricos consideraran a los movimientos sociales como una prolongación de actuaciones institucionalizadas. Esta estrategia, unida a la idea de empresario político, permitió desligar la teoría de causalidad entre frustración y descontento con movilización.

Para este análisis conviene destacar aquellos elementos que componen los movimientos sociales como los simpatizantes, beneficiarios etc., más que tener en cuenta la noción de movimiento social y las diferentes organizaciones existentes. Así define movimiento social como el conjunto de opiniones y creencias de preferencias sobre el cambio social o sobre la distribución de las recompensas. Una organización de movimiento social (SMO) es una compleja o formal organización que identifica sus fines con las preferencias del movimiento y actúa para conseguirlos. Una industria de movimientos social la constituye el conjunto de SMO que comparten la preferencia genérica de cambio de un movimiento social. El sector de movimientos social (SMS) se refiere a todas las industrias del movimiento social que existen en una sociedad. Los simpatizantes o “adherents” serían los individuos y organizaciones que creen en los objetivos del movimiento, mientras que los constituyentes de una organización de un movimiento social son aquellos que proporcionan los recursos que permiten a la organización realizar actividades para conseguir sus fines. Quienes no son partidarios ni oponentes se denominan público. Todo individuo que se pueda beneficiar de los logros de la organización recibe el nombre de

beneficiarios potenciales. Aquellos que simpatizan y forman parte de un movimiento social pero no esperan a obtener beneficios de ellos se denominan simpatizantes de conciencia. Quienes contribuyen además con recursos se denominan constituyentes de conciencia (McCarthy y Zald, 1977).

A partir de estas nociones, McCarthy y Zald desarrollan varias hipótesis en función de la organización y recursos que contribuyen a la estructura de un movimiento. Destacan así que a mayor disponibilidad de recursos en una sociedad, mayor posibilidad de que un movimiento social cuente con más recursos. Si la mayoría de los recursos proceden de constituyentes de conciencia, aumenta la posibilidad de que aparezcan organización e industria de movimiento social. Pero si una organización depende de constituyentes aislado, menos estable será el flujo de recursos para la organización. Otra hipótesis que se deriva de la anterior es que a mayor competencia en una industria de movimiento, mayor definición de estrategias y fines, y mayor especialización de las organizaciones que tenderán a la profesionalización. A mayor disponibilidad de tiempo y recursos que se hagan en función de las características ocupacionales de los simpatizantes y constituyente, mayores posibilidades de que se formen equipos de trabajos transitorios. Por último, afirman que los movimientos sociales de países desarrollados han dejado de ser una organización clásica con liderazgo local, equipos de voluntarios, amplio número de miembros, recursos procedentes de los beneficiarios y participación activa en las acciones. En la actualidad, se constituyen como una organización profesional, con liderazgo de origen externo, equipos asalariados, reducida membresía, recursos de constituyentes de conciencia e institucionales, y acciones de representatividad (McCarthy y Zald, 1977).

Asimismo, ha de tenerse en cuenta las diferentes dificultades que pueden derivar del entorno donde se desarrolla el movimiento que puede implicar cambios en los objetivos y en la estructura interna de organización. Incluso, dentro de la misma organización se puede desarrollar el conflicto por la distribución del poder o los incentivos, o competir con otros grupos por determinados recursos.

En el caso colombiano, se analiza los recursos que apuntaron anteriormente McCarthy y Zald como son los recursos materiales, humanos, organizativos y tácticos. De esta manera, a través del análisis de estos recursos, se podrá responder a la pregunta de cómo se organiza un movimiento. Entre los recursos materiales utilizados por estos grupos, destacan aquellos provenientes del narcotráfico, secuestro, robo de combustible, apropiación de recursos oficiales, expropiación de

tierra y exportación de recursos estratégicos. De tal manera que manejan tanto recursos provenientes de fuentes institucionales como de fuentes proscritas y privadas. Los recursos humanos que utilizan estos grupos, hacen referencia al apoyo de ciertos sectores de la población, entre ellos las elites regionales, empresarios, narcotraficantes, hacendados, ganaderos, comerciantes, Fuerza Pública, funcionarios públicos como senadores, representantes del Congreso y, cargos públicos del gobierno local y regional. La organización del fenómeno paramilitar es parte esencial de la estructura de movilización. En este apartado se analiza el tipo de estructura organizativa, la evolución de ésta en el periodo propuesto y las diferentes dinámicas organizativas según territorios. En último lugar, se examinan las diferentes clases de tácticas, utilizadas por los grupos paramilitares, para lograr la infiltración en el territorio, en la economía y, en la administración y política local/regional. En resumen, a través del análisis de los recursos se analiza la estructura organizativa, humana, táctica y material de los grupos paramilitares como un punto importante para poder movilizarse y expandirse en el territorio colombiano.

1.1.3.2 El modelo político de Charles Tilly

El principal factor de activación de la acción colectiva lo constituyen los cambios en las estructuras de oportunidades políticas (Political Opportunity Structure). A partir de los años ochenta, este concepto, se fue consolidando como la idea central de un marco explicativo de los movimientos sociales: el modelo de proceso político. Los partidarios de esta propuesta, entre ellos Charles Tilly, Sydney Tarrow, Doug McAdam, J. Craig Jenkins, Perrow, entendían que el surgimiento y éxito de los movimientos sociales dependía, en gran medida, de las oportunidades al alcance de los contestatarios, generadas por cambios en la estructura institucional y en la disposición ideológica de los grupos en el poder.

Tilly introduce por primera vez el modelo político de acción colectiva en su obra *From Mobilization to Revolution* (1978) que ha desarrollado en trabajos posteriores y ha sido el impulsor de determinados aspectos de este modelo en otros teóricos como Sydney Tarrow y Doug McAdam. Aquí se consideran tanto los aspectos externos como los internos del individuo para llevar a cabo la acción colectiva: por un lado, existen circunstancias externas derivadas del ambiente externo que facilitan o reprimen la acción y la forma de organización; por otro lado, destaca el interés del individuo, el grado en que consigue movilizar los recursos y la forma que adopta para movilizarlos.

En esta misma línea, Tilly centra su atención en definir acción colectiva en su obra *From mobilization to Revolution* (1978). Los elementos que definen este término son: interés, organización, movilización, oportunidad, y acción colectiva en sí misma. Define intereses como el resultado de las pérdidas o ganancias de la interacción entre dos grupos. El estudio de las características de organización revela los aspectos de la estructura de un grupo que afecta a su capacidad de actuar. Frente a la movilización, Tilly resalta el proceso de movilización por el cual un grupo adquiere control sobre los recursos. El análisis de la oportunidad es el estudio entre el grupo y el mundo que lo rodea. Por último, el estudio de la propia acción colectiva es el resultado de la combinación de los cuatro elementos anteriores. Lo más significativo de esta definición es la interrelación de los componentes: la existencia de intereses comunes de una organización ante una situación concreta de oportunidad o amenaza determina la posibilidad y la forma de movilización de recursos. Para que haya recursos a movilizar tiene que haber una organización que los posea y que sea lo suficientemente fuerte para movilizarlos.

Mediante esta definición, reivindica el carácter político y los componentes organizativos y estratégicos de la acción colectiva. Esta perspectiva teórica establece una profunda conexión entre organización y acción colectiva que es necesario estudiar con relación a las formas de organización que necesita el surgimiento y desarrollo de la movilización. Por ello, analiza los diferentes cambios de las estructuras de poder en las formas de organización y tipos de acción colectiva. En la obra citada, Tilly, resalta el componente de oportunidad / represión de las autoridades. Ambas dimensiones relacionaban la acción colectiva con el Estado. Es decir, la acción colectiva está basada en la interacción entre actores desafiantes y actores institucionales, de tal manera que la forma y magnitud de la acción colectiva depende de una interacción entre las tácticas de los desafiantes y las prácticas coercitivas del gobierno. Esta interacción demuestra la importancia del proceso político en los cambios que se producen en las formas de acción colectiva. Tilly afirma que el desarrollo de los movimientos sociales nacionales era concomitante y mutuamente interdependiente del aumento de los estados nacionales consolidados, por lo que no podía ser estudiado más que en conexión con la política, y su estrategia, su estructura y su éxito variarían en función de los diferentes tipos de Estado (Tarrow, 1998: 43). Por lo tanto, la interacción entre acción colectiva y política de Estado se presenta como el elemento estratégico para la comprensión de las formas de organización y movilización.

En suma, la aportación de Tilly significa un avance importante en las formas de organización así como en la justificación del enfoque racional en los actores colectivos. Tilly anexa la variable

temporal para proporcionar una justificación histórica a las teorías utilitarista. Así, el desarrollo de la economía capitalista, del Estado-Nación, los medios de comunicación de masas, y la urbanización, promueven un cambio a largo plazo del carácter y personal de la acción colectiva. Esta idea supone recuperar la teoría de Smelser y Durkheim de que el cambio estructural modernizador incide en la conducta colectiva. Igualmente su teoría de la modernización da explicación al surgimiento del repertorio de acción y de los tipos de organizaciones que presupone la teoría de movilización de recursos (Cohen, 1985: 677-684).

1.1.3.3 Estructura de Oportunidad Política

Los planteamientos de Tilly se caracterizan por intentar encontrar respuestas políticas a las preguntas sobre el origen y desarrollo de la movilización. Por ello es, que el análisis posterior debe orientarse hacia las condiciones de oportunidad política que disponen los movimientos, mediante el concepto de “estructura de oportunidad política” que Tarrow, define en estos términos: “la estructura de la oportunidad política hace referencia a las dimensiones congruentes del entorno político que ofrece incentivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso” (Tarrow, 1998: 45).

Esta herramienta analítica ha sido motivo de preocupación constante por el hecho de que el concepto de “oportunidad política” careciera de precisión conceptual. En los primeros estudios relacionados con la estructura de oportunidad política, las variables analizadas se centraban en el acceso al sistema político como lo demuestra el trabajo de Peter K. Eisinger (1973). En estudios posteriores se tuvieron en cuenta otras variables adicionales como la inestabilidad política llevada a cabo por Frances Fox Piven y Richard A. Cloward (1977); la posibilidad de contar con aliados y el nivel de tolerancia de la protesta existente entre las elites por J. Graig Jenkins y Charles Perrow (1977) ó la influencia del proceso político en investigaciones como los conducidos por Charles Tilly y Doug McAdam (1982). En 1983, Tarrow incorporó todas estas variables a su estudio teórico sobre el ciclo de protestas en Italia.

Una serie de autores identificaron aquellas dimensiones relevantes de la estructura de oportunidad política de un sistema dado. Entre ellos habría que destacar a Charles Brockett, Hans Kriesi, Dieter Rucht y Sydney Tarrow. Las dimensiones apuntadas por estos autores, en función de los componentes de la estructura de oportunidad política, fueron sometidas a consenso por

Tarrow, para elaborar cuatro estructuras principales de la estructura de oportunidades -aunque no necesariamente formales o permanentes- que a continuación se exponen:

- Incremento del acceso al sistema político en términos de la participación en las instituciones de grupos no propiamente políticos, es decir, la existencia o no de represión en la participación. Cuando más estrechos son los caminos de participación preexistentes, más probable resulta que cada nueva apertura produzca nuevas oportunidades para la acción colectiva.
- Los alineamientos inestables políticos provocados por la inestabilidad electoral, los cambios de partidos en el gobierno, nuevas coaliciones, son favorables a la aparición en el escenario político de grupos sociales no representados y de periodos de movilización en general.
- La existencia de divisiones en el seno de la elite aporta también incentivos a los grupos con escasez de recursos para asumir riesgos de la acción colectiva y también animan a una parte de esa elite apartada del poder a adoptar el papel de tribunos del pueblo.
- La presencia o ausencia de aliados o grupos de apoyo. La presencia o ausencia de aliados dispuesto a ayudar a un grupo está relacionada con el éxito o fracaso de un grupo.
- Capacidad del Estado y su propensión a la represión. La represión es cualquier acción por parte de un grupo que eleva el coste de la acción colectiva del contendiente. Una acción que reduce el coste de la acción colectiva es una forma de facilitación (Tarrow, 1998: 116; McAdam, 1999: 53-55).

En esta misma línea y, para analizar los cambios producidos en el Estado y su relación con la apertura o reducción de las oportunidades políticas, Kriesi en 'The Political Opportunity Structure of the Dutch Peace Movement' (*West European Politics*, nº 12, 3) limita la noción de estructura de oportunidad política a los aspectos del sistema político que determinan el desarrollo del movimiento⁹. Este análisis determina la medida en que las acciones colectivas son facilitadas o reprimidas por los miembros del sistema; las posibilidades de éxito de las acciones o las posibilidades de que las reformas sean llevadas a cabo por las autoridades. Kriesi destaca otros cuatro factores estructurales del Estado que permiten medir el grado de apertura de un sistema con relación a la formación de movimientos:

- Grado de centralización territorial: a mayor descentralización, mayor grado de acceso formal, al multiplicarse los posibles puntos de acceso al sistema a nivel nacional, regional y local.

⁹ En esta investigación H. Kriesi además de analizar la estructura institucional formal de un sistema político, también examina en la definición de las propiedades de la estructura de oportunidad política los procedimientos informales y estratégicos de los desafiantes y la configuración del poder para la confrontación con ellos.

- Grado de concentración funcional del poder estatal: a mayor separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, mayor será el grado de acceso formal, especialmente si los poderes legislativo y judicial tienen un alto grado de independencia frente al ejecutivo.
- Coherencia de la administración pública cuanto mayor sea el grado de coherencia, coordinación interna y profesionalización de la administración pública, menor será el grado de acceso formal. Este factor parece relacionarse con el grado de centralización, ya que una administración fragmentada (descentralizada, por lo tanto, menos coordinada) aumenta los puntos de acceso al sistema.
- Grado de institucionalización de los procedimientos democráticos directos. El procedimiento democrático directo más importante es la iniciativa popular. Por tanto, la posibilidad normalizada de realizar referendos o iniciativas populares aumentarían las posibilidades de acceso desde fuera del sistema.

Sobre estos cuatro aspectos, Kriesi distingue entre Estados abiertos y cerrados, débiles o fuertes, entendiendo por fortaleza la capacidad de un Estado de tomar decisiones y llevarlas a cabo, es decir, Estados autónomos respecto a su entorno. Por otro lado, los Estados débiles carecen de autonomía y de capacidad a la hora de actuar, por tanto, representan así un marco más favorable para la actuación de los movimientos sociales¹⁰ (Kriesi, 1992: 116-122).

Estas dos propuestas presentadas por Kriesi y Tarrow, representan dos puntos de vista diferentes; para Kriesi el concepto de estructura de oportunidad política debe dar cuenta de los aspectos del sistema político que determinan el desarrollo del movimiento, es decir, que los actores no pueden prever las variaciones de la EOP en el momento en el que emprenden la acción colectiva. Por su parte, Tarrow considera que las estructuras del Estado crean oportunidades estables, pero, son las oportunidades y restricciones cambiantes las que proporcionan las aperturas que conducen a los actores pobres en recursos a comprometerse en la

¹⁰ Las oportunidades políticas para la acción colectiva ofrecida por el Estado nacional constituían, cada vez en mayor medida, el marco de sus acciones. En el ámbito neoinstitucional, los científicos sociales subrayaron las formas en que las estructuras del Estado han configurado de modo característico el desarrollo económico, las políticas económicas y su influencia permanente sobre y dentro de la sociedad civil. Las orientaciones extranacionales de los Estados, los desafíos a los que pueden hacer frente para mantener el orden interno y los recursos organizativos a los que pueden recurrir y que pueden desplegar los colectivos de funcionarios estatales pueden contribuir a explicar la acción autónoma del Estado. Algunos estudiosos de la historia comparativa no sólo investigaron los puntos en los que se apoya las acciones estatales autónomas sino también las diversas capacidades de los Estados para poner en prácticas sus políticas. Evidentemente, la absoluta integridad y el control administrativo-militar estable de un territorio dado son condiciones previas de toda capacidad de aplicación de una política por parte del Estado (Skocpol, 1998). Se trata sin duda de averiguar el grado de autonomía estatal del régimen político colombiano y de analizar la relación entre el grado de autonomía y el surgimiento de actores ilegales.

política de enfrentamiento. Es decir, lo que diferencia a estas dos perspectivas es si los cambios en el sistema político deben ser o no percibidos como incentivos por los actores para que se lleve a cabo la acción colectiva. Para Tarrow, la percepción de la oportunidad es vital porque es la manera de poder explicar el cuándo de la movilización. Según Tarrow, las estructuras más estables, cuya variación se produce de manera lenta, no pueden dar cuenta de la irregularidad de los movimientos sociales en cuanto a tiempo y espacio. La percepción de oportunidades es lo que permite a Tarrow desarrollar un concepto del enfoque político: los ciclos de acción colectiva. Según este concepto, las oportunidades aumentan cuando se producen los primeros enfrentamientos que ponen en evidencia las debilidades de las autoridades e incentivan a la movilización a sectores no predispuestos.

Para el caso colombiano, se considera que los factores que determinaron la estructura de oportunidad política se remontan a la década de los ochenta en Colombia cuando las elites regionales rechazaron el reformismo de la Presidencia y desafiaron las políticas de paz del gobierno central del presidente Belisario Betancur, se opusieron públicamente a las negociaciones con las FARC y callaron frente a la violencia hacia los comunistas, radicales, socialistas y reformistas en el ámbito local. Además la polarización entre estas elites y los grupos locales organizados que apoyaron las negociaciones de paz (Romero, 2003) y la fragmentación de la elite regional y local (Palacios, 2002) fueron considerados como oportunidades políticas por los grupos paramilitares para empezar a movilizarse. Ante esta situación, los paramilitares fueron apoyados por amplios sectores empresariales, hacendados, ganaderos, comerciantes, instituciones de seguridad del Estado- Fuerzas Armadas y Policía-, Fiscalía y gobiernos locales y regionales (Medina, 2005: 78).

En este contexto, las estructuras del Estado crean oportunidades estables para la acción colectiva e igualmente, los actores poseen la percepción de oportunidad que explica su movilización. Esto se explica en parte por la capacidad de gobierno y grado de democracia de Colombia (democracias endebles, débiles, defectuosas, con baja capacidad de autonomía, bajo control territorial y administrativo). Por otra parte, los actores perciben las oportunidades en función de la construcción del propio régimen político y por otras oportunidades provenientes de la disponibilidad de aliados influyentes (testaferros, hacendados, Fuerza Pública, ganaderos, autoridades políticas, fiscales, etc.), de la división en las elites, la facilitación en función de reducción de costos para la movilización y, por último la disponibilidad de movilización de recursos y organización estratégica.

El Estado fue incapaz de hacer efectivo el monopolio de la coerción. El uso de la fuerza organizada ya no era exclusivo de la organización estatal, pues empezó a ejercerse con amplitud por diversas organizaciones paraestatales y contraestatales (Leal, 1995: 118; Romero, 2003: 87-94). Por tanto, el Estado no obtuvo un monopolio total de los medios de coerción.

Esta falta de control de la violencia supuso que en el territorio convivieran diferentes poderes, además del poder del Estado. Esta fragmentación del poder en diferentes actores e instituciones supuso una oportunidad para hacerse con el control territorial y comenzar a movilizarse

La dificultad por controlar los territorios también fue promovida por la complejidad geográfica colombiana. Colombia es el segundo país más complejo geográficamente del mundo por detrás de Afganistán. Esta dificultad provoca que los territorios sean difíciles controlarles.

El bipartidismo y el clientelismo fueron factores importantes dentro de la sociedad colombiana. Mediante estos dos factores se articuló sociedad y Estado. Esta manera de entender la sociedad fue vista como otra oportunidad política por parte de los paramilitares.

Por otra parte, los diferentes procesos de colonización, provocaron diferentes tipos de sociedades que se relacionaban de manera diferente con el Estado. Creando así zonas que estén más inmersas en el orden institucional y otras donde es más evidente la fragmentación del poder y la pérdida del monopolio de la fuerza a favor de otros poderes.

La transferencia de poder que significó la descentralización trasladó el conflicto armado interno a una disputa por el poder local. El proceso de descentralización fue aprovechado por los grupos armados para acceder al sistema en el ámbito regional y local. La creciente competencia política, entre quienes insistían en la redefinición del sistema político y los que defendían el status quo, en el ámbito local facilitada por la elección de alcaldes, provoca la cotidianidad de la violencia en la rutina política (Sánchez y Chacón, 2005; Romero, 2003:20).

Respecto al grado de concentración funcional del poder estatal, en Colombia permanece la supremacía del poder ejecutivo frente al legislativo y judicial. Este fortalecimiento de los poderes del ejecutivo fue reiterado en la Constitución de 1991 (Ahumada, 1996: 64). En esta perspectiva, Guillermo O'Donnell (1997) califica este tipo de regímenes como “democracia delegativa” pues

los define como una mezcla peculiar de rasgos democráticos y autoritarios caracterizada por una autoridad ejecutiva que llega al poder mediante elecciones periódicas y regulares pero que gobierna virtualmente sin ninguna restricción y, en buena medida, por decreto. Por lo tanto, el grado de acceso formal al poder es restringido.

Frente a la coherencia de la Administración pública colombiana, corresponde examinar el grado de coherencia, coordinación interna y profesionalización de la administración pública respecto al grado de acceso formal al sistema.

En último lugar, se examina también el acceso al sistema mediante referendos o iniciativas populares. La imposibilidad de fortalecer una sociedad civil mediante movimientos sociales o sindicales, fue una característica más del sistema político colombiano.

1.1.3.4 Sydney Tarrow y el ciclo de acción colectiva

Sydney Tarrow, desarrolla a finales de la década de los noventa el concepto “ciclos de acción colectiva”. Esta noción hace referencia a:

“Una fase de intensificación de los conflictos en el sistema social caracterizado por una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades. Esta confrontación generalizada produce efectos externos que proporcionan una ventaja, al menos temporal, a los disidentes y les permite superar las debilidades en sus recursos base; exige a los Estados la organización de estrategias de respuestas amplias, bien sean represivas, facilitadoras o una combinación de las dos; y produce un resultado general mayor que las sumas de las consecuencias de una serie de acontecimientos desconectados.”(Tarrow 1998: 202-203).

Mediante esta definición, Tarrow analiza en el tiempo la dinámica de los movimientos a partir de un contexto político e institucional que provoca unas series de oportunidades aprovechadas por un grupo y que, posteriormente, se expande a otros grupos. Es decir, las oportunidades que han sido aprovechadas por un grupo, crean otras nuevas oportunidades que bien pueden ser complementarias, competidoras u hostiles. Así, esos movimientos crean oportunidades para las

elites y los grupos de oposición: se forman alianzas entre los participantes y desafectos, y las elites plantean exigencias que anteriormente hubieran parecido descabelladas, etc.

Este marco de actuación propicia un contexto en el cual el Estado rechaza las reclamaciones de estos primeros grupos. La capacidad de reacción del Estado determina el aumento o represión de las oportunidades. Por tanto, al ir ampliándose las oportunidades e ir difundiendo la información, se pone al descubierto las debilidades de las autoridades ante la acción colectiva.

Esta definición conduce a enmarcar un determinado movimiento en un proceso dinámico, cambiante que desencadena nuevas oportunidades de actuación, genera nuevos actores y provoca una serie de procesos de extensión, generando un ciclo de conflicto. Por tanto, la dinámica del ciclo es el resultado de la interacción de las organizaciones, autoridades, movimientos, los grupos de interés, los miembros del sistema político y los disidentes (Tarrow, 1998: 204).

Esta dinámica del ciclo de acción colectiva ha caracterizado a diferentes periodos históricos en Europa Occidental y Estados Unidos desde la década de los sesenta y en Europa del Este y en la antigua Unión Soviética en los últimos años. La idea que se plantea es hasta qué punto este ciclo de acción colectiva se encuentra presente en Colombia. Es decir, si se puede interpretar el conflicto armado colombiano como un ciclo de acción colectiva, dinámico, donde interactúan diferentes actores e instituciones.

Profundizando más en esta definición, Tarrow analiza las diferentes características comunes que pueden apreciarse en los ciclos de acción colectiva. Así, demuestra que los ciclos de acción colectiva se caracterizan por una intensificación y aumento de los conflictos que bien pueden observarse en la sociedad, no solo en las calles, sino también en las aldeas, escuelas, relaciones laborales etc. Estos ciclos también afectan a diferentes sectores sociales y a diferentes ámbitos geográficos.

Asimismo, los ciclos de acción colectiva producen símbolos nuevos o transformados, marcos de significados o ideologías. En este momento de la acción colectiva, se forjan nuevas armas para la protesta social. Nuevas formas de acción colectiva disponen de espacio para desarrollarse y extenderse.

Dentro de los ciclos de acción colectiva, no existe ninguna organización del movimiento que únicamente controle estos ciclos. A las viejas organizaciones ya existentes, se les suman nuevas organizaciones que reivindican sus intereses a través de la acción colectiva.

Por último, Tarrow verifica que en estos periodos: “la información fluye más rápidamente, se eleva el interés político y aumenta la frecuencia e intensidad de la interacción entre los grupos de disidentes y entre éstos y las autoridades” (Tarrow. 1998: 208).

Como hemos observado, la dinámica del ciclo de acción colectiva está compuesta por varios factores que la definen. En esta misma temática, destaca el momento final de un ciclo, la fase de desmovilización. Ante esta expectativa, Tarrow, denota las principales causas que están presentes en el momento final de un ciclo, pero sin ánimo de establecer una teoría que conjugue todas las variables que caben analizar en un ciclo de acción. Tarrow nomina los tres procesos causales de un movimiento en su fase de desmovilización.

El primer proceso por el que un movimiento puede decaer es por el agotamiento. El cansancio producido por una intensa movilización, unido al riesgo y los costes personales y, muy a menudo a la desilusión, es probablemente la principal causa de que descienda la participación y se inicie el declive del ciclo de protesta. Sin embargo, ésta no es igual en todos los sectores del movimiento: mientras que unos, los menos implicados y más moderados en sus acciones, encuentran razones para desistir, otros, más militantes y comprometidos con los fines del movimiento, son más proclives a radicalizarse. Por lo tanto “la disminución diferencial de apoyo conduce a la polarización de aquellos que desean un compromiso con las autoridades y quienes pretende la confrontación continuada (Tarrow, 1998: 210).

El segundo proceso de desmovilización de un movimiento es la violencia e institucionalización. Mientras que los líderes moderados institucionalizan sus tácticas para mantener el apoyo de gran parte de seguidores, el sector más radical emplea tácticas de enfrentamiento para ganar el apoyo de los más militantes e impedir los logros de los primeros. Por tanto, las divisiones entre radicales y moderados se materializan en un conflicto sobre la violencia (Tarrow, 1998: 211).

En último lugar, Tarrow destaca el proceso de facilitación y represión, como posible desencadenamiento de un movimiento. Corresponde a las reacciones de las autoridades del Estado. Mientras que en los siglos pasados se solían utilizar formas extremas de represión, en los

ciclos contemporáneos es más común emplear una facilitación selectiva para los objetivos de algunos grupos y una represión selectiva para otros. Cuando esta política coincide con el descenso del apoyo y el surgimiento de facciones dentro de un movimiento, se suelen agudizar las posiciones de los sectores enfrentados y producir, en caso extremo, terrorismo. Sin embargo, no todos los gobiernos poseen el control político para llevar a cabo facilitación y reflexión selectiva (Tarrow, 1998: 212-213).

Relacionado con el desarrollo final de la acción colectiva de un grupo, algunos teóricos miden el éxito o fracaso de un movimiento en función de determinadas variables. Para investigadores como Piven y Cloward (1972) la variable que facilita el éxito a corto plazo de un movimiento es el poder para subvertir y alterar el orden. Otros estudiosos como Tarrow, Jenkins y Perrow, determinan que la apertura de oportunidades políticas como la variable que concentra el éxito de un grupo. En esta línea, Gamson mide el éxito en función de dos dimensiones: la obtención de beneficios tangibles que corresponden a los objetivos establecidos por la organización de los movimientos y, la aceptación formal de la organización del movimiento por parte de su antagonista principal. Los resultados de este movimiento son: éxito completo, cooptación (aceptación sin beneficios), apropiación (beneficios con aceptación) y fracaso. Turner y Killian (1972), consideran que el concepto de éxito de Gamson es estrecho y elaboran tres criterios de éxito: beneficios para los miembros, cambios en las relaciones de poder y la realización de un programa para la reforma social (este último criterio es propio de cada movimiento específico y constituye más una medida idealizada que un criterio claro, según Jenkins) (Jenkins, 1994: 30-31). En esta misma línea, Steedly y Foley (1979), a partir de los datos del análisis de Gamson, averiguaron que el éxito de un movimiento estaba relacionado con “la naturaleza constante de los objetivos, la cantidad de aliados, la ausencia de divisiones internas, los objetivos específicos y limitados y la voluntad de utilizar sanciones contra sus oponentes”. Sin embargo, estas variables son consideradas internas del movimiento. Otros factores que han colaborado en el éxito de un movimiento se han centrado en las variables externas de un movimiento tal y como sugiere Goldstone (1980), como son la cantidad de aliados, el entorno político, la estructura de acceso de un movimiento y si éste ha surgido en una crisis o durante una época más estable. El trabajo de Steedly y Foley junto con el llevado a cabo por Goldstone (1980) y Snyder y Tilly (1972), señalan que debe existir una combinación de factores internos y externos, organizativos y políticos, estructurales y estratégicos para que se produzca el éxito de un movimiento (Tarrow, 1998: 231).

Esta última apreciación es considerada como la más pertinente para evaluar el éxito que conlleva el triunfo de un movimiento porque tiene en cuenta varias variables fundamentales para llevar a buen término un movimiento.

El éxito de un ciclo de protesta tiene efectos indirectos y de largo alcance una vez que la excitación inicial se desvanece. Tarrow señala tres tipos de efectos: su efecto sobre la politización de la gente y los grupos que participan en ellos; el efecto de su lucha sobre las instituciones y las prácticas políticas y su contribución a los cambios en la cultura política.

A partir de los años sesenta, con la aparición de las primeras guerrillas, Colombia inició un conflicto armado poniendo en entredicho el orden social y político constituido y desdibujando el poder del Estado en los diferentes departamentos colombianos. Desde entonces, se sumaron diferentes instituciones y actores –nuevas y viejas organizaciones–, como los grupos paramilitares o las Bacrim, al conflicto armado. Las acciones entre los grupos armados y entre estos y el gobierno se intensificaron. Aumentaron los homicidios y masacres. El número de guerrilleros y paramilitares se vio reforzado así como su expansión en el territorio colombiano. Utilizaron diferentes marcos de acción pero sobre todo primó la violencia como acción prioritaria utilizada por los diferentes grupos armados. Tras la fase de movilización, algunos de los actores entraron en la fase de desmovilización a partir de la década de los noventa. Algunos actores se institucionalizaron, otros siguieron actuando, otros se polarizaron, etc. Mientras tanto, el Estado pasó de una fase de facilitación a una fase de represión de los grupos armados. Este análisis del conflicto armado colombiano demuestra que se puede interpretarlo como un ciclo de conflicto pues se caracteriza por ser un proceso dinámico, cambiante, donde interactúan diferentes actores e instituciones y que permite surgir nuevas oportunidades que intensifican la acción.

1.1.3.5 Tilly y Tarrow y el repertorio de acción

Dentro del ciclo de conflicto, Tarrow señala la importancia de los repertorios y marcos de la acción para llevar a cabo esta acción y lo señala como una de las cuatro fases de ciclo. A través de la aportación de Charles Tilly y de Sidney Tarrow al repertorio de la acción, se estudia los diferentes tipos de acción colectiva que utilizan tanto los grupos armados como el Estado en su relación con otros actores o instituciones.

Charles Tilly introdujo el concepto de repertorio en el estudio de la acción colectiva. No obstante los historiadores de la acción popular colectiva concluyeron que las formas de acción varían en función del momento y el lugar¹¹. Es decir, la literatura histórica no carece de documentación ni de análisis de formas particulares de contestación. Pero si carece, según Tilly, de un estudio sistemático de su covariación y cambio (Tilly, 2002: 35). Esta perspectiva constituye el aporte esencia de Charles Tilly. Desarrolla el concepto repertorio de acción, que ayuda a explicar la evolución de los movimientos sociales desde una perspectiva histórica. En la obra de Tilly *Popular Contention in Great Britain, 1758-1834* (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1995) define repertorio como los productos culturales aprendidos que surgen y cobran forma a partir de confrontaciones precedentes y que en un momento histórico dado, solo hay un número limitado de formas de actuar colectivamente. La evolución hacia nuevas formas se produce de manera lenta, con innovaciones en el perímetro (periferia) del repertorio existente y sólo en muy raras ocasiones se produce un cambio más o menos brusco entre un repertorio y otro (Tilly, 2002: 31-32). Por tanto, cada grupo tiene una historia y una memoria propia de la acción colectiva. Estas formas de acción colectiva son heredadas o infrecuentes, habituales o poco familiares, aisladas o parte de campañas concentradas (Tarrow, 1998: 47).

Teniendo en cuenta el concepto de acción colectiva que Tilly maneja, haciendo hincapié en la interacción entre actores desafiantes y actores institucionales respecto a las tácticas entre los desafiantes y las prácticas coercitivas del gobierno, por tanto, el concepto “repertorio de acción” hace referencia a la totalidad de los medios de actuación, de los que dispone un grupo particular para realizar reclamos, el cual no se explica solamente en términos instrumentales -como el medio más adecuado para alcanzar el fin deseado en una determinada circunstancia-, sino, al propio tiempo, en términos de aprendizaje. Por tanto, el concepto repertorio de acción colectiva no designa actuaciones individuales sino medios de interacción entre pares o conjuntos mayores de actores. No es un individuo quien mantiene un repertorio, sino un grupo.

El repertorio cambia con el tiempo pero a un ritmo lento. Los cambios en el repertorio de acción son cortos y raros. Las innovaciones duraderas surgen en general del éxito. En ese momento los actores las adaptan rápidamente y luego se institucionalizan en una nueva forma de acción que

¹¹ En este sentido, Andrew Charlesworth y sus colaboradores en *An Atlas of rural protest in Britain, 1548-1900* (Croom Helm, Londres, 1983) estudiaron la protesta rural en Gran Bretaña, donde distinguieron protesta por la tierra, motines de subsistencia, disturbios por portazgos, protestas de trabajadores agrícolas. Ian Gilmour en su libro *Riot, rising and Revolution: Governance and violence in Eighteenth-Century England* (Hutchinson, Londres, 1992) incluía capítulos independientes de bandas que capturaban muchachos para el servicio en la armada, conflictos por elecciones, motines de subsistencia etc.

constituye un visible progreso en las demandas de sus usuarios (Tilly, 2002: 33). En su obra *Popular Contention in Great Britain 1758-1834* (Cambridge: Harvard University Press, 1995) Charles Tilly señala el cambio en el repertorio de acción acontecido en Gran Bretaña entre los años cincuenta del siglo XVIII y la década de 1830. Diferencia entre repertorio viejo y repertorio nuevo. El primero de ellos correspondía a las formas británicas predominantes en el siglo XVIII. Este repertorio comprendía las apropiaciones de grano, los conflictos religiosos, las guerras por la tierra y la procesiones funerarias, entre otros. Se caracterizaba por ser local, particular y bifurcado. La mayor parte de los casos los intereses y la acción implicados se limitaban a una simple comunidad. La forma de contestación variaba de modo significativo de acuerdo con el sitio, el actor y la situación. Las gentes que se manifestaban actuaban de manera directa cuando sus problemas eran de ámbito local. Sin embargo, cuando los problemas y destinatario eran nacionales dirigía sus demandas a un patrón o autoridad local que representara su interés, recondujera su queja, cumpliera con la obligación que le era propia o al menos la autorizara a actuar (Tilly, 2002: 40-41).

Las formas de acción en la Inglaterra decimonónica sufrieron transformaciones con relación a las rutinas del siglo XVIII. Este nuevo repertorio, se caracterizaba por ser nacional, modular y basado en formas de asociación autónomas creadas específicamente para la lucha que comenzaban con la iniciativa de los demandantes y los centros de poder con significación nacional. Así, en este nuevo repertorio, los trabajadores, campesinos, artesanos, abogados, escritores, marchaban bajo la misma bandera y se enfrentaban a los mismos oponentes. La acción era nacional por su frecuente referencia a intereses y problemas que abarcaba muchas localidades o afectaban a centros de poder cuyas acciones repercutían en muchas localidades. De esta manera, la huelga, la asentada, la manifestación, se convirtió en una institución para la negociación colectiva con mayor tolerancia que la delincuencia ordinaria o actividad criminal (Tarrow, 1998: 74). Esas mismas formas de acción servían para muchas localidades, actores y problemas diferentes.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, diferentes partes del mundo se entrelazaron mediante una densa red que engloba instituciones internacionales, regímenes y contactos intergubernamentales y transnacionales. Este desarrollo institucional se encuentra relacionado con los cambios económicos que conlleva la expansión del mercado. Este crecimiento se ve acelerado por la tecnología de la comunicación y descentralizadas. Esta expansión de los mercados y las comunicaciones globales une más estrechamente el núcleo y la periferia del sistema mundial. Así

en esta era de la globalización, la acción colectiva contemporánea se difunde con mayor rapidez, se aplican nuevos repertorios de acción que traspasa las fronteras nacionales y se relacionan mediante redes interconectadas. Pero no sólo ocurre esta difusión e imitación de acciones colectivas en otros países, sino que, de igual modo ocurre con las gentes, sus demandas y conflictos. Este contexto provoca que el Estado nacional pueda estar perdiendo su capacidad para refrenar y estructurar la acción colectiva, así como para controlar las fuerzas económicas globales. Esta situación provoca que individuos y grupos consigan acceder a nuevos tipos de recursos para organizar acciones colectivas por encima de las fronteras. Las acciones de los nuevos movimientos como el ecologismo, feminismo, antiglobalización, de solidaridad, no se limitan a manifestaciones públicas centralizadas, una de sus acciones más típicas en el uso de la red, su interconexión a través de Internet. No sólo utilizan la red para actuar, sino que estar en red es su forma de actuar y de constituirse. Sin embargo esta forma de acción no se contradice con la acción local de determinados movimientos como consecuencia de la aparición de una cultura localista (Tarrow, 1998: 251-254).

La aportación de Tarrow (1998) en este tema fue que destacó tres tipos básicos de acción colectiva: *la violencia, la alteración del orden y lo convencional*.

“*La violencia* es el rastro más visible de la acción colectiva tanto en la cobertura que los medios contemporáneos le ofrecen como en el registro histórico”, señala Tarrow (1998). El propio Tilly (1992) había señalado que fue el nacimiento del Estado moderno en Occidente el que suprimió la violencia privada y tomó el control de la violencia organizada. Para Tilly la violencia es una manifestación de la búsqueda del normal interés colectivo por parte de grupos a los que se les negaba una participación formal y rutinaria en la toma de decisiones políticas. En sus obras Tilly demuestra que los conflictos violentos se producían por la lucha por el poder y surgían directamente de los procesos políticos centrales de una población en vez de expresar corrientes difusas de descontento. Por tanto, la violencia es una forma de acción colectiva, es una de las formas más comunes de participación política aunque opina que ninguna forma de acción colectiva es intrínsecamente violenta sino que la acción suele ser precipitada por la presencia de agentes externos. En este contexto, la violencia política la explica Tilly como producto de la interacción táctica entre los movimientos sociales y sus oponentes. Entre las circunstancias más comunes que provocan violencia destaca las respuestas desproporcionadas del gobierno, el control del movimiento por grupos radicales, la situación de vacío de poder o de soberanía múltiple, la existencia de conflictos previos o el liderazgo maximalista de organizaciones políticas

contendientes. Pero la violencia también depende de las posiciones de poder que ocupen los grupos en litigio. También las formas de acción colectiva ilegal tienen una mayor probabilidad de violencia ante el riesgo de verse sometidas a represalias. Tilly señala que en función de la coordinación y la relevancia de los actos violentos podemos diferenciar diferentes tipos de violencia colectiva como los rituales violentos, la destrucción coordinada, el oportunismo, los ataques dispersos o las negociaciones rotas. Tilly pensó que la violencia colectiva surgía de interacciones sociales no intrínsecamente violentas pero después señala que la violencia a gran escala y a corto plazo procede de los especialistas de la violencia como paramilitares, soldados, mercenarios, policías, delincuentes mafiosos, etc., y que suelen surgir por luchas por el poder. Por tanto la violencia se comporta como un instrumento a la orden de un grupo que la usa porque podría ayudar a su causa (Tilly, 2007)

Tilly señala una clasificación de la violencia en función del tipo de fuerza usada. Él distingue entre violencia primitiva empleada por grupos comunitarios rebeldes inmersos en una estructura social precapitalista europea. El segundo tipo es la violencia reaccionaria entre grupos comunitarios que se resisten a la pérdida de los derechos tradicionales y a las nuevas demandas impuestas por los nacientes estados nacionales. El último tipo de violencia es la violencia moderna característica de los conflictos sociales y políticos del capitalismo industrial.

Para otros autores distinguen entre fuerza instrumental orientada hacia un propósito específico, la fuerza simbólica usada como mensaje para hacer valer la posición social y la fuerza expresiva que se manifiesta cuando el actor necesita expresarlo de manera muy profunda o en épocas de crisis. En este sentido, para Melucci, la violencia posee su propia racionalidad y obedece a una lógica dentro de un análisis de relaciones sociales. La violencia, como otras formas de acción colectiva, está sujeta a normas, ventajas, peligros y se adapta a diferentes objetivos. Pero según este autor, la violencia no es un atributo necesario de la acción colectiva sólo aparece en condiciones sociológicas particulares. Para él, la única definición de violencia es cuando se produce en una crisis o conflicto. El conflicto sólo aparece en demandas sociales directamente hacia el aparato político. Únicamente se produce la violencia cuando los canales de comunicación de las demandas son rígidos y el mecanismo de la organización social es difuso. Para la situación de crisis se produce cuando el orden es ineficiente. Ese significado de violencia para Melucci significa que la violencia no se da con acciones antagonistas y que la acción colectiva conflictiva no tiene porque ser violenta. La violencia nace de la inhabilidad del sistema político para absorber las demandas sociales creadas por el cambio y por la inocencia de su funcionamiento. El cierre de

los canales de comunicación política, el desequilibrio o ineficiencia de los principales subsistemas y la posibilidad de una crisis económica grave y el uso de medidas represivas para controlar la demanda explica el carácter violento de la protesta social. La violencia sola no es una condición suficiente para ser analizada como características de la acción colectiva por su antagonismo natural porque hay formas de violencia que no están basadas en antagonismos sociales y porque la acción antagonica asume formas no violentas, acordes con las características del sistema político o de la organización social (Melucci, 1996).

La segunda acción que señala Tarrow es la *alteración del orden público*, que según él, es la fuente de buena parte de las innovaciones del repertorio y del poder del movimiento, pero es inestable y degenera fácilmente en violencia o se esclerotiza en convención (Tarrow, 1998). Sin embargo, es un tipo de acción colectiva inestable pues para mantener las acciones que desafían el orden público se precisa de un alto nivel de compromiso, la capacidad de sorprender a las autoridades y resistir las tentaciones tanto de violencia como de convencionalismo. En último lugar, Tarrow señala que las formas de *acción convencionales* son aquellas que se basan en rutinas que la gente conoce.

Tilly destaca las dos primeras formas de repertorio pero añade una diferente al repertorio de la acción convencional. Él señala la *convención* como la construcción o reforzamiento de solidaridades internas a través de la acción en un espacio público.

En esta interacción entre demandantes y autoridades, los gobiernos pueden reaccionar de manera diferente en las diversas actuaciones relacionadas con la demanda que habitualmente están disponibles para los demandantes. De esta manera Tilly (2003) destaca las diferentes actuaciones de los gobiernos que clasifica en aquellas que prescriben, aquellas que toleran y, aquellas que prohíben:

- **Actuaciones prescriptivas.** Son aquellas que hacen llamados a la lealtad al Estado por parte de los ciudadanos sea mediante cuestiones simbólicas o ceremoniales -el himno nacional-, o con llamados a la transferencia de más recursos para el control gubernamental -impuestos, reclutamiento-.

- **Actuaciones de tolerancia.** Se trata de actuaciones que varían enormemente entre los diferentes regímenes políticos, pero ellas incluyen aspectos de ajustes legales y respuestas institucionales formales ante los infractores.
- **Actuaciones de prohibición.** Son también acciones que varían significativamente entre los diversos regímenes pero incluyen acciones violentas de regulación –normativas- y de actuación de las instituciones gubernamentales.

De la mano de Tilly y Tarrow se analiza los repertorios de acción de los grupos armados y la actuación del Estado frente a ellos. La acción más utilizada por los grupos armados fue la violencia, indiscriminada o selectiva sobre todo hacia la población civil. Los medios de comunicación jugaron un papel importante como medios para alterar el orden público mediante internet, la radio, televisión o prensa. Tanto la violencia como la alteración del orden público fueron acciones convencionales de estos grupos paramilitares. La actuación del Estado es revisada en función de su evolución y relación con los grupos armados primando las actuaciones de tolerancia y de prohibición.

1.1.4 Los Nuevos Movimientos Sociales y la acción colectiva

Mientras que en Estados Unidos la investigación sobre movimientos sociales se centró en la organización, los recursos y el proceso político de la acción colectiva, en Europa a causa del nuevo modelo social surgido tras la Segunda Guerra Mundial, los investigadores se centraban en el proceso de construcción de identidades colectivas que son necesarias para explicar las motivaciones individuales para emprender la acción. Ahora lo relevante es preguntarse por la causalidad del origen de los movimientos sociales y la construcción identitaria. Dentro de esta teoría destaca cómo determinadas crisis estructurales hacen surgir los movimientos y como éstos crean su propia identidad colectiva. Por tanto se pregunta por qué se organizan los movimientos sociales. A pesar de que esta teoría surgió en Europa, los autores norteamericanos más prominentes como Tilly, Tarrow, McAdam, Gamson y Snow, optaron siempre por un acercamiento más culturalista que funcional y fueron los que al final lideraron propuestas más integradoras. Los europeos más conocidos de este enfoque fueron Habermas, Touraine, Offe, Melucci, Inglehart, Dalton, Kuechler, Reichman, Máiz, Pérez Ledesma, Tejerina, Goffman, Benford, Eder, y Hunt (Ibarra, 2000).

Esta nueva teoría abandonó el marxismo como marco de comprensión de los movimientos sociales y la transformación social y apuntaron más hacia otras lógicas de acción basadas en la política, la ideología, la cultura y otras fuentes de identidad como la etnicidad, el género o la sexualidad.

La ideología es el componente esencial de este nuevo enfoque. En la literatura de este enfoque se entiende por ideología los valores, las estrategias y hasta los actores. El carácter de estos movimientos es social y cultural y no político. Es decir están más preocupados por cuestiones culturales y de participación que por la toma del poder. Se presentan como una alternativa que pretende conseguir una transformación de los estilos de vida, de los valores, de las identidades personales y de los símbolos, de las pautas de comportamiento y participación, potencian las estructuras descentralizadas y rechazan la burocratización. Sin embargo de estos movimientos pueden surgir partidos políticos y grupos de presión. Entre ellos pueden existir vínculos formales o informales con las instituciones establecidas. Algunos de estos movimientos consiguen su fin que es politizar los temas por los que luchan, darles cabida en el debate político internacional. Prueba de ello fueron la creación del partido de los verdes en Alemania que obtuvo un peso significativo durante la década de los setenta y ochenta. E incluso estos movimientos han influido en los partidos de izquierdas, muchos teóricos postmarxistas se están aproximando a estos movimientos como la alternativa revolucionaria (Durán, 1995). Es decir, se politiza la vida cotidiana. Aquellos temas que se encontraban en la esfera privada del individuo como la sexualidad o la igualdad entre géneros saltan al terreno de lo político sobre todo gracias a la influencia del movimiento feminista.

Dentro de esta teoría hay diferentes enfoques que corresponde con el paradigma de la distribución, el paradigma de la autoridad y el paradigma del estilo de vida. Los teóricos de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS), no representan una escuela teórica unitaria sino que defienden diferentes interpretaciones en sus explicaciones sobre el surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales de los años setenta (Rubio, 2004).

Este nuevo enfoque profundiza la visión que Tilly tenía de la acción colectiva moderna pues él consideraba que cada estructura social nueva produce una forma concreta de acción colectiva y que es necesario analizar el orden social y político en el que se dan los movimientos. De esta enseñanza se deriva que en Europa los movimientos surgidos tuvieron una mayor carga ideológica como resultado de la cultura política pero sobre todo por la influencia reivindicativa

del movimiento obrero. Por otro lado en Estados Unidos durante este mismo tiempo las organizaciones surgidas pasaron a tener un carácter pragmático y estructurado como grupos de interés en la mayoría de los casos. Así en Europa se desarrolló sobre todo organizaciones sindicales de ámbito nacional con ideología socialista adscrita a partidos políticos mientras que en Estados Unidos el movimiento obrero, menos ideologizado, se desarrolló en organizaciones de ámbito local pero sin adscripción política.

Para la elaboración teórica europea son muy importantes los cambios estructurales económicos, políticos y culturales de las sociedades industriales avanzadas porque los procesos de transformación estructural enmarcan el fenómeno de cambio social del que son afectados los NMS. Así el cambio de una economía mundial a una economía global, el desarrollo tecnológico y su influencia en los sectores productivo, la crisis del estado de bienestar, la pérdida de soberanía de los estados, el alto grado de individualismo y los valores de carácter postmaterialista van a influir en el desarrollo de los NMS. La novedad de estos nuevos movimientos reside en el énfasis y la urgencia que cobran, su carácter universal, no se trata una crítica de lo moderno, sino una crítica moderna de la modernización. No se pretende volver a ninguna sociedad pasada sino aprovechar los avances científicos-técnicos, económicos y políticos propios de la modernización para mejorar la vida de las personas. Inglehart comenta que los sistemas de valores de las democracias occidentales se están transformando del cambio social de materialistas a postmaterialistas que enfatizan la calidad de vida y la expresión personal. Este cambio viene propiciado por el sentimiento de seguridad que tienen los ciudadanos los que le permite preocuparse de temas no materialistas (Durán, 1995). Estos nuevos movimientos contrastan con el viejo movimiento representado por el movimiento obrero, con una práctica más acomodaticia e incapaz de criticar al sistema capitalista, se convirtió en una pieza fundamental del funcionamiento del sistema. Contrasta este viejo movimiento con los NMS surgidos en un contexto de opulencia material y que trasciende el modo de producción capitalista (Casquete, 2006).

Los objetivos de estos movimientos son diferentes pues bien puede enfocarse hacia objetivos económicos, identitarios o con la consecución de objetivos de carácter universalista. Pero esto no significa que no puedan darse otro tipo de movimientos. En función de esto Kriesi (1988) establece tres tipos de movimientos o paradigmas: el paradigma de la autoridad relacionado con el conflicto político en torno a los derechos fundamentales; el paradigma de la distribución cuyo objetivo es la distribución del crecimiento económico y el paradigma del estilo de vida con

objetivos centrados en el respecto al estilo de vida de cada persona, al derecho a ser diferentes y la protección del individuo de problemas derivados de la modernización.

Los NMS se movilizan sin una referencia específica de clase. No movilizan a sus simpatizantes según su estructura social. La base social de estos movimientos según Dalton y Kuechler, se diferencian entre miembros activos unidos por un vínculo ideológico y el sector más amplio de los simpatizantes. La mayoría de los investigadores concuerdan que los miembros activos son menores de 35 años con preparación universitaria, con una seguridad económica relativa, que trabaja en sectores no productivos de servicios personales o en el sector público o también pertenecen a la población periférica o desmercantilizada como amas de casa, estudiantes universitarios, de enseñanzas medias, jubilados, estudiantes en paro (Durán, 1995). Los miembros de estos grupos se caracterizan por poseer un capital cultural más que económico.

La lógica de acción de estos movimientos podemos simplificarlas siguiendo el estudio que hizo Rucht, en lógicas instrumentales y lógicas expresivas. La lógica instrumental corresponde a una lógica orientada hacia el poder y la preocupación por el proceso de toma de decisiones o la distribución del poder político. A esta lógica corresponde los movimientos antinucleares, ecologistas, pacifistas. Por otro lado la lógica expresiva corresponde a una estrategia orientada hacia la identidad donde destaca la identidad personal, la autorrealización, la conducta, los roles personales que corresponden a los movimientos feminista y gay. Sin embargo el movimiento estudiantil y la nueva izquierda están navegando entre una lógica y otra.

Según Rucht estos NMS han ampliado sus formas de actuación. A las formas de actuación tradicionales como peticiones a las autoridades, recogidas de firmas, artículos de protesta en la prensa y el recurso ante los tribunales de manera marginal, se unieron otras nuevas formas de actuación como concentraciones de masas, actos que perturban el orden público e incluso actuaciones de carácter violento y acciones judiciales. Esto no significa que anteriormente no encontráramos algunas de estas formas de actuación en el pasado, sino que los NMS generalizan otras formas de actuación no convencionales (Casquete, 2006).

Otro hecho trascendente de estos movimientos es el protagonismo crecimiento de actores políticos transnacionales, es decir, surgen organizaciones de movimientos sociales de carácter transnacional debido a las profundas transformaciones estructurales sociales que favorecen la globalización de las actividades de protesta. Pero su origen no se observa sólo con estos NMS.

Antes ya fue utilizado por otros movimientos como el movimiento obrero, o el movimiento abolicionista (1833-1865), movimiento contra la circuncisión femenina en Kenya (1923-1931) o el movimiento nacionalista irlandés de mediados del siglo XIX (Casquete, 2006).

Cohen entiende que este nuevo paradigma es un intento de indagar en el proceso a través de los cuales los actores colectivos crean la identidad y la solidaridad que defienden; evalúa las relaciones entre los adversarios y la puesta en juego en sus conflictos; analiza los desarrollos culturales y estructurales que contribuyen a mejorar las relaciones.

Dentro de este paradigma una de las aportación corresponde a Alain Touraine que conceptualizó el término sociedad de la acción como aquella sociedad que tiene la capacidad de actuar por si misma sin depender de leyes naturales o entidades superiores. Según Touraine está dividida en dos clases sociales, la elite dirigente y la clase dominante. La elite marca los patrones culturales y principios morales mientras que la clase dominante sometidos a esos patrones y valores intenta acabar con esa dominación. Así que hay dos movimientos el de la elite que detenta el poder económico y político y el de la clase dominada que se enfrenta a los patrones culturales de la clase dirigente. En esta sociedad los movimientos sociales representan una acción de clase, una acción orientada culturalmente porque los actores de los movimientos sociales interactúan, el hecho de interactuar incluye una dimensión de poder ya que los actores están definidos por su relación con el poder. Así la acción colectiva se basa en la voluntad de cada individuo, grupo o nación de actuar sobre los hechos económicos, construir y transformar su identidad e integración y defender un ideal de solidaridad. No se trata de conservar un orden social sino de crear las condiciones sociales que protejan la libertad personal y la diversidad cultural. Los movimientos sociales contienen en sí mismos una aspiración democrática, procuran dar la palabra a quienes no la tienen y hacerlos partícipes en la formación de las decisiones políticas y económicas. El análisis del sujeto y los movimientos sociales es la base del análisis social y la sociología.

Según Touraine la ideología de un movimiento pasa por tres fases. La primera es el principio de identidad por medio de la cual el actor da una definición de sí mismo, es decir reconoce los efectos de su acción. La segunda fase de un movimiento en el principio de oposición donde el actor da una definición de aquello a lo que se enfrenta. En último lugar la totalidad o la continuidad temporal que permite al actor decir “nosotros”. El movimiento social tiende a cuestionar los modelos culturales que orientan el sistema de acción histórica en su totalidad. Siempre vamos a encontrar una tensión entre el reconocimiento del actor por sí mismo y su

reconocimiento por otros actores. La solidaridad de un grupo social en la acción colectiva es el medio del que se sirve el actor para garantizar su identidad propia.

Discípulo de Touraine fue Alberto Melucci quien aportó un gran conocimiento al estudio de los NMS y en concreto al concepto de ideología. Para Melucci los NMS se implican en cuestiones que afectan al sistema de producción cultural, los valores e identidades. En una sociedad de la información estos movimientos se presentan como creadores de códigos culturales alternativos a los ya existentes, luchan por objetos simbólicos y culturales. Para él la acción colectiva se considera el resultado de intenciones, recursos y límites, construido mediante relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones, es decir, definen en términos cognoscitivos el campo de posibilidades y límites que perciben mientras que activan sus relaciones como forma de dotar de sentido a su estar juntos y los objetivos que persiguen (Melucci, 1994). Además considera que los movimientos sociales están basados en un tipo de acción basado en la solidaridad del actor para compartir una idea colectiva, el conflicto como oposición entre actores y la ruptura de los límites del sistema. Es decir, los movimientos sociales son sistemas de acción, producto de intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre diferentes actores y no entidades fijas prefiguradas. Mediante la acción los actores sociales pueden modificar la sociedad. De esta manera introduce un tema que antes no se analizó y es el análisis del nivel que explica el porqué surge un actor colectivo, el nivel intermedio del individuo hasta que actúa de manera colectiva. Según Laraña los conflictos en las sociedades contemporáneas están relacionados con el nivel individual donde se forma el sentido y sobre el que se extienden las nuevas formas de dominación. Así los conflictos se desplazan del ámbito económico-industrial hacia el ámbito cultural y sobre todo se centran en la identidad personal, el tiempo y el espacio de vida social cada vez más localizado en la experiencia interior de los individuos.

Melucci observa la acción colectiva como una construcción social en la medida que la acción social es construida por actores que recurren a bienes limitados ofrecidos por el medio ambiente dentro del cual interactúan. La acción colectiva es producto de un sistema de acción formado por tres vectores: las metas de la acción, los medios utilizados y el medio ambiente donde tiene lugar la acción (Chihu y López, 2007).

Melucci considera que la teoría de la identidad analiza cómo los actores sociales se reconocen a sí mismos como actores productivos socialmente, capaces de asignar un sentido propio a su actividad social y de reconocer el producto socialmente producido como resultado de su acción

en tanto productores. Esta capacidad para la simbolización y la representación cultural de la acción social se desarrolla en proporción directa a la capacidad social para producir recursos simbólicos. Esta capacidad social es sumamente poderosa en las sociedades complejas, de ahí la importancia que asume la información y las formas simbólicas en general para la reproducción de la vida social. Los nuevos movimientos sociales alimentan la necesidad de formar identidades personales estables. Los individuos buscan nuevas colectividades y generan espacios sociales en donde se pueden experimentar y definir nuevos estilos de vida e identidades sociales emergentes (Chihu y López, 2007).

En la perspectiva de los nuevos movimientos sociales, uno de los postulados teóricos básicos se sustenta en la idea de que los movimientos sociales contemporáneos no se guían por el modelo estratégico de acción social. Más bien se guían por un modelo expresivo de acción social, en donde lo que se busca no son recursos materiales o poder, sino identidad, autonomía y reconocimiento. En opinión de Melucci, la identidad colectiva es una definición compartida y producida por varios grupos y que se refiere a las orientaciones de la acción y el campo de oportunidades en el cual tiene lugar la acción (Melucci, 1995:44). De acuerdo con Melucci, la identidad se constituye en un proceso en el que se presentan tres elementos: *a)* la permanencia de una serie de características a través del tiempo; *b)* la delimitación del sujeto respecto de otros sujetos, y *c)* la capacidad de reconocer y de ser reconocido.

En esta misma línea, Melucci identifica la ideología como los marcos simbólicos utilizados por los actores colectivos para representar sus acciones ante sí mismos y ante otros dentro de un sistema de relaciones sociales. Cada producción simbólica es una parte de esas relaciones pero al mismo tiempo el actor se separa del sistema que forma parte y defiende sus propios intereses particulares. Es decir, la conexión entre el particularismo del actor y los valores generales como verdad, libertad, justicia etc., es la clave del mecanismo de los marcos de un actor colectivo. Melucci recupera la noción de ideología de Touraine. Es decir, mediante la ideología los movimientos sociales identifican sus propios intereses al argumentar que los valores que persiguen y sus metas son universales y que corresponden a todos los miembros de la sociedad. El beneficio de lograr sus metas beneficia al género humano en su conjunto, no sólo a quienes han participado activamente en su consecución. El adversario es el principal obstáculo para alcanzar esas metas, queda despojado de toda identidad social legítima, es el enemigo de la totalidad social. Al actor colectivo se le adjudica toda una serie de atributos positivos en términos políticos, culturales y morales. Según este autor la ideología tiene varios elementos

representativos: la definición del grupo social que realiza las acciones; la situación indeseable que da lugar a la acción colectiva y donde se señala al adversario ilegítimo; clarificación de las metas deseables que son expresadas como beneficios para la totalidad de la sociedad; Alineamiento, es decir, conseguir una relación positiva entre el actor colectivo y las metas generales de la sociedad.

Melucci considera que la ideología tiene dos funciones: integración y estratégica. La ideología se convierte en una herramienta para la integración del grupo ante posibles disgregaciones internas por su propia formación o por influjo de los adversarios. Coordina las demandas particulares del movimiento y las pone en relación con los principios generales. El control de la ideología y de los flujos de información se convierte en un recurso importante del liderazgo del movimiento es necesario en la continua adaptación de representaciones simbólicas del movimiento. También la ideología en la forma de prácticas rituales consolida la identidad colectiva. La manera de vestir, la adopción de códigos lingüísticos, de costumbres o las ceremonias y rituales garantiza la continuidad y la eficacia de la ideología. Pero también la ideología es estratégica porque mediante la articulación de significados simbólicos los actores colectivos aumentan sus ventajas frente a los adversarios (Melucci, 1996).

En definitiva la ideología es usada para obtener una identificación positiva con el movimiento de parte de la base social y los observadores neutrales y una visión negativa del adversario. La función estratégica de esta relación con el adversario es extender la base de apoyo y el espacio dentro del sistema político y minando cualquier intento de intento del adversario por mantener la legitimidad de sus acciones.

Los marcos de la acción se construyen en negociaciones internas y conflictos. Estos marcos refuerzan la unidad y efectividad del actor colectivo. Pero el conflicto es una relación social de oposición entre dos actores por los mismos recursos, simbología, material. Comparten el mismo campo de acción pero lo interpretan de manera opuesta para tener el control. Por eso esta parte de la ideología es ambivalente porque es la interpretación de un campo social visto por un movimiento. Por eso los marcos producidos por un actor colectivo son ambivalentes.

Dentro de la ideología se hace importante la figura del líder. El liderazgo de un movimiento proporciona los objetivos (generales y específicos), el desarrollo de estrategias y tácticas para la acción así como la formulación de la ideología. Tiene que satisfacer la expectación de sus miembros facilitando los objetivos, representando al movimiento en el exterior y coordinando e

integrando internamente actividades. Es una relación entre el líder y sus seguidores en la cual cada parte da y recibe bienes y valores. El líder tiene que conseguir que haya un equilibrio entre costes y beneficios. Consecuentemente la distribución de símbolos de identificación y recursos ideológicos siempre serán cruciales recursos para el liderazgo.

Para Melucci, el líder tiene que cumplir una serie de puntos para obtener un buen liderazgo:

1. Definir los objetivos, establecer un sistema de prioridades y adaptarlas a las condiciones cambiantes. La coordinación de objetivos y la elección de las prioridades siempre requiere una ideología para legitimar esas operaciones.
2. Proporcionar el significado de la acción. El líder tiene que reunir los recursos disponibles y dirigirlos hacia los objetivos del movimiento. Tiene que maximizar los recursos disponibles en el medio ambiente y entrar en relación con otros grupos y organizaciones y con la sociedad a largo plazo.
3. Mantener la estructura del movimiento. Debe garantizar la cohesión e interacción entre los miembros. Tiene que contraatacar la influencia de las fuerzas centrífugas y centrípetas. Para ello la circulación de información es crucial. La comunicación sirve para informar y motiva al grupo. La cohesión del grupo se mantiene a través de los canales de comunicación.
4. Movilizar su base de apoyo en la consecución de sus objetivos.
5. Mantener y reforzar la identidad del grupo. El líder tiene proporcionar incentivos de solidaridad proyectando una imagen del grupo en la cual los miembros puedan identificarse y de la que puedan extraerse gratificaciones. La intensidad de los intercambios e interacciones consolida la identidad colectiva

Estos componentes del liderazgo están siempre interconectados. El punto de apoyo del liderazgo es la decisión, es decir, la capacidad de elegir entre alternativas y reducir incertidumbres.

Siguiendo estas mismas líneas de los diferentes autores de los Nuevos Movimientos Sociales, también se analiza a los grupos paramilitares siguiendo el paradigma de la identidad y causalidad propia de esta teoría. De tal manera que se pregunta el porqué se organizan los grupos paramilitares. Según los anteriores autores citados, esta clase de movimientos tienen un objetivo social y cultural, pero no político. Es decir, no hay un interés por tomar el poder. Pero, en el caso de los grupos paramilitares, el poder si toma fuerza dentro de su movilización y organización. Es un factor importante pero también la identidad del grupo. Por tanto, tanto la identidad como el

poder son factores importantes. En esta misma línea, es importante recordar las palabras de Rucht respecto a la lógica de acción que puede ser instrumental, orientada hacia el poder, o expresiva, orientada a la identidad. En el caso a estudiar, se comparte las dos lógicas, la lógica del poder y de la identidad. Respecto a la ideología, al igual que propuso Touraine y Melucci, los grupos paramilitares tratan de elaborar una ideología para que se reconozca al actor paramilitar como actor entre ellos mismos pero que también sea reconocido entre otros actores en un sistema de relaciones sociales. Según esta teoría de los NMS la acción social seguía por un modelo expresivo, es decir da prioridad a la identidad, al reconocimiento y a la autonomía del movimiento. Dentro del concepto ideológico Melucci señala que el movimiento social se mueve por conseguir unas metas universales, un beneficio para toda la sociedad. En este sentido el paramilitarismo se presenta como el adalid de la sociedad colombiana que los va a salvar de las tropelías de la guerrilla y que va a devolver a la sociedad seguridad y justicia. Dentro de esta idea, también es importante la figura del líder para conseguir los objetivos, realizar estrategias e impregnar al grupo de ideología e identidad. Aunque se pueda establecer que los paramilitares refuerzan su identidad y reconocimiento frente a los demás y se caractericen por ser autónomos, sin embargo los grupos paramilitares también se puede evidenciar que sigan un modelo estratégico donde el objetivo es el poder y los recursos materiales, propio de la teoría de la movilización de recursos.

1.1.5 Confluencia teórica: la unión de varias perspectivas en el análisis de los grupos paramilitares

A finales de los años ochenta y principio de los noventa se produjo una confluencia de los análisis de los movimientos, así se interrelacionaron diferentes enfoques analíticos. Se pretendía poner de manifiesto la utilización de todas las variables. Intentaron establecer qué cuestiones fueron obviadas por estos movimientos. Observaron que los enfoques anteriormente expuestos obviaron el análisis de porqué los individuos participan en los movimientos, es decir, no analizaron el nivel intermedio entre la acción y la estructura.

Uno de estos acercamientos que se establece es entre los teóricos de la TMR y NMS. En 1985 y 1986 se produce dos congresos para acercar estas dos teorías. El resultado fue la obra colectiva de Tarrow, Klandermans y Kriesi titulada *From structure to action: comparing social movement research across cultures (1988)*. La idea era vincular los dos enfoques a través del nivel intermedio. Desarrollaron el concepto de movilización del consenso para vincula la acción y la estructura. Es

el intento de un actor social por crear consenso entre un subconjunto de la población. En esta situación se encuentra los agravios, el sistema de creencias o ideología. Este proceso de movilización que une la estructura con la acción se desarrolla a través de redes sociales y políticas en la que los individuos y grupos están en torno a objetivos comunes; las oportunidades políticas les proporcionan salidas para la acción colectiva y la construcción de nuevos significados de los que emergen nuevos actores colectivos (Rubio, 2004).

Posteriormente a través de las reuniones internacionales de los teóricos se observó una mayor vinculación entre los dos enfoques. En 1996 se publicó otra obra colectiva fruto de varios congresos internacionales, fue *Comparative perspective on social movements: Political opportunities, mobilizing structures and cultural framings* editada por McAdam, Mc Carthy y Zald. A través del estudio de otras perspectivas y otros enfoques y la comparación de casos elaborados en diferentes contextos ha hecho que los teóricos adopten una visión más comparativa de los movimientos sociales. Estos autores dirigen su énfasis en tres factores para analizar los movimientos sociales:

1. Estructura de oportunidades política
2. Estructuras de movilización
3. Procesos de enmarcación o de creación de marcos de referencia, situados en el nivel intermedio entre la oportunidad, la organización y la acción. Se refiere a la dimensión cognitiva o ideológica, los elementos culturales etc.

Otra perspectiva o enfoque que tiene gran empuje es el enfoque constructivista que analiza los elementos expresivos y simbólicos como las creencias, los valores, los símbolos, las costumbres, etc. Teóricos como David A. Snow destacan que, junto al análisis de los factores organizativos y estructurales de la TMR, se debe analizar factores psicosociales. Snow y Benford definieron el concepto de *marcos de acción o de referencia ó enmarcamiento*¹² como el momento en el que los movimientos asignan significado e interpretan sucesos y condiciones para movilizar a potenciales seguidores y miembros y a desmovilizar a los antagonistas. Son los discursos culturales para describir significados compartidos que impulsan a las personas a la acción colectiva. Dependen de la recuperación y transformación de los elementos enraizados en la sociedad y de la capacidad de impactar en los medios de comunicación de masas (Martí i Puig, 2004).

¹² Snow adoptó el concepto marco de E. Gofman (1974) y sostuvo que existe una categoría especial de sobreentendidos cognitivos definidos como marcos para la acción colectiva que están relacionados con los mensajes a partir de los cuales los movimientos sociales construyen sus significados.

Aparte de los *marcos de referencia* propuestos por Snow y Benford hay otros muchos teóricos que como Klandermans y su *formación y movilización de consenso* analizaron diferentes conceptos que forman parte de un concepto de movimiento como construcción social. Entre los teóricos destaca Doug McAdam y el concepto de *proceso de liberación cognitiva* para aludir a la transformación de la conciencia de los potenciales participantes de una acción colectiva. Gamson plantea *el impacto del discurso público en las identidades colectivas*, es decir, la importancia de los medios de comunicación de masas para la movilización colectiva. Melucci aporta con *identidad colectiva* la definición de los actores como grupo y desarrollan concepciones del mundo, metas, opiniones compartidas sobre el entorno y las posibilidades y límites en la acción colectiva. Estos conceptos son para Klandermans los cinco marcos de análisis que centran su interés en los aspectos simbólicos. Para Hunt, Benford, Snow y Laraña los planteamientos constructivistas más influyentes en la actualidad son los marcos de referencia y el proceso de construcción de identidades colectivas.

A pesar de la importancia y empuje de la teoría constructivista, esta perspectiva constructivista recuerda a la teoría trabajada por Melucci y Touraine sobre la ideología y la identidad. Esta dimensión cognitiva del enfoque constructivista también es aplicada por los autores anteriormente mencionados. En este estudio se trata de profundizar en el marco simbólico de un movimiento, su identidad, reconocimiento y autonomía.

En esta misma línea, Charles Tilly, Sidney Tarrow y Doug McAdam (TTM) elaboraron en la última década del siglo XX una nueva propuesta sobre el conflicto social que fuera más allá de la acción colectiva y que confiriera un carácter dinámico al análisis sociológico del conflicto. A través de esta propuesta intentan crear una nueva aproximación teórica frente a la teoría clásica de los movimientos elaborada por ellos mismos y que sea más dinámica y busque la interacción entre los actores y el ámbito para crear un escenario histórico dinámico. Intentan buscar todas las variables o mecanismos que se encuentran en todos los fenómenos del conflicto. Estos teóricos denominan a los fenómenos del conflicto como *contienda política* es decir, la acción política colectiva:

“la interacción episódica, pública y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando: (a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones, y (b) las reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores” (McAdam, Tarrow, Tilly, 2005).

Es decir la contienda política es episódica, pública, supone interacción entre quienes reivindican y otros, la reconocen esos otros como algo que tiene efectos sobre sus intereses y hace intervenir al gobierno como mediador, objetivo o reivindicador.

Este nuevo enfoque fue firmado unitariamente por cada autor en la obra *Dinámica de la contienda política* (Hacer, Barcelona, 2001) y en 2006 Tarrow y Tilly publicaron una obra complementaria a la anterior *Contentious politics* (Paradigm Publishers)

Otra de las aportaciones que realizaron es el desarrollo de un análisis dinámico de la acción colectiva donde se integre el estudio de los diferentes actores políticos colectivos y los ámbitos de actuación para darle un carácter dinámico. Estos teóricos retoman las aportaciones de la agenda clásica para insertarla en un escenario histórico dinámico acotado en el tiempo, los *episodios*, que están dividido en *procesos* que son secuencias relevantes de la contienda que se caracterizan por la conexión de determinadas variables o *mecanismos*, como son los mecanismos ambientales, cognitivos y relacionales. Estos mecanismos nos remiten a la estructura de oportunidades política, a los marcos cognitivos y a las estructuras conectivas. La aportación más importante es que estos autores buscan las conexiones causales entre mecanismos, procesos y episodios en una variedad de contextos políticos diferentes, desde revoluciones a manifestaciones sociales, procesos democráticos, nacionalismo, guerras, política de grupos de interés, conflictos industriales, etc.

El objetivo de este modelo es identificar los mecanismos dinámicos que relacionan las variables de la agenda clásica de los movimientos sociales con los demás actores significativos, es decir, pone en movimiento las oportunidades, la estructura de movilización, enmarcamiento y repertorios de la agenda clásica a través del análisis de episodios, procesos y mecanismos.

Tarrow, Tilly y McAdam (TTM) analizaron una docena de episodios como los conflictos en Guatemala y El Salvador (1970-1991), el movimiento de mujeres en Estados Unidos (1950-1985), las huelgas en Francia (1830-1968) etc. Entre los procesos que analizaron destacan la formación de coaliciones, la constitución del actor, contención, democratización, movilización/desmovilización, polarización, cambio de escala, cambio de identidad etc. Entre los mecanismos o variables causales principales destacan atribución de amenaza u oportunidad, correeduría, certificación/descertificación, formación de coaliciones, identidades políticas, formación de categorías etc.

Este nuevo enfoque fue criticado por varios expertos sociólogos alegando varios inconvenientes. Entre las críticas destacan aquella realizada a la definición de contención política porque sólo se refieren al desafío de una autoridad institucional, estatal, eclesiástica etc., pero no toma en cuenta las autoridades no institucionales. Es decir, no toma en cuenta la interacción, la relación entre otros actores que no sean institucionales como por ejemplo entre un movimiento social y su contexto social. Tampoco es muy convincente el incorporar bajo el mismo paraguas de contención política a todos los fenómenos relacionados con el conflicto.

Otra crítica la realizaron por la utilización de conceptos nuevos como procesos y mecanismos porque no ofrecen una justificación teórica para identificarlos. Muchos investigadores como Marco Diani (2003) no entienden porqué utilizan un vocabulario nuevo, dónde está la diferencia, ¿por qué utilizan el mecanismo atribución de amenaza y oportunidad en vez de utilizar el concepto más familiar de estructura política? Ó ¿por qué utilizan apropiación social en vez de estructuras de movilización? Lo mismo ocurre con los términos enmarcamiento y repertorio que los sustituye por construcción social y acción colectiva innovadora. De igual manera abandonaron los beneficios teóricos de la aportación de Melucci a la identidad. Ofrecieron según Koopmans cuarenta y dos mecanismos pero sin evidencia empírica y sin un programa metodológico para establecer la veracidad y la importancia causal de estos nuevos conceptos. No explican ni analizan el concepto de mecanismos. Además, investigan poco los mecanismos ambientales y cognitivos (Koopmans, 2003; Taylor, 2003). Pero no explican porqué en episodios específicos intervienen unos mecanismos y no otros ó no explica cómo interactúan estos mecanismos. Además los mecanismos producen diferentes resultados según el contexto en el que se encuentren. De la misma manera que diferentes mecanismos producen un mismo resultado. Aunque ante esto Tilly defiende que el mecanismo de la correduría siempre opera del mismo modo y siempre tiene los mismos efectos (Tilly, 2004). En su defensa TTM rechazan que los mecanismos carezcan de teoría aunque confirman que no alegaron pruebas sobre el significado de los mecanismos. Ellos utilizan muchos mecanismos porque están en el principio de la investigación, no en el final, por ello analizan varios contextos para definir los mecanismos. Además esta alternativa es relevante porque utiliza tres procesos que siempre se encuentran en los diferentes contextos: la constitución del actor, la convergencia y el cambio de escala. Sin embargo aceptan que la definición de mecanismos es muy confusa, que hay confrontaciones entre los mecanismos según el tipo de observación de cada investigador, entre “mi tipo de

mecanismo” y “tu tipo de mecanismo”, y que se han preocupado más por buscar mecanismos que adentrarse más en su significado causal (Tarrow, 2003)

También, estos autores les señalan que han abandonado la teoría clásica de los movimientos sociales que aún representa más coherencia de la acción colectiva que la alternativa de TTM. Piensan que la teoría clásica no es una teoría sino una lista de factores generales implicados en la emergencia de la acción colectiva. La teoría clásica dejó de lado la interacción dinámica, no habla del dinamismo que existe cuando hay grupos y redes. Esta alternativa que proponen, según McAdam, es una extensión del modelo clásico más que su abandono, es un nuevo paso empírico asociado a la teoría clásica. Pero este comentario sólo lo piensa McAdam. Tarrow y Tilly piensan totalmente lo contrario. Por tanto se observa que incluso entre ellos hay disputas sobre qué representa su alternativa (McAdam, 2003). Rucht (2003) critica que estos autores denominen a los paradigmas anteriores como “modelo clásico”. No hay un modelo clásico sino varios acercamientos, varios paradigmas que se complementan y a veces compiten entre sí. Estos paradigmas que desde los años setenta surgieron no son estáticos, como TTM quieren demostrar. Hay una gran lista de teóricos que han hecho análisis dinámico. Estos paradigmas están lejos de concentrarse en un solo actor en el tiempo o la dinámica de un solo actor. Sin embargo se concentran en conflictos bipolares o multipolares entre movimientos, el estado, contramovimientos y otros. Y esto puede observarse en primer lugar en los anteriores trabajos que han realizado TTM y en otros autores como Hanspeter Kriesi, Donatella della Porta, William Gamson, Gary Marx, James Jasper, Theda Skocpol ó Roger Gould, entre otros.

También Rucht comenta que no tienen criterio para elegir los casos prácticos que plantean. No hay ninguna razón para comparar los casos que proponen. Rucht propone que sería mejor que buscaran las variaciones de la intensidad de la contención, o las diferentes formas de contención ó los diferentes actores, etc. Hay demasiados casos para estudiar (Taylor, 2003).

Esta nueva perspectiva de TTM ha sido polémica y poco convincente. El éxito de esta perspectiva resta capacidad para establecer un diálogo teórico con sus predecesores para reformular la teoría de los movimientos sociales. Esta teoría no ofrece una herramienta analítica que precise la relevancia de los mecanismos. Es una propuesta difusa para ser considerada como sucesora de la agenda clásica de los movimientos sociales. Se puede observar muchas páginas de pasajes históricos pero con poca dimensión teórica. Aunque parezca que ofrece un cambio metodológico en realidad dan una serie de herramientas que hablan de mecanismos y episodios

más que de los actores contenciosos. Además excluye a los actores que no están relacionados con el Estado. Dejan de lado aquellas formas culturales o sociales que se desarrollan en el conflicto personal. Para esos casos esta propuesta no tiene respuestas. Simplemente estos movimientos están excluidos de los episodios contenciosos. Sin embargo, si extiende la teoría a los casos como revoluciones, nacionalismo, procesos democrático etc., pero quedan al margen las autoridades no estatales. Por ejemplo, no incluye ningún conflicto relacionado con el género. Por tanto, tienen que abrir el espacio a las autoridades no estatales.

Por todo ello, para esta investigación se prescinde de esta nueva aportación de TTM por considerarle que constituye un aporte preliminar de una nueva visión que necesita ser revisada cuidadosamente para lograr un carácter dinámico al análisis sociológico del conflicto. Aunque intente demostrar que su aportación más significativa es el análisis dinámico del contexto histórico ya anteriormente se mencionó que otros autores llevaron a cabo un análisis dinámico de determinados hechos mediante la teoría clásica de los movimientos sociales.

En esta misma línea y teniendo estos comentarios en cuenta, se establece la necesidad de relacionar factores culturales con factores estratégicos o estructurales que centra su atención en el origen, desarrollo y desmovilización de los movimientos. Si los recursos organizativos y el contexto político influyen en la evolución de los movimientos sociales, los aspectos identitarios también son necesarios analizarlos porque reconoce las acciones de los actores entre sí mismos y ante otros dentro de un sistema de relaciones sociales. Por eso en este punto se establece un modelo de análisis de los grupos paramilitares que se pregunta por el cuándo, cómo y porqué de la acción colectiva de estos grupos y se fundamenta en las siguientes variables:

1. La estructura de oportunidades políticas, cómo influye el entorno los grupos paramilitares.
2. La estructura de movilización, cómo se organizan los grupos paramilitares.
3. La identidad de la acción y el proceso de enmarcamiento o de creación de marcos, hace referencia a la dimensión cognitiva o ideológica, los elementos culturales de los grupos paramilitares.
4. El repertorio de la acción, la totalidad de los medios de actuación de los demandantes y las autoridades.
5. El ciclo de conflicto, contexto en el que se movilizan los grupos paramilitares.

Por tanto, se aborda el estudio de los grupos paramilitares mediante una metodología basada en la confluencia e interacción de diferentes paradigmas que analizan la acción desde diferentes puntos de vista pero complementarios. En consecuencia y siguiendo a Rucht, la lógica expresiva e instrumental de estos grupos es analizada en un contexto histórico dinámico donde diferentes actores interactúan y se relacionan entre sí.

1.2 Esta investigación

El primer acercamiento a esta investigación fue durante el segundo año del programa de Doctorado en América Latina Contemporánea. En esta ocasión el trabajo de investigación que se realizó para poder obtener el Diploma de Estudios Avanzados permitió obtener un conocimiento general de Colombia desde diferentes puntos de vista y de la situación de los paramilitares. Durante esta investigación preliminar, las fuentes utilizadas respondieron, en su mayoría, a investigaciones realizadas por politólogos y sociólogos especialistas en el análisis y estudio del tema paramilitar y en el contexto colombiano. Entre ellos destaca Eduardo Pizarro, Carlos Medina, Mauricio Romero, Fernando Cubides, Claudia López cuyas monografías y artículos científicos son de importancia relevante para esta investigación. En este estudio fue de gran apoyo para la elaboración del mismo documentos gubernamentales relativos al tratamiento jurídico hacia grupos armados, de autodefensas y paramilitares, así como reportes de asociaciones y centros de investigación, entre ellos Corporación Nuevo Arco Iris, Comisión Colombiana de Juristas, Human Rights Watch, Fundación Ideas para la Paz, Fundación Seguridad y Democracia, IEPRI- Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y CINEP- Centro de Investigación y Educación Popular. Asimismo, el comportamiento electoral regional en las elecciones al Congreso y locales en Colombia, constituye un referente importante para evaluar las alianzas, estrategias e influencia paramilitar en determinadas autoridades públicas. Por ello, una fuente relevante fue el recurso electoral que proporciona información notable sobre comportamientos atípicos en la conformación de distritos electorales. La fuente periodística fue un recurso igualmente preciso en la información relativa al fenómeno paramilitar por los artículos de opinión e investigación que encontramos en los medios colombianos como El Tiempo, Revista Semana y El Espectador. En resumen, se hizo una primera pesquisa de esta investigación apoyada en monografías, artículos periodísticos y de divulgación científica y comportamiento electoral.

Una vez dimensionado el fenómeno paramilitar se trazó un cronograma para investigar este tema en Colombia. El cronograma constó de tres meses en Colombia, de junio a agosto de 2007,

centralizado en Bogotá y en Medellín. La idea era poder realizar entrevistas y conseguir bibliografía especializada en esta temática y que era complicado de adquirir en Madrid.

Las entrevistas se realizaron en función del acercamiento a la temática paramilitar desde diferentes puntos de vistas. Por eso se realizó entrevistas a académicos, políticos, periodistas, fiscales, juristas, funcionarios públicos y desmovilizados de los grupos paramilitares, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como consecuencia de estas entrevistas visité varias instituciones como la Cámara de Representantes de la República de Colombia, el Palacio de Justicia de Antioquia en Medellín, la Comisión Colombiana de Juristas, la Alcaldía de Medellín, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Centro de Investigación y Educación Popular, la Alta Conserjería para la Reinserción, la Fundación Seguridad y Democracia, la Defensoría del Pueblo, la Corporación Nuevo Arcoíris y dos sedes de los periódicos El Tiempo y El Colombiano. Igualmente se visitó la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia para realizar entrevistas a académicos y revisar las fuentes bibliográficas relacionadas con el conflicto armado debido a la escasez de fuentes en España.

Las entrevistas realizadas a académicos especialistas en el conflicto armado y en el fenómeno paramilitar fueron muy fructíferas. Se realizó entrevistas a Camilo Echandía, profesor e investigador del Observatorio de políticas, ejecución y resultados de la administración pública (OPERA) de la Universidad del Externado; Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de 2005 a 2009 y profesor de estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia y actual Embajador en Holanda desde 2011; Fernán González y Teófilo Vásquez, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular en Bogotá; Francisco Leal Buitrago, catedrático emérito de la Universidad de los Andes; Gabriel Murillo y Gustavo Duncan, profesores de ciencia política de la Universidad de los Andes; Manuel Alberto Alonso Espinal, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia; Mauricio Romero, profesor de ciencia política de la Pontificia Universidad Javeriana y Coordinador del Grupo de Trabajo en torno al tema de desmovilización, desarme y reinserción (DDRR) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de 2006 a 2007. La elección de estos académicos fue debida al gran manejo que sobre el conflicto armado y sobre los paramilitares tienen en la actualidad. Algunos de los académicos entrevistados ocuparon puestos importantes relacionados con el proceso de desmovilización paramilitar por lo que su entrevista estuvo un poco más focalizada a su visión dentro del puesto desarrollado. Además la mayor parte

de las preguntas fueron orientadas a la naturaleza jurídica del fenómeno paramilitar, su origen, sus objetivos y definición, la seguridad democrática empleada con ellos y su infiltración en la arena política.

Gracias al senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, y también alumno del Doctorado en Gobierno y Administración Pública de esta Institución, se realizaron varios contactos con senadores colombianos. Además de entrevistar al senador Velasco, se entrevistaron a Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo Democrático Alternativo; Gina Parody, senadora por el Partido Social de la Unidad Nacional; Gustavo Petro, senador por el Polo Democrático Alternativo y actual Alcalde de Bogotá; Jesús Bernal Amorocho, senador también por el Polo Democrático Alternativo y al asesor de la senadora Gina Parody, William Mendieta; Rafael Pardo, exministro de defensa y exsenador por el Partido Liberal. Inicialmente también se encontraba en la lista para entrevistar a Elmer Arenas senador por el Partido Social de la Unidad Nacional y Eduardo Enríquez Maya, senador por el Partido Conservador. Sin embargo ambos declinaron la invitación. Posteriormente fueron investigados por parapolítica. Con las entrevistas a estos especialistas de la arena política se pretendió observar sus opiniones respecto a la llamada parapolítica, es decir, las implicaciones de los grupos paramilitares en el ámbito político, sobre todo en su influencia en las elecciones, en la reforma política y en la ley de bancadas.

Igualmente para ahondar en este tema, se contó con la ayuda de tres periodistas. Entre ellos destaca Salud Hernández, periodista española y columnista de El Tiempo radicada en Colombia desde hace varios años. Su amplio conocimiento del tema y sus múltiples entrevistas a diferentes mandos paramilitares fueron de gran ayuda sobre todo para diferenciar tendencias de diferentes grupos paramilitares, maneras de actuar, de pensar, en definitiva clasificar a determinados grupos paramilitares. Claudia López, cientista política y periodista, actual consultora e investigadora de Naciones Unidas, fue columnista de El Tiempo. Comenzó a ganar notoriedad por sus investigaciones y polémicos artículos sobre parapolítica en El Tiempo y la Revista Semana. Por ello fue fundamental obtener su visión del fenómeno paramilitar y de la parapolítica. Finalmente, Mauricio Pombo, filósofo, periodista y columnista de El Tiempo, dio una visión de la realidad social y cultural colombiana básica y eficiente para entender al paisa, frente al bogotano, el poder, el narcotráfico, el conflicto, la cultura del rebusque etc.

Una ayuda fundamental fue la recibida por los juristas Forian Huber y William Mendieta. Ambos son especialistas en la legislación relativa a las diferentes leyes que se han podido acoger los

grupos paramilitares, como la ley 975 o de justicia y paz y la ley 782. El jurista alemán Huber, investigador de la Comisión Colombiana de Juristas, permitió una visión profunda y compleja de la situación de los grupos paramilitares para acogerse a las diferentes leyes bien por la vía administrativa o por la vía judicial. En el caso de Mendieta, él estuvo al frente junto con los senadores Rafael Pardo, Luis Fernando Velasco y Gina Parody de uno de los proyectos de ley de justicia y paz que se presentaron al Congreso. Su proyecto fue derrotado por el proyecto del gobierno pero Mendieta tuvo la oportunidad de estar dentro de este proceso y observar el resultado y evolución del mismo. En esta misma línea, Ana M^a Quintero, Investigadora de derechos civiles y políticos de la Comisión Colombiana de Juristas, ahondó en este mismo campo temático sobre el proceso de desmovilización paramilitar y el lugar en el que quedan las víctimas.

Para esta investigación se contó con varios funcionarios públicos como Jorge Gaviria, Director del Plan de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín; Patricia Luna, Jefe de la Unidad de Justicia y Paz, de la Defensoría del Pueblo y Darío Villamizar, coordinador del programa de atención a reinsertados en el distrito de Bogotá. En el caso de Gaviria, en su posición de director del Plan, fue fundamental su visión sobre los éxitos y fracasos del plan que dirige para reinsertar a los desmovilizados en la sociedad civil. Se pudo observar los diferentes talleres y acompañamientos que tiene en algunas comunas de Medellín. Del otro lado Luna dio una visión más próxima a la víctima, a los problemas que se derivan de sus denuncias, su desinformación y la duplicidad de funciones por parte de los funcionarios públicos con relación a la situación de la víctima. Villamizar dio una visión sobre el tratamiento del desmovilizado desde Bogotá. Donde explicó las dificultades que tienen los desmovilizados para encontrar trabajo, para percibir un dinero más allá del que el Ministerio les da en los primeros meses pero sobre todo para ser interceptado de nuevo por otros grupos armados.

El apoyo de Villamizar y Gaviria fue fundamental para poder aproximarse a los desmovilizados guerrilleros o paramilitares. A través de Villamizar se pudo obtener la experiencia de dos exguerrilleros de las FARC y del ELN, que se desmovilizaron de manera individual, Jean y Fermín. Ambos se acogieron al proceso de desmovilización de manera individual. Su experiencia pone en conocimiento las debilidades y fortalezas del programa y los miedos por ser interceptados por otros grupos y volver a la lucha armada. Gracias a Gaviria se realizó una aproximación a la estructura que desde Medellín lleva la Alcaldía a través del Programa de Paz y Reconciliación. Este programa conlleva la educación, el acompañamiento psicosocial, apoyo laboral del desmovilizado paramilitar y también el fortalecimiento institucional, el

acompañamiento por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la investigación social del fenómeno. En Medellín, alrededor de 100 jóvenes están trabajando día a día con los grupos desmovilizados paramilitares mediante talleres de capacitación psicosocial, laboral, educando en valores democráticos etc. Se tuvo la oportunidad de presenciar dos talleres en la comuna cuatro, en el barrio de Moravia, con noventa desmovilizados liderados por dos jóvenes capacitadores. En estos talleres se pudo realizar dos dinámicas de grupo con cuarenta y cincuenta desmovilizados cada una. En estas dinámicas se pueden observar diferentes historias de vida durante su ingreso en el grupo paramilitar, su evolución, su relación con diferentes actores y su visión del enemigo así como también el acompañamiento hasta el proceso de desmovilización.

Para tener una mirada más especialista, se consultó a tres fiscales del Palacio de Justicia de Antioquia, en Medellín. Sin poder dar sus nombres, sus conversaciones se centraron en torno al proceso de desmovilización y su función como fiscales dentro de este proceso. La visión compacta de los tres fue unánime al destacar la pobreza material de medios, herramientas para llevar a cabo tan ardua labor de investigación de los crímenes cometidos por los paramilitares y sobre todo con la labor de la víctima en torno a su seguridad y confesión de los hechos.

La mayor parte de las entrevistas duraron entre una hora y tres horas. Se desarrollaron en su mayoría en la Institución del entrevistado como en la Universidad, Cámara de Representantes, Alcaldía de Medellín etc. Pero en otros casos se realizaron en la vivienda particular del entrevistado, mostrando así un interés relevante hacia el tema investigado.

Por último, en Medellín y en Bogotá, se recopiló artículos de publicaciones científicas (nacionales e internacionales), monografías, informes de asociaciones y bases de datos de instituciones como la Corporación Nuevo Arco Iris (Bogotá), la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), la Universidad de Medellín (Antioquia) y la Universidad de los Andes (Bogotá). Asimismo se siguió consultando las obras de la Biblioteca Hispánica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en Madrid y las diferentes fuentes periodísticas colombianas como son El Tiempo, Semana y El Espectador desde el año 2005 hasta 2012.

Esta etapa colombiana fue de gran interés y aprovechamiento para esta investigadora. Poder estar viviendo entre Bogotá y Medellín fue muy fructífero por poder conocer la realidad colombiana frente a diferentes aspectos. La apertura a diferentes instituciones políticas y académicas fue factible gracias a los diferentes contactos que se contó pero en muchos casos en los cuales no se

tenía esta opción, igualmente fue viable debido a la disponibilidad y apertura de los entrevistados a tratar este tema de investigación. Posiblemente confluyó en un contexto propicio para ello pues en el 2007 los grupos paramilitares y algunos guerrilleros de manera individual terminaron por desmovilizarse. Este contexto fue propicio porque tanto las Instituciones como los desmovilizados se enfrentaban a una nueva situación donde tenían que incorporarse los desmovilizados a la situación civil y las Instituciones tendrían que crear todo un engranaje para ello. Por esta razón estuvieron abiertos al diálogo tanto los desmovilizados como las Instituciones.

Capítulo 2. ¿Quiénes son los grupos paramilitares? Composición y evolución

Este apartado trata de responder a la pregunta quiénes son los grupos paramilitares. Para alcanzar este objetivo en primer lugar se expone la revisión bibliográfica sobre la violencia y el paramilitarismo. Posteriormente se examina el concepto de “paramilitarismo” desde el punto de vista teórico y se compara con otros conceptos y experiencias que se usaron en diferentes países. A continuación se presenta las definiciones que cada autor especialista en paramilitarismo ha realizado sobre este actor y se elabora una definición más acorde con la realidad paramilitar.

En la actualidad, la literatura que aborda el estudio del paramilitarismo, ha aumentado desde el inicio del siglo XXI y en particular a partir del proceso de desmovilización iniciado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el año 2003. Abundan los reportajes periodísticos, artículos en publicaciones científicas, monografías, documentos de organismos internacionales, reportes de asociaciones y centros de investigación, en los cuales se recogen información que arroja más luz sobre su origen, difusión y consolidación del fenómeno paramilitar.

Sin embargo, antes de llegar a este momento de tratamiento particular de estos actores, se realiza una revisión que sobre este grupo llevaron a cabo diferentes investigadores enmarcado dentro de un contexto de violencia. Es decir, primero se establece una evolución sobre los estudios que sobre el fenómeno de la violencia se han ejecutado, desde distintas perspectivas dominantes y en diferentes épocas. Pues la evolución de dichos análisis, no siempre lineales, parte de una preocupación por *la violencia y sus causas* en el ámbito nacional, dirigiendo la mirada hacia una única causa que ha predominado en la explicación de la violencia en Colombia.

2.1 La interpretación de la violencia en Colombia: su dimensión histórica

Una extensa bibliografía analiza las principales causas que provocaron la violencia en Colombia desde diferentes perspectivas teóricas. Algunos autores consideran que bajo sus planteamientos pueden explicar todos los aspectos que definen la violencia. Estos autores proponen realizar una revisión mediante fenómenos globales o estructurales. Otros autores enfatizan los diferentes tipos de violencias y los factores culturales subrayando la importancia de proporcionar una solución para cada tipo de violencia. Por último, algunos que realizan investigaciones sobre determinadas regiones consideran que los fenómenos violentos pueden esclarecerse desde dinámicas regionales. A continuación se exponen las diferentes teorías que han pretendido explicar el fenómeno de la

violencia en Colombia. Para ello, se parte, como referencia, de la obra de Malcolm Deas y Fernando Gaitán *Dos ensayos especulativos de la violencia en Colombia* (FONADE, Colombia, 1995). Esta obra supuso el esfuerzo más valorado por sistematizar las aproximaciones que sobre la violencia en Colombia realizaron los analistas y estudiosos del tema durante los periodos violentos anteriores a la violencia de los cincuenta y hasta la violencia actual. En esta obra las teorías explicativas de la violencia se dividen en *teorías estructurales* y *teorías multicausales culturalistas*. En nuestro caso y debido a la limitación temporal de la investigación, nos referiremos a las teorías que explican la *violencia actual*.

Las *teorías estructurales* se caracterizan por encontrar en cualquier tipo de estructura institucional, económica, social, política o legal, la causa básica de la violencia en Colombia. En esta misma lógica, las *teorías económicas institucionales* hacen referencia a la existencia de circunstancias económicas y debilidades institucionales como factores causales de la violencia. En esta línea teórica destaca tres planteamientos: los planteamientos derivados de la filosofía del *Plan Nacional de Rehabilitación*¹³, la Coordinadora guerrillera y Partido Comunista¹⁴ y, por último, la aportación del analista Libardo Sarmiento¹⁵ (Deas y Gaitán, 1995: 133-139).

Una segunda perspectiva la proporciona la *teoría socioinstitucional* que determina como factores causales de la violencia las relaciones sociales y el funcionamiento o tipo de Estado. En esta línea, destaca la contribución del experto Daniel Pecaú (1987). Pecaú considera que la violencia actual se encuentra relacionada con la precariedad del aparato estatal -fragilidad de la unidad nacional y de los mecanismos de institucionalización de la esfera política y de las relaciones sociales- unido a la desaparición de las identidades colectivas¹⁶. Del mismo modo Salomón Kalmanovitz (1989)

¹³ La filosofía del Plan Nacional de Rehabilitación parte de la ineficiencia del modelo de desarrollo en las regiones más pobres, limitación de la participación ciudadana y la falta de credibilidad de los habitantes rurales en el Estado.

¹⁴ Ambas líneas coinciden en señalar que la violencia se inició por las luchas bipartidistas en 1948 debido a desacuerdos políticos y el forzamiento de una redistribución de la tierra por medio de la violencia. La injerencia de los norteamericanos, las luchas políticas del bipartidismo y las injusticias sociales y económicas agravaron la situación y desataron la guerra.

¹⁵ Libardo Sarmiento considera, en su obra en colaboración con el Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, *Pobreza, violencia y desigualdad: retos para la nueva Colombia* (PNUD, Colombia, 1991), como factores fundamentales, las desigualdades económicas y el modelo de desarrollo. Asimismo, subraya que el modelo social colombiano con sus profundas desigualdades y la permanente concentración de riqueza, ha profundizado los fenómenos de pobreza y violencia.

¹⁶ Pecaú considera como elementos que determinan las identidades colectivas la pérdida de influencia de la Iglesia católica como instancia de mediación y sociabilidad; la transformación de la educación en el ámbito rural y urbano y los cambios en los patrimonios familiares- enfrentamiento entre antiguas clases acomodadas y de nueva creación, basada en actividades ilícitas.

apunta a un choque de valores¹⁷, consecuencia del freno del proceso de modernización y de desarrollo del capitalismo, como factores explicativos de la violencia colombiana. En relación con este punto de vista, Fernán González (1993) enfatiza la pugna entre lo moderno y premoderno en el plano de las instituciones, los valores y las relaciones sociales¹⁸.

Aunque en los anteriores autores, el narcotráfico es un elemento catalizador de la violencia de la década de los ochenta, Jonathan Hartlyn (1993) considera que es precisamente este fenómeno el factor fundamental de la violencia actual. Aunque afirma la importancia de las debilidades del régimen político, las serias carencias del sistema judicial y los cambios en el plano social, subraya que el narcotráfico aceleró e incrementó la violencia e hizo difícil y más violentos los intentos de apertura política.

Finalmente, la última visión adscrita a las teorías estructurales, *la teoría institucional*, hace referencia a la apertura del Estado a los grupos sociales y partidos políticos diferentes del liberal y conservador como elementos indispensables en la explicación de la violencia de los ochenta. Entre los autores más destacados que se adhieren a esta perspectiva destacan Francisco Leal Buitrago (1991), William Ramírez (1990) y Eduardo Pizarro (1989). Estos autores consideran como origen de la violencia la exclusión constitucional del Frente Nacional¹⁹ (Deas y Gaitán, 1995: 154-157).

En conclusión, las teorías estructurales proponen un modelo explicativo global de la violencia en Colombia. Por lo tanto según esta teoría, el surgimiento de actores violentos, grupos de guerrilleros y paramilitares, involucrados en la violencia de los ochenta, puede ser explicado desde la perspectiva estructural institucional, ya sea desde el plano económico, social o político o legal.

¹⁷ Salomón Kalmanovitz señala que los valores tradicionales que entran en contradicción con los nuevos valores son aquellos que se basan en el autoritarismo, el dogma religioso, lo hispánico, la caridad, el machismo y la educación sadista. Los valores nuevos o modernos que apuntan el autor y que explican la violencia actual mediante la confrontación con los antiguos valores son las aspiraciones democráticas, la racionalidad, el materialismo, lo norteamericano, el triunfo por el mérito personal, el respeto al individuo, el desarrollo integral del niño, etc.

¹⁸ En el plano institucional, la iglesia y los partidos suplieron al Estado y se convirtieron en su presencia en las regiones más aisladas. La relación entre ambos es personal y basada en lealtades, no en aquellos elementos en los cuales se basan las relaciones modernas: racionalidad e impersonalidad. La vida social se privatiza sin el control y la protección del Estado.

¹⁹ Adicionalmente Leal apunta que el bipartidismo y su manera de control a través del clientelismo hizo perder legitimidad al sistema. Por tanto el mayor obstáculo es la organización del bipartidismo en su papel de administrador monopólico de las instituciones del Estado. La aportación que ofrece W. Ramírez versa sobre el régimen político colombiano que concentra las oportunidades económicas y políticas en pocas manos. De esta cuestión deduce que la violencia guerrillera era para obtener participación económica y social. En último lugar, Eduardo Pizarro hace hincapié en el carácter excluyente de la democracia como causa básica de los conflictos violentos. Señala como ingredientes claves la elite dominante, el clientelismo regional, el poder oligárquico y la lenta modernización política.

Sin embargo, estos estudios sobre la violencia se caracterizaban por incidir en reflexiones unidas a la idea de conferir preponderancia a la dimensión política de la violencia, tomando como punto de partida las estrategias gubernamentales. Por su parte, Camacho y Guzmán (1986) señalaron por primera vez una nueva perspectiva sobre la violencia, su carácter multidimensional. En esta línea un grupo de destacados investigadores, a solicitud del gobierno nacional en 1987, llevaron a cabo un informe donde plasmaron sus opiniones con relación a la violencia en Colombia²⁰. Este grupo de intelectuales denominados “violentólogos” fueron los primeros que comenzaron a estudiar las causas objetivas de la violencia en Colombia. Dicho grupo fue presentado como la *Comisión de Estudios sobre la Violencia*. La Comisión estableció una crítica feroz a la visión que hasta ese momento consideraba a la violencia como fundamentalmente política y con origen en las condiciones de pobreza de la población. Por ello, destacaron las diversas formas de violencia, la diferenciación de actores involucrados y el carácter negociable o no que puede asumir la violencia²¹ (Gaitán, 1995: 162-164; Guzmán, 1990: 43). Teniendo esto en cuenta, la Comisión estudió las particularidades de la violencia y su expresión a través de la sociedad. Apuntaron varios tipos de violencia: violencia política, violencia urbana, violencia organizada, violencia contra minorías étnicas, violencia transmitida a través de los medios de comunicación y violencia familiar. La relevancia del informe presentado por la Comisión amplió las perspectivas de análisis de la violencia colombiana, permitiendo enfocar dicho estudio hacia otros campos de acción donde ésta se hacía presente.

Esta nueva orientación, iniciada con las aportaciones de Camacho y Guzmán (1990) y la Comisión, provocó una nueva teoría para analizar la violencia colombiana, la *teoría multicausal culturalista*. Este enfoque propone que la violencia es el resultado de violencias diferentes con dinámicas propias. Adicionalmente incluyeron un nuevo factor a considerar, *la cultura*, como elemento explicativo. Ambos autores concluyeron que la investigación parte de campos diferenciados como el económico, el político y el social, para posteriormente analizar la relación existente entre cada área y entre éstas y la estructura total. Pero incluso, estos investigadores

²⁰ Arocha R., Jaime; Camacho G., Álvaro; Fajardo M., Darío; Andrade A., Luis Alberto; Jaramillo, Carlos Eduardo; Ortiz S., Carlos Miguel; Peláez V., Santiago; Pizarro L., Eduardo (1987): Colombia. Violencia y democracia: informe presentado al Ministerio de Gobierno, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

²¹ La Comisión sostiene que los últimos gobiernos han concentrado su atención en la violencia política y en el narcotráfico, mientras que han mirado con cierta indiferencia el crecimiento alarmante de las otras modalidades de violencia que, en su conjunto, generan un porcentaje mucho mayor de víctimas y están afectando profundamente la vida diaria de los colombianos. Para más información puede consultarse la obra relacionada al respecto: Comisión de Estudios sobre la Violencia (1988): *Colombia: violencia y democracia*. Bogotá. Citado por Fernando Gaitán en *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia* (Tercer Mundo Editores, Colombia, 1995), p.163.

subrayaron que pueden incorporarse otros elementos al estudio de la violencia como el despilfarro de las bonanzas de la década de los setentas, la política represiva de Turbay, la apertura de Betancur y el surgimiento del paramilitarismo y narcotráfico (Deas y Gaitán, 1995: 160-162).

A parte de estas consideraciones sobre la violencia, en los últimos años se viene desarrollando la relación de la violencia con otros ámbitos y aspectos que inciden en una mayor profundización de este fenómeno y en una aproximación desde otras perspectivas. Entre ellas sobresalen las relaciones entre el universo jurídico y ético y, la violencia. En esta línea se distinguen las aportaciones de Malcolm Deas y Fernando Gaitán (1995), Armando Montenegro (1994) y Carlos Esteban Posada (1995), quienes establecieron como elemento prioritario de explicación la quiebra de la justicia en Colombia como principal causa de la violencia. Esta quiebra de la justicia permitió el surgimiento del narcotráfico y el apoyo popular a la guerrilla (Deas y Gaitán, 1995; Montenegro y Posada, 2001). Igualmente, Iván Orozco en *Combatientes, guerreros y terroristas: guerra y derecho en Colombia* (IEPRI, Bogotá, 1992), esclarece los vínculos entre la violencia y la normatividad jurídica, aclarando los diversos tipos de “rebelión” de acuerdo con las circunstancias (Pecaut, 1998: 67).

Otra aportación interesante es la explicación de la violencia a la aproximación desde la dinámica regional, relacionando la violencia y los conflictos sociales bajo la óptica regional de los fenómenos de violencia. Dentro de este ámbito despuntan diferentes aportaciones, entre ellas la relación entre conflicto agrario y violencia, de la mano de Alejandro Reyes (1988, 1989) ó las relaciones entre los movimientos urbanos y la violencia llevada a cabo por Luis Alberto Restrepo (1991). Abundan los estudios monográficos regionales como el realizado por Ana María Bejarano (1988) sobre Urabá. En esta aproximación cabe mencionar los análisis sobre minorías étnicas, indígenas y negras que recogen las obras de Jaime Arocha (1979), Christian Gros (1991), entre muchos otros.

A finales de la década de los noventa, Pecaut señaló que un aporte esencial al fenómeno violento en Colombia fue la modificación del “ángulo de análisis partiendo del impacto de la violencia sobre la sociedad, de sus fragmentaciones provocadas por las redes de protagonistas armados y del nuevo contexto engendrado por las estrategias de los mismos” (Pecaut, 1998). Asimismo, varios investigadores se preocuparon por las consecuencias de la violencia. Algunos de ellos indagaron sobre los costos de la violencia en términos de capital físico y humano y se demostró

que la violencia y la criminalidad estaban produciendo pérdidas sustanciales de capital. Entre los investigadores que apoyaron esta tesis desatacaron Mauricio Rubio (1999) y Luis Jorge Garay (1997) coordinador de *Estudio sobre costos económicos de la guerra en Colombia* para el proyecto financiado por el DNP y IEPRI *La Paz es rentable*. En la misma línea se sitúa la obra de Pecaut *Guerra contra la sociedad* (Planeta, Bogotá, 2001), muestra como la sociedad resulta desmembrada y desorganizada como efecto de la violencia.

Asimismo, en la literatura sobre la violencia abunda aquella relacionada con el desastre humanitario que constituye el desplazamiento interno y externo de colombianos. Esta temática ha sido tratada por diferentes autores, entre ellos Jaime Zuluaga (2004), Martha Nubia Bello (2004) o el proyecto llevado a cabo por la Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos- CODHES- sobre el desplazamiento colombiano en 1999²².

De igual manera constituye una aportación interesante la presentada por aquellos autores que analizaron el papel de la sociedad civil como actores relevantes en el conflicto colombiano y en el proceso de paz. Destaca las aportaciones de M^a Eugenia Querubín (1998), Luis Sandoval (2001) y Jesús Bejarano (1999), entre otros.

Esta nueva aportación reflejaba el cansancio de la sociedad ante las consecuencias que el conflicto provocó en los colombianos para concienciar del peligro que genera una población desorganizada. De ahí que varios analistas como los mencionados se postularon como los abanderados para denunciar el desastre humanitario que está teniendo lugar.

En último lugar destaca la literatura relacionada con la violencia hace hincapié en los actores - institucionales, armados y sociales-. Entre ellos inciden los análisis de las *organizaciones guerrilleras, narcotraficantes y fuerza pública*.

Numerosos son los estudios que sobre la guerrilla se han realizado, entre ellos destacan aquellos que proporcionaron una visión histórica sobre la formación de grupos guerrilleros, entre los autores que se alinearon a este enfoque sobresalió Alejo Vargas en "The Government and the ELN-Two Discourses that Don't Meet," *Accord. An International Review of Peace Initiatives*, 14

²² Este proyecto denominado *Un País que Huye, Desplazamiento y Violencia en una Nación Fragmentada*, fue financiado por CODHES y UNICEF en 1999. Puede disponer de esta investigación a través del siguiente enlace electrónico <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/despl/>

(2004). Igualmente Jaime Zuluaga estableció una visión histórica del M-19 en "De Guerrillas a Movimientos Políticos: Análisis de la Experiencia Colombiana: El Caso del M-19" en Ricardo Peñaranda y Javier Guerrero, (eds.), *De las Armas a la Política* (TM Editores-IEPRI, Bogotá, 1999). Otros estudiosos abordaron este tema desde otra perspectiva como Eduardo Pizarro (1987, 1991, 1996), Alejandro Reyes y Restrepo los cuales abordaron el tema de las transformaciones del patrón de asentamiento de la guerrilla en función de recursos estratégicos y del gran potencial económico. Algunos investigadores, realizaron un análisis con detenimiento en las estrategias del M-19, como por ejemplo Ramírez Tobón (1989) (Pecaut, 1998: 67).

Respecto a las obras sobre narcotráfico se dividen en tres explicaciones. Por un lado varios artículos, como los elaborados por Alejandro Reyes (1989), muestran la difusión geográfica del fenómeno. Por otro lado los estudios de Álvaro Camacho (1996) muestran su impacto en las relaciones sociales. Y, en último lugar los artículos de Ciro Krauthausen y Fernando Sarmiento (1991) analizan la economía de la droga (Pecaut, 1998: 67).

Los estudios sobre los actores de la fuerza pública, destacan los artículos publicados en la revista del IEPRI *Análisis Político* de Eduardo Pizarro (1988) y Leal Buitrago (1991) sobre las fuerzas armadas y su relación con el poder civil, su autonomía e ideología. Este último investigador, Leal Buitrago, retoma este tema en su libro *El oficio de la guerra: la seguridad nacional en Colombia* (Tercer Mundo-Universidad Nacional, Bogotá, 1994), en donde analiza la cuestión militar en Colombia desde los comienzos del Frente Nacional en 1958 hasta el gobierno de Cesar Gaviria (1993). Una nueva revisión del papel del Ejército así como una redefinición de la seguridad nacional es realizada por Francisco Leal Buitrago en *La Seguridad a la Deriva – Del Frente Nacional a la Posguerra Fría* (Alfaomega / Ceso-Uniandes / FLACSO –Sede Ecuador, Bogotá, 2002). Álvaro Camacho también se adentra en el análisis de los actores de la fuerza pública, más especialmente en la reforma de la policía como expuso en "La reforma de la policía: realidades inmediatas y objetivos estratégicos" en *Análisis Político* 19, mayo-agosto 1993.

2.2 Origen y evolución del paramilitarismo colombiano

Una vez realizada la revisión bibliografía sobre la violencia, se revisa la bibliografía específica sobre la cuestión paramilitar.

Desde la década de los años ochenta comenzaron las investigaciones que resaltaban un cierto interés por la temática paramilitar. Desde una aproximación general, las investigaciones eran incipientes e inauguraban el estudio y la preocupación de la complejidad por un fenómeno violento que comenzaba a hacerse visible en la sociedad colombiana. Posteriormente, las obras relacionadas con este campo de investigación se desarrollaron más en profundidad, por una parte por el aumento de las fuentes de información y la apertura de los investigadores hacia este tema. A partir de ese momento se abrieron nuevas perspectivas de análisis del fenómeno paramilitar. Los investigadores comenzaron a analizar el fenómeno desde un contexto puntual ayudado por la historia y sociología regional que examinaron las estructuras de estos grupos, sus relaciones con otros actores e instituciones, etc. Algunos analistas se centraron en los periodos de crecimiento y desarrollo del paramilitarismo. Otro aspecto documentado son las relaciones del paramilitarismo con la industria del narcotráfico o la visión del paramilitarismo bajo la perspectiva de creación de grupos de seguridad privada bajo el control de empresarios, terratenientes y con ayuda de las fuerzas militares como defensa ante el ataque de la guerrilla.

Para obtener una mayor comprensión de las aportaciones y debilidades de las obras relacionadas con el paramilitarismo, se expone una revisión de determinadas obras que han influido en una mayor comprensión del fenómeno paramilitar. Las obras expuestas constituyen las aportaciones que sobre el fenómeno paramilitar han sido más relevantes por el nivel de información que contienen, el tratamiento hacia los actores armados y por las perspectivas de análisis expuestas.

Entre estas primeras aportaciones destacaron aquellas obras que enfatizaron su análisis bajo *una perspectiva historicista la debilidad del Estado como marco de arranque de estos grupos de seguridad privada o grupos paramilitares*. Ante la inseguridad e incapacidad de enfrentamiento del Estado hacia otros grupos de poder, se hizo legítima la creación de grupos privados que contrarrestaron su inhabilidad de controlar el monopolio de la fuerza. Es decir, se utilizó al paramilitarismo como un instrumento de guerra sucia del Estado para combatir la insurgencia que posteriormente fue reutilizado por el narcotráfico.

Entre los autores que se adhieren a esta perspectiva destaca Carlos Medina Gallego (1990) y Jorge Orlando Melo (1991). El historiador colombiano Carlos Medina Gallego bajo su obra *Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación. El caso “Puerto Boyacá”* (Editorial Documentos Periodísticos, Bogotá, 1990) aborda el estudio del fenómeno narcoparamilitar desde una perspectiva histórica haciendo hincapié en los orígenes de dicho

grupo con sus particularidades económicas. Resalta la incapacidad institucional del Estado para resolver las dificultades internas y establecer el control social que le lleva a crear formas parainstitucionales de violencia promovidas y organizadas desde los organismos estatales y financiadas por los gremios económicos. Articula el surgimiento y la consolidación del paramilitarismo al conflicto de la propiedad de la tierra y la colonización y a la formación de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio, ACDEGAM. Su estudio es una de las mejores aportaciones sobre el paramilitarismo a principios de los años noventa. En una obra posterior, este mismo autor analiza más en profundidad este fenómeno desde una perspectiva histórica y sociológica, junto a la socióloga Mireya Téllez. Bajo el título *La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia* (Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 1994) desarrolla una sistematización histórico-conceptual que contribuye a construir una tipología de las manifestaciones sobre la violencia ejercida por este grupo identificándoles como: paramilitares, autodefensas, narcoparamilitares, narcoterroristas, grupos de justicia privada, escuadrones de sicarios, etc., para una mayor comprensión del fenómeno y mejor tratamiento académico y político. Define la violencia parainstitucional como aquella expresión específica del terrorismo de Estado como medio para asegurar su estabilidad y así, aniquilar mediante el uso privado de la fuerza, a sus potenciales enemigos. Ambos autores realizan un recorrido sobre las formas de violencia parainstitucional desde la época de la Violencia hasta los años noventa en determinadas regiones colombianas como son Boyacá, Urabá, Córdoba, Magdalena Medio Santandereano, entre otras.

Un segundo escrito que aborda el fenómeno paramilitar, desde la perspectiva señalada, corresponde al autor Jorge Orlando Melo dentro de la compilación realizada por Francisco Leal Buitrago *Al filo del caos: crisis política en la Colombia de los años 80* (IEPRI-Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991). Bajo el epígrafe “Los paramilitares y su impacto sobre la política”, toma como punto de partida el debilitamiento creciente del monopolio estatal de la fuerza y el auge de grupos de seguridad privada que mediante sus redes y su consolidación limitan la autonomía del mismo Estado. Establece un análisis de los antecedentes de estos grupos, los elementos que los definen, el carácter de sus lazos y de sus enfrentamientos con el Ejército y el Estado y, por último, las políticas gubernamentales aplicadas a los paramilitares. Ofrece una panorámica general del predominio e influencia de estos actores en la sociedad colombiana bajo una perspectiva historicista.

Uprimny y Vargas²³ también llegan a la conclusión que el paramilitarismo es una consecuencia del fraccionamiento del régimen político como de la irrupción del narcotráfico. Reducen el paramilitarismo a la guerra sucia del Estado.

Estas aportaciones toman como punto de origen la debilidad estructural del Estado y desde ahí enlazan esta tesis con la estructura y desarrollo de estos grupos hasta los años noventa. Sin embargo esta perspectiva recuerda a aquellas aportaciones de los años ochenta que buscaban la causalidad del fenómeno en sí, más que el entramado mismo de acción de estos grupos. En este sentido, esta aportación es importante siempre que se toma como una variable más del grupo violento en estudio y, examinar, otros elementos relacionados con este campo, considerando otras variables destacables como el tiempo y el espacio, así como, la dinámica cambiante de actuación de los actores armados, institucionales y sociales.

Otro grupo de aportaciones a la literatura paramilitar es aquella que analiza las estrategias de estos grupos y sus alianzas locales y regionales. En estos estudios se dan prioridad a los estudios regionales y las alianzas con los actores locales y regionales. Esta aportación refleja un acercamiento a las articulaciones del paramilitarismo con el Estado y el narcotráfico así como a preguntarse acerca de la persistencia de este fenómeno. Entre los autores destaca Mauricio Romero, politólogo e investigador del IEPRI, que expone en *Paramilitares y autodefensas 1982-2003* (IEPRI, Bogotá, 2003) una aproximación al fenómeno paramilitar desde la disciplina sociológica, partiendo del análisis de las *oportunidades políticas*. Romero destaca como oportunidades las elecciones de gobernadores y acaldes, la descentralización, la reforma política de la Constitución de 1991, que amplió la participación social, y los procesos de paz con las guerrillas, como momentos claves para la aparición de estos grupos. Esta aproximación hace hincapié en contextos políticos claves que posibilitan el surgimiento de estos actores y por lo tanto añade otra dimensión a la complejidad del fenómeno paramilitar. En este contexto analiza el monopolio de la coerción como un elemento no inherente al Estado y que corresponde a un proceso histórico. Por tanto, en Colombia y teniendo en cuenta los procesos históricos, la autoridad sobre el monopolio de la coerción era cambiante por la competitividad de diferentes actores por él. Así, en el caso del paramilitarismo, el aparato armado paraestatal fortalece identidades locales y regionales en contra de identidades estatales. El tratamiento realizado a los paramilitares constituye también una nueva visión al referirse a ellos como *violent entrepreneurs* ó *empresarios de la*

²³ Uprimny, Rodrigo; Vargas, Alfredo (1990): “La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra sucia en Colombia” en Palacio, Germán (comp.): La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana. Bogotá, ILSA-CEREC

coerción, el cual hace referencia al individuo especializado en administración, despliegue y uso de la violencia organizada, la cual ofrece como mercancía a cambio de dinero u otro tipo de valores. Este tratamiento utilizado demuestra la perspectiva del tipo de organización paramilitar. Sin embargo, en esta obra Mauricio Romero, se centra más en el análisis de las oportunidades políticas de estos grupos que en un análisis más detallado de la estructura de los grupos paramilitares a pesar de que desarrolla un nuevo concepto de empresarios de la violencia, de la coerción. En ese sentido, su propuesta de *violent entrepreneurs* queda mencionada, expuesta pero no analizada con detenimiento. Queda fuera de este análisis el estudio de los diferentes grupos que componen la entramada red de paramilitares, la autonomía de cada grupo, sus fricciones, sus alianzas con la elite regional, la Fuerza Pública o la Fiscalía.

Otra manera de entender y aproximarse al fenómeno paramilitar dentro de la perspectiva sociológica es mediante la teoría de la organización de la mano de F. Cubides con su obra *Burocracias armadas. El problema de la organización en el entramado de las violencias colombianas* (Editorial Norma, Bogotá, 2005). La novedad de este investigador es dotar a los grupos armados (guerrillas y paramilitares) y ejército, de características organizacionales, estructuras de poder jerarquizadas y reglamentadas. Según Cubides, son una estructura de poder, una estructura de dominación adaptada a las circunstancias cambiantes a las que se enfrentan. Sin embargo, el autor deja por escrito la escasez de pruebas empíricas para corroborar sus planteamientos iniciales, por lo tanto las variables identificadas en el estudio de las organizaciones tales como la identificación de los objetivos, las estrategias para alcanzarlo, tipo de liderazgo, estructura de autoridad, reclutación de los miembros, no son identificadas empíricamente para comprender la dinámica de estas organizaciones.

En el estudio del paramilitarismo se hace indispensable la aportación de Juan Carlos Garzón. Dentro de la obra de Cubides anteriormente señalada, Garzón mediante su capítulo *La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica*, examina el fenómeno paramilitar desde un análisis estratégico de los grupos paramilitares, teniendo en cuenta sus distintas estructuras, la manera de operar, su dispositivo en las regiones, la zona de mayor interés, la confrontación con las Fuerzas Armadas del Estado y la disputa con los grupos insurgentes y su relación con el narcotráfico. La intención del autor es establecer la interacción entre los diferentes actores armados y sus efectos sobre el conflicto armado, teniendo como eje central la organización paramilitar. Esta línea de estudio recuerda a aquella efectuada por Alejandro Reyes Posadas (1991), el cual enfatiza el análisis estratégico de los actores como línea de investigación. Garzón presenta una investigación

más completa y compleja por el nivel de información obtenido, por la interacción de diferentes factores, por los diferentes momentos históricos claves en los que se da una variación del fenómeno paramilitar²⁴ y por las consecuencias explicitadas de la acción paramilitar.

En esta misma línea destaca la colaboración de Fernando Cubides (1998) quien estudia la dimensión territorial y el discurso de construcción de identidades de estos actores. Señala que los grupos paramilitares se extienden a zonas no controladas por el gobierno y que la mayor parte de tierras controladas por los narcos tienen presencia paramilitar. Define a los paramilitares como agentes organizadores de violencia.

Los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Teófilo Vázquez, Fernán González e Ingrid Bolívar, desarrollan un conjunto de investigaciones que recogen en *Violencia política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado* (CINEP, Bogotá, 2006). Analizan la historia del país mediante la configuración del Estado pero presentando especial atención a la sociedad, la dimensión espacial, la ocupación de territorio, las formas de cohesión social y la articulación de los poderes locales de estos territorios con el poder nacional a través de los partidos políticos y los imaginarios de identidad. Examinan las fases del desarrollo de los grupos paramilitares y observan el fenómeno paramilitar como un proyecto político, social y económico con alcances nacionales y diversidades regionales “al vaivén de las coyunturas políticas, de la interacción con sectores sociales determinados y con respecto a las políticas públicas” (Vázquez, González, Bolívar, 2006). Definen a estos grupos como irregulares del Estado en cuanto a actores a nivel nacional y simultáneamente constituyen una modalidad de dominación regional mediante el gamonalismo armado. Con estas definiciones se refieren a que los paramilitares suplen las funciones del Estado proporcionando seguridad y que en su expresión regional son el resultado de una alianza de intereses entre elites locales, hacendados, narcotraficantes y algunas instancias del Estado colombiano como las Fuerzas Militares, en su nivel regional y local.

En esta misma línea destacan los trabajos regionales del paramilitarismo sobre Medellín, Magdalena, Cundinamarca, Bogotá, Meta, Córdoba, Casanare y territorios indígenas como el de los wayú (Rozema, 2007; Ochoa, 2011; Ramírez, 2007; Alonso, Giraldo y Sierra, 2007; Zúñiga,

²⁴ J. C. Garzón acoge como término que describe los momentos claves históricos, aquella denominación que utiliza Eric Lair como *rupturas estratégicas*, en “Transformaciones y fluidez de la guerra en Colombia: un enfoque militar”, en Gonzalo Sánchez, Eric Lair (2004): *Violencia y estrategias colectivas en la región andina*. Editorial Norma, IEPRI, IFEA. Bogotá.

2007; Pérez, 2007; Guzmán y Moreno, 2007; González, 2007; Cepeda y Rojas, 2008). Sin embargo, son escasos los trabajos sobre la regionalización del paramilitarismo, pues la mayor parte de ellos analizan el fenómeno paramilitar desde una perspectiva general, ahondando muy poco en las diferencias regionales de este fenómeno.

Estas visiones proporcionan una nueva aportación al estudio del paramilitarismo desde el punto de vista de las estrategias y las alianzas regionales. Una vez que en 1997 se declaran como el tercer actor del conflicto, los analistas se empiezan a preocupar sobre la autonomía del paramilitarismo respecto del Estado.

Algunos autores piensan que el paramilitarismo es totalmente autónomo del Estado porque piensan que entre las instituciones del Estado y estos actores no hay vínculos porque el desarrollo que ha tenido el paramilitarismo le lleva a la criminalidad organizada y porque provee seguridad a la sociedad frente a la incapacidad del Estado.

En esta línea destaca la obra editada por Alfredo Rangel, economista y politólogo colombiano y director de la Fundación Seguridad y Democracia, *El poder paramilitar* (Ed. Planeta, Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá, 2005). Esta obra supone el esfuerzo de varios analistas sobre el estudio del fenómeno paramilitar. Cuenta con la colaboración del sociólogo e historiador William Ramírez Tobón, los politólogos Juan Carlos Garzón y Stathis Kalyvas, los economistas Ana Arjona y Fidel Cuellar Boada y, por último, el sociólogo y politólogo Fernando Cubides. Estas colaboraciones imprimen al estudio sobre el fenómeno paramilitar una aproximación desde diferentes ángulos. Este ensayo indaga las causas y los factores que dan lugar a estos actores armados. La tesis que se sustenta en este ensayo considera que el paramilitarismo es el resultado de una crisis política y militar del Estado Colombiano, del auge de la guerrilla y de la persistencia del narcotráfico. Así, su crecimiento es exponencial tanto en número de hombres como en cubrimiento territorial. En el prólogo de la obra, Rangel señala que los grupos paramilitares tienen cinco características: son contrainsurgentes, civiles, autónomos del Estado, fuertemente penetrados por el narcotráfico y con estructuras muy complejas. En esta obra, William Ramírez explica en su capítulo sobre Autodefensas y poder local que las autodefensas no son órganos paramilitares porque sus decisiones tácticas y estratégicas no están linealmente condicionadas desde los centros de decisión militar del Estado. Según Ramírez tienen concepciones políticas autónomas, de líneas de mandos propias, de tropas distinguidas por nombres, emblemas y uniformes, de recursos con orígenes independientes y gastos de destinación discrecionales.

Define a las AUC como una organización militar contrainsurgente con fines paraestatales, con visión reformista y crítica del Estado que reclaman reformas políticas, urbana, agraria y judicial, modelos de desarrollo económico, de descentralización y de orden territorial, reestructuración de las Fuerzas Militares.

Otros autores como Vilma Franco (2002) y Gutiérrez y Barón (2006) matizan la autonomía de los paramilitares respecto del estado. Vilma realiza una reflexión conceptual de los paramilitares. Según ella los define como un complejo contrainsurgente y mercenarismo corporativo. Son unos actores que además del perfil militar participaban como actores estatales, elite política. Su objeto es buscar la integridad institucional, el poder político y la hegemonía. Respecto al mercenarismo corporativo implica que depende del aparato estatal pero también de sectores corporativos privados. Por otro lado Gutiérrez y Barón muestra la historia del paramilitarismo en Boyacá. Ellos determinan que desde su origen están apoyados por ganaderos, políticas gubernamentales y miembros del gobierno. Aunque son aliados en la lucha insurgente, son enemigos por la relación de los paramilitares con el narcotráfico (Cruz, 2007)

En este sentido, Tron Tjodal también matiza el enfoque autónomo respecto del Estado en Las verdaderas intenciones de los paramilitares (Ed. Intermedio, Bogotá, 2002). Para Tjodal los paramilitares se convierten en autónomos del Estado en la medida que no tienen relaciones con las instituciones estatales (Cruz, 2007).

Esta nueva perspectiva pone de manifiesto las relaciones de los grupos paramilitares con el Estado, atisbando las complejas y múltiples relaciones de estos grupos con el Estado y otros actores.

Otra perspectiva de análisis es la relación entre estos grupos, el narcotráfico y otras fuentes de financiación. En la literatura reciente Medina Gallego (2005) realiza un análisis exhaustivo de las diferentes formas de financiación de los grupos paramilitares. Diferencia distintas fuentes de financiación, entre ellas las fuentes tradicionales (contribuciones voluntarias y forzadas de la población así como de los sectores económicos y sociales como ganaderos, agricultores, comerciantes y empresarios), institucionales (alcaldes, concejales, gobernadores y diputados), gremiales y empresariales (organizaciones ganaderas y agrícolas como Federación Colombiana de Ganaderos –FEDEGAN- y Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC-), proscritas y productivas (el narcotráfico, el secuestro extorsivo, la intimidación y expropiación violenta, la

piratería terrestre y el robo de gasolina, de combustible y de vehículos). Con estas nuevas averiguaciones, algunos de los investigadores piensan que su objetivo es la acumulación de rentas y que el supuesto objetivo político está subordinado al económico. En esta línea Pizarro (2004) comenta que los paramilitares se diferencian por su autonomía financiera gracias a los recursos del narcotráfico. Camilo Echandía resume que los paramilitares no tienen una agenda política, que eran un grupo asociado al narcotráfico y que el propósito artificioso de mostrarse como una unidad política es por cuestiones relacionadas con la negociación de la desmovilización²⁵. También Nazih Richani (2003) subraya la idea de la búsqueda de rentas hasta llenar el vacío que dejaron los carteles de la droga. Gustavo Duncan (2005) apunta que el fenómeno paramilitar se introduce en los gobiernos mediante redes mafiosas a través del financiamiento de las campañas de candidatos, la intimidación e incluso el trabajo social en comunidades excluidas. Por tanto, las redes tradicionales clientelistas, producto de un intercambio por ganancias personales o de grupos específicos, son suplantadas por los paramilitares, es decir, los paramilitares protegen las transacciones de bienes determinados en una sociedad. Según Duncan hay tres tipos de células o nodos que regularon las transacciones: las que se encargan del crimen, de las empresas y de las instituciones públicas.²⁶ En este sentido Pizarro también afirma que los paramilitares crean estructuras políticas de carácter mafioso no tanto por aspiraciones políticas sino para crear redes donde están implicados políticos, empresarios, elites regionales²⁷. Tanto Duncan (2005) como Cubides (2005) señalan que los paramilitares ofrecen seguridad al narcotráfico aunque en algunas zonas el narcotráfico se subordina al paramilitarismo mediante la compra de frentes como en el caso de Barrancabermeja donde la coca provee los recursos para financiar la expansión a la ciudad o incluso los narcotraficantes del Valle aprovechan los beneficios de la desmovilización paramilitar para hacerse pasar por ellos. Según Cubides (2004) el narcotráfico no es el único fundamento del paramilitarismo: Pablo Escobar delinea la estrategia de los paramilitares, pero posteriormente los grupos paramilitares comienzan a tener su dinámica propia hasta el punto de formar parte del grupo de los PEPES para liquidar a Escobar y su organización. Tampoco la acumulación de tierras es un objetivo de los paramilitares. El dinero obtenido por el narcotráfico

²⁵ Entrevista a Camilo Echandía, 4 de julio 2007, Bogotá.

²⁶ *Células soldados* son aquellas que se encargan de la violencia que se ejerce contra individuos u organizaciones que no acepten someterse a los contratos de protección de la red, y otras redes, grupos o individuos que compiten por el monopolio de la protección. El segundo tipo de células, *células operativas*, está constituido por las células que ejecutan las actividades lícitas e ilícitas de las propias redes y/o prendan sobre transacciones de terceros bajo contratos de protección. Las células operativas son las que generan las ganancias económicas de las redes. El tercer tipo de células, *células de intercambio*, se encarga de intercambiar bienes y conductas con agentes de alto poder en una sociedad como la clase política, los administradores de justicia, los agentes del sistema financiero o las fuerzas de seguridad del Estado. La naturaleza de las transacciones consiste en el intercambio entre ambas partes de dinero, protección, influencia, violencia y persecución contra rivales.

²⁷ Entrevista a Eduardo Pizarro, 4 de julio de 2007, sede CNRR, Bogotá.

es lavado mediante la compra de tierras. Cubides (2005) interpreta que la acumulación de tierras responde a establecer un control territorial que se supedita a un proyecto político de carácter local y regional. En este ámbito destacan los especialistas en narcotráfico Francisco Thoumi, Juan Gabriel Tokatlian y Ciro Krauthausen.

Francisco Thoumi, especialista en narcotráfico, ha desarrollado una incesante labor frente al estudio del narcotráfico en diferentes vertientes. Autor de *El imperio de las drogas: Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes* (Bogotá, Ed. Plantea, 2002), *Drogas ilícitas en Colombia: su impacto económico, político y social* (Bogotá, Ed. Planeta, 1997) y *Economía política y narcotráfico* (Bogotá, Ed. Tercer Mundo Editores, 1994), donde examina, entre otras cuestiones, los lazos de los grupos paramilitares y guerrilleros con el narcotráfico, la organización de grupos paramilitares por parte de los narcotraficantes, provocando, una contrarreforma agraria. Thoumi destaca en una investigación llevada a cabo por el Observatorio de las Drogas y Delito de la Universidad del Rosario, tanto los paramilitares como los narcotraficantes compran tierras y propiedades en Venezuela, en concreto en Maracaibo y Puerto Cabello. Además afirma que grupos paramilitares y guerrilleros conforman alianzas para controlar el narcotráfico en territorio de frontera²⁸.

Juan Gabriel Tokatlian (2001) también analiza el desarrollo y la relación entre paramilitares y narcotráfico, sobre todo a raíz del Plan Colombia y la intervención de la ayuda estadounidense con relación a las fumigaciones de droga ilícita y su relación con los grupos armados. Autor de numerosas obras sobre la guerra al narcotráfico en Colombia, la zona andina y en Estados Unidos (Tokatlian, 1995, 2000, 2009).

Ciro Krauthausen, es especialista en analizar el narcotráfico y la mafia en Italia y Colombia. En su obra *Padrinos y mercaderes: crimen organizado en Italia y Colombia* (Madrid, Espasa Calpe, 1998) y en *Poder y mercado: el narcotráfico colombiano y la mafia italiana* (Nueva Sociedad, n° 130, 1994), investiga la relación del crimen organizado con el narcotráfico y la mafia en Colombia e Italia y cómo el narcotráfico, junto con las Fuerzas Militares y las élites regionales, apadrinan a los grupos paramilitares, los toleran y los promueven como una estrategia política.

²⁸ “Estudio revela que paramilitares y narcotraficantes llevan dinero a Venezuela”, Caracol Radio, 31 de agosto de 2007. Disponible en www.caracol.com.co

Una perspectiva novedosa es analizar el discurso de los actores armados como lo hicieron Fernando Estrada (2001) e Ingrid Bolívar (2006). Estrada en una entrevista a Carlos Castaño comenta que el discurso forma parte de la dinámica de confrontación. Bolívar presenta a los paramilitares como héroes, víctimas, gente de bien que legitima su existencia y el derecho a la defensa.

Desde el punto de vista teórico destaca las aportaciones de Ignacio Cano (2001) y Kalyvas y Arjona (2005). Los tres reflexionaron teóricamente sobre el fenómeno paramilitar. Cano reflexiona sobre el grado de formalidad respecto del Estado entre el ejército, policía, paramilitares y escuadrones de la muerte. Para Cano los paramilitares son organizados por el Estado o grupos dominantes. Por su parte Kalyvas y Arjona mantienen también el grado de formalidad como un criterio de distinción frente al Estado. Definen a los paramilitares como grupos relacionados con el Estado y sus agentes locales pero fuera de la estructura formal. Según ellos el paramilitarismo cambia según sus dimensiones de tamaño y territorio. En el caso de los paramilitares se mueve en grupos grandes, móviles, con un comando altamente unificado y realizan operaciones coordinadas de gran magnitud y desarrollan estructuras formales o cuasi-formales paralelas a las de los ejércitos regulares y a los ejércitos guerrilleros (Kalyvas y Arjona, 2005).

Otras aportaciones para el análisis de estos grupos de primera mano son las biografías de algunos de los jefes paramilitares colombianos. En esta línea, el periodista Mauricio Aranguren en *Mi confesión. Revelaciones de un criminal de guerra* (SEPHA, Madrid, 2005) elabora un documento periodístico sobre la biografía realizada a Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC. De primera mano, M. Aranguren relata su experiencia y las conversaciones mantenidas con Carlos Castaño el cual explica sus estrategias, el origen de estos grupos, sus relaciones con el narcotráfico, la guerrilla y las diferentes administraciones. Este testimonio corrobora, aunque siempre con cautela, las prácticas y el modus operandi de este fenómeno bajo un prisma diferente, pues son los mismos actores armados los sujetos y objetos de la acción.

Anteriormente a esta obra, Germán Castro Caicedo elabora en *En secreto* (Bogotá, Ed. Planeta, 1996), un capítulo sobre los paramilitares basados en entrevistas a dos miembros de las ACCU, a Carlos Castaño y Carlos Mauricio García Fernández, alias Rodrigo Dobleceero, jefe del Bloque Metro, donde se expone el día a día de las ACCU, su organización, estrategias, etc.

En esta misma línea destaca la obra de Glenda Martínez, Salvatore Mancuso, su vida (ED. Norma, Bogotá, 2004), donde relata la vida del paramilitar en Montería, su relación con las Convivir y su organización posterior en líder del grupo paramilitar.

Carlos Castaño, jefe paramilitar, compila entrevistas, comunicados e ideología del grupo paramilitar en la obra Colombia siglo XXI. Las autodefensas y la paz (Talleres Colombia Libre, 1999). En esta obra refleja los diferentes comunicados de la AUC frente a la Universidad, con personalidad políticas como el expresidente Pastrana, con comunicados sobre una salida negociada del conflicto, con comunicados en prensa, etc.

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40²⁹, escribe en 2008 sus memorias desde 1995 hasta 1998. En ellas cuenta su relación con políticos, con el Ejército, terratenientes, policías, narcotraficantes, contrabandistas, reuniones con el actual Vicepresidente Francisco Santos etc. Esta información puede ser dudosa en su contenido pues tiene que ser contrastada.

La periodista Olga Behar (2011) realiza varias entrevistas al mayor de la policía Juan Carlos Meneses sobre su participación en el grupo paramilitar Doce Apóstoles liderado por Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe grupos paramilitares en Yarumal, pueblo del departamento de Antioquia.

También destaca las entrevistas realizadas a desmovilizados. Un ejemplo es la obra de José Armando Cárdenas, Los parias de la guerra (Ed. Aurora, Bogotá, 2005). En esta obra relata en treinta entrevistas a guerrilleros y paramilitares la organización de los dos grupos, el origen de su incorporación al conflicto y sus carencias educativas y laborales.

De estas diversas fuentes de información destacan los artículos periodísticos y/o de investigación realizados por la prensa colombiana. La estructura de los diarios y semanales colombianos permite conjugar artículos informativos de la realidad coyuntural colombiana con artículos de opinión y de investigación que indaga en determinados temas relacionados con el conflicto armado desde un tratamiento analítico más profundo. Colaboran en el tratamiento de esta información investigadores como Claudia López, periodista colombiana que analiza la influencia

²⁹ Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/rearmados/36-jefes/2334-las-verdades-y-mentiras-del-libro-de-jorge-40>

de los paramilitares en los procesos electorales³⁰. A través de la obra de Guido Piccoli, *El sistema del pájaro. Colombia: paramilitarismo y conflicto social* (Bogotá, Textos de Aquí y Ahora, 2004), se puede observar una aproximación periodística al conflicto armado, a los jefes de los diferentes grupos paramilitares y su relación con diferentes sectores de la sociedad. Asimismo, analistas consagrados denuncia las estrategias y actuaciones de estos actores armados, entre ellos contribuyen a este medio Eduardo Pizarro, Alfredo Rangel, Andrés Dávila ó Eduardo Posada Carbó. Entre los periódicos que ofrecen ambos tipos de artículos sobresalen *El Tiempo*, *Revista Semana*, *Revista Cambio*, *El Espectador*, *El Colombiano*, etc.

Igualmente, los documentos procedentes de investigaciones llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, constituyen un buen reflejo descriptivo y analítico de la situación conflictiva en Colombia. Realizan documentos que examinan tanto las cuestiones estructurales como coyunturales del conflicto. Entre estos organismos destaca la Corporación Nuevo Arco Iris³¹, Comisión Colombiana de Juristas, Comisión Andina de Juristas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, International Crisis Group, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD-, Observatorio de DDHH y DIH de la

³⁰ Claudia López es analista de la Revista Semana y El Tiempo. Sus colaboraciones giran en torno a denunciar la *parapolítica*. Entre sus aportaciones destaca los análisis relacionados con la influencia paramilitar en las elecciones locales y al congreso o la relación entre paramilitarismo y narcotráfico. Puede consultarse sus investigaciones en: “Votaciones atípicas en las elecciones de congreso del 2002”, en *Revista Semana*, Bogotá, 11 de septiembre de 2005; “Narcotráfico y Paramilitarismo: Infiltración en política: de mal en peor” en *El Tiempo*, Bogotá, 28 de Febrero de 2006.

³¹ La *Corporación Nuevo Arco Iris* es una Organización No Gubernamental para la Paz y el Desarrollo, creada el 29 de marzo de 1996, en el marco de la ejecución y desarrollo de los compromisos asumidos en el Acuerdo Político Final, suscrito entre la Corriente de Renovación Socialista y el Estado Colombiano, el 9 de abril de 1994. Desde su creación se ha consolidado como expresión de la sociedad civil para la reconciliación y para la búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo, inspirado en la convivencia y en la definición de formas participativas de concebir lo público y la función del Estado.

Vicepresidencia de la República de Colombia³², Fundación Ideas para la Paz³³, Fundación Seguridad y Democracia³⁴, entre otros.

En último lugar, resalta las publicaciones sobre un ámbito relativamente nuevo dentro de la temática paramilitar, su vinculación con la clase política colombiana, en el llamado caso de la parapolítica. Entre las obras que han profundizado más esta temática destacan la obra de Mauricio Romero, *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos* (Nuevo Arco Iris, Bogotá, 2007); la obra de Juan Carlos Giraldo, Eleonora Pineda y Rocío Arias. *Las comadres de la parapolítica* (ED. Círculo de Lectores, Bogotá, 2008); la obra de Alfredo Serrano Zábala, *La última batalla de Carlos Castaños: Secretos de parapolítica* (Oveja Negra, Bogotá, 2007) y por último Claudia López (Ed.), *Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano* (Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá, 2010). Analizan los nexos entre la clase política colombiana por regiones y partidos políticos y su relación con determinados grupos paramilitares. Su actual investigación impide tener una visión global y de conjunto de este tema. Por tanto, para aproximarse a este contenido se puede consultar artículos periodísticos e investigaciones puntuales de instituciones públicas o privadas de Colombia o de ámbito internacional.

En conclusión, en este apartado se ha resaltado y expuesto la evolución de las investigaciones que sobre violencia se han realizado en el mundo académico, con especial interés sobre el

³² El Observatorio en un programa presidencial que recoge análisis regionales, temáticos y anuales acerca de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, actividad judicial acciones militares de las Fuerzas Armadas, acciones armadas de los grupos subversivos y de autodefensas, hechos de Paz y manifestaciones contra la guerra. Puede consultarse sus investigaciones *on-line* mediante el siguiente enlace electrónico <http://www.derechoshumanos.gov.co/index.php?newsecc=default>

³³ A finales de 1999, un grupo de destacados empresarios creó la Fundación Ideas para la Paz en Bogotá que busca constituirse en un centro de pensamiento desde el cual se pueda contribuir de manera significativa al logro de una paz y un bienestar duraderos y a la unión de todos los colombianos alrededor de un proyecto común de país. Entre sus objetivos destaca evaluar y hacer seguimientos de los procesos de negociación que busquen la paz; intercambiar información con gobiernos, centros de investigación e instituciones; generar y difundir información; Promover e integrar los esfuerzos que realice la sociedad civil en relación con el logro de la paz; colaborar en el diseño de proyectos relacionados con la etapa de postconflicto en materia de desarrollo económico y social. Para más información visite la página Web: http://www.ideaspaz.org/new_site/index.php

³⁴ La Fundación Seguridad y Democracia, es una entidad académica autónoma que contribuye a que en Colombia los temas de la seguridad y la democracia se conviertan en asuntos de interés público y sean objeto de debate entre los ciudadanos. Profundiza el compromiso de los distintos sectores de la sociedad con la seguridad y con la democracia. Y por último, contribuye a enriquecer y a hacer más eficaces las políticas públicas de seguridad y de profundización de la democracia, en el marco del Estado de derecho. Entre sus actividades destaca la realización de conferencias internacionales y eventos ocasionales, investigaciones sobre la evolución del conflicto armado interno así como de los temas relacionados con la seguridad pública en el país. A través de su página Web se expone buena parte de sus estudios realizados y se accede a través de este enlace: <http://www.seguridadydemocracia.org/default.asp>

fenómeno paramilitar. La literatura relativa a este campo de estudio ha ido experimentando una mayor complejidad de análisis, haciendo uso de diferentes disciplinas para una mayor comprensión de la evolución de sus estructuras. Hemos visto como hubo diferentes interpretaciones del fenómeno paramilitar en función de las informaciones que se iban descubriendo. Desde la perspectiva del paramilitarismo como instrumento de contrainsurgencia se pasa a estudiar las relaciones entre estos actores y los actores locales y regionales. Posteriormente se analiza como actor autónomo del Estado y dependiente del narcotráfico y de otras formas de financiamiento. Dentro de estas perspectivas también se ha avanzado en el análisis del discurso, la organización y las perspectivas teóricas. Estas perspectivas nos permiten aproximarnos más a estos grupos. La evolución de estos análisis relata que el paramilitarismo no puede ser reducido a un instrumento de contrainsurgencia debido a la complejidad, diversidad regional y multiplicidad de actores que impiden una definición sencilla. Las relaciones entre los diferentes actores, instituciones y actividades, legales e ilegales, varía según el ámbito regional o local, la sociedad, el desarrollo del Estado.

2.3. Debate en torno al concepto paramilitar

A pesar de que en el anterior apartado se hizo un tímido acercamiento a la definición de estos grupos armados, en este apartado se trata esta cuestión en profundidad. El análisis del concepto paramilitar se concentra en la perspectiva de los expertos científicos sociales y políticos que examinan el fenómeno paramilitar y debaten sobre ello. Esta conceptualización se divide en tres apartados. Por un lado, se estudia aquellos autores que han plasmado tipologías de los grupos paramilitares, es decir, que han teorizado sobre su definición. Por otro lado, se hace referencia al tratamiento que determinados autores han dado a estos grupos. Y, finalmente, se establece una definición sobre estos grupos.

2.3.1. ¿Cómo se pueden definir a los grupos paramilitares desde el punto de vista teórico?

La existencia de grupos armados que han constituido gobiernos paralelos o paraestados ha sido una constante en diferentes países a lo largo del tiempo. Es un fenómeno que se encontraba en la China medieval, el Imperio Otomano, México precolonial, Afganistán, África postcolonial, así como en varias partes de Europa, como por ejemplo en Rusia y en varios países de América Latina. La terminología para referirse a estos grupos es amplia. Algunas veces se refieren al

mismo fenómeno, pero en otras ocasiones son fenómenos diferentes, entre ellos cabe destacar las milicias, grupos de autodefensas, guardias blancas, escuadrones de la muerte, vigilantes, etc. Algunos de estos grupos fueron formados por el Estado de manera implícita o explícitamente o simplemente les toleraba sus actuaciones. Durante el periodo de la Guerra Fría, algunos regímenes autoritarios latinoamericanos usaron escuadrones de la muerte para evitar cualquier tipo de oposición como en Argentina y Chile. Las rondas campesinas de Perú conformaron un millón de personas durante el año 1985. Otro ejemplo fue el caso de Estados Unidos, que financió y organizó la Contra nicaragüense, un ejército irregular que intervino contra el régimen sandinista. Colombia es, por tanto, un ejemplo más del poder de grupos paramilitares que organizan y estructuran un paraestado con reglas de juego diferentes que amenazan la construcción de la gobernabilidad, el desarrollo institucional y, sobre todo, constriñe la seguridad colectiva y la democracia.

El término paramilitar ha sido analizado por algunos investigadores para acotar su significado. Kalyvas y Arjona consideran que el paramilitarismo cambia según determinadas dimensiones como el tamaño del grupo, la dimensión territorial, su autonomía respecto al Estado, el grado de violencia. Según estas dimensiones definen a los paramilitares como:

“Los paramilitares son grupos armados que están directa o indirectamente con el Estado y sus agentes locales, conformados por el Estado o tolerados por éste, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal” (Kalyvas y Arjona, 2005)

Ambos autores proponen una tipología del paramilitarismo que se resume en cuatro tipos de paramilitares en función del tamaño y la dimensión territorial como muestra la siguiente tabla:

Tabla 1. Tipología del paramilitarismo

TAMAÑO	DIMENSIÓN TERRITORIAL	
	LOCAL	SUPRALOCAL
PEQUEÑO	Vigilantes	Escuadrones de la muerte
GRANDE	Guardianes locales	Milicias y ejércitos paramilitar

Fuente: Kalyvas y Arjona, 2005

Según este cuadro, los vigilantes son aquellos grupos esporádicos y locales que usurpan temporalmente las fuerzas del Estado, la ley y el monopolio de la violencia para controlar el crimen o hacer cumplir las normas sociales. Los escuadrones de la muerte son pequeños grupos que operan bajo una estructura nacional y están ligados a agencias de alto nivel estatal y su vinculación es a tiempo completo, mientras que los vigilantes su vinculación es a tiempo parcial. Los guardianes locales son instituciones locales que forman parte de una red más extensa controlada por el Ejército o Policía. Su principal objetivo es el control de la población. En último lugar, definen a las milicias o ejércitos paramilitares como grupos grandes y móviles, con un comando altamente unificado, con operaciones coordinadas y estructuras formales o cuasi formales paralelas a las que tiene el ejército regular y parecidas a los ejércitos guerrilleros. Concentran gran parte de su energía en controlar a la población y reprimir a los civiles. El nivel de profesionalismo y sus habilidades son bajos si los comparamos con los ejércitos regulares.

Esta diferencia en los tamaños de estos grupos está relacionada con la construcción del Estado. Los estados débiles necesitan privatizar la violencia o contratar a terceros para controlar y reprimir las amenazas internas. Pero la variación de la forma y tamaño de estos grupos paramilitares también está relacionada con la amenaza de estos grupos y los recursos del Estado. De esta manera cuando los recursos son bajos y la amenaza que enfrenta el Estado era menor, surgen los grupos locales. Cuando los recursos del Estado son bajos pero la amenaza que enfrenta el Estado es mayor, los escuadrones de la muerte pueden ser la solución. En tercer lugar cuando la amenaza es menor y los recursos son amplios no se observa ninguna acción de grupos armados porque el Estado tiene capacidad suficiente de enfrentarlos. Pero cuando los recursos son altos y la amenaza mayor, producen la existencia de grupos paramilitares o milicias. Colombia forma parte de un claro ejemplo de la existencia de grupos paramilitares

Pero también dentro de este desarrollo de los autores Kalyvas y Arjona (2005) destaca otro modelo en función de si los recursos del Estado están disponibles para estas estructuras privadas o si el Estado no los controla o son recursos ilegales como el caso de la coca en Colombia. Según estos autores, las variaciones internas de los grupos paramilitares están en función de las variaciones regionales del conflicto como el control de territorio, su relación con la población, su relación con las elites políticas y económicas. Por ejemplo en el departamento de Cundinamarca, en Colombia, los grupos paramilitares colocaron a sus aliados regionales como alcaldes y concejales, es decir en autoridades locales, de esta manera garantizaban el orden, proporcionaban

seguridad, ganaban el apoyo de la población y atraían a nuevos reclutas aunque también este estilo de vida podía alejar a posibles reclutas.

Las aportaciones de Ignacio Cano son significativas. En su obra “Policías, paramilitares y escuadrones de la muerte en América Latina”³⁵ argumenta que la diferencia entre paramilitares y escuadrones de la muerte radica en su grado de formalidad. Paramilitares y escuadrones de la muerte son irregulares y pueden ser distinguidos entre sí por su grado de formalidad. Los paramilitares se estructuran en comandos, funciones y sedes, son organizados por el Estado o por grupos dominantes, mientras que los escuadrones de la muerte se organizan de manera flexible con el fin de conservar la identidad de sus miembros (Cruz, 2007).

Desde el punto de vista teórico, algunos investigadores han desarrollado el concepto de actores armados centralizado en diferentes sociedades como la italiana, africana o rusa. Gustavo Duncan, profesor e investigador colombiano, utiliza conceptos desarrollados por africanistas para describir la realidad paramilitar en Colombia. Él recurre al concepto *Warlords o señores de la guerra* para examinar a los grupos paramilitares.

Mediante esta realidad ha observado las transformaciones de la sociedad africana tras finalizar la Guerra Fría. Tras este acontecimiento el sur de África y Rusia se acogieron una profunda reestructuración del Ejército en el sentido de privatizar y disminuir el papel del Estado. A partir de ese momento hubo una tendencia general de “comercializar con la defensa” en el sentido de hacerla propia y controlar entidades competentes en el mercado internacional. Al mismo tiempo las prioridades del Estado en cuestiones militares decrecieron. Fue visible en la disminución de recursos, estatus y pago de sueldo a los soldados. Las consecuencias fueron el descenso de números de soldados y el aumento de estas empresas para-publicas en busca de contratos internacionales. Este tipo de empresa se denominó *Private Military Companies*, es decir, *Empresas Privadas Militares* (EPM) (Leander, 2002).

Mbembe (2001), Jackson (2005), Schlichte (1998) recogen en sus escritos el término *warlords*. Definen *warlords* como aquellos actores organizados o *señores de la guerra* (*warlords*) que cuestionan la legitimidad del Estado, luchan por el poder y monopolizan los medios de coerción. *Warlord* está relacionado con el crecimiento de la seguridad privada de actores no estatales debido a la

³⁵ Ignacio Cano escribió este capítulo dentro de la obra de Klaus Bodemer, Sabine Kurtenbach y Kalus Meschkat (2001) *Violencia y regulación de conflictos en América Latina*, Ed. Adlat-Heinrich Boell Stiftung-Nueva Sociedad, Caracas.

debilidad del Estado. En torno a ellos se reorganiza la base de un nuevo poder que articula la vida social, política y económica de un territorio determinado. Estos grupos construyen un sistema alternativo de gobierno sin acceder al estado. Diferencian dos tipos de *warlordism* quienes trabajan por dinero, sin interés territorial que se denominan mercenarios y aquellos que cuestionan la legitimidad del gobierno y que luchan por el poder y se estructuran en el término que acuñó Mbembe, *Private Indirect Government* ó *Gobiernos Privados Indirectos* (Jackson, 2005). Los señores de la guerra o Warlord tienen el control de las fuerzas militares y poder político, operan en un nivel sub estatal en regiones donde el Estado se ha retraído o ha perdido el monopolio de la violencia. Pueden representar algún interés sectario pero sobre todo son neopatrimonialistas. Carecen de interés para cambiar la naturaleza del Estado. Usan la violencia para mantener su poder. Pueden tener legitimación política. Se preocupan solo de su propio beneficio a pesar de que representan intereses regionales. Tienen la lealtad del Ejército, son líderes militares por proporcionar importantes servicios como liderazgo, coordinación, logística y servicios sociales. Necesitan realizar campañas exitosas para mantener su legitimidad. En algunas regiones como en China proporcionan beneficios públicos y servicios sociales e infraestructuras al resto de la población. Ante la ausencia de autoridades estatales, estos señores de la guerra se convierten en autoridades locales. Proporcionan protección a las poblaciones donde se encuentran y cuentan con el apoyo de los militares, comandantes locales y milicias. Así se legitiman. Algunos de estos señores se transforman en políticos, empresarios, generales como Taylor en Liberia y Savimbi en Luanda que se convierten en políticos (Giustozzi, 2005).

Esos autores también hacen referencia a la existencia de otros grupos como *bandas locales*, *mafias*, *sandline* que se ocupa de servicios de seguridad privada que continúan ejerciendo su papel en contexto donde el sistema judicial y policial se rompió o nunca se estableció. Entre estos grupos destacan los *entrepreneurs*. Este término hace referencia a un actor no estatal militar y político. Apuesta o invierte recursos para obtener oportunidades para ganar influencia o poder a través del uso de la fuerza militar, y de otras cosas. Hubo varios tipos, entrepreneurs violentos o conflictivos, que actúan motivados por la ambición económica. Otros controlan estructuras tribales o de clanes como en Afganistán Abd al Qader o Nanganhar o grupos políticos e ideológicos para obtener apoyo como los RUF de Sierra Leona (Giustozzi, 2005).

En Rusia también es importante la formación del Estado y el mercado para entender la proliferación de violencia privada. Las bandas de mafiosos proliferaron tras el fin de la Guerra Fría. Posteriormente las mafias ofrecieron protección a cambio de servicios o bienes.

Comenzaron por los pequeños empresarios de gimnasios quienes son la nueva base económica de estos grupos para ofrecerles protección, los entrepreneurs. Este grupo se denomina *Uralmashevskaya*. Expandieron este negocio a otros territorios. Posteriormente se convirtieron en un grupo financiero industrial y establecieron relaciones con el gobierno regional legítimo. Finalmente legalizaron su poder económico y político en el partido *Unión Política Social Uralmashev* (*Obshchestvenno-politicheskiy Soyuz*). Es decir se convierten en una organización política que defiende los intereses de la industria de la región. En las elecciones del 2000 ganan la administración del distrito en manos de Tcherkasov. Pero el 75.9% de la opinión pública piensa que forma parte de una estructura criminal, una unión de bandidos que buscan el poder (Volkov, 2000).

Se puede considerar también a la mafia italiana como ejemplo de la organización de grupos paralelos al Estado. Nació aproximadamente en Sicilia en 1860 y se utilizó para describir a los hombres de honor capaces de defenderse por si mismos sin recurrir al Estado, eran los mafiosi que prestaban los servicios que el Estado no podía cubrir. Las causas de su desarrollo estuvieron asociadas con cuestiones políticas, es decir, con la ausencia de un sistema de justicia y orden público creíble y efectivo. A esta desconfianza política se sumó la desconfianza económica hacia el Estado. El estancamiento del comercio, la industria provocó una desgana general hacia formas de cooperación impersonal y extensiva. La consecuencia fue que en ciertas zonas del sur de Italia y Sicilia donde se desarrolló de manera tradicional el crimen organizado la movilidad social ante estas circunstancias fue más factible. En estas sociedades el poder del favor prevaleció sobre la justicia y el mérito. La mafia hizo cumplir la justicia pública, hizo de la desconfianza su negocio mediante una búsqueda de la exclusividad. Su actividad consistía en acaparar los monopolios sobre el mayor número posible de recursos en un territorio. Aseguraban la protección, la mediación, servicios, a cambio de dinero. Su poder se fortaleció cuando extendieron sus redes a los representantes políticos locales lo que supuso que la línea entre la legalidad e ilegalidad se borrara. Los medios más utilizados por la mafia fueron la violencia y la extorsión a cambio de protección. Este fenómeno se repitió tanto en el campo como en la ciudad, muchos mafiosos destacados pertenecieron a la clase media. Con la emigración a Estados Unidos durante el periodo fascista, se incorporó a la esfera política y económica. Sin embargo en sociedades donde el Estado proveía servicios y protección la mafia se convirtió en una organización dedicada al delito que se identificaba en base a su identidad como la mafia china, la mafia rusa, etc. (Gambetta, 1993; Giner, Lamo de Espinosa, Torres, 2006; Krauthausen, 1998).

El análisis de la realidad africana y de otras realidades como la italiana y la rusa, presenta la elaboración de otros fenómenos violentos, no estatales, que utilizaban la violencia por un fin económico y a veces político. Esta aproximación a las realidades expuestas ayuda a comparar fenómenos, ver diferencias y semejanzas para, posteriormente, definir un concepto cercano al fenómeno colombiano.

2.3.2 Profundización en el tratamiento de determinados autores

En este apartado se examina la producción literaria de los autores que más atención han dedicado a definir los grupos paramilitares. En la tabla 2 se recoge las principales ideas de cada autor.

Mauricio Romero (2003), profesor de ciencia política en la Universidad Javeriana en Bogotá, analiza una aproximación al fenómeno paramilitar desde la disciplina sociológica. Parte del análisis de las *oportunidades políticas* que favorecen la aparición de un nuevo actor en el conflicto armado. Entre las oportunidades que Romero señala en su obra destacan las elecciones de gobernadores y acaldes, la descentralización, la reforma política de la Constitución de 1991, que amplió la participación social, y los procesos de paz con las guerrillas, como momentos claves para la aparición de estos grupos. Esta aproximación hace hincapié en contextos políticos claves que posibilitan el surgimiento de estos actores y por lo tanto añade otra dimensión a la complejidad del fenómeno paramilitar. En este contexto analiza el monopolio de la coerción como un elemento no inherente al Estado y que corresponde a un proceso histórico. Por tanto, en Colombia y teniendo en cuenta los procesos históricos, la autoridad sobre el monopolio de la coerción fue cambiante por la competitividad de diferentes actores por él. Así, en el caso del paramilitarismo, el aparato armado paraestatal fortaleció las identidades locales y regionales en contra de las identidades estatales. Este tratamiento constituye una nueva visión al referirse a ellos como *violent entrepreneurs* ó *empresarios de la coerción*, es decir, el individuo especializado en administración, despliegue y uso de la violencia organizada, que ofrece como mercancía a cambio de dinero u otro tipo de valores. Esto demuestra la perspectiva del tipo de organización paramilitar. Pueden actuar como agentes de otro o a título propio. Intimidan, protegen, recolectan información, saldan cuotas, dan garantías, hacen cumplir contratos, cobran impuestos, entre otras actividades. Se mueven entre la ilegalidad y la legalidad en función de que algunas tácticas ilegales forman parte de la legalidad de una sociedad como la mafia rusa y sus nexos con grupos de la antigua URSS. Como consecuencia de la pérdida de los medios de violencia por el Estado central y la acumulación de poder por parte de otras organizaciones, la soberanía local se

refuerza frente a la intervención del Estado. Estos empresarios de la coerción llevan a cabo consensos con las elites locales. Por tanto, se observa como Romero utiliza la definición *entrepreneurs* para examinar a los grupos paramilitares, al igual que los africanistas que anteriormente se señalaron.

Otro aportación de Romero (2003) es la diferencia entre el concepto autodefensas y paramilitares. La diferencia entre ambos grupos responde al carácter defensivo y ofensivo del grupo. Así, *autodefensa* fueron las agrupaciones organizadas para defenderse de un agresor y mantener el control de un territorio sin pretensiones de expansión, “como un sentido de pertenecía local y como dicen ellos defender un territorio, defender un entorno”. Mientras que *paramilitar* se consideró a los grupos armados organizados para realizar operaciones de limpieza política y consolidación militar previas al dominio de un territorio, “mas hacer avances, controlar territorio ir acumulando una influencia política y territorial muy importante”

Sin embargo en los años noventa esta diferencia pierde su definición cuando, como anota Romero “los distintos grupos coincidieron, ya sea en la teoría o en la práctica, con sectores de las fuerzas de seguridad en que el conflicto armado se resolvería a través de sus fuerzas militares combinadas. Las ACCU fueron oficialmente creadas en este contexto a finales de 1994 y las AUC, tres años después” (Romero, 2003: 36-37). Es decir, Romero apunta que hay una evolución lineal de grupos de autodefensas a paramilitares. Según este autor “en ese proceso de transformación de autodefensas a paramilitar tú ves que ya cuando hay esa vocación de avanzar territorialmente y conquistar territorio es cuando aparece más la necesidad de vincularse con el narcotráfico. Pero mientras tú eres autodefensa puedes entonces recibir apoyo institucional local, fuerzas militares, de ganaderos, comerciantes...porque era una fuerza chiquita de control un territorio para los recursos que tenían. Ya cuando te planteas convertirte en un actor complementario de las fuerzas institucionales ya necesitas otro tipo de dimensión de estrategia, más recursos y entonces el tema del narcotráfico es imprescindible”³⁶. Para este autor las AUC son una federación de grupos compuestos por sicarios, empresarios de la coerción; autodefensas; grupos de paramilitares muy vinculados con el ejército, grupos vinculados con la protección al narcotráfico, etc.

³⁶ Entrevista realizada a Mauricio Romero, profesor de ciencia política en la Universidad de Bogotá, excoordinador del Grupo de Trabajo en torno al tema de desmovilización, desarme y reinserción (DDRR) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 25 de julio de 2007, Bogotá.

Otro punto de vista lo proporciona el investigador de la Universidad de los Andes, Gustavo Duncan que acuña el término señores de la guerra para referirse a los grupos paramilitares tomando como ejemplo los estudios africanistas sobre los *warlords*, es decir, grupos con hegemonía militar y política. Para este autor los paramilitares de la década de los ochenta no son señores de la guerra. Éstos se organizan a partir de 1993 y 1994 cuando el proyecto paramilitar entra en una nueva fase evolutiva de construcción de ejércitos con mando, doctrina e iconografía (Duncan, 2006). “A principios de los 90 los hermanos Castaño se inventan el ejercito local suficientemente organizado para someter a un poder que fue lo que no se hizo en los 80 y ellos son capaces ya de someter a narcotraficantes, de someter a los políticos a los terratenientes a todo resto de grupos de poderes que constituye el poder local. Eso lo hace a principios de los 90. Esa es la definición de paramilitar una fuerza paralela al servicio del estado en lo local”³⁷. Pero además “tiene un componente mafioso en sentido de empresario de la protección privada, en el sentido de manejar el poder, estos hombres no van a esta solamente interesados en la manera que reciben despacho y transacción, sino en la mayor parte de la sociedad. Tienen un aparato burocrático, tienen un ejército, son capaces de tomarse el estado local. No hay que catalogarlos ni como mafia ni como paramilitares, tampoco podemos hablar de que sean estrictamente contraguerrilleros”³⁸. Duncan señala cinco características que definen a este grupo. En primer lugar estos grupos tienen hegemonía político-militar, además de formar un ejército, controlan las redes de políticos y de narcotraficantes, con esta primera característica cumplen los tres monopolios básicos: violencia, tributación y justicia. “Respecto a la justicia, impone un tipo de orden social, por lo menos son el aparato coercitivo que mantiene el orden social, porque ese orden social no depende solamente de él ese orden social solo no se puede dar. Los señores de la guerra dominan las sociedades circundantes de una región con determinadas características”³⁹.

En segundo lugar actúan a nivel regional y tienen un proyecto regional. Según Duncan “Ellos no están interesados en el estado nación y eso es la diferencia con la guerrilla porque los jefes guerrilleros, pese a todos sus defectos, todo lo que uno puede criticarles de su actuación, son coherentes con la toma del poder nacional. Ellos están interesados en el estado regional, obviamente ellos, con su ley, pero formando toda una serie de clases medias, ...diferentes sectores sociales y grupos sociales articulados alrededor de ese proyecto. En esa medida el nivel regional tiene muchas mayores ventajas que si fuera con la guerrilla. Entre otras cosas porque no

³⁷ Entrevista realizada a Gustavo Duncan, Profesor, Universidad de los Andes, 2 de julio de 2007, Bogotá.

³⁸ Idem.

³⁹ Idem.

se traduce en una pelea directa con el nivel central, puede hacer mediación, la parapolítica es eso. La parapolítica eran los mediadores de las regiones, los que negociaban entre uno y otra parte”⁴⁰

En tercer lugar, explotan las redes internas comerciales legales e ilegales. Sin embargo, según comenta Duncan, adquieren más rentabilidad a través de la economía ilegal que legal. Lo resume de esta manera: “El cartel de Cali era el eje donde el nivel central podía articular con el narcotráfico para controlar los volúmenes de recursos que seguían a los paramilitares y a la guerrilla. Cuando desmantelan ese cartel ¿qué es lo que sucede? Guerrilla y paramilitares subordinan a los narcotraficantes en Colombia. Se atomizan los grandes carteles en mejores estructuras jerárquicas capaces de responder y resulta que estos señores terminan quedándose con la mayor parte del excedente. Y el nivel de la economía política es excelente porque el 2% del PIB que ellos dominan en ingresos al año sirve para tomarse el resto de la economía. Por ejemplo, la economía local, la economía de todas las tierras, la producción agrícola la manejan desde esas ganancias. Toda una serie de consumos e inversiones, el sector terciario, servicios, pueden sostenerse a partir de esa economía. Tienen que ver también unas digresiones y es que cuántos recursos cuestan tomarse el Estado. La plata con la que cuenta estos señores rinde más que la que se encuentra en el sector legal por la naturaleza de su rentabilidad. Las economías de los narcotraficantes son especulativas. Te pueden vender tu costo a 100 pesos y tu costo es 20, te quedan 80 pesos para invertir en la toma del Estado y tienen muchos incentivos para hacerlo, porque la toma del estado significa reducir nivel de guerrilla”⁴¹ Ante esta situación, los narcotraficantes crean una serie de excedentes que logran competir con la economía tradicional de arroceros, algodóneros, ganaderos etc. Ellos no pueden crear suficiente riqueza a la tasa de incremento que se da tradicionalmente.

Las dos últimas características están relacionadas con la justicia y la ciudadanía. Los paramilitares imparten justicia, es decir, resuelven disputas de la población como derechos de propiedad, de familia, etc. Son la ley. Crean ciudadanía mediante la protección y servicios sociales a cambio del pago de impuestos transacciones etc. Así crean lealtad en la ciudadanía. Mediante la creación de escuelas, hidroeléctricas, carreteras etc., consiguen arropo social.

Al igual que Mauricio Romero, Francisco Leal⁴² piensa que hay diferentes tipos de paramilitares dentro de ese mismo concepto. Según él, el único proyecto fuerte de unidad es el de las

⁴⁰ Idem.

⁴¹ Idem.

⁴²Entrevista a Francisco Leal, Catedrático Emérito de la Universidad de los Andes, 26 de junio de 2007, Bogotá

Autodefensas Unidas de Colombia, pero este proyecto desaparece y se divide en pequeños grupos tras la muerte de Carlos Castaño que era el único que estaba a favor de un proyecto antiterrorista. El proyecto de los demás jefes paramilitares consiste en el de enriquecimiento. Así que evolucionan hasta que se convierte en estructuras mafiosas mediante el enriquecimiento a través del desplazamiento campesino, a través de infiltrar en las instituciones del Estado y el proyecto político mediante la toma de las regiones, la costa, las asambleas, el congreso, las gobernaciones, las alcaldías, etc. Esta estructura ya no necesita un ejército, sino un grupo de sicarios que venda seguridad a negocios privados, a instituciones locales y regionales. Por tal motivo, Leal subraya que la desmovilización fue conveniente porque así “qué mejor que dejarle al Estado el coste de la desmovilización del ejército” así se liberan de una carga económica enorme, se la ceden al Estado y siguen ellos con su proyecto político y económico

El profesor Eduardo Pizarro⁴³, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), subraya una evolución lineal de autodefensas a paramilitares. Comienzan como autodefensas ante los excesos de las guerrillas pero se convierten en bandas criminales con un pequeño barniz político pero con una convicción absolutamente criminal. “El paramilitarismo comienza a iniciarse como autodefensa y lentamente empieza a ser cooptado por el narcotráfico, la criminalidad, y termina siendo un grupo más criminal que político. Si uno compara a los paras con las rondas campesinas de Perú, esta eran un bloque contrainsurgente campesino alentado por el gobierno contra sendero luminoso. En el caso Colombia los paras tuvieron más autonomía, son mas criminales que políticos”⁴⁴. Crean estructuras políticas de carácter mafioso formadas por políticos, empresarios y elites regionales. Aunque conforman estas estructuras no tienen un proyecto coherente de poder político aunque si buscan ese poder político para construir redes mafiosas locales. Por tanto, los paramilitares son una simbiosis del poder político y económico para buscar redes mafiosas pero no porque tengan un proyecto social detrás o una idea de sociedad colombiana. En este sentido, Pizarro señala que por sus vínculos profundos con el tráfico de drogas, se transforman en típicos «señores de la guerra», similares en sus características básicas a aquellos que pululan en Afganistán, Irak o Sierra Leona. Siguiendo a Stergios Skaperdas sostiene que el término «señor de la guerra» se refiere a personajes poderosos (*strongmen*) que no obedecen órdenes de las altas autoridades centrales y controlan una región gracias a su capacidad para desarrollar la guerra. Ese poder de los *warlords* y su capacidad para acorralar a las frágiles

⁴³ Entrevista a Eduardo Pizarro, Expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 4 de julio 2007, Bogotá.

⁴⁴ Idem.

autoridades y a los grupos competidores depende en buena medida de una economía de guerra, la cual a menudo incluye su integración a las redes de comercio internacional (Pizarro, 2004).

Otra aportación sobre este fenómeno es la expuesta por Carlos Medina (1994) que realiza una contribución teórica en el análisis de los grupos paramilitares. Medina identifica la violencia parainstitucional y las prácticas parainstitucionales de terrorismo de Estado⁴⁵. La violencia parainstitucional abarca las zonas rurales representadas por los paramilitares y las zonas urbanas y suburbanas representadas por los grupos parapoliciales. Este tipo de violencia suplanta al Estado pero con la misma organización institucional. También diferencia entre organismos parainstitucionales legales como los cuerpos de seguridad, los servicios de vigilancia privada, aceptados y creados por el Estado y los organismos ilegales que están al margen de la ley que utilizan la represión y la coacción física. La violencia parainstitucional utiliza mecanismos legales y extraleales para combatir la violencia debido a la debilidad estatal en mantener la seguridad pública. Por tanto los paramilitares son un tipo de violencia parainstitucional que se desarrolla en las zonas rurales. Controlan la economía, la política, las fuerzas militares de un territorio determinado. Crean repúblicas independientes o paraestados. De la conexión con el narcotráfico surge una nueva modalidad de paramilitar, el narcoparamilitar. Medina subraya las diferentes fases por las que pasó el paramilitarismo. Según él hay diferentes fases evolutivas del fenómeno paramilitar. La primera fase de 1980 a 1993, el paramilitarismo es un instrumento de la lucha anticomunista y antisubversiva permeado por el narcotráfico y fraccionado en lo local. Se trata de muchos grupos que actúan en distintos contextos, cada uno con su propio nivel de autonomía y capacidad de fuego. Ese decir, es un instrumento militar al servicio de los intereses de la institucionalidad y las élites tradicionales locales y nacionales. La segunda etapa es la de institucionalización del fenómeno (1993-1997). Se convierten en una red de articulación, en una fuerza político-militar nacional aparentemente centralizada mediante la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Mediante su asociación con el narcotráfico el paramilitarismo adquiere una estructura organizativa compleja. Alcanza poder territorial, lealtades y alianzas permanentes. Se vuelve poder económico y político. Los narcos se transforman en "paracos" para abrirse camino hacia la legalización, y los "paracos" se vuelven narcos para constituirse en élite económica. Establecen las relaciones con las élites tradicionales y la clase política en el camino para generar su propio advenimiento en el poder. La tercera etapa es la

⁴⁵ Medina distingue las siguientes prácticas parainstitucional del terrorismo de estado: doctrina de seguridad nacional, guerra baja intensidad, represión para imponer un proyecto económico, social y político sobre un grupo de estudiantes, sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas etc. y la aplicación del terror (sicotización).

consolidación e integración institucional. Durante éste período construyen una coalición de poder que toma las decisiones estratégicas en relación con la supervivencia de la organización sus transformaciones y la satisfacción de los intereses de las partes (Medina, 2008).

El investigador Camilo Echandía⁴⁶ discrepa con Duncan pues éste autor comenta que los paramilitares no tienen ninguna unidad político-militar como se observó en la apertura de negociación con este grupo. Es un propósito artificioso presentarles como grupo pues entre varios grupos había varias contradicciones que hacían suponer que eran grupos independientes⁴⁷. Por ende, el afán de presentarse como grupo es una estrategia ante el proceso de desmovilización. Según Echandía, no se les puede catalogar de autodefensas porque son ofensivos ni tampoco de paramilitares porque tienen una enorme autonomía frente al Estado y una enorme cercanía con el narcotráfico. No se les puede estudiar dentro de los modelos clásicos de autodefensas o paramilitares. Se insertan en el poder local y dentro de las redes clientelistas sin pretender cambiar nada. Estos grupos tienen dos dimensiones importantes, la dimensión mafiosa y la dimensión económica asociada a los recursos del narcotráfico. Pero no ostentan una dimensión política porque durante la negociación del gobierno con los paramilitares en Ralito, la agenda de estos grupos no contenía ningún objetivo político, sino más bien temas de la órbita jurídica como el tema de la extradición, beneficios jurídicos, la entrega de propiedades. Según Echandía parece una negociación propia de narcotraficantes. Por tanto, según este autor se les define como grupos mafioso, con intereses en el narcotráfico, autónomos del Estado y que sobre todo inciden en el ámbito local.

⁴⁶ Entrevista a Camilo Echandía, Profesor, Universidad del Externado, 4 de julio 2007, Bogotá.

⁴⁷ Entre las contradicciones Echandía destaco el ejemplo de Rodrigo, el comandante del Bloque Metro con Don Berna, los dos con presencia en Medellín y en el oriente antioqueño. Cuando se iniciaron las negociaciones con los paramilitares, Rodrigo produjo unas declaraciones fuertísimas diciendo que no estaba dispuesto a ir a esa ronda de negociaciones entre el gobierno y sectores del narcotráfico. Claramente lo que estaba diciendo es que los que estaban negociando con el gobierno era narcotraficantes y que él era una expresión de una autodefensa pura que no tuvo relación con el narcotráfico. “Obviamente si se indaga en el pasado de ese personaje, él hizo también parte del narcotráfico pero estaba en una pelea con Don Berna, terminó ganándola don Berna que aplastó la estructura militar de Rodrigo. Por otro lado el comandante del Bloque Élder Cárdenas, el Alemán, que era un miembro de las AUC, cuando comenzó las negociaciones dice que él no iba a ser parte de la negociación porque él tenía unos intereses muy fuerte de defender la región del río. Por otro lado habría que recordar el caso de Miguel Arroyave que fue el comandante del Bloque Centauros, que fue asesinado en medio del proceso de paz por sus lugartenientes, por gente de su grupo que finalmente lo desconocieron como comandante de su grupo y terminaron quitándole la vida después que ese personaje también produjo unas declaraciones muy fuertes contra los negociadores que estaban sentadas en Ralito diciendo que esos costños que estaban negociando con el gobierno eran los responsables de haber robado la plata de la salud en la costa y que él obviamente condenaba ese tipo de acciones. Entonces por todos los lados uno ve que no había una unidad real, que lo que hay era un propósito bastante artificioso de presentarse como grupos bajo un mando responsable.

Según el profesor Fernando Cubides (2005, 1998) los paramilitares son agentes organizadores de la violencia. Están formados por una organización flexible de grupos regionales con diferencias entre sí. Forman una estructura de poder que cada vez controla más territorio, amplía las bases de su reclutamiento y procura mantener un equilibrio entre los aspectos normativos, las retribuciones materiales y garantías de estabilidad, de ahí que su organigrama sea cada vez más complejo. Para Cubides (2005) son “grupos armados que al margen de las normas y convenciones del derecho de guerra, combaten a la insurgencia persuadidos de que las armas y los recursos del estado no lo pueden hacer con eficacia”. Es decir su existencia está relacionada con la presencia guerrillera. Según Cubides, no se les puede asemejar con los escuadrones de la muerte porque tienen un origen y características diferentes y porque su método y estrategia han sido definitivos para su crecimiento y consolidación del enorme poder territorial que han adquirido. Respecto a la diferencia entre paramilitares y autodefensas, Cubides señala que todas las autodefensas que persistieron después de 1989 se convirtieron en paramilitares, así los grupos de paramilitares aglutinan a las autodefensas. En su definición se asemeja a la de Volkov y Romero porque catalogan a los hermanos Castaño como capitalistas aventureros equiparables en más de un rasgo a la tradición norteamericana *typical frontier entrepreneurs* por sus empresas en comercio y tierras.

Una aportación de la década de los noventa es la de Rodrigo Uprimny en “La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra sucia”, artículo compilado por Germán Palacio en la obra *La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana* (ILSA, CEREC, 1990, Bogotá). Uprimny analiza la situación de Colombia como de guerra sucia que implica la represión violenta, ilegal y parainstitucional de los movimientos populares y de las diversas formas de oposición política y protesta social mediante el recurso de las amenazas, las desapariciones, la tortura, los asesinatos selectivos y las masacres. Uprimny presenta dos modelos de represión la institucional mediante la utilización del Estado de sitio y la implicación de organismos del Estado en su relación con los grupos armados y la represión parainstitucional. Dentro de esta segunda modalidad examina la nueva forma de represión política, la parainstitucionalidad, que tiene diferentes actores, entre ellos, los escuadrones de la muerte, las bandas de sicarios, los ejércitos privados, los grupos de autodefensas, los grupos de paramilitares y los grupos de limpieza. Define escuadrones de la muerte como organizaciones privadas que actúan en secreto para eludir el enfrentamiento porque son organismos semioficiales o incluso pueden ser autoridades oficiales que buscan ocultar los lazos que les une a los aparatos estatales legales. Las bandas de sicarios son más independientes y prestan sus servicios al mejor postor. Están ligados en parte a la economía ilegal. Los ejércitos

privados están controlados por sectores de la mafia y operan en zonas rurales. Cuentan con buenas infraestructuras, están financiadas por el narcotráfico, por los empresarios de la droga, con asesoría de mercenarios extranjeros y una estructura jerárquica militar. Normalmente tienen lazos estrechos con autoridades civiles y militares. Son utilizados como mecanismo militar de protección y como instrumento para una contrarreforma agraria, es decir, parte del dinero del narcotráfico lo reciclaban a través de la compra de tierras. Un ejemplo son las organizaciones armadas del Magdalena Medio.

Respecto a los grupos de autodefensas, Uprimny señala que se formaron bajo la dirección del Ejército por campesinos, terrateniente y capitalistas agrarios tradicionales que eran utilizados como mecanismos privados de represión y control de la población como respuesta armada a los abusos de la guerrilla. Este autor los diferencia de los grupos paramilitares porque éstos colaboran más estrechamente con las autoridades militares y son muy parecidos a los grupos de tarea de la guerra sucia argentina. En último lugar, menciona que los grupos de limpieza social, en defensa del orden y de las instituciones, liquidan a mendigos, pequeños vendedores de droga, delincuentes, prostitutas, homosexuales, etc.

Ante esta clasificación, Uprimny (2008) subraya que en la práctica estos grupos entran en contacto con otras alianzas locales, regionales y nacionales de tal manera que a veces estos actores se confunden entre sí. Para lograrlo, mantienen estrechos vínculos con las élites económicas, y establecen fuertes relaciones de tolerancia, colaboración y complicidad con agentes estatales, que no sólo incluyen a los miembros de la fuerza pública, sino también a agentes de la inteligencia, a políticos locales y a congresistas. Así, los grupos de autodefensas pueden colaborar con los ejércitos de la mafia de tal manera que es difícil distinguirlos. Los grupos paramilitares no están organizados jerárquicamente ni tienen un mando único o centralizado, sino que más bien funcionan como células semiautónomas de estructura nodal. Finalmente, gracias a sus lazos con agentes del Estado, élites terratenientes regionales y el narcotráfico, los grupos paramilitares construyen unas estructuras de poder político y económico mucho más fuertes e importantes que su poder militar. Estas características de los grupos paramilitares sugieren que la paz y la garantía de no repetición de las atrocidades no pueden lograrse simplemente a través de un proceso de desmovilización. En efecto, por sí solo, un proceso de esa naturaleza puede permitir que esas estructuras de poder permanezcan intactas, e incluso que salgan fortalecidas en virtud de un proceso de legalización

Desde el punto de vista de Alfredo Rangel (2005), Director de la Fundación Seguridad y Democracia, define a los grupos paramilitares como un proyecto contrainsurgente civil, autónomos del Estado, fuertemente penetrados por el narcotráfico con muchas estructuras muy complejas. El factor que los aglutina es su propósito contrainsurgente, pero su desarrollo corre independiente de los planes contrainsurgentes del Estado y sus acciones cuestionan el monopolio de la fuerza. Se presentan como la máxima expresión de la debilidad territorial del Estado: sectores de la sociedad civil apoyaron la sedición, apelaron a la justicia privada y hasta se confabularon con el narcotráfico para defender su vida y sus intereses ante el acoso de la guerrilla, pues el Estado los dejó desamparados y al igual que la guerrilla, controlaban territorios donde dictaban leyes, ejercían su justicia y recaudaban impuestos. Rangel detalla que los paramilitares están necesariamente vinculados con el narcotráfico, tanto para financiar su organización armada como para su lucro personal, con mando sobre un ejército privado regular que ejerce funciones de Estado -monopolio de la violencia, la tributación y la justicia-, sobre un territorio.

El investigador del CINEP Fernán González⁴⁸, afirma que se puede diferenciar entre grupos de autodefensas y grupos paramilitares con varios tipos de grupos dentro de cada concepto aunque Carlos Castaños con las AUC intentó homogeneizar los grupos, centralizarlos, pero subestimó la diferencia entre los grupos. La diferencia entre los dos grupos se encuentra en la estrategia, es decir, los grupos de autodefensas se mueven en un ámbito regional y son grupos defensivos, mientras que los grupos paramilitares se expanden a otras regiones y son grupos ofensivos. Según González se distingue tres grupos: paramilitares puros, paramilitares narcotraficantes y las autodefensas locales y regionales. Cada uno de estos tres grupos tiene diferencias regionales muy profundas porque en Colombia las tradiciones regionales políticas son muy diferentes y se reflejan en el tipo de movimiento. En esta misma línea y compañero de Fernán González del CINEP, Teófilo Vásquez⁴⁹ profundiza en la división que hace González. Para Vásquez las autodefensas tienen la función de neutralizar y sacar la acción guerrillera de su región. Surgen en los sectores rurales ante los abusos de la guerrilla como respuestas de las elites ante la inviabilidad económica de la región por la presencia guerrillera. Pero por otra parte están los grupos paramilitares que son grupos que cuentan con ayuda del Estado sobre todo de las Fuerzas Militares para acabar con la guerrilla como un grupo contrainsurgente. Un tercer grupo que diferencia son los grupos narcoparamilitares que se insertan en la economía cocalera y se convierte en una fuerza contrainsurgente, en un ejército privado al servicio del apuntalamiento

⁴⁸ Entrevista a Fernán González, Investigador CINEP, 6 de julio 2007, Bogotá.

⁴⁹ Entrevista a Teófilo Vásquez, Investigador CINEP, 6 de julio 2007, Bogotá.

del modelo económico mafioso. La aportación de Vásquez es que estos tres tipos de tipologías son sincrónicos y diacrónicos en el tiempo es decir, se pueden contemplar esta división en la actualidad pero también se distinguen diferentes etapas del proceso pues hay grupos que evolucionaron de autodefensas a paramilitares y a narcoparamilitares y otros grupos que se mantienen como autodefensas. Pero aún así también dependen del tipo de economía en el que se asientan, es decir, es diferente los grupos paramilitares que se encuentran en una economía agroindustrial o los grupos de autodefensas que se ubican en economías cocaleras o los que están al servicio de las multinacionales. Por tanto, es un fenómeno muy heterogéneo que se concentra bajo el mismo paraguas del “paramilitarismo”. Como se denota, ambos investigadores comparten la misma posición frente al paramilitarismo. Según ellos, además tienen un proyecto político, social y económico con alcances nacionales y diversidades regionales al vaivén de las coyunturas políticas, de la interacción con sectores sociales determinados y con respecto a las políticas públicas (González, Bolívar y Vázquez, 2006).

Pecaut (2001, 2006) relaciona la existencia de los grupos paramilitares al narcotráfico, siendo MAS la primera organización paramilitar al servicio del narcotráfico. También destaca la relación con las Fuerzas Militares, pues se apoyaron en éstos grupos para liderar la guerra sucia contra la guerrilla. Pero hace más énfasis en definirlos como un ejército paralelo dirigido por las AUC, donde los narcotraficantes son una de las bases de los grupos paramilitares. Dentro de estos grupos también diferencia entre paramilitares y autodefensas, siendo ésta última una organización de campesinos con armas militares para defenderse de la guerrilla.

Claudia López, investigadora y consultora de Naciones Unidas, es especialista en los grupos paramilitares y su infiltración en política tal y como relata en su último libro *Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano* (Radom House, Corporación Nuevo Arco Iris, 2010, Bogotá). Según López se observa una evolución de autodefensas a paramilitares. En un primer momento existieron las autodefensas como “una reacción desarticulada, primaria y privada al acoso de la guerrilla”⁵⁰ Posteriormente evolucionan a paramilitares, es decir a “estructura paraestatal, claramente promovida por los diferentes estantes militares en Colombia. Ahora por ejemplo todos los comandantes paramilitares que se encuentran en el proceso de paz han confesado que hacían operaciones conjuntas con los paramilitares. Eran digamos un poco un brazo armado adicional a los militares, por eso su nombre. No solamente tienen esa relación abierta con lo militares en Colombia sino en general

⁵⁰ Entrevista a Claudia López, 29 de agosto de 2007, Bogotá.

con los estamentos del poder. Son hijos del poder”. Por tanto, los paramilitares son estructuras articuladas organizadas, aliadas con miembros del estado y cada vez menos con propósitos contrainsurgentes y más vinculados al negocio del narcotráfico supuestamente. La principal estrategia de los grupos paramilitares es el apoyo de las estructuras del poder político, económico y militar. El objetivo de estos grupos narcoparamilitares no solamente es económico sino también político, social y penal (López, 2010).

En conclusión este apartado resumió las principales definiciones de los grupos paramilitares. A través de los matices de cada autor es palpable la dificultad del fenómeno paramilitar y la variedad de enfoques. El siguiente cuadro recoge los diferentes tratamientos que cada autor examinado dio a los grupos paramilitares. Para algunos autores primaron denominarles de una manera diferente a como comúnmente se les ha denominado, es el caso de Mauricio Romero, Gustavo Duncan o Camilo Echandía que niega que se les pueda estudiar dentro de los conceptos clásicos de autodefensa y paramilitar. Teófilo Vásquez y Fernán González, apuntan a un entramado más complejo donde se combinan varias definiciones (paramilitares, narcoparamilitares y autodefensas) según el contexto regional. La mayoría de estos investigadores afirman que hay diferencias entre el concepto paramilitar y autodefensa y que hay una evolución lineal de autodefensa a paramilitar. No obstante de nuevo Vásquez y González admiten que estos grupos pueden ser sincrónicos y diacrónicos en el tiempo, es decir que si se puede dar una evolución de autodefensas a paramilitares pero también podemos encontrar autodefensas puros en la década de los noventa sin haber evolucionado a formas paramilitares o narcoparamilitares.

Tabla 2. Definición de paramilitarismo según diferentes autores

AUTOR	DENOMINACION	DEFINICIÓN	COMENTARIOS
MAURICIO ROMERO	Violent entrepreneurs	Individuo especializado en administración, despliegue y uso de la violencia organizada, la cual ofrece como mercancía a cambio de dinero u otro tipo de valores	Diferencia entre autodefensas y paramilitares. Evolución lineal de autodefensas a paramilitares
GUSTAVO DUNCAN	Señores de la guerra	Grupos con hegemonía político-militar. Forman un	No hay que catalogarlos ni como paramilitares, tampoco p hablar de que sean estrictament

		<p>ejército, controlan las redes de políticos y de narcotraficantes. Cumplen los tres monopolios básicos: violencia, tributación y justicia. Actúan a nivel regional y tienen un proyecto regional. Explotan las redes internas comerciales legales e ilegales. Imparten justicia a cambio del pago de impuestos transacciones etc.</p>	<p>contraguerrilleros.</p>
<p>FRANCISCO LEAL</p>	<p>Autodefensas, estructuras mafiosas</p>	<p>De AUC a estructuras mafiosas segmentadas mediante el enriquecimiento a través del desplazamiento campesino, a través de infiltrar en las instituciones del Estado y el proyecto político mediante la toma de las regiones, la costa, las asambleas, el congreso, las gobernaciones, las alcaldías, etc.</p>	<p>De autodefensas a estructuras r segmentadas</p>
<p>EDUARDO PIZARRO</p>	<p>Autodefensas, Paramilitares</p>	<p>Comenzaron como autodefensas ante los excesos de las guerrillas pero se convirtieron en bandas criminales con un pequeño barniz político pero</p>	<p>una evolución lineal de autodef paramilitares</p>

		con una convicción absolutamente criminal. Crearon estructuras políticas de carácter mafioso donde había políticos, empresarios, elites regionales	
CARLOS MEDINA	Violencia parainstitucional (Paramilitares)	Los paramilitares son un tipo de violencia parainstitucional que se desarrolla en las zonas rurales. Controlan la economía, la política, las fuerzas militares de un territorio determinado. Crearon repúblicas independientes o paraestados. La conexión con el narcotráfico surgió una nueva modalidad de paramilitar, el narcoparamilitar.	
CAMILO ECHANDIA	Grupo mafioso	Grupos mafioso, con intereses en el narcotráfico, autónomos del Estado y que sobre todo inciden en el ámbito local no tienen ninguna unidad político-militar, sólo la dimensión mafiosa y la dimensión económica asociada a los recursos del narcotráfico. Pero no tienen una	No se les puede catalogar de autodefensas porque son ofensivos ni tampoco de paramilitares porque tienen una enorme autonomía frente al Estado y tienen una enorme cercanía con el narcotráfico. No se les puede estudiar dentro de los modelos clásicos de autodefensas o paramilitares

		dimensión política	
FERNANDO CUBIDES	Paramilitares	Son agentes organizadores de la violencia. Está formado por una organización flexible de grupos regionales con diferencias entre sí. Es una estructura de poder que cada vez controla más territorio, amplía las bases de su reclutamiento y procura mantener un equilibrio entre los aspectos normativos, las retribuciones materiales y garantías de estabilidad, de ahí que su organigrama sea cada vez más complejo	Evolución lineal de autodefensas paramilitares
RODRIGO UPRIMNY	Parainstitucionalidad: grupos de autodefensas y paramilitares	Presenta a Colombia como un contexto de guerra sucia donde examina dos modelos de represión la institucional y la represión parainstitucional (escuadrones de la muerte, las bandas de sicarios, los ejércitos privados, los grupos de autodefensas, los grupos de paramilitares y los grupos de limpieza)	Diferencia grupos de autodefensa y paramilitares

ALFREDO RANGEL	Paramilitares	Proyecto contrainsurgente civil, autónomos del Estado, fuertemente penetrados por el narcotráfico y tienen muchas estructuras muy complejas, con mando sobre un ejército privado regular que ejercer funciones de Estado - monopolio de la violencia, la tributación y la justicia-, sobre un territorio.	
FERNAN GONZALEZ	Paramilitares, paramilitares narcotraficantes y autodefensas	La diferencia que hay entre los dos grupos es relativo a la estrategia, es decir, los grupos de autodefensas se mueven en un ámbito regional y son grupos defensivos, mientras que los grupos paramilitares se expanden a otras regiones y son grupos ofensivos	Distingue tres grupos: paramilitares puros, paramilitares narcotraficantes y las autodefensas locales y regionales, con diferencias regionales muy profundas. Hay varios tipos dentro de cada grupo.
TEÓFILO VASQUEZ	Paramilitares, autodefensas, narcoparamilitares	<i>Autodefensas:</i> defensivas, aliadas a las elites <i>Paramilitares:</i> grupo contrainsurgente, aliado al Estado y Fuerzas Militares	Tres tipos de tipologías son sincrónicos y diacrónicos

		<i>Narcoparamilitares:</i> grupo contrainsurgente con economía cocalera, ejército privado al servicio del apuntalamiento del modelo económico mafioso.	
DANIEL PECAUT	Paramilitares, autodefensas	Ejército paralelo	Relacionado con narcotraficantes y militares
CLAUDIA LÓPEZ	Paramilitares, narcoparamilitares	Estructuras paraestatales, aliadas con miembros del estado y cada vez menos con propósitos contrainsurgentes y más vinculados al negocio del narcotráfico	Evolución lineal de autodefensas paramilitares

Fuente: elaboración propia

2.3.3 Los paramilitares como grupos paraestatales

Una vez que se ha realizado una comparación de cómo se puede definir a los grupos paramilitares por parte de los académicos que más han profundizado en su estudio se propone una definición que se irá demostrando en los sucesivos capítulos.

Los grupos paramilitares en Colombia son un fenómeno múltiple. Bajo el mismo paraguas de “paramilitarismo” se refugian varios grupos. Por ello resulta difícil esclarecer el objetivo de estos grupos debido a la complejidad regional de cada grupo. Aunque se mostraron como una unidad político-militar durante el proceso de desmovilización, sin embargo fue una estrategia para conducirlos a una salida negociada del conflicto. Dentro de este mismo fenómeno se diferencian grupos de autodefensas, paramilitares o narcoparamilitares. Los grupos de autodefensa son grupos defensivos, organizados por las elites y ubicados en las zonas rurales. Los grupos paramilitares son grupos contrainsurgentes, ofensivos, expansionistas y cuentan con ayuda institucional. Los grupos narcoparamilitares son ejércitos privados dirigidos por grupos mafiosos

y buena parte de su economía se basa en el narcotráfico. Estos grupos pueden haber evolucionado de autodefensas a paramilitares y de éstos a narcoparamilitares o bien pueden no haber evolucionado. Es decir, de la misma manera que antes lo comentó el Prof. Vázquez y el Prof. González, eran diacrónicos y sincrónicos en el tiempo. Así se encontró las Autodefensas de Ortega (Cauca) que nacieron como autodefensas y se desmovilizaron como autodefensas. En esta categoría también puede calificarse a las autodefensas del Magdalena Medio lideradas por Ramón Isaza. Los paramilitares del Bloque Norte liderados por Jorge 40 nacieron como autodefensas y se desmovilizaron como paramilitares con parte de su economía controlada por el narcotráfico pero a una escala diferente del Bloque Cacique Nutibara liderado por Don Berna en Medellín. El grupo paramilitar de Córdoba y Urabá liderado por los hermanos Castaño pasó de una fase de autodefensa a paramilitar para luego volverse narcoparamilitar ya con Salvatore Mancuso como líder. Las características de cada bloque también varían en función de la región donde se asienten, su historia, los diferentes poderes del territorio en cuestión, su geografía, la economía de cada territorio etc. Por tanto podemos tener grupos que se asienten en economías latifundistas, economías cocaleras, al servicio de empresas multinacionales, etc. Por tanto, bajo esta misma definición podemos encontrar una multitud de grupos con diferentes características.

Sin embargo, y discrepando con la visión de Duncan, estos grupos aún siendo numerosos y bien organizados, desde el punto de vista militar, no forman ejércitos privados, sino más bien esas estructuras militares son un elemento básico de defensa y protección de estructuras mafiosas que se insertan dentro de las relaciones clientelares clásicas de la sociedad colombiana. Estos grupos constituyen un actor más que dentro de esta estructura clientelar conversa con el Estado en el mismo nivel que los demás actores que se encuentran dentro de esa estructura. A pesar de esto se diferencia de los demás actores clientelares en lo siguiente: la utilización de la violencia como medio de penetrar en el territorio, en los ciudadanos y en las instituciones; el financiamiento de sus actividades en su mayor parte por el narcotráfico y la capacidad de cooptar en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales (Álvarez, 2007).

Esta dimensión del fenómeno paramilitar se extendió al ámbito local, regional y nacional, muestra de ello fueron sus nexos con políticos en la llamada “parapolítica”. A pesar de ésta relación también cooptaron otros ámbitos como la justicia, el cobro de impuestos, las fuerzas militares, el tejido empresarial etc. Por tanto, estamos ante un fenómeno complejo y de tal magnitud que es difícil encasillarlo dentro de la palabra “paramilitarismo” pues no solamente tuvieron ayuda institucional, usaron el método contrainsurgente y se expandieron por determinadas regiones sino

que los paramilitares cumplieron con los requisitos mínimos que se le debe poner a lo que uno llama “estado”. Es decir, tuvieron funciones relacionadas con el monopolio legítimo de la fuerza, el monopolio legítimo de la administración de justicia y el monopolio legítimo de control de impuestos. Por tanto, ante estas actuaciones es más acorde llamarles “grupos paraestatales” debido a su influencia en tres ámbitos de gobierno y en diferentes aspectos de la sociedad.

A lo largo de la historia colombiana se ha discutido la naturaleza del fenómeno paramilitar en el sentido de si había que considerarlos actores políticos del conflicto armado. Según el Protocolo II de adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977, dice que es necesario que un grupo armado “ejercen sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”⁵¹. También subraya que se protege las garantías fundamentales de trato al ser humano, es decir, “Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes”⁵². Los grupos paramilitares controlaron territorios determinados de Colombia, por tanto el artículo 1 si se ajusta a ellos. Sin embargo, no practicaron el derecho internacional humanitario pues cometieron graves delitos y masacres contra la población civil.

Si consideramos que los actores políticos llevan a cabo delitos políticos, éstos se cometen contra el Estado o para subvertir el orden constitucional establecido. En este sentido los grupos paramilitares no están en contra del estado sino que actúan con el estado para mantener el status quo. Según las AUC “si buscar derrocar el régimen constitucional vigente es un delito político, también lo es pretender levantarse en armas para defenderlo, que es el caso específico, concreto e incuestionable de las autodefensas”⁵³. Las AUC se entendían a sí mismas como actores políticos porque tenían el deseo de mejorar las condiciones de vida de un grupo o de intentar impedir que se instalase otro gobierno en el poder. Según ellas mismas, eran un medio armado de defensa de

⁵¹ Artículo n°. 1, Ámbito de aplicación material, Protocolo II de adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977. Disponible en <http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm#2>

⁵² Artículo n°. 4, Garantías fundamentales, Protocolo II de adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977. Disponible en <http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm#2>

⁵³ Texto extraído de Rivas (2008) relativo a un documento de las AUC *Las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, desde la perspectiva jurídica, 2003*

las instituciones del ataque de los violentos, los terroristas y los insurgentes (Rivas, 2008). De esta manera, al ser vistos como sediciosos tendrían un tratamiento favorable sin extradición, asilo, reducción de penas, indulto o amnistía. Además en ningún momento ningún gobierno les proclamó como subversivos o contraestatales. Por tanto, no se les puede denominar como fenómeno contraestatal. Por ende, no se les puede definir como actores políticos.

En la tabla 3 se observa las diferentes opiniones sobre este tema de considerar o no a los paramilitares de actores políticos. Se puede comentar que la mitad de los entrevistados afirman que si son actores políticos mientras que el resto los define de otra manera.

Tabla 3. ¿Son los paramilitares actores políticos?

AUTORES	¿Los grupos paramilitares son actores políticos?
EDUARDO PIZARRO Expresidente Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación	Simbiosis del poder político y económico para construir redes mafiosas
JORGE ENRIQUE ROBLEDO Senador Polo Democrático Alternativo	Paraestatal
CAMILO ECHANDÍA Docente-Investigador, Universidad del Externado	Narcotraficantes, sin agenda política, con poder económico
GUSTAVO DUNCAN Profesor Universidad de los Andes	Actores políticos
GUSTAVO PETRO Senador Polo Democrático Alternativo	Poder mafioso
MAURICIO ROMERO Docente Universidad Javeriana	Actores políticos con Carlos Castaño
PABLO CASAS DUPUY Investigador Fundación Seguridad y Democracia	No son actores políticos, son delincuentes
SALUD HERNANDEZ Periodista	No son actores políticos, utilizan la política como estrategia.
TEÓFILO VÁSQUEZ Investigador CINEP	De actores económicos a actores políticos
CLAUDIA LÓPEZ	Criminales con poder económico, político y

Investigadora, Consultora Naciones Unidas	militar
MANUEL ALBERTO ALONSO Investigador Universidad de Antioquia	Narcotraficantes. Algunos grupos con objetivo político
MAURICIO POMBO Periodista, Filósofo	Actor político
GABRIEL MURILLO Profesor Universidad de los Andes	Actor político
FRANCISCO LEAL BUITRAGO Catedrático emérito, Universidad de los Andes	Actor político y económico
ANA MARÍA QUINTERO Investigadora Comisión Colombiana de Juristas	No son actores políticos son grupos de combatientes

Fuente: elaboración propia

2.4. Conclusión

El objetivo de este capítulo fue establecer un marco contextual al fenómeno paramilitar mediante una revisión bibliográfica de sus fuentes. Por un lado se examinó aquellas fuentes bibliográficas relacionadas con la violencia en Colombia a través de dos puntos de vista. En primer lugar aquellas fuentes relacionadas con una perspectiva estructural de la violencia como los estudios de Leal (1991) o Pecaute (1987). En segundo lugar y dentro de esta perspectiva de la violencia, los llamados violentólogos llevaron a cabo una perspectiva de análisis más amplia basada en la teoría multicausal multiculturalista con estudios en dinámica regional, estudios jurídicos, culturales, relacionados con el narcotráfico, etc. Por tanto, se empezó a abrir el estudio de la violencia a diferentes temáticas relacionada con ella, como los actores del conflicto, las consecuencias de la violencia o los cambios de la violencia en la sociedad civil.

Pero, por otro lado, se empezó a profundizar en el estudio de los grupos paramilitares desde diferentes aportaciones desde la década de los años ochenta. Comenzó a tratarse el tema del paramilitarismo desde una perspectiva histórica relacionada con la debilidad estructural del Estado. La disciplina sociológica también jugó un papel importante para analizar a estos actores desde las oportunidades políticas como realizó Romero (2003) o desde la teoría de la organización de Cubides (2005). Varios trabajos miraron a este fenómeno bajo el paraguas de su autonomía frente al Estado como la obra de Rangel (2005) o Vilma Franco (2005) o bajo el

estudio de las fuentes de financiación de estos grupos como los estudios llevados a cabo por Thoumi (2002), Tokatlian (2001) y Krauthausen (1998).

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se realizaron estudios relacionados con el análisis del discurso paramilitar, acercamientos teóricos del paramilitarismo colombiano o biografías y autobiografías de diferentes líderes paramilitares como Mancuso, Castaño o Doble Cero. Sin duda, en los últimos años ha aumentado el número de publicaciones sobre la temática de la parapolítica. A raíz de varias investigaciones de nexos entre la clase política colombiana y algunos grupos paramilitares, se editaron varias obras sobre este tema como la obra de Claudia López (2010) o Mauricio Romero (2007).

Tras la bibliografía referida a estos grupos se llevó a cabo un estudio de la conceptualización del término paramilitar exponiendo aquellos autores que han teorizado sobre los paramilitares desde diferentes realidades como la colombiana, rusa, italiana y africana. Se hizo más énfasis en aquellos autores que desde una perspectiva colombianista establecieron un análisis conceptual de los paramilitares. Se contó con las aportaciones de Mauricio Romero, Gustavo Duncan, Francisco Leal, Eduardo Pizarro, Carlos Medina, Camilo Echandía, Fernando Cubides, Rodrigo Uprimny, Alfredo Rangel, Fernán González, Teófilo Vásquez, Daniel Pecaut y Claudia López. Una serie de estos investigadores se posicionan por la idea de que hay una evolución de autodefensa a paramilitar, y por ello establecen diferencias para estos dos grupos. Otros investigadores apostaron por denominarles con otros términos, como fue el caso de Duncan con señores de la guerra, Echandía con grupo de mafiosos y Medina con la definición de narcoparamilitares.

Ante esta diversidad, se incorpora una nueva definición atendiendo a la multitud de realidades que se engloba bajo el paraguas paramilitar, como son autodefensas, paramilitares y narcoparamilitares. Se sugiere denominarlos como grupos paraestatales pues cumplieron con diversas funciones del Estado, como fue el monopolio de la fuerza, de la administración de justicia y del control de impuestos. De la misma manera, se puso en cuestionamiento si realmente eran actores políticos o no. Se llegó a la conclusión, tras observar la opinión de diferentes académicos, políticos y periodistas, que no son actores políticos pues no son actores contraestatales y agredieron a la sociedad civil, atentando contra el Protocolo II de los Convenios de Ginebra de 1949.

Capítulo 3. Orígenes y antecedentes del fenómeno paramilitar en Colombia

El proceso de formación de grupos paramilitares en Colombia se situó en la década de los años ochenta durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-86). Durante esta primera etapa surgieron organizaciones de autodefensas y paramilitares apoyados por terratenientes, ganaderos, políticos locales, miembros de las Fuerzas Militares y narcotraficantes. El primer experimento de creación de grupos de autodefensa fue en *Puerto Boyacá*, área de migración boyacense de la zona esmeraldífera y colonización antioqueña. En este contexto surgió la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio- ACDEGAM- institución que estableció escuelas de preparación militar con asesoría de instructores británicos e israelíes quienes preparaban a los grupos de paramilitares. La relación entre grupos paramilitares y narcotráfico se vio acentuada desde la creación del grupo Muerte a Secuestradores- MAS- en 1981. Durante la etapa de expansión de estos grupos, la experiencia de Boyacá se extendió a otros departamentos como Córdoba, Sucre, Urabá y bajo Cauca antioqueño. Desde Córdoba, los hermanos Castaño Gil reorganizaron el proyecto paramilitar en torno a las Autodefensas Colombianas de Córdoba y Urabá- ACCU- en 1996 y las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC- en 1998. En la tercera etapa de consolidación, las AUC se definieron como *organización político-militar en búsqueda del reconocimiento político*. Su objetivo no era enfrentarse al Estado, sino suplir sus debilidades. Aunque se presentaron como una organización federada en diferentes bloques y frentes pero bajo un mismo mandato y objetivo, la realidad era diferente. Bajo la definición paramilitar había numerosos grupos, intereses, objetivos diferentes que no podían establecerse bajo una misma denominación. La tolerancia del gobierno central hacia estos grupos fue disminuyendo en la tercera fase de consolidación de estos grupos en determinados departamentos. Durante el gobierno de Andrés Pastrana pero sobre todo en la administración de Álvaro Uribe se elaboró una estrategia política de enfrentamiento mediante el aumento de los combates de la Fuerza Pública, la apertura de un proceso de negociación con los grupos paramilitares y un reforzamiento de la legitimidad militar por sus nexos con el paramilitarismo. En este contexto, la desmovilización de grupos paramilitares llevada a cabo por la Administración de Álvaro Uribe desde el 2003, tuvo como efecto colateral y positivo las acusaciones a determinados políticos por sus nexos con grupos paramilitares por varios motivos como la conformación de grupos armados, el desvío de parte del presupuesto local a las arcas paramilitares, el apoyo a determinados candidatos en las elecciones o por haberse reunido con varios jefes paramilitares. También fueron salpicados algunos militares, empresarios y funcionarios públicos. Durante el proceso de negociación se produjo una crisis entre el gobierno central y los grupos paramilitares

por la extradición a Estados Unidos de algunos jefes paramilitares y el fallo de la Corte respecto a la Ley de Justicia y Paz. Además algunos grupos paramilitares se reorganizaron en determinados departamentos colombianos.

El anterior resumen muestra la evolución histórica de los grupos paramilitares desde su formación, expansión y consolidación en el territorio colombiano. Aunque el núcleo de análisis es justamente ese periodo, antes de él, se describe y analiza los antecedentes de la formación y consolidación de la acción política de estos grupos y el contexto en el que fueron creados. Es decir, antes de la aparición de los primeros grupos de autodefensas y paramilitares en la década de los ochenta, hay que tener en cuenta aquellos factores que incidieron en la conformación de estos grupos. Para ello se retrocede hasta la época de La Violencia y el Frente Nacional. Estos dos periodos fueron claves para el posterior desarrollo de estos grupos porque el germen del desarrollo y expansión de los paramilitares se generó en esas dos épocas.

3.1 La Violencia y el primer paramilitarismo

Tras un periodo de hegemonía conservadora que se extendió desde 1898 con la presidencia de Manuel Antonio Sanclemente hasta 1930 que terminó con la presidencia de Miguel Abadía Méndez, a partir de 1930 comenzó el periodo conocido como el regreso de los liberales hasta 1946, año señalado por muchos autores como el inicio del periodo de La Violencia. A partir de 1930 los intentos modernizadores impulsados por el partido liberal crearon fuertes reacciones en los sectores más conservadores y de la Iglesia católica provocando un clima de polarización política y social. El intento de homogeneización política en regiones donde la competencia era intensa y el dominio de los partidos no estaba claro aumentó el clima de violencia. El clima de las elecciones legislativas de 1947 y la muerte del candidato liberal Gaitán produjeron un clima de violencia más generalizada. A este ambiente se sumaron los conflictos agrarios rurales derivados de la ley 200 de tierras de 1936. Por su parte, los partidos políticos formaron grupos armados para enfrentarse a sus adversarios políticos. El resultado de este periodo fue un total de 200.000 muertos. En resumen, las transformaciones políticas modernizantes, el conflicto agrario y la lucha bipartidista originaron la violencia generalizada de la década de los cincuenta.

Sin embargo la violencia tuvo diferentes modalidades en función de la articulación e integración a la nación a través de redes comerciales, políticas y sociales de las diferentes sociedades locales. Así la diversidad de situaciones regionales hizo que la modalidad de lucha y los niveles de enfrentamientos variaban de región a región. De esta manera la violencia en los municipios

integrados fue electoral o partidista, en torno al acceso de puestos públicos pero sin connotaciones revolucionarias como por ejemplo la violencia de la primera etapa que se centró en las regiones cafeteras. Por otro lado, en los municipios de frontera, como en los Llanos orientales, la violencia se desplazó hacia objetivos más radicales. Bandas, contrachusma y guerrillas estuvieron presentes en las zonas de frontera de Antioquia revelando la precariedad del control político y la indefinición de jerarquías políticas. Estas diferentes confrontaciones evidenciaban una desarticulación de niveles de poder que hizo que la violencia se resolviera a nivel regional, local y veredal regresándose a las solidaridades y enfrentamientos prepolíticos como los lazos de parentesco y vecindario o los llamados odios heredados. M.^a Victoria Uribe (1990) señala la importancia de las “venganzas de sangre” para explicar la violencia en el Tolima o en las zonas minifundistas de Boyacá donde la gente peleó por su propia identidad veredal y local. El regreso a los métodos privados señaló una violencia desorganizada y descoordinada. La fragmentación del poder hizo que la violencia escapara del control del Estado porque los poderes locales y regionales sustituyeron al Estado. Por tanto, la violencia dependió de otras instituciones como la Iglesia, partidos políticos, gremios, organizaciones sociales y de la manera como funcione la sociedad a nivel regional, local y veredal. Paul Oquist apunta que donde la estructura de poder regional y local se mantuvo unida, la violencia fue menor como en la Costa Atlántica o como en Aguadas (Caldas) población rodeada de violencia que a través de la unión de los jefes locales para mantener a violencia fuera de su territorio. Así, la cohesión de los grupos dominantes pudo subsanar una crisis estructural nacional (González, 1993; González, Vázquez, Bolívar, 2006). Por tanto, la violencia de los años cincuenta no sólo fue un enfrentamiento bipartidista sino que en muchas ocasiones la gente peleó por rivalidades entre regiones, pueblos y veredas.

Tanto la violencia de los años cincuenta como la del Frente Nacional fueron precedidas por dos intentos de modernización social y política que desajustó la articulación política y social del momento. Esos intentos fueron la “Revolución en marcha” del presidente liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945) y el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970).

El presidente López Pumarejo, ligado al sector comercial e industrial planteó la necesidad de modernizar el Estado y la sociedad en Colombia mediante el intervencionismo social, ampliación de la participación política sin abandonar el liberalismo económico. Favoreció la acción sindical y legitimó los conflictos obreros. El Estado se presentó como el árbitro de los conflictos sociales. Como indicó Pecaú (2001) era claro que López quiso apoyarse en el pueblo para fortalecer el Estado como actor autónomo frente a los intereses parciales de las fracciones económicas y

políticas. De esta manera la CTC y el Partido Comunista apoyó al gobierno de López. Esto supuso una ruptura con el estilo tradicional de la vida política colombiana. Pero la burguesía comercial y financiera tuvo que seguir transigiendo con las oligarquías locales que se aseguraron el monopolio de la tierra cercana de los centros de consumo y vías de comunicación y con el peso de los intermediarios políticos que controlaban el control social y político. Es decir, las clases dominantes no se organizaron por intermedio del Estado, no se convirtieron en una burguesía nacional coherente sino en una yuxtaposición de intereses fragmentarios de las diferentes facciones de la burguesía. Los cafeteros e industriales intentaron limitar toda interferencia estatal⁵⁴. Sin embargo la intervención del estado fue limitada. Mediante la ley 200 de tierras intentó poner fin a los conflictos de épocas anteriores, pero la ley no reconoció las propiedades de los colonos que ocuparon la tierra después de 1934 y fortalecía la apropiación de tierras conseguidas por los hacendados. Los antiguos colonos se convirtieron en ocupantes de hecho y se consolidaron las grandes propiedades en Colombia. No se formó una nueva élite dirigente, ni surgieron nuevos sectores sociales, no apareció una nueva burocracia de clase media ni ejército con la ideología del intervencionismo estatal ni un movimiento de masas populista. Las principales limitaciones del gobierno de López fueron que siguió utilizando los intereses privados en el seno del gobierno. Aunque atacó a la oligarquía liberal, no rompió con el bipartidismo, continuó alentando la división partidista. Los intentos modernizantes despertaron resistencias por parte de los propietarios agrarios y los gremios empresariales. El Partido Conservador y los sectores moderados del Partido Liberal bloquearon sus reformas sobre todo aquellas que permitían la presencia de los comunistas en los sindicatos y la polarización de las masas populares. Por otra parte el Partido Conservador se opuso a la reforma constitucional de la secularización de la sociedad y del Estado. Con estas reformas López pretendió modernizar el Estado, el Partido Liberal y crear una nueva concepción de ciudadanía donde el pueblo estuviese representado como sujeto político por intermedio del Estado.

Estos enfrentamientos enmarcaron el surgimiento del populismo gaitanista y el fundamentalismo conservador partidista y del clero aumentando el ambiente de violencia aunque ésta se desencadenó bajo el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez (1946-1950). El movimiento populista de Gaitán profundizó aún más en la división del Partido Liberal. El gaitanismo surgió al final del periodo de López Pumarejo. En palabras de Leslie Bethell: “Gaitán

⁵⁴ El gobierno de López intentó convertir la Federación de Cafeteros en un instrumento estatal para defender los precios internos y externos del grano a través de la limitación de las exportaciones en concertación con Brasil. Una de los ejemplos de que la burguesía cafetera se alineó al liberalismo económico fue porque durante la crisis de 1930 no se vieron obligados a pedir ayuda al estado porque la caída de precio se vio compensada por el aumento de la cantidad exportada aunque si obtuvo ayudas del Estado por los problemas causados por la Segunda Guerra Mundial.

supo captar el estado anímico del pueblo. Hombre de figura imponente, era un orador eficaz con un gran sentido de la teatralidad y la espectacularidad, atractivo para algunos campesinos conservadores y miembros de la clase media además de para las masas liberales” (Bethell, 1992: 194). Por lo tanto, el *gaitanismo* se nutrió de una amplia base de apoyo social. Como señala Bethell (1992), el *gaitanismo* nunca fue una expresión clara de política de clase y demostró las dificultades con que chocaba la movilización populista en un país donde la industrialización sustitutiva de importaciones era limitada y estaba asociada con los intereses arraigados. Después de las elecciones presidenciales de 1946 Jorge Eliécer Gaitán se hizo con el liderazgo del Partido Liberal.

El sucesor de López Pumarejo fue Eduardo Santos (1938-1942) que siguió apostando por un Estado que fuera el regulador de los conflictos sociales. Pero con él se acentuó la desconfianza frente a la presencia comunista en los sindicatos y en la movilización popular. Tanto el Partido Comunista como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) apoyaron a Santos. Tras Santos volvió López Pumarejo que gobernó desde 1942 hasta 1945. En este segundo gobierno se redujo la acción del Estado a su función instrumental. Se consolidaron la acción de los gremios empresariales reduciendo la autonomía del Estado. López perdió el control de la situación política y tuvo que hacer frente a un intento de golpe militar en Pasto en 1944 y a la división en el seno del Partido Liberal. Ante esta situación López se retiró de la política y fue sustituido por Alberto Lleras Camargo (1945-1946).

El historiador colombiano Marco Palacios (2002) señala la primera época de *La Violencia*, de 1945-46 a 1953 como la fase germinal de la violencia del sectarismo bipartidista que comenzó en la campaña electoral de 1945-46 y que supuso el triunfo del ala conservadora en la figura de Mariano Ospina Pérez. Este periodo fue el resultado de la confrontación de las elites por imponer desde el Estado nacional un modelo de modernización conforme a pautas liberales o conservadoras. No obstante, en el ámbito local, el sectarismo ahogó a todos los grupos, clases y grandes regiones del país. Adicionalmente en el ámbito internacional, la Guerra Fría exacerbó la división liberal-conservador (Palacios, 2002: 630).

El Gobierno de Ospina (1946-1950), llamado de *Unión Nacional*, formó un gabinete que estaba compuesto tanto de liberales como de conservadores, al igual que en las gobernaciones. Los conservadores que aspiraban a algún cargo exigían un régimen partidista aun cuando su control no abarcaba el Congreso ni la mayoría liberal de algunos departamentos. Intentaron desplazar a

los liberales en las elecciones a mediado del mandato. Así como también eligieron a policías conservadores y destituyeron a liberales en departamentos donde la coacción y la fuerza pudieran influir en el voto. Por tanto, esta primera fase de la violencia empezó en los departamentos de Boyacá y Santander, sobre todo en aquellos municipios donde ninguno de los dos partidos dominaba de modo claro (Bethell, 1990: 195). Fernando Gaitán, añade que la causa del inicio de la violencia se encontraba en el intento del Partido Conservador por disminuir la influencia del Partido Liberal mediante la politización de la policía y permitiendo el surgimiento de bandas paramilitares, es decir intentaron realizar una homogeneización política conservadora forzada. Esta utilización del gobierno y la Policía para asentar la hegemonía de un partido provocó la violencia. El incremento de la violencia creó las condiciones idóneas para que prosperara el bandolerismo, la delincuencia común y la creación de grupos guerrilleros. La quiebra de las autoridades estatales incluyó la corrupción policial y determinó la inoperancia del sistema judicial en todo el territorio nacional. Esto supuso que los crímenes, incluidos los de funcionarios públicos no pudieran ser reprimidos (Deas y Gaitán, 1995: 209).

La geografía de la violencia se superpuso a la del café. Durante la primera etapa de la violencia la mayoría de las víctimas se concentraron en el Viejo Caldas, sobre todo en el Quindío, en Tolima, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Valle. También incidió en el Meta, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Bogotá y Cauca. En el resto de los departamentos las víctimas fueron pocas. En esta etapa se calcularon 180.000 muertes. Para la segunda etapa de la violencia descendió el número de víctimas y se desplazó hacia la zona cafetera de la cordillera Central, aumentando en el Valle y disminuyendo en los Santanderes. Por tanto los departamentos implicados fueron: Tolima, Valle, Viejo Caldas, Huila, Santander, Cauca, Cundinamarca, Meta y Boyacá.

Ambos partidos contribuyeron a desestabilizar el orden político. Los liberales alternaban la oposición y la cooperación con el Gobierno; los conservadores usaban un lenguaje provocador. Finalmente los liberales se retiraron de la coalición. El descontento popular era alimentado por la inflación, el hacinamiento urbano debido al desplazamiento de santandereanos y boyacenses por la violencia y, por los proyectos del gobierno destinados a acrecentar su prestigio.

En los municipios se emprendieron operaciones de limpieza sectaria en las veredas dominadas por el partido minoritario. Este patrón geográfico de propagación de la violencia se intensificó a raíz de la muerte del jefe único del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán el nueve de abril de 1948. Su muerte provocó levantamientos espontáneos en Bogotá y en varios municipios. Tras este

suceso, Mariano Ospina Pérez, presidente del gobierno por el Partido Conservador anunció que había llegado a un acuerdo con el Partido Liberal para formar un gobierno bipartidista⁵⁵. Pero en menos de un año se despedazó el acuerdo bipartidista. Los liberales optaron abstenerse para presentar candidato al periodo legislativo 1950-1954 como un arma para deslegitimar al nuevo presidente, Laureano Gómez (1950-1953), y al Partido Conservador⁵⁶ (Palacios, 2002: 634).

Ambos partidos sufrieron faccionalismo dentro de su seno. Así algunos liberales optaron por apoyar y crear guerrillas⁵⁷. Otros liberales desconfiaron de esas guerrillas pues en muchas de ellas militaban dirigentes de las juntas revolucionarias locales que surgieron a raíz del asesinato de Gaitán. El ala lopista, intentó establecerse como mediadora entre guerrillas y gobierno pero con escaso éxito. Asimismo el partido conservador sufrió el faccionalismo en laureanistas, ospinistas y alzatistas. Algunos campesinos conservadores formaron guerrillas de la paz, organizados por jefes políticos departamentales o directamente llevados a cabo por el ejército y la policía. Respecto a la organización de estas guerrillas no hubo un comando unificado con autoridad nacional. Las más organizadas fueron las guerrillas liberales de los Llanos que lograron imponer impuestos sobre el ganado y negociar con el ejército treguas ganaderas permitiendo el trasiego de animales para su venta.

El gobierno de Laureano Gómez (1950-1953) perdió apoyo entre las clases propietarias, militares y muchos conservadores debido a la incapacidad para poner fin a la violencia y por su mandato autoritario y rígido. Su gobierno cayó en 1953 por causa de un golpe militar, encabezado por el General Gustavo Rojas Pinilla, que contaba con el respaldo de liberales y conservadores opinistas. Esta etapa concluyó con la desmovilización guerrillera en 1953 ante la amnistía ofrecida por Rojas Pinilla, poniendo fin a la violencia sectaria (Palacios, 2002: 237-239). El régimen militar de Rojas Pinilla (1953-1957) prometió poner fin a la violencia y abandonar el autoritarismo pero

⁵⁵ Tras la muerte de Gaitán, Mariano Ospina anunció su propósito de restaurar el gobierno de coalición y así invitar a Echandía, líder natural del Partido Liberal, a ocupar el puesto de ministro de la Gobernación. Sin embargo el renacimiento del partido liberal se frustró por la división entre los liberales moderados y aquellos radicales que exigían la acción directa y formaron Comandos de Izquierda. El aumento de violencia en Boyacá precedió a la retirada de los gobernadores liberales de los departamentos y la retirada de los ministros liberales del gabinete de coalición por parte de Ospina. A estos acontecimientos se sumaron la muerte de un congresista liberal a manos de un conservador, el intento del Congreso de sustituir a Ospina y la declaración de Ospina de cerrar el Congreso, declarar el estado de sitio e imponer la censura de prensa.

⁵⁶ Es más que probable que el ascenso del caudillo conservador Laureano Gómez fue uno de los factores determinantes para impedir el acuerdo que buscaba el presidente Ospina y el ala liberal.

⁵⁷ Entre las guerrillas liberales destaca las de Juan de Jesús Franco, en Urao, los frentes de Eduardo Frando y Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales, las limpias o liberales de Gerardo Loaiza y las comunes o comunistas de Jacobo Prías Alape, en el sur del Tolima.

el régimen se indispuso con sus aliados liberales y conservadores opinistas y provocó una nueva oleada de violencia, parte de ella instigada por Laureano Gómez.

La segunda etapa de *La Violencia* se desarrolló desde 1953 hasta 1964. En estos diez años la violencia tomó la forma de empresas criminales con móviles y objetos económicos pero encubierta de la lucha fratricida bipartidista. Esta etapa se caracterizó por el fenómeno colonizador y los conflictos derivados por la tierra. La tierra fue el medio de ascenso social y económico de hombres que partían de una escala social inferior. Las disputas por la tierra se daban entre colonos pobres y compañías de terratenientes, o colonos situados en las disputas de los linderos municipales, o pleitos entre colonos medios y grandes terratenientes. En estas luchas intervenían alcaldes, jueces, tinterillos, gamonales, curas párrocos. Ante esta situación, la violencia se convirtió en elemento fundador del orden social como resultado de la debilidad institucional del Estado colombiano (Palacios, 2002: 640).

El resultado de las disputas por la tierra de los campesinos y los conflictos entre las guerrillas liberales y comunistas fue la profunda desorganización del campesino que fue presionado a migrar a las cabeceras municipales y cercanas. Algunos autores como Pecaut y Fernán González señalan que la violencia en muchos sentidos fue una prolongación de las luchas agrarias de 1920-1935.

En este periodo, se acentuó en el eje cafetero la aparición de bandas armadas que a pesar de estar ligadas a la lucha bipartidista y a los gamonales, crearon sus propios espacios y sus propias reglas de juego. Estas bandas surgieron de la confrontación entre liberales y conservadores pero, muchos propietarios las hicieron suyas ante el temor de confrontarse con sus enemigos. Así, por ejemplo los llamados *pájaros* se consolidaron en el eje cafetero como asesinos a sueldo que se originaron en el norte del Valle del Cauca y reapareció en el Viejo Caldas donde crearon un sistema mafioso de control del comercio de las ciudades y expulsaron a todo competidor. *Pájaro*, era el nombre referido a las bandas armadas afiliadas al partido conservador que con tolerancia de las autoridades, asesinaban y desterraban a los miembros del partido liberal durante el periodo de La Violencia⁵⁸ (Duncan, 2005). Se denominaban *pájaros* por la rapidez con que llegaban y la presteza con que partían una vez asesinado al adversario político, liberal y comunista. También eran llamados *chulavitas*, en alusión a un pueblo del mismo nombre, conocido por su sectarismo

⁵⁸Como señala Gustavo Duncan (2005), en la actualidad se usa el término *pájaro* para señalar a los guardaespaldas de los jefes locales en las regiones esmeraldíferas.

conservador y de donde eran reclutados amplios contingentes policiales caracterizados por su fanatismo conservador y "laureanista"⁵⁹.

El fenómeno del bandolerismo y del pájaro amenazó con alterar las jerarquías tradicionales en que se basaba el poder político en las zonas rurales. Esto fue debido a que numerosos campesinos formaron bandas de criminales que saquearon pueblos, robaron a comerciantes y extorsionaron a hacendados. Se encontraban aliados a gamonales políticos que los utilizaban para amedrentar a sus competidores políticos y para adquirir tierras a bajo precio (Duncan, 2005).

Varios analistas, entre ellos Mary Roldan (2003), Fernando Guillén (1996), Gonzalo Sánchez y Donald Meertens (1983), analizan la independencia del control político de los bandoleros y pájaros respecto de las jefaturas partidistas locales. Así, el sistema de lealtades verticales de los gamonales fue suplantado por el predominio de los guerrilleros, bandoleros y pájaros quienes comenzaron a construir una estructura de poder independiente mediante robo de tierras, extorsión y usurpación del poder político. La investigación que lleva a cabo Mary Roldan en Antioquia relata la nueva primacía de grupos armados por fuera de las alianzas políticas tradicionales. Así lo describe en el siguiente fragmento:

“Lo que había empezado como una lucha por la propiedad de la tierra entre los colonos y propietarios había abierto el camino para que grupos armados (inicialmente financiados con los terratenientes con la finalidad de desalojar a los disgustados colonos que desafiaban su autoridad) asumieran gradualmente el control sobre la hacienda y actuaran por su cuenta. Los grupos de “autodefensa” sin duda desalojaron a los colonos, pero también provocaron ataques de la guerrilla liberal en la zona y en última instancia crearon una situación de violencia tan grave que los propietarios originales no pudieron ni volver a tomar posesión de sus tierras ni atraer mano de obra para trabajarlas. Para los terratenientes locales, la lección de El Tigre era clara: habilitar a grupos armados, especialmente a aquellos que podían justificar sus actividades violentas mostrándose como aliados del gobierno departamental en una zona caracterizada por luchas por la propiedad y la mano de obra, era sencillamente una estrategia demasiado arriesgada para ellos, incluso a pesar de ser conservadores”⁶⁰

⁵⁹ De Laureano Gómez Castro, presidente de Colombia de 1950 a 1953).

⁶⁰ Fragmento de la obra de Mary Roldan (2003). *A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia. 1946-1953*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología. Colombia. Citado por Duncan, Gustavo (2005): *Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra*. Documento CEDE, enero, 2005. Universidad de los Andes. Bogotá.

Al igual que otros analistas apuntaron (Duncan, 2005; Garzón, 2005), se puede considerar la figura de estos *chulavitas, pájaros o bandoleros* como el antecedente histórico de los grupos paramilitares de los ochenta. Constituyeron el primer referente de creación de grupos de autodefensa por parte de un partido político pero que, posteriormente, evolucionó para constituirse en un grupo de poder autónomo. Por lo tanto, este acontecimiento se considera un referente relevante de la posterior gestación de grupos paramilitares en los ochenta.

Rojas Pinilla cayó el 10 de mayo de 1957 y dejó encargado del poder a una junta militar de cinco generales. Esta Junta Militar estuvo presidida por el General Gabriel París. La Junta Militar se constituyó prácticamente en una simple administradora de la economía e intentó desmontar la violencia partidista, social y delincuencia que aún había en ciertas regiones. Esta junta formó gabinete paritario entre liberales y conservadores, llamó a los partidos a concentrarse en torno a la democracia y convocó elecciones para 1958. Alberto Lleras Camargo, elegido jefe del liberalismo en 1958, junto con Laureano Gómez⁶¹ firmaron un acuerdo en 1956 conocido como Pacto de Benidorm que planteaba una coalición entre liberales y conservadores para restablecer la paz y las instituciones. En junio de 1957 firmaron Lleras y Gómez los temas sustantivos de la coalición bajo el nombre de Frente Nacional y que quedaron recogidos en el Pacto de Sitges y el Pacto de San Carlos. En esencia este frente era la distribución igualitaria entre liberales y conservadores de los cargos del Gobierno, el establecimiento de la paridad en la rama judicial, establecimiento de la carrera administrativa para los empleados públicos y la confirmación del voto de la mujer. La consulta popular fue ampliamente favorable a la propuesta plebiscitaria de coalición, sólo el 4,7% del electorado votó en contra de la coalición bipartidista. En las elecciones de 1958 fue electo Alberto Lleras como Presidente de la nueva etapa democrática (Silva, 1989)

Esta época de violencia generalizada en Colombia donde el sectarismo partidista desencadenó condiciones socioeconómicas y sociopolíticas de carácter no partidista. La violencia fue usada como una herramienta de poder por los grupos socioeconómicos y sociopolíticos. Mientras el Estado no tuvo la capacidad para intervenir. Este panorama fue definido por Paul Oquist como el derrumbe parcial del Estado que se manifestó en “la crisis es inoperancia de las instituciones establecidas, la pérdida de legitimidad del Estado, la apelación del mismo a tácticas terroristas que debilitaron aún más la estructuración social existente, la ausencia física del Estado en grandes

⁶¹ En este periodo el partido conservador estaba totalmente escindido en dos vertientes. Por una parte aquellos opinistas que apoyaban a Guillermo León Valencia como candidato a la elección presidencial de 1958 y por otra parte los laureanistas que apoyaban a Laureano Gómez. Posteriormente el sector encabezado por Gilberto Alzate Avendaño se lanzó contra Laureano Gómez acusándole de pactar con los liberales y con claro afán de disputarse el control del partido conservador.

regiones del país y las contradicciones dentro del aparato armado del mismo”⁶². Es decir, detrás de la violencia había una fragmentación del poder, precariedad presencial del Estado en el territorio y como espacio público, carencia del monopolio legítimo de la fuerza e incapacidad de construirse como árbitro. La fragmentación del poder y la precariedad del Estado estaban ocultas tras las estructuras modernas de los partidos políticos. Los poderes locales y regionales, alguno de ellos armados, sustituyeron al Estado y éste perdió su imagen de búsqueda de la unidad nacional.

3.2 Paramilitarismo y Frente Nacional

El proceso que llevó a cabo la creación del pacto del *Frente Nacional* entre las diferentes fuerzas políticas pareció cambiar el anterior contexto de *La Violencia*. La insurrección de estos grupos armados fue uno de los motivos que condujo a establecer un acuerdo político entre las elites conservadoras y liberales bajo el nombre de *Frente Nacional* (1958-1974).

La mayoría de los analistas señalaron que el Frente Nacional fue un sistema cerrado y excluyente del régimen bipartidista. Negando la participación a cualquier opción política diferente. Además la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional mediante los programas de seguridad nacional, provocó el cierre electoral para la izquierda. Las consecuencias de este cierre institucional junto con la influencia de la revolución cubana estimularon la formación de agrupaciones radicales de izquierdas y el nacimiento de las guerrillas. En este contexto, el Partido Comunista adoptó la estrategia de “la combinación de todas las formas de lucha” y de su seno nació la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966. Otras organizaciones guerrilleras que se unieron a este contexto fueron el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Palacios, 2002; Rodríguez, 2004, Álvaro, 2009). Otros autores como Alexander Wilde señala que este pacto fue el reflejo de la oligarquía y sociedad estratificada. Es decir, un pacto realizado por los jefes de cada partido reafirmando así su predominio sobre las nuevas fuerzas sociales del Frente Nacional. Formalizaron las prácticas que antes dependían de relaciones interpersonales. Tanto Wilde como Pecaú consideran que este periodo no fue un régimen cerrado. Según Wilde fue un régimen abierto y competitivo pues el posicionarse dentro de uno u otro partido era una restricción insignificante en la práctica debido a la indisciplina interna de los partidos. Argumenta que consiguió una paz política con poca represión política. Pecaú también afirma que fue un pacto pacificador y que nunca fue tan cerrado este régimen porque los

⁶² Paul Oquist (1978): *Violencia, conflicto y política en Colombia*, Banco Popular, Bogotá, citado en González, 1997, pág. 62.

partidos Alianza Nacional Popular (ANAPO) y Movimiento Revolucionario Popular (MRL) abrieron espacio para aquellas otras opciones políticas diferentes a los partidos tradicionales. Por tanto si hubo competencia política (González, Vázquez, Bolívar, 2006).

El acuerdo significó el sometimiento del Estado a los partidos políticos en varios sentidos: como federaciones de poder local y regional, como puentes entre lo privado y lo público, como representantes de identidades locales y regionales y como delegados de la tradición y modernidad política. Es decir, reforzó el bipartidismo al confirmar la función que tenía los dos partidos con la población nacional. El Frente Nacional sólo se concentró en los aspectos políticos de la Violencia pues este acuerdo entendía que la violencia sólo se pudo explicar por un enfrentamiento político entre dos partidos por repartirse el botín burocrático. Se olvidaron que la violencia también incluyó conflictos individuales y sociales como venganzas de sangre, luchas sociales, desquites locales, etc. Esto supuso un recrudecimiento de la violencia en los primeros años del Frente Nacional.

Esta disociación entre violencia social y violencia política fue una de las causas para la continuación del bandolerismo y la reanudación de la lucha guerrillera. Los diferentes presidentes llevaron a cabo medidas para paliar estos grupos pero en muchos casos no consiguieron ese objetivo. La Administración de Alberto Lleras (1958-1962) llevó a cabo un amplio programa de pacificación del país mediante el Plan Lazo (1960-1965), principal estrategia militar que otorgaba autonomía al poder militar frente al civil respecto del orden público. Desde el punto de vista militar logró objetivos parciales pues desplazó a la guerrilla en las zonas que controlaba pero éstas volvieron a regenerarse en otros territorios. Desde el punto de vista político su alcance fue limitado pues el propósito era quitarle los apoyos a las guerrillas mediante campañas cívico-militares de corte asistencialista, sin tocar de fondo las razones estructurales de la insurgencia (Rangel, 2001: 354-359). El conservador Guillermo León Valencia (1962-1968) continuó con el plan elaborado en la administración anterior y se enfrentó con los últimos coletazos del bandolerismo de los cincuenta cuando el Ejército llevó a cabo una gran ofensiva en 1965 contra estos grupos debido a la presión ejercida por terratenientes en el Congreso. Algunos pertenecientes a bandas y gamonales se desmovilizaron, mientras que otros continuaron por los medios legales y constitucionales para reconocer el ascenso de las elites sociales y políticas de Armenia y Pereira. Algunos liberales reticentes y bandas optaron por aunarse en el Movimiento Revolucionario Liberal hasta que desaparecieron en una serie de altercados (Palacios, 2002: 641-643).

A pesar de esta ofensiva, pájaros y bandoleros siguieron influyendo en los municipios como por ejemplo su influencia en la zona esmeraldífera de Boyacá a manos de los bandoleros Efraín González y Humberto “el Ganso” Ariza (Duncan, 2005). Fue en este marco del Gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) cuando resurgieron las antiguas guerrillas y la insurgencia política alimentada por la ideología comunista, el triunfo de la Revolución cubana y la separación creciente entre movimientos sociales y la política tradicional.

Durante este periodo la sociedad mostró cambios profundos que explicaron como parte de su sociedad optó por la vía armada. La urbanización, la secularización y la apertura a las corrientes de pensamiento mundial, el crecimiento de la educación, la profesionalización de las clases medias, la presencia de la mujer en el mundo laboral produjeron un cambio radical en la sociedad colombiana. En esta época surgió el individualismo como resultado de la desagregación social y la transacción como forma de convivir con la descomposición de los modos habituales de regulación social. Estos cambios rompieron las redes de solidaridad tradicional sin construir nuevos mecanismos de convivencia ni nuevas formas de legitimación social (González, 1993).

Las revoluciones del Tercer Mundo y sobre todo la cubana influyeron en las clases medias urbanas y en la población estudiantil. Influidos por el marxismo evidenció un distanciamiento con los partidos políticos y con la Iglesia católica. Esta nueva relación se tradujo en abstencionismo electoral y en un mayor distanciamiento entre política y sociedad.

A esta situación se sumó que los límites de la reforma agraria y la criminalización de la protesta campesina aceleraron la separación entre movimientos sociales y partidos políticos tradicionales. En esta separación influyeron los movimientos de izquierdas y los movimientos sociales que optaron por la vía armada. La macartización, la represión estatal de los grupos estudiantiles y la ausencia de una opción de izquierdas legal empujaron a muchos líderes estudiantiles a la lucha armada. El cierre institucional a otras opciones políticas, fue utilizado para adentrarse en la opción armada. Un ejemplo de ello fue la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, dirigida por el expresidente Rojas Pinillas. La ANAPO representaba el descontento de la población marginal de las ciudades y de los sectores marginales de las ciudades intermedias y de nueva colonización rural. En 1970, la izquierda apoyó la candidatura a las elecciones presidenciales del exdictador Rojas Pinilla con la ANAPO. El fraude electoral impidió su triunfo electoral y la parte más radical de esta formación se escindió y formó la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19).

Esta lucha armada fue favorecida por la escasa presencia del estado en determinadas áreas del territorio colombiano y por la existencia de una tradición de lucha guerrillera de los años cincuenta. Esta situación fue evidente en las zonas de colonización donde llegaban los campesinos expulsados por las tensiones sociales de sus territorios y por la violencia de los años cincuenta. En estas zonas se insertaron las guerrillas.

Así surgieron las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966, el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967 y en 1970 el M-19. Es decir, el marco político nacional del Frente Nacional fue el contexto en el que surgieron las guerrillas revolucionarias. Este periodo que arrancó desde principios de los años 60 suele denominarse *conflicto armado*⁶³. Este término hizo referencia a la lucha insurreccional de organizaciones guerrilleras cuyo fin era transformar revolucionariamente el orden social, el Estado, los institutos castrenses y de organizaciones paramilitares.

El ELN fue la primera guerrilla que apareció en Colombia bajo la concepción de la revolución cubana. En su formación confluyeron tres procesos. Impulsado por la Revolución cubana algunos miembros de las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal criticaron el reformismo del Partido Comunista, rompiendo relaciones con el ala moderada de ese movimiento. Se declararon marxistas-leninistas. Este fue uno de los orígenes del ELN. Sin embargo, en Cuba se formó la Brigada Internacional José Antonio Galán bajo la dirección de Fabio Vásquez Castaño que una vez instalada en el Cerro de los Andes (Colombia) bajo el nombre de Frente, controló el ELN. El último proceso de formación de esta guerrilla era rural, campesina, que subsistía como rezago de la guerrilla del liberal Rafael Rangel ubicada en sur del departamento Santander.

La táctica que desarrolló el ELN en sus campamentos provenía de la *teoría del foco* cuyo origen arrancó del recién fundado Frente Unido del Pueblo (FU) dirigido por el sacerdote Camilo

⁶³ Como señala en un artículo Eduardo Pizarro, en la actualidad se debate acerca de cómo catalogar el conflicto colombiano. En el debate intelectual y político se han planteado varias definiciones como guerra antiterrorista, guerra contrainsurgente, guerra civil, guerra contra la sociedad. Aunque muchos analistas se oponen a calificar la situación colombiana de guerra civil, es una acepción que está tomando fuerza para algunos estudiosos del tema como el politólogo colombiano William Ramírez, el historiador alemán Tomás Fisher, Peter Waldmann. Sin embargo, por la ambigüedad del término guerra civil, contribuye muy poco al entendimiento de las características propias de los diversos conflictos internos que se vive hoy en distintas partes del mundo, afirma Pizarro. Para más información puede consultarse *¿Guerra Civil? ¿Guerra contra los civiles? ¿Violencia generalizada?* (FIP, Bogotá, 2001) de Pizarro, donde examina el concepto de guerra civil a propósito de su inconveniencia en la aplicación al caso Colombiano.

Torres Restrepo⁶⁴. Desde sus orígenes el ELN atravesó errores tácticos, organizativos, conflictos ideológicos, políticos y de carácter social que le llevaron a mantener multitud de derrotas frente al Ejército. El ELN creció hasta tener dos frentes, uno en el Magdalena Medio Santandereano y otro en el noroeste antioqueño. Tras la derrota con el Ejército en Anorí (Antioquia) el ELN se dividió en tres facciones. Posteriormente se desprendió un sector predominantemente urbano, sindical y universitario. A raíz de los procesos de paz de las administraciones Betancur (1982-1986) y Barco (1986-1990), se trazó como posibilidad el desarrollo de una línea política, planteada por el cura español Manuel Pérez. ¡A Luchar! fue parte de esa expresión (Pardo, 2004: 427-431).

Por su parte, el origen del Ejército Popular de Liberación Nacional- EPL- se remontó a la creación de un Comando de Integración fruto de la ruptura con el Partido Comunista en 1963, que agrupaba a varias tendencias. Se asentaron en el Magdalena Medio santandereano, centro del Valle del Cauca, el nororiente de Antioquia y el sur de Córdoba. Tan sólo subsistió el último asentamiento en donde se estableció una especie de autogobierno campesino llamado juntas patrióticas y en febrero de 1967 se constituyeron como EPL. El Ejército realizó una incursión en el Sinú, de mayo a agosto de 1968, desmantelando el corazón de la misma organización y donde murió Pedro Vázquez Rendón. En esta época ya estaba influido por el modelo maoísta de guerrilla rural e incluso había establecido contactos con Albania, particularmente con el Partido de los Trabajadores de Albania. El EPL también se debilitó políticamente con la aparición del socialismo que agrupó a muchos de sus simpatizantes. La polarización entre pacifistas y partidarios de la guerrilla era evidente y la realidad del EPL era en ese momento un grupo casi extinguido. Las FARC emprendieron varias acciones armadas contra el EPL pues querían expandirse a las zonas ocupadas por este grupo armado. Sin embargo, tuvo un fortalecimiento repentino pues el Quinto Frente de las FARC desertó de Urabá y se pasó al EPL. El EPL quedaba más organizado y reforzado en sus frentes de Urabá y Córdoba (Pardo, 2004: 441-444).

Las FARC tuvieron su origen en las agitaciones campesinas dirigidas por el partido comunista que se libraron desde los años 20 hasta *La Violencia* en los departamentos de Cundinamarca y

⁶⁴ Rafael Pardo señala que Camilo Torres Restrepo era una de las figuras políticas más atractiva por fuera de los partidos tradicionales. Camilo era sacerdote, bogotano, profesor de universidad que cada vez más se fue involucrando en el activismo político. A su muerte, en una emboscada ocurrida en Patio Cemento, perteneciente al municipio de San Vicente de Chucurí (Santander), su ejemplo fue seguido por más religiosos que manifestaron su apoyo a la lucha armada. Cinco sacerdotes identificados con la Teología de la liberación redactaron un manifiesto de conciencia revolucionaria llamado Gripo Golconda, entre ellos se encontraba Manuel Pérez, Domingo Laín y José Antonio Jiménez, quienes se incorporaron a las filas del ELN.

oriente y sur del Tolima⁶⁵. Estos grupos se organizaron en autodefensas campesinas como resultado de la tradición de lucha por la tierra y la colonización autónoma. Eran pues grupos más defensivos que ofensivos y defendían las comunidades campesinas. En 1964 se transformaron en guerrillas móviles y crearon 16 repúblicas independientes en el sur del Tolima, entre ellas Marquetalia, Villarrica, Riochiquito, El Pato y El Guayabero. Tras aplicarles la ofensiva militar Plan Lazo, se constituyeron en Bloque Sur y en 1966 se instauraron formalmente como las FARC.

Crecieron significativamente consolidando bases de apoyo campesino en las periferias con el sostén del partido comunista. En la década de los ochenta dejaron de estar sujetas al partido comunista y se convirtieron en una formación guerrillera independiente que desarrollaba su propia doctrina política y militar y ganó la atención pública y el status de actor político. Esta época se caracterizó por tres factores importantes. Por un lado, los acuerdos de paz celebrados en *La Uribe* en 1984 pusieron a los jefes de las FARC en antagonistas de primera línea⁶⁶. Otro hecho fundamental fue la introducción del narcotráfico en el mundo del latifundismo ganadero, la mayoría en zona de frontera interior y de dominio de las FARC. En esas zonas se fraguaron alianzas entre guerrilleros y narcotraficantes hasta que se rompieron en 1987. Un último y no menos importante factor fue el aniquilamiento del partido *Unión Patriota*. En 1987 los paramilitares asociados al Cartel de Medellín en complicidad con el Ejército, la Policía, los latifundistas y los políticos tradicionales aniquilaron a los miembros de Unión Patriótica y a los civiles simpatizantes (Palacios, 2002). En 1992 participaron junto con el ELN y la facción minoritaria del EPL en los diálogos de paz de Cravo Norte y Caracas. Tras el fracaso de este proyecto, las FARC se replantearon su papel estratégico y adoptaron los atributos del foco guevarista. En la década de los noventa y debido a la situación social del país las FARC formaron la base social más sólida apoyada en los cocaleros que significó el fortalecimiento del aparato militar respaldado por el secuestro, la extorsión, las rentas petroleras el cuidado de los cultivadores y comerciantes de droga (Palacios, 2002: 644-647).

⁶⁵ En estas zonas había varias guerrillas liberales, una la de los Loayza, otra la de los Marín (compuesta por Pedro Antonio Martín o comúnmente conocido como Manuel Marulanda alias Tirofijo) y una guerrilla comunista al mando de Isauro Yosa alias mayor Lister. Estos tres grupos formaron un solo bloque llamado Estado Mayor Unificado del Sur, con dos cabezas: Loayza por los liberales o limpios y Lister por los comunistas o comunes. La polarización creció entre estos dos grupos. El periodo de gobierno del General Rojas Pinilla y su oferta de pacificación, provocó que los limpios se acogieran a la amnistía al igual que algunos comunistas

⁶⁶ El gobierno de Belisario Betancur firmó con las FARC-EP el 28 de mayo de 1984 un alto el fuego tras firmar los Acuerdos Cese al Fuego, Tregua y Paz, más conocido como Acuerdos de La Uribe, municipio del departamento del Meta, donde se firmaron. Esta negociación fracasó por las violaciones al cese de hostilidades por ambas partes y por recrudecimiento de la violencia política por parte de grupos de paramilitares, el Ejército y grupos de narcotraficantes.

El M-19 entró en la arena pública en la década de los setentas, al igual que la Autodefensa Obrera, ADO. El M-19 aprendió de los sandinistas y combinaron un modelo de guerrilla rural con diversas incursiones urbanas. Alcanzó gran popularidad en la década de los ochenta a raíz de la toma de la Embajada de la República Dominicana y el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Con una ideología confusa, una política errática y acosados por la Fuerza Pública, pactaron su retorno a la vida civil a través de la coyuntura de la Asamblea Constituyente en 1990. Asimismo, el Movimiento Armado Quintín Lame- MAQL- y la facción mayoritaria del EPL tomaron la misma opción de desmovilizarse y crear movimientos electorales que terminaron en fracaso (Palacios, 2002: 647-652).

Como consecuencia de este contexto, en 1968 el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) convirtió en legislación permanente el decreto legislativo 3398 de 1965, ahora *Ley 48 de 1968 o Ley de Defensa Nacional*, por el cual estableció el fundamento jurídico para la conformación de *grupos de autodefensas* bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas como respuesta al surgimiento de las guerrillas en un contexto de la Guerra Fría y Doctrina de Seguridad Nacional. Estos nuevos grupos no se crearon de manera masiva hasta la década de los ochenta, donde fueron aprovechados para la creación de otros grupos a expensas del confuso marco jurídico de dicha ley. Por primera vez la Administración de Virgilio Barco (1986-1990) mediante los Decretos n. ° 813 del 19 de abril de 1989 y Decreto n. ° 814 del 19 de abril de 1989 declaró punible e ilegal las estructuras de paramilitares, anulando así la anterior Ley 48 de 1968⁶⁷.

El último gobierno del Frente Nacional bajo la presidencia de Misael Pastrana (1970-1974) continuó con la disciplina militar como estrategia para eliminar a las guerrillas EPL, Ejército de Liberación Nacional- ELN- y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC- y a la guerrilla urbana incipiente M-19.

En resumen, durante el *Frente Nacional*, es significativo destacar la permanencia de ciertos grupos bandoleros del periodo de la violencia, reafirmando así la existencia de grupos ilegales y armados con determinado nivel de poder en determinadas regiones del país. Incluso, un elemento más que se añade a los antecedentes históricos de creación de los paramilitares fue la expedición de la *Ley 48 de 1968* que aducía la legalidad a la conformación de grupos de autodefensas por civiles.

⁶⁷ La Corte Suprema de Justicia en mayo de 1989 declaró inexecutable la norma que permitía al Ministerio de Defensa armar a los civiles.

Durante este periodo se hicieron transformaciones del Estado mediante reformas administrativas entre 1958-1960, 1963 y 1968-1970. Se creó la carrera administrativa, la Dirección de Planeación Nacional, el Consejo Nacional de Política Económica, la Escuela de Administración Pública (ESAP) y el Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASC). La creación de estas instituciones provocó un aumento del empleo público aunque el reparto de dicho empleo quedó sujeto mediante el clientelismo. Creció el gasto público en bienestar y seguridad social, mejorando la educación, salud, vivienda, y servicios públicos. Esta mejora de las condiciones fue aprovechada por el clientelismo para extender su marco de acción. Incluso la lógica clientelista se vio aumentada como consecuencia de la paridad burocrática de los partidos políticos, que provocó una mayor ampliación de la burocracia.

Estas reformas estaban dentro de un manejo tecnocrático y despolitizado de la economía nacional. Estas medidas fueron profundizadas por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo pues eliminó el manejo del gasto público en manos del Congreso y el presupuesto nacional en manos de la clase política. Estas reformas administrativas indujeron una deslegitimación de la clase política tradicional al provocar una separación entre la clase política de ámbito nacional y la de nivel regional y local. También conllevó una separación entre una lógica modernizante de largo plazo y una tradicional de corto plazo que concentraba las reformas del ejecutivo (González, Bolívar, Vázquez, 2006).

También se produjo un desequilibrio entre el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado y el estancamiento de los aparatos de regulación del orden interno. Aunque se mejoró la gestión pública fue a costa del detrimento de los órganos de representación política, es decir, el Congreso, las asambleas y los concejos siguieron con transacciones clientelistas. Esta crisis de los órganos de representación provocó la separación entre la sociedad y la clase política, acentuando más la fragmentación del poder y disminuyó la articulación entre los poderes locales y regionales con los nacionales debido a las reformas política, administrativa y agraria impulsada por Lleras Restrepo.

Los sectores más tradicionales de los partidos políticos se opusieron a las reformas de Lleras sobre todo a la reforma constitucional de 1968 que despojaba al Congreso de toda iniciativa respecto al manejo del gasto público. Sin embargo, la reforma salió adelante con ciertos arreglos con la ANAPO y el sector opinista del Congreso. Esta reforma representaba un fortalecimiento del Ejecutivo frente al Legislativo y políticos clientelistas. En teoría una comisión tenía el control

político del Congreso que revisaba la labor administrativa del Ejecutivo, el cumplimiento de los planes de desarrollo y el gasto público. Pero esta comisión no pudo conformar. Por otra parte esta reforma modernizó la estructura departamental y municipal, otorgando mayor autonomía administrativa a las regiones y fortaleciendo el fisco departamental. Estas reformas de Lleras y su estilo tecnocrático de gobierno fueron abandonadas por su sucesor Pastrana y mucho más bajo los gobiernos de López Michelsen y Turbay.

En las elecciones presidenciales de 1970, las votaciones estuvieron muy reñidas entre la ANAPO que obtuvo un 39% de la votación y Misael Pastrana, representante del Partido Conservador, obtuvo un 40,6%, es decir 63.557 votos más que el partido de Rojas Pinilla. Según la ANAPO se cometió fraude electoral sobre todo cuando los primeros resultados retransmitidos por radio daban como ganador a Rojas Pinillas. A esto se sumó que la Registraduría tuvo muchas dificultades en contabilizar los votos. Estos dos hechos crearon un clima fértil para que las acusaciones de fraude prosperaran. Misael Pastrana fue elegido presidente de Colombia de 1970 hasta 1974. Fue el último presidente del Frente Nacional. Con la elección de este candidato se concluyó que el Frente Nacional fue incapaz de ofrecer una alternativa política para movilizar e integrar a los sectores populares urbanos y apoyar a los nuevos grupos sociales. Respecto a estos grupos sociales, Misael Pastrana intentó enfocar sus políticas hacia los sectores marginados urbanos a través de la reforma urbana pero ésta sólo fue una estrategia ideológica para reforzar a los sectores que apoyaban el bipartidismo y derrotar a la ANAPO. Esta actitud demostraba nuevamente la inflexibilidad del sistema político al cambio. Frente a la citación de desempleo urbano y déficit habitacional incentivó la construcción de viviendas en las grandes ciudades. Con el programa económico y de cambio social también buscó neutralizar las propuestas de la ANAPO. Es decir, desarrolló una estrategia de populismo de estado para frenar los efectos políticos del populismo de la oposición. Durante las elecciones de 1972 fue patente la legitimación del Frente Nacional por el pueblo colombiano. El liberalismo obtuvo un 46% de los votos, frente a un 31% de los conservadores y a un 19% de la ANAPO (Silva, 1989).

3.3 Conclusión

En resumen, tanto la Violencia como el Frente Nacional reforzaron el bipartidismo al afirmar la función de organizadores de la sociedad que quedaba privada de toda identidad colectiva diferente de la que otorgaban los partidos políticos. Por otra parte, se modernizaron las redes gamonalcias y los mecanismos clientelistas cubriendo la mayoría del territorio nacional. Incluso

el clientelismo se expandió debido por la paridad burocrática en los partidos políticos. Estas consecuencias de estos periodos provocaron obstáculos a la modernización del Estado como los sufridos durante la presidencia de Lleras Restrepo. El cierre institucional que supuso el Frente Nacional a otras opciones políticas fue parcialmente obviado por el MRL y ANAPO. Sin embargo las elecciones mostraron que la sociedad legitimó el sistema bipartidista. Durante este periodo los órganos de representación entraron en crisis por la introducción del clientelismo en el Congreso, asambleas y concejos, provocando una mayor fragmentación del poder. Durante el Frente Nacional la violencia continuó en grupos de bandoleros y pájaros pero se vio reformada por la creación de guerrillas rurales y urbanas durante los años sesenta y setenta. Frente a esto los diferentes gobiernos crearon planes de seguridad para aminorar la presencia de bandoleros, pájaros y guerrilleros. Sin embargo, una de las medidas que tuvo una consecuencia catastrófica fue la creación de la Ley 48 de 1968 por la que el Estado establece el fundamento jurídico para la conformación de *grupos de autodefensas* bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas. Es decir, el Estado legalizó a grupos de autodefensa como estrategia contra las guerrillas. Es decir, durante estos dos periodos el tipo de régimen que construyó la sociedad colombiana facilitó la presencia de grupos armados en el territorio. Por una parte, los grupos guerrilleros pudieron desarrollarse por la débil presencia estatal en el territorio y por la demanda social de determinados movimientos de izquierdas y movimientos sociales. Pero por otra parte, fue el propio Estado que creó un piso jurídico para legalizar a los grupos de autodefensas que durante los años ochenta se desarrollaron en grupos paramilitares.

Por lo tanto, desde el Estado se comenzó a sentar las bases de tolerancia y facilitación respecto de la actuación de grupos armados. El clientelismo alcanzó a todos los aspectos sociales y políticos de la sociedad. Aprovechando esta serie de oportunidades más otras que se exponen posteriormente, los grupos paramilitares pudieron incorporarse a la red clientelar, fueron reconocidos legalmente y a partir de su aparición en la década de los años ochenta, comenzaron a tejer su red y a influir en determinados aspectos de la sociedad.

Capítulo 4. Los grupos paramilitares en Colombia

Los grupos paramilitares en Colombia se desarrollaron y consolidaron facilitados por la acción del Estado, las Fuerzas Militares, determinadas instituciones civiles y con el apoyo de determinados actores políticos, sociales y económicos. Además de tener el apoyo de estos sectores, aprovecharon determinadas oportunidades políticas para consolidar su poder en el territorio colombiano y convertirse en algunos departamentos en actor hegemónico. Las oportunidades políticas aprovechadas se vieron complementadas con los recursos organizacionales básicos para llevar a cabo su movilización. Impregnaron de ideas y símbolos la organización de estos grupos para fundamentar su accionar y legitimarse frente a la sociedad. Para fortalecer y controlar su poder en las regiones se introdujeron en el ámbito político, cooptando a las elites políticas para que obedecieran sus objetivos. La movilización de los grupos paramilitares teniendo en cuenta estos aspectos se realizó bajo un contexto dinámico, donde interactuaban con otros actores e instituciones en un contexto de conflicto.

Durante este capítulo se analiza, en primer lugar, el contexto de conflicto armado que rodea a los grupos paramilitares desde la década de los ochenta como un ciclo de conflicto según la definición de Tarrow, es decir, como una fase de intensificación de los conflictos en el sistema social. Se enmarca a los grupos paramilitares dentro de un proceso dinámico en el que interactúan las organizaciones, autoridades, movimientos, grupos de interés, miembros del sistema político y disidentes, nuevas oportunidades de actuación, genera nuevos actores y provoca una serie de procesos de extensión, generando un ciclo de conflicto. En este ciclo se estudia la fase movilización y desmovilización del grupo.

Posteriormente se analiza la historia general de los grupos paramilitares en Colombia haciendo hincapié en su origen, expansión y consolidación mediante las oportunidades políticas, la movilización de recursos, el marco y repertorio de la acción de estos grupos.

También se estudia la acción política de estos grupos, la llamada “parapolítica” analizando esta cuestión desde la Constitución de 1991 que dio mayor oportunidad de relacionarse y expandirse políticamente a los paramilitares conformando partidos políticos, cooptando a la élite política e influyendo en elecciones.

En último lugar, se compara diferentes grupos paramilitares para observar su desarrollo y evolución en contextos diferentes. Los casos de estudio son el imperio paramilitar de Jorge 40 en el atlántico, el paramilitarismo en Medellín, el Bloque Central Bolívar, las Autodefensas Campesinas del Ortega y la experiencia de los hermanos Castaño en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y las Autodefensas Unidas de Colombia.

4.1. Colombia como ciclo de conflicto

El periodo que arrancó desde principios de los años 60 suele denominarse *conflicto armado*⁶⁸. Este término hizo referencia a la lucha insurreccional de organizaciones guerrilleras cuyo fin era transformar revolucionariamente el orden social, el Estado, los institutos castrenses y de organizaciones paramilitares. Los grupos guerrilleros colombianos que se adhirieron a esta perspectiva fueron: las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas- FARC-, Ejército de Liberación Nacional- ELN-, Movimiento 19 de Abril- M19-, Ejército Popular de Liberación – EPL- (Palacios, 2002). Los detonantes de la aparición de estas guerrillas fueron por una parte los rezagos de la violencia entre liberales y conservadores de los años cincuenta y, por otra parte el contexto de Guerra Fría.

Sin embargo el conflicto colombiano se caracteriza por su complejidad y dinamismo al intervenir diferentes factores desde los años sesenta hasta principios del siglo XXI. Entre estos factores, destacan la intensidad del conflicto relativo a la destrucción intensiva de las guerrillas por alcanzar el poder; el crecimiento del paramilitarismo; la dispersión del narcotráfico; incapacidad de la Fuerza Pública para confrontar con eficacia la subversión; un régimen político con grandes falencias en su ejercicio democrático; la injerencia de Estados Unidos frente a su posición unilateral respecto al narcotráfico y, por último, la crisis económica del país, acentuada por las necesidades de ajustes macroeconómicos, los apoyos sociales a la sociedad civil víctima del conflicto y una asignación mayor de recursos a la Fuerza Pública

⁶⁸ Como señala en un artículo Eduardo Pizarro, en la actualidad se debate acerca de cómo catalogar el conflicto colombiano. En el debate intelectual y político se han planteado varias definiciones como guerra antiterrorista, guerra contrainsurgente, guerra civil, guerra contra la sociedad. Aunque muchos analistas se oponen a calificar la situación colombiana de guerra civil, es una acepción que está tomando fuerza para algunos estudiosos del tema como el politólogo colombiano William Ramírez, el historiador alemán Tomás Fisher o Peter Waldmann. Sin embargo, por la ambigüedad del término guerra civil, contribuye muy poco al entendimiento de las características propias de los diversos conflictos internos que se vive hoy en distintas partes del mundo, afirma Pizarro (2001).

Teniendo en cuenta esta aproximación a la realidad del conflicto colombiano, se analiza el conflicto armado interno colombiano como ciclo de conflicto siguiendo la definición y características de este concepto realizado por S. Tarrow (1991, 1998). Por tanto, las siguientes líneas tratarán de demostrar la relación entre el concepto ciclo de conflicto y la realidad del conflicto colombiano desde inicios de los años sesenta.

Para aplicar la noción de ciclo de conflicto elaborado por Tarrow al caso colombiano es conveniente en primer lugar analizar la *fase de movilización* así como los elementos que la componen y posteriormente se examina la *fase de desmovilización*, tal y como se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Ciclo de conflicto



Fuente: elaboración propia según Tarrow (1998)

La *fase de movilización de la acción colectiva* se caracteriza por los siguientes rasgos: intensificación y difusión del conflicto; creación de nuevas organizaciones y el refuerzo de las antiguas; nuevas formas de acción colectiva e intensificación de la interacción entre los disidentes y el Estado. A continuación se revisa y aplica esta fase del ciclo de conflicto al caso colombiano.

4.1.1. Intensificación y difusión de la acción en el conflicto colombiano

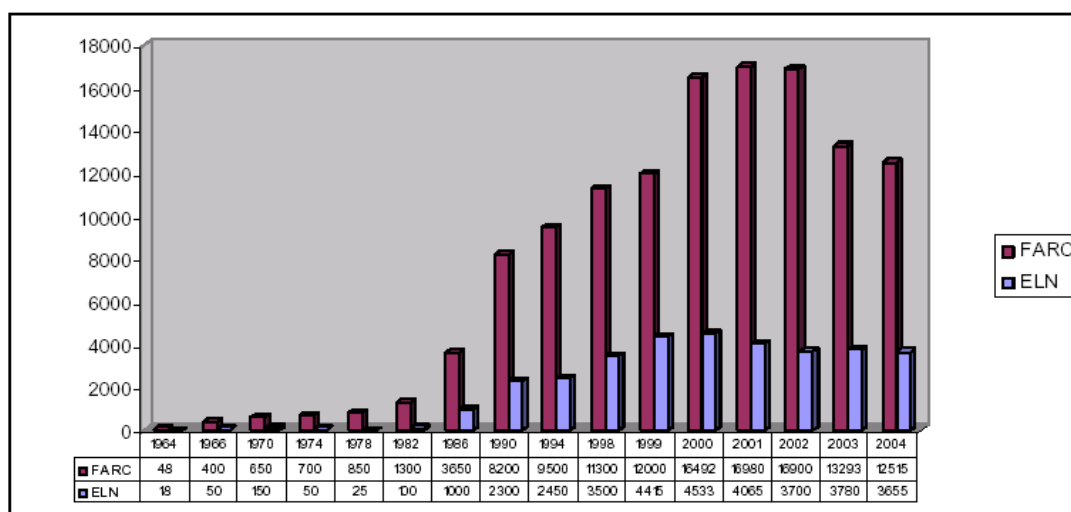
La idea que plantea Tarrow es que una de las características de la acción colectiva hace referencia a la intensificación de los conflictos en diferentes niveles de la sociedad al igual que el conflicto se expande y difunde en el ámbito geográfico, de las zonas rurales a las urbanas o viceversa.

En el caso del conflicto colombiano podemos apreciar estos dos factores inherentes- intensificación y extensión- a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta. La expansión de los grupos armados está relacionada con el cambio en el patrón de asentamiento pues inicialmente se asentaban en regiones de colonización, alejada de los centros económicos y, según Eduardo Pizarro, se puede establecer una relación entre pobreza, ausencia estatal y presencia guerrillera. Las FARC y el ELN desarrollaron una estructura organizacional capaz de recaudar e invertir enormes recursos económicos, que les permitieron expandirse hacia regiones estratégicas de gran potencial económico.

Las FARC crearon frentes en todo el territorio nacional teniendo como eje de despliegue la Cordillera Oriental, esto le permitió expandir su influencia hacia zonas de valor estratégico y económico. Crearon 48 frentes en todo el territorio nacional y se lograron establecer en las ciudades por medio de las “milicias bolivarianas” las cuales se reconocen como redes urbanas al servicio de las FARC. Este grupo se contabilizó en 2004 con más de 12.000 miembros según fuentes de las Fuerzas Militares (Figura 2). En el Anexo 1 puede observarse la evolución en el terreno de los efectivos de las FARC durante los años 2002, 2006 y 2008 (Anexo 1, página 393).

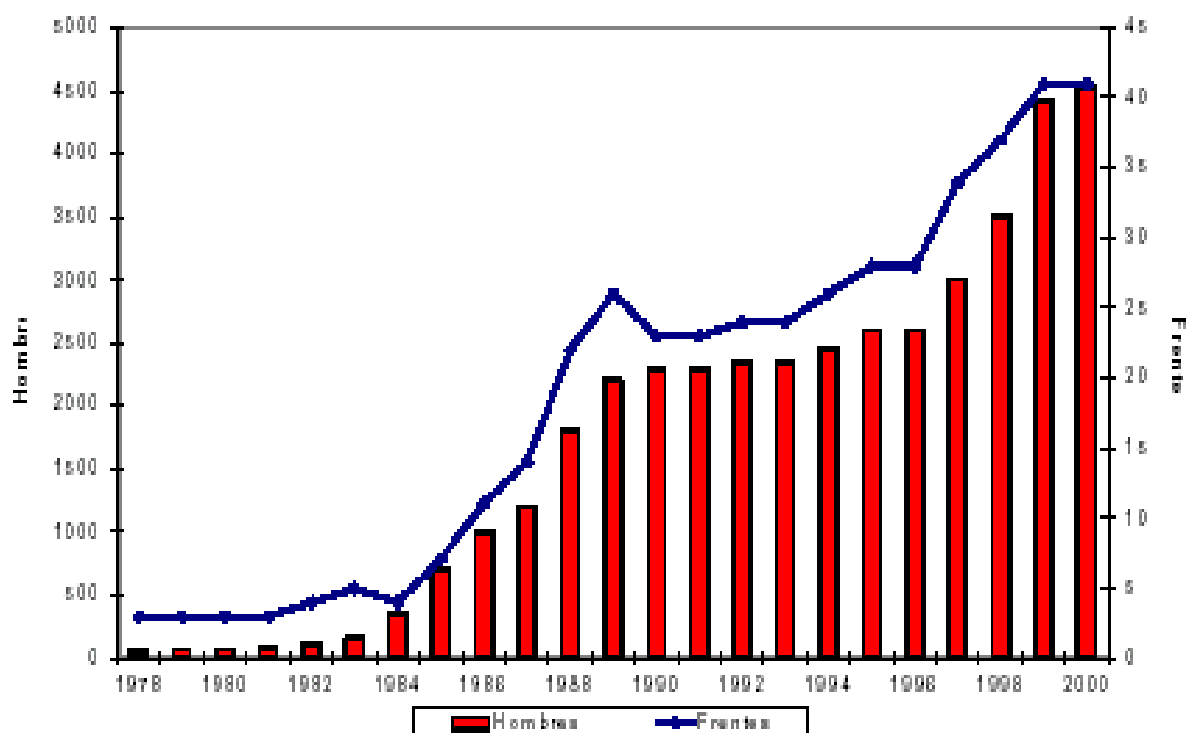
Asimismo el ELN al reestructurar su organización y obtener recursos económicos se expandió y ocupó zonas de gran riqueza económica sobre todo aquellas de grandes proyectos energéticos y mineros como las zonas petrolíferas y carboníferas del Arauca, Casanare, Barrancabermeja, Guajira y el Cesar (Anexo 2, página 396). Esta estrategia permitió al ELN aumentar su pie de guerra pues paso de tener 350 hombre en armas en cuatro frentes de guerra en 1984 a ascender a 4500 hombres repartidos en 41 frentes en el 2000 (Sánchez y Chacón, 2005) (Figura 2 y 3)

Figura 2. Evolución de los efectivos de las FARC y ELN de 1964 a 2004



Fuente: Ministerio de Defensa, 2005

Figura 3. Número de hombres y frentes del ELN de 1978 a 2000



Fuente: Ministerio de Defensa, 2001

En último lugar, los paramilitares crecieron mediante la estrategia de expandir sus frentes a todos los territorios donde se encontraran las guerrillas, así lucharon por territorios estratégicos y de gran potencial económico para las guerrillas como las zonas cocaleras de Urabá, Putumayo, sur de Bolívar, Barrancabermeja y Cúcuta (Anexo 3, página 399). Su número también creció pasando

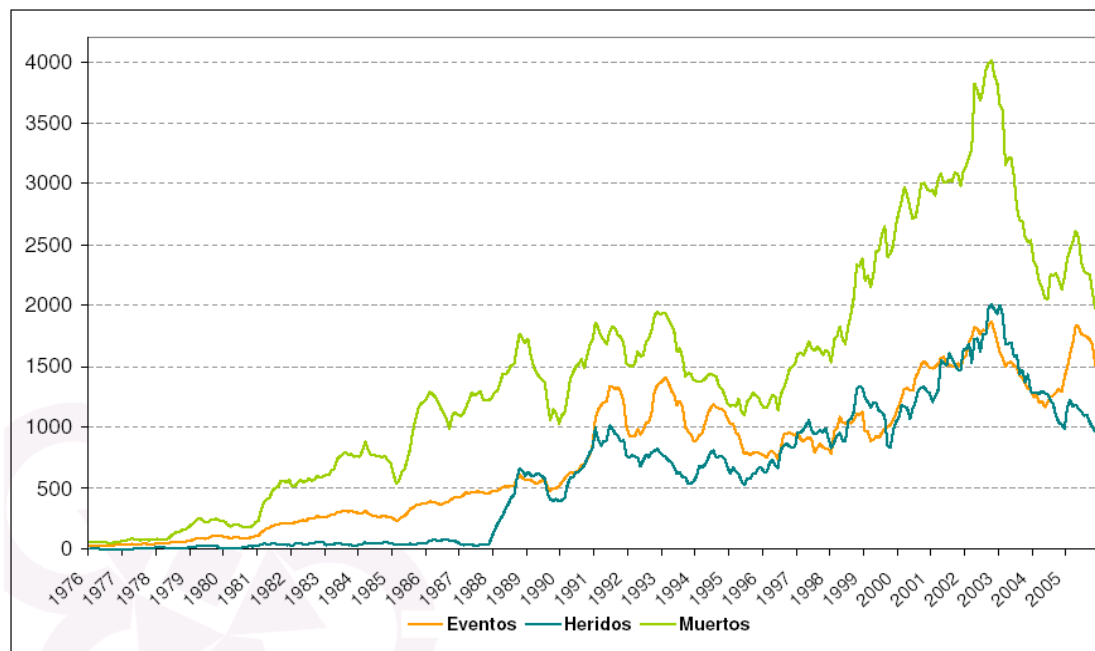
de 3800 hombres en 1997 a 13000 en el 2003 (Sánchez y Chacón, 2005). Sin embargo, tras la desmovilización llevada a cabo durante el gobierno de Uribe, se desarticularon 37 estructuras de un total de más de 30.000 hombres.

La intensificación del conflicto se tradujo también en un aumento del número de homicidios perpetrados por los actores armados y de enfrentamientos entre éstos y miembros de la Fuerza Pública. Al analizar el número de homicidios en Colombia, se observa dos momentos destacables. El primer momento se desarrolló desde 1982 y hasta 1993. Romero (2005) argumenta que ese periodo coincide con las primeras elecciones de alcaldes y con el surgimiento de tendencias de izquierdas fruto de la apertura política. El resultado fue el aumento de los homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales en 19.457 frente a 3.088 de la década anterior. Tan sólo en el primer año de elección a la alcaldía en 1988 se registraron 2.738 homicidios políticos. En este momento, más de la mitad de los delitos en relación con la violencia eran cometidos por individuos vinculados a las Fuerzas Armadas mientras que la guerrilla se hizo responsable de un 27% y los paramilitares de un 18% (Romero, 2003).

El segundo momento de alta criminalidad corresponde al periodo que va desde 1996 hasta el año 2004. Desde 1996, se manifestó un ascenso en el número de homicidios políticos populares y civiles asociado a la expansión de la influencia paramilitar en el Urabá y el Magdalena Medio; el control de cultivos ilícitos en los Llanos Orientales; la oposición al proceso de paz de la administración Andrés Pastrana y, el dominio de los territorios del sur de Bolívar por el ELN para la realización de la Convención Nacional. A fines de la década de los noventa, el panorama cambió sensiblemente. En esta ocasión los paramilitares y autodefensas fueron responsables del 63% de los crímenes perpetrados, la guerrilla era autora del 27% de las masacres y las Fuerzas Armadas de un 10% (Romero, 2003). Un análisis de la Comisión Colombiana de Jurista afirma que los paramilitares que actúan con la tolerancia o el apoyo de las fuerzas de seguridad son responsables del 79 por ciento de los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas registradas en Colombia entre abril y septiembre de 2000. Este documento considera a las guerrillas directamente responsables del 16 por ciento de los asesinatos y los secuestros registrados con carácter de violaciones del derecho internacional humanitario; y a las fuerzas de seguridad, directamente responsables del 5 por ciento de los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas registradas en el mismo período (Human Rights Watch, 2001).

En la figura 4 se muestra el número total de civiles muertos y heridos desde 1976 a 2006. Se aprecia los dos momentos señalados de mayor intensidad, a finales de los ochenta y principios de los noventa y desde finales de los noventa y hasta el año 2004.

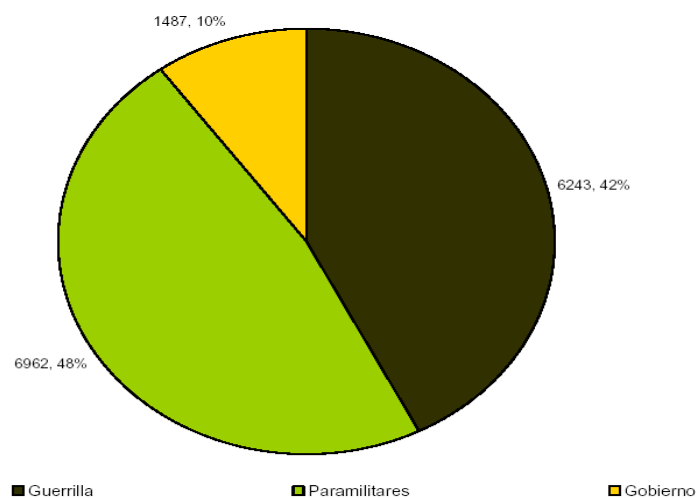
Figura 4. Heridos y Muertos durante el conflicto armado de 1976 a 2006



Fuente: Base de datos de conflicto CERAC, 2006

Si hacemos una comparativa desde 1988 a 2005 sobre qué grupos han cometido más muertes el resultado es que los paramilitares fueron autores del 48% de las muertes, la guerrilla del 42% y el Gobierno del 10% (Figura 5).

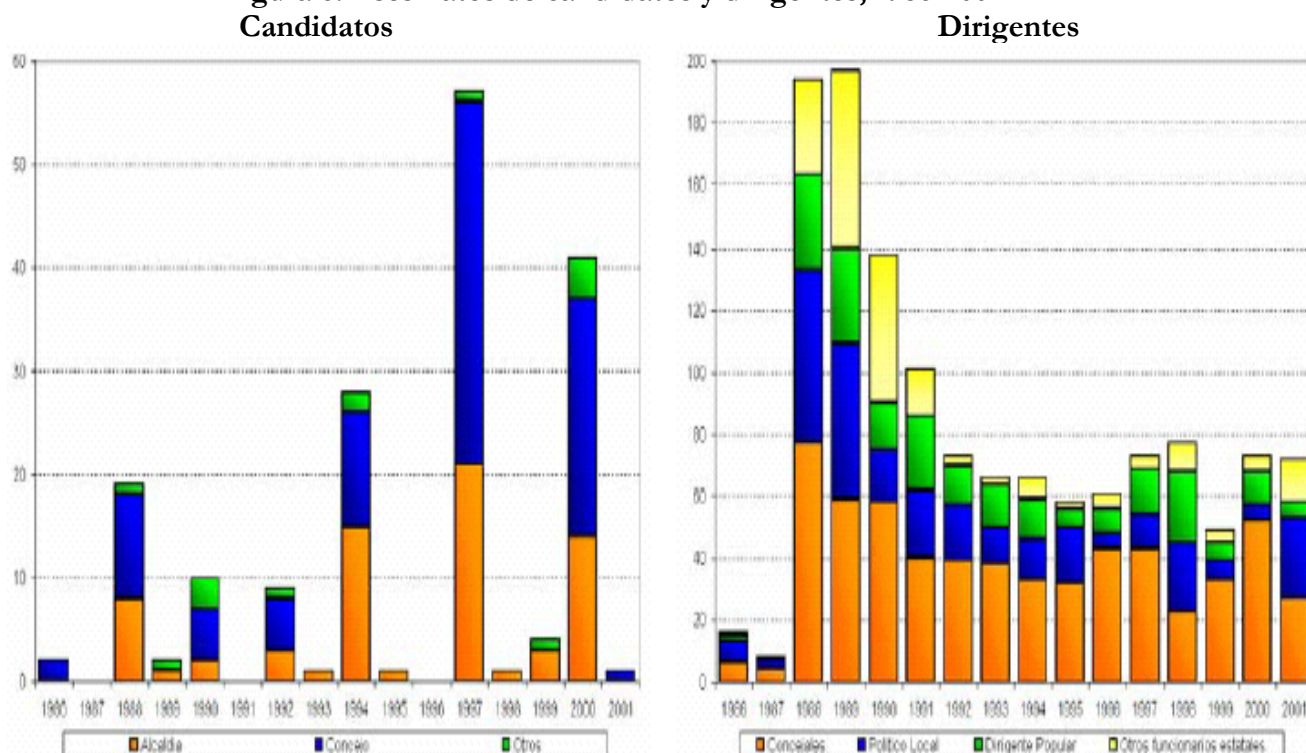
Figura 5. Total de muertes en ataques por autor 1988-2005



Fuente: Base de datos del conflicto colombiano, CERAC, 2005

La presión de los grupos armados en los municipios se tradujo en un aumento de la violencia contra candidatos a cargos públicos locales. Las siguientes figuras muestran los políticos asesinados entre 1986 y 2001. Asesinaron a un total de 70 candidatos a alcaldía, 92 a concejos y 14 a otro tipo de cargo público.

Figura 6. Asesinatos de candidatos y dirigentes, 1986-2001



Fuente: Observatorio de DDHH, Vicepresidencia de la República, 2002.

Igualmente se puede observar la violencia hacia candidatos políticos en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1998, 2002 y 2006. Según un informe elaborado por Fundación Seguridad y Democracia la campaña más violenta fue la de 1998: en los 12 meses previos a las votaciones para Congreso y Presidente de la República se registraron 507 secuestros y 150 homicidios con implicaciones políticas. Para la campaña del 2002 las cifras fueron de 210 secuestros y 125 homicidios, según la misma fuente. Según el análisis de la Fundación, para las últimas elecciones del 2006, se registraron siete secuestros y 37 homicidios de candidatos, dirigentes políticos o autoridades locales.

En total, si se contabiliza los homicidios políticos desde 1966 a 2007 supone un 7.41% ó 7.87% del total de los homicidios perpetrados según miremos las cifras del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos ó del CINEP. La totalidad del número de homicidios en esos años es de 663.310 homicidios. En el siguiente gráfico se aprecia los homicidios totales y políticos

desde 1966 a 2007. Se aprecia un aumento considerable en la época de los noventa, con las elecciones de los alcaldes y la nueva constitución de 1991. Sin embargo el punto más álgido es en el año 2003, cuando los paramilitares comenzaron a desmovilizarse, los homicidios políticos alcanzaron un 13,74% (Tabla 4).

Tabla 4. Homicidios políticos de 1966 a 2007

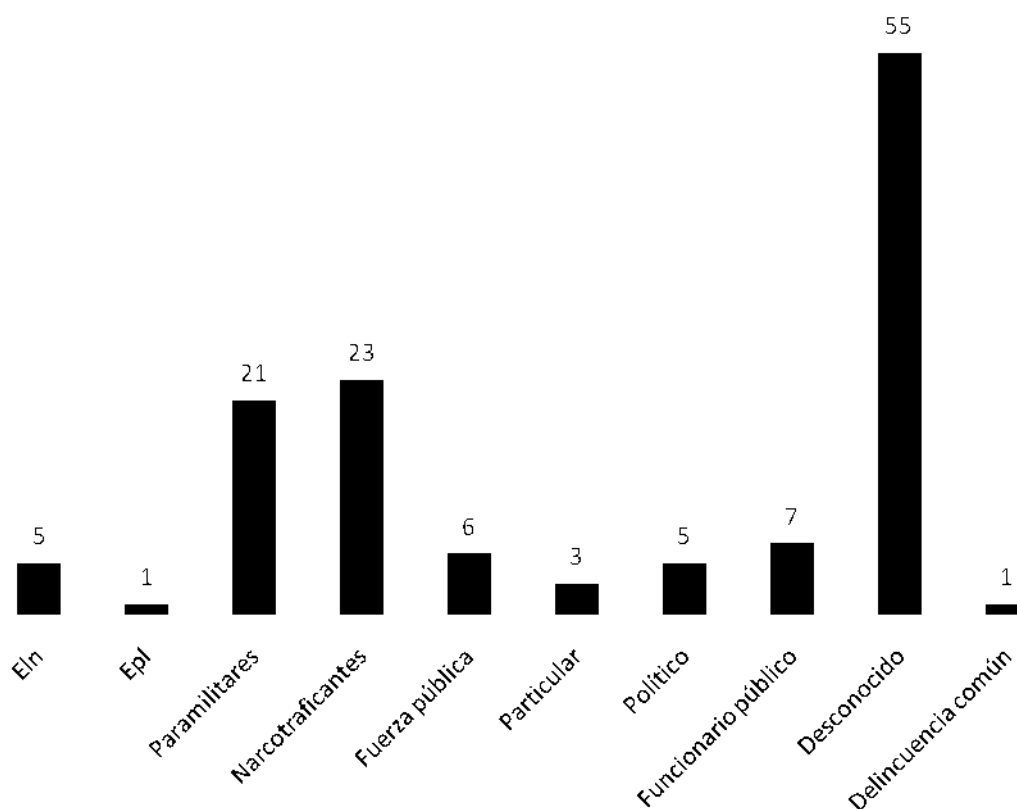
Año	Homicidios	Homicidios políticos	Homicidios políticos como proporción de los homicidios %
1966	5.612	33	0,058
1970	4.455	50	1,12
1975	5.788	67	1,15
1980	9.122	99	1,08
1985	12.937	727	5,61
1990	24.308	1.880	7,73
1991	28.284	1.993	7,04
1992	28.224	2.744	9,72
1993	28.173	2.581	9,16
1994	26.828	1.999	7,15
1995	25.398	1.745	6,87
1996	26.642	1.487	5,58
1997	25.379	2.008	7,91
1998	23.096	1.447	6,27
1999	24.358	3.248	13,33
2000	26.540	3.046	11,47
2001	27.840	3.366	12,09
2002	28.837	2.191	7,59
2003	23.509	3.231	13,74
2004	20.167	1.787	8,86
2005	18.111	1.164	6,43
2006	17.749	693	3,90
2007	17.508	961	5,49

Fuente: Otero Prada, Diego (2007), Las cifras del conflicto colombiano, Uniciencia-Colciencia, Bogotá.

De la misma forma, otros objetivos de los grupos armados fueron los asesinatos de jueces y funcionarios, como los de Hernando Baquero en 1987, Carlo Mauro Hoyos, en 1988; de periodistas como Guillermo Cano en 1986; de políticos de izquierda como el asesinato de Jaime Pardo Leal en 1987 o de dirigentes cívicos como el ocasionado a Héctor Abad en 1987.

Desde 1977 a 2009 han sido asesinados 135 periodistas. Para este caso que nos interesa los paramilitares asesinaron a 21 periodistas por detrás de los asesinados por los narcotraficantes y por autores desconocidos. En cambio, la cifra de asesinados por los grupos guerrilleros es muy inferior a los grupos paramilitares (Figura 7).

Figura 7. Homicidios de periodistas por autor

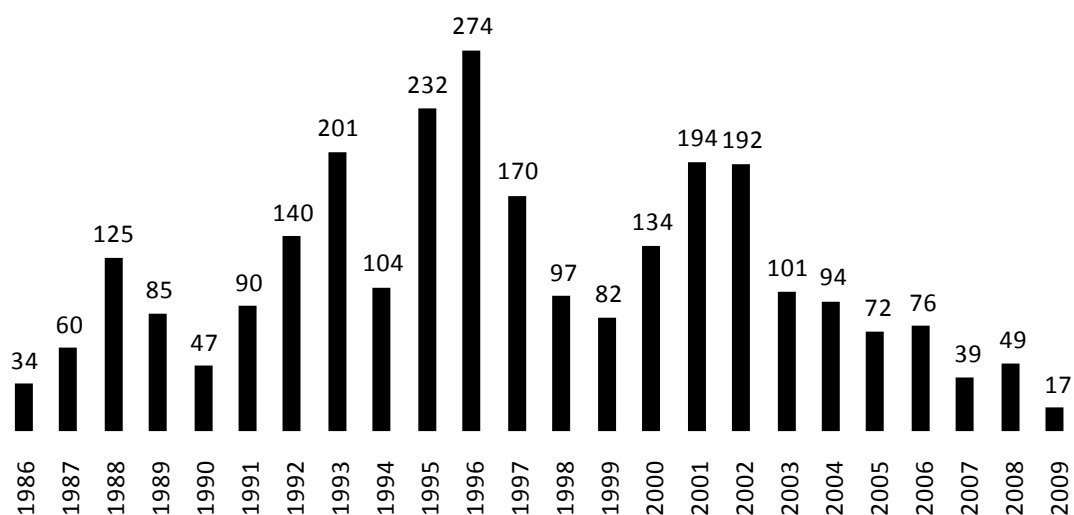


Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa, 2010

Igualmente los sindicalistas han sido otro grupo afectado por el conflicto. Desde 1986 hasta 2009 han sido asesinados 2709 sindicalistas por el ejercicio de su profesión. Cabe destacar en la figura 8

que desde 1986 hay cuatro momentos de mayor auge respecto a estos asesinatos. Dos momentos coinciden con los dos momentos de mayor dinámica del conflicto pero también hay dos momentos más a principios de la década de los noventa y a mediados de esta misma década.

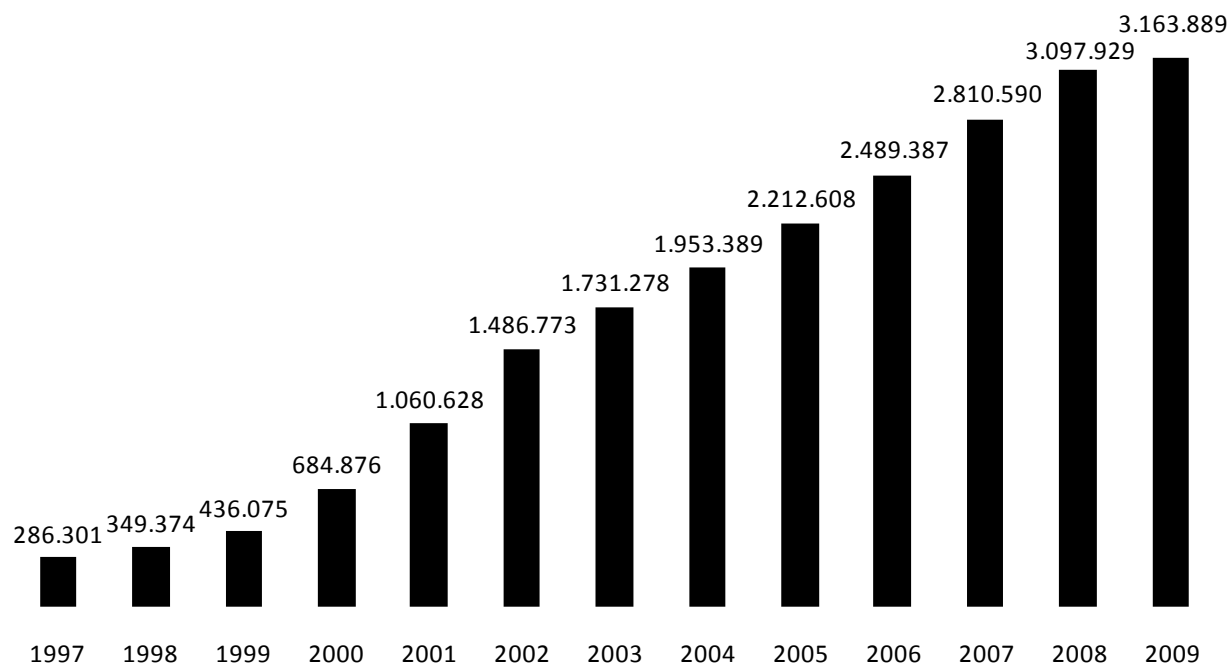
Figura 8. Homicidios a sindicalistas de 1986 a 2009



Fuente: Escuela Nacional Sindical, 2010

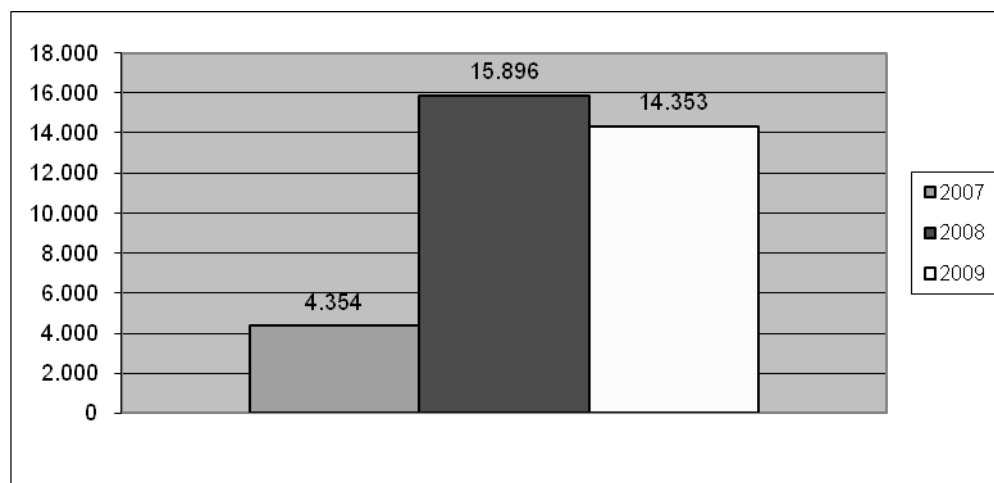
A parte de las muertes como consecuencia del conflicto, cabe señalar los desplazados, desaparecidos y las víctimas de la violencia del conflicto. Desde 1997 según Acción Social han sido desplazados de sus territorios de origen más de veinte y un millones de personas. En la figura 9 se aprecia los desplazados por cada año desde 1997. En el año 2007 se creó la Comisión de Búsquedas de Personas Desaparecidas. Desde ese año se contabiliza las personas que han desaparecido y desde esa fecha hasta 2009 han desaparecido 34.603 personas (Figura 10). La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía atendió desde 2006 a más de 70.000 víctimas de abusos paramilitares Mientras que los paramilitares en las versiones libres que han llevado a cabo han reconocido a 35.771 víctimas del conflicto colombiano.

Figura 9. Número de desplazados de 1997 a 2009



Fuente: Acción Social, 2010

Figura 10. Desaparecidos de 2007 a 2009



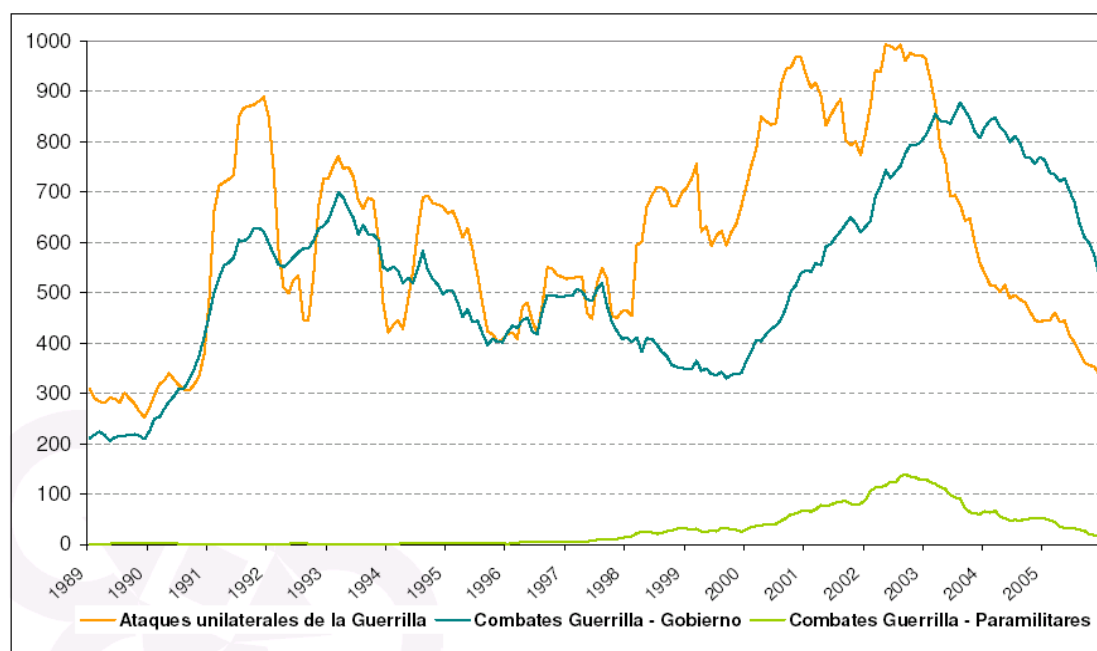
Fuente: Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 2010

En esta misma dinámica del conflicto los combates de la Fuerza Pública con los grupos armados ilegales ascendieron en particular desde la Administración Pastrana (1998-2002), según un informe realizado por la Fundación Seguridad y Democracia. Durante ese periodo, la Fuerza

Pública combatió a todos los grupos armados alcanzando el número máximo de 2248 combates en el segundo año de mandato del presidente Uribe en 2003. El grupo armado más combatido desde 1998 ha sido sin duda las FARC seguido del ELN y, en último lugar los grupos paramilitares.

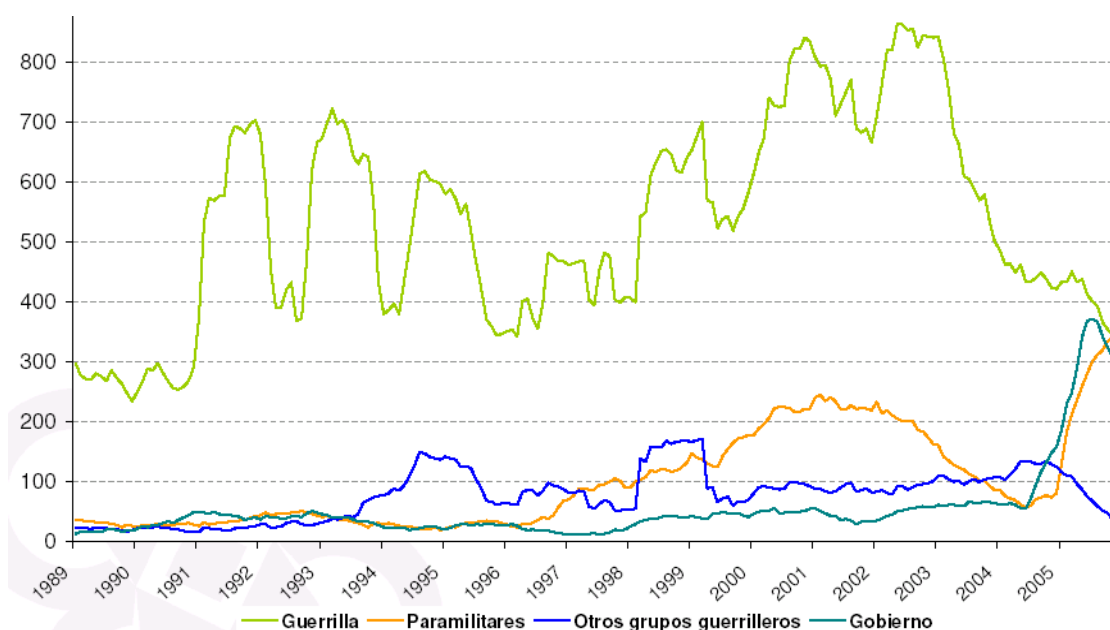
En la figura 11 se aprecia que la mayoría de las acciones del gobierno ataca a los grupos armados de las FARC. Mientras que los ataques entre las FARC y los paramilitares no han llegado a más de 150 como punto máximo para el año 2003. En la figura 12 se puede observar las acciones unilaterales década grupo siendo las FARC el grupo que mayores acciones ha realizado mientras que otros grupos guerrilleros se han mantenido en menos de doscientas acciones. Por una parte, el gobierno mantiene desde 1989 pocas acciones contra los grupos armados pero desde 1998 con el gobierno de Pastrana y sobre todo con el gobierno de Uribe las acciones aumentan. Este aumento no es sólo porque se ataque más a los grupos guerrilleros sino porque, como se explicó antes, desde el gobierno de Pastrana se empezó atacar más duramente a los grupos paramilitares. De hecho en ese mismo periodo las acciones de los grupos paramilitares también aumentaron por la confrontación no sólo con las guerrillas sino sobre todo con el Gobierno. Se observa perfectamente como desde 2004 el gobierno y los paramilitares se mantienen confrontados.

Figura 11. Ataques de la guerrilla, paramilitares y gobierno de 1989 a 2005



Fuente: Base de datos de conflicto CERAC, 2006

Figura 12. Acciones unilaterales de cada grupo de 1989 a 2005



Fuente: Base de datos de conflicto CERAC, 2006

En resumen, el conflicto armado se caracteriza por ser un proceso dinámico, donde se implica a varios actores armados que a su vez implica a diferentes sectores sociales, políticos e institucionales en diferentes coyunturas y en diferentes regiones. Es un proceso en continua expansión geográfica y social con varias coyunturas de alta intensidad mortuoria, combativa y de incremento de pie de guerra.

4.1.2. Repertorio y marcos de la acción colectiva

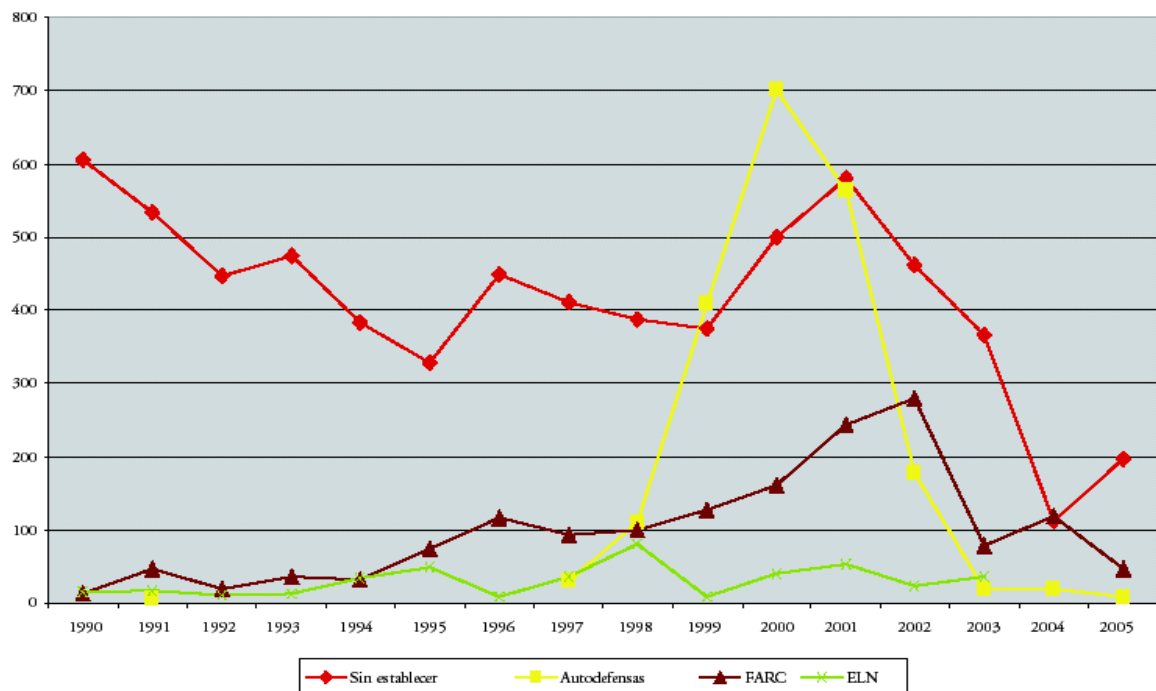
En este punto, los ciclos de acción colectiva “son los crisoles en los que se forjan nuevas armas para la protesta” (Tarrow, 1998). Es decir, las nuevas formas de acción colectiva disponen de un espacio para desarrollarse y extenderse. Esta idea es lo que Tilly denominó repertorio de acción, como la totalidad de los medios de actuación que utiliza un grupo para realizar reclamos (Tilly, 2003).

En este sentido, Tarrow destaca tres tipos básicos de acción colectiva: *la violencia, la alteración del orden y lo convencional*.

La violencia es el rastro más visible de la acción colectiva tanto en la cobertura que los medios contemporáneos le ofrecen como en el registro histórico, señala Tarrow (1998). El propio Tilly

(1992) había señalado que fue el nacimiento del Estado moderno en Occidente el que suprimió la violencia privada y tomó el control de la violencia organizada. En Colombia, el monopolio de la violencia no fue ejercido totalmente por el Estado debido, en parte, a la débil presencia del Estado en el territorio nacional y la competencia por el poder de otros actores armados que comparten el monopolio de la violencia junto con el Estado. La acción violenta ha sido una constante en el conflicto colombiano desde sus orígenes en los años sesenta provocado por los grupos armados. Como se anotó en el punto anterior, dentro de esa dinámica e intensificación del conflicto, incluso hubo dos momentos de máxima interacción donde los actores armados intensificaron la lucha armada en el territorio, a fines de los años ochenta y principios de los noventa y a finales de la década de los noventa. Las herramientas tácticas usadas por los grupos paramilitares fueron en primer lugar la *violencia masiva o indiscriminada* como medio para extender su dominio territorial y control sobre la población, generando incertidumbre y sorpresa con el objetivo de afirmarse como actor hegemónico. Así, un ejemplo de este tipo de táctica fue la masacre ejecutada en Mapiripán en junio de 1997. El esquema de acción que usaron en esta población se repitió en otras regiones: en primer lugar se escogió la zona de acción que en la mayoría de los casos coincidió con las zonas cocaleras de la guerrilla, posteriormente se exigió la colaboración de las elites para el financiamiento de la operación y, por último, se dispuso el reclutamiento forzoso de hombres para luego extenderlos en el territorio. Como se muestra en la figura 13 los grupos paramilitares llevaron a cabo una violencia indiscriminada desde 1997 hasta 2003. Una vez que se desarticula y obliga a replegarse a algunos grupos guerrilleros, los grupos armados establecieron como táctica la *violencia selectiva* que coincidió con la declaración de tregua de los paramilitares y el descenso en tasa de homicidios durante la Administración de Álvaro Uribe.

Figura 13. Responsables de masacres, 1990-2005



Fuente: DAS/Policia Nacional, 2006

La *alteración del orden público* es, según Tarrow, la fuente de buena parte de las innovaciones del repertorio y del poder del movimiento, pero es inestable y degenera fácilmente en violencia o se esclerotiza en convención (Tarrow, 1998). Sin embargo, es un tipo de acción colectiva inestable pues para mantener las acciones que desafían el orden público se precisa de un alto nivel de compromiso, la capacidad de sorprender a las autoridades y resistir las tentaciones tanto de violencia como de convencionalismo. Los *medios de comunicación* se han convertido en canales a través de los cuales los grupos armados alteraron. La utilización de este medio supuso una innovación en sus formas de acción colectiva. Entre estas herramientas destacaron la utilización que sobre *Internet* hacen estos grupos. Así podemos encontrar que las AUC, FARC, EPL y ELN tienen una página Web donde desarrollan sus estrategias, ideologías, entrevistas, comunicados, noticias, etc. Asimismo, algunos de ellos editaron *revistas* trimestrales como el ELN mediante *Revista Insurrección, o Resistencia*, perteneciente a las FARC-EP⁶⁹. Sus intervenciones en televisión y prensa formaron parte de sus medios de actuación para alterar a la opinión. Así, por ejemplo la retransmisión de la visita de los paramilitares Mancuso, Isaza y Duque en el Congreso el 28 de julio del 2004 causó gran estupor dentro y fuera de Colombia. Igualmente, la difusión de algunos

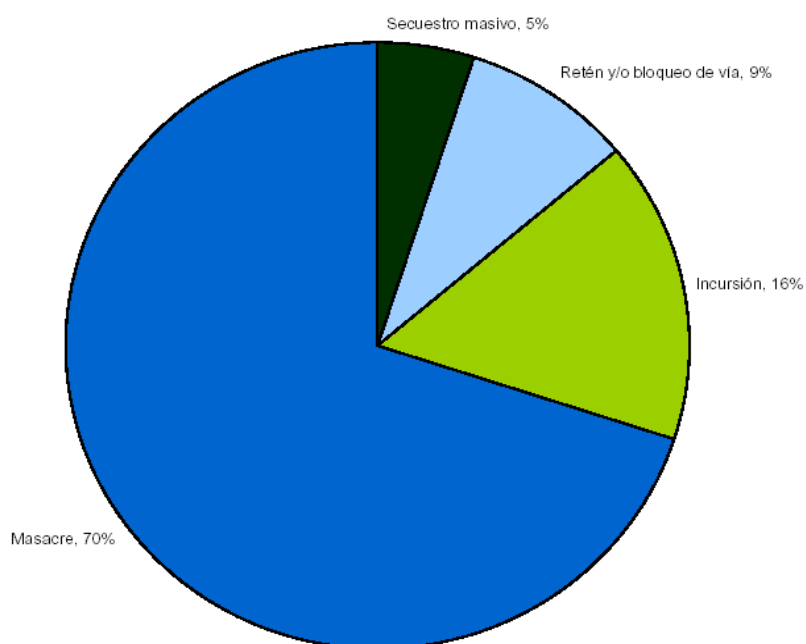
⁶⁹ Los enlaces Web de las páginas de Internet de estos grupos armados son los siguientes: AUC www.colombialibre.org; ELN www.patrilibre.org; EPL www.pcdec-ml.com y FARC www.farcep.org. Los enlaces electrónicos para acceder a las revistas del ELN y FARC-EP son los siguientes: FARC-EP <http://www.farcep.org/resistencia/internacional/> y ELN www.eln-voces.com

documentales donde se expusieron sus estrategias de lucha y acción de determinados grupos armados no dejaron indiferente al espectador y por ende a la sociedad. Entre estos videos destaca el documental *La Sierra* a propósito de la historia de vida de un joven colombiano que se introdujo en el Bloque Metro de Medellín perteneciente a la estructura paramilitar ó *Fusiles de madera* que muestra el adoctrinamiento de nuevos guerrilleros elenos (del ELN) en materia armamentística, ideológica y comunitaria. Estas acciones provocaron más alteraciones de orden en aquellas sociedades que se desarrollan en contextos diferentes. La globalización de los medios de comunicación potencia este hecho transmitiendo una mayor información de sus actuaciones de manera más precisa.

Las formas de *acción convencionales* son aquellas que se basan en rutinas que la gente conoce. En este caso y teniendo en cuenta que prima la variable acción rutinaria, en el ejemplo colombiano se traduce en las dos anteriores acciones: violencia y alteración del orden. Estos dos aspectos forman parte del medio de actuación tradicional que desde la emergencia de los primeros actores armados puede corroborarse.

En la siguiente figura se puede apreciar como la violencia ocupa el mayor porcentaje de las acciones cometidas por grupos paramilitares. El 70% son masacres paramilitares y el 30% restante alteración del orden que incluye secuestros, retenes e incursiones.

Figura 14. Acciones de los grupos paramilitares de 1988 a 2004



Fuente: Base de datos del conflicto colombiano, CERAC, 2005

Respecto a los marcos de la acción colectiva, Tarrow (1998) expone que “la cultura de la acción colectiva se construye sobre la base de marcos estructurales y emociones orientadas hacia la movilización voluntaria y la acción en escenarios de conflicto. Los líderes de los movimientos se encargan de extraer los símbolos del acervo cultural y combinarlos con principios orientados a la acción, con el fin de guiarse estratégicamente entre un paralelogramo de actores que van desde los Estados y los adversarios sociales hasta los militantes y las poblaciones que se quieren movilizar. Lo que es más importantes, se les otorga un valor emocional destinado a transformar la pasividad en acción”. Es decir, Tarrow se refiere a *los esfuerzos estratégicos realizados por un grupo de personas para forjar formas compartidas de considerar el mundo y así que legitimen y muevan la acción colectiva*. Teniendo en cuenta estos motivos con los que Tarrow señala los marcos de referencia y con la idea de señalar sucintamente esta cuestión, cada grupo armado creó para sí y parar su movilización marcos de acción colectiva.

La guerra fría y los rezagos de la violencia liberal-conservadora de los cincuenta fueron detonantes de la aparición de guerrillas marxistas en la Colombia de los sesenta. En esta línea las FARC, influidas por estos factores y por el sistema político colombiano, sobre todo en la inviabilidad de apertura hacia otras fuerzas políticas, establecieron una vía diferente de acción y propusieron como fuente ideológica las revoluciones de China o Rusia como base para acceder al poder para gobernar y reformar al Estado, modificar la estructura política, económica y social del Estado, de tal manera que sus miembros puedan entrar a participar en la toma de decisiones y en el gobierno del país, utilizando para ello cualquier vía: la política o la armada, o en dado caso la combinación de las dos.

Las FARC se definen como un grupo revolucionario, una organización política, que defiende a los campesinos y que representa para ellos la vía de la integración a la sociedad y al estado nacional. Es decir las FARC representan un medio para integrarse a la sociedad pues el estado nacional los excluyó. La única forma de que los campesinos puedan ser algo más grande, algo más allá de ellos es a través de su participación en la organización armada. A través de las armas se defienden y se aseguran cierto respeto para ser escuchados por el Estado (Bolívar, 2006)

En sus escritos, las FARC hacen énfasis a su origen campesino, al ataque a Marquetalia y a las exigencias de 48 campesinos que exigieron al Estado la construcción de vías de comunicación para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercado y escuelas para sus hijos⁷⁰. Por tanto la

⁷⁰ “Tirofijo al inicio de los diálogos de paz”, 07/11/1999, disponible en la página web de las FARC www.farcep.org

historia y su origen campesinos son claves para definir a este grupo. También su idea de renovar Colombia en busca de un socialismo para los colombianos cuando lleguen al poder.

Para las FARC el Estado ha declarado la guerra al pueblo para someterlo a la política neoliberal y antidemocrática impidiendo el surgimiento de nuevas fuerzas productivas y la presencia de nuevos partidos políticos. Señalan que los dos conflictos que generó el Estado fueron el problema agrario y la exclusión política. A partir del problema agrario la guerrilla construye una conceptualización del Estado y el régimen político. Según este grupo, el estado se define como un estado oligárquico, violento, exclusivista, corrupto, responsable de la guerra que ha sido impuesta por la oligarquía liberal y conservadora para satisfacer los intereses de estas clases, los gremios económicos y militares, el paramilitarismo, los medios de comunicación y la embajada americana. Dentro de esta visión del Estado, el paramilitarismo es una política de Estado, un mecanismo de las autoridades para castigar al pueblo pero nunca unos autores que estén en relaciones conflictivas o ambiguas con el Estado. Es un instrumento práctico para gobernar Colombia⁷¹ (Bolívar, 2006).

Las FARC recogen sus pensamientos y acciones a través de sus programas, estatutos, plataformas y conferencias donde expone su ideología de grupo. La formación política del guerrillero incluye el estudio de estos documentos. Cuando ingresan las personas a la formación de las FARC el trabajo político es el primero que se realiza con los nuevos miembros para posteriormente comenzar con el trabajo militar. La entrevista que realicé a un exguerrillero de las FARC comenta esta situación. Jean, explica que él se convirtió como responsable de la parte política de un grupo de las FARC que se encontraba en Barrancabermeja. Él se encargaba de dar charlas para que se convirtieran los campesinos. A través de la defensa de los derechos del campesinado y la negación del ejercicio del Gobierno, exponía su mensaje a diferentes pobladores. También se dedicaba a llegar a personas influyentes como políticos o empresarios, para que colaboraran con las FARC con dinero, alimentos, casas para dormir, medicamentos, etc. Es decir, existen miembros de esa guerrilla que se dedican a adoctrinar a los nuevos miembros para incidirles en la cuestión de defensa del campesino, en contra del Estado y utilizar la vía de las armas para derrotar al Estado e implantar una nueva sociedad.⁷²

⁷¹ Disponible en <http://six.swix.ch/farcep/Mesa/infome.html> y en la página de las FARC www.farcep.org en el comunicado del 01/03/2002.

⁷² Entrevista a Jean, 5 de julio de 2007, Bogotá.

Respecto al M-19, en palabras de Antonio Navarro Wolf⁷³: “hasta ese momento la guerrilla colombiana estaba en la decisión sobre si Moscú o Pekín, si el Leninismo o el Maoísmo, pero nosotros en cambio éramos nacionalistas”. El M-19 instauró un movimiento basado en símbolos más cercanos a la historia y tradición colombianas, pensaron en figuras que hubieran luchado por el país y no en historias sobre revoluciones. Parecía que el nuevo grupo insurgente, que empezaba a formarse en 1973, veía esos ideales de lucha latinoamericanos encarnados en Bolívar como un excelente soporte ideológico.

Por su parte, los grupos de autodefensas y paramilitares construyeron su marco de acción colectiva alrededor de su defensa ante la expansión de la guerrilla. Grupos de campesinos con apoyo del Ejército y de las elites locales formaron grupos de autodefensa campesina a finales de los sesenta, armados con precarias escopetas con el único propósito de defenderse de la guerrilla. Las inversiones de los narcotraficantes en propiedades rurales se convirtieron en el blanco de la extorsión, del robo de ganado y del secuestro, al igual que se encontraban los agricultores de varias zonas del país. Estas acciones se intensificaron con el rearme y fortalecimiento de las guerrillas del EPL, FARC y M-19 tras el fracaso de las negociaciones de paz con la Administración de Betancur. Por estas acciones, los narcotraficantes que ya tenían bandas armadas para su protección, conformaron grupos de paramilitares que bajo su dirección y financiamiento se extendieron geográficamente. Con posterioridad, este fenómeno se fue asentando y desplazando a la guerrilla para mostrarse como una nueva opción de grupos que proporciona seguridad ante la existencia de grupos guerrilleros y ante la incapacidad del Estado por desproteger de seguridad a determinadas zonas de Colombia, sobre todo zonas rurales. Por tanto, la justificación de la defensa propia y la función complementaria a la tarea de seguridad a cargo de la Fuerza Pública le crearon una aceptación sobre todo en aquellas zonas donde la guerrilla ejerció su poder.

⁷³ Antonio Navarro Wolf fue miembro de la guerrilla urbana M-19. Ascendió hasta convertirse en el segundo comandante de esta guerrilla. Coordinó el Equipo Negociador de Paz de esta organización durante las negociaciones con el gobierno del presidente Belisario Betancur en 1984. Posteriormente él mismo confirmó los acuerdos de paz con el gobierno del presidente Virgilio Barco en 1989. Fue candidato a la presidencia para las elecciones de 1990 al ser asesinado el candidato Carlos Pizarro. Navarro fue uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución Política vigente en 1991. Ha sido ministro de Salud en 1990, candidato a la presidencia nuevamente en las elecciones de 1994, alcalde de Pasto (1995-1997), representante a la Cámara por Bogotá (1998-2002) y senador (2002-2006). Fue precandidato del Polo Democrático Alternativo –PDA- para las elecciones presidenciales de mayo de 2006. En una consulta interna, Navarro perdió frente al exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, quien se convirtió en el candidato oficial del PDA.

En las declaraciones realizadas al periodista Mauricio Aranguren, Carlos Castaño confiesa que el problema con la guerrilla comenzó con el asesinato de su padre por parte de las FARC y que nunca les devolviera el cuerpo del difunto:

“Durante el primer año fuimos una organización de espíritu vengativo, cuando ya habíamos ejecutado a la mayor parte de los asesinos de mi padre, comenzamos a ser justicieros. La venganza como tal no conduce a nada. Pretendimos hacer justicia, lo que siempre ha faltado. No queríamos ver a otras familias sufrir la tragedia que padecimos con nuestro padre. Nos enfrentamos a la guerrilla a muerte. Decidimos proteger a la familia cercana: primos y tíos; posteriormente, comenzamos a preguntarnos: “¿Qué le puede pasar al papá de ese amigo o de ese otro que nos ha ayudado tanto? Descubrimos que existía un grupo de personas que defender y encontramos una causa” (Aranguren, 2005: 73).

La defensa en este grupo es como un derecho que les permite en primer lugar defender su propia vida, los bienes, sus familiar y posteriormente la defensa de los territorios. Este grupo armado se erige como el defensor y protector de la sociedad frente a la guerrilla, productores del orden social con derecho a defenderse y amparados legalmente por la ley 48 de 1968. En sus discursos también hacen hincapié a las diferencias regionales de cada grupo, diversidad que caracteriza a cada grupo.

Este grupo se erige como héroes, libertadores que defendieron la patria del azote guerrillero y lucharon por la libertad de Colombia⁷⁴. Pero además ellos se autodenominan también como víctimas pues sufrieron los primeros abusos de la guerrilla, la extorsión, las vacunas, el asesinato, etc. y el Estado no pudo defenderles⁷⁵. Ante el abandono del Estado, las AUC tuvieron que asumir obligaciones del Estado como el desarrollo de infraestructuras, seguridad y bienestar comunitario. Por tanto, este grupo armado que se define como actor político es una formación orientada a la defensa, protección y restauración del orden. Reemplazan al Estado pero insisten en que el Estado tiene que recuperar sus obligaciones, hacer presencia en el territorio en seguridad y protección⁷⁶. Frente a esta posición del Estado, las AUC lo cuestionan en puntos como la corrupción, el clientelismo y el centralismo. Les increpa que tiene que preocuparse del desarrollo de cada región.

⁷⁴ Discurso de Mancuso publicado en www.colombialibre.org el 28/06/2004.

⁷⁵ “Que nadie venga ahora a poner cara de angelito” Revista Semana, numero 1167, 9 de septiembre de 2009.

⁷⁶ “Inicio de conversaciones” Revista Semana, número 1110, 9 de agosto de 2003.

De ahí procedieron a organizar movimientos políticos que reflejaban la actitud anticomunista beligerante de sus promotores. Con este fin, impulsaron campañas políticas de alcaldes locales, crearon un partido político, Movimiento de Restauración Nacional- MORENA- en 1989 y, partidos afines al paramilitarismo. Tras esta dinámica, los paramilitares apuntaron hacia una estrategia política y social. Así lo apuntaron varios analistas como W. Ramírez Tobón (2005) quien señaló que a partir del liderazgo de Carlos Castaño se configuró un proyecto político con cuadros, base social, financiamiento y aspiraciones territoriales. En el proyecto de “reconstrucción nacional” de 1999 se determina la visión reformista del Estado que desarrolla en once puntos donde exponen su plataforma ideológica, entre ellos:

- Reforma política: se proponen modificaciones en el régimen de partidos e instituciones de representación popular, en los órganos de control público y judicial.
- Reforma agraria: modificaciones al régimen de propiedad, tenencia, administración de la tierra que no afecte predios bajo altos índices de productividad
- Modelo de desarrollo económico: necesidad de una fuerte intervención del Estado, un proteccionismo comprensivo de las exigencias mayores de la globalización y la promoción de una burguesía antimonopolista.
- Igualmente establece reestructuración en las Fuerzas Armadas, revisión del Derecho Internacional Humanitario e incluso expedición de políticas de narcotráfico, hidrocarburos y de medio ambiente.

Unido a la relevancia del marco de la acción colectiva los medios de comunicación, como mencionamos anteriormente, siguen siendo una herramienta indispensable para hacer visibles las acciones de estos grupos y para mostrar su accionar, su ideología, sus estrategias, etc.

Por tanto los repertorios y marcos de la acción colectiva forma parte indispensable del accionar de los grupos armados. En estos conceptos se examina las estrategias de estos actores para alcanzar sus objetivos y legitimar su acción.

4.1.3. Viejas y nuevas organizaciones dentro del conflicto

Los ciclos de conflicto casi nunca están controlados por una organización. Según Tarrow el punto más alto de una ola lo marca la aparición de acciones colectivas espontáneas, es decir las estrategias y los resultados de la acción colectiva están estructurados tanto por las tradiciones

organizativas previas como por los nuevos movimientos organizados. Es posible que ciertas organizaciones cesen en sus reivindicaciones porque hayan quedado satisfechas o sus esperanzas se hayan roto, pero es posible que la confrontación siga por medio de otras organizaciones (Tarrow, 1998).

La aplicación de este aspecto al caso colombiano se plasma de la siguiente manera. Respecto a la existencia de *viejas organizaciones*, las guerrillas de las FARC, EPL, ELN y M-19 pueden equipararse a ese tipo de organización pues fueron estos grupos armados quienes en la década de los sesenta y setenta se movilaron en función de unos intereses que los llevaron a la acción colectiva y a convertirse en uno de los principales actores del inicio del ciclo de conflicto.

En esta línea de reconocimiento como viejas organizaciones dentro del ciclo, cabe destacar aquellas otras *nuevas organizaciones* que a la par alimentan la acción colectiva. Entre las nuevas organizaciones destaca las estructuras paramilitares y de autodefensa. Consideradas nuevas organizaciones porque el surgimiento de estos actores se demoró más en el tiempo pues a mediados de los años ochenta se percibieron los primeros actos de movilización hasta la conformación de las ACCU en 1994 y las AUC, en 1997. Por tanto, estas nuevas organizaciones imprimieron mayor dinámica al conflicto.

Tras el proceso de desmovilización paramilitar en 2005, surgieron nuevos grupos o bandas criminales llamado *Bandas Criminales Emergentes*. En su mayoría son grupos de paramilitares que se reorganizaron y siguieron con sus actividades ilícitas de contrabando, narcotráfico y violencia. Estos grupos también podemos considerarlos como nuevas organizaciones pese a su gran vínculo con los grupos paramilitares.

Otras organizaciones que podemos considerar como nuevas son las *movilizaciones por la paz* que empezaron a cobrar auge desde finales de los años ochenta y principios de los noventa debido al proceso de desmovilización y negociación con las guerrillas y al proceso constitucional de 1991 que oxigenó y abrió la participación democrática. Sin duda fue a partir de 1993 y hasta 1999 que se gestaron las grandes organizaciones y movilizaciones por la paz, que buscaban una salida negociada al conflicto armado. En este periodo se conformó el Comité de Búsqueda de la Paz en el cual se congregaba una serie de ONG's y organizaciones: como en 1993 se crea Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra- REDEPAZ-. La dinámica de los espacios a favor de la paz fue muy grande y este hecho se reflejó en el auge de mesas de trabajo, manifestaciones, foros

etc. A partir de 1997 se consolidó en el ámbito regional los consejos y las comisiones locales y regionales de paz que han tenido como objetivo impulsar el diálogo con los actores armados, así se crearon los Cabildos Abiertos por la Paz en varios municipios. Igualmente han surgido alternativas para la sociedad civil en medio del conflicto como las comunidades de paz del Urabá, los programas de desarrollo y paz, los procesos constituyentes municipales y departamentales, etc. (Fernández, García y Sarmiento, 2004).

En resumen, en este punto se observa evidentemente la existencia de diferentes organizaciones- nuevas y viejas- que dinamizan el conflicto colombiano cumpliendo así uno de los elementos del ciclo de conflicto. Sin embargo, tanto las viejas organizaciones como las nuevas siguen movilizándose con diferentes dinámicas pero en el mismo espacio de tiempo produciendo un contexto histórico cambiante y dinámico.

4.1.4. Aumento de la información y de la interacción

El último punto que Tarrow señala dentro de la fase de movilización es el aumento de la *información y la interacción*. En los periodos en los que se intensifica la confrontación, la información fluye más rápidamente, se eleva el interés político y aumenta la frecuencia e intensidad de la interacción entre los grupos armados y entre estos y las autoridades. Los últimos dos aportes bien se evidencian con claridad en el conflicto colombiano.

El *interés político* empezó a hacerse evidente a partir de la Administración Betancur (1982-1986) que intentó aplicar soluciones políticas, y no tan sólo militares, para la resolución del conflicto. Estas aproximaciones entre el gobierno central y los grupos armados asimismo se encontraban dentro de las *interacciones entre los disidentes y las autoridades*. Por ello, con Betancur se iniciaron las negociaciones de paz con grupos armados y que continuaron en las presidencias de Ernesto Samper, Cesar Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

El gobierno de Betancur inauguró el cambio en las formas de coerción iniciado con la formalización de conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC en 1982 después de ocho años de gobiernos liberales donde el uso de la represión fue un instrumento del gobierno. En 1998 el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) restableció los diálogos de paz con las FARC. Sin embargo fue en los años noventa donde se alcanzó y avanzó en la desmovilización de seis guerrillas (M-19, EPL, MQL, Corriente de Renovación Socialista del ELN, Patria Libre y

Autodefensa Obrera, ADO), pero con las FARC las negociaciones estuvieron interrumpidas. En la Administración de Uribe se llevó a cabo el primer proceso de negociación y desmovilización de los grupos paramilitares iniciado en el año 2003 y hasta el 2006. Los partidos de la oposición surgidos de la legalización de las organizaciones armadas del proceso de desmovilización de los años 90 siguen ausentes en la arena política (Romero, 2002).

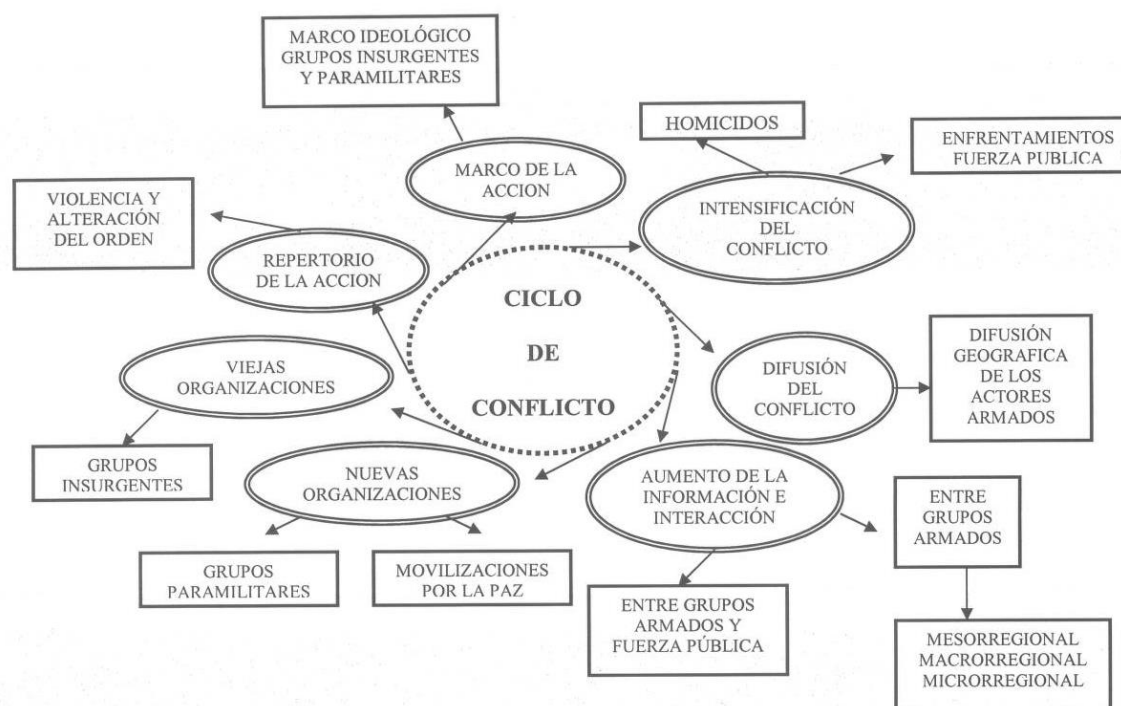
A estas aportaciones se sumaron los decretos expedidos por las autoridades a propósito del tratamiento especial hacia determinados grupos armados. La interacción entre ambos actores fue también apreciable a través de la expedición de determinados decretos y leyes. Así, el Decreto Ley n.º 356 elaborado bajo la presidencia de Cesar Gaviria en 1994 por el que se crea las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Rural, Convivir. Esta figura se caracterizaba por ofrecer su seguridad en zonas de combate donde el gobierno no podía garantizar la seguridad y por lo tanto imprimió legitimación a los grupos paramilitares. Durante la Administración de Barco se decretó la anulación de la ley 48 de 1968 que legalizaba la existencia de autodefensas y se expidió los Decretos n.º 813 y Decreto n.º 814 de 1989 por el que se combate las actividades paramilitares. Entre ellos también destacó el tratamiento de movimiento político otorgado a los grupos armados que se desmovilizaron en el periodo de 1991 a 1994. Ya en la Administración Uribe y mediante la Ley 975 de 2005 comúnmente conocida como Ley de Justicia y Paz, determinó la reincorporación de miembros de grupos armados a la sociedad civil. Por último hay que destacar las disputas sobre el reconocimiento de actor político a los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe.

La *interacción entre los grupos armados* es igualmente patente en el conflicto colombiano. Dentro de esa interacción podemos señalar tres dinámicas de interacción de la mano de Fernán González (2002) en función de la presencia geográfica de los actores armados. La dinámica *macrorregional* hace referencia a las luchas de estos actores por controlar los corredores hacia acceso de recursos económicos. Por ejemplo, el territorio histórico de las FARC situado en el sur oriente se encuentra en disputa por los paramilitares desde los años ochenta en el departamento del Meta, al igual que ocurre a partir de 1996 en el Putumayo y en el sur occidente, nuevo corredor creado por las FARC para salir al Pacífico. Los paramilitares han logrado el control en el norte territorio anteriormente dominados por las FARC y ELN, de los corredores Córdoba-Urabá y chocoano-Nudo del Paramillo-nordestes antioqueño, corredor del bajo cauca antioqueño y Magdalena Medio (Sur de Bolívar, sur del Cesar, Barrancabermeja). Una segunda dinámica corresponde a la zona *mesorregional* que se caracteriza por el control de las zonas más ricas e integradas y las zonas

marginales de colonización campesina. Así las FARC y el ELN luchan por el control de las zonas petrolíferas del Catatumbo, Arauca y Casanare, en la frontera con Venezuela. Asimismo la lucha por la coca en San Pablo, Simití y Cantagallo y por el oro en la serranía de San Lucas, en el Magdalena Medio, explican la confrontación entre grupos de paramilitares y la guerrilla. Por último, la dinámica *microrregional* refleja la lucha dentro de las subregiones, localidades y sublocalidades. La dinámica se desarrolla entre la cabecera urbana controlada por los paramilitares y la periferia rural controlada por la guerrilla (González, 2002: 20-24). En estas tres dinámicas diferentes se observa como los grupos armados interactúan entre sí en diferentes territorios pero con ansias de controlar las zonas más ricas y de mayor potencial económico.

Este último punto, se cierra con los factores que definen el ciclo de conflicto. El análisis de los cuatro factores que definen este concepto hace pensar que el conflicto colombiano cumple con los requisitos de este término al caracterizarse como un proceso dinámico, cambiante que desencadena nuevas oportunidades de actuación y provoca una serie de procesos de extensión e intensificación que tienen como resultado la interacción de diferentes actores- armados, institucionales y sociales- en un contexto variable (Figura 15).

Figura 15. Ciclo de conflicto colombiano



Fuente: elaboración propia

4.1.5. Desmovilización de la acción ¿el fin del conflicto?

Un segundo momento de un ciclo de acción colectiva o de conflicto es la *fase de desmovilización*, proceso en el cual decaen las movilizaciones, es decir, es el punto final de un movimiento. Tarrow señala tres procesos causales como colofón de un ciclo de conflicto: *agotamiento y polarización; institucionalización y violencia y, represión y facilitación*.

Como anteriormente comentamos, Colombia vive una situación de conflicto, de ciclo de conflicto, que aún continúa, pero con la particularidad de que algunos de los actores armados que formaron parte de esta dinámica, se encuentran desmovilizados o en proceso de desmovilizarse. Esto significa que alguno de esos actores ya se encuentra en la fase de desmovilización señalada por Tarrow.

El gobierno presidido por Barco (1986-1990) se distanció de la política de paz de Betancur, pero no del diálogo como fórmula. Estaba a favor de establecer diálogos con los grupos armados pero con la idea de que fuera el Gobierno que abordara el tema de la paz sin utilizar ningún intermediario. Los presidentes Barco y Gaviria iniciaron las conversaciones con el M-19 y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que incluía al Ejército Popular de Liberación (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Quintín Lame (QL) y las FARC mediante el Plan de Paz o Iniciativa para la Paz de septiembre de 1988 “que debía servir como instrumento para la reincorporación de los alzados en armas a la vida civil, con el establecimiento de las garantías de seguridad personal y de participación política con pleno ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos para quienes dejaran las armas” (Pardo, 2004). Este proceso de desmovilización era una iniciativa que partió desde el Gobierno central, con el antecedente de la política de paz aplicada por Betancur. Teniendo este punto en cuenta las estrategias del gobierno no se corresponden con el momento de *facilitación o represión* expuesto por Tarrow, en las cuales el gobierno ante los actores armados bien puede actuar cediendo fácilmente ante sus demandas o bien reprimiendo la acción de los grupos. En esta ocasión, el gobierno tendió la mano para la negociación e hizo acatar a los grupos desmovilizados el modelo de negociación que exigía en primer término suspender las acciones armadas. Este modelo fue acogido por los grupos armados M-19, EPL, PRT y QL.

Estos procesos de negociación llevaron a reinsertar socialmente y económicamente a los grupos desmovilizados. Asimismo, el gobierno central reconoció y reinsertó políticamente a estos

grupos. Es decir, reintegraron a la vida política democrática a grupos armados que posteriormente se transformaron en organizaciones políticas. Entre ellas surgieron como organizaciones Alianza Democrática M-19, Frente Popular, Corriente de Renovación Socialista. Por tanto, este proceso bien puede asemejarse a la *fase de institucionalización* del movimiento frente a la fase de violencia que aun utilizan como táctica las FARC, una parte del ELN y los grupos paramilitares.

Respecto al grupo disidente del ELN, Corriente de Renovación Socialista (CRS), inició diálogos con el gobierno de Cesar Gaviria en 1991. Este grupo surgió como una corriente de opinión al interior de la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional. Desde finales de 1989 este agrupamiento planteó un debate interno a favor de una rectificación estratégica en la lucha armada que incluyera una variable de negociación política, cuya consecuencia inmediata fue la constitución de la CRS como organización político-militar autónoma e independiente del ELN (Corporación Nuevo Arco Iris, 2005). Entre 1993 y 1994 se firmó el Acuerdo de Paz para desmovilizarse, desarmarse y reincorporarse a la vida civil. Por tanto, este grupo además de englobarle en la *fase de institucionalización*, responde también a la etapa de *polarización* de este grupo con el resto de militantes y combatientes del ELN que se inclinaban por la vía armada como estrategia de acción.

Durante el gobierno de Pastrana se llevaron a cabo acercamiento entre el ELN y el gobierno para una posible negociación de paz pero fracasaron. Sin embargo, desde agosto de 2002 se llevaron a cabo rondas de acercamientos entre el brazo armado del ELN y el gobierno central del presidente Álvaro Uribe denominado Fase Formal Exploratoria. Desde 2002 hasta 2005 hubo numerosos distanciamientos, problemas de entendimiento hasta que en septiembre de 2005 comenzó un nuevo periodo de negociaciones, acercamiento y ochos rondas de encuentros formales en La Habana. Francisco Galán, Comisionado del Comando Central (COCE) del ELN lideró estas negociaciones por la parte del ELN. En este proceso cuenta como grupo de apoyo Cuba y Venezuela, mientras que Suiza, Noruega y España ejercieron de acompañantes en esta cuarta ronda de negociaciones y Suecia, Holanda, Italia, Canadá y Japón se mostraron como observadores del proceso. Pero estas negociaciones se rompieron en noviembre de 2007. Por diversos motivos, entre ellos por la negociación acelerada que impuso el gobierno, por la incapacidad de tener un consenso interno en el ELN, por continuar secuestrando, por falta de voluntad política del gobierno y porque no es viable negociar la paz dejando fuera a las FARC.

Otros actores que negociaron con las autoridades son los grupos paramilitares. Estos grupos ya expresaron antes del Gobierno de Álvaro Uribe su deseo de sentarse en la misma mesa de negociación como contraparte de las FARC durante el proceso de negociación con Andrés Pastrana. Sin embargo fue en la Administración Uribe que desarrolló la negociación con este grupo armado en el acuerdo de Santa Fe de Ralito en julio de 2003. Varios analistas, entre ellos Alfredo Rangel (2005), señaló algunos factores por los cuales estos grupos cambiaron drásticamente su estrategia de acción. En primer lugar se señala que el cansancio que genera la guerra entre muchos de los dirigentes de los grupos era un factor a tener en cuenta para alentar el proceso de desmovilización. Este cansancio se caracterizó en parte porque estos grupos comprendieron que su proyecto estaba estratégicamente derrotado, es decir, no iban a provocar el derrumbe del grupo antagónico, las FARC. Un segundo factor que igualmente contribuyó a la desmovilización fue la seguridad que reflejaba el Gobierno de Uribe respecto al tratamiento militar, jurídico y político que implementó en su afán de llevar a cabo un proceso de negociación con los grupos paramilitares. Asimismo, la seguridad fue en parte emanada de la expectativa de este gobierno con respecto a la guerrilla pues iba a debilitarlas y doblegarlas en poco tiempo mediante su política de seguridad democrática que devolvería la seguridad a las regiones del país. Un tercer factor fue la extradición apuntalada por Estados Unidos que empezó a procesar solicitudes de extradición contra los jefes de los grupos paramilitares. Por estos tres factores buscaron los paramilitares conversaciones con el gobierno central.

Hasta este momento descrito, podemos señalar que uno de los tres factores por los cuales este grupo inicia la fase de desmovilización se corresponde con el agotamiento que Tarrow señaló como el descenso en la participación por cansancio. El Gobierno de Álvaro Uribe se caracterizó por un aumento de los combates de la Fuerza Pública con los grupos armados. En el primer año de mandato en 2002, se realizaron 238 combates entre la Fuerza Pública y los paramilitares, en comparación con el último año de gobierno de Andrés Pastrana que contabilizaron 107 combates. El segundo año de mandato de Uribe, periodo que coincide con las negociaciones del gobierno central y los paramilitares, los combates ascendieron a 356 y, el año posterior, en 2004 se redujeron a 300. Por tanto, esta interacción supuso que el gobierno de Uribe combatió duramente a estas fuerzas aun iniciado un proceso de negociación con este grupo, por ello unas de las estrategias del gobierno fue la utilización de la represión- *fase de represión de Tarrow*- como medio que garantizara la debilidad del oponente.

Pero por otra parte y como se analiza posteriormente, los grupos paramilitares influenciaron en las elecciones electorales en determinados periodos, se rodearon de senadores y representantes a la cámara afines a su proyectos, los cuales se beneficiaron en su mayoría electoralmente por apoyar a estos grupos. Determinados partidos políticos se vieron influidos por el control de los paramilitares. Esta situación mal llamada “parapolítica”, es decir, la intromisión de los paramilitares en el ámbito político, llevó a trescientos políticos a ser investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por nexos con grupos paramilitares.

Esta influencia de grupos paramilitares en corporaciones legislativas supone que existen determinadas oportunidades políticas por las cuales estos grupos armados penetran en las instituciones del Gobierno. Por tanto a pesar de que ha aumentado los enfrentamientos de la Fuerza Pública contra estos grupos, por otra parte estas oportunidades permiten pensar que el Estado *facilitó* la persistencia de los grupos paramilitares en el ámbito político. Frente a esta situación, el Estado mantuvo un tratamiento cambiante y ambiguo respecto al paramilitarismo, pues si bien en un primer momento el Estado lo consideró legal pero con una reglamentación inadecuada; luego lo declaró ilegal pero ignorado por la política oficial o catalogado como anexo al narcotráfico y por último fue perseguido por las autoridades pero apoyado por círculos de poder local, regional y nacional (García-Peña, 2005).

Los grupos paramilitares se relacionaron directa e indirectamente con el Estado y sus agentes locales y fueron tolerados por el Estado pero fuera de su estructura formal. Formados, en parte, por el Estado, contra un enemigo en común en el contexto de campañas contrainsurgentes. Fue en el marco del Gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) cuando convirtió en legislación permanente el decreto legislativo 3398 de 1965, ahora *Ley 48 de 1968 o Ley de Defensa Nacional*, por el cual establece el fundamento jurídico para la conformación de *grupos de autodefensas* bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas como respuesta al surgimientos de las guerrillas en un contexto de la Guerra Fría y Doctrina de Seguridad Nacional. Estos nuevos grupos no se crearon de manera masiva hasta la década de los ochenta, donde fueron aprovechados para la creación de otros grupos a expensas del confuso marco jurídico de dicha ley. Estos grupos paramilitares se vieron fortalecidos y legitimados por la decisión del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) de establecer Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, denominados Convivir, propuesta por el Ministro de Defensa, Fernando Botero y el apoyo del Ejército. Estos grupos estaban destinados a aquellas zonas donde el Estado no pudiera proporcionar seguridad. Las Convivir se fue creando de manera masiva pero sin una clara orientación nacional y sin una supervisión institucional. Sus

acciones se entremezclaban con la de los otros grupos armados. Así se fueron extendiendo sobre todo por la zona del conflicto. La formación de estos grupos aumentó el número de integrantes al paramilitarismo tal y como lo demuestra la oficina del Alto Comisionado para la Paz que señala que en los once departamentos más afectados por el conflicto, se registraron actividades paramilitares en el 70% de los municipios en los que fueron creados las Convivir (García-Peña, 2005).

En conclusión el Estado permitió y facilitó la influencia y consolidación de grupos paramilitares, por tanto los grupos paramilitares se encuentran igualmente en la *fase de facilitación* que define Tarrow.

En la *fase de violencia e institucionalización* en comparación con el caso Colombiano, se observó que durante el proceso de desmovilización con los paramilitares creció una *nueva generación de paramilitares* a la sombra de este proceso denominadas BACRIM, bandas de criminales, por el gobierno. Entre ellos surgieron los grupos de Manos Negras y Organización Nueva Generación en Nariño, conformados por exmiembros del Bloque Calima y de Libertadores. En Córdoba y Sucre ya estaban operando el Frente Social por la Paz y los Fantasmas. En el Valle, igualmente había otros grupos que se correspondían con las antiguas estructuras narcotraficantes de los Machos y los Rastrojos, ahora denominados Autodefensas Campesinas del Valle y Rondas Campesinas del Valle. Los Héroes del Chocó se transformaron en Autodefensas Campesinas Unidas del Norte. En el norte de Santander los nuevos grupos de Las Águilas Rojas y Águilas Negras eran excombatientes del Bloque Central Bolívar⁷⁷. Esta nueva generación paramilitar supone que en primer lugar existe polarización entre aquellos grupos que supuestamente se han desmovilizado o quieren llegar a desmovilizarse y aquellos que reconvertidos en otros grupos, desean seguir su camino por la vía armada, por la violencia. Por tanto, *polarización de objetivos y uso de la violencia* son dos factores que caracterizan esta fase de desmovilización con la estructura organizacional paramilitar.

Respecto a la *fase de institucionalización* del movimiento en la que los líderes del grupo institucionalizan sus tácticas para ganar apoyo de la masa dentro de un contexto legal, el artículo 71 de la Ley 975 de julio de 2005, Ley de Justicia y Paz, consideraba a los paramilitares como actores activos del *delito de sedición*. Tipificar los delitos paramilitares como *delito político* sí les

⁷⁷ “La nueva generación de paramilitares ya se deja sentir al menos en ocho departamentos del país” *El Tiempo*, 15 de octubre de 2005.

permitiría a los dirigentes de los grupos paramilitares aspirar a cargos de elección popular y mantener influencia en las regiones. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional examinó la segunda demanda de inconstitucionalidad de esta ley que culminó con la adopción de la sentencia C-370 del 2006. La resolución fue que esta norma fue considerada inexecutable por cuestiones de forma y no de fondo⁷⁸. Por tanto no pueden conformar grupos políticos o tener cargos públicos pero si están dentro de la sociedad civil aquellos que dejaron las armas a través de la Ley 975 que establece este proceso par grupos de paramilitares y miembros individuales de las FARC. Sin embargo si forman parte de esta fase aquellos grupos armados que vimos que fueron desmovilizados a principios de los años 90 como el ELN, EPL, M19, QL, PRT. Pero también están dentro de esta denominación la desmovilización colectiva de grupos paramilitares y las desmovilizaciones individuales de miembros de las FARC, el ELN y grupos paramilitares. Según el Ministerio de Defensa hasta marzo de 2010 se han desmovilizado 8357 miembros de las FARC, 1545 miembros del ELN, 252 miembros de los paramilitares y 218 disidencias (Ministerio de Defensa, 2010). Estas cifras son diferentes si las comparamos con la información del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Según esta información desde agosto de 2002 hasta el 31 de enero de 2008 las desmovilizaciones individuales de los paramilitares son 3682, las FARC alcanza 8603 y el ELN 1983 y 442 disidencias (Fundación Ideas para la Paz, 2008)

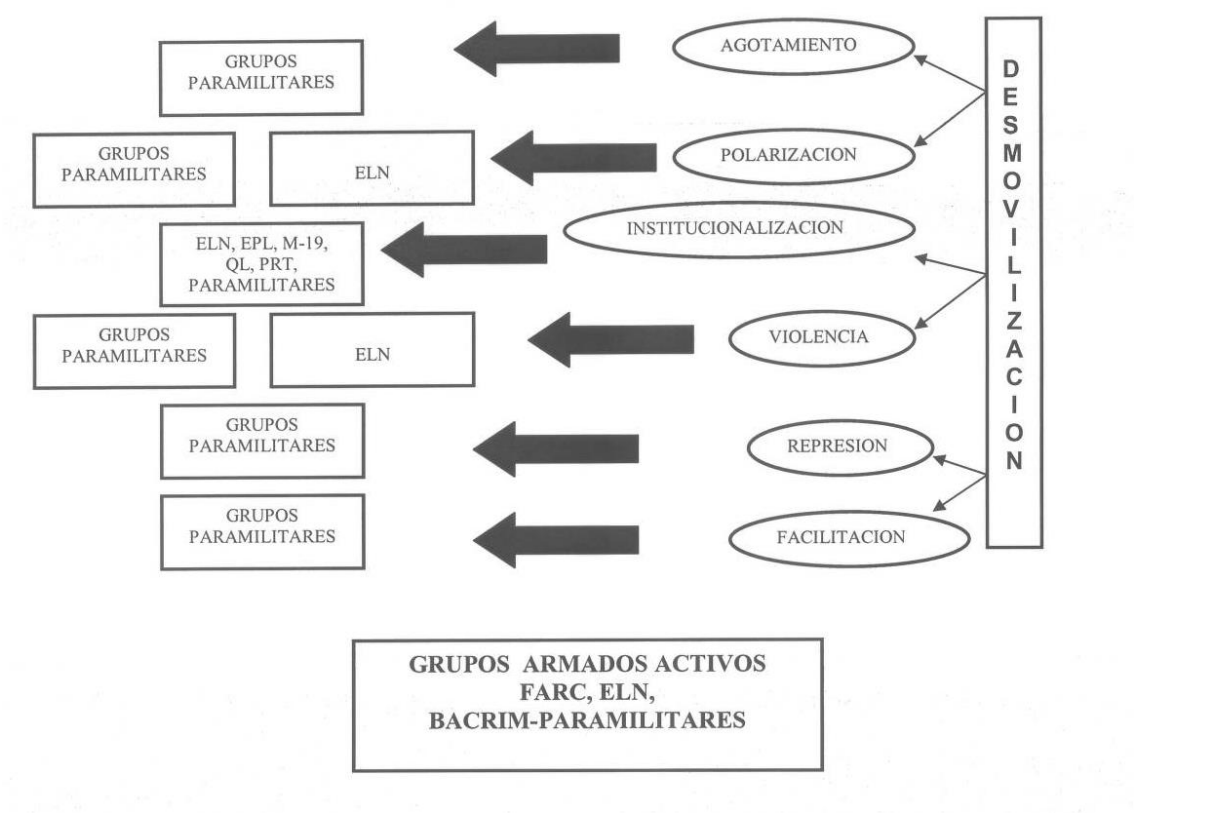
Por tanto, las diferentes fases que Tarrow señala dentro de la desmovilización son desarrolladas por los diferentes grupos que hemos citado en función cada uno del contexto histórico y de los intereses y objetivos de cada uno. A excepción de las FARC⁷⁹ y el ELN como grupos armados, de algunos grupos paramilitares sin desmovilizar y los nuevos grupos paramilitares, el resto de grupos armados se desmovilizaron o se encuentran en la fase de desmovilización. La curiosidad del conflicto colombiano es que se encuentra en una situación de ciclo de conflicto donde aún interactúan determinados actores entre sí y entre las autoridades pero con varios actores armados reinsertados a la sociedad civil. Es curioso ver que los grupos de paramilitares se encuentran en todas las fases de la desmovilización. Debido a la complejidad del grupo armado, a los diferentes

⁷⁸ Según la redacción de El Tiempo: “La aprobación del artículo 71, que equiparaba el paramilitarismo al delito de sedición, no cumplió con los parámetros establecidos en la Constitución y en el Reglamento Interno del Congreso. El tema fue incluido en el segundo debate en la Cámara a pesar de que no estaba en la ponencia inicial. Por lo tanto, no cumplió con los cuatro debates legales. Esto significa que en otro proyecto de ley el Gobierno podría revivir el estatus político para los paramilitares”. “Así quedaron los puntos polémicos de la sentencia de Justicia y Paz”. *El Tiempo*, 18 de julio de 2006.

⁷⁹ A finales del año 2012 las FARC anunciaron un cese de hostilidades unilateral y comenzaron a establecer un proceso de diálogo con el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en la Habana. Este proceso se ha visto alterado por varias cuestiones. Por eso, en esta investigación se le considera que aún no se encuentra en un proceso de desmovilización. “Farc destacan propuestas ciudadanas”, *El Tiempo*, 9 de enero de 2013.

conflictos y grupos que se encuentran dentro del concepto paramilitar o autodefensa nos encontramos con diferentes fases que han pasado y aún se encuentran este heterogéneo grupo armado (Figura 16).

Figura 16. Fase de desmovilización del conflicto colombiano



Fuente: elaboración propia

4.1.6. Conclusión

En resumen, Colombia se encuentra inserta en un ciclo de conflicto que dinamiza las acciones de los actores en un contexto cambiante que intensifica y difunde el conflicto, hace surgir nuevos actores, aumenta la interacción entre ellos y establecen estrategias de acción cambiantes. La expansión e intensificación del conflicto armado se dio a finales de la década de los ochenta cuando los grupos alzados en armas, insurgentes y contrainsurgentes, cambiaron su patrón de asentamiento y se desplazaron a zonas de gran potencial económico, permitiendo reestructurar su organización, expandirse y consolidar su dominio en determinados territorios. La violencia y la alteración del orden fueron las formas de actuación de los grupos armados como estrategia para

consolidar sus objetivos en el territorio colombiano. Frente a los viejos actores armados surgidos en los sesenta y setenta, como el ELN, FARC, EPL, M-19, se sumó nuevas organizaciones como los grupos de paramilitares y autodefensas en los ochenta, las movilizaciones por la paz cobraron fuerza a finales de los ochenta y principio de los noventa. A este grupo de nuevos actores también hay que sumar las bandas criminales emergente que surgieron tras la desmovilización paramilitar del gobierno de Uribe. La interacción entre estos grupos armados y entre éstos y los actores institucionales, ya sea mediante el uso de la violencia o la utilización de procesos de paz, constituyeron un factor relevante del ciclo de conflicto, sin embargo el ciclo también tuvo su fase de desmovilización en la cual se insertaron los grupos armados mencionados. Por su parte, los grupos paramilitares se encuentran en todas las fases de desmovilización propuesta por Tarrow. Por una parte el Estado utilizó la represión hacia estos grupos sobre todo a través del aumento de los enfrentamientos con la Fuerza Pública. Pero igualmente el Estado facilitó la creación de estos grupos y su consolidación en el territorio colombiano. Por otra parte con las negociaciones llevadas a cabo por el presidente Uribe con este grupo se destapa un síntoma de agotamiento de parte de estos grupos por incorporarse a la civilidad y llegar a la fase de institucionalización. Sin embargo, otros grupos aún ejercen la violencia y polarización frente a los paramilitares desmovilizados. Otros grupos armados como el M-19, EPL, QL, ELN (CRS), PRT se desmovilizaron a principios de los años noventa y se englobaron en la fase de institucionalización. Pero el brazo armado del ELN continuó por esa vía hasta que en agosto de 2002 se comenzó tímidamente a establecer contactos con el gobierno central para una posible incorporación de este grupo a la sociedad civil.

La existencia de un ciclo de conflicto en Colombia y por la dinámica que adquiere este tipo de ciclos, resulta complicado establecer un panorama alentador respecto al desarrollo final del mismo, pues debemos tener en cuenta las oportunidades políticas que hicieron surgir a los actores armados así como los recursos utilizados para la movilización de sus acciones. Esto es debido a que tanto las oportunidades como los recursos son dos factores claves en el desarrollo y consolidación de los grupos armados y del ciclo de conflicto. Estos dos factores dinamizan el ciclo de conflicto y se encuentran presentes en la sociedad colombiana y son aprovechados por los actores armados en la consecución de sus fines.

4.2 ¿Qué oportunidades del sistema político colombiano aprovecharon los paramilitares para consolidarse?

Las oportunidades políticas son un punto esencial en esta investigación porque nos indica cuáles son las dimensiones del entorno político aprovechadas por la gente para participar en acciones colectivas. En definitiva, nos indica las dimensiones políticas- estructurales y coyunturales- oportunas para incentivar a la participación de las personas en la movilización del movimiento. De esta manera, y siguiendo la teoría aportada anteriormente sobre Tarrow y Kriesi, se estudia las oportunidades estructurales y coyunturales del sistema político que incidieron e inciden en el desarrollo y consolidación de los grupos paramilitares en Colombia desde los años ochenta del siglo XX. La siguiente aportación es un análisis de las oportunidades que en el ámbito nacional influyeron en los diferentes grupos paramilitares para movilizarse y consolidarse en el territorio.

4.2.1 Los paramilitares y las oportunidades estructurales

En general América Latina, y en particular Colombia, heredó la división administrativa territorial de la colonia, es decir, la formación del Estado en América Latina quedó delimitada por la administración colonial y no por conflictos exteriores como ocurrió en Europa. Esta división territorial junto con la existencia de núcleos económicos coloniales, espacios vacíos, la debilidad del mercado interior y el escaso desarrollo de la economía monetaria fortalecieron los poderes regionales y locales en Colombia. Estos poderes regionales y locales junto con las autoridades formales del Estado español conformaban la estructura dual del poder colonial. Esta estructura de poderes fue heredada por la República que se caracterizó por la presencia de un Estado moderno con una burocracia centralizada y una estructura informal de poder representada por el sistema de partidos tradicionales que constituían redes locales y regionales de poder de carácter clientelistas (González, Bolívar y Vázquez, 2003).

Marco Palacios (2002) señala que tras la ruptura con la Corona española las clases dirigentes se fragmentaron, es decir, aquellas fuerzas centrípetas que existieron durante la colonial se hicieron evidentes una vez que se rompe la unidad con el Imperio español. Esta fragmentación de las elites se expresó durante todo el siglo XIX y XX. Durante el siglo XIX la fragmentación fue evidente en la guerra de independencia entre las regiones realistas y las patrióticas. También fue evidente durante los enfrentamientos entre el centro y la periferia como por ejemplo en la Guerra de los Supremos (1839-1841), la guerra federalista de Mosquera en 1861, o las guerras civiles de

1885 y la de los Mil Días (1899-1901). El resultado de estos enfrentamientos fue que alineó a los grupos de poder que competían en regiones y localidades en dos grandes federaciones nacionales que proporcionó identidad nacional fragmentada a esos grupos locales y regionales de poder. Durante el siglo XX estas identidades partidistas se sobrepusieron a las identidades locales y regionales proporcionando un carácter sectario a los enfrentamientos políticos. Especialmente durante la Violencia esta fragmentación del poder provocó que el Estado no controlara la violencia y que éste fuera sustituido por los poderes regionales y locales. Al final del periodo conocido como Frente Nacional, los partidos políticos tradicionales entraron en crisis así como su papel mediador entre el Estado y la sociedad debido a la interrupción del nuevo tejido social conformado por las masas populares, intelectuales, profesionales y clase medias que se enfrentaron al estilo tradicional de hacer política. Esta crisis institucional provocó una mayor difusión y fragmentación del poder en una sociedad caracterizada por poderes privados y fragmentados en poderes grupales y cerrados. Esta situación favoreció la inserción social de nuevos poderes privados como los narcotraficantes, la guerrilla y los paramilitares (González, 1993).

En resumen, la fragmentación del poder en Colombia fue evidente desde la ruptura con la Corona española. El Estado en Colombia convivió con otros poderes, otros ordenamientos sociales y políticos, que coexistieron, se traslaparon y se reforzaron unos a otros: los poderes regionales y locales de las elites se conectaban en y por los partidos políticos; el nuevo tejido social y la existencia de otros poderes privados como la guerrilla, los narcotraficantes y los paramilitares convivieron con el poder del Estado en una relación que no es estática sino dinámica.

En este sentido el poder estatal fortaleció la rama ejecutiva frente a la legislativa y judicial. Esta democracia delegativa, como señaló O'Donnell, es una mezcla peculiar de rasgos democráticos y autoritarios caracterizada por una autoridad ejecutiva que llega al poder mediante elecciones periódicas y regulares pero que gobierna virtualmente sin ninguna restricción y, en buena medida, por decreto. Muestra de ello fueron los “estados de sitio” que se implantaron durante cuarenta años en Colombia. Por lo tanto, el grado de acceso formal al poder es restringido.

Los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, se formaron durante el siglo XIX como respuesta a la fragmentación del poder y la falta de legitimidad de los nuevos gobiernos republicanos tras la ruptura con la Corona española. Los partidos se construyeron como

federaciones nacionales de oligarquías regionales y locales de carácter clientelista. Estos grupos oligárquicos compitieron entre sí por el control político de su localidad o región, dándose rivalidades intrarregionales e interregionales. Por tanto las regiones o localidades se definieron más como el ámbito de poder de una familia o grupo social que como un ámbito de integración económica o administrativa (González, 1997).

Durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX el bipartidismo fue el elemento articulador y canalizador de todas las solidaridades y rupturas de la sociedad. Fue el articulador de la vida nacional, el intermediario entre la sociedad y el Estado. Por tanto a través del sistema bipartidista el Estado tenía presencia en regiones y localidades. En palabras de Fernán González “se pertenece a la nación a través de la pertenencia a los partidos” (González, 1993). Suplió al Estado en tres funciones: en lo ritual-simbólico al proporcionar una referencia colectiva; en el ámbito de las sociabilidades al relacionar la sociedad con el Estado y por último en el ámbito de la integración física, al proporcionar la presencia de la sociedad y del Estado en el territorio nacional. Así los partidos políticos se instalaron entre instituciones políticas modernas y las solidaridades tradicionales. Esta dimensión de los partidos políticos provocó que nunca se implantaran instituciones impersonales y objetivas propias de un Estado moderno y que no se creara un ámbito público de resolución de conflictos. Por tanto la resolución de los conflictos se realizó por la vía privada, descomponiendo el ámbito público y el monopolio legítimo de la fuerza del Estado como ocurrió en la Guerra de los Mil Días, la violencia de los años cincuenta y ochenta.

Respecto al clientelismo, fue un factor importante en la sociedad colombiana. Ha sido objeto de análisis por parte de antropólogos, historiadores, politólogos, sociólogos y filósofos. Nació dentro de la escuela antropológica funcionalista que lo definió como un intercambio intrapersonal desigual entre el patrón y el cliente pero útil a ambas partes, sin especificar el tipo de estado en el que se realiza el intercambio ni el momento de desarrollo en que se encuentra el país donde se desarrolla esta acción. Este intercambio tuvo su origen en las relaciones patrón-cliente en el antiguo Imperio romano y en la relación del señor feudal y el siervo de la gleba (González, 1997). Sin embargo, en este apartado interesa el análisis de este fenómeno en los diferentes momentos de la historia de Colombia. Andrés Dávila y Natalia Delgado (2001) definen que el clientelismo formó parte de mecanismos informales de lealtades asimétricas, mediante el cual se intercambian bienes y servicios por apoyo electoral, recursos públicos, generando unas dinámicas de interacción que involucraron cada vez un menor grupo de personas dentro de los

beneficios que pudo ofrecer un Estado débil como el colombiano. Estos autores realizaron una síntesis de los diferentes tipos de clientelismo en Colombia. El primer tipo es el *clientelismo tradicional* que se extendió hasta antes del periodo del Frente Nacional en una sociedad que se caracterizaba por ser agraria y arraigada al bipartidismo. Se definió por ser un intercambio entre las oligarquías regionales, hacendados o gamonales⁸⁰ con los campesinos. Eran redes partidistas donde el rojo y el azul era el fundamento para crear redes clientelares. Estas redes estaban articuladas en torno a los políticos tradicionales o jefes naturales y estaban controladas por los gamonales. Desde el Frente Nacional hasta la Constitución de 1991 hubo otro tipo de relación clientelista: el *clientelismo moderno*. En una sociedad que transitaba de la premodernidad a la modernidad este tipo de clientelismo fue el articulador principal del sistema político colombiano. Los partidos políticos se convirtieron en los intermediarios entre el Estado y las clientelas. El Estado se convirtió en el botín de los políticos. Este tipo de clientelismo se comportó como una maquinaria regional y departamental con un gran personaje liberal o conservador en la cima. Desde 1991 el tipo de clientelismo que imperó fue el *clientelismo de mercado*. A pesar de la reforma política de la Constitución de 1991 para superar viejos vicios políticos, el clientelismo se adaptó a esa nueva realidad. Ante una sociedad moderna con un nuevo marco institucional pero continuando con las tradiciones y costumbres del pasado, el clientelismo usó redes locales y regionales para ganar adhesiones ante un alto número de competidores. La competencia entre los partidos políticos fue muy alta y personalizada por la creciente fragmentación de los partidos políticos (Dávila y Delgado, 2001).

Por tanto, los partidos políticos se apoyaron en el clientelismo para relacionarse con el Estado. Así mediante el clientelismo, los partidos políticos se aprovecharon del poder para obtener ventajas electorales de tipo personal. Es decir, el fin del clientelismo fue acumular capital electoral, de esta manera reproduce el bipartidismo. De esta manera el líder de un partido político construyó una red de relaciones verticales y horizontales sobre la base de un intercambio de favores con recursos oficiales con el fin de reproducir un capital electoral y así ascender en status social (Leal y Dávila, 1991).

Algunos autores como María Emma Wills, Francois Xavier Guerra o Fernán González han tratado de ver al clientelismo desde una perspectiva diferente. Según estos autores es

⁸⁰ Los gamonales fueron los caciques regionales y caudillos que aparecen en las guerras civiles del siglo XIX, basados en el predominio económico de la hacienda. Continúa la encomienda colonial. El gamonal o cacique, es un señor feudal que tiene un poder político directo en el nivel local, independiente del gobernador de la provincia y del poder político central. Según José María Samper en el nivel local las funciones se reparten entre el cura párroco (poder legislativo), gamonal (poder ejecutivo) y tinterillo (poder judicial).

imprescindible políticamente la existencia del clientelismo como intermediario necesario entre la sociedad tradicional y el Estado pues tiene una función de inclusión política, es decir, el clientelismo se presenta como un mecanismo primitivo e informal de seguridad social por medio del cual las masas populares y las clases medias logran cierto acceso a los beneficios del Estado y el ascenso social de algunos sectores medios y populares al mundo de la política donde actúan como intermediarios los partidos políticos.

Frente a estas ideas, el expresidente Lleras Restrepo planteó un debate en la revista Nueva Frontera contra el clientelismo viéndolo como un sistema corrupto, como un renacer del caciquismo tradicional. Definió a los partidos políticos como una federación de gamonales que obtuvieron los votos de sus clientelas. Sin embargo, el clientelismo fue la respuesta a la realidad social de un sistema democrático donde no existen unas bases mínimas de igualdad social y económica. Por tanto, mediante el clientelismo los partidos políticos otorgaron bienes y servicios a cambio de apoyo político. Aunque esto sea cierto, los límites del clientelismo en el ámbito social y regional fueron evidentes con el cambio de conciencia que trajo la cobertura educativa y la difusión de los medios de comunicación. La consecuencia fue que los partidos perdieron su función de ser los canalizadores de las expresiones de la sociedad. (González, 1993).

Según Leal y Dávila, la persistencia del clientelismo en la sociedad colombiana fue por la débil presencia del Estado, su debilidad institucional y por el monopolio bipartidista en la administración pública y la disminución de su presencia en la sociedad (Leal y Dávila, 1990)

La imposibilidad de realizar referendos o iniciativas populares que disminuyen la posibilidad de acceso desde fuera del sistema es otra característica del sistema político colombiano. Además, las organizaciones sociales y sindicales habían sufrido una erosión profunda: la baja representatividad frente a la masa salarial redujo su capacidad de incidir en las decisiones estatales. Los dos periodos más agudos de la violencia, 1948-1953 y 1982-1990, tuvieron como efecto inmediato un profundo proceso de desorganización y fraccionamiento de estas organizaciones. En años posteriores tampoco se creó un clima favorable para el fortalecimiento de la sociedad civil, a pesar de que disminuyó el conflicto. Por otra parte, la desorganización de los movimientos sociales facilitó su dependencia con respecto de los movimientos políticos. De este modo, los movimientos sociales privilegiaron las demandas políticas en detrimento de las demandas sectoriales (Pizarro, 1992: 55).

El cierre institucional que se produjo durante el Frente Nacional provocó la imposibilidad de admisión en la arena política partidos diferentes a los tradicionales. En este sentido, durante la década de los cuarenta la izquierda entró en una fase de radicalización y exclusión bajo el contexto nacional de La Violencia y el Frente Nacional y de la Guerra Fría, en el ámbito internacional. Además la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional mediante los programas de seguridad nacional, provocaron el cierre electoral para la izquierda. Las consecuencias de este cierre institucional junto con la influencia de la revolución cubana estimularon la formación de agrupaciones radicales de izquierdas y el nacimiento de las guerrillas. En este contexto, el Partido Comunista adoptó la estrategia de “la combinación de todas las formas de lucha” y de su seno nació la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966. Otras organizaciones guerrilleras que se unieron a este contexto fueron el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Álvaro, 2009a).

En resumen, Colombia vivió épocas donde se recortaron los procedimientos democráticos directos se vieron afectadas las iniciativas populares de tal manera que se cerraron las posibilidades de acceso al sistema desde fuera y se buscaron otras vías de control del poder.

De las oportunidades señaladas por Kriesi para explicar el éxito de un grupo en función de los aspectos del sistema político destaca el *grado de centralización territorial y de la administración pública* pues se considera que es clave para explicar el proceso de consolidación de grupos paramilitares en el territorio colombiano durante este periodo.

A mediados de la década de los ochenta se inició el *proceso de descentralización* política y administrativa en Colombia, que provocó un cambio en el marco institucional del Estado al favorecer el fortalecimiento del ámbito municipal en materia política, administrativa y fiscal. Uno de los primeros objetivos fue profundizar la distribución de competencias entre los diversos niveles de la administración. Esta descentralización administrativa posibilitó a las autoridades locales ejecutar funciones como presupuestar, planear actividades, ordenar gastos y ejercer contratación. Respecto a la descentralización fiscal las reformas garantizaron el incremento de las transferencias automáticas y semiautomáticas del nivel central, reasignando recursos y creando nuevos sectores para el desarrollo local (Sánchez y Chacón, 2005).

Asimismo la descentralización política provocó el surgimiento de nuevas alternativas políticas, pues entre los objetivos de este proceso se encontraba el incremento de la legitimidad política del

régimen democrático colombiano, incrementando la participación política y la gobernabilidad democrática. Todo ello redundaría en la revitalización del sistema de partidos, debilitando el tradicional bipartidismo.

El gobierno de Barco (1986-1990) y su esquema gobierno-oposición pretendió repolitizar el país mediante la revitalización del sistema bipartidista que se lograba confrontando al partido del gobierno con el de la oposición, integrando todos los conflictos sociales y políticos analizados por una oposición institucionalizada. La elección popular de alcaldes y gobernadores fue un paso hacia la tan deseada repolitización a partir de 1988.

Con este ambiente, el gobierno de Barco impulsó la reforma de la Constitución de 1886. El objetivo era redactar una nueva Constitución Política que reemplazara a la promulgada en 1886 y formalizara los nuevos actores políticos anteriormente citados⁸¹. Esta apelación se presentó como un intento de repolitizar y relegitimar el régimen para solucionar el desfase entre la institucionalidad formal del Estado y los procesos de modernización social, cultural y económica que se estaban produciendo en la sociedad colombiana a través de mecanismos de democracia directa. El cuatro de julio de 1991 se firmó en el Capitolio General una nueva constitución. La participación fue baja, sólo el treinta por ciento del electorado acudió a las urnas. Este hecho desató la discusión acerca de la legitimidad del mandato recibido por los constituyentes elegidos. Además las fuerzas representadas no pudieron obtener una victoria clara tuvieron que negociar (Guzmán, 2004).

La Constitución de 1991 fue una respuesta a la situación política que progresivamente se deterioró desde la terminación del Frente Nacional y cuyo objetivo fue reforzar el proceso de modernización política y apertura democrática. La Constitución de 1991 llevó a cabo una reforma política con numerosos cambios en materia de principios, derechos y organización institucional para modernizar el sistema electoral, abrir el sistema de partidos a terceras fuerzas y promover la participación de los ciudadanos en política mediante mecanismos de democracia directa (Hernández, 2006). Entre las reformas políticas introducidas en la carta destacaron: elección popular de gobernadores, circunscripción nacional del Senado, financiación pública de campañas, partidos y movimientos y representación de las minorías. Se crearon nuevas instituciones de gran significado político como la Vicepresidencia. Se tomaron medidas que restaron protagonismo a

⁸¹ Los presidentes López Michelsen, Turbay y Betancur quisieron modificar la Constitución Política de 1886. Pero las reformas constitucionales fueron declaradas inexecutable por la Corte Suprema de Justicia quizás debido al excesivo legalismo que caracterizaba al alto tribunal o a la rigidez constitucional de los acuerdos del Frente Nacional.

las instituciones informales como la prohibición de la re-elección presidencial, así se disminuyó el liderazgo de los expresidentes sobre sus partidos (Posada, 2000).

La descentralización política llevada a cabo en Colombia para potenciar los gobiernos locales y regionales, complicó el sistema de partidos políticos en su dimensión regional y local desde el punto de vista de la distribución territorial del poder. Con la descentralización se produjo una mayor oferta de opciones político partidista y la Constitución de 1991 otorgó mayor libertad para organizar partidos políticos⁸². El resultado fue que a partir de 1988 se configuraron subsistemas regionales de partido que van desde el bipartidismo hasta el multipartidismo atenuado (Guzmán, 2004).

En este contexto, la Constitución de 1991 no requirió la organización de partidos políticos pues la ley prohibió que se estableciera exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos. Sólo en algunos estatutos se recogieron disposiciones relativas a la participación de afiliados en la selección de candidatos y en el nombramiento de autoridades internas mediante consultas internas o mediante convenciones y congresos. Pero en la práctica las decisiones fueron adoptadas por las propias directivas de los partidos. Es decir, los partidos contaron con sus estatutos tal y como marca la ley pero en realidad tan sólo constituye una mera formalidad

Estas medidas tomadas sobre la organización interna de los partidos y movimientos políticos permitieron la precipitación de los partidos tradicionales en un proceso de desintegración interna en grupos organizados alrededor de notables, grandes electores y caudillos regionales. Es decir, liberales y conservadores constituyeron partidos y movimientos políticos nuevos con personería

⁸² Entre las nuevas opciones políticas destaca las siguientes opciones: PDA, Partido Convergencia Ciudadana (PCC), Partido Cambio Radical (PCR), Partido de Unidad Nacional o Partido 'De la U' (PUN), Partido Colombia Democrática (PCD), Movimiento Colombia Viva (MCV), Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), Movimiento Apertura Liberal (MAL), Movimiento Alas Equipo Colombia (A-EC), Partido Opción Centro (OC), Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Movimiento Alianza Social Indígena (ASI), Movimiento Político "AFROUNINCCA", Movimiento Alianza Social Afrocolombiana, Movimiento Dejen Jugar al Moreno, Partido Comunista Colombiano (PCC), Unión Patriótica (UP), Partido Visionario con Antanas Mockus, Partido Nacional Cristiano, Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista (PC de C-ML), Presentes por el Socialismo (PPS), Polo Democrático Independiente (PDI), Alianza Democrática M-19 (AD M-19), Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP), Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido del Trabajo de Colombia (moirista) (PTC(M), Grupo Comunista Revolucionario (GCR), Partido Social Colombiano, Movimiento Revolucionario Liberal, Alianza Nacional Popular (ANAPO), Nueva Fuerza Democrática, Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad C-4 y El país que soñamos.

jurídica. Así, accedieron a la financiación directa del Estado, inscribieron a candidatos a las elecciones y usufructuaron espacios gratuitos en los medios de comunicación masiva del Estado. Siguiendo a Eduardo Pizarro (Pizarro, 2002), la consecuencia de este nuevo marco legal fue la atomización interna de los partidos en micro empresas electorales. Este proceso de atomización partidista tuvo su origen durante el Frente Nacional pero fue en los años noventa cuando se disparó llegando a alcanzar en 1998 un total de 316 listas para el Senado en representación de 80 partidos, movimientos o coaliciones (Álvaro, 2007). El desarrollo político posterior a la Constitución de 1991 dio como resultado la coexistencia de diferentes lógicas de acción política, entre ellas la modernización selectiva de las instituciones del Estado, la semiautonomía de poderes locales y regionales frente a ellas, la presencia de actores armados ilegales en vastas partes del territorio, la penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana, la crisis de representación política y los intentos de reformas, que corresponden a diferentes estilos de relación entre la ciudadanía, las instituciones estatales y los diferentes modalidades de violencia. Por tanto Colombia tiene diversidad de lógicas que se corresponden al grado de integración de cada región: orden institucionalizado en las regiones centralmente integradas, orden negociado con los poderes locales y regionales en regiones integradas a medias y violencia en las que están en proceso de integración. Buen gobierno en las primeras, negociación entre funcionarios estatales y poderes regionales en las segundas y lucha violenta por el control territorial en las terceras (Álvaro, 2009b).

En este contexto, y a pesar de que algunos grupos armados se han desmovilizados y apenas unos pocos se dedicaron a la política como medio de reivindicar sus ideales, el conflicto armado continuó así como los grupos armados más potentes. Esta medida otorgó un papel preponderante al municipio sin embargo en un contexto de conflicto armado, el proceso descentralizador intensificó y expansionó la violencia de los grupos armados. La transferencia de poder que significó *la descentralización* convirtió el conflicto armado interno en una *disputa por el poder local*.

Los recursos locales aumentaron de forma continua desde 1982. Las transferencias municipales ascendieron de un 0.5 % en 1982 a un 3.1 % en 2002, superando las transferencias departamentales que en el año 2002 se elevaron a un 2.7 %. Por tanto, los recursos en el ámbito local y regional se acrecentaron. Aumentó la autonomía política y financiera de los municipios convirtiéndose en fuente de financiamiento y apoyo político para los grupos armados. Esta descentralización política y de gasto posibilitó a los grupos armados acceder a nuevas formas de

dominio o influencia territorial a través de la intimidación o alianza con grupos políticos y de poderes locales como del control de los crecientes recursos municipales de transferencias y recursos propios. De esta manera afianzaron y fortalecieron sus estrategias económicas, políticas y militares.

De este modo, el proceso de descentralización fue utilizado por los grupos armados para acceder al sistema en el ámbito regional y local. De este modo, los grupos de paramilitares aprovecharon las facilidades de expansión del proceso descentralizador y accedieron al poder local. Las consecuencias del proceso descentralizador en un contexto de violencia fueron: *apropiación de los bienes y recursos públicos; aumento de la violencia hacia dirigentes políticos, influencia en los procesos electorales locales y creación de partidos políticos afines al paramilitarismo.*

A pesar que la Constitución de 1991 pretendía alcanzar un Estado de Derecho, un Estado que pudiera relegitimarse respecto a la época pasada, algunos actores desmovilizados si utilizaron los beneficios de esta Constitución para encauzarse por la vía legal y convertirse en opción política. Sin embargo estos ejemplos son muy pocos. Por tanto, muy pocos actores armados utilizaron estos beneficios para adentrarse en la arena política. Por otra parte, durante la vigencia de esta nueva carta constitucional, se acrecentaron las relaciones ilegales entre políticos y grupos armados como una manera para controlar el poder local, regional e incluso a nivel nacional, es decir se han asentado en los circuitos de poder de las sociedades locales, regionales y con cierta influencia en la sociedad nacional. Así, de manera ilegal fue como más inclusiones tuvieron los grupos armados en la arena política de tal manera que muchos funcionarios públicos están siendo investigados por sus nexos con estos grupos. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido mixto. Es decir, el Estado no tuvo la capacidad de controlar el territorio y la violencia. A pesar de que algunos desmovilizados si se incluyeron en la arena política, la mayoría de los grupos armados siguieron por la vía de la violencia y el entendimiento ilegal con ciertos políticos (Álvaro, 2009b)

A parte de estas oportunidades estructurales que señaló Kriesi es importante destacar que en la construcción y evolución de los grupos armados se encuentra otras oportunidades que explican el desarrollo de estos grupos. El monopolio de la violencia, las dificultades de la geografía colombiana y los procesos de colonización interna son factores que explican, junto con las oportunidades expuestas por Kriesi, la formación y movilización de los grupos armados en Colombia. En este sentido a continuación se profundiza en estas tres oportunidades estructurales.

Como ya señalara Max Weber en *Economía y Sociedad* (1987) el desarrollo del Estado moderno se inicia en el momento en que el príncipe o la autoridad central empieza a expropiar los medios políticos a sus contrincantes y termina cuando todos los medios de explotación política reposan en esa figura central. Respecto a Colombia, el Estado no tuvo la totalidad de los medios políticos de explotación. En algunos casos negoció su uso con algún actor político, en otras ocasiones delegó su explotación y en otros casos se enfrentó a sus propietarios por acceder a esos medios. Por tanto y siguiendo esta visión de Weber, el poder del Estado colombiano no terminó por afianzarse en todas las regiones de Colombia. Así no hubo una expansión homogénea del dominio estatal ni un dominio total del monopolio de la violencia. En este sentido, Fernán González, Teófilo Vázquez e Ingrid Bolívar se desmarcan y señalan que esta parcial dominación estatal no significa una esencia fallida del Estado, sino que las condiciones particulares de Colombia hacen más costosa en términos económicos y políticos la expansión del dominio estatal y la constitución del monopolio de la violencia (González, Vázquez, Bolívar, 2006).

En este sentido, es imprescindible anotar un breve comentario sobre la complicada geografía colombiana. Colombia es el segundo país más complejo geográficamente⁸³ del mundo. En un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados la cordillera de los Andes, se divide en tres, dejando una sucesión de valles, cuencas fluviales y llanuras. El 50% del país es selvático. El 80% de la frontera de Colombia es selvática, es una frontera muy porosa para el tráfico de armas, de drogas, etc. Por esta complejidad es muy difícil controlar completamente el territorio colombiano. Esta peculiar geografía influyó en el desarrollo urbanístico posterior. Así Colombia ha sido un país regionalizado por excelencia, con un sistema de doblamiento por regiones y de crecimiento del centro de esas regiones como Medellín, Bucaramanga, Cali etc. Es un país de ciudades. Es decir, las condiciones geográficas afianzaron una organización social centrada en las localidades y sin necesidad de relacionarse con el centro político⁸⁴.

Respecto al monopolio de la violencia, el propio Tilly (1992) señaló que fue el nacimiento del Estado moderno en Occidente fue el que suprimió la violencia privada y tomó el control de la violencia organizada. En Colombia, el monopolio de la violencia no fue ejercido totalmente por el Estado debido, en parte, a la presencia diferencial del Estado en el territorio nacional y la competencia por el poder de otros actores armados que comparten el monopolio de la violencia junto con el Estado. El Estado llevó a cabo diferentes políticas de seguridad para derrotar a los

⁸³ “Tras los pasos de Ingrid Betancourt” *El País*, 4 de abril de 2006.

⁸⁴ Entrevista a Eduardo Pizarro, Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 4 de julio de 2007.

grupos armados. Desde el Plan Lazo de 1965⁸⁵, el Estado no diseñó ninguna estrategia capaz de eliminar a estos grupos o a obligarles a negociar en serio con el gobierno un acuerdo de paz duradero. Lo más cercano a una política de seguridad fue la “Estrategia Nacional contra la Violencia del expresidente Cesar Gaviria (1990-1994) pero no pudo ser implementada en parte pues la prioridad en ese momento fue el cartel de Medellín y el narcotraficante Pablo Escobar. La administración del presidente Álvaro Uribe marcó un rompimiento claro con las fases anteriores pues por primera vez en veinte años identificó la seguridad como principal aspecto de la agenda pública y como principal fin de las políticas gubernamentales. El Plan de Desarrollo del presidente Uribe *Hacia un Estado Comunitario* incluyó como primera prioridad la Seguridad Democrática (Villamizar, 2003). La estrategia uribista se basó en la continuidad del aumento de los enfrentamientos de la Fuerza Pública contra los grupos armados y en especial contra los paramilitares y en el proceso de negociación con los grupos paramilitares.

Entre las dificultades para expandir el dominio estatal en las regiones de Colombia destaca la dinámica de la colonización campesina de territorios, es decir, la posibilidad de movilidad de la población a territorios donde la presencia de las instituciones civiles y eclesiásticas era muy débil. Fue una colonización que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII hasta la actualidad. La población que emigró fueron indígenas, mestizos, blancos pobres sin acceso a la tierra, mulatos, negros, liberto o cimarrones, que huyeron de los centros controlados por los hacendados locales, los curas y las autoridades coloniales hacia los valles interandinos, los flancos de las cordilleras y el oriente orinoquense-amazónico. Ya desde la época colonial los funcionarios españoles estaban preocupados por no dominar amplias áreas del país y de población que escapaban fuera del control de las autoridades estatales. La segunda migración se produjo en la segunda mitad del siglo XIX debido a las reformas económicas y sociales de la República liberal de 1850. Esta población se dirigió hacia tierra templada y caliente que estaban casi despobladas, es decir hacia zonas bajas del occidente y la costa Caribe. Los colonizadores eran pequeños agricultores que fueron presionados por la densidad demográfica en zona alta, la creciente concentración de la tierra y la conversión de zonas agrícolas en zonas ganaderas. Durante el siglo XIX se produjo la colonización antioqueña hacia el eje cafetero y la colonización boyacense, santandereana y cundimarqués hacia tierra caliente de las vertientes cordilleras y los valles interandinos. Las

⁸⁵ La Administración de Alberto Lleras (1958-1962) llevó a cabo un amplio programa de pacificación del país mediante el *Plan Lazo* (1960-1965), principal estrategia militar que otorgaba autonomía al poder militar frente al civil respecto del orden público. Desde el punto de vista militar logró objetivos parciales pues desplazó a la guerrilla en las zonas que controlaba pero éstas volvieron a regenerarse en otros territorios. Desde el punto de vista político su alcance fue limitado pues el propósito era quitarle los apoyos a las guerrillas mediante campañas cívico-militares de corte asistencialista, sin tocar de fondo las razones estructurales de la insurgencia.

regiones de colonización del siglo XX, sobre todo durante los años veinte por la crisis agraria y en los cincuenta por la Violencia fueron el piedemonte oriental de la cordillera oriental: desde el Sarare al Sibundoy y las regiones selváticas del Magdalena Medio, Urabá, el Darién y el Patía. Así hasta mediados del siglo XX algo más de la mitad del territorio estaba considerado zona de frontera. Estas zonas de movimiento poblacional mostraron cierta coincidencia entre las zonas donde surgieron los movimientos guerrilleros del siglo XIX, la violencia de los años cincuenta y la colonización aluvional y anárquica. Por tanto, fueron zonas conflictivas con precaria presencia de las instituciones estatales y abandonadas a sus propias fuerzas.

Muchas de estas regiones fueron integradas al conjunto del Estado mediante la difusión de las vías de comunicación y la integración económica. Sin embargo, estos diferentes procesos de colonización provocaron diferentes sociedades con formas diferentes de relacionarse con las instituciones estatales. En la zona andina, parte de la costa Caribe y regiones del occidente fueron regiones que se integraron en el orden institucional, el Estado detentaba el monopolio de la violencia, los niveles de violencia son bajos. Mientras que en la costa Caribe, la costa Pacífica, los Llanos orientales, regiones del suroccidente y la Amazonía fueron gobernadas bajo el clientelismo. El Estado compite con otros actores por el poder. Y tuvo presencia los grupos armados. Los niveles de violencia son altos y las instituciones estatales funcionaban mediante intermediarios. Las regiones de colonización campesina periférica estaban en proceso de integración al Estado. Sus regiones estaban tomadas por los grupos armados en disputa por el territorio.

4.2.2 Los paramilitares y las oportunidades coyunturales

Como señalamos con anterioridad, Tarrow señala una serie de oportunidades políticas menos estables que igualmente inciden en el surgimiento, desarrollo y consolidación de la acción de un grupo. A pesar de haberse señalado que la estructura organizacional paramilitar está compuesta de diferentes grupos paramilitares con dinámicas diferentes en las distintas regiones, encontramos que todos ellos coinciden en determinadas oportunidades coyunturales que ayudan a la movilización de sus grupos. Se considera que los factores que determinaron las oportunidades de acción de estos grupos se remontan a la década de los años ochenta en Colombia cuando las elites regionales rechazaron el reformismo de la Presidencia y desafiaron las políticas de paz del gobierno central, oponiéndose públicamente a las negociaciones con las FARC y callándose frente a la violencia hacia los comunistas, radicales, socialistas y reformistas en el ámbito local

(Romero, 2003:18) así como también la polarización entre estas elites y los grupos locales organizados que apoyaron las negociaciones de paz (Romero, 2003: 24) y la fragmentación de la elite regional y local (Romero, 2003; Palacios, 2002). Los paramilitares fueron apoyados por amplios sectores empresariales, hacendados, ganaderos, comerciantes, narcotraficantes, instituciones de seguridad del Estado- Fuerzas Armadas y Policía-, Fiscalía y gobiernos locales y regionales (Medina, 2005: 78). Respecto al Estado, se examina la evolución del tratamiento gubernamental a los grupos paramilitares basado principalmente en dos factores, la política de seguridad y la eficacia de la Fuerza Pública. Desde la década de los ochenta hasta el segundo gobierno de Álvaro Uribe se recorre los diferentes tratamientos que el gobierno estableció con estos grupos. La relevancia de este apartado se encuentra en observar el facilitamiento y tolerancia que tuvo determinadas administraciones fortaleciendo la independencia de acción y control de estos grupos en determinadas zonas. El Estado colombiano se acogió a la actuación de tolerancia y de prohibición, tal y como señaló Tilly (2003). Es decir, el Estado mantuvo un tratamiento cambiante y ambiguo respecto al paramilitarismo, pues si bien en un primer momento el Estado lo consideró legal pero con una reglamentación inadecuada; luego lo declaró ilegal pero ignorado por la política oficial o catalogado como anexo al narcotráfico y por último fue perseguido por las autoridades pero apoyado por círculos de poder local, regional y nacional. Para analizar las oportunidades señaladas se divide la estructura paramilitar en tres momentos que corresponden al origen, expansión y consolidación del fenómeno paramilitar.

4.2.2.1. Origen

Desde la aparición de la violencia política de las guerrillas en los años setenta las Fuerzas Militares adoptaron la ideología del anticomunismo. Los militares controlaron el orden público y permitieron que el concepto de seguridad nacional desplazara al de defensa nacional. La defensa nacional se convirtió en el medio para garantizar la seguridad, así la defensa nacional se involucró en la lucha anticomunista. Durante el Frente Nacional, no se llevaron a cabo políticas de Estado en materia de seguridad. Los militares estaban sujetos a la improvisación y a los cambios en las políticas oficiales (Leal, 2006). Un ejemplo de esta política fue la llevada a cabo por el presidente Julio Cesar Turbay (1978-1982) que continuó la política represiva del Frente Nacional a través del Estatuto de Seguridad⁸⁶ que veía en los comunista su principal enemigo. Así las instituciones militares ampliaron su autonomía en el manejo del orden público a niveles antes vistos. Fue el

⁸⁶ El Decreto legislativo 1923 de 1978, más conocido como Estatuto de Seguridad, consistía en una serie de normas de la justicia penal militar referidas a la población civil, dictadas bajo el estado de sitio.

decreto más parecido a la Doctrina de Seguridad Nacional suramericana. Es decir, hasta Turbay se practicó una política de represión militar contra los enemigos del Estado como los comunistas, bandoleros o guerrilleros.

Sin embargo, con el nuevo gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se inauguró la era de los procesos de paz. Durante su mandato Betancur acordó un diálogo nacional con las FARC, M-19, ADO, EPL y algunos sectores del ELN y la creación del Plan Nacional de Rehabilitación, PNR, que en sus inicios fue un programa de inversiones públicas en las zonas donde operaban los movimientos guerrilleros. El primer paso que dio fue el reconocimiento del carácter político de las guerrillas mediante un proyecto de ley gubernamental sobre amnistía y que fue aprobado por el Congreso. Pero la intención de las guerrillas fue doble, por una parte apostaban por la paz para salir del marginamiento político en el que estaba pero por otra parte apostaban por la guerra y aprovecharon estas condiciones para ampliar su número de miembros y estrategias. Las ambigüedades políticas y militares del M-19 llevaron a la ruptura de la tregua por este grupo a mediados de 1985. Por su parte, las FARC tenía como objetivo la creación de su brazo político en la Unión Patriótica (UP) pero no pudo desligarse de la tutela del grupo armado por tanto fracasó también la tregua con este grupo. De la misma manera con el EPL y ELN fracasó esta política de paz porque rechazaron cualquier proceso de paz (Leal, 1995).

Esta negociación provocó un distanciamiento entre las elites regionales y el gobierno central junto con la oposición de los altos mandos militares a este proceso. La autonomía militar llegó a su cota más alta en el gobierno anterior por lo que el proceso de paz limitaba su autonomía en el manejo del orden público. Además Betancur ignoró a la cúpula militar en la política de paz. A parte, el Presidente buscaba investigar las actividades ilegales del grupo paramilitar Muerte a secuestradores (MAS) el cual estaba relacionado con algunos militares. Esto puso en guardia a la cúpula militar. Sin embargo, el suceso de la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 en el cual murieron incinerados magistrados, guerrilleros y visitantes dio la oportunidad a los militares de hacer valer su autonomía política ante el presidente y el M-19. De esta manera los militares recuperaron la iniciativa plena en el manejo del orden público.

Este hecho estimuló la formación de grupos regionales asociados al narcotráfico. Estos grupos surgieron al confluir con sectores militares y elites regionales. Los opositores a las negociaciones con la guerrilla estimaban que éstas podrían cambiar la estructura de poder tanto local como institucional debido a que significaría la incorporación de las guerrillas a la vida civil. Por tanto,

los propietarios, ganaderos y empresarios rurales, los nuevos terratenientes y las fuerzas de seguridad reaccionaron contra la incapacidad del Estado central de ofrecer protección y para limitar los cambios de equilibrio de poder que trajeron las negociaciones, la apertura política y la movilización social. Así, la asociación de estos propietarios con las brigadas y los batallones del Ejército provocó la organización de grupos de autodefensa (Romero, 2003).

Así, por una parte esta negociación que acabó en fracaso amplió el número de guerrilleros y por otra parte indujo el surgimiento y consolidación de los grupos paramilitares y autodefensa. Los grupos paramilitares se relacionaron directa e indirectamente con el Estado y sus agentes locales y fueron tolerados por el Estado pero fuera de su estructura formal. Formados, en parte, por el Estado, contra un enemigo en común en el contexto de campañas contrainsurgentes. Las confesiones del teniente coronel Hernán Orozco comandante del Batallón del Ejército acantonado en San José del Guaviare resultan esclarecedoras de este punto:

“Los militares en el Ejército consideran el paramilitarismo como la Sexta División, nombre simbólico que se le ha dado a esa organización que los recibe y los termina de preparar para confrontar a la subversión... es absolutamente cierto que existe una cultura e ideología al interior del Ejército para facilitar el cumplimiento de los objetivos militares de las autodefensas” (Ramírez, 2005).

Además de la política de paz, pocos fueron los decretos sobre defensa y seguridad en este gobierno. El Decreto 2092 de 1985 destinado al planeamiento, conducción y preparación de las operaciones militares convirtió al país en un teatro de guerra bajo el mando del comandante general de las Fuerzas Militares: cinco teatro de operaciones terrestres, dos navales y uno aéreo. Esta situación provocó la reorganización del ejército desde el punto de vista operacional. De esta manera quedaron constituidas las “divisiones” como unidades mayores estratégicas. Se crearon cuatro divisiones (Santa Marta, Bucaramanga, Cali, Villavicencio). Sin embargo, estas divisiones estaban incompletas porque tan sólo cumplían un papel nominal y burocrático porque les faltaban las tropas divisionarias que las caracterizaban. Pero no tenían acción propia que las justificase operativamente. Estaban compuestas de un mayor general con un pequeño estado mayor y mandaba a unos brigadieres generales comandantes de brigada a una zona en un momento determinado. El Decreto 2157 de 1985 creó la Fuerza Elite Antigüerrillera compuesta de soldados profesionales. A este decreto se unió otro, la Ley 131 de 1985, sobre el servicio militar que permite el reclutamiento voluntario con el fin de organizar unidades contraguerrilleras estables pero tuvo mayor significado a partir de 1991 (Leal, 1995).

El primer experimento de creación de grupos de autodefensa fue en *Puerto Boyacá*, área de confluencia de la migración boyacense de la zona esmeraldífera y de la colonización antioqueña. La violencia de las FARC había provocado una mayor exigencia en el cobro de vacunas a propietarios grandes y medianos y un aumento de extorsiones y secuestros a ganaderos. Para defender a la población del hostigamiento económico provocado por la guerrilla y para mantener el equilibrio de poder anteriormente mencionado los terratenientes, políticos locales y ganaderos en alianza con el Batallón Bárbula comandado por el teniente coronel Jaime Sánchez Arteaga y la XIV Brigada del Ejército Nacional y el alcalde militar capitán Oscar Echandía Sánchez, fueron los artífices de la creación de estos grupos (Medina, 1994).

Los narcotraficantes se establecieron como las nuevas capas de hacendados en aquellas regiones donde los antiguos propietarios no resistieron el secuestro y extorsión de las guerrillas. La influencia del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, en el Magdalena Medio promovió el control de la estructura paramilitar de Puerto Boyacá y la entrada de narcotraficantes a esta región. Esto, unido a la alianza entre colonos agrícolas boyacense con grupos mafiosos de Boyacá, provocó la expansión geográfica del cartel de Medellín y la conformación de estructuras paramilitares que defendieran su negocio y organización.

La relación entre grupos paramilitares y narcotráfico se vio acentuada desde la creación del grupo Muerte a Secuestradores- MAS- en 1981 ante el secuestro de la hermana del narcotraficante Jorge Luis Ochoa. El MAS fue un intento de coordinar esfuerzos en gran escala de magnates de la droga contra la amenaza del secuestro guerrillero mediante grupos privados armados. El apoyo de grupos militares a estas organizaciones también fue patente en particular cuando fue denunciado por el procurador de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en 1983 que sostuvo que cincuenta y nueve militares formaban parte de estas estructuras. El MAS se extendió a varias regiones del país, y sobre todo a aquellas en las cuales los narcotraficantes estaban invirtiendo dinero en la compra de tierras. Se consolidó regionalmente desde 1981 a 1984. El Mexicano le imprimió una nueva dinámica llevándolo al Meta y Caquetá y estableciendo una alianza con un miembro del cartel de Medellín, Jairo Correa Alzate, alias El Arete. En este momento entraron a formar parte de esta estructura miembros del cartel con diferentes intereses y en diferentes regiones: los hermanos Castaño en el nordeste; los Mejía en Urabá; los Correa en el Magdalena Medio; Isaza en Puerto Triunfo; Oscar Restrepo en Puerto Berrio; Marcelino Panesso en La Dorada y Félix Gaitán en Santander, entre otros (Garzón, 2005).

Los grupos de Fidel Castaño, comenzaron a establecerse en algunos municipios del departamento de Antioquia con apoyo de algunos sectores de Medellín. Estableció alianzas con los militares de la Brigada XIV, capacitado en lucha contrainsurgente por el capitán Jorge Eligio Valbuena. Con el apoyo de esta brigada y con sus alianzas en el Magdalena Medio, estableció un corredor con destino al Bajo Cauca y de allí a Córdoba, Planeta Rica, Montería y Urabá, zona de expansión posterior de los hermanos Castaños.

Otro de los aliados que ayudaron a la consolidación de los grupos paramilitares fue la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio- ACDEGAM- creada el 24 de julio de 1984. Esta asociación combinaba diferentes funciones: realizaba actividades legítimas tendientes a obtener el apoyo campesino; apoyó políticamente a grupos del Partido Liberal en su acceso al poder local y, estableció escuelas de preparación militar con asesoría de instructores británicos e israelíes quienes preparaban a los grupos de paramilitares⁸⁷. Esta asociación recibió el respaldo de entidades oficiales como las Fuerzas Armadas y la alcaldía y de entidades privadas como las asociaciones gremiales de ganaderos.

Una de las limitaciones que pudieron haber frenado las ansias de expansión del fenómeno paramilitar así como su consolidación fue la creación de la Unión Patriótica- UP- a comienzos de 1985 como consecuencia de los acuerdos de La Uribe con las FARC. Este partido político representaba una amenaza para el mantenimiento del status quo y el equilibrio de poderes para los grupos de derecha y paramilitares. Los resultados de la UP en las elecciones de 1986 lograron un 5% de los votos. El analista Melo comenta que ante las elecciones a la alcaldía en 1988, muchos sectores del país vieron con preocupación la perspectiva de triunfo de la UP en varias regiones del país sobre todo en aquellas zonas donde la guerrilla había extorsionado a los propietarios. Por este desafío a la presencia de una nueva fuerza política, los paramilitares con el apoyo de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía concentraron su ofensiva hacia los candidatos más visibles de la UP desde 1986 y hasta las elecciones de 1988. Casi el 30% de los candidatos de este grupo fueron asesinados antes de las elecciones a la alcaldía (Melo, 1991).

⁸⁷ Destacó la colaboración del coronel israelí Yair Klein quien adiestró a los grupos paramilitares en Boyacá (Magdalena Medio) financiado por los narcotraficantes Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y el Mexicano y contratado por la policía, ejército, Ministerio de Agricultura, dueños de fincas, ganaderos y gerentes de entidades colombianas. Más información en Jairo Tarazona (2008): El profeta de la muerte. Secretos del mercenario Yair Klein, ed. Planeta, Bogotá.

En resumen, durante el gobierno de Betancur a pesar de los esfuerzo por acabar con la visión represiva del gobierno anterior, el intento de proceso de paz naufragó. Este nuevo punto de vista de entender el conflicto armado supuso la articulación de un nuevo grupo armado, los grupos paramilitares, asociados a narcotraficantes, élites locales y toleradas por el Estado y la Fuerza Pública como una fuerza contrainsurgente. Formados, en parte, por el Estado, contra un enemigo en común en el contexto de campañas contrainsurgentes. Ante este conflicto se reorganizó el Ejército desde el punto de vista operacional, se crearon nuevos cuerpos antiguerrilleros pero apenas pequeños cambios en seguridad que bien refleja la pasividad del gobierno ante la existencia de viejas organizaciones guerrilleras y nuevas organizaciones como los grupos paramilitares.

4.2.2.2 Expansión (1988-1997)

La experiencia lograda en Puerto Boyacá se expandió hacia otras regiones exportando el mismo modelo. Se difundió hacia regiones del sur de Córdoba, Sucre, Urabá y Bajo Cauca Antioqueño. Dentro de este fenómeno se comenzó a percibir la estructura preponderante de los hermanos Castaños llamado hasta entonces los tanguenios.⁸⁸ La implementación de este modelo en las nuevas regiones llevó a un aumento de las masacres en esas zonas desde 1988 hasta 1990.

En Córdoba la polarización política tanto en el campesinado como en la elite fue patente desde la década de los setenta. Para los campesinos el malestar provenía del fracaso de la reforma agraria, la ausencia de respaldo estatal para enfrentar los efectos empobrecedores de la comercialización de la agricultura y del mercado así como la represión estatal frente a sus reclamos. Estas circunstancias habían acrecentado un sentimiento de resistencia. Para las elites habían aumentado el sentimiento de amenaza e inseguridad. Ante la sensación de desprotección por parte del Estado central frente a los intentos de reforma agraria llerista, estos grupos habían buscado el apoyo en el candidato liberal Julio Cesar Turbay Ayala quien ejerció una política represiva frente a la movilización social y en la administración pública. Los antiguos inversionistas paisas que llegaron en los sesenta, ante la nueva situación de conflictividad en el campo vendieron sus tierras. En los años setenta nuevas redes políticas asociadas a familias de origen árabe consolidaron un gran poder económico e invirtieron fuertes sumas de dinero en la disputa electoral. A esta fragmentación de las elites regionales se sumó la ofensiva y extracción de recursos a los

⁸⁸ Este término deriva de una de las fincas de los hermanos Castaños en Tierralta, Córdoba llamada Las Tangas.

propietarios por parte del EPL. Este grupo armado acordó en la Conferencia Nacional de 1981 el crecimiento en el ámbito nacional y para ello necesitaban nuevos recursos (Romero, 2005)

Esta situación se vio agravada por el inicio de las negociaciones de Betancur y las guerrillas en 1982. Para la elite ganadera cordobesa estas negociaciones y la desprotección del Estado Central frente al acoso de los grupos guerrilleros y la movilización social los llevó a una frontal oposición hacia el gobierno central y las guerrillas. Sectores políticos, periódicos de Bogotá y ministros de gobierno del presidente Barco defendían el derecho a la defensa armada. Bajo esta situación Fidel Castaño, antiguo narcotraficante antioqueño con fuertes nexos con Pablo Escobar y el cartel de Medellín y uno de los nuevos inversionistas en ganadería de Córdoba, lideró el malestar de los propietarios y militares (Romero, 2000).

Los hermanos Castaños contaron con el apoyo de los terratenientes y la clase política tradicional cordobesa. Entre ellos se encontraba Salvatore Mancuso, José María López, Rodrigo García y Hernán Gómez. López los reunió en torno al proyecto paramilitar y posteriormente fue electo como alcalde de Montería para el periodo 1988-1990. Igualmente el proyecto paramilitar tuvo como aliados la Federación de Ganaderos de Córdoba, el Ejército y la Policía.

El incremento al acceso a la participación política en el ámbito local mediante las elecciones de alcalde provocó una nueva oportunidad de acceso de los grupos armados al poder local como consecuencia del proceso descentralizador. Como anteriormente se señaló el proceso descentralización que ahondaba en el incremento de las competencias y presupuestos del ámbito municipal estimuló el acceso de grupos armados sobre todo a partir de las primeras elecciones a la alcaldía en 1988. Desde ese momento se hizo sentir con más intensidad la presencia de grupos paramilitares en el ámbito municipal.

El debilitamiento del cartel de Medellín, la oposición de varios de los hombres del cartel a Pablo Escobar mediante la conformación de los Perseguidos por Pablo Escobar – PEPES- y la eliminación de El Mexicano y Pablo Escobar entre 1994 y 1995, redefinió la reorganización de los grupos paramilitares. Los sobrevivientes del cartel de Medellín se reorganizaron. Así Bernardo Murillo, alias Don Berna y Gustavo Upegui, sucesor de Pablo Escobar, emprendieron la avanzada paramilitar con el apoyo de otras bandas como La Terraza, La Cañada y los Chichis en la zona metropolitana de Medellín. Los grupos que se encontraban bajo la influencia de Víctor

Carranza comenzaron a ampliar su presencia en la zona oriente del país, en sur del Cesar, Santander, occidente de Boyacá, Cundinamarca y algunos territorios del Meta.

Esta coyuntura fue determinante para los grupos paramilitares de los hermanos Castaños que reactivan su experiencia paramilitar mediante la creación de las Autodefensas Colombianas de Córdoba y Urabá- ACCU-. Ampliaron sus dominios a territorios de Urabá, Sucre, Córdoba y Antioquia. Jorge Garzón (2005) comenta que “estos grupos comandados por Fidel Castaños y Carlos Castaños fueron solicitados sus servicios de seguridad por sectores tradicionales: hombres de negocios con enorme poder e influencia económica y política”. Podemos interpretar los factores anteriormente señalados, que dieron lugar a la reorganización paramilitar y la reactivación de los hermanos Castaños, como limitaciones que estaban deteniendo el desarrollo de los grupos paramilitares bajo los Castaños.

Durante el gobierno de Virgilio Barco las acciones de los grupos de autodefensa y paramilitares y narcotraficantes se recrudecieron. Aumentaron las acciones a través de masacres, asesinatos de jueces, periodistas, policías, sobre todo miembros de la Unión Patriótica. Fueron asesinados tres candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, el más firme candidato a la presidencia y dos candidatos de la izquierda, Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro, del M-19.

Esta ola de violencia puso en entredicho la ineficacia militar en el manejo del orden público. Esta circunstancia vino a fortalecer la capacidad política del Ejecutivo y otras ramas del poder público frente a los militares. Así algunas de las normas que respondieron a esta situación fue que la Corte Suprema de Justicia en 1987 puso fin el juzgamiento de civiles por parte de militares, el nombramiento de un abogado civil como procurador delegado para las Fuerzas Militares, el rechazo del Procurador General de la Nación en 1989 a los impedimentos para que el Ministerio Público investigara y sancionara a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y la sentencia de la Corte en 1987 que obligó a los militares que cometieran delitos fuera de servicio fuesen juzgados por civiles (Leal, 2006).

Por otra parte, esta situación violenta llevó a crear numerosos decretos en materia de orden público y actos terroristas contra objetivos oficiales debido al recrudecimiento de los conflictos sobre todo a partir de la masacre de jueces y funcionarios de la rama judicial que tuvo lugar en la Rochela y la falta de reacción de las unidades militares frente a los grupos paramilitares autores de los hechos. Los decretos sobre orden público que dictó Barco fueron el Decreto 1857 que

aumentó las penas por delitos políticos y se asignó competencia a la jurisdicción de orden público para conocer los delitos y el decreto 1858 de 1989 sobre delito de proselitismo armado con fines electorales. Se trataba de contrarrestar el Movimiento Renovación Nacional, Morena, impulsado por sector narcotraficantes y de paramilitares. Por el decreto 1859 se amplió la incomunicación por delitos de narcotráfico y conexo. El decreto 1860 autorizó la extradición de nacionales y extranjeros por delitos de narcotráfico y conexos mediante procedimiento administrativo. El Decreto 1895 erigió en delito el enriquecimiento ilícito y dio competencia para su tratamiento a la jurisdicción de orden público. El Decreto 1896 estableció nuevo sistema de control de pistas de aterrizaje y empresas de aviación. El Decreto 1965 creó la cuenta especial para el restablecimiento del orden público.

Este contexto le llevó al gobierno a lanzar el Plan de Paz o Iniciativa para la Paz en septiembre de 1988 que fue una propuesta concreta de negociación con los grupos en armas que exigía en primer término suspender las acciones armadas. Este gobierno se distanció de la política de paz de Betancur, pero no del diálogo como fórmula. Estaba a favor de establecer diálogos con los grupos armados pero con la idea de que fuera el Gobierno que abordara el tema de la paz sin utilizar ningún intermediario. El presidente Barco inició las conversaciones con el M-19 “que debía servir como instrumento para la reincorporación de los alzados en armas a la vida civil, con el establecimiento de las garantías de seguridad personal y de participación política con pleno ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos para quienes dejaran las armas” (Pardo, 2004). Llegaron a un acuerdo final con el M-19 en marzo de 1990 quedando incorporado a la sociedad civil.

Siendo Ministro de Defensa, Cesar Gaviria, fue denunciada la existencia de 163 paramilitares. Con la masacre de La Rochela en 1989 el gobierno, utilizando el estado de sitio, declaró ilegales a estos grupos, estableció la conformación de estos grupos como conducta punible y creó el Comité Anti-Sicarial para coordinar los esfuerzos institucionales en su contra. Los paramilitares no fueron definidos como perturbadores del orden público sino como una fuerza aliada al narcotráfico. No hubo una política de desmonte o desmantelamiento de estos grupos a pesar de haber sido declarados ilegales (Garzón, 2005).

En 1968 el presidente Lleras Restrepo convirtió en legislación permanente el decreto legislativo 3398 de 1965, ahora *Ley 48 de 1968 o Ley de Defensa Nacional*, por el cual establece el fundamento jurídico para la conformación de *grupos de autodefensas* bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas como respuesta al surgimientos de las guerrillas en un contexto de la Guerra Fría y

Doctrina de Seguridad Nacional. Estos nuevos grupos no se crearon de manera masiva hasta la década de los ochenta, donde fueron aprovechados para la creación de otros grupos a expensas del confuso marco jurídico de dicha ley. Por primera vez la Administración de Virgilio Barco mediante el Decreto n.º 813 del 19 de abril de 1989 declaró punible e ilegal las estructuras de paramilitares, anulando así la anterior Ley 48 de 1968. El Decreto 813 creó una Comisión Asesora y Coordinadora de planes para combatir a los escuadrones de la muerte, las bandas de sicarios y los grupos de autodefensa y justicia privada. El Decreto 1194 adicionó esa norma al Estatuto Antiterrorista y erigió en delito toda actividad relacionada con los grupos paramilitares. El Decreto 815 suspendió el artículo 33 del Estatuto Orgánico para la Defensa Nacional de 1965 que permitía obtener salvoconductos para portar armas y organizar grupos de autodefensa. La Corte Suprema de Justicia en mayo de 1989 declaró inexecutable la norma que permitía al Ministerio de Defensa armar a los civiles. Este decreto fue convertido en legislación permanente a través del Decreto 2269 de 1991. El último decreto en materia de defensa fue el 814 de 1989 que creó el Cuerpo Especial Armado de la Policía conocido como “Cuerpo Elite” destinado a combatir a los escuadrones de la muerte, los grupos paramilitares y las organizaciones del narcotráfico. Surgió por la inoperancia que llegó la policía en su lucha antinarcótica.

En estrategia militar Barco creó las brigadas móviles del Ejército para enfrentar a la subversión. Estaban compuestas por un brigadier general, soldados profesionales y tres batallones de contraguerrilla. Fueron utilizados para objetivos geográficos transitorios con misiones específicas.

Con respecto a la política de paz Barco estableció la Consejería Presidencial de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación ligada al Plan Nacional de Rehabilitación del gobierno anterior pero se extinguió en el gobierno de Ernesto Samper debido a la burocratización y clientelización.

Por tanto, el presidente Barco llevó a cabo el único modelo de negociación que logró unos acuerdos de paz. Fue un modelo de negociación parcial con agenda limitada en un contexto de superioridad militar y con una clara dirección del Estado, quedó claro el liderazgo y la dirección del Estado. Por otro lado, aplicó la primera medida contra los grupos de autodefensas y paramilitares al ilegalizar la ley que les daba piso jurídico y combatió a los sicarios, escuadrones de la muerte, autodefensas y grupos de justicia privado. Con Barco comienza el gobierno a ejercer una mayor capacidad política del Ejecutivo frente a la cúpula militar y estableció una profusión de decretos sobre seguridad como nunca antes ningún gobierno estipuló.

El gobierno presidido por Carlos Gaviria (1990-1994) continuó el modelo de negociación iniciado por Barco. Bajo este modelo se llevó a un acuerdo final de negociación y la desmovilización del EPL, MQL, Corriente de Renovación Socialista⁸⁹ (CRS) del ELN, Patria Libre, PRT perteneciente al EPL, Autodefensa Obrera (ADO), Comandos Ernesto Rojas, Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, Movimiento Independiente Revolucionario - Comandos Armados (MIR-COAR) y un acuerdo de coexistencia con las milicias de Medellín. Pero con las FARC las negociaciones estuvieron interrumpidas. Se reintegró a la vida política democrática a grupos armados que posteriormente se transformaron en organizaciones políticas. Entre ellas surgieron como organizaciones AD M-19⁹⁰ y Movimiento 19 de Abril, Frente Popular, Esperanza, Paz y Libertad, CRS (Pardo, 2004). La Alianza Democrática prosiguió en campaña por el nuevo pacto social, para reivindicar un futuro de paz y un proyecto democrático, participativo y pluralista inspirado en el socialismo de los años 80.

Dentro de la política de sometimiento a la justicia para dismantelar a los grupos armados y narcotraficantes se desmovilizaron tres grandes grupos de paramilitares. Un remanente del grupo de Rodríguez Gacha en Pacho, Cundinamarca, entregaron las armas 200 paramilitares. El grupo de Puerto Boyacá al mando de Ariel Otero, desmovilizaron a 400 paramilitares. El grupo de Fidel Castaño se desmovilizó en Urabá y Córdoba y entregaron 600 fusiles y varias haciendas. Pablo Escobar se sometió a esta política de sometimiento a la justicia a través de su negociación entre los abogados de Escobar y el Gobierno. Para ello acordó que se encarcelaría en La Catedral, en Envigado (Medellín) y que la Policía o las Fuerzas Militares no entraran en las dependencias del penal y que el personal de vigilancia y el Director de la cárcel fueran oriundos de Antioquia. El 19 de junio de 1991 se entregó Pablo Escobar. Se escapó en julio de 1992. Su fuga demostró la ineficacia del Ministerio de Justicia debido a la inseguridad de la cárcel, la libertad de los detenidos, la corrupción oficial y la alta capacidad de soborno del narcotráfico. A esto también se unió la ineficacia del operativo militar. Fruto de esta política fue la creación del Bloque de Búsqueda o el Comando Espacial Conjunto, grupo especial creado para dar muerte a Pablo Escobar, compuesto de 600 efectivos combinados de militares y policías. Fue muerto en diciembre de 1993 por un grupo de este bloque (Garzón, 2005).

⁸⁹ Este grupo surgió como una corriente de opinión al interior de la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional. Desde finales de 1989 este agrupamiento planteó un debate interno a favor de una rectificación estratégica en la lucha armada que incluyera una variable de negociación política, cuya consecuencia inmediata fue la constitución de la CRS como organización político-militar autónoma e independiente del ELN (Corporación Nuevo Arco Iris, 2005).

⁹⁰ Esta Alianza surgió de la simbiosis de varios grupos como M-19, EPL, PRT, Unión Patriótica y Colombia Unida.

Gaviria y Barco adelantaron esfuerzos para formular una nueva constitución que abrió los ojos en 1991. La Constitución de 1991 fue una respuesta a la situación política que progresivamente se deterioró desde la terminación del Frente Nacional y cuyo objetivo fue reforzar el proceso de modernización política y apertura democrática. La Constitución de 1991 llevó a cabo una reforma política con numerosos cambios en materia de principios, derechos y organización institucional para modernizar el sistema electoral, abrir el sistema de partidos a terceras fuerzas y promover la participación de los ciudadanos en política mediante mecanismos de democracia directa (Hernández, 2006). Sin embargo, en materia militar no hizo cambios básicos. Básicamente se mantuvo la conformación y las funciones de las instituciones del Ejecutivo que constituye la fuerza pública. Entre los factores que impidieron una reforma militar destacaron el desconocimiento que de este campo tiene la clase política, el temor del Gobierno y los constituyentes por despertar susceptibilidades entre los militares y la prevención de la gruesa representación del M-19 en la Asamblea Constituyente ante eventuales reacciones de los militares en su contra. Pero el gobierno adelantó reformas importantes en materia de seguridad. Modificó la relación de los militares con las instituciones civiles del Estado y desarrolló una nueva estrategia de seguridad. Creó la Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad a través del Decreto 1874 de 1990 con ella la Presidencia asumió el papel político que siempre había tenido el Ministerio. El nuevo Ministro de Defensa nombrado fue, por primera vez, un civil, Rafael Pardo. Esto supuso que los temas de defensa y seguridad son asuntos políticos, no militares, pero con el apoyo de las instituciones militares. Pardo rompió con las relaciones mediadas por la superioridad jerárquica tradicional. Reorganizó la administración institucional dando prioridad al abastecimiento del personal. Así les proporcionó un adecuado vestuario y alimentación para la tropa, equipo y mejores salario sobre todo para mandos intermedios y bajos. Reformó las operaciones militares al poner en el punto central los servicios de inteligencia para unificar las labores de información. Algunas de las reformas de Gaviria se dieron durante el gobierno de Barco. Gaviria definió varias medida como la lucha antisubversiva, el establecimiento de unidades especiales y contraguerrilleras, la incorporación de soldados profesionales y el apoyo logístico con tecnología actualizada. Para ello aumentó los presupuestos militares para aumentar cuantitativamente y cualitativamente el pie de guerra. También un civil desempeñó la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Anteriormente lo manejaron miembros del Ejército o la Policía (Leal, 1995).

Esta Consejería se orientó hacia el seguimiento de los factores de la violencia como las guerrillas el narcotráfico y los paramilitares. Elaboró la Estrategia Nacional contra la Violencia que

reconoció por primera vez las diferentes formas de violencia incluso la derivada del Estado⁹¹. Unificó criterios en materia de seguridad y formuló un tratamiento para cada una de las formas de violencia. Esta estrategia tuvo tres objetivos: garantizar el uso del monopolio estatal de la fuerza, recuperar la capacidad de la justicia para sancionar los delitos y ampliar el cubrimiento institucional del Estado en el territorio. Para desarrollar estos principios se desarrolló cinco políticas: fortalecer la iniciativa de las autoridades regionales y locales en materia de seguridad, robustecer y modernizar la justicia con la creación de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional⁹² y la aplicación del sometimiento a la justicia⁹³, fortalecer al Estado en contra de la violencia, formular las medidas precisas para la protección de los derechos humanos y exponer los principios y criterios para orientar la política de paz.

Sin embargo, a pesar de los profundos cambios operados durante este mandato en las decisiones gubernamentales se mantuvo la visión castrense sobre la seguridad nacional y la subordinación de este asunto al campo militar. Las autoridades civiles se limitaron a acatar por ignorancia, tradición y conveniencia electoral las decisiones militares. Esta estrategia de lucha contra la violencia varió poco el tratamiento de los conflictos armados. De esta manera, se desbarató la idea de poner en práctica una nueva visión de seguridad de Colombia y se declaró una guerra integral que significó la confrontación simultánea con el narcotráfico y los grupos guerrilleros. El Gobierno utilizó por varias ocasiones el estado de conmoción interior. Durante los periodos que duró este estado murieron centenares de guerrilleros, 1860 fueron capturados y se efectuaron 10.000 allanamientos al Cartel de Medellín. El Presidente quiso crear una ley de orden público que convirtiera en legislación permanente la mayor parte de las medidas adoptadas durante el estado de conmoción interior. Finalmente el Legislativo aprobó la Ley 104 del 30 de diciembre de 1993 que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia⁹⁴. Los resultados fueron

⁹¹ Según el documento las violencias que se identifica son las siguientes: violencia política, violencia social violencia de los grupos de justicia privada o paramilitares, la violencia sociocultural, la delincuencia común, la delincuencia organizada, la violencia por violación de los derechos humanos y el sicariato que cobija al narcoterrorismo y la violencia del narcotráfico.

⁹² Con la creación de la Fiscalía se buscaba perseguir de manera permanente a los actores que delinquen más que sus delitos. Por otro lado, la Corte Constitucional se erigió como el máximo organismo que decide la constitucionalidad de las normas de mayor jerarquía como leyes, reformas constitucionales, decretos leyes, decretos legislativos y proyectos de ley objetados por el Ejecutivo.

⁹³ Mediante el sometimiento a la justicia se pretende la posibilidad de entrega de delincuentes a través de incentivos. También incluye adaptar medidas para proteger a jueces y delincuentes y adaptar las normas de procedimiento penal a las peculiaridades de la investigación y juzgamiento de la delincuencia organizada.

⁹⁴ Entre las medidas: facilitan la reinserción de guerrilleros y milicias populares a la vida civil por medio de la entrega o indulto y la protección a testigos y autorizan al Presidente a crear curules por una sola vez para cada grupo guerrillero que se desmovilice. Posibilitan que las Fuerzas Militares bajo la conducción de la Fiscalía pueda apoyar la misión de los jueces. Prohíbe a los gobernadores y alcaldes adelantar gestiones en materia de orden público sin la

poco halagüeños porque la guerrilla se fortaleció en el periodo siguiente, 1994-1998. Una nueva redefinición de esta estrategia se llevó a cabo en 1993 a través de la estrategia “Seguridad para la gente” donde el gobierno descalificó el carácter político de la violencia guerrillera y unificó el tratamiento policivo-punitivo de todas las formas de violencia. Supone también que la vía represiva contra las violencias guerrillera, narcoterrorista y paramilitar es la adecuada. También señala que el único instrumento adicional a la vía armada es la política de sometimiento a la justicia en manos de la Fiscalía a través de la entrega, confesión de delitos, delación y negociación de penas. Esta estrategia se limita a reiterar los esfuerzos de robustecimiento de la justicia y la fuerza pública y hacer énfasis en el enfoque preventivo y de planeamiento de la seguridad. Pero esta estrategia no mostró una estrategia de seguridad nacional ni ciudadana sino que debilitó las iniciativas políticas del Ejecutivo frente al problema de la paz. La descripción de la reforma policial y la reiteración de la acción de la justicia no son una estrategia nueva para la seguridad ciudadana.

Gaviria siguió el mismo modelo de seguridad que su antecesor, aplicó el modelo de negociación de Barco a otros grupos armados. Continuó realizando medidas contra los grupos paramilitares y que también empezó Virgilio Barco pero esta vez desmovilizó a unos grupos armados paramilitares relacionados con narcotraficantes. De este modo, durante los gobierno de Barco y Gaviria se sintió la amenaza de estos grupos armados aunque no se acabó con este fenómeno pues, en los gobiernos siguientes, su número y extensión se engrandeció llegando a controlar regiones enteras.

La campaña presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) transcurrió por la injerencia del narcotráfico en la política nacional con ayuda del clientelismo y la corrupción. Más de cinco millones de dólares destinaron el cartel de Cali a la campaña de Samper para evitar la extradición y seguir con sus actividades ilícitas. A pesar de que Samper quiso adelantar un proceso de paz y una política social, fue interrumpido por el proceso contra políticos y por su relación con el narcotráfico denominado proceso 8000. Este proceso junto con la descertificación de Estados Unidos, llevó a que su gobierno convirtiera el narcotráfico como el factor central de la seguridad nacional. De esta manera logró la entrega de la cúpula del cartel de Cali.

autorización del presidente. Permiten el control de los medios de comunicación y por último se establece una contribución destinada a la seguridad ciudadana para quienes suscriban contratos con el Estado para construcción y mejoramiento de las vías.

Las Fuerzas Militares obtuvieron durante este mandato presidencial sucesivas derrotas contra las guerrillas como en Las Delicias, El Billar y Patascoy. Perdieron su autonomía ganada durante el gobierno de Gaviria a causa de sus derrotas durante el gobierno de Samper. Sin embargo, no se produjo ninguna revisión de su estructura, estrategia, táctica o ideología. Se dedicaron a lavar sus errores mediante el manejo mediático (Leal, 2006). Durante este gobierno se produjo crisis dentro del ejército a consecuencia de la respuesta del Estado colombiano a la insurgencia armada que duró de 1996 a 1998. Desde Betancur ha respondido de manera descalificada y ha subestimado a la insurgencia armada. El Estado no ha diseñado una estrategia para acabar con estos grupos. Lo más cercano a una política de seguridad fue la Estrategia Nacional contra la Violencia de Gaviria pero no pudo ser implementada por la importancia en ese momento de la amenaza del cartel de Medellín y Pablo Escobar. También otros de los factores que desencadenaron esta crisis fueron los fallos en la inteligencia táctica, en la capacidad de prevenir ataques, en la capacidad técnica y táctica, en la forma de operar, en la baja moral de las tropas y en la falta de confianza hacia sus comandantes. A esto se unió las consecuencias derivadas del proceso 8000 como fue la descertificación, la retirada de la visa americana al Presidente y el aislamiento internacional. Desde 1998 Pastrana comenzó los procesos de innovación militar que se refieren a la adaptación, modernización y transformación militar (Rangel, 2003).

Los cultivos ilícitos siguieron extendiéndose desde el gobierno de Gaviria. De tal manera que en 1990 había 40.100 hectáreas, en 1995 50.900, 79.500 en 1997 y cerca de 100.000 en 1998. No resultaron la fumigación ni los programas de desarrollo alternativos a pesar de que se fumigó entre 1990 y 1998 más de 120.000 hectáreas.

Un ejemplo del aumento de pie de guerra y extensión territorial de los grupos paramilitares y guerrilleros fue durante el gobierno de Samper. La atención en el narcotráfico provocó que ni las guerrillas ni los paramilitares recibieran la vigilancia debida. Por todo ello, los paramilitares avanzaron en su estrategia de control territorial y poblacional a través de dos cumbres paramilitares en 1994 cuando se crearon las ACCU y en 1997 con la creación de las AUC. Por su parte, las FARC consolidaron su autonomía financiera y se expandieron. A su táctica de utilizar el narcotráfico como actividad para conseguir recursos se unió la extorsión y el secuestro.

Estos grupos paramilitares se vieron fortalecidos y legitimados por la decisión del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) de establecer Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, denominados Convivir, propuesta por el Ministro de Defensa, Fernando Botero y el apoyo del

Ejército. Estos grupos estaban destinados a aquellas zonas donde el Estado no pudiera proporcionar seguridad. Las Convivir se fueron creando de una manera masiva pero sin una clara orientación nacional y sin una supervisión institucional. Sus acciones se entremezclaban con la de los otros grupos armados. Así se fueron extendiendo sobre todo por la zona del conflicto. La formación de estos grupos aumentó el número de integrantes al paramilitarismo tal y como lo demuestra la oficina del Alto Comisionado para la Paz que señala que en los once departamentos más afectados por el conflicto, se registraron actividades paramilitares en el 70% de los municipios en los que fueron creados las Convivir (García-Peña, 2005).

Aunque con la administración de Virgilio Barco y Cesar Gaviria se empezaron a dar pasos hacia un tratamiento diferente con estos grupos paramilitares, el gobierno de Samper recrudeció la situación favoreciendo el aumento de grupos paramilitares. El gobierno central carecía de una estrategia de seguridad nacional para frenar la violencia y consolidación de grupos armados. A pesar de las medidas del presidente Barco y Gaviria, el presidente Samper facilitó la acción de grupos paramilitares. Asimismo, otro grupo de oportunidades favoreció esta coyuntura de expansión paramilitar: la polarización de la elite y el campesinado; el malestar del Ejército y propietarios rurales y el apoyo de la clase política cordobesa y terratenientes propiciaron la expansión del fenómeno paramilitar al mando de los hermanos Castaños mediante la conformación de las ACCU. Igualmente el debilitamiento del cartel de Medellín y el incremento del acceso al poder local mediante el proceso descentralizador permitieron y ahondaron la difusión de este fenómeno en el territorio colombiano.

4.2.2.3 Consolidación desde 1997

Las circunstancias anteriormente expuestas permitieron que los paramilitares crecieran en tamaño, expansión, capacidad militar e interés político. En esta intensificación de los grupos paramilitares tuvo lugar la primera conferencia nacional de dirigentes y comandantes de las autodefensas campesinas y se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC- bajo la comandancia de Carlos Castaño. Bajo él se empezó a conformar un movimiento nacional unificado aunque con un nivel de autonomía local y regional de los diferentes bloques y frentes que lo componían. En esta etapa las AUC se definieron como *organización político-militar en búsqueda del reconocimiento político*. Según el analista Mauricio Romero (2000) su objetivo no era enfrentarse al Estado, sino suplir sus debilidades, en parte por el cambio de composición que se dio en sus filas. Romero señala que las AUC absorbieron parte de los cuadros del EPL y de otras organizaciones

de izquierdas los cuales mantenían una lucha continua con las FARC en la región e incluso habían iniciado una crítica en contra de los métodos de la guerrilla en sus relaciones con los campesinos. Sus aliados seguían siendo las elites regionales y nacionales- ganaderos y terratenientes, negociantes y empresarios vinculados con el narcotráfico⁹⁵. Igualmente había un sentimiento de simpatía hacia esta organización de la mano de ciertos sectores de las elites políticas y económicas en el ámbito nacional.

Las AUC buscaban presentarse bajo un mando único con un estatuto de constitución, un régimen disciplinario común, conservando la autonomía regional respecto a las finanzas, operaciones y comandancias. Lo que se dio fue la extensión del modelo de las ACCU en el ámbito nacional mediante la denominación AUC como bien quedó reflejado en la Segunda Conferencia Nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia en mayo de 1998. Asimismo las AUC significaron que cada grupo preservaba el mando y control sobre el grupo. Así Ramón Isaza continuaba al mando del grupo antioqueño del Magdalena Medio, Luis Eduardo Cifuentes con el grupo en el noroeste cundimarqués, Víctor Triana alias Botalón en Puerto Boyacá, Clodomiro Agámez en el Meta, Aurelio Morantes y Francisco Tabares en el Santander y sur del Cesar y, Daniel Santos y Carlos Castro en el Casanare (Garzón, 2005).

Sin embargo en el marco de las AUC no cesaron las fricciones entre Carlos Castaño y el resto de los grupos paramilitares. Carlos Castaño expulsó y mandó matar a mucho dirigentes de diferentes grupos paramilitares por no acogerse a la filosofía de las autodefensas⁹⁶. Sin embargo el suceso más grave fue la reorganización de las estructuras que operaban en el Magdalena Medio y que se separaron de las Autodefensas del Magdalena Medio y se concentraron su operativo en el sur del Bolívar y en Santander. Esta nueva organización es lo que hoy se denomina Bloque Central

⁹⁵ El sólido respaldo de los propietarios ganaderos en Córdoba lo atestigua una carta que 75 ganaderos enviaron al ministro de Defensa en enero de 1997 por la persecución contra Carlos Castaño y los anuncios públicos ofreciendo 500 millones de pesos de recompensa por informaciones sobre su paradero. La carta señala que “Castaño nos quitó el miedo y nos enseñó a pelear contra nuestro enemigo”. Citado en Romero, Mauricio (2000): “Autonomía Militar, Paramilitares y Autodefensas en Colombia: Es posible una salida democrática al conflicto armado?”. *El proceso de paz en Colombia y la política exterior de los Estados Unidos*. Documento de trabajo n° 247, The Latin American Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington.

⁹⁶ Así fue como Carlos mando detener al jefe de las autodefensas del Meta, Luciano Ariza tras haber masacrado una comisión judicial en San Carlos de Guaroa (Meta) en 1997. El grupo asentado en la Sierra Nevada de Santa Marta dirigido por Hernán Giraldo fue objeto de fricción con el grupo de Carlos Castaño al asesinar Giraldo a varios agentes del DEA en noviembre del 2001. El grupo de Ramón Isaza fue igualmente sancionado por Carlos Castaño al realizar varias extorsiones en Antioquia en manos de Luis Eduardo Cifuentes, Botalón, comandante del grupo en Puerto Boyacá y Palizada, comandante del grupo de Puerto Parra. Estos tres integrantes fueron expulsados.

Bolívar. La mayor parte de las fricciones tuvieron como tema crucial el narcotráfico, además de las actuaciones de asesinato o secuestro de estos grupos.

El tema del narcotráfico fue el punto crucial de las fricciones entre Carlos Castaño y parte de su comandancia. En esta coyuntura Carlos Castaño condenó el narcotráfico en varias campañas publicitarias. El objetivo era desligarse de su pasado narcotraficante para presentarse como una verdadera motivación política pero las estrechas relaciones de algunos sectores de las AUC con el narcotráfico eran muy evidentes. En la *Declaración por la Paz de Colombia* en noviembre del año 2002, Carlos Castaño retomó el tema de la influencia del narcotráfico y su problemática además de reorganizar la organización bajo un proyecto en común que permitiera la integración de varias facciones y reforzar esa unión ante las fricciones acontecidas. Pero en esta declaración no aparecieron el Bloque Central Bolívar, las Autodefensas del Casanare y el Bloque Metro, haciendo evidente el malestar interno y la autonomía de cada grupo armado.

A partir de 1997 la capacidad de reacción del Estado y la Fuerza Pública cambió respecto a las administraciones anteriores en su tratamiento con el paramilitarismo. El Estado empezó a tomar medidas contra el paramilitarismo, se avanzó en su tratamiento jurídico y se empezó a entender que era necesario analizar su relación desde la política de paz. De la misma manera la Fuerza Pública comenzó a experimentar una mayor determinación por romper los lazos con el paramilitarismo.

En 1997 el gobierno del presidente Ernesto Samper puso en marcha el Bloque de Búsqueda, para perseguir a los líderes paramilitares. En este mismo año la Comisión Exploradora compuesta por el doctor José Noé Río y Daniel García-Peña establecieron las recomendaciones sobre el tratamiento que para conseguir el diálogo con las guerrillas, plateando que debía darse el mismo objetivo a los grupos de autodefensas como parte del conflicto armado. Fue la primera vez que se incluyó el tema del paramilitarismo como temática articulada a la política de paz. Mediante esta medida se les reconoció como actores del conflicto armado pero no se les otorgó el reconocimiento de estatus político, tal y como reconoce el artículo tercero del Convenio de Ginebra. Finalizando el mandato del presidente Samper, en noviembre de 1997: La Corte Constitucional respaldó las llamadas Convivir, pero las conminó a entregarle al Defensor del Pueblo las armas de uso restringido de la Fuerza Pública y a tramitar salvoconductos para el porte de armas. Esta medida supuso el cese de la tercera parte de estas agrupaciones por no cumplir con las exigencias impuestas. Tan sólo al final de su mandato comenzó a tomar medidas frente al

paramilitarismo como fue el Bloque de Búsqueda e intentar analizar este grupo armado desde una política de paz. Al final de su mandato hubo una creciente movilización social a favor de la solución negociada que alcanzó su máximo con el Mandato Ciudadano por la paz en 1997. Esta dinámica asentó las bases para un proceso de paz durante el gobierno del próximo presidente, Andrés Pastrana.

El mandato del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) asumió la lucha contra los paramilitares como parte integral de su política de paz. Pastrana siguió con la medida de su antecesor de no reconocer como actor político a los paramilitares. Desmontó completamente las Convivir y otorgó prioridad a la lucha contra estos grupos en los planes estratégicos de las Fuerzas Armadas. En este cuatrienio no se estableció ninguna conversación formal entre representantes del Gobierno y los paramilitares para llevar a cabo conversaciones de paz. El gobierno no formuló ninguna estrategia política para enfrentar a las guerrillas y a los paramilitares, el crecimiento de estos grupos fue la prueba de la ausencia de una política para doblegar a estos grupos armados.

Las acciones de la Fuerza Pública aumentaron durante la administración Pastrana pero lejos de lograr una ofensiva efectiva completa. En la relación del Ejército con el paramilitarismo, Pastrana destituyó a dos generales, Rito Alejo del Río y Fernando Millán, por sus nexos con paramilitares. La relación de esta institución con este grupo armado proporcionó que los militares reconocieran a este fenómeno como la principal amenaza a su legitimidad y al orden institucional (García-Peña, 2005). En esta coyuntura política estaban muy recientes la colaboración del Ejército en las ejecuciones de Manuel Cepeda en agosto de 1994, Álvaro Gómez en noviembre de 1995 y en las masacres de Mapiripán en julio de 1997 y la de Barrancabermeja en mayo de 1998 que evidenciaban la colaboración de esta Institución con grupos de paramilitares.

Desde 1999 a 2002, siendo Ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez, se avanzó en el campo de la tecnología aplicada a la planeación y conducción de las operaciones militares. Los incrementos más notables fueron la movilidad aérea y el apoyo de fuego desde el aire, la capacidad de operar en ambiente nocturno, las mejoras en inteligencia técnica y las estructuras de comando, control y comunicaciones. Se reformaron los estatutos de carrera, evaluación y de ascenso militar. Uno de los cambios institucionales más importantes fue la paulatina profesionalización de las tropas mediante el aumento de su pie y la creación de la Escuela de Soldados Profesionales, pero el principal problema fue que no tenían una perspectiva real de carrera profesional debido a la imposibilidad de ascenso. Sin embargo, el cambio en la

organización castrense para la guerra irregular no fue suficiente. Había una resistencia al cambio en las estructuras institucionales. Por otra parte, no se realizaron con continuidad las operaciones conjuntas para garantizar que todas las capacidades de las diferentes fuerzas sean empleadas de manera coordinada y maximizar la efectividad en las operaciones militares pero más bien desarrollaron operaciones de manera individual. Respecto a la profesionalización hubo deficiencias en la educación y capacitación de los soldados, por ello tendrían que haberse enfocado en estos puntos para evitar que engrosaran en las filas de los grupos armados. Aún persisten condiciones que limitan las operaciones militares como son la insuficiencia de reformas tecnológicas. En este campo es necesario incrementar la capacidad aérea. Con Pastrana se comenzó a profundizar en el proceso de transformación militar colombiana, para ello los procesos de innovación y reestructuración debieron ser continuado por otros gobiernos (Rangel, 2003).

A partir de 1998 y hasta 2002 se registraron un aumento de los enfrentamientos entre los grupos de paramilitares y la guerrilla que pasaron de 18 en 1998 a 185 en 2002. La mayor parte de estas incursiones estuvieron dirigidas hacia el apoyo social de las guerrillas en sus territorios. El objetivo de los grupos paramilitares era extender su dominio y el control sobre las poblaciones donde operaban las guerrillas y establecerse como actor armado hegemónico. La violencia indiscriminada de los paramilitares se extendió a los departamentos de Cundinamarca, Putumayo, Arauca, Santander, Bolívar, Valle, Cauca, Magdalena, La Guajira y Cesar. Sin embargo, en 2002 se produjo un descenso en los enfrentamientos con la guerrilla que coincidió con la declaratoria de tregua de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe y el declive de la tasa de homicidios perpetrados por los paramilitares.

Durante su mandato se llevó a cabo un proceso de paz con las FARC y secundariamente con el ELN. Se desmilitarizó cinco municipios en un área de 42.000 kilómetros cuadrados conocida como el Caguan. En esta negociación se observó por una parte la intransigencia de las FARC y la escasa capacidad del gobierno que no tuvo un plan claro sino que se adecuó a las circunstancias del momento. La continuidad de problemas⁹⁷ desde el inicio de la negociación desde noviembre de 1998 concluyó en febrero de 2002. Comenzó después una ofensiva contra las FARC. Las declararon grupo terrorista. Durante esta negociación las FARC crecieron militarmente, creyeron

⁹⁷ Los principales problemas de esta negociación fueron causados por la zona de distensión y los grupos paramilitares, una agenda de negociación excesivamente amplia, una zona desmilitarizada sin ningún tipo de veeduría adecuada, fallos en el manejo de las relaciones con los militares y la resistencia del gobierno a convocar un mayor respaldo social y político al proceso de paz. Sólo se logró un acuerdo humanitario para el intercambio de soldados y policías retenidos por las FARC por guerrilleros presos y que estuvieran enfermos.

que el proceso de paz era un buen complemento político para continuar su crecimiento (Leal, 2006).

Respecto a los paramilitares, aprovecharon también este momento para crecer militarmente. Fueron también incorporados a las listas de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos junto con las FARC y el ELN en 2001 y fueron también incluidos en las listas de la Unión Europea en 2002.

Durante este gobierno se puso en marcha un plan de desarrollo e inversiones propuesto por el gobierno conocido como Plan Colombia cuya principal aportación proviene de Estados Unidos para luchar contra las drogas en Colombia pero después se transformó en la lucha antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York⁹⁸. La primera mención oficial a este plan se dio en el Plan Nacional de Desarrollo o Ley 508 de 1998. El “Plan para la paz, prosperidad y fortalecimiento del Estado” se dio a conocer en septiembre de 1999. Fue la ayuda de las agencias estatales norteamericanas preocupadas por la situación colombiana y que sustituyó a la antigua cooperación militar entre los dos países. Este plan buscó fortalecer la capacidad militar colombiana ampliando su pie de guerra, redefiniendo su administración y revisando los procedimientos tácticos. Sin embargo, no fue suficiente estos intentos porque las FARC duplicaron su pie de guerra, entrenaron a sus cuadros en la zona del despeje, compraron armamento y fortalecieron su retaguardia con el lanzamiento del Movimiento Bolivariano.

⁹⁸ En la administración Clinton, se llevó a cabo una multimillonaria asistencia de seguridad de Estados Unidos a Colombia aprobada en el año 2000 por el Congreso el cual autorizó 1.319,1 millones para responder a la guerra interna colombiana. Dentro del denominado Plan Colombia, se encuentra el Plan A que corresponde a la ayuda del gobierno del presidente Pastrana que ronda los 7.500 millones de dólares y tiene por objeto reducir los efectos negativos de la crisis mediante medidas de acercamiento del Estado hacia las áreas más afectadas por la violencia, es decir, fortalecer la presencia institucional. El Plan B es la ayuda de Estados Unidos al ejército para fortalecerle. Entre 1989 y 1999 Colombia recibió de Estados Unidos 1.100 millones de dólares en asistencias de drogas y seguridad policial, pero la mayor parte fue para asistencia militar y para la Policía Nacional. La lógica que subyace es que al aumentar el despliegue militar, puede equilibrar el creciente poderío territorial de la guerrilla y la enorme influencia regional del narcotráfico. De los 1.319,1 millones en torno a 519.2 millones de dólares se destina para las fuerzas militares; 123.1 para la ayuda policial; 180 millones para ayudar a otros países vecinos de Colombia y 278.8 como recursos a ser usados directamente por autoridades estadounidenses. Por lo tanto un 75% se destina al fortalecimiento bélico de la guerra contra las drogas. El Plan C corresponde a la ayuda destinada por la Unión Europea para el mejoramiento de las condiciones sociales, no obstante la contribución europea ha sido más simbólica que práctica pues tan solo España y Noruega donaron en conjunto 120 millones de dólares aunque meses más tarde la Unión Europea decidió donar 105 millones de euros⁹⁸. Claramente el Plan Colombia corresponde a un programa de intervención indirecta estadounidense de gran alcance con relación a dos temas tradicionales y entrelazados como son la guerrilla o terrorismo y el narcotráfico y cuyo origen se desata en los años ochenta. Tokatlian, J. G. (2001): El Plan Colombia ¿Un modelo de intervención?. Revista CIDOB D'Afers Internacionals, nº 54-55, Fundación CIDOB, Barcelona.

En resumen, Pastrana comenzó a aumentar los enfrentamientos de la Fuerza Pública con los grupos armados. Ante la influencia de las Fuerzas Militares en los grupos paramilitares se tomaron las primeras medidas contra los militares y se comenzó con una reorganización interna para adaptar la cúpula castrense a la guerra irregular pero la resistencia al cambio se hizo notar. A pesar que en primera instancia el gobierno de Pastrana optó por una salida negociada con las guerrillas éstas se prepararon para fortalecer y extender su control a otras áreas de la misma manera que fue aprovechado por los grupos paramilitares. En este mismo contexto, Pastrana con la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea también empleó la fuerza para aumentar la capacidad militar y derrotar a los insurgentes mediante el Plan Colombia. Ante esta situación y con el creciente aumento de las FARC y los grupos paramilitares, la candidatura a la presidencia de Álvaro Uribe se centró en la seguridad como tema central de su gobierno, convirtiéndose en el problema más importante de la opinión pública durante el último año del gobierno de Pastrana.

Durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2006) marcó un claro rompimiento con los gobiernos anteriores pues por primera vez en veinte años identificó la seguridad como principal aspecto de la agenda pública y como principal fin de las políticas gubernamentales. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Uribe *Hacia un Estado Comunitario* incluyó como primera prioridad la Política de Defensa y Seguridad Democrática (Villamizar, 2003). El principal objetivo era brindar seguridad democrática que se desglosa en el título inicial del plan. Seguridad democrática significaba brindar control territorial, defensa de la soberanía nacional, combate al narcotráfico y al crimen organizado, fortalecimiento del servicio de justicia, desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto, protección y promoción de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, fortalecimiento de la convivencia y los valores y política de relaciones exteriores y cooperación internacional. Otros objetivos de este plan fueron impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, construir equidad social e incrementar la transparencia y eficiencia del Estado. Sin embargo, estos puntos centrales del plan no tenían propuestas específicas ni presupuesto asignado, más bien se encontraba dentro del discurso presidencial de Uribe (Plan Nacional de Desarrollo, 2003).

Las primeras medidas que tomó dentro del esquema inicial de la seguridad democrática fueron el reclutamiento de soldados campesinos para formación de redes de informantes para alimentar los servicios de inteligencia, las recompensas por información, el estímulo a la desertión de combatientes ilegales y la creación de zonas de rehabilitación en áreas de influencia guerrillera. A

estas medidas se sumó la Ley 782 de diciembre de 2002 que abolió el requisito de conceder el status político a los grupos armados para iniciar negociaciones destinadas a su desmovilización. A mediados de 2003 se conoció la versión final de la seguridad democrática. Se intentaba asumir la responsabilidad civil en la dirección de la seguridad. Pero las medidas que anteriormente se citaron, eran políticas para enfrentar la guerra, por lo tanto se apostó por una salida militar en un contexto donde no existe conflicto armado interno sino una amenaza terrorista.

El objetivo principal de la política de seguridad democrática era el plan de guerra contra las FARC concretado en el Plan Patriota. Este plan reactivó unidades como la Brigada X destinada en la frontera con Venezuela, y creó otras brigadas como la Brigada XXVIII que sustituyó al Comando Específico de Oriente en la frontera sur con Venezuela y Brasil. Se crearon también dos comandos conjuntos Sur y Caribe y se articularon territorialmente unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. A finales del 2005 el crecimiento de unidades dentro del Ejército fue importante: 7 divisiones, 20 brigadas convencionales, 15 brigadas móviles, 7 batallones de alta montaña, una brigada de selva, una brigada blindada, una contra el narcotráfico, una de aviación, una brigada de Fuerzas Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido, entre otras (Leal, 2006). Con algunos éxitos en el noroccidente de Cundinamarca, de ahí en adelante los resultados han sido inciertos al sur del país. Han logrado debilitar y reducir la capacidad ofensiva de las FARC pero no doblegarlas. A través del Plan Patriota, golpearon a las FARC en el Meta, Caquetá y Guaviare sustancialmente, pero no demolieron su capacidad de combate pues esta guerrilla diseñó unas medidas destinadas a incrementar el desgaste de la fuerza pública mientras preservaban sus fuerzas al máximo. Las FARC dejaron de realizar operaciones de gran envergadura y ordenó a sus unidades seguir una guerra de guerrillas. Desplazó su presencia del Caquetá hacia zonas del Pacífico y zonas fronterizas como el Putumayo y Arauca. Por otra parte, las FARC han aumentado su despliegue en otras zonas y aumentaron las acciones durante los tres primeros años de Uribe: de 536 acciones durante los tres primeros años de Pastrana a 1.190 acciones durante el primer gobierno de Uribe. De igual manera se hicieron esfuerzos de actores nacionales e internacionales para alcanzar un acuerdo humanitario entre las partes, pero en el primer gobierno de Uribe no se consiguió nada. A finales del primer mandato uribista las FARC se mostraron más ofensivas. El Ejército reprendió capturando en el 2004 a Simón Trinidad, de la cúpula de las FARC y a Sonia, jefa de finanzas del Bloque Sur de las FARC, ambos hechos mostraron avances en la inteligencia militar. (Ortiz, 2006). Sin embargo, las limitaciones en la financiación y la insuficiente capacidad logística para doblegar a las FARC hacen que sea difícil

sostener esta ofensiva. Además, sería conveniente fortalecer y desideologizar la inteligencia militar para prevenir el avance político de los grupos armados.

Otra medida de este gobierno fue la aprobación por parte del Congreso del Estatuto Antiterrorista que consistió en ceder las facultades de la policía judicial a los militares como allanamientos, interceptaciones telefónicas y detenciones sin orden judicial. Pero por vicios de forma en el trámite del proyecto la Corte Constitucional declaró inexecutable este estatuto.

La estrategia uribista se basó en la continuidad del aumento de los enfrentamientos de la Fuerza Pública contra los grupos armados y, en especial, contra los paramilitares y, en el proceso de negociación con los grupos paramilitares. En el primer cuatrienio de mandato del Presidente Álvaro Uribe, los combates de la Fuerza Pública con los diferentes grupos armados aumentaron respecto a la administración anterior según datos proporcionados por la Fundación Seguridad y Democracia. En el 2002 ascendió a 2050 combates; 2248 en 2003 y en 2004 descendió a 1782, pero siempre superando los niveles de la administración de Andrés Pastrana. Respecto a los combates contra los grupos paramilitares alcanzaron un número superior a aquellos realizados en otras administraciones. De esta manera, en el 2002 ascendieron a 238 combates; en 2003 a 356 combates y para 2004 descendieron a 300. La evidencia demuestra que la estrategia utilizada por esta administración se centró en el acrecentamiento de la confrontación armada de la Fuerza Pública con los grupos armados.

Las AUC y el gobierno central firmaron el *Acuerdo de Santa Fe de Ralito* el 15 de julio de 2003 por el cual las AUC se comprometieron a desmovilizar a la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005. En este acuerdo se reclamó el desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes a la vida civil, aceptando concentrar sus tropas en una zona sólo con la condición de obtener garantías de seguridad esencial. Entre las garantías figuraba el no pasar tiempo en la cárcel, beneficio jurídico que se equipara con los reservados para el delito político, a pesar de que no se les había concedido el reconocimiento político.

Sin embargo, este proceso se vio interrumpido por varios acontecimientos. En primer lugar, las hostilidades de los grupos paramilitares no cesaron durante el proceso de negociación que nos encontramos. Antonio Navarro Wolf denunció ante el Congreso 600 casos de homicidios perpetrados por paramilitares a comienzos del 2004: como los realizados a la tribu indígena de los wayuu con el fin de limpiar el camino al tráfico de droga y otras mercancías. Otro acontecimiento

que transformó las conversaciones de paz fue la desaparición de Carlos Castaño y las disputas en el seno del paramilitarismo motivadas por intereses del narcotráfico, motivaciones políticas de este grupo y las reacciones frente a los pedidos de extradición de varios de dieciocho jefes paramilitares y diecinueve guerrilleros por la justicia estadounidense.

Esta coyuntura fue aprovechada por Salvatore Mancuso para asumir las riendas de la AUC y firmar con el Gobierno central un segundo acuerdo el 13 de mayo de 2004 conocido como *Ralito II* para el establecimiento de una zona de ubicación en Tierralta (Córdoba) y contribuir al cese de hostilidades y avanzar en un cronograma de desmovilización. No obstante hubo variaciones en su agenda enfatizando las siguientes disposiciones: la misión de las AUC cesará cuando finalice el conflicto no después de la desmovilización; no negociarán bajo el sometimiento a la justicia en Colombia o cualquier otro lugar; los paramilitares no cederán áreas bajo su control a los grupos insurgentes y seguirán protegiendo estas zonas bajo una estrategia de defensa integral. El gobierno acordó con la OEA una Misión de Apoyo al Proceso de la Paz (MAPP-OEA) para verificar la desmovilización de los paramilitares y el subsiguiente cese al fuego; sin embargo, muchos grupos ya desmovilizados han incumplido el cese al fuego.

La Administración Uribe elaboró una propuesta de ley para dar marco jurídico al proceso de negociación adelantado en el primer acuerdo de Ralito I y Ralito II. Para ello el Congreso aprobó la Ley 975 del 2005, comúnmente denominada Ley de Justicia y Paz. Esta ley consistió en establecer un proceso de desmovilización colectiva e individual de grupos armados. Buena parte de los grupos paramilitares se desmovilizaron de manera colectiva en diferentes grupos. Algunos miembros de las guerrillas también se desmovilizaron pero de manera individual y en la mayoría de los casos desertando del grupo en cuestión. Entre los puntos más controvertidos de la ley destaca la reducción de las penas de 5 a 8 años para aquellas personas pertenecientes a grupos de paramilitares previa confesión y colaboración con la justicia; posibilidad de cumplir la pena en lugares diferentes a la cárcel como granjas agrícolas; reducción de la pena al 10% para aquéllos que estén reclusos en las cárceles, otorgándoles la categoría de presos políticos.

La Ley creó una Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR) con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas de verdad, justicia y reparación, y propiciar la reconciliación. La CNRR entiende el término verdad como verdad histórica, no judicial pues de ésta se encargan las autoridades judiciales. Verdad histórica significa que esta Comisión realiza estudios en torno a las razones del surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales.

Respecto a la justicia, esta Comisión no tiene funciones judiciales, que pertenecen a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y los Tribunales Superiores de cada Distrito Judicial. Sin embargo, esta Comisión junto con la Procuraduría Judicial y la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo deben garantizar la participación de las víctimas en los procesos judiciales; hacer recomendaciones para la ejecución de los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas e impulsar y orientar las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes y atender las reclamaciones de las víctimas que sufrieron un despojo de sus bienes y orientarlas hacia las instancias judiciales respectivas. El tercer derecho de las víctimas, la reparación, comprende la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción, así como medidas dirigidas a la no repetición de las violaciones, tanto en el plano individual como colectivo. En último lugar, esta Comisión tiene como objetivo la garantía de no repetición. Para ello tiene dos funciones: la evaluación de las políticas de desmovilización de los grupos armados ilegales y la evaluación en torno a las políticas de reinserción de los excombatientes de estos grupos.

Esta ley ha sido seriamente criticada por la oposición y organismos de defensa de los derechos humanos, al igual que por legisladores de Estados Unidos y de varios países europeos. Las críticas se centran en que no obliga a los paramilitares a confesar la totalidad de sus delitos ni a indemnizar a las víctimas o a sus familiares; los paramilitares no serán extraditados porque bajo los beneficios de la ley, la pena principal se reemplaza por una pena alternativa que se concede por la contribución a la consecución de la paz y por eso es poco previsible que el gobierno acceda a extraditar a los líderes de las AUC⁹⁹. Frente al tema de extradición el embajador de Estados Unidos, William Wood anunció que insistirán en la extradición de Don Berna y en las de otros cinco jefes paramilitares que siguen generando temor en la cúpula de las AUC¹⁰⁰.

Esta medida analizada por la ONG Human Rights Watch- HRW- y su director ejecutivo Kenneth Roth concluye que “la ley como tal, era muy cuestionable pues consolidaba el poder de los grupos paramilitares en el país al no dismantelar sus estructuras ni militares ni económicas”¹⁰¹. Amnistía Internacional consideró el proyecto como un contrato de impunidad para los

⁹⁹ “Colombia aprueba la Ley de Justicia y Paz” *BBC Mundo.com*, 22 de junio de 2005. Disponible en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4117000/4117878.stm

¹⁰⁰ El diario El Tiempo señaló que la desmovilización en octubre de 2005 fue parada por los paramilitares debido al manifiesto por parte del Gobierno de extraditar a Don Berna debido al traslado de este jefe paramilitar desde su finca en Tarazá (Cauca) a la cárcel de Combita. Disponible en: “Autodefensas suspenden desmovilizaciones para forzar al Gobierno a no extraditar a 'Don Berna'” *El Tiempo*, 7 de octubre de 2005.

¹⁰¹ “La reglamentación de ley de Justicia y Paz solo ‘empeorará’ una situación que ya es preocupante” *El Tiempo*, 18 de enero de 2006.

paramilitares. El periódico *The New York Times*¹⁰² consideró la ley una capitulación frente a las mafias terroristas y que más bien debería llamarse “ley de impunidad para asesinos, terroristas y grandes traficantes de cocaína”. Otra acusación realizada a la Ley 975 es que muchos de los paramilitares encarcelados desde hacía tres años podían acogerse a este nuevo tratamiento de la Ley de Justicia y Paz. Muchas solicitudes de encarcelados han llegado a las manos del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, para poder acogerse a los beneficios de esta ley. La Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo consideran que esa será la situación de la mayoría de los 3.194 paramilitares que hoy, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC-, están tras las rejas¹⁰³.

En la entrevista realizada al fiscal 3¹⁰⁴ concluye que la Ley 975, en un primer momento, sólo iba a afectar hasta el tercer nivel del conflicto, es decir, a comandantes de bloque, de frente y subcomandantes y la base iba a tener perdón y olvido. Frente a ellos iba a ver una amnistía. Por ello considera que la ley fue hecha para los paramilitares. Sin embargo, como posteriormente se puede ver, la Corte modificó este tema e irán todos los que hubieran tenido relación con el conflicto.

Frente a estas acusaciones desde el ámbito nacional e internacional hacia el marco jurídico de la negociación con los paramilitares, la Corte Constitucional examinó la segunda demanda de inconstitucionalidad el 18 de mayo de 2006. Los temas estudiados fueron la alternatividad a la pena ordinaria, el carácter sedicioso del paramilitarismo, la determinación de la víctima, la sanción penal de delitos y los bienes destinados a las víctimas. El fallo de la Corte provocó varios cambios interpretativos de determinados artículos de la ley¹⁰⁵. Según el director de América Human Rights

¹⁰² “Colombia’s Capitulation”, *The New York Times*, 4 de junio de 2005.

¹⁰³ “Decreto que reglamenta ley de Justicia y Paz es banderazo para excarcelación masiva de paramilitares” *El Tiempo*, 7 de enero de 2006.

¹⁰⁴ Entrevista al fiscal 3, Palacio de Justicia, Medellín, 9 de agosto de 2007. Por razones de seguridad no se indica su nombre.

¹⁰⁵ HRW reproduce algunos de los cambios interpretativos de la Ley de Justicia y Paz más destacables: 1. Confesión: La ley establece que los paramilitares que desean recibir penas reducidas deben rendir una versión libre de los hechos, pero no establecía una obligación explícita de confesión plena y veraz de sus crímenes. La Corte determinó que esa disposición debía interpretarse de manera que obligue a los paramilitares a revelar la verdad sobre sus crímenes. 2. Sanciones por ocultar la verdad: Bajo la ley, los paramilitares no tenían incentivos para revelar aquellos crímenes sobre los cuales las autoridades no tenían conocimiento, ya que si posteriormente se descubría que ellos habían ocultado un crimen, las penas reducidas no se verían afectadas de manera significativa. La Corte ha determinado ahora que si se descubre posteriormente que un paramilitar omitió un delito en su versión libre, debe ser juzgado por ese delito bajo la ley penal ordinaria, y podría perder los beneficios ya otorgados. 3. Períodos de investigación: La ley restringía severamente el tiempo del que disponían los fiscales para investigar los crímenes de los paramilitares. La Corte ha corregido algunas de estas restricciones, dando a los investigadores más tiempo para esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos por los paramilitares. 4. Eliminación de rebajas adicionales de pena: La ley establecía que buena parte del tiempo que los paramilitares habían cumplido en una zona de

Watch, José Miguel Vivanco: “el aspecto más significativo de la decisión de la Corte es la obligación de que los paramilitares confiesen de manera plena y veraz. Al obligar a los paramilitares a decir la verdad sobre sus crímenes, o arriesgar la pérdida de las rebajas en sus penas, la Corte por fin le ha dado algunos dientes a la ley”. Ante el fallo de la Corte, los paramilitares señalaron que no acatarían el fallo de la Corte, cuestión que generó división en el Gobierno debido a la mutua acusación entre el Ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, sobre quién es el responsable de esta nueva crisis. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó que los ajustes que le hizo la Corte a la Ley fueron los que pusieron la norma “en concordancia con las obligaciones internacionales del Estado”.

El proceso de negociación del Presidente Álvaro Uribe con el estado mayor negociador de las AUC¹⁰⁶ terminó con desmovilización de 37¹⁰⁷ estructuras paramilitares que correspondió a un

concentración, durante las negociaciones, podía ser contado como tiempo de pena ejecutada. De este modo, en la práctica los paramilitares condenados podrían terminar cumpliendo tan solo 28 meses en un centro de reclusión. La corte declaró inexecutable esta disposición. 5. Devolución de bienes: La ley establecía que los paramilitares debían entregar bienes ilegalmente adquiridos para cumplir con la reparación de sus víctimas. La Corte establece ahora que los paramilitares no sólo deben devolver todos sus bienes ilegalmente adquiridos (como tierras tomadas por la fuerza), sino que también deberán pagar reparaciones con su patrimonio lícito. 6. Participación de las víctimas en los procedimientos criminales: La ley restringía la posibilidad de que las víctimas participaran en los procesos penales contra los paramilitares. La Corte establece ahora que las víctimas pueden participar a lo largo del proceso, como lo harían en cualquier caso penal ordinario. Disponible en “Corte corrige defectos en la Ley de desmovilización” HRW noticias, 19 de mayo de 2006, <http://hrw.org/spanish/docs/2006/05/19/colomb13433.htm#top>

¹⁰⁶ El llamado estado mayor negociador de la AUC está compuesto de Salvatore Mancuso, Vicente Castaño alias “El Profe”, Adolfo Paz alias “Don Berna”, Javier Montañez, “Jorge 40”, Julián Bolívar, Hernán Hernández, Miguel Arroyave (quien habría sido asesinado el 19 de septiembre de 2004), Ernesto Báez y Ramiro Vanoy, en representación de los bloques Norte, Central Bolívar, Centauros, Calima, Héroes de Granada, Pacífico, Sur del Cesar y Vencedores de Arauca. También se encontrarían presentes en la zona de ubicación Guillermo Torres, Pablo Sevillano, Pablo Mejía, Gabriel Galindo, Marlón Pérez, Pedro Fronteras, John Santamaría y Juan Carlos Sierra.

¹⁰⁷ Los grupos de paramilitares que se encuentran desmovilizados según fuente del Alto Comisionado por la Paz son: 1. *Grupos desmovilizados en el año 2003*: Bloque Cacique Nutibara, Autodefensas Campesinas de Ortega. 2. *Grupos desmovilizados en 2004*: Bloque Calima, Bloque Catacumbo, AUC de Cundinamarca, AUC del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando, Bloque Bananero. 3. *Grupos desmovilizados en 2005*: Bloque Vencedores del Arauca, Frente Héroes y Mártires de Guática, Frente Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB, Bloque Tolima, Frente Vichada de BCB, Bloque Noroccidental Antioqueño de las AUC, Bloque Centauro, Anillos de seguridad de las AUC en Santa Fe de Ralito, Héroes del Chocó, Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, Bloque Héroes de Granada, Bloque Libertadores del Sur, Bloque Montes de María, Bloque Héroes de Tolova, Frente Mojana de las AUC, Bloque Sur Oeste Antioqueño, Bloque Córdoba. 4. *Grupos desmovilizados en 2006*: Frente Héroes del Llano y Frente Héroes del Guaviare, Bloque Norte de las Autodefensas, Frente Julio Peinado Becerra de las AUC, Frente Sur Putumayo del BCB, Frentes Próceres del Caguán, Héroes de los Andaqués y Héroes de Florencia del BCB, Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Bloque resistencia Tayrona X, Bloque Central Bolívar-Sur de Bolívar, Autodefensas Campesinas de Bloque Boyacá, Bloque Mineros, Bloque Élmer Cárdenas. Esta información al igual que el Informe Ejecutivo de Desmovilizaciones Colectivas 2003-2006 se encuentra en el siguiente enlace electrónico: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/>

total de 30.944 paramilitares y 17.235 armas entregadas¹⁰⁸ según fuentes del Alto Comisionado para la Paz¹⁰⁹.

Este proceso de desmovilización fue interrumpido por la actuación de algunos grupos paramilitares que entorpecieron el proceso; la emergencia y continuación en armas de varios grupos paramilitares; y las observaciones de inconformidad en el nivel nacional e internacional. Esta situación fue más evidente en el segundo mandato del presidente Uribe como se observará posteriormente.

Para acentuar más esta cuestión, según la Fundación Ideas para la Paz- FIP-, en Ralito (Córdoba) se habla del llamado “setenta-treinta”, es decir, desmovilizar el setenta por ciento de los hombres y conservar el treinta por ciento. Conforme al análisis que realiza FIP, es posible que los paramilitares necesiten ese porcentaje como fuerza que “garantice su seguridad personal pero también para que guarden el negocio y se despoje del resto. Es decir, el resto que patrulla las zonas, tarea que dejarían a la fuerza pública. Lo que también es una manera de reducir costos”¹¹⁰. Posiblemente la desmovilización militar tiene como objetivo la consolidación del poder paramilitar en determinadas regiones. Por eso se desmovilizaron, porque ya no era necesario tener un ejército para defender el territorio que ya poseen. Así mediante las diferentes redes locales y regionales consolidan su poder.

Durante el primer gobierno de Uribe, se intentaron acercamientos con el ELN a través de varios países como Cuba, México o el Grupo de Países Amigos (Francia, España, Noruega, Suecia y Cuba), pero estos acercamientos se rompieron. Tras la salida de la cárcel de Francisco Galán se puso en marcha otra propuesta con conversaciones en Cuba aunque todavía no ha producido una negociación formal. Uno de los problemas de esta negociación es que no está claro cuál va a ser el contenido social y político de la negociación y si el gobierno de Uribe tiene voluntad política para ello.

¹⁰⁸ El tipo de armas entregadas se clasifican en: largas 13.036, cortas 2.759, acompañamiento 1.189, granadas 11.127, municiones 2.256.176

¹⁰⁹ Según la entrevista realizada al fiscal 2 (se omite su nombre por razones de seguridad) un personero le comentó que más del 80% de los desmovilizados no eran paramilitares, sino que se unieron a la desmovilización por obtener beneficios económicos. Aunque esto es difícil de demostrar por ahora, es importante tener en cuenta que podían haberse desmovilizado personal no paramilitar.

¹¹⁰ Fundación Ideas para la Paz: “La tercera generación”. *Siguiendo el conflicto hechos y análisis de la semana*. Número 25, 12 de agosto de 2005. Disponible en www.ideaspaz.org/publicaciones; “La nueva generación de paramilitares ya se deja sentir al menos en ocho departamentos del país” *El Tiempo*, 15 de octubre de 2005

La Política de la Seguridad Democrática es bien frágil porque a pesar de que la opinión pública ha notado una mayor seguridad por ejemplo cuando se desplaza por carretera debido a la protección de éstas por la Fuerza Pública, es difícil mantener esta situación en el tiempo si se tiene en cuenta las amenazas, la crisis social, la limitación de los recursos económicos del Estado o las irregularidades en el proceso de desmovilización paramilitar. A esto podemos sumar que no todos los indicadores de mejoras son de este gobierno, por ejemplo la tasa de homicidios viene en descenso desde 1991, el aumento de los ataques de la Fuerza Pública hacia los grupos armados viene desde el gobierno de Pastrana.

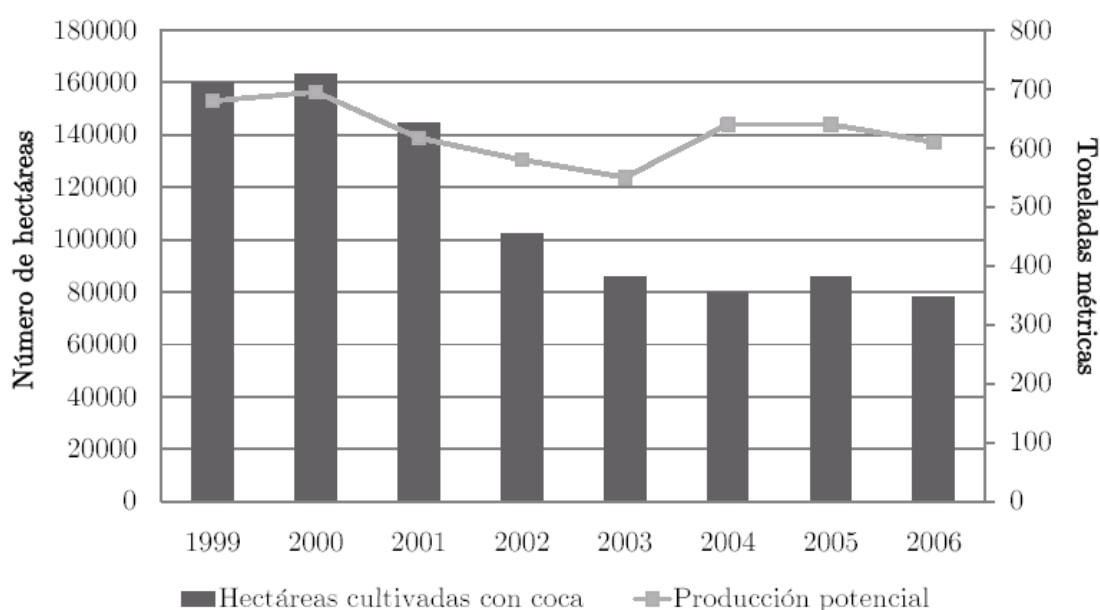
Se ha producido, por otra parte, la desmovilización de los grupos paramilitares desencadenó varios problemas debido a sus conflictos, escándalos, crímenes y reciclaje en grupos de delincuencia viejos y nuevos. El arsenal incautado, era inservible en su mayoría, y muchas fueron ocultadas (de más de 10.000 desmovilizados de 18 grupos, 4.000 no entregaron armas lo que supone un aumento en el mercado negro y la ocultación de las mismas para continuar con sus actividades ilícitas). Respecto a los programas para reincorporar a los grupos desmovilizados a la sociedad civil, fue reconocida por el Alto Comisionado de Paz que estas medidas eran insuficientes desde el punto de vista económico, organizativo y planificación (Leal, 2006).

Algunos paramilitares aspiraron a cargos de elección pública e hicieron revuelo sobre este tema porque querían obtener curules en el Congreso pero la Corte Constitucional prohibió la participación política de los paramilitares antes de que terminara el proceso de desmovilización.

Respecto al Plan Colombia se creó una estructura propia para la guerra irregular que no se había dado en más de 30 años de lucha contrainsurgente y cuya característica principal es la movilidad y la articulación de unidades de las tres fuerzas militares. Es decir, desde el punto de vista militar las fuerzas militares se encuentran hoy mejor dotadas para atender las necesidades de seguridad interna, también han mejorado su nivel de eficiencia y capacidad operativa. Pero desde el punto de vista de política antinarcóticos han tenido un malo desenlace. Sin embargo, este plan se sostuvo por el compromiso de Estados Unidos de enfrentarse a las drogas mediante la fumigación aérea. Sin embargo, ha sido un método ineficaz porque entre 1994 y 2004 se asperjaron 620.000 hectáreas y en ese mismo periodo se pasó de 44.700 hectáreas a 86.300 (Leal, 2006). Una investigación de la Universidad de los Andes y Fedesarrollo constata que a pesar de que se ha reducido el número de hectáreas cultivadas con coca de 163.000 a 80.000 en 2006, la cantidad de cocaína exportada se mantiene (Figura 17). Ahora producen más con un número

menor de coca plantada (Mejía y Restrepo, 2009). Producen más porque utilizan una variedad de coca más eficiente y grande, una mayor densidad de plantas por hectáreas, mejores técnicas de cultivo y el uso de mejores precursores químicos y técnicas de producción. Entre 2000 y 2006 aumentó un 4% la producción potencial de cocaína. En 2000 se produjo 4.3 kg de cocaína de hectárea por año, pero en el 2006 produjeron 7.7 kg de cocaína por hectárea por año.

Figura 17. Hectáreas de coca cultivada de 1999 a 2006

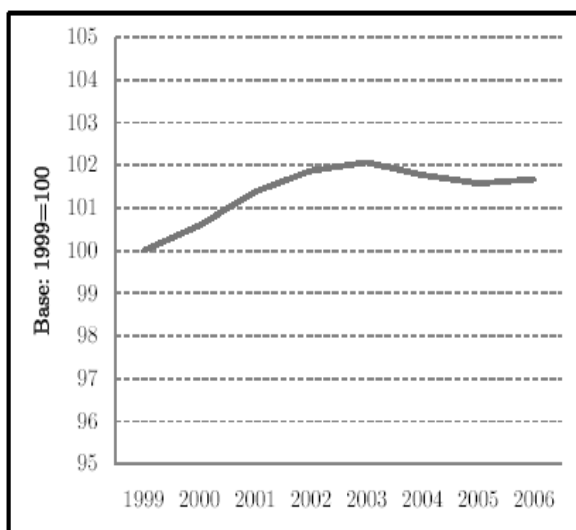


Fuente: UNODC, 2008

A pesar de los grandes recursos invertidos, ni la oferta ni los precios de la droga se modificaron en la calle¹¹¹. La disponibilidad de cocaína en los países consumidores no disminuyó y los precios aumentaron. Por tanto, los programas enfocados para erradicar el cultivo de coca fueron ineficientes (Figuras 18, 19 20 y 21).

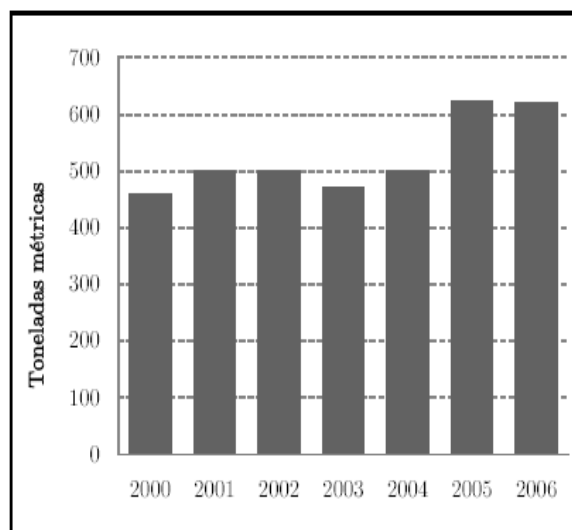
¹¹¹ Pero la ayuda financiera de este plan no fue tan elevada frente a los daños que provoca. Desde el 2000 hasta 2005 el gobierno de Estado Unidos desembolsó 3,8 billones de dólares de asistencia para la guerra contra la producción y tráfico de drogas mientras que Colombia gastó 6,9 billones de dólares en la guerra contra las drogas en el mismo periodo. En promedio gastaron 1,2 billones de dólares por año en el componente militar del Plan Colombia. Pero buena parte de este dinero regresó a Estados Unidos por pago de insumos, repuestos, asesorías, etc.

Figura 18. Consumo de cocaína percibida por expertos, 1999-2006



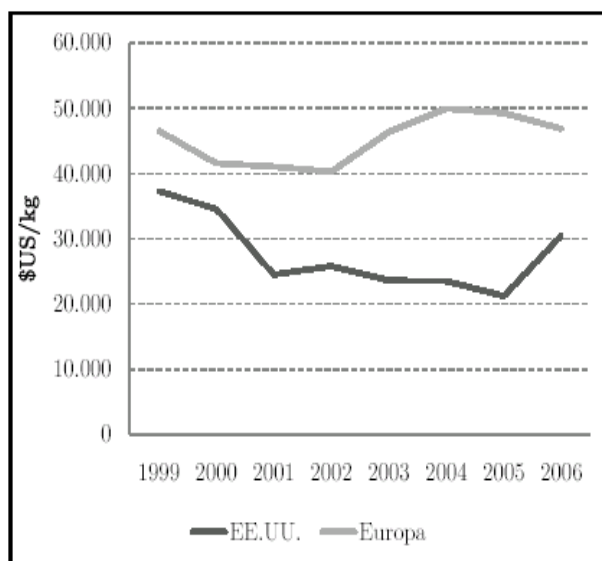
Fuente: UNODC, 2008

Figura 19. Cantidad estimada de cocaína en tránsito hacia EE.UU, 2000-2006



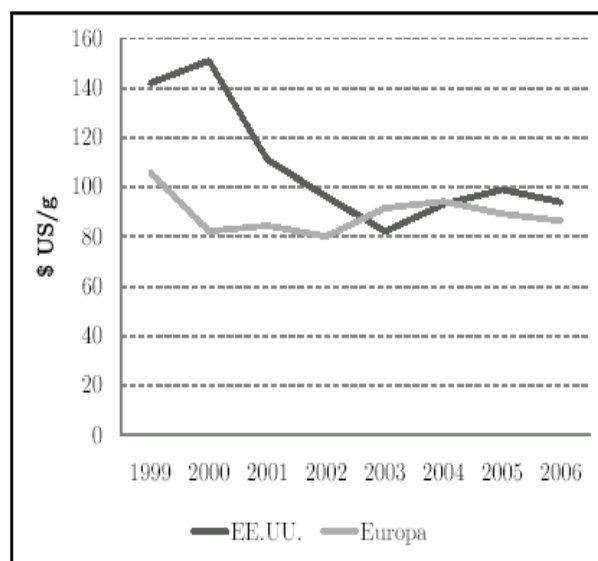
Fuente: GAO, 2008

Figura 20. Precio de la cocaína al por mayor



Fuente: UNODC, 2008

Figura 21. Precio de la cocaína al detal



Fuente: UNODC, 2008

Desde el 2002 el Plan Colombia autorizó 75 millones de dólares anuales para desarrollar programas de desarrollo alternativo a cultivos ilícitos. De esta manera se puso en marcha la producción del aceite de palma. Estos programas entregan fondos para convenios entre empresarios y campesinos para desarrollar un producto lícito. La mayoría de estos proyectos se

desarrollaron en el norte de Colombia que fue el epicentro del desplazamiento campesino. Entre las empresas que se beneficiaron de estos fondos destaca Coproagrosur, Gradesa y Urapalma como empresas que han estado en relación con narcotraficantes y paramilitares. A esta acusación hay que añadir la investigación del fiscal Mario Iguarán sobre la denuncia de 23 compañías palmicultoras en el Chocó que trabajaron con paramilitares para incautar tierra a las comunidades campesinas mediante el fraude y la coerción y provocar su desplazamiento. Según Duncan (2006) los paramilitares aprovecharon la producción de palma porque era un producto de control territorial y porque permite invertir el capital del narcotráfico en un negocio rentable.

En conclusión, el tratamiento del gobierno central hacia el paramilitarismo asumió una posición más clara respecto a anteriores administraciones y elabora una estrategia política de enfrentamiento mediante el aumento de los combates de la Fuerza Pública, la apertura de un proceso de negociación con los grupos paramilitares y un reforzamiento de la legitimidad militar respecto a sus antiguos nexos con el paramilitarismo. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿hasta qué punto estas políticas tienen la capacidad de afrontar y enfrentar la consolidación del poder paramilitar en el territorio colombiano?. A pesar de las medidas tomadas desde su consolidación como AUC, los grupos paramilitares han tenido un proceso sostenido de crecimiento durante los últimos años, de hecho es el único grupo armado que ha estado creciendo en la administración uribista. El poder de estos grupos determina la política regional y local, acapara las administraciones locales y están infiltrándose en todos los niveles. Además durante el proceso de negociación se están produciendo crisis entre el gobierno central y los grupos paramilitares por la cuestión de la extradición y el fallo de la Corte respecto a la Ley de Justicia y Paz, así como se han reorganizado grupos de paramilitares en ocho departamentos colombianos. A estas circunstancias hay que añadir el fracaso relativo del Plan Colombia respecto al control del narcotráfico y la producción de coca así como la puesta en marcha del cultivo de la palma y su relación con grupos paramilitares. La autonomía de los grupos paramilitares, sus lazos con el narcotráfico, el respaldo social y de las elites regionales y nacionales apunta a un fenómeno más o menos estable de gran poder militar, político, económico y social.

Durante el año 2004 hubo un nuevo debate sobre la reelección presidencial en Colombia. A principios del 2004, funcionarios del alto nivel en el Ejecutivo retomaron la idea de la reelección presidencial. Los grupos uribistas apoyaron esta idea. El Congreso aprobó el Acto Legislativo n°. 2 de 2004 sobre la reelección presidencial inmediata. Aprobada la reelección presidencial, Uribe se presentó a las elecciones presidenciales del año 2006 y obtuvo la mayor votación en la historia

política del país. Ganó en todos los departamentos a excepción de Nariño y Guajira donde ganó Carlos Gaviria por el Polo Democrático Alternativo (PDA). Álvaro Uribe consiguió el 62,35% de los votos por el partido Primero Colombia, Carlos Gaviria el 22,02 % por el Polo Democrático Alternativo y Horacio Serpa por el Partido Liberal obtuvo 11,83%. Esta victoria de Uribe se suma a la conseguida en el Senado y Congreso con amplia mayoría uribista.

Sin embargo, el inicio de este segundo mandato tuvo varios desafíos. Un primer desafío que se enfrentó fue el destape del escándalo de los vínculos entre grupos paramilitares y la política. Las primeras informaciones aparecieron durante la campaña presidencial, pero después de la posesión de Uribe estas informaciones fueron asumidas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que empezaron a investigar a los políticos apoyados por estos grupos armados. Este proceso fue llamado “parapolítica” y fue consecuencia del proceso de desmovilización contra esos grupos. Las relaciones que hasta el momento se han evidenciado a través de las investigaciones de la Fiscalía y la Corte identifican que determinados políticos establecieron con los grupos paramilitares relaciones destinadas a conformar grupos paramilitares, financiamiento de campañas electorales, negocios, contrataciones ilegales, desvío de fondos públicos a las arcas de los paras y sostuvieron ciertas reuniones en determinadas regiones. Según los datos del Gobierno hasta diciembre de 2008, la Fiscalía adelantó 264 investigaciones, de las que se han proferido 94 resoluciones de acusación a 91 alcaldes, mientras que 77 exalcaldes y 47 excongresistas se encuentran procesados. Respecto a los congresistas, actualmente hay 14 congresistas condenados, 11 absueltos, 11 llamados a juicio y 50 están siendo investigados. En las elecciones legislativas de 2006, el treinta y tres por ciento del Senado y el quince por ciento de la Cámara han sido judicializados por presuntos nexos paramilitares¹¹² (Álvaro, 2009b).

Por otro lado, cuando las Fuerzas Militares realizaron la operación contra las FARC y examinaron el ordenador de Raúl Reyes, encontraron nexos entre miembros de las FARC con políticos, este proceso se llamó farcpolítica. En la actualidad los siguientes políticos están siendo investigados por relaciones con este grupo armado: Los senadores Alexander López Maya, del Polo Democrático Alternativo (PDA); Luis Enrique Dussán, senador del PDA; Luis Fernando Velasco, senador liberal del Cauca; Carlos Julio González, senador liberal; Gloria Ramírez, del PDA; y Piedad Córdoba, del partido Liberal. Igualmente están vinculados los representantes Luis

¹¹² Según esta investigación, hasta mayo de 2012 doscientos noventa y tres funcionarios han sido investigados por sus nexos con estos grupos. De ellos nueve han sido absueltos, cincuenta y siete han sido condenados, sesenta y siete están siendo investigados, sesenta y dos están detenidos, treinta y dos están llamados a juicio y treinta y cuatro se encuentran en fase de instrucción.

Fernando Almario, del Caquetá por el Movimiento de Participación Popular; y Wilson Borja, del PDA (Álvaro, 2009b).

No obstante, en este segundo mandato, este gobierno fue exitoso en su lucha contra las FARC pues en marzo de 2008 Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, número dos y portavoz de las FARC, y 16 guerrilleros murieron en una operación militar colombiana en Ecuador. Fue el mayor golpe que las fuerzas militares colombianas han dado a las FARC. Por otra parte, el líder Tirofijo, Manuel Marulanda Vélez, murió. Tras especular si fue un ataque de las fuerzas militares se evidenció que murió de una afección cardíaca. Tras su muerte, Antonio Cano le sustituye. Tras estos golpes a la organización de las FARC los investigadores están divididos respecto a su actual fuerza y poder. No obstante, se puede evidenciar que siguen controlando parte del territorio colombiano y enfrentándose a las Fuerzas Militares (Álvaro, 2009b).

El siguiente desafío que acompañó a Uribe fue el tema de la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos. Ante la presión de Estados Unidos, Uribe extraditó a 15 jefes de la cúpula de las AUC en mayo de 2008 por cargos de narcotráfico. A pesar de que algunos pensaron que con este proceso se perdería parte de la verdad y justicia del proceso de desmovilización, algunos fiscales de Estados Unidos aceptaron que si ellos colaboraban con la verdad, justicia y reparación en Colombia, obtendrían rebajas de las penas en sus condenas por narcotráfico en Estados Unidos. Como resultado, Salvatore Mancuso negoció un acuerdo de beneficios en Estados Unidos a cambio de su colaboración con la justicia colombiana. Por eso rindió versión libre desde Washington y dio su testimonio ante la Corte Suprema en los casos de los senadores cordobeses, Juan Manuel López y Reginaldo Montes. El extraditado Exconcejal de Santa Marta, Ignacio Rodríguez también pudo aportar su testimonio en el caso del senador Luis Eduardo Vives. También Jorge 40 rindió declaración por la representante a la Cámara por el Magdalena, Karelly Lara, en diciembre de 2008¹¹³.

Otro desafío que tuvo que enfrentar Uribe fue el debate en torno a la relación entre los grupos paramilitares y Uribe. Causó sensación el discurso del Senador de Polo Democrático, Gustavo Petro, que se refirió a la influencia de la parapolítica en Antioquia, señalando las fincas de Álvaro Uribe y las de su hermano Santiago Uribe como presuntos escenarios de reuniones paramilitares. También este senador señaló que cuando Uribe fue gobernador de Antioquia autorizó la conformación de Convivir, organizaciones que estaban relacionadas con grupos paramilitares y

¹¹³ “¿La verdad extraditada?” *Semana*, 13 de diciembre de 2008.

justificó la dotación de armas de largo alcance y su participación en tareas militares. Esta versión se corroboró con la versión libre del paramilitar Ever Veloza García, alias HH, que confesó que las Convivir actuaron al amparo de las fuerzas militares (Comisión Colombiana de Juristas, 2008a). Pero antes de estos hechos en el 2004 un informe de inteligencia elaborado en 1991 y desclasificado por el Pentágono acusó a Álvaro Uribe por sus nexos con el cartel de Medellín, por ser amigo personal de Pablo Escobar y realizar actividades narcóticas en Estados Unidos. Según este documento, Uribe también apoyó la campaña política de Escobar para apoyar al parlamentario Jorge Ortega y atacó el tratado de extradición a Estados Unidos.¹¹⁴

Sin embargo, la parapolítica no sólo se enfrenta a la relación de paramilitares con políticos o viceversa, sino que engloba a la relación que estos grupos tuvieron con la Fuerza Pública, militares y policías, empresarios, periodistas, hasta el momento. A pesar de la dimensión de este fenómeno, la mayor responsabilidad recae en la clase política que no da muestras de querer cambiar la situación. En 2008 hubo dos intentos de reforma del Congreso para evitar que hubiera influencia paramilitar en los congresistas y castigar a los partidos parapolíticos. Pero no prosperó. Los congresistas y los partidos conservaron sus curules, recibieron el dinero por reposición de votos y pudieron nombrar sus reemplazos hasta cuando haya en su contra sentencias condenatorias, ya no sólo por concierto para delinquir con paramilitares¹¹⁵.

Durante este segundo mandato de Uribe, contamos ya con evidencias de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. A continuación se analiza los resultados de esta ley en función de la verdad, justicia y reparación.

Respecto a la verdad, el primer problema que se presentó fue que cuando los fiscales registraron a los paramilitares desmovilizados y les aplicaron un cuestionario que no estaba adaptado para conseguir detalles sobre los delitos cometidos. Posteriormente el gobierno reconoció que este cuestionario no tenía ese objetivo. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 90% de los 28.000 procesados no aportaron datos relevantes sobre sus crímenes y actividades ilegales. Tampoco dieron ninguna información sobre las estructuras de sus agrupaciones. Algunos de los cabecillas comenzaron a confesar en un contexto donde se acercaron muchos simpatizantes de los paramilitares como el caso de la confesión de Freddy Rendón “El Alemán” que logró reunir a más de trescientos simpatizantes con pancartas, música, bailarines a grito de “jefe, jefe”. Otros de

¹¹⁴ Documento desclasificado, septiembre 1991, Departamento de Defensa. “La historia detrás del documento de inteligencia que acusó a Uribe” *Semana*, 8 de agosto de 2004.

¹¹⁵ “Parapolítica sin dientes” *Semana*, 13 de diciembre de 2008.

los jefes de la cúpula paramilitar, Ramón Isaza, dijo que el alzheimer le impedía recordar los supuestos cientos de crímenes y pidió a sus víctimas que le ayudaran a recordar (Haugaard, 2008). Pero, otro grave problema que comentó un fiscal en el Palacio de Justicia de Medellín fue que la Fiscalía no estuvo en los primeros momentos de la desmovilización, sino que estuvo el Alto Comisionado. Por lo que no pudieron tener esa información de primera mano. Posteriormente el Alto Comisionado dio esa información primera de los desmovilizados a los fiscales, pero de manera muy fragmentada¹¹⁶.

Durante esta fase de enjuiciamiento, el papel de las víctimas fue fundamental porque participaron en las audiencias de confesión y ayudan a descubrir la verdad mediante sus confesiones. Sin embargo, por temor y por falta de información su participación se vio limitada y reducida. Muchas de las víctimas recibieron acoso y otras fueron asesinadas por dar información. Un fiscal en Medellín comentó que durante el conflicto armado hay una invisibilización del trato hacia la mujer. Según este fiscal tan sólo se ha detectado un caso de violencia de género en Antioquia relacionado con los paramilitares, sobre todo debido al temor que tiene la mujer a denunciar este trato¹¹⁷. En otros casos la víctima no recibió la notificación a tiempo del proceso que se realizan en muy pocos lugares debido a la falta de difusión de esta información. La radio era el medio de comunicación más usado en las zonas rurales pero este medio no permite una suficiente difusión. En este sentido, Patricia Luna, destaca que hay que hacer con urgencia trabajo de difusión, sobre todo en las veredas, en los pueblos alejados de las capitales de los departamentos que es donde están la mayor parte de las víctimas¹¹⁸.

Otro dato a tener en cuenta que subraya Patricia Luna es que muchas de las víctimas se desplazaron como consecuencia de la violencia, por tanto, era difícil localizarlas. El Estado, no tiene ninguna estrategia que facilite la movilización de la víctima¹¹⁹. Pero incluso la participación de la víctima en el proceso era limitada porque no realizaban preguntas directamente al acusado sino que tenían que entregar las preguntas al fiscal quien decide si las tomaba en consideración o no. A pesar de este contexto hasta el 29 de febrero de 2012, la Unidad de Justicia y Paz

¹¹⁶ Entrevista al fiscal 2, Palacio de Justicia, Medellín, 9 de agosto de 2007. Por razones de seguridad no se indica su nombre.

¹¹⁷ Entrevista al fiscal 1, Palacio de Justicia, Medellín, 8 de agosto de 2007. Por razones de seguridad no se indica su nombre.

¹¹⁸ Entrevista a Patricia Luna, Jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Defensoría del Pueblo, 30 de julio de 2007, en la Defensoría, Bogotá.

¹¹⁹ Entrevista a Patricia Luna, Jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Defensoría del Pueblo, 30 de julio de 2007, en la Defensoría, Bogotá.

contabilizó 70.538 víctimas que han participado en las versiones libres, de ellas 27.113 realizaron alguna pregunta a los postulados en las versiones libres.

Aunque las víctimas podían recurrir a un defensor público tan sólo hay 68 defensores públicos para 125.000 víctimas registradas en 2007. Y de citas tan sólo 10.716 tuvieron defensor público. Es decir, cada defensor público atendió a 815 víctimas. Para diciembre de 2011 la cifra de víctimas subió a 372.874 según información de la Fiscalía. Siguiendo esta línea, el fiscal 1 hace hincapié en la escasez de personal para atender a las víctimas, pues hasta 2007 sólo Antioquia contaba con 7 fiscales, y sólo 23 para todo el territorio nacional¹²⁰. Posteriormente, en 2008 pasaron a ser 57 fiscales¹²¹.

Para solucionar la reparación de las víctimas se creó el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV). Por disposición del artículo 54 de la Ley 975 de 2005, constituyó una cuenta especial sin personería jurídica, adscrita a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social. Para ello los grupos armaron desmovilizados debieron entregar sus bienes a este Fondo para reparar a las víctimas. También, por recursos del presupuesto nacional, siempre y cuando los bienes y recursos aportados por los titulares de la reparación no fueran suficientes, en cuyo caso el Estado actuaría solidariamente ante las víctimas. Otros recursos patrimoniales serían aportados en dinero o especie por entidades nacionales o extranjeras. El FRV estaría vigilado por la Contraloría General de la República (Artículo 54, Ley 975 de 2005). Los bienes que los paramilitares entregaron directamente al FRV de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz y aquellos bienes que entregaron a Acción Social, FRV, mediante orden judicial, fueron muy pocos. El fondo ha recabado 95 fincas, 53 lotes urbanos, 33 predios rurales, 84 parcelas, prendas de vestir, 5.507 vacas y caballos, 49 vehículos, 2 helicópteros, 3 lanchas, 4.471.100.000 pesos colombianos, pares de zapatos, una televisión en mal estado, una clínica, un complejo turístico, dos Islas Carimagua en el departamento del Meta, una red eléctrica en Puerto Gaitán (Meta)¹²². Para que la víctima les fuera devuelto algo ella tenía que acusar al autor del crimen y aportar pruebas de lo que les fue robado. Según el Instituto Colombiano de

¹²⁰ Entrevista al fiscal 1, Palacio de Justicia, Medellín, 8 de agosto de 2007. Por razones de seguridad no se indica su nombre.

¹²¹ FGN - Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, “Documento interno”, 1 de julio de 2008, citado por International Crisis Group (2008): “Corregir el curso: Las víctimas y la Ley de Justicia y Paz en Colombia”, *Informe sobre América Latina*, N°29 – 30, octubre, p.9.

¹²² Información proporcionada por el Departamento de Prosperidad Social, Fondo para la Reparación de las Víctimas, disponible en <http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=455&conID=1667&pagID=7374>

Desarrollo Rural (INCODER) se devolvió a 4.653 familias 54.565 hectáreas de tierra con fecha de febrero de 2008. Pero aproximadamente los paramilitares robaron 5 millones de hectáreas a 4 millones de desplazados. Por otra parte, el gobierno de Uribe realizó un decreto para reparar a las víctimas de manera administrativa. Es decir, el gobierno dará reparaciones de manera directa sin pasar por los tribunales y los recursos provendrán del presupuesto del gobierno y no de las ganancias de los paramilitares, lo que significa que admite que los paramilitares no devolverán los millones de hectáreas de tierra que consiguieron por la violencia.

En este sentido, en enero de 2012 se ratificó la Ley 1448 de junio de 2011 sobre las víctimas del conflicto armado¹²³. Conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras pretende hacer efectivo el derecho a la verdad, justicia y reparación y la restitución administrativa de las víctimas. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a muchos obstáculos esta ley desde que nació hace 46 meses hasta su aprobación el 24 de mayo de 2011¹²⁴. Esta ley pretende devolver a cuatro millones de víctimas del conflicto armado dos millones de hectáreas robadas por los actores del conflicto e indemnizarlas económicamente. Sin embargo, desde su nacimiento ha tenido ya sus detractores. Desde la manifestación internacional de víctimas de crímenes de Estado, fue evidente el malestar con esta ley por la falta de garantías y protección a los reclamantes de tierras, el mantenimiento de las estructuras paramilitares y los obstáculos normativos establecidos en la Ley de víctimas y restitución de tierras. El Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo son dos voceros del inconformismo a esta ley¹²⁵. A parte de las

¹²³ Para más información, visitar la web www.leydevictimas.gov.co

¹²⁴ Para estudiar un desarrollo de la gestión de esta ley, pueden leer el siguiente artículo “Cuatro años ocupó al Congreso una ley para víctimas” , Revista Semana, 30 de marzo de 2012, disponible en: <http://www.semana.com/nacion/cuatro-anos-ocupo-congreso-ley-para-victimas/157319-3.aspx>

¹²⁵ Tanto MOVICE como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo cuestionan los siguientes puntos de la Ley 1448: la norma establece un criterio temporal arbitrario de 1985 para las víctimas en general y 1991 para las víctimas del desplazamiento y el despojo, lo cual no obedece a la realidad de la violencia del país que data de décadas anteriores; la restitución de tierras queda en entredicho con el reconocimiento de figuras jurídicas como el contrato para el uso del predio restituido, el cual implica que en casos donde existan sobre las tierras objeto de restitución proyectos agroindustriales, se privilegiara la continuidad de estos proyectos sobre el derecho de las víctimas a la restitución; para la elaboración de la ley no contó con la participación de las víctimas, contraviniendo un requerimiento establecido por el Sistema Interamericano en relación con el diseño de políticas integrales de reparación, omitiendo la consulta previa consagrada en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT; sólo se reconoce como víctimas a los familiares en primer grado de consanguinidad y afinidad, cuando la víctima directa ha sido muerta o desaparecida. Negándoseles a los otros familiares la posibilidad de demostrar el daño causado y por lo tanto su condición como víctima; la aceptación de la responsabilidad del Estado en materia de reparación es un elemento esencial para el cumplimiento de las medidas de satisfacción en materia de reparación, y un elemento importante, como garantía de no repetición. Es claro que la iniciativa presentada se preocupa por evitar a toda costa que el reconocimiento de las reparaciones pueda involucrar la responsabilidad estatal y el daño antijurídico individual producido por agentes del Estado; el reconocimiento de los derechos de la población desplazada con respecto a la legislación y jurisprudencia vigentes. Para más información, consultar www.movimientodevictimas.org y

puntualizaciones que sobre esta ley realizaron, es importante tener en cuenta la viabilidad económica de la restitución de las víctimas al igual que los problemas que pueden darse para evidenciar, ante las autoridades gubernamentales, el reconocimiento de “víctimas”, es decir, aportar datos que las identifiquen como tales y, por otra parte, identificar el terreno usurpado por los grupos armados y su restitución a las víctimas.

Respecto a la reparación administrativa, el Estado colombiano creó la siguiente relación delito/indemnización para reparar a la víctima por vía administrativa:

- Homicidio, desaparición forzada y secuestro: Cuarenta (40) Salarios Mínimos Mensuales Legales.¹²⁶
- Lesiones personales y psicológicas que produzcan incapacidad permanente: Hasta cuarenta (40) Salarios Mínimos Mensuales Legales.
- Lesiones personales y psicológicas que no causen incapacidad permanente: Hasta treinta (30) Salarios Mínimos Mensuales Legales.
- Tortura: Treinta (30) Salarios Mínimos Mensuales Legales.
- Delitos contra la libertad e integridad sexual: Treinta (30) Salarios Mínimos Mensuales Legales.
- Reclutamiento ilegal de menores: Treinta (30) Salarios Mínimos Mensuales Legales.
- Desplazamiento forzado: Hasta veintisiete (27) Salarios Mínimos Mensuales Legales.

Respecto a la justicia, la ley 975 se hizo con el objetivo de llevar a la justicia a más criminales que muchos otros procesos de paz. Los desmovilizados tuvieron tres caminos desde el punto de vista judicial. Por una parte, la Ley 782 o de orden público acogió a aquellos desmovilizados que cometieron delito político y pudieron beneficiarse de los beneficios de esta índole.¹²⁷ El problema fue que no quedó muy claro si el paramilitarismo o la pertenencia a un grupo paramilitar o la conformación de un grupo paramilitar formaban parte de uno de esos delitos políticos. Dado que la Ley 975 era para los paramilitares que habían cometido delitos graves, se aplicó para las personas que no quedaban cobijadas por la ley 782. Es decir la ley 975 se utilizó en el segundo paso. No obstante, la Corte Suprema de Justicia dijo que ningún paramilitar era delincuente

www.colectivodeabogados.org

Elementos que al parecer ya se encontraban vencidos y superados en la sentencia T-025

¹²⁶ Un salario mínimo mensual está alrededor de 496,900 pesos colombianos.

¹²⁷ Los beneficios son los siguientes: en el caso de una existencia de una sentencia los paramilitares pueden recibir el beneficio jurídico del indulto y si todavía no hay una sentencia por un delito político, la fiscalía o los jueces tienen la posibilidad de terminar o empezar las investigaciones.

político, entonces la ley 782 que ofrecía beneficios para los delitos políticos no era aplicable para los paramilitares. Entonces no estaban dentro de la ley 975 porque no se habían postulados, no podían acceder a la ley 782 porque no eran delincuentes políticos entonces lo que quedaba era la justicia penal ordinaria, el tercer camino. Esos fueron los tres escenarios que hasta el momento existen. Según el jurista Forian Huber ahora el gobierno intenta buscar una solución para abrir otra vez ese camino para los excombatientes y acceder a la ley 782 si no han cometido delitos graves. Ahora si la Corte de Justicia dice que ellos no son delincuentes políticos, la ley 782 no es aplicable, entonces nos quedamos con la ley 975 o la justicia ordinaria. Entonces si los paramilitares ahora son delincuentes comunes la Fiscalía tendría que hablar de una investigación de concierto para delinquir agravado contra 28.000 paramilitares que no quedan en la ley 975. Y esos serían acusados por concierto para delinquir agravado y estarían dentro de la justicia ordinaria¹²⁸. Ante este vacío legislativo se creó la ley 1424 de 2010, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos. Esta nueva norma jurídica da beneficios jurídicos aquellos desmovilizados que no se acogieron a la ley 975. Los que se postulen a esta ley pagarán sus penas sin ir a la cárcel si no han cometido delitos de lesa humanidad y no estén postulados a la ley 975. También el desmovilizado debe estar activo o culminar formalmente el proceso de reintegración; no haber incurrido en delitos con posterioridad a su desmovilización; firmar un formato en el que se compromete a contribuir con la verdad histórica y la reparación; participar de las actividades de servicio social y reparación que establezca la Alta Consejería para la Reintegración; y firmar el Acuerdo de Contribución a la verdad histórica y a la reparación, ante el Alto Consejero Presidencial Para la Reintegración¹²⁹.

Pero para acceder a los beneficios de la ley 975, cuya pena estaba entre 5 y 8 años, los paramilitares tuvieron que acogerse a la ley, es decir, depende de la voluntad de los paramilitares. En segundo lugar, el gobierno hizo un listado con los postulados y decide quienes de esas personas que se acogieron a la ley podían participar en la Ley de Justicia y Paz. Era como una evaluación previa de cumplir los requisitos para acceder a la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía mandó una lista con 3127 nombres y ahora tendría que empezar con la investigación. La Fiscalía designó una unidad especial, la Unidad de Justicia y Paz, para llevar a cabo estas pesquisas. De esos 30000 combatientes, hasta ahora 3127 personas participaron de la ley de justicia y paz o están en la lista como postulados. La gran mayoría de este grupo tiene que terminar sus versiones

¹²⁸Entrevista, Forian Huber, Jurista por la Universidad de Munich, investigador de la Comisión Colombiana de Juristas, 1 de agosto de 2007, Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, Colombia.

¹²⁹ Para más información de la ley 1424 visitar la Agencia Colombiana para la Reintegración <http://www.reintegracion.gov.co/es/prensa/noticias/Paginas/NoticiasLey1424.aspx>

libres. Hasta agosto de 2007 tan sólo se había realizado 30 versiones libres¹³⁰. Según el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta diciembre de 2007 la Fiscalía recibió 1057 declaraciones voluntarias de las cuales 942 fueron cerradas porque los paramilitares desmovilizados no ratificaron su voluntad de acogerse a la los beneficios de la ley y no hubo ningún llamamiento de juicio. Para el año 2010 el panorama cambió. Hasta junio de 2010 se postularon a la ley 975 4162 personas, lo que equivale a que están siendo juzgadas por la justicia colombiana y si colaboran eficazmente con el proceso al decir la verdad y reparar a las víctimas, podrán acceder a una pena alternativa de máximo 8 años por los delitos atroces o de lesa humanidad que hubieran cometido (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2010). Se iniciaron 2341 versiones libres con los que se postularon de las cuales 1514 se terminaron. De los postulados se han sido imputados ascienden a 615. 249 postulados se encuentran en proceso de formulación de cargos. Pero tan solo 10 imputados paramilitares han sido sentenciados a 29 de febrero de 2012 según la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz¹³¹.

A pesar de estas dificultades en el terreno de la justicia, uno de los avances más visibles fueron las exhumaciones de fosas comunes. Hasta abril del 2008 se descubrieron 1207 fosas con 1452 cuerpos de los cuales se han identificado 169. Para el 29 de febrero de 2012 se identificaron 3649 fosas, se encontraron 4503 cuerpos y se identificaron 1651. Por tanto, las labores de búsqueda e identificación continúan¹³². Se han cometido muchos errores, entre ellos no realizar una base de datos con las personas desaparecidas. También muchas de las exhumaciones se hicieron con métodos que no permiten obtener todas las pruebas posibles.

Las asociaciones de víctimas y derechos humanos exigieron la verdad, la justicia y la reparación de este proceso pero también la garantía de no repetición al igual que promulga la CNRR. De acuerdo con el mandato legal, la Comisión tuvo dos tareas relacionadas íntimamente con esta garantía: en primer término, la evaluación de las políticas de desmovilización de los grupos armados ilegales y, en segundo término, la evaluación en torno a las políticas de reinserción de los

¹³⁰ Idem.

¹³¹ Los once imputados son: Edwar Cobos Téllez alias Diego vecino, Uber Enrique Banquez Martínez alias Juancho dique, y Jorge Ivan Laverde Zapata alias el iguano, Comandantes del Bloque Montes de María; José Rubén Peña Tobón, alias lucho, cabecilla de la compañía de centauros del Bloque Vencedores del Arauca; Wilmer Morelo Otero Castro, alias el Boqui, y José Manuel Hernández Calderas, alias Platino, patrulleros del Bloque Héroes Vencedores del Arauca; Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, Comandante Bloque Elmer Cárdenas; Edgar Ignacio Fierro Florez, alias Don Antonio, Comandante Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte; Andrés Mauricio Torres León, patrullero rural y urbano del Frente Mártires del Cesar y Amaris Machado Ortiz, instructor militar y urbano de Autodefensas Unidad de Santander y Sur del Cesar (AUSAC)

¹³² Disponible en Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz <http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm>

excombatientes de estos grupos. Durante este segundo mandato, se hizo más presente la expansión de una nueva generación de paramilitares.

Durante el proceso de desmovilización una nueva generación de paramilitares apareció en ocho departamentos de Colombia. Esta nueva generación de paramilitares ha sido etiquetado por el gobierno como “bandas emergentes” porque según el discurso oficial el paramilitarismo terminó cuando se desmovilizó el último grupo el 31 de diciembre de 2005. Posteriormente cualquier grupo que surgiera se les llamó “bandas emergentes”. La mayoría son grupos pertenecientes a frentes de paramilitares ya desmovilizados. Entre ellos surgieron los grupos de Manos Negras y Organización Nueva Generación en Nariño, conformados por exmiembros del Bloque Calima y de Libertadores. En Córdoba y Sucre ya estaban operando el Frente Social por la Paz y los Fantasmas. En el Valle, igualmente había otros grupos que se correspondían con las antiguas estructuras narcotraficantes de los Machos y los Rastrojos, ahora denominados Autodefensas Campesinas del Valle y Rondas Campesinas del Valle. Los Héroes del Chocó se transformaron en Autodefensas Campesinas Unidas del Norte. En el norte de Santander los nuevos grupos de Las Águilas Rojas y Águilas Negras eran excombatientes del Bloque Central Bolívar¹³³. Esta nueva generación paramilitar supone que en primer lugar existe polarización entre aquellos grupos que supuestamente se han desmovilizado o quieren llegar a desmovilizarse y aquellos que reconvertidos en otros grupos, desean seguir su camino por la vía armada, por la violencia. La detención del jefe de las finanzas de las AUC da muestra de ello, pues se encontraba reorganizando grupos paramilitares en Boyacá y Casanare¹³⁴. La Misión al Apoyo del Proceso de Paz de Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) realizó en marzo de 2006 el sexto informe sobre la verificación del proceso de desmovilización paramilitar. En él detalló la problemática acerca de tres factores. Por una parte, el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen el control sobre comunidades específicas y economías ilícitas. Por otra parte, la problemática de los reductos que no se han desmovilizado. Y en tercer lugar la aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos armados.

Ante esta problemática, la CNRR (2007) realizó un informe sobre esta problemática y acuñó tres definiciones para este tipo de grupos armados: disidentes, rearmados y emergentes. Pero en el

¹³³ “La nueva generación de paramilitares ya se deja sentir al menos en ocho departamentos del país” *El Tiempo*, 15 de octubre de 2005.

¹³⁴ “Capturan a presunto paramilitar que estaría reorganizando estos grupos en el oriente colombiano” *El Tiempo*, 18 de noviembre de 2005.

Segundo Informe (2010) de esta Institución acuñó una definición más, grupos mixtos, según se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 5. Tipología de los nuevos grupos armados surgidos tras la desmovilización paramilitar

Disidentes	Rearmados	Emergentes	Mixtos
<p>1. Grupos que pertenecieron a las AUC y que no se desmovilizaron por no entrar en el proceso de negociación</p> <p>2. Grupos que entraron al proceso y finalmente no se desmovilizaron</p> <p>3. Reductos de bloques desmovilizados que no se desmovilizaron</p>	<p>1. Personas y grupos de personas desmovilizadas que reincidieron en actividades relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y delincuencia común.</p> <p>Muchos desmovilizados se incorporaron a grupos criminales ya existentes y en ocasiones conformaron otros.</p>	<p>1. Grupos que existían y su visibilidad era mínima por la existencia de las AUC</p> <p>2. Grupos que se han constituido por diversas razones luego de la desmovilización de las AUC.</p> <p>Estos aprovecharon los vacíos de control territorial dejados por las AUC luego de su desmovilización.</p>	<p>1. Grupos que surgieron con posterioridad al proceso de DDR, cuyos integrantes pueden ser desmovilizados y nuevos miembros. Combinan rearmados y emergentes.</p> <p>2. Se caracterizan por su interés en controlar economías ilícitas: narcotráfico, contrabando, prostitución, etc.</p>

Fuente: Grupo de Trabajo de DDR-CNRR, 2010

Pero ya fue en mayo de 2006 cuando tuvo una reunión la Junta Nacional de Inteligencia en el Ministerio de Defensa que dio a conocer un informe sobre estas bandas denominado Informe Bacrim (Bandas Criminales Emergentes) donde daban cuenta de un nuevo grupo de paramilitares que asciende a 22 grupos de aproximadamente 2500 hombres¹³⁵ (Figura 22). Por tanto, se

¹³⁵ Ante esta situación el Gobierno creó un mecanismo para verificar estos grupos bajo la coordinación de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional. Allí confluyó además de la policía, las diferentes ramas de inteligencia de las fuerzas militares, la fiscalía y el DAS. Este comité de cooperación interinstitucional se ha denominado Bacrim (Bandas Criminales) y allí se centraliza la información suministrada por esas agencias estatales, y el propósito es unificar información de inteligencia en relación con los grupos criminales y los de control y coerción social y política regional. El comité tiene dos niveles de operación, uno nacional y el otro regional, y el objetivo de esa cooperación es la de diseñar y desplegar operativos con mayor coordinación y eficacia. En análisis posterior, el grupo de DDR de la CNRR de junto con el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional de Colombia ODDR coincidieron en buscar una categoría más amplia para estos grupos en los cuales participan los desmovilizados, por ello utilizan las denominaciones de Grupos Armados Ilegales (GAI) ó OAI, Organizaciones Armadas Ilegales. Según la CNRR el término *banda criminal* utilizado por instancias gubernamentales no tiene asidero en los instrumentos legales existentes para la atención de las víctimas del conflicto armado. (CNRR, 2007; CNRR 2010).

reorganizaron y siguieron con sus actividades ilícitas y violentas, controlado el negocio del narcotráfico y de las rutas y las rutas de contrabando de las zonas fronterizas.

Figura 22. Informe Bandas Criminales Emergentes, BACRIM				
DEPARTAMENTO	GRUPOS	COMANDANTE	NUMERO	MUNICIPIOS
Córdoba	Los Traquetos	Alias Jerry	100	Montería, Tierralta, Monte Líbano, Pto. Libertador
Nariño	Organiz. Nueva Generación	Jocoy 20 y alias Pedro	100	Leyva, Policarpo, Taminango
Antioquia	Aguilas Negras y Autodefensas Universidad de Antioquia	Jesús Orlando Galvis	100	Medellín, Amagá, Angelópolis, Venecia
Valle	Machos y Rastrojos	Don Diego y Varela alias Doble Cero	300	Buenaventura, El Dovio, El Aguila, Anserma Nuevo
Choco	Autodefensas Campesinas Unidas del Norte del Valle, Acun	Alias Doble Cero	300	San José del Palmar, Itsmina, Medio San Juan, Medio y Bajo Baudó, Condoto, Tadó, Unión Panamericana, Nóvita
Casanare	Centauros	Orlando Mesa alias Diego	40	Paz de Ariporo, Hato Corozal, Nunchía, San Luis de Palenque, Orocué
	Disidente del Bloque Vencedores de Arauca	Acevedo	70	Yopal, Aguazul, Tauramena
Nariño	Los Rastrojos	Walter Varela, Jabón	50	Tumaco, Barbacoas
Risaralda	Grupo Cordillera	Carlos Alberto Herrera alias Conejo	15	Pereira y Dosquebradas
N. de S.	Aguilas	Alias Jairo y alias Sinaí	150	Cúcuta, Pto. Santander, El Zulia, El Tarra, Ocaña, Tibú
Vichada		Jonathan Steven Tavera Jaramillo	200	Cumaribo, Santa Rosalía, La Primavera
Atlántico	Sicarios de Barranquilla	Carlos Arturo Posada Flórez	15	
Cauca	Organización Nueva Generación, Bloque Central Cauca	Alias Cinco Cinco	150	Balboa, El Bordo, Santander de Quilichao, Pto. Tejada, Popayán, Florencia
Putumayo	Macheteros y Rastrojos	Alias El Ruso	320	Puerto Asís, La Hormiga
Cesar	Banda Criminal del Cesar	Alias Chorizo	70	Valledupar, San Martín
Magdalena	Banda Criminal Emergente	Alias Comandante Molla	18	El Difícil
Meta	Por Colombia Presente	Alias Camilo		Granada
Tolima	Los Hombres de Azul		80	Purificación
Guainía	Coordinadora Colombiana de Autodefensas del Guainía			Puerto Inírida
Bogotá	Bloque Central Santander y Bloque Guaviare		50	Altos de Cazucá
Arauca	Las Águilas	Alias El Sicario		Tame

Fuente: Junta Nacional de Inteligencia. Ministerio de Defensa, 30 de mayo de 2006, citado en Revista Cambio, 12 de junio de 2006.

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en noviembre de 2007, existían 67 grupos paramilitares con 6.377 miembros activos. Otras organizaciones, como la Corporación Nuevo Arco Iris, afirmaron que después de la “desmovilización” había, por lo menos, 10.000 paramilitares activos (Comisión Colombiana de Juristas, 2008b). Las cifras de grupos armados emergentes cambiaban en función de los datos de cada institución sobre todo para el año 2008. En este año la Policía Nacional asumió que había 2000 hombres armados igual que la Fundación Seguridad y Democracia, que tomó sus números de la Policía. La Corporación Nuevo Arco Iris denunció la existencia de 10.500, Indepaz 7.500 hombres armados. Los informes del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, el CINEP y el duodécimo informe de la MAPP-OEA cuantificaron los municipios afectados por estos grupos armados pero no puntualizaron de cuántos paramilitares estaban compuestos. A continuación se puede observar en la tabla 6 una comparación de los diferentes informes sobre nuevos grupos paramilitares del 2008 y 2009.

Tabla 6. Comparación de informes sobre nuevos grupos paramilitares							
	Seguridad y Democracia (Coyuntura de Seguridad No. 23, Octubre-Diciembre 2008)	Nuevo Arco Iris (Revista Arcanos. Diciembre de 2008)	Policía Nacional* * (Informe a noviembre 18 de 2008)	MAPP / OEA - Decimosegundo informe (Febrero 27 de 2009)	Observatorio DD.HH. Vicepresidencia de la República (Seguimiento de enero 1 a diciembre 2 de 2008)	Cinep (Noche y Niebla. Enero a junio de 2008)	Indepaz (Revista Punto de Encuentro No. 52. Diciembre de 2008)
Grupos		21	16		27		53
Municipios	152	246	94	153	148	73	266
Departamentos				28	26	24	31
Combatientes	2000*	10.500	1.998				7.500

Fuente: Corporación Arco Iris, 2009

Según un comunicado del Ministerio de Defensa (2007) la lucha de la Fuerza Pública ante estos grupos fue muy significativa:

“Durante el año 2006 y el 2007, la Fuerza Pública ha desarrollado un total de 69 operaciones de alto impacto, logrando la captura de 1.675 de sus integrantes, la baja en confrontación con las diferentes unidades de 409 integrantes, la incautación de 408 armas de fuego y la inmovilización de 106 vehículos (...) Del total de capturas, se deben destacar 6 cabecillas de

primera línea de las bandas que delinquen en departamentos de la Costa Atlántica, Antioquia, Córdoba, Meta, Eje Cafetero, Magdalena y el Urabá Antioqueño (...) Ese esfuerzo conjunto de las autoridades del Estado, han permitido la desarticulación de 10 bandas criminales (...)”¹³⁶

Además de estos éxitos, la Policía Nacional está fortaleciendo sistemáticamente su despliegue y cobertura territorial con la instalación de 200 estaciones más de Policía, durante los próximos 4 años en áreas estratégicas del territorio nacional por la influencia de los grupos al margen de la ley. Por su parte, el Ejército Nacional consolidó en primera instancia un “Cuerpo Elite de Búsqueda” en el departamento de Norte de Santander, con participación de 120 efectivos y apoyo de otras fuerzas e instituciones. Asimismo, se activó en esta región del país la Brigada No. 30 y la Brigada Móvil No. 15, con el propósito fundamental de garantizar la seguridad de la población e impedir la expansión de los grupos armados ilegales, además de las operaciones ofensivas del Ejército en determinados departamentos como Antioquia (Urabá – nordeste), Córdoba, Cesar, Magdalena, Sucre, Nariño y Caquetá, entre otras (Ministerio de Defensa, 2007).

A pesar del fortalecimiento de la Fuerza Pública, las Bacrim han seguido creciendo hasta el año 2011. Desde el año 2008 hasta el año 2011 han aumentado su presencia en los municipios colombiano hasta alcanzar 406 municipios de 31 departamentos en 2011. El único municipio que no tiene presencia de estos grupos es en el Amazonas. La siguiente tabla muestra la evolución de la presencia de estos grupos según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Según esta Institución, se tiene una reincidencia de actividades de estos grupos en los últimos 4 años en 271 municipios. Los grupos que han logrado consolidarse a nivel nacional son los Rastrojos, Urabeños, Paisas, Águilas negras y Erpac.

Tabla 7. Departamentos y municipios con presencia de las Bacrim

	2008	2009	2010	2011
Departamentos	31	30	32	31
Municipios	259	278	360	406

Fuente: Indepaz, 2012

Los departamentos con mayor presencia de las bacrim son los siguientes:

¹³⁶ Disponible en la Web de la Presidencia de la República de Colombia <http://web.presidencia.gov.co/sne/2007/julio/16/09162007.htm>

Tabla 8. Comparativo de departamentos con mayor afectación de grupos paramilitares 2008-2011

Departamento	Total de municipios	Número de municipios con presencia paramilitar				Afectación (%)			
		2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Cesar	25	15	14	21	23	60	56	76	85
Córdoba	28	15	21	23	24	54	75	82	92
Bolívar	45	11	7	23	34	24	16	51	63
Meta	29	12	13	16	20	41	45	55	65
Sucre	26	9	7	16	17	34	27	61	68
Chocó	30	9	7	16	19	43	47	70	75
Valle	42	16	20	20	26	38	48	50	56
Antioquia	125	48	40	64	71	38	32	51	61
Atlántico	23	3	2	8	12	13	9	35	50
Magdalena	30	8	7	13	15	27	23	43	50
Norte de Santander	41	9	6	16	19	22	15	40	46
Nariño	64	13	18	24	28	10	28	37	43
Cauca	41	10	17	17	14	24	41	41	35

Fuente: Indepaz, 2012

Los departamentos con mayor número de presencia de estos grupos son Antioquia, Bolívar, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Valle. Según cifras de la Policía Nacional las Bacrim ha aumentado desde 2008 según la tabla 9. En 2011 estos grupos tienen más de cuatro mil integrantes.

Tabla 9. Presencia de Bacrim 2008-2011

	2008	2009*	2010*	2011
Número de grupos	16 estructuras	6 Bacrim	6 Bacrim	7 Bacrim
Número de municipios	94	159	159	151
Número de departamentos	17	18	18	17
Número de integrantes	1988 a 2000	3749	3749	4154

*Las cifras de 2009 y 2010 son iguales, según la Policía.

Fuente: Policía nacional, Dirección de carabineros y seguridad rural, 2012

Según los grupos registrados por la MAPP-OEA y la Policía Nacional de la ubicación de los grupos paramilitares, los desmovilizados de estos grupos y los nuevos grupos emergentes coinciden en el territorio colombiano (Anexo 4, página 402).

Desde 2006 y hasta 2011, la Policía Nacional ha capturado a 13.113 miembros de las Bacrim. La mayoría de estos grupos pertenecen a miembros disidentes del proceso de desmovilización, desmovilizados rearmados e integrantes de redes mafiosas. El gobierno colombiano y las fuerzas militares comprobaron que la mayoría de los exjefes paramilitares tenían nexos y formas de control sobre estos grupos, negocios ilegales y hechos delictivos. Según el II Informe de DDR de la CNRR (2010) se logró establecer que el 17% de los miembros de estos grupos armados son exmiembros de las AUC. Este 17% está compuesto de jefes paramilitares nacionales, regionales y de frentes, de instructores y de personal con experiencia militar, manejo del terreno, de los negocios ilegales y legales y de los contactos con aliados. A pesar de que el porcentaje de 17% es mínimo, sin embargo, desde el punto de vista militar, el soporte esencial de una estructura armada lo constituye el cuerpo de mandos por su capacitación, experiencia y especialización. El núcleo de combatientes ocupa un lugar secundario pues puede reemplazarse sobre todo si cuentan con recursos materiales para hacerlo.

Estos grupos armados ilegales se financian a partir del control de cultivos, procesamiento, tráfico de cocaína y de otras economías ilegales como minería y refinerías ilegales, explotación ilegal maderera y tráfico de gasolina. Además establecen cobros ilegales por protección y manejan empresas legales e ilegales de seguridad. En su actuar chocan o se alían con grupos guerrilleros o con otros grupos ilegales armados, según los intereses en juego como el control de alguna economía ilegal como el narcotráfico o la minería. Esto hace que se acentúe su carácter delincuencial. Forman grupos más reducidos que los grupos paramilitares y con formas de actuación más irregulares. Se muestran débiles en sus apoyos sociales, políticos, institucionales y de Fuerzas Militares. Al igual que los grupos paramilitares, continúan implementando acciones contra la sociedad civil como amenazas, homicidios y desplazamiento de la población.

A pesar de que estos grupos son diferentes de los grupos paramilitares según las autoridades, sin embargo durante el proceso de desmovilización las masacres y asesinatos selectivos no han dejado de cesar. Si es cierto que entre 2006 y 2007 las masacres disminuyeron pero no porque hubieran dejado de actuar sino porque según relata el paramilitar José Ever Veloz, alias HH, dejaron de utilizar las masacres porque no eran rentables para ellos en términos políticos y por eso optaron por los asesinatos selectivos. Sin embargo, durante este mismo periodo aumentaron las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública y la utilización de la amenaza por parte de los paramilitares contra la población civil para mantener el poder que tenían en las

comunidades donde habían utilizado el terror. Desde 2002 hasta finales del 2007, la Comisión Colombiana de Juristas contabilizó 4019 personas víctimas de los grupos paramilitares. En ese mismo espacio temporal las FARC y el ELN que no se desmovilizaron fueron responsables de 1805 asesinatos y desapariciones de civiles. Es decir, los paramilitares en un periodo de cese de fuego y desmovilización mataron e hicieron desaparecer al doble de civiles que las guerrillas. En 2010 hubo 38 masacres y 113 víctimas y en 2009, 27 masacres con 139 víctimas según Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (2010). La oficina de la ONU en Colombia observó con preocupación un aumento de la violencia generada por estos grupos armados ilegales en 2010. El Ministerio de Defensa autorizó que las Fuerzas Militares apoyasen a la Policía Nacional en el combate contra seis de dichos grupos¹³⁷. Miembros de estos grupos cometieron homicidios, amenazas, extorsiones y actos de violencia sexual, y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos. Particularmente preocupante es el incremento de las masacres (40%) en el contexto de disputas violentas entre estos grupos y entre facciones de un mismo grupo. En ocasiones estos grupos celebran acuerdos entre sí o con frentes de las FARC-EP o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para facilitar negocios ilícitos, especialmente narcotráfico. También sostienen violentas disputas con otros grupos rivales, o incluso entre miembros de un mismo grupo, generando más violencia contra la población. La Oficina en Colombia observó casos de colusión, de tolerancia y de aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública con estos grupos, motivados principalmente por corrupción (Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2008, 2009 y 2010).

En Córdoba, se registraron 10 masacres en ocho meses, de las cuales cinco ocurrieron en octubre y noviembre. Por otra parte, entre enero y junio de 2008 han aumentado los asesinatos sobre todo en Medellín y Córdoba. En Medellín se calcula que han sido asesinadas 530 personas y en Córdoba, 283.

Esta situación hace pensar que el cese de hostilidades no se ha producido tal y como este grupo y el gobierno adelantó. Por otra parte, significa que no son meras bandas criminales o emergentes las que están desarrollando estas actividades sino que son grupos fuertemente armados, con organización militar, con capacidad de control político y de ejercer acciones contra otros grupos.

¹³⁷ Esos grupos eran Los Paisas, Los Urabeños, Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC), Renacer, Los Rastrojos y Los Machos.

Tales grupos tienen una verdadera estructura y jerarquía militar, así como la capacidad para ejercer control territorial. Además de ser capaces de planear, ejecutar y mantener operaciones de tipo militar, actúan con una orientación ideológica y política, similar, si no igual, a la de las antiguas AUC utilizando sus mismas estructuras políticas y económicas de las AUC.

Esta situación de repetición de la acción armada es bien sabida por Darío Villamizar, coordinador del Programa de Atención a Reinsertados en el distrito de Bogotá. Pues para él, “en general la desmovilización en Colombia tiene dos talones de Aquiles uno es que no se les presenta a los desmovilizados un mínimo horizonte productivo claro y el segundo es que es un proceso de postconflicto en medio del conflicto entonces eso tienen muchísimos riesgos, el primer riesgo es que quien tenga armas, guerrilla o grupos emergentes, les interesa esta mano de obra desocupada, ese es un gran riesgo. Y el segundo riesgo es que la sociedad en general tiene dudas, temores, entonces no se abre plenamente a un proceso de cambios, de convivencias por los temores que tienen”¹³⁸. Por tanto, entran en riesgo de volver a movilizarse e incorporarse a un grupo armado. Porque a pesar de que hay programas de reincorporación al mundo laboral como Misión Bogotá de la Secretaría de Movilidad o Empresarios por la indiferencia, con recursos de la Alcaldía de Bogotá y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), sólo acogen a unos pocos. Para 2007 sólo acogieron a siete desmovilizados. Una vez que finalizaban este proceso, el Gobierno les daba ocho millones de pesos, para montar algún negocio, o les daban microcréditos. Pero, según Villamizar, ha fracasado en un 90%. En este sentido, habría que realizar un seguimiento de la efectividad de estas propuestas, pues esta línea queda lejos del núcleo central de esta investigación.

En resumen, durante el segundo mandato de Uribe se pudo observar más claramente las repercusiones del proceso de desmovilización paramilitar. Por una parte, este proceso llevó a destapar las relaciones de los grupos políticos con los paramilitares y las FARC. Pero no sólo tuvieron relaciones con políticos, sino también con otros sectores de la sociedad. En este debate se vio implicada la figura de Uribe por sus relaciones con los paramilitares. Las temidas bandas criminales emergentes ó grupos armados ilegales, aumentaron durante este segundo gobierno a pesar de la discrepancia de cifras entre diferentes instituciones. Por otra parte, se observó el desarrollo de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Esta ley encontró serias dificultades para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Estos conceptos claves fueron violados de una u otra manera, surgiendo dificultades para que los paramilitares

¹³⁸ Entrevista a Darío Villamizar, 4 de julio de 2007, Bogotá.

confesaran la verdad de sus crímenes, las víctimas están indefensas ante el proceso de enjuiciamiento de estos actores. Por su parte, la justicia anduvo en la tarea de encontrar un resquicio legislativo para encauzar el procedimiento judicial de estos grupos. También ha habido dificultades para reparar a las víctimas por la escasez de bienes entregados por los paramilitares. En otro orden de ideas se mantuvo la seguridad interna del país a través del aumento de la capacidad de la Fuerza Pública y el aumento de los enfrentamientos, siendo una de sus consecuencias las muertes de varios dirigentes máximos de las FARC. Sin embargo, también han aumentado las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública y los asesinatos selectivos realizados después de la desmovilización paramilitar. Las consecuencias de la desmovilización paramilitar han destapado problemas de gran envergadura sin resolver hasta el momento y que se resumen en intentar dar una solución judicial a los desmovilizados, reparar a las víctimas, establecer más confesiones de verdad, acabar con las nuevas bandas emergentes e investigar la relación de los grupos paramilitares con los diferentes sectores sociales colombianos.

En esta tercera fase de consolidación del fenómeno paramilitar, el tratamiento del gobierno central hacia el paramilitarismo asumió una posición más clara respecto a anteriores administraciones y elaboró una estrategia política de enfrentamiento mediante el aumento de los combates de la Fuerza Pública, la apertura de un proceso de negociación con los grupos paramilitares y un reforzamiento de la legitimidad militar respecto a sus antiguos nexos con el paramilitarismo. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿hasta qué punto estas políticas tienen la capacidad de afrontar y enfrentar la consolidación del poder paramilitar en el territorio colombiano?. A pesar de las medidas tomadas desde su consolidación como AUC, los grupos paramilitares han tenido un proceso sostenido de crecimiento durante los últimos años, de hecho es el único grupo armado que ha estado creciendo en la administración uribista. El poder de estos grupos condiciona la política regional y local, acapara las administraciones locales y están infiltrándose en todos los niveles del Estado colombiano. La autonomía de los grupos paramilitares, sus lazos con el narcotráfico, el respaldo social y de las elites regionales y nacionales apunta a un fenómeno de gran poder militar, político, económico y social. Por tanto, esta fase refleja bastante bien el éxito de movilización y consolidación del fenómeno paramilitar a partir de unas oportunidades tanto coyunturales como estructurales que permitan el éxito de la acción colectiva de estos grupos dentro de un régimen político que no garantiza la seguridad a sus ciudadanos y que carece de políticas y estrategias de seguridad.

4.3 ¿Qué recursos utilizaron los paramilitares para movilizarse?

Las oportunidades políticas constituyen una parte fundamental para aproximarnos a la evolución de un grupo o movimiento. Estas oportunidades nos enseñaron cuáles fueron los momentos políticos imprescindibles para aprovechar una oportunidad y continuar consolidando el movimiento en expansión. Este análisis se complementa con el estudio de los recursos que tiene un movimiento para movilizarse. Asimismo los recursos son una parte esencial del estudio de los movimientos. A través de la percepción de los recursos y su gestión también se puede observar la durabilidad de un grupo, la organización de los recursos, la división de los recursos, etc. Es decir, a través de los recursos se observa la fuente necesaria de éstos que un grupo necesita para movilizarse y consolidarse. En el caso colombiano, se analizan los recursos materiales, humanos, organizativos y tácticos que manejan los paramilitares para alcanzar sus objetivos.

4.3.1. Fuentes de financiación e inversión paramilitar

En esta sección se examinan los recursos materiales que los grupos paramilitares utilizan para llevar a cabo la movilización. Por ello, primero se profundiza en las fuentes de financiación paramilitar y, en segundo lugar, se investiga las inversiones de los paramilitares en el territorio colombiano. Las finanzas obtenidas de las diferentes fuentes determinan por una parte el sostenimiento de su estrategia militar pero por otra invierten esos recursos en actividades económicas, políticas y sociales que les aportan legitimidad.

Medina Gallego (2005) realizó un análisis exhaustivo de las diferentes formas de financiación de los grupos paramilitares, distinguiendo entre fuentes tradicionales, institucionales, gremiales y empresariales, proscritas y productivas.

Las *fuentes tradicionales de financiación* comprenden aquellas contribuciones voluntarias y forzadas de la población así como de los sectores económicos y sociales vinculados al desarrollo de los grupos paramilitares. Entre ellos contribuyeron ganaderos, agricultores, comerciantes y empresarios que asistieron económicamente con pequeñas aportaciones que con el paso de tiempo se hicieron más pesadas y obligatorias. Medina (2005) comenta que “muchos propietarios, ganaderos y comerciantes del Magdalena Medio, Córdoba y Urabá y el suroccidente terminaron expropiados y excluidos por el fenómeno”. Estos afectados se vieron en la obligación de pagar un “impuesto de seguridad y protección” que protegiera sus propiedades y actividades

económicas. Así fueron comprometiendo las economías de las poblaciones donde se asentaban (Medina, 2005: 125).

La expansión del paramilitarismo como una estrategia de empoderamiento regional y nacional necesitó de las alianzas al interior del poder local para extender su influencia en el nivel regional. Fue a partir de la elección de alcaldes de 1988 cuando comenzaron a introducir a gente afín al paramilitarismo en las alcaldías, concejos etc. Las alcaldías se convirtieron en espacios de poder paramilitar, de este modo, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados dirigieron su gestión administrativa y la ejecución de sus presupuestos en consonancia con el fortalecimiento paramilitar. De esta manera de operar lograron sus *fuentes de financiación institucional* (Medina, 2005). Este punto se profundiza más adelante.

Un tercer tipo de financiación fue aquella ejecutada hacia *empresarios y gremios*. De entre las organizaciones ganaderas y agrícolas, la Federación Colombiana de Ganaderos –FEDEGAN- y la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC- proporcionaron financiación a los grupos paramilitares. Asimismo, cafeteros, arroceros, bananeros, palmeros y floricultores fueron sometidos a la extorsión paramilitar a pesar de que alguno de ellos como FEDEGAN estuviera convencidos de los beneficios del fenómeno paramilitar. Según el diario El Tiempo en octubre del 2001 en el Valle del Cauca se incautó información que corrobora las “vacunas” o tributos que los empresarios debían pagar a los paramilitares. Se encontraron documentos pertenecientes a firmas de finca raíz, de seguros, de químicos, de sistemas, hoteles, estaciones de gasolina, etc., que han estado financiando a estos grupos en el ámbito regional (Medina, 2005).

Medina (2005) también señala que las multinacionales existentes en el territorio colombiano son otra fuente de financiación, sobre todo aquellas que pertenecen al sector energético, la producción minera y agropecuaria. La ubicación de estas empresas se concentró en zonas donde convivieron los paramilitares y la guerrilla. El impuesto o vacuna se establecía desde un porcentaje de lo producido a una cuota fija. El desplazamiento de los paramilitares a finales de los años ochenta, coincidió con los principales yacimientos y recursos petroleros de Colombia. Así, estos grupos se ubicaron en los grandes megaproyectos de Antioquia, Magdalena Medio, nororiente y suroccidente, Chocó, Darién, Boyacá, Casanare, Arauca, Meta, Norte de Santander y Bolívar.

Sin embargo, a lo largo de la investigación sobre parapolítica, se ha ido descubriendo la colaboración de hasta cuarenta empresas con los grupos paramilitares. En la siguiente tabla se observa la relación de empresas con la situación en la que se encuentran (Tabla 10). De entre ellas cabe destacar la empresa multinacional estadounidense Chiquita Brands que pagó 1.700.000 dólares a los paramilitares además de entregarles 3000 fusiles AK-47 y cartuchos. Chiquita Brands tiene un proceso abierto en la Fiscalía por ingreso de armas ilegales a Colombia, mientras que en Estados Unidos enfrenta varias demandas de víctimas del paramilitarismo. La empresa deberá pagar los 25 millones de dólares en cinco cuotas anuales¹³⁹. En marzo de 2012, un fiscal de Medellín decidió cerrar la investigación contra catorce directivos y otras dos bananeras, Banacol y Banadex, pues concluyó que las empresas implicadas hicieron los pagos de manera voluntaria sino coaccionados. Pero nuevamente en diciembre de 2012 se ha reabierto para establecer las responsabilidades de los directivos de ésta empresa pero también para extender esta investigación a otras empresas bananeras y su posible relación con el financiamiento de grupos paramilitares¹⁴⁰.

Tabla 10. Empresas que han colaborado con los grupos paramilitares

Nombre	Descripción	Situación
Administradora Ganadera El 45 Ltda. (Antioquia)	Se constituyó en Medellín mediante escritura pública del 28 de enero de 2003. Empresa ganadera fundada por Rosa Edelmira Funge, primera esposa de Macaco	Un informe elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) - dependencia de Ministerio de Hacienda que tiene como objetivo prevenir y detectar operaciones de lavado de activos en diferentes sectores de la economía
Asis Ltda. (Magdalena)	Cooperativa de seguridad. Comenzó a prestar los servicios de seguridad a Colechera escoltando los camiones y vigilando la empresa.	Mencionada en el computador del jefe paramilitar Jorge 40
Banacol (Antioquia)	Empresa bananera que adquirió los activos de Chiquita Brands cuando esta salió del país en 2004	Sobre ella también pesan acusaciones que la comprometen con pagos por servicios de seguridad del jefe paramilitar conocido como El Viejo -hoy preso- que controlaba la zona de Turbo.
Bavaria (Bogotá)	Dedicada a la comercialización de cervezas y bebidas no alcoholizadas	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Bellanita de Transportes (Antioquia)	Empresa de transportes. Un emporio con activos por 2.839 millones de pesos y que, junto con Taxis y	El Nombre de esta empresa aparece en investigaciones que la Corte Suprema de Justicia lleva a cabo a los senadores Oscar

¹³⁹ “Censura el gobierno de Álvaro Uribe la sanción a Chiquita Brands en Estados Unidos, Info Oriente Antioquia. Disponible en <http://www.inforiente.info/ediciones/2007/septiembre/2007-09-24/2180-censura-el-gobierno-de-alvaro-uribe-la-sancion-a-chiquita-brands-en-estados-unidos.html>

¹⁴⁰ “Chiquita Brands, de nuevo bajo la lupa de la Fiscalía”, *Revista Semana*, 13 de diciembre de 2013.

	Colectivos SCA, emplea a más de mil personas.	Suarez Mira y Mauricio Parody
Bellmonte (Antioquia)	Empresa bananera. Comercializadora de bananos en el Urabá antioqueño	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Boll (Antioquia)	Comercializadora de bananos en el Urabá antioqueño	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Cafeteros de la Sierra Nevada (Magdalena)	Gremio de cafeteros con actividades en la sierra nevada de Santa Marta quienes Pagaban un impuesto de 30 pesos por saco.	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Casa del Ganadero S.A., (Antioquia)		La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) -dependencia de Ministerio de Hacienda que tiene como objetivo prevenir y detectar operaciones de lavado de activos en diferentes sectores de la economía
Colombia sin hambre, ONG (Antioquia)	ONG. El objeto de Colombia Sin Hambre es ayudar a la población más vulnerable y que una de las funciones es pedir tierras a los ricos de algunas regiones para entregárselas a los más pobres y desarrollar proyectos productivos para desempleados.	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Comcel (Magdalena)	Empresa de telefonía móvil. Comcel pagaba 1 millón y medio de pesos mensuales a ese grupo paramilitar a cambio de la seguridad que le brindaba a las torres de la compañía instaladas en la Sierra Nevada de Santa Marta	Mencionado por Nodier Giraldo, sobrino del jefe paramilitar Hernán Giraldo
Coolechera (Magdalena)	Cooperativa de productores de leche más grande de la costa. Actualmente tiene 850 cooperados, más de 1.200 ganaderos no cooperados, 500 empleados, y en que factura al año cerca de 150.000 millones de pesos.	Mencionada en el computador del jefe paramilitar Jorge 40
Copetran (Santander)	Cooperativa de transportes. Fundada en la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander con destinos a varias ciudades del país	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre

Chiquitta Brands (Antioquia)	Empresa multinacional bananera.	Ha reconocido su colaboración en el financiamiento de grupos paramilitares colombianos. Entre 1997 y 2004, la empresa habría hecho más de 100 pagos por un total cercano a 1.700.000 dólares. La compañía reconoció los pagos a los paramilitares y aceptó la multa de 25 millones de dólares, por violar la ley antiterrorista norteamericana. Colaboró en el ingreso al país de más de 3.000 fusiles AK-47 y millones de cartuchos, que posteriormente fueron empleados en varias masacres en el noreste colombiano
Dole (Antioquia)	Empresa multinacional bananera que tiene cerca del 25% del comercio internacional del banano y cuyas ventas superan los 1.300 millones de dólares al año	La multinacional fue denunciada hace varios años por una coalición de 70 sindicatos y organizaciones de defensa de derechos humanos por abusos contra los trabajadores de América Latina. La segunda compañía importadora de banano de los Estados Unidos, pagó regularmente durante décadas a los grupos de autodefensa por supuesta seguridad. Los demandantes son parientes de 51 personas asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ecopetrol (Magdalena)	Empresa estatal de petróleo con actividades en distintas zonas del país. Esta empresa llegó a pagar a los excomandantes conocidos con los alias de Botalón y Ramón Isaza, alrededor de 100 millones de pesos mensuales de hace aproximadamente 10 años, con el propósito de tener seguridad en sus oleoductos.	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Expreso Brasilia (Atlántico)	Empresa de transporte terrestre son más de 40 años. Empresa fundada en la ciudad de Barranquilla desde donde se proyectó con destinos varias parte del país.	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Gino Pascalli (Bogotá)	Tienda exclusiva de ropa. Gino Pascalli es una marca de la firma pereirana Crisalltex.	La unidad de lavado de activos ocupó los 58 almacenes en todo el país, los cuales serán embargados y secuestrados, además de puestos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes

Hotel Mendihuaca Reasort (Magdalena)	Empresa del sector turístico. Pagaba 1 millón y medio de pesos mensuales a ese grupo paramilitar a cambio de la seguridad	Mencionado por Nodier Giraldo, sobrino del jefe paramilitar Hernán Giraldo
Inversiones El Momento S. A (Antioquia)	Firma hotelera constituida y administrada por las mismas personas que aparecen en sociedad con el jefe para.	un informe elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) - dependencia de Ministerio de Hacienda que tiene como objetivo prevenir y detectar operaciones de lavado de activos en diferentes sectores de la economía
Lácteos del Campo (Magdalena)	Empresa distribuidora de leche derivada de la firma Coolechera. Esta sociedad es propietaria de la marca Hatoblanco, y uno de sus socios principales era José María Barrera, conocido en las AUC como el comandante 'Chepe' Barrera	Mencionada en el computador de Jorge 40
Made in Italy (Bogotá)	Tienda exclusiva de ropa. Pertenece al grupo de tiendas de ropa italiana de George Sale	En desarrollo de la operación República XXV, las autoridades capturaron a 37 personas en Colombia y el exterior, ocuparon 58 establecimientos comerciales e intervinieron 48 cuentas corrientes en todo el país.
Metroseguridad (Norte de Santander)	Proyecto que tenía como fin la celaduría.	Mencionado por Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'Pedro Frontera' o 'El Iguano'
MT Base (Bogotá)	Empresa dedicada a la captura y sistematización de datos. Contratista del Das	Mencionada por Rafael García, responsable del área de informática del DAS
Multifrutis (Chocó)	Empresa bananera creada en 2001 y que desde 2004 tiene cultivos de banano en la región de Cacarica, en tierras del Urabá chocoano adjudicadas a comunidades negras con títulos de propiedad no enajenables	Propietarios de esas tierras y organizaciones de derechos humanos han denunciado ante la Fiscalía y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les fueron arrebatadas por los paramilitares de El Alemán, y que Multifruits hizo parte de la estrategia para desarrollar cultivos de banano y palma a través de sociedades detrás de las cuales había aliados de los paramilitares.
Multinacional Drummond (Cesar)	Empresa multinacional carbonífera encargada de explotar las zonas carboníferas en la costa atlántica	Drummond ha sido demandada por perjuicios civiles en una corte en Estados Unidos por los presuntos vínculos de sus empleados con acciones criminales de paramilitares y en particular por el

		asesinato de tres dirigentes sindicales.
Palmicultores del Magdalena (Magdalena)	Gremio de palmicultores con actividades en el Magdalena quienes : Pagarían 30 mil pesos por hectárea sembrada	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Perlas del Manacacías (Meta)	Empresa creada por acuerdo municipal con el aval de la Superintendencia de Servicios Públicos. Las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entregaron 1.800 millones de pesos para la construcción del sistema eléctrico en Puerto Gaitán a través de Perlas del Manacacías, con lo que buscaban "beneficiar a la comunidad".	Mencionado por José Baldomero Linares, exjefe 'para' en el Meta y Vichada
Pesquera Vikingo (Chocó)	Empresa comercializadora de alimentos del mar. Pagaba en camarones que luego los 'paras' vendían.	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Postobon S A (Antioquia)	Empresa dedicada a la comercialización de bebidas no alcohólicas.	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Proban (Antioquia)	Empresa bananera comercializadora de bananos en el Urabá antioqueño	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Restaurante Enoteka (Bogotá)	Restaurante de Comidas de alto gourmet. Del grupo de negocios entre Goerge Sale y Salvatore Mancuso, con sedes en Bogotá y Cartagena	La unidad de lavado de activos ocupó las sedes en todo el país, los cuales serán embargados y secuestrados, además de puestos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes
Sagem (Bogotá)	Empresa dedicada a la captura y sistematización de datos. Ya había tenido negocios con la organización electoral, andaba interesada en hacerse a un multimillonario contrato de cedula	Mencionada por Rafael García, responsable del área de informática del DAS
Salud Total (Magdalena)	Entidad promotora de salud controlada por Dieb Maloof	Mencionada por Rafael García, responsable del área de informática del DAS
Salud Total (Cesar)	Entidad promotora de salud controlada por Dieb Maloof	Mencionada por Rafael García, responsable del área de informática del DAS

Sociedad Emilio Hasbún & Cia (Antioquia)	Sociedad empresarial de la región. Familia de tradición bananera como colonizadores de grandes baldíos y pioneros en la siembra de fruta para exportación en Urabá a través de la Sociedad Emilio Hasbún & Cia. Al 'Bonito'	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Sociedad Minera Grifos S.A	Esta firma al igual que las demás se encuentra en la misma zona de influencia del jefe para	la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) -dependencia de Ministerio de Hacienda que tiene como objetivo prevenir y detectar operaciones de lavado de activos en diferentes sectores de la economía
Solsalud (Magdalena)	Entidad promotora de salud con operaciones en Magdalena y parte del Cesar	Mencionada por Rafael García, responsable del área de informática del DAS
Solsalud (Cesar)	Entidad promotora de salud con operaciones en Magdalena y parte del Cesar	Mencionada por Rafael García, responsable del área de informática del DAS
Triplex Pizano (Chocó)	Empresa maderera fundada en Barranquilla con filiales que operan en el Chocó que le pagaban a 'El Alemán' y a 'Diego Vecino'.	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Uniban (Antioquia)	Empresa bananera en el Urabá antioqueño	Mencionada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su versión libre
Universidad de Cartagena (Casanare)	Institución universitaria de la ciudad de Cartagena, que celebró contratos con la gobernación del Casanare quien contrataba con la mencionada entidad la ejecución de obras de infraestructura, que esta se comprometía a realizar en forma directa o subcontratando a un tercero.	Mancuso anticipó que, a la hora del destape sobre las fuentes de financiamiento de las Auc, lo ocurrido en Casanare sería capítulo aparte. De esta forma, quedarían avaladas denuncias en el sentido de que paramilitares se lucraron de millonarios recursos derivados de convenios interadministrativos entre la Universidad de Cartagena y la Gobernación del departamento.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corporación Nuevo Arco Iris, El Tiempo y Semana

Sin embargo, la fuente de financiación básica y relevante para llevar a cabo la expansión y consolidación de este fenómeno fue mediante las fuentes de *financiación proscritas* que constituyeron la base esencial de ésta. Entre ellas destacaron el narcotráfico, el secuestro extorsivo, la intimidación y expropiación violenta, la piratería terrestre y el robo de gasolina, de

combustible y de vehículos y las vacunas a los propietarios. Pero sin duda *el narcotráfico* fue la fuente principal de financiación desde la época del cartel de Medellín.

La tradición de contrabando, la precaria institucionalidad y estabilidad sociopolítica, las condiciones biológicas y climáticas y la geografía colombiana cercana a uno de los principales mercados de consumo, EEUU, ofreció ventajas inocultables para el narcotráfico¹⁴¹. El antecedente del narcotráfico hay que buscarlo en el contrabando de café y manufacturas y en la exportación y producción de esmeraldas. Hay varios momentos dentro de la historia del narcotráfico en Colombia. El primero de ellos fue la producción de marihuana concentrada especialmente en la Sierra de Santa Marta durante la década de los años sesenta y setenta. Un segundo momento fue la consolidación de la producción y exportación de cocaína donde dominaron los carteles de Medellín y Cali de 1970 a 1995. Es la época de los grandes capos del narcotráfico como Pablo Escobar y los hermanos Ochoa en Medellín, los hermanos Rodríguez Orjuela en Cali y los hermanos Rodríguez Gacha en Bogotá. Un tercer momento fue la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la captura de los jefes de Cali en 1995, hechos que provocaron la desmantelación de estos carteles y la fragmentación de la actividad y la proliferación de pequeñas organizaciones exportadoras desde 1996 a 2000. En este periodo, según fuentes de inteligencia de la Policía, existieron cerca de doscientos cincuenta organizaciones. Sus líderes fueron algunos de los segundones de los carteles o nuevos empresarios. Estos cambios de organización influyeron en que Colombia fue el principal productor de América Latina porque incrementó la producción de hoja de coca y las exportaciones. Otro cambio fue el nuevo tipo de alianza con los narcotraficantes mexicanos. Los nuevos exportadores redujeron la distribución en Estados Unidos dejándosela a los mexicanos por sus extensas redes de distribución y pagándoles en especie aunque redujeran sus ingresos, aminoraron también la captura por autoridades estadounidenses. El cuarto momento en el que nos encontramos en la actualidad es la demanda por parte de grupos armados guerrilleros y paramilitares que enlazan la actividad narcotraficante con el desarrollo del conflicto armado. En las regiones donde se asentaron los paramilitares, éstos se convirtieron en fuentes productoras de cocaína y amapola, por tanto se convirtieron, junto con las guerrillas, en la segunda fuerza de demanda de rentas de la coca (Camacho, 2006). La expansión del paramilitarismo por los hermanos Castaño contó con los recursos del narcotráfico de Antioquia, norte del Valle, la costa y de los carteles de Boyacá donde se realizó la

¹⁴¹ La magnitud del mercado de exportación de la cocaína se encuentra determinado fundamentalmente por el consumo en EEUU y Europa. Aunque la demanda ha disminuido en EEUU las ventas en Europa han ganado terreno. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en su informe del año 2010 identifica a España como el principal consumidor de cocaína por persona.

alianza entre narcotraficantes y esmeralderos. Sus fuentes de financiación se extendieron fuera del territorio nacional a los lugares de circulación, comercialización y consumo en Estados Unidos y Europa (Medina, 2005). La vinculación de los comandantes de la AUC con el narcotráfico, parece clara en su mayoría, así como el amalgamiento entre narcotráfico y paramilitares como ayuda para financiarse y fortalecer sus estructuras, para enriquecerse y lucrarse o como vía para aquellos narcotraficantes que han encontrado en las AUC la ocasión para obtener beneficios en la negociación con el gobierno. Es difícil saber cuánto aporta el negocio del narcotráfico al financiamiento del aparato bélico. En algunas ocasiones puntuales algún comandante habló de esta cuestión, como Carlos Castaño que dijo que para una zona con 5000 hectáreas en La Gabarra y San Lucas, el tributo que obtiene al mes es de 600 millones de pesos colombianos¹⁴². En resumen, el narcotráfico es el mayor generador de recursos para financiar grupos armados además del aumento de la criminalidad asociada a este delito.

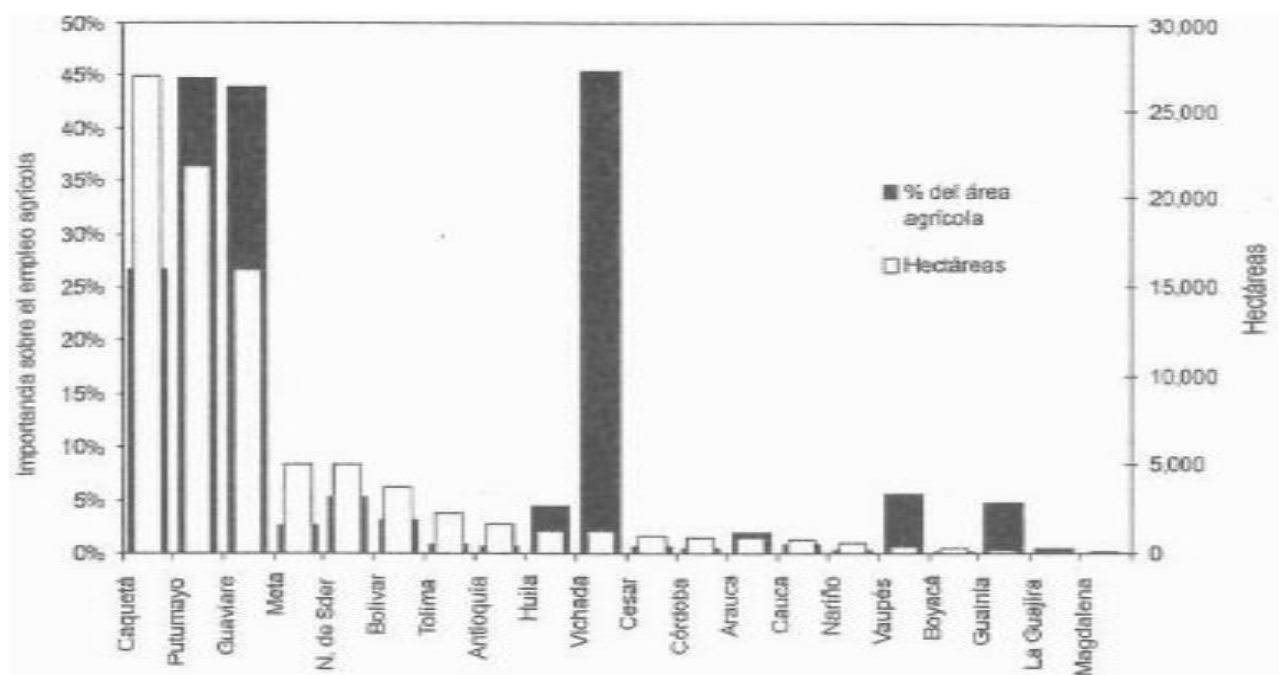
Según Pilar, una contable que trabajó para las AUC, la mayor parte de los ingresos que registraba todos los meses provenían de los impuestos sobre la cocaína. Los mayoristas pagaban una cuota a los paramilitares por cada kilo de cocaína pura que se adquiría en los pueblos que controlaban. Los laboratorios donde se cristalizaba la cocaína pura también pagaban una cuota. Por ejemplo, un pequeño laboratorio pagaba a los militares un mínimo de 3.500 dólares al mes (Human Rights Watch, 2001).

Para 1998 había 93.000 hectáreas cultivadas de coca, amapola y marihuana que suponían un 3% de la extensión dedicada a la agricultura. Para ese mismo año, esos cultivos generaban 69.000 empleos, el equivalente al 9% de la nómina de la agricultura, el 2% de los empleos agrícolas si se los compara a nivel nacional (Figura 23). El cultivo de hoja de coca en tres departamentos resulta considerable su tamaño relativo frente a los cultivos legales: en Caquetá es el 36% en Guaviare el 55% y en Putumayo 57% tal y como se muestra en la figura 24¹⁴³ (Rocha, 2000).

¹⁴² Citado en Cubides, 2005, p. 213, nota 4.

¹⁴³ Para el año 2011, Colombia tenía 64.000 hectáreas sembradas de coca distribuidas en 23 departamentos. El 63% del cultivo se localiza en Nariño, Putumayo, Guaviare y Cauca. El mercado de hoja de coca y sus derivados tiene un valor bruto de 420 millones de dólares que equivalen al 0,2% del PIB nacional y al 3% del PIB del sector agrícola en 2011. Disponible en: Informe de monitoreo de cultivos de coca en Colombia 2011, Censo de cultivos de Coca, United Nations Office on Drugs and Crime, junio 2012, <http://www.unodc.org/colombia/es/press/informesimci2011.html>

Figura 23. Cultivos ilícitos por regiones en 1998, áreas y empleo



Fuente: Rocha, 2000

Figura 24. Geografía de los cultivos ilícitos en 1998



Fuente: Rocha, 2000.

El ingreso que los narcotraficantes han obtenido durante estos años por el negocio de las drogas ronda entre el 2 y el 3 % del PIB del país. Este ingreso disminuyó hace diez años cuando alcanzó el 5% del PIB. En el siguiente cuadro se puede apreciar los ingresos del narcotráfico respecto al PIB. Incluso hubo un año que rozó el 7% del PIB. Pero desde 1995 la media está en torno al 2 y 3 % del PIB (Rocha, 2000).

Estas plantaciones produjeron cambios sociales importantes en las regiones cultivadas porque llegó mucha población trabajadora, y causó serios desequilibrios en la economía local, en los precios, violencia y un fuerte deterioro del tejido social. Para 1998, el 80% de la superficie de los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Vichada, Vaupés y Guainía estaban cubiertas de cultivos ilícitos en su mayoría de hoja de coca por lo que hubo un mayor desplazamiento migratorio hacia estas zonas. Entre 1988 y 1993, se habían movilizó a estas zonas 578 mil personas provenientes del departamento centro-oriente del país.

En las zonas de cultivo de coca el narcotráfico revolucionó el campo en lo que a vías, infraestructura de servicios, transporte, empleo, valorización de la propiedad rural etc. Los altos ingresos de muchos cultivadores elevaron los niveles de consumo, sobre todo, los productos suntuarios, vestidos y licores. Pueblos como San José de Guaviare, Mocoa, Puerto Asís se llenaron de bares, discotecas, prostíbulos, comercios, clínicas privadas y hasta supermercados con los productos refrigerados más sofisticados. Esta situación también provocó que escaseara la mano de obra para labores agrícolas y ganaderas y se viera reducido su salario (Betancourt y García, 1994).

La repatriación de los ingresos del narcotráfico ha tenido efectos limitados en las regiones que son cuna de carteles debido a que el consumo de los narcotraficantes estaba concentrado en bienes y servicios conspicuos, desde Rolls Royces hasta reinas de belleza. Sin embargo, en el sector agrícola los narcos han encontrado una opción de inversión en la acumulación de tierras para lograr su reconocimiento como terratenientes.

Sin embargo, donde más invirtieron fue en la adquisición de tierras y ganados, que les proporcionó una fuente de acumulación con muy bajos riesgos y una rentabilidad aceptable. Además las grandes propiedades rurales eran un símbolo de prestigio en estas comunidades y de refugio frente a las autoridades. Los cultivos que plantaron fueron palma africana, cacao, banano, maderas, entre otros, que tenían la ventaja de acumular más personas en torno a las cabeceras de

municipios o veredas y así se facilitaba el control militar de la población de un territorio (Duncan, 2006).

Se ha estimado que los paramilitares se hicieron con aproximadamente 4,4 millones de hectáreas por un valor de 2.400 millones de dólares, equivalente al 10% del área total de los predios rurales. Esta compra de tierra equivale a una contrarreforma agraria o a una reforma agraria a la inversa¹⁴⁴. Esta concentración de tierra no sólo estaba dirigida hacia las tierras más productivas del país sino también hacia aquellas mejor conectadas con los mercados internos y con los centros de desarrollo regionales. Se ha efectuado a través de transacciones internacionales donde es virtualmente imposible rastrear la procedencia del dinero. Los departamentos más afectados son Antioquia, Valle, Cundinamarca, Casanare, Córdoba, Tolima y Meta. Estos departamentos son los que más inversiones de tierra han realizado. Los tres primeros aportan cerca del 60% del PIB nacional y los cuatro restantes 10%. Según El Tiempo, el 48% de las mejores tierras son de narcotraficantes mientras que el 68% de otros propietarios posee el 5,2% de las mismas¹⁴⁵. En 28 de los 32 departamentos existen predios rurales de grupos ilegales. También se produjo una sobrevaloración de las tierras. En puerto Boyacá, entre 1982 y 1984 la hectárea de tierra paso de 100.000 pesos a 1.000.000 pesos.

En industria, no experimentó mayor impulso con la irrupción de los narcotraficantes. El entorno institucional y las habilidades y tecnología que requieren los empresarios son contrarios al tipo de regulación ejercida por ellos. Sin embargo, la construcción fue una actividad para acumular capital en operaciones de lavado. Por eso las ciudades fueron el principal foco de inversión donde construyeron edificios, centros comerciales, bodegas etc. Pero esta inversión en determinadas regiones consolida no solo unas ganancias económicas o u propósito de prestigio, sino también una consolidación de redes de dependencia entre los habitantes, es decir, captura nuevas clientelas que incrementan su participación en las ganancias como en votos, soldados, informadores etc.

El narcotráfico no ha beneficiado en las regiones de manera sistemática sino que provoco fases recesivas de la economía. “Es inocultable que para el narcotráfico el sector agropecuario a

¹⁴⁴ En Colombia nunca se llevó a cabo una reforma agraria. El Presidente Lleras Restrepo intentó mecanismos redistributivos de la propiedad rural, pero sus iniciativas no llevaron lejos. Por su parte, Misael Pastrana Borrero, durante su mandato presidencial dio un giro a esa medida mediante el pacto de la hacienda Chicoral con los terratenientes del país. Como solución ante la imposibilidad de desarrollar una reforma agraria se crearon empresas agrícolas altamente tecnificadas y competitivas que absorbieran la oferta laboral del campo.

¹⁴⁵ El Tiempo, 10 de julio de 2005.

representado ingreso, empleo e inversiones aunque sin convertirse en una fuente dinamizadora a causa de su reducido tamaño y de los débiles eslabonamientos sectoriales” (Rocha, 2000).

El dinero del narcotráfico rompió el equilibrio de poder local entre los empresarios del campo y la clase política profesional debido a que los empresarios legales perdieron peso en las elecciones porque su capacidad de financiación de campañas electorales era mínimo frente a los excedentes del narcotráfico. Este proceso fue más intenso en las regiones donde los paramilitares hicieron inversiones en propiedades. Este ascenso de algunas figuras vinculadas al narcotráfico provocó una confrontación con las elites tradicionales por el proceso de ascenso social a personas vinculadas al narcotráfico. Estos nuevos empresarios de lo ilegal influían en las decisiones políticas, burocráticas y su importancia en las regiones se sentía en el orden social y en la vida cotidiana. Este proceso en algunas regiones hizo que llegaran a suplantarse a la elite, en otras convivieron con ella y en otras regiones crearon nuevas figuras a expensas de estos grupos.

La escalada de violencia del país coincide con la incursión de colombianos en el narcotráfico y el repunte de los delitos relacionados con estas prácticas así como las tasas de homicidios. La producción y distribución de la droga ha financiado la guerra al apoyar el narcotráfico a los grupos insurgentes y paramilitares. A la par ha aumentado la corrupción y la falta de credibilidad en las instituciones. La guerrilla encontró en los cultivos una fuente de financiación mediante la imposición de impuestos o gramaje que se cobraba por cada kilo de cocaína exportado. A su vez los narcos armaron ejércitos privados (paramilitares) para controlar estos mismos cultivos y laboratorios y proteger sus inversiones donde compraron tierras

De esta manera el narcotráfico se convirtió en una fuente indispensable de recursos para mantener el ejército y el aparato coercitivo de los grupos paramilitares pero también mantuvo el bienestar y la capacidad de consumo de sus habitantes porque proyectó estos recursos como principal fuente de riqueza y de control de las poblaciones donde se asentaban.

El *secuestro* también se convirtió en otra fuente de financiación. La mayoría de los estudios indican claramente que la guerrilla colombiana es culpable del incremento del secuestro después de la década de los 80. Las FARC cometieron casi la tercera parte de los secuestros en 1999 (28%) y el ELN fue el responsable del 24% de estos delitos. Los grupos guerrilleros EPL (6%), el ERP y el Jaime Bateman tienen una cuota menor en la industria del secuestro. La cuota de la guerrilla en el número total de secuestros ha aumentado con respecto a la década anterior porque, de acuerdo

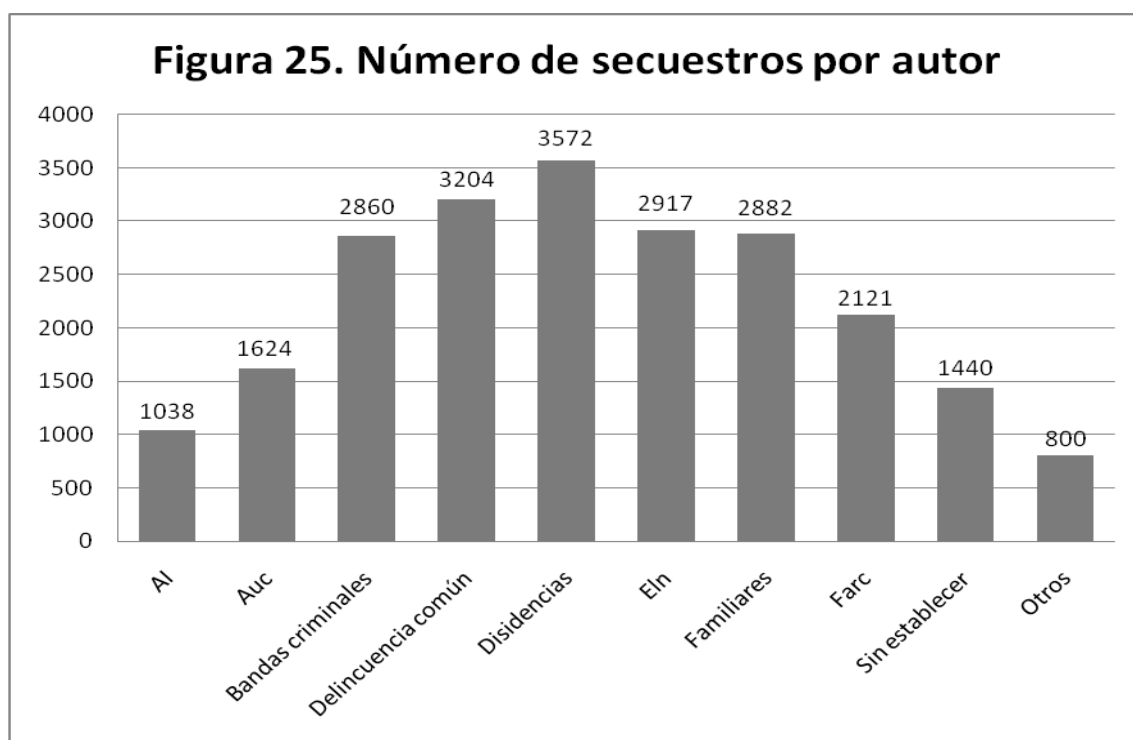
con País Libre, el ELN y las FARC fueron los responsables del 70% de los secuestros que se llevaron a cabo durante el primer semestre del 2001. Los delincuentes comunes ocupan el tercer lugar en las estadísticas, con una cuota del 10% en los casos de secuestro en Colombia en 1999. El número de secuestros realizado por los paramilitares se incrementa cada año: fueron responsables de entre 4% y 5% de los secuestros en 1999 y, según cifras gubernamentales, realizaron 203 plagios extorsivos en el 2000. En la siguiente tabla se puede observar el número de secuestros de 1996 a 2011 para un total de 24.683 secuestros.

Tabla 11. Número de secuestros de 1996 a 2011

Tipo de delito	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Secuestro extorsivo	957	1496	2300	2587	2091	1208	1708	1258	759	377	290	230	197	160	188	59
Secuestro simple	12	45	193	260	403	741	996	749	660	388	397	291	240	53	94	26
Indagación preliminar	69	110	367	357	1078	968	178	114	21	32	0	0	0	0	0	0
Total	1038	1624	2860	3204	3572	2917	2882	2121	1440	800	687	521	437	213	282	85

Fuente: Fondelibertad, 2011.

De 1996 hasta 2009, las disidencias y la delincuencia común ocupan los primeros puestos de la estadística de autores del secuestro. Entre los grupos armados ilegales en primer lugar están el ELN, en segundo lugar las bandas criminales y después las FARC y las AUC (Figura 25).



Fuente: Fondelibertad, septiembre de 2009

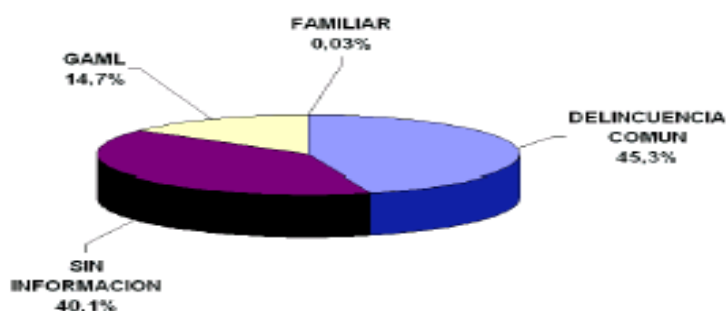
El secuestro se convirtió en la tercera fuente de ingresos más importante del ELN y de las FARC en la década de los 90. El DAS estima que este fenómeno le produjo a la guerrilla aproximadamente US \$ 1.5 mil de millones entre 1991 y 1999. El ejército colombiano y el Departamento de Planificación Nacional estiman que los ingresos de la guerrilla por concepto de los rescates ascendieron a US \$ 1.2 mil de millones entre 1991 y 1998. Desafortunadamente, no existen cifras disponibles para los paramilitares. Pero considerando que el número de secuestros realizados por paramilitares es relativamente bajo, los ingresos por este concepto son probablemente mucho menores que los obtenidos por la droga y la extorsión. Sin embargo, el secuestro como fuente de ingresos está ganando importancia rápidamente también entre estos grupos (Pax Christi, 2002).

Los paramilitares son responsables entre el 18% y 22% de los secuestros que se producen en Colombia. Según el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Nacional (Fondelibertad) las autodefensas secuestraron a 1624 personas desde 1996 hasta 2009. Según CERAC (2005), estos datos suponen un 5% de las acciones paramilitares. Las Autodefensas Unidas de Colombia ejecutaron 515 secuestros, entre 2002 y abril de 2006. Los secuestros se dieron a pesar de la declaratoria en diciembre de 2002, donde se comprometían a un “cese al fuego” y a pesar de la desmovilización de 30 mil hombres finalizada en abril. Los motivos que les llevaron a realizar secuestros son tanto económicos como políticos. En junio de 2000, las AUC trataron de

presionar a los negociadores oficiales mediante el secuestro del hermano de uno de ellos¹⁴⁶. En octubre de 2001, la prensa colombiana reveló lo que parecería ser una nueva modalidad de secuestro: en Norte de Santander, por lo menos 70 personas fueron secuestradas por las AUC para forzarlas a trabajar en la producción de coca¹⁴⁷.

La extorsión, en menor medida, también forma parte del funcionamiento financiero de los grupos paramilitares. Entre 1998 y 2004 se realizaron en Colombia 13.011 extorsiones con un promedio de 1.859 extorsiones por año, es decir, en Colombia se cometió una extorsión cada 4,7 horas. Principalmente se ubicaron en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Meta, Santander y Tolima y fueron realizados principalmente por la delincuencia común, las FARC y los paramilitares. En los siguientes gráficos se puede observar como los grupos armados al margen de la ley (GAML) participaron en casi un 15% de las extorsiones cometidas en Colombia. De éstas, la mitad eran autoría de las FARC y, en segundo lugar, con un 31.6% les corresponden a las autodefensas. En las actuaciones de las autodefensas ha habido un aumento de la extorsión de 0,8% en 1998 a 17.8% en 2004 (DNP, 2004) (Figura 26). Este periodo corresponde a la etapa de consolidación de los grupos paramilitares en el territorio colombiano, en el ámbito local, comenzado a establecer sus redes y a influir en las elecciones legislativas desde 1998 hasta 2006 y en las elecciones locales y regionales del año 2000 y hasta el año 2007.

Figura 26. Participación del número total de extorsiones según autor por categorías 1998-2004



Fuente: Fondelibertad, 2005

¹⁴⁶ “Castaño se atribuye el secuestro de Valencia Cossio”, en: *El Tiempo*, 22 de junio de 2000.

¹⁴⁷ “AUC estarían secuestrando personas para procesar coca”, en: *El Espectador*, 3 de octubre de 2001.

En regiones como la costa y las zonas de frontera en la región de Catatumbo destacaron como fuente de financiación el robo de combustible, el contrabando, la piratería, el tráfico de armas y fueron parte de las dinámicas económicas regionales de los paramilitares junto también con el robo de ganado y la expropiación de tierras.

En menor medida el robo de regalías de petróleo, mineras, el pago de colaboraciones de guerra de varias empresas por medio del desvío de operaciones tributarias legales fueron parte del entramado financiero de estos grupos. Un ejemplo de estas medidas se puede observar en las actuaciones del exgobernador del Casanare, Miguel Ángel Pérez. Muchos contratos que se firmaron durante su cargo terminaron en las arcas de los paramilitares de Miguel Arroyave del Bloque Centauros. El porcentaje que recibió de cada proyecto era del 30%. Por ejemplo, la construcción del hospital de Yopal, el alcantarillado y los acueductos fueron adjudicados a una compañía que fue seleccionada por Miguel Arroyave, el mismo que después recibió el 30% del valor total de cada contrato (Molano, 2006).

La cantidad de dinero recaudado a través de estos mecanismos de financiación se destinó al mantenimiento del conflicto armado con sus correspondientes gastos pero también se reservó a la inversión en negocios legales que legitimaron y legalizaron su dinámica de actuación. Medina (2005) señala los rubros de inversión en el mantenimiento del conflicto, entre ellos:

- Sostenimiento de la nómina de patrulleros, jefes de escuadra, comandantes de compañía, comandantes zonales, comandantes de frente, bloque y miembros del estado mayor.
- Sostenimiento de comisiones de auxilios, finanzas, comunicaciones, transporte aéreo, terrestre y acuático, y salud.
- Compra de material de guerra, intendencia, campaña, alimentación, medicamentos, asistencia médica.
- Asistencia económica y jurídica a viudas y familiares de muertos y presos.
- Pago de asistentes, informantes y servicio de inteligencia paramilitar.
- Pago de publicidad y divulgación del proyecto paramilitar en las distintas zonas.

Según Pilar, contable de las AUC, entre los gastos fijos figuraban pistolas, municiones, provisiones y facturas de teléfono. Los extras podían ser desde ataúdes para los paramilitares muertos en combate, hasta sumas para pagar a los informadores. En general, según su testimonio,

ella supervisaba un presupuesto de alrededor de 650.000 dólares al mes (Human Rights Watch, 2001).

Además de estas prácticas para el refuerzo y sostenimiento de su empresa militar, los grupos paramilitares desarrollaron una actividad dinámica de inversión en aquellos territorios donde se asentaron militarmente. Las actividades productivas que realizaron estos grupos, escondieron sus necesidades militares, sanearon los activos, lo que les generó recursos, apoyo y legitimidad social. Entre estas actividades destacaron la compra de almacenes, bombas de gasolina, cantinas, droguerías, prostíbulos, tenderos, Sanandresitos¹⁴⁸, centros comerciales e inversiones en empresas de carácter agrícola, pecuario y agroindustrial. "A través de una enorme cadena de testaferro están lavando sus dineros. Incluso, se ha detectado compra de tierras en países como Ecuador y Costa Rica", aseguró el coronel Óscar Naranjo, director de la Dirección Nacional de Policía Jurídica (DIJIN), una de las entidades que hace parte del Bloque de Búsqueda creado a finales del 2004 para detectar bienes de las autodefensas¹⁴⁹. Esta compra de tierras está ocasionando un nuevo reordenamiento de la propiedad territorial en aquellas zonas de presencia paramilitar pues se da a través de ellos la "relatifundización".

A partir de febrero de 2007, el gobierno de Álvaro Uribe dictó que se incautaran las propiedades de los exparamilitares. La Fiscalía cruzó información sobre la existencia, ubicación y estado legal de las propiedades y dictó medidas cautelares. Los bienes fueron entregados a Acción Social, de quien depende el fondo para reparar a las víctimas. Acción Social los administra mientras los jueces de Justicia y Paz determinan a qué víctimas se entregan. Si son títulos o recursos monetarios, las entidades financieras abren una cuenta que dé rendimientos a tasa comercial y los entregan a Acción Social.

El gobierno de Álvaro Uribe anunció en marzo de 2009 la primera subasta pública de 16 bienes de jefes paramilitares, algunos de ellos extraditados a Estados Unidos, con destino a un fondo de reparación de víctimas. Entre los bienes a subastar figuran, además, un tractor, otros vehículos y varios latifundios, en distintas regiones colombianas, según las actas de recepción de los mismos. Los predios y vehículos están ubicados en los departamentos de Antioquia y Córdoba (noroeste)

¹⁴⁸ Los Sanandresitos son mercado de abastos y juegos de azar que requieren de un agente que se encargue de hacer cumplir los contratos y definir los derechos de propiedad. Son negocios vulnerables por las fallas que tiene el Estado para regular ciertas transacciones cuando aparecen agentes que compiten violenta y desorganizadamente por la captura de excedentes.

¹⁴⁹ "Paramilitares se infiltraron en las economías regionales" *El Tiempo*, 2 de julio de 2005.

y Meta, Llanos Orientales. Tres fincas del exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, alias "Salvador Lozada" o "El Mono", en zona rural de Tierralta (Córdoba) se encuentran en la lista de bienes a subastar. También una clínica y una finca de Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy", exjefe del "Bloque Mineros" de las AUC, en Tarazá (Antioquia). En el listado se encuentran también una finca y una casa en zona rural de San Martín (Meta), así como varios vehículos de Manuel de Jesús Pirabán, "Don Jorge" o "Pirata", excomandante del "Bloque Héroes del Llano y Guaviare". Igualmente una finca y una casa en Puerto Gaitán y Puerto López, municipios del Meta, de José Baldomero Linares Moreno alias "Guillermo Torres" o "El Colorado", del Bloque Meta y Vichada. De Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco" o "Javier Montañez" del Bloque Central Bolívar (BCB), varias fincas en Buenavista (Córdoba) y en Puerto Berrío, (Antioquia), una urbanización en Cáceres, también Antioquia, y un tractor.

La Fiscalía incautó en septiembre de 2009 bienes por valor de 30 millones de dólares que pertenecieron a Fidel, Carlos y Vicente Castaño. Las propiedades fueron expropiadas en los departamentos de Antioquia y Caldas (noroeste), y entre ellas figuraban 54 inmuebles y 50 vehículos. También fueron confiscados cuatro helicópteros Bell de fabricación canadiense, valorados en cuatro millones de dólares, y un simulador de vuelo en el aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, según lo confirmó la Fiscalía. La operación fue realizada por la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía. Entre los bienes ocupados figuran cuatro empresas en Medellín, una finca en el municipio de Rionegro (Antioquia), así como propiedades inmuebles en la ciudad de Manizales y la localidad de Salamina (Caldas)¹⁵⁰.

A Miguel Arroyave, por ejemplo, le incautaron propiedades por 3.000 millones de pesos. Pero eso no es nada –dice un investigador. El hombre era prácticamente el dueño de San Carlos de Guaroa y Granada, en el Meta”¹⁵¹. Según investigaciones del diario *El Tiempo* los paramilitares tendrían alrededor de 250 propiedades. También se detectaron fincas de Don Berna en Córdoba, el Valle, en Medellín, Ernesto Báez tiene fincas en la zona cafetera, Victo Manuel Mejía, uno de “Los Mellizos” tiene grandes haciendas en el Valle del Cauca y en el centro del país, etc.

¹⁵⁰ Radio Santa Fe, 29 de septiembre de 2009. Disponible en <http://www.radiosantafe.com/2009/09/29/confiscan-bienes-de-los-castano-gil-por-us30-millones/>

¹⁵¹ “Paramilitares se infiltraron en las economías regionales” *El Tiempo*, 2 de julio de 2005.

Otras propiedades como las de Ramiro “Cuco Vanoy”, Carlos Mario Jiménez¹⁵² alias “Macaco” y alias “Mario” fueron embargadas por las autoridades al comprobarse que se estaban empleando para la siembra de hoja de coca después de que se iniciara un proceso de extinción de dominio desde marzo del año 2009. Estas propiedades ubicadas en los municipios de Tarazá, Nudo Paramillo y Caucasia hasta el Golfo de Urabá fueron ocupadas por funcionarios de la Unidad de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación apoyadas por el comando Jungla de la Policía Antinarcóticos. Las dos mil doscientas ochenta y una hectáreas corresponden a 14 predios y están valoradas en veintidós mil millones ochocientos diez mil pesos. Además de servir como terreno para cultivar hoja de coca, se empleaban como corredores para las rutas de narcotraficantes hacia el norte de Antioquia y la Costa Atlántica¹⁵³.

También Francisco Javier Zuluaga, ‘Gordolindo, exjefe del ‘Bloque Pacífico’, ofreció la entrega de un CDT de 1.000 millones de pesos. Pero ese documento, así como varias propiedades en Atlántico, Valle, Cauca y ganado, ya están en manos de Estupefacientes.

Este proceso de acumulación de tierras está íntimamente relacionado con los procesos de expropiación de tierras y la implantación de los paramilitares. Entre otras inversiones productivas que realizaron estos grupos destaca la construcción de escuelas, centros de salud, carreteras, obras de infraestructuras que contrataron con las administraciones que les eran afines.

Estas prácticas consolidaron su estrategia económica de guerra mediante la cual consiguieron financiación e invirtieron en determinados negocios productivos así como en la conservación de su estructura militar. Según Medina (2005) para legalizar y legitimar socialmente estas prácticas establecen las siguientes dinámicas de actuación:

- Construcción de una propuesta integral en lo económico, social, político y militar.

¹⁵² Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’ reveló una lista de fincas, casas y ganado evaluados en 113 mil millones de pesos que servirán para compensar a sus víctimas. La lista de propiedades de ‘Macaco’, jefe del Bloque Central Bolívar, fue entregada ante el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, y no ante un funcionario del Gobierno. Este hecho ocurre dos semanas después de que el presidente Álvaro Uribe ordenaba incautar los bienes de los exjefes de las Auc, tras el asesinato de Yolanda Izquierdo, la campesina cordobesa que lideraba la reclamación de 700 labriegos por tierras arrebatadas en ese departamento. Jiménez relacionó 34 fincas, 63 propiedades y 3.300 cabezas de ganado que, según dice, no están en proceso de extinción de dominio. La lista de predios, de Antioquia, Santander, Putumayo, Vichada y Caquetá permite dimensionar el poder económico de este excomandante ‘para’. El Tiempo, “Entregan de tierras anuncian los paramilitares desmovilizados” 13 de febrero de 2007.

¹⁵³ Radio Santa Fe, “Embargadas propiedades de los exparamilitares Cuco Vanoy, alias Macaco y alias Mario, 17 de febrero 2010.

- Participación activa en las dinámicas de desarrollo económico en las actividades empresariales de carácter agropecuario y comercial.
- Construcción de unidades de gestión social y empresarial a la manera de organizaciones de campesinos, agricultores y ganaderos como ACDEGAM y FUNDEPAZCOR o de comunidades de resistencia asociadas como ASOCIPAZ.
- Impulso a proyectos políticos regionales y nacionales afines a la propuesta paramilitar.
- Consolidación del apoyo gremial y empresarial.
- Manejo distanciado de apoyo y poca confrontación con las fuerzas militares.
- Protagonismo creciente frente al manejo político del país y sus relaciones internacionales.
- Acercamiento y utilización política de los medios de comunicación como medio de difusión de sus propuestas.

Mediante la exposición de las diferentes maneras de financiación de los grupos paramilitares siguiendo a Zald y McCarthy, “el éxito de la movilización se evidencia en el reconocimiento del grupo como actor político o en el logro de beneficios materiales”. En este caso aún no se ha producido el reconocimiento político de este grupo aunque sin duda es una petición por parte de éstos hacia las autoridades. Sin embargo, los beneficios materiales derivados de sus prácticas son cuantiosos no solo por los beneficios que reportan sus fuentes de financiación, sino también por la inversión de éstas en el control territorial, control de las economías locales y regionales y en los beneficios que adquieren mediante la penetración en el ámbito político. Beneficios muy valiosos que les otorga un gran control de los territorios donde tienen presencia así como de sus economías para un total de 317 alcaldías bajo su control.

Por otra parte, la mayor disponibilidad de recursos en una sociedad configura una mayor posibilidad de movilización de un grupo. El negocio del narcotráfico en Colombia promueve muchos recursos para llevar a cabo este tipo de organizaciones. Casi el 90% de los ingresos provienen del narcotráfico, por tanto este recurso proporciona la solvencia necesaria para movilizar y consolidar un grupo armado. Los grupos paramilitares usan el poder para apropiarse de rentas y recursos, ampliar el aparato armado y expandirse nuevos territorios en busca de recursos.

4.3.2. Recursos organizacionales

Tilly (1978) señala que la existencia de intereses comunes de una organización ante una situación concreta de oportunidad o amenaza determina la posibilidad y la forma de movilización de recursos. Para que haya recursos a movilizar tiene que haber una organización que los posea y que sea lo suficientemente fuerte para movilizarlos. Efectivamente, se necesita de una organización que movilice los recursos para la acción colectiva. Para el caso colombiano, el proceso de desmovilización ha servido, entre muchas otras cosas, para conocer mejor a los grupos paramilitares. Aún así se desconoce parte de su estructura, sus nexos, aliados, etc.

El proceso de negociación del Presidente Álvaro Uribe con el estado mayor negociador de las AUC¹⁵⁴ tuvo como objetivo general la reincorporación de estos grupos armados que contribuyeran a la consolidación de la paz. Para ello, un primer paso fue la desmovilización de sus estructuras. Se desmovilizaron 37¹⁵⁵ estructuras paramilitares que correspondían a un total de 30.944 paramilitares y 17.235 armas entregadas¹⁵⁶ según fuentes del Alto Comisionado para la Paz. El politólogo e investigador de la Fundación Seguridad y Democracia Juan Carlos Garzón, señala que hasta la fecha los grupos paramilitares están compuestos por 52 frentes y/o bloques. De entre éstos dominaron dos estructuras: Autodefensas Unidas de Colombia- AUC- y Bloque Central Bolívar-BCB- además de cinco estructuras independientes por fuera de éstas, como Bloque Élmer Cárdenas, Autodefensas del Pájaro, Bloque Centauros, Autodefensas Campesinas

¹⁵⁴ El llamado estado mayor negociador de la AUC está compuesto por Salvatore Mancuso, Vicente Castaño alias “El Profe”, Adolfo Paz alias “Don Berna”, Javier Montañez, “Jorge 40”, Julián Bolívar, Hernán Hernández, Miguel Arroyave (asesinado el 19 de septiembre de 2004), Ernesto Báez y Ramiro Vanoy, en representación de los bloques Norte, Central Bolívar, Centauros, Calima, Héroes de Granada, Pacífico, Sur del Cesar y Vencedores de Arauca. También se encontrarían presentes en la zona de ubicación Guillermo Torres, Pablo Sevillano, Pablo Mejía, Gabriel Galindo, Marlón Pérez, Pedro Fronteras, John Santamaría y Juan Carlos Sierra.

¹⁵⁵ Los grupos de paramilitares que se encuentran desmovilizados según fuente del Alto Comisionado por la Paz son: 1. *Grupos desmovilizados en el año 2003*: Bloque Cacique Nutibara, Autodefensas Campesinas de Ortega. 2. *Grupos desmovilizados en 2004*: Bloque Calima, Bloque Catacumbo, AUC de Cundinamarca, AUC del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando, Bloque Bananero. 3. *Grupos desmovilizados en 2005*: Bloque Vencedores del Arauca, Frente Héroes y Mártires de Guática, Frente Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio del BCB, Bloque Tolima, Frente Vichada de BCB, Bloque Noroccidental Antioqueño de las AUC, Bloque Centauro, Anillos de seguridad de las AUC en Santa Fe de Ralito, Héroes del Chocó, Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, Bloque Héroes de Granada, Bloque Libertadores del Sur, Bloque Montes de María, Bloque Héroes de Tolova, Frente Mojana de las AUC, Bloque Sur Oeste Antioqueño, Bloque Córdoba. 4. *Grupos desmovilizados en 2006*: Frente Héroes del Llano y Frente Héroes del Guaviare, Bloque Norte de las Autodefensas, Frente Julio Peinado Becerra de las AUC, Frente Sur Putumayo del BCB, Frentes Próceres del Caguán, Héroes de los Andaquies y Héroes de Florencia del BCB, Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Bloque resistencia Tayrona X, Bloque Central Bolívar-Sur de Bolívar, Autodefensas Campesinas de Bloque Boyacá, Bloque Mineros, Bloque Élmer Cárdenas. Esta información al igual que el Informe Ejecutivo de Desmovilizaciones Colectivas 2003-2006 se encuentra en el siguiente enlace electrónico: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/>

¹⁵⁶ El tipo de armas entregadas se clasifican en: largas 13.036, cortas 2.759, acompañamiento 1.189, granadas 11.127 y municiones 2.256.176.

del Casanare y Autodefensas del Meta y Vichada. A estas estructuras debemos sumar aquellas que durante la desmovilización se reorganizaron en torno a algunos bloques y frentes ya desmovilizados y que ya fueron apuntadas anteriormente.

Este proceso proporcionó la desmovilización de las estructuras militares, los combatientes, pero no se desmovilizaron las más milicianas. Un reporte del diario El Tiempo señala que “Aunque el resultado final de esa barrida aún no se conoce, el Ministerio del Interior calcula que un 40 por ciento de los 30.944 paras que se desmovilizaron colectivamente no estaban en los que las AUC llamaban Frentes de choque. Es decir, unas 12 mil personas que hoy reciben los beneficios del Programa para la Reinserción eran en realidad integrantes de redes de apoyo y colaboradores ocasionales”¹⁵⁷. Por tanto, esto supone que además de combatientes, estas estructuras utilizaban redes de apoyo y colaboradores ocasionales así como Frentes de choque. Los Frente de choque o Brigadas de choque se crearon en 1996 como unidades y columnas capaces de enfrentar a las fuerzas de la guerrilla. Estaban dotadas con las armas y equipamiento de una fuerza militar regular. A estos, Medina (2005) añade a los paramilitares que ejecutan labores de patrulleros, jefes de escuadra, comandantes de compañía, comandantes zonales, comandantes de frente, bloque y miembros del estado mayor. Estas estructuras se asientan en los llamados *santuarios rurales*, según el analista Gustavo Duncan (2005). Los denomina de esta manera pues se ubican en áreas de influencia de municipios e incluso en ciudades intermedias pero que permanecen inmunes al control de la justicia nacional e internacional y desde estas zonas es donde articulan sus operaciones criminales.

La influencia de los paramilitares en las zonas urbanas no ha sido tratada en profundidad. No obstante, investigaciones incipientes como la llevada a cabo por Duncan (2005), arrojan más luz a este fenómeno. La introducción a las zonas urbanas se hizo a través de redes mafiosas. Mediante una extensa estructura de redes que se extendieron desde los santuarios rurales. Tenían como objetivo el sustraer numerosas sumas de dinero para amenazar y proteger actividades urbanas que van desde los populares mercados de contrabando o Sanandresitos hasta la corrupción en la contratación pública. Así se rebeló que los santuarios rurales fueron el centro organizativo de estas estructuras en redes. Por otra parte, dentro de esta estructura se utilizaron los nodos o células operativas que trataron de regular las transacciones con la sociedad. Duncan (2005) define tres tipos de células: “*células soldados* son aquellas que se encargan de la violencia que se ejerce contra individuos u organizaciones que no aceptan someterse a los contratos de protección de la

¹⁵⁷ “Unos 12.000 exparas dejarían de recibir auxilio del Gobierno por depuración de listas”, *El Tiempo*, 11 de julio de 2006.

red, y otras redes, grupos o individuos que compiten por el monopolio de la protección. El segundo tipo de células, *células operativas*, está constituido por las células que ejecutan las actividades lícitas e ilícitas de las propias redes y/o prendan sobre transacciones de terceros bajo contratos de protección. Las células operativas son las que generan las ganancias económicas de las redes. El tercer tipo de células, *células de intercambio*, se encargan de intercambiar bienes y conductas con agentes de alto poder en una sociedad como la clase política, los administradores de justicia, los agentes del sistema financiero o las fuerzas de seguridad del Estado. La naturaleza de las transacciones consiste en el intercambio entre ambas partes de dinero, protección, influencia, violencia y persecución contra rivales”. Así, cada célula o nodo tenía funciones especializadas conectadas por vínculos independientes entre sí pero subordinadas a una célula superior. Pueden actuar coordinadamente pero formaban parte de una estructura fragmentada y difusa.

Duncan comenta que todas las redes disponen de los dos primeros tipos de células y que el tercer tipo sólo está presente cuando los niveles de infiltración llegan a afectar el gobierno de una ciudad o sectores influyentes de la sociedad. Pero el fenómeno paramilitar se introdujo en los gobiernos mediante estas redes mafiosas a través de la financiación de las campañas de candidatos, la intimidación e incluso el trabajo social en comunidades excluidas. Por tanto, las redes tradicionales clientelares, producto de un intercambio por ganancias personales o de grupos específicos, han sido suplantadas por los paramilitares. Incluso la relación con los funcionarios de las instituciones estaban tan marcadas por el sometimiento a los intereses de estas redes que el papel de los alcaldes deja de ser una célula de intercambio y pasa a ser una célula operativa de la red (Duncan, 2005). La infiltración de células paramilitares en instituciones gubernamentales, judiciales y militares fue evidente por varios sucesos que saltaron a la prensa nacional como el acaecido en Cúcuta por la infiltración de paramilitares en la Fiscalía a través de la fiscal Ana María Flórez Silva para intercambiar información¹⁵⁸. Respecto a la infiltración gubernamental, los propios paramilitares dicen tener a su disposición 317 alcaldías que colaboraban con sus intereses. Un ejemplo fue la colaboración del alcalde de Riohacha con Jorge 40 al transferir parte del presupuesto destinado a salud hacia las arcas de este jefe paramilitar¹⁵⁹. También fue impactante la relación de algunos oficiales y jefe del DAS, Jorge Noguera, y funcionarios de la DEA en Bogotá, con los grupos paramilitares en el 2006¹⁶⁰. Asimismo, la infiltración o relación de grupos

¹⁵⁸ “La fuga de Batichica” *Revista Semana*, 22 de mayo de 2004.

¹⁵⁹ “Alcalde de Riohacha busca acogerse a los beneficios de Ley de Justicia y Paz” *El Tiempo*, 31 enero del 2006.

¹⁶⁰ “No van a empañar mi obra de Gobierno a mes y medio de las elecciones, dijo el Presidente Uribe”, *El Tiempo*, 10 de abril de 2006.

paramilitares con la institución castrense tenía antecedentes históricos incluso en el apoyo y formación de estos grupos, en colaboración en masacres y en la vinculación de oficiales y generales con el paramilitarismo.

Un ejemplo de este modo de organización fue el Bloque Cacique Nutibara que nació en el año 2001 bajo el mando de Diego Murillo alias Don Berna que se introdujo en la ciudad de Medellín a través de las redes mafiosas de las oficinas de cobro y del narcotráfico. Cada célula desarrolla lógicas de acción que le eran propias, entre ellas, las lógicas de acción de los paramilitares se encargaban de la contrainsurgencia; las oficinas de cobro del monopolio de los mercados ilegales¹⁶¹; las autodefensas desde el control territorial y las bandas desde su lógica de microempresarios del crimen. Todos los miembros de esta red se vincularon mediante un conjunto de intermediarios. Esto permite entender las conexiones y apoyos brindados al proyecto paramilitar por sectores de la Policía, Ejército, elites políticas y sociales y algunas comunidades¹⁶². La organización de los diferentes grupos paramilitares pertenecía a una institucionalidad cuyos frentes y bloques mantenían una autonomía financiera y operativa entre ellos, con relativa autonomía local y debilidad jerárquica. Las diferentes estructuras paramilitares respondieron más bien a intereses regionales e incluso personales más que a una línea nacional de pretendida unidad paramilitar. El proceso de desmovilización paramilitar comprobó la autonomía de cada bloque y frente al desmovilizarse cada uno independientemente de los demás. La existencia de estructuras aún sin desmovilizar, la reorganización militar de varias estructuras en algunos departamentos y las disputas y entresijos entre varios bloques y dentro de los mismos¹⁶³ acentuaban la percepción de una organización estructurada en varios bloques y frentes que se ordenaron en centro y células dispuestas en estructuras reticulares y que contaron con redes de apoyo que consolidaron sus formas de actuación.

La conformación de grupos paramilitares en estructuras reticulares choca con la hipótesis de Zald y McCarthy sobre el éxito su un movimiento en función de su construcción como organización formal y centralizada. Sin embargo, estas estructuras reticulares tienen éxito en su organización y

¹⁶¹ Las oficinas de cobro tienen como función el manejo de transacciones ilícitas que van desde el cobro de 'cuotas de administración', hasta impuesto por la venta de CD, libros y DVD piratas.

¹⁶² Para obtener más información sobre cómo opera el Bloque Cacique Nutibara, se puede consultar el siguiente artículo: "Bloque Cacique Nutibara: la red", *Revista Arcanos* n.º 11, diciembre 2005, Bogotá.

¹⁶³ Entre las disputas destacan aquellas acometidas por el control territorial de la ciudad de Medellín, en el año 2001, por el Bloque Metro, comandado por Doble Cero y el Bloque Caique Nutibara liderado por Diego Murillo, conocido dentro del mundo del narcotráfico como Don Berna. Las fricciones también aparecieron entre el Bloque Metro y el Bloque Central Bolívar al matar el primero de estos bloques dos hombres del segundo bloque. Asimismo Doble Cero disputó con Carlos Castaño la negativa del Bloque Metro a incorporarse a las estructuras de las AUC durante el año 2003. Por ello Carlos Castaño arremetió contra este bloque hasta que lo desplazó a San Roque.

consolidación. Comenta Duncan (2005) que el ejemplo más contundente de la efectividad de este sistema de redes es su contraste con el fracaso de Pablo Escobar cuando trató de someter bajo su jerarquía a la clase política y criminal de Colombia. Por pretender unificar una estructura de redes bajo el mando de una estructura jerárquica, su centro de operaciones colapsó.

4.3.3. Recursos tácticos

Los grupos paramilitares siguieron un mismo patrón que se repetía en las zonas de influencia paramilitar. En un primer momento utilizaron la violencia como estrategia para penetrar en las poblaciones. Posteriormente establecieron el control militar y continuaron con su penetración en política y en economía local mediante el *clientelismo armado* en zonas rurales y el *clientelismo mafioso* en zonas urbanas. Mediante estas dos tácticas penetraron en los municipios, desplazaron a los grupos guerrilleros y se establecieron como actor hegemónico.

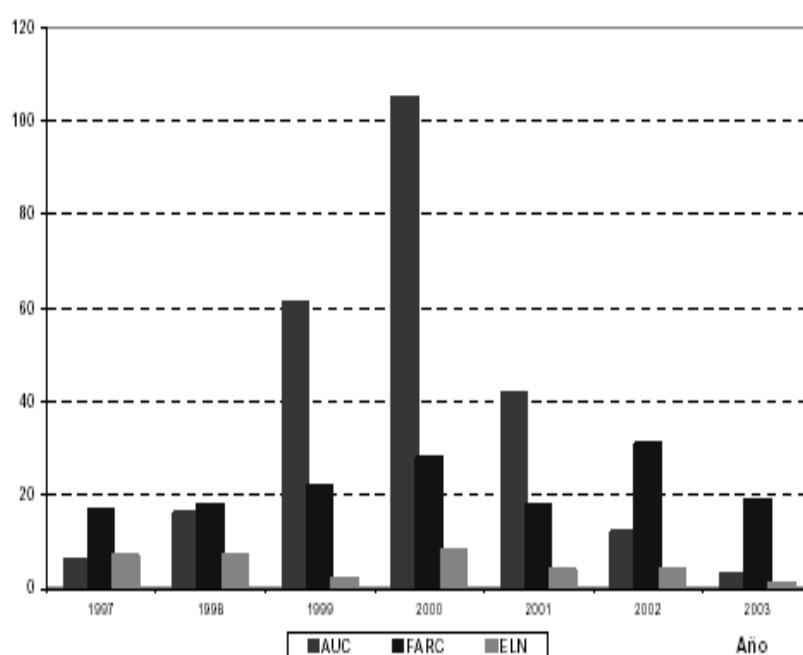
Los grupos paramilitares utilizaron dos tipos de violencias: *violencia indiscriminada* y *violencia selectiva*. Garzón (2005) señala que la decisión de utilizar una u otra depende del objetivo estratégico a alcanzar, la relación con la población, el cálculo sobre el dominio que ejerce la parte por confrontar en determinada zona y la necesidad de utilizar el terror como forma de hacer que las personas se sometan al nuevo dominio o se desplacen.

Este tipo de violencia fue aplicada a partir de 1996 y hasta 2002 con la creación de las ACCU y sobre todo de las AUC, momento de expansión de los grupos paramilitares por el territorio colombiano y del modelo ACCU. En primer lugar, amedrentaron a aquellas poblaciones bajo dominio de grupos insurgentes para provocar un cambio de lealtades y afirmar su presencia como actor armado hegemónico a la vez que provocaban incertidumbre y sorpresa entre la población. A través de la *violencia indiscriminada* desarticulaban las redes insurgentes y penetraron en municipios por medio de la conformación de nuevas redes formadas por agentes locales. Así los conflictos con la guerrilla aumentaron. Se registraron 483 enfrentamientos entre 1998 y 2002. El número de enfrentamientos aumentó de 18 en 1998 a 185 en 2002.

Una vez desarticulada las redes de la insurgencia, dieron paso a una *violencia selectiva*. Un comunicado del 4 de diciembre de 2001 reproducía que los paramilitares ya no iban a realizar más masacres sino asesinatos selectivos de no más de tres personas (Figura 27). Las masacres disminuyeron durante la Presidencia de Álvaro Uribe pero no los asesinatos selectivos, las

desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales. Este momento coincidió con la declaratoria de la tregua por parte de los paramilitares y con la subsiguiente reducción de la tasa de homicidios en el año 2002, durante el inicio del cuatrienio del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006). Los homicidios se dirigieron hacia aquellas personas que no aceptaban el nuevo dominio o seguían apoyando a las guerrillas, como fue el caso de los departamentos de Antioquia, Santander y Cundinamarca. La baja en homicidios correspondió a una decisión táctica por parte de los paramilitares en medio de la negociación: era un momento de consolidación territorial de los paramilitares y un momento de menor necesidad de utilizar la violencia indiscriminada.

Figura 27. Masacres cometidas por grupos paramilitares, 1997-2003



Fuente: Observatorio de DDHH, Vicepresidencia de la República, 2004

La táctica usada por los grupos paramilitares para acceder al poder político local fue mediante el *clientelismo armado*, es decir, la apropiación privada de bienes públicos a través de la amenaza de las armas. El uso del clientelismo armado les permitió acceder a representaciones de poder importantes en los cuerpos legislativos de la Nación y dominar los gobiernos locales de sus zonas de influencia a través de sus redes o aliándose con políticos tradicionales. Las formas que adoptó este tipo de clientelismo eran las habituales del clientelismo tradicional: contratación en cargos públicos de personal recomendado por los grupos paramilitares, retención de un porcentaje de sus sueldos, concesión de contratos de obras públicas, pago de coimas por los contratistas, entre otras (Rangel, 2001). Duncan (2005) añade que en las ciudades predominó el *clientelismo mafioso*. Se

diferencia del clientelismo armado en que la intimidación se daba hacia una de las partes de la relación del intercambio entre patronos y clientelas: los miembros de la clase política. En las ciudades las redes mafiosas estaban en condiciones de intimidar únicamente a los políticos profesionales, los contratistas del Estado y la burocracia que ocupaba los cargos públicos, pues a la población civil que componía la clientela de otros competidores resultaba muy complejo amenazarla. Sin embargo, en los municipios y zonas campesinas patronos y clientes eran intimidados además de pagar comisiones y obligados a votar por los candidatos señalados.

En conclusión, las tácticas utilizadas por los grupos paramilitares para afianzar su dominio en un territorio e influir en el ámbito político y económico de los municipios con su influencia se dieron mediante la violencia y el clientelismo, armado y mafioso.

4.3.4. Recursos humanos

A lo largo de esta investigación hemos explorado los diferentes aliados que por convicción o extorsión han apoyado y sigue apoyando a grupos paramilitares en la consecución de sus objetivos. Diferentes grupos e instituciones consideraron a estos grupos armados como aliados en la lucha contra la guerrilla, reforzando la protección a los propietarios y ejerciendo como una división más del Ejército ante la carencia y debilidad de la presencia del Estado en las zonas rurales. A lo largo de su historia contaron con apoyo de amplios sectores empresariales, hacendados, ganaderos, comerciantes, instituciones de seguridad del Estado- Fuerzas Armadas y Policía-, Fiscalía y gobiernos locales y regionales, incluso tienen una significativa representación en el Parlamento y su proceso ha permeado a diferentes sectores de la población que los consideran una autoridad.

Los *grupos de narcotraficantes* convertidos en propietarios rurales y terratenientes promovieron grupos armados que atacaban a civiles sospechosos de apoyar a la guerrilla o a grupos movilizados para demandar derechos y políticas de progreso social. De esta unión se creó el grupo Muerte a Secuestradores- MAS- en colaboración con el Ejército. Estos grupos colaboraron en la protección de los grandes narcotraficantes de los carteles de Medellín, Cali, Magdalena Medio. De estas alianzas nacieron los líderes y combatientes de los diferentes grupos paramilitares como Fidel Castaño, Ernesto Báez, Jorge 40, etc. El narcotráfico se convirtió en el medio más utilizado por los paramilitares para obtener recursos, llegando a constituir casi el 90% de la fuente de financiamiento paramilitar.

El nivel de amenaza hacia las *elites políticas y económicas, locales y regionales*, debido a las negociaciones con la guerrilla así como la creación de la Unión Patriótica, fueron las causas de alianza entre los grupos de paramilitares y las elites. La creación de gremios como ACDEGAM- Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio- o la Sociedad de Ganaderos de Córdoba, consolidaron el papel de los grupos paramilitares en Córdoba y Magdalena Medio. Posteriormente los paramilitares obligaron a las elites al pago de impuestos o “vacunas” por ofrecerles seguridad en sus predios y negocios.

Por su parte, las *Fuerzas Armadas* rechazaron las negociaciones entre la Presidencia y las guerrillas, oponiéndose públicamente y favoreciendo el uso de técnicas contrainsurgentes. Así determinados batallones y brigadas del Ejército crearon grupos de autodefensa. Junto con los paramilitares, fueron partícipes de masacres, hicieron parte del MAS y contribuyeron al asesinato de los integrantes de la Unión Patriótica- UP-. Se coordinaron entre los efectivos del ejército y los paramilitares durante operaciones militares, el intercambio de inteligencia, compartir combatientes, compartir vehículos, coordinación de retenes del Ejército que permitieron el paso de combatientes paramilitares armado y pagos de los paramilitares a militares a cambio de su apoyo.

Dentro de las Fuerzas Militares había una gran tolerancia a las atrocidades de los paramilitares. Los civiles avisaron repetidas veces y con antelación a los militares de las masacres paramilitares o cuando se estaban extendiendo. Pero los militares no actuaron eficazmente para evitar las masacres y proteger a los civiles y perseguir a los asesinos. Muchas veces alegaron diferentes excusas como el tiempo, la distancia, el peligro, el exceso de trabajo o la jurisdicción para no actuar. Por esta actitud, la pérdida de legitimidad de esta institución ha sido notable.

Desde el gobierno de Pastrana se mostró un cambio evolutivo en la trayectoria de desvincularse de estas organizaciones armadas pero algunas de sus medidas fueron controvertidas como la destitución de oficiales militares durante su mandato. Pastrana destituyó a militares vinculados a violaciones a los derechos humanos y al apoyo de grupos paramilitares sin ser sometidos a ninguna investigación penal¹⁶⁴. Sin embargo, estas destituciones fortalecieron a los grupos

¹⁶⁴ La práctica de destituir a un gran número de miembros de las fuerzas de seguridad comenzó después de que Colombia pusiera en marcha una reforma del Código Penal Militar. De acuerdo con la reforma, los comandantes podían destituir sumariamente a oficiales y soldados sin ninguna explicación. El Ministro Ramírez autorizó más destituciones sin investigaciones criminales. En marzo de 2001, el Ministerio de Defensa anunció otra purga, que esta

paramilitares pues según el Espectador diecinueve de los trescientos treinta ocho destituidos en octubre de 2000, ingresaron en las filas de los paramilitares. Carlos Castaño en una entrevista en *The Washington Post*¹⁶⁵ anunció que treinta de esos destituidos estaban dentro de las AUC. Algunos de éstos aplicaban las técnicas de entrenamiento aprendidas en las Fuerzas Militares a los paramilitares. Castaño aseguró que dio empleo a treinta y cinco exoficiales de alto rango, a más de ciento oficiales de baja graduación y a mil exsoldados o expolicías.

El conjunto de pruebas recopilado por Human Rights Watch establece que hay una continua relación entre las brigadas tercera, cuarta, quinta, séptima, novena, decimocuarta, decimotercera, decimoséptima y vigésimo cuarta con grupos paramilitares. A continuación se detallan las relaciones paramilitares-militares en algunas de las brigadas colombianas.

En 1999, la Tercera Brigada del Ejército de Colombia estableció un grupo paramilitar en el departamento del Valle del Cauca, con el nombre de Frente Calima. Este frente estuvo relacionado con oficiales militares en el servicio activo, retirados y en la reserva asignados a la Tercera Brigada, que operan junto con paramilitares contratados entre las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo las órdenes de Carlos Castaño. Esta brigada suministró armas e inteligencia al Frente Calima. El Frente Calima fue creado en respuesta a un secuestro masivo llevado a cabo por guerrilleros pertenecientes al Frente José María B Herrera del ELN¹⁶⁶. Los oficiales en activo suministraron inteligencia y apoyo logístico. Los exoficiales del Ejército asumieron algunos de los puestos de mando. Las tropas estaban integradas principalmente por paramilitares procedentes del norte de Colombia. Entre 1988 y 1990, por ejemplo, los narcotraficantes aliados con la Policía y oficiales de la Tercera Brigada perpetraron más de un centenar de asesinatos en lo que se dio a conocer como la masacre de Trujillo. El Presidente Ernesto Samper reconoció el 31 de enero de 1995 el papel del gobierno en estos asesinatos y el encubrimiento de su responsabilidad. La masacre de Riofrío de 1993 es otra de las atrocidades relacionadas con la Tercera Brigada¹⁶⁷. También estuvo implicada en la masacre

vez incluyó a veinte oficiales y quince hombres alistados, la mayor parte de ellos procedente del Ejército. Tampoco entonces se dio ninguna explicación sobre las destituciones ni hubo pruebas de que alguno de ellos se enfrentara a una investigación por violaciones a los derechos humanos.

¹⁶⁵ Scott Wilson, "Interview with Carlos Castano, Head of the United Self-Defense Forces of Colombia", *The Washington Post*, 11 de marzo de 2001. Mencionado en Human Rights Watch, 2001.

¹⁶⁶ El 30 de mayo de 1999, los guerrilleros secuestraron a unos 140 feligreses de la iglesia La María de Cali. Entre los secuestrados había presuntos narcotraficantes sospechosos de dirigir parte del negocio establecido por los líderes encarcelados del cartel de Cali.

¹⁶⁷ El 5 de octubre, 13 miembros de la familia Ladino que vivían en Riofrío, Valle del Cauca, fueron asesinados por una fuerza combinada de soldados de la Tercera Brigada y paramilitares.

de cinco personas en Monteloro el 8 de noviembre de 1998¹⁶⁸. También resulta inexplicable la masacre en el Alto Naya donde los paramilitares asesinaron a cuarenta personas y forzaron el desplazamiento de mil personas en una zona que se encuentra a veinte minutos del corregimiento de Timba donde está situado la base del Ejército Nacional¹⁶⁹ (HRW, 2001).

La Fiscalía General ha recopilado pruebas sobre las amplias relaciones durante 1997, 1998 y 1999 entre la Cuarta Brigada y los paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño. En estos documentos se mencionan a los Batallones Girardot, Granaderos, Héroes de Barbacoas, Juan del Corral y Pedro Nel Ospina, así como al cuartel general de la Cuarta Brigada. En la investigación se describen las actividades ocurridas cuando la Cuarta Brigada estaba a las órdenes del General Alfonso Monsalva (fallecido posteriormente) y después, del General Carlos Ospina Valle, que desde entonces ha sido ascendido y encabeza ahora la Cuarta División de Colombia. En 1998, la Fiscalía General abrió una investigación de presuntas atrocidades cometidas el año anterior por paramilitares en las cercanías de las ciudades de Girardota, Tarazá y Caucaasia, en el departamento de Antioquia. Los investigadores concluyeron que un grupo de los paramilitares incluía a seis soldados en el servicio activo asignados al Batallón de Infantería No. 10 "Girardot" y el Batallón de Ingenieros No. 4 "Pedro Nel Ospina". En la investigación oficial, el grupo fue relacionado con una serie de asesinatos y robos cometidos cuando llevaban uniforme y armas del Ejército, entre ellas ametralladoras y granadas. En las llamadas operaciones de "limpieza social," el grupo atacó y

¹⁶⁸ Según una investigación independiente, tropas del Batallón de Artillería "Palacé," con sede en Buga, y del Batallón de Contraguerrillas "Numancia" mataron a cinco civiles durante la celebración de la fiesta de quinceañera de la hija del propietario de la casa donde se encontraban. Varios de los testigos han sido asesinados después en circunstancias que sugieren un intento de encubrir el crimen.

¹⁶⁹ La ofensiva paramilitar en la región del Alto Noya atrajo la atención internacional durante las festividades de Semana Santa de 2001, cuando las personas comenzaron a reportar una serie de masacres llevadas a cabo por las AUC a lo largo del río Naya, que separa los departamentos del Valle y del Cauca. En ese momento, los comandantes locales del Ejército dijeron a los periodistas que no tenían pruebas de que los paramilitares estuvieran en la región. Un corresponsal de *Los Angeles Times* visitó después la zona y reconstruyó lo que ocurrió: "Los paramilitares hicieron primero una carnicería con Gladys Ipiá, de 18 años, cortándole la cabeza y las manos con una motosierra. A continuación, mataron a seis personas en un restaurante bajando el camino. A algunos les dispararon, a otros los apuñalaron. A un hombre lo acuchillaron hasta la muerte y luego lo quemaron. Y así se extendieron, 200 hombres y adolescentes pertenecientes al mayor grupo paramilitar ultraderechista de Colombia, los Grupos de Autodefensa Unidos de Colombia. La Semana Santa se convirtió en una procesión de muerte a medida que las fuerzas recorrían andando unos 100 kilómetros desde la cabecera del río Naya en los altos Andes hacia su desagüe en las selvas de las tierras bajas, deteniéndose para matar brutalmente en caseríos a lo largo del camino. Para cuando habían cruzado la región del Naya, un tramo remoto y asombrosamente bello de la costa colombiana del Pacífico, al menos 27 personas habían resultado asesinadas, otras 20 desaparecidas y supuestamente también muertas. Algunos eran guerrilleros de izquierdas. Otros eran campesinos. Uno fue encontrado extendido en un campo de fútbol como una muñeca abandonada. Casi todas las víctimas eran indígenas o negros. La violencia hizo que miles de personas huyeran". Para la Defensoría del Pueblo, resulta inexplicable la forma cómo aproximadamente 500 hombres de las autodefensas pudieron realizar una movilización de estas características, sin ser advertidos, más aún cuando la zona por donde se estima incursionaron los hombres armados al área, se encuentra situada a 20 minutos del corregimiento de Timba, lugar en donde está ubicada la base del Ejército Nacional (HRW, 2001).

mató a personas consideradas drogadictos o ladrones que llevaron a cabo la masacre de El Aro, que tuvo lugar en octubre de 1997¹⁷⁰. Francisco Enrique Villalba Hernández, un exparamilitar que participó en la masacre de El Aro, confirmó bajo juramento ante la Fiscalía General, el 30 de abril de 1998, el testimonio de los supervivientes entrevistados por Human Rights Watch que indicaba que la operación había sido cuidadosamente planeada y ejecutada por una fuerza conjunta de paramilitar-militar. Villalba dijo que pertenecía al Grupo Toledo dentro del Frente Metropolitano de las ACCU. En una declaración, un entrevistado anónimo llamado "Valentín" dijo a los investigadores que el Mayor Hernández les había dicho que había empezado a organizar un escuadrón de la muerte llamado "La Muerte" dentro de la Cuarta Brigada, en coordinación con un oficial del Ejército asignado al Grupo de Acción Unificada (GAULA) rural, una unidad combinada del Ejército y la Policía. El escuadrón iba a ser equipado y armado con uniformes de camuflaje, armas y municiones requisadas a la guerrilla por los soldados. "Valentín" también dijo a los investigadores de la Fiscalía General que el Mayor Jesús María Clavijo Clavijo, entonces comandante del Batallón de Contraguerrillas "Héroes de Barbacoas", colaboraba con los grupos paramilitares. En una investigación paralela de la Procuraduría se enumeraban cientos de comunicaciones por teléfono móvil y buscapersonas entre conocidos paramilitares y oficiales de la Cuarta Brigada, entre ellos el Teniente Coronel Carlos Ospina Pardo, el Teniente Coronel Alfonso Zapata Gaviria, el Mayor Álvaro Cortés Morillo, un tal "Mayor Ardila", el Mayor Jesús María Clavijo, el Teniente Felipe Rodríguez, el Cabo Iván Darío Jaramillo, el Cabo Javier Gómez Herrán y el Cabo Carlos Mario Escudero. No obstante, el Mayor Clavijo fue ascendido a coronel y obtuvo el mando del Batallón de Contraguerrillas "Héroes de Majagual", bajo la jurisdicción de la Quinta Brigada y con sede en Barrancabermeja. Con posterioridad, este batallón fue relacionado en la prensa con un aumento de la actividad paramilitar y de los ataques directos contra la población civil cerca de Cantagallo, Santander. En noviembre de 1999, por ejemplo, campesinos locales denunciaron que las tropas a las órdenes directas de Clavijo se habían coordinado con los paramilitares para secuestrar a dos destacados líderes de los desplazados, Gildardo Fuentes y Edgar Quiroga (HRW, 2001).

¹⁷⁰ En ese momento, el Gral. Ospina era el comandante de la Cuarta Brigada. Estos documentos demuestran que el 25 de octubre, una fuerza conjunta del Ejército y los paramilitares rodearon el pueblo de El Aro y a las 2000 personas que vivían en su interior y los alrededores. La operación formaba parte de una ofensiva regional lanzada contra las FARC y destinada a obligar a los residentes a que abandonaran pueblos considerados proveedores de los guerrilleros y a conquistar la región, en palabras de Castaño. El Aro, los miembros de las ACCU habían ejecutado al menos 11 personas, entre ellas tres niños, quemado 47 de las 68 casas, entre ellas una farmacia, una iglesia y una central telefónica, saqueado comercios, destruido cañerías que de suministro de agua potable a las casas y obligado a huir a la mayoría de los residentes. Cuando salieron el 30 de octubre, las ACCU se llevaron consigo más de un millar de cabezas de ganado junto con los bienes saqueados en casas y comercios. Posteriormente, se denunció la desaparición forzada de 30 personas. A finales de año, cientos de familias desplazadas estaban repartidas en albergues de Itango, Puerto Valdivia y Medellín.

La Quinta Brigada, con sede en Bucaramanga, Santander, también tuvo una actitud pasiva frente a la ofensiva de los grupos paramilitares. Estos grupos ocuparon una docena de pueblos a orillas del río Magdalena y tomaron por primera vez una ciudad importante, Barrancabermeja. Tanto las autoridades policiales como las militares se mostraron despreocupadas ante estos hechos.

En la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997 por los grupos paramilitares, puede comprobarse también la relación de estos grupos con la Séptima Brigada al mando del General Jaime Uscátegui¹⁷¹. La investigación civil posterior mostró que las tropas a cargo del General Jaime Uscátegui recibieron en el aeropuerto de San José del Guaviare a paramilitares que llegaron en avión, les ayudaron a cargar camiones y se aseguraron de que las tropas locales que podían haber hecho frente a los paramilitares se mantuvieran ocupadas en otro lugar. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General investigó el caso y concluyó que las tropas al mando del General Jaime Uscátegui se mantenían en "estrecha relación y comunicación" con los paramilitares que llevaron a cabo la masacre.

La brigada decimotercera también estuvo relacionada con grupos paramilitares. Uno de esos hechos que prueban esta relación fueron los asesinatos de los trabajadores del CINEP en 1997 y el de Valle, defensor de los derechos humanos de Antioquia, en 1998 — las pruebas reunidas por los investigadores del gobierno sugieren claramente que la inteligencia militar actuó en coordinación con Carlos Castaño. Dado que Castaño no cuenta con una fuerza capaz de operar en las ciudades, contrata a La Terraza para cometer estos asesinatos.¹⁷²

En último lugar, es importante destacar el papel que jugó la Vigésima Cuarta Brigada con sede en el departamento de Putumayo. Esta brigada coordinó acciones con los grupos paramilitares y

¹⁷¹ Leonardo Iván Cortés, residente, Juez Local y testigo del ataque, trató de alertar a las autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas, con mensajes urgentes que describían los macabros acontecimientos que sucedieron durante cinco días. Más de treinta personas resultaron muertas según distintas informaciones. El Juez Cortés declaró al semanal *Cambio 16*: "Cada anochecer asesinan a grupos de cinco o seis personas indefensas, que son cruel y monstruosamente masacradas, previa tortura. Se escuchan gritos de gentes humildes, clamando piedad y pidiendo auxilio".

¹⁷² Según los investigadores del gobierno, Castaño paga un contrato mensual a La Terraza. Los investigadores creen que una vez que se identifica un objetivo y se negocia un "contrato" con La Terraza, los sicarios reciben inteligencia recopilada por el Ejército sobre el paradero y los movimientos del objetivo. Los asesinos pueden viajar por toda Colombia y suelen trabajar por parejas. La pareja, a bordo de una motocicleta, sigue al objetivo hasta que está lista para ejecutar el atentado. Los investigadores del gobierno dijeron a Human Rights Watch que el sistema de inteligencia mantenido por La Terraza es excelente y tiene cobertura nacional. Dependen en parte de los taxistas para reunir inteligencia, y han sido implicados en amenazas de muerte contra investigadores del gobierno, entre ellos miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General.

recibieron pagos de ellos a cambio de su cooperación. Esta relación se mantuvo incluso con la llegada de Estados Unidos a la zona. Los batallones antinarcóticos colombianos creados con asistencia de seguridad y financiación de Estados Unidos y entrenados por las fuerzas armadas estadounidenses se coordinaron activamente con esta Brigada, utilizando sus instalaciones, inteligencia y apoyo logístico durante la "campana en el Sur de Colombia." En marzo de 2001, paramilitares del Putumayo se jactaban ante los periodistas visitantes de encabezar la ofensiva anticoca, tomando el control de las zonas por delante del Ejército para evitar que los guerrilleros dispararan a los aviones fumigadores. "El *Plan Colombia* sería prácticamente imposible sin la ayuda de las fuerzas de autodefensa [paramilitares]", dijo el comandante Wilson, miembro de las AUC al periódico *Boston Globe*¹⁷³.

Estas evidencias muestran claramente la relación entre los grupos paramilitares y determinadas brigadas de las Fuerzas Militares. La relación de cooperación a diferente escala demuestra la estrecha relación de estos dos grupos, la debilidad de la sociedad civil, desprotegida ante estos hechos y la pasividad de las autoridades políticas para atajar esta vinculación.

Dentro de la relación de los grupos paramilitares con determinados sectores de la sociedad civil y militar, destaca la relación que tuvieron con el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad¹⁷⁴. Se acusó al DAS de colaborar con narcotraficantes y paramilitares desde 2002, y compartir documentos e información, con el fin de matar e intimidar a activistas y sindicalistas, o ayudando a poderosos narcotraficantes para eludir procesos legales y asesinar informantes. Un apunte adicional es que según confesiones de Carlos Castaño, la colaboración entre el DAS y los grupos paramilitares habría que retrotraerse a cuando el DAS participó junto con el Ejército en la eliminación de Pablo Escobar y El Mexicano. En esta línea, Carlos Castaño señala que: "A principios de 1989 yo era ya un enemigo oculto de Escobar y le suministraba información al DAS. En este entonces se me conoció en la Central de Inteligencia como el informante Alekos, al que internamente llamaban El Fantasma, de lo cual hay registros y grabaciones que lo comprueban. Para un sector de la Policía fui siempre conocido como Alex" (Aranguren, 2005).

¹⁷³ Disponible en www.boston.com, Karl Penhaul, "Outlaw role seen in Colombia effort", *Boston Globe*, 28 de marzo de 2001.

¹⁷⁴ El DAS cumple muchas funciones que en otros países tendrían que ser ejercidos por diferentes agencias, tales como controlar la migración en los aeropuertos y vigilar los movimientos de extranjeros en el país; proteger a importantes figuras de la política y hacer trabajo de inteligencia en el conflicto que atraviesa Colombia, además, ocasionalmente sus agentes combaten rebeldes al lado del ejército. Así mismo, se desempeña como un organismo de policía secreta que puede arrestar e intimidar a cualquiera que sea una amenaza para la seguridad nacional. El DAS no es un organismo que forma parte de otras entidades de justicia en Colombia como la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Defensa, sino que está directamente controlado por la oficina de la Presidencia de la República.

La Fiscalía y la Procuraduría colombiana han llegado a la conclusión que hubo una profunda infiltración paramilitar en el seno del DAS. Desde el año 2005, muchos periódicos como El Tiempo y Semana han profundizado en las relaciones de funcionarios de esta agencia y grupos paramilitares. Hasta este momento han sido encarcelados, imputados e investigados varios cargos del DAS. Entre ellos Rafael García, que perdió su cargo como jefe de informática, después de ser acusado de aceptar sobornos por parte de narcos y paramilitares¹⁷⁵. Ahora afirma que el DAS ha trabajado por años, al menos desde que Uribe fue elegido en el 2002, en conjunto con los paramilitares y narcotraficantes, compartiendo documentos e información, con el fin de matar e intimidar a activistas y sindicalistas, o ayudando a poderosos narcotraficantes para eludir procesos legales y asesinar informantes¹⁷⁶. En su declaración ante los magistrados informó de los compromisos que adquirió el DAS con el Bloque Norte paramilitar una vez se dio el nombramiento de Jorge Noguera como director de la institución. Uno de ellos era entregarles a las autodefensas una comisión que oscilaba entre el 5 y el 10 por ciento de toda la contratación del DAS. Noguera, según narró García, decidió canalizar una cantidad de recursos para la oficina de informática, de manera tal que pudieran hacer varios contratos a través de esa dependencia. ” “Fue así como entre 2003 y 2004 se invirtieron recursos por un monto aproximado de 24.000 millones de pesos, a través de la oficina de informática que yo dirigía”, concluyó Rafael García. Él confesó ser miembro del bloque norte de las autodefensas de Jorge 40 desde hace varios años y que Noguera sabía de estas relaciones non sanctas antes de nombrarlo en un cargo clave en el principal organismo de inteligencia del Estado.¹⁷⁷

Jorge Noguera, jefe del DAS, fue encarcelado y la Fiscalía lo acusó de concierto para delinquir agravado. Noguera renunció al DAS después de que se hubieran descubierto las grabaciones donde se discutían los presuntos planes de la agencia para entregar información de inteligencia a paramilitares. El Presidente Uribe, le asignó el consulado de Milán. Jorge Noguera es el único funcionario del gobierno del Presidente Álvaro Uribe que tuvo que renunciar dos veces. Dejó la dirección del DAS en medio de un escándalo de corrupción e infiltración de paramilitares y narcotraficantes en el principal organismo de inteligencia del Estado. Su nombramiento como cónsul en Milán le permitió dejar atrás la creciente tormenta. Pero la distancia no fue suficiente

¹⁷⁵ Rafael García fue capturado el 25 de enero de 2005, acusado de borrar del sistema las órdenes de captura, con fines de extradición, de cuatro colombianos, cambiar la identidad de algunos de ellos (reemplazándolos por nombres de mujeres) y modificar los movimientos migratorios de otras personas, quienes al parecer tendrían vínculos con narcotraficantes y paramilitares.

¹⁷⁶ “La narco policía secreta de Colombia” The narco News Bulletin, 1 de mayo de 2006.

¹⁷⁷ “Las tajadas del pastel de la contratación” Semana, n° 1282, 26 de noviembre de 2006.

para evadir el coletazo de sus polémicas actuaciones durante los tres años que estuvo al frente del DAS.

García le dijo a la Fiscalía que Noguera había puesto al DAS al servicio de 'Jorge 40' y Hernán Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las AUC a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial. En la medida que la Fiscalía corroboraba los hechos relatados por García, la credibilidad del testigo fue en aumento.

A esa verificación se sumaron dos episodios recientes que les dieron aun más peso probatorio. Primero, ante la Corte Suprema, el 21 de noviembre de 2006, y segundo, García ratificó todas estas acusaciones en un cara a cara con su antiguo jefe, en la Fiscalía. Sigifredo Puentes, un detective del DAS, le contó a la Fiscalía que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El exdetective agregó que Noguera paró, recién posesionado, una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Pero gracias a la información encontrada en el llamado computador de 'Jorge 40', se corroboró que había una estrecha colaboración de funcionarios del DAS con las AUC. En el ordenador se encontraron los nombres de más de 50 sindicalistas y líderes sociales que efectivamente fueron asesinados por los paramilitares.¹⁷⁸

El exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, también fue investigado por concierto para delinquir con los paramilitares. En la versión libre del jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que lo conoció en 1996 en un campamento del jefe de las AUC Carlos Castaño y desde entonces se encontraron en varias reuniones convocadas por diferentes jefes paramilitares. Mancuso señaló que el exfuncionario del DAS se presentó a las AUC como profesor de la Escuela Superior de Guerra, y como tal, les dio instrucción militar en más de una oportunidad. En junio de 2008, el jefe paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata alias 'El Iguano' también había hecho referencia a las clases que impartió Narváez a paramilitares en campamentos del Sur de Bolívar y Córdoba, coincidiendo con el relato de Mancuso. Mancuso aseguró que entre 1998 y 2002, Narváez, que para ese entonces se desempeñaba como profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictó una cátedra llamada “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?” a un grupo de paramilitares

¹⁷⁸ “Das-Gate” *Semana*, n° 1295, 24 de febrero de 2007.

entre los que se encontraban él y Carlos Castaño. El contenido de las cátedras iba orientado a justificar el exterminio de sectores sociales involucrados con la guerrilla, entre ellos, hacía énfasis en sindicatos, políticos activos y miembros desmovilizados de la guerrilla. También señaló que Narváez fue clave en el secuestro de la senadora liberal Piedad Córdoba. Según El Iguano, Narváez fue quien llevó a Carlos Castaño varias grabaciones entre la parlamentaria y el jefe guerrillero Francisco Galán, en las que criticaban al exjefe de las AUC. El 19 de octubre de 2009 Narváez fue vinculado a los asesinatos de Jaime Garzón y el senador de la UP, Manuel Cepeda Vargas.¹⁷⁹

Otro funcionarios fueron investigados por sus nexos con los grupos paramilitares como Rómulo Betancourt, quien hasta el 30 de noviembre de 2005 dirigió la seccional del DAS –Departamento Administrativo de Seguridad- en el departamento de Bolívar, fue acusado de presuntos nexos con grupos paramilitares por el exjefe de informática del DAS, Rafael García Torres, en sus declaraciones a la Fiscalía. También el director de inteligencia del DAS, Enrique Ariza, está siendo investigado por actos de corrupción relacionados con narcotraficantes y paramilitares. Según la revista *Semana*, Carlos Moreno, un detective declarado insubsistente, contactó al subdirector para contarle que el director de inteligencia le había ordenado comprar un expediente del narcotraficante Wílber Varela -alias “Jabón”- a un fiscal, por cinco millones de pesos. Moreno amenazó con denunciar el hecho ante un fiscal a cambio de su reintegro. Luego se retractó¹⁸⁰. Posteriormente el exsubdirector del DAS Narváez habló sobre una grabación que le fue entregada en 2005 por una agente del DAS, Sonia Rodríguez Briceño, en la que dos agentes de inteligencia del DAS conversaban sobre un supuesto plan de los paramilitares comandados por el jefe paramilitar Macaco para crear una agencia de inteligencia paralela al DAS que sería coordinada por Enrique Ariza, en ese momento, Director de Inteligencia del organismo.¹⁸¹

Estas detenciones e investigaciones ponen de manifiesto la complicidad de esta institución con los grupos paramilitares en organización conjunta de reuniones, tratos de favor, financiación, etc. De nuevo los grupos paramilitares infiltraron una institución de seguridad para acomodarla a sus intereses. Hasta septiembre de 2011 tres militares fueron investigados, dos fueron condenados y dos detenidos. Cuatro murieron durante el proceso de investigación y uno fue asesinado. Tres están siendo investigados pero aún hay nueve de ellos sin investigar (Listado 1, página 403).

¹⁷⁹ “Paras y narcos infiltraron el DAS: Narváez”, Revista Semana, jueves 20 de mayo de 2010.

¹⁸⁰ ¿Qué hacer con el DAS? *Fundación Ideas para la paz*, Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana Número 42/ 7 de abril de 2006

¹⁸¹ “Paras y narcos infiltraron el DAS: Narváez”, Revista Semana, jueves 20 de mayo de 2010.

Otra institución que también colaboró con los grupos paramilitares fue la DEA con sede en Bogotá. En diciembre de 2004, Thomas Kent, un abogado de la unidad de intervenciones telefónicas de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS) del Departamento de Justicia, realizó un documento donde señalaba que agentes de la DEA en el frente de la guerra contra las drogas en Colombia estaban en las nóminas de los traficantes de drogas, eran cómplices en los asesinatos de informantes que sabían demasiado y, directamente involucrados en ayudar a los paramilitares a lavar su dinero.¹⁸² Estas denuncias han sido conocidas pero ignoradas por las agencias de control del Departamento de Justicia. Según la propia agencia “la DEA toma muy seriamente las denuncias de mala conducta, abuso de poder o acciones criminales. Las acusaciones son extremadamente serias. La Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de la DEA está investigando esas acusaciones”¹⁸³ Hasta el momento no se tiene noticias de la conclusión de esta investigación por parte de la DEA.

En este contexto de colaborar con grupos armados, la CIA colaboró en la creación de los PEPES. Gracias a la Freedom Information Act de Estados Unidos se ha podido desclasificar documentos por parte National Security Archive donde se revela la relación entre Estados Unidos y la creación de grupos paramilitares. En estos documentos desclasificados se observa la relación que en 1993 estableció con el grupo criminal denominado Perseguidos por Pablo Escobar (Los Pepes) para acabar con el capo del narcotráfico. El Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos (IPS), uno de los más antiguos, progresistas y reconocidos centros de pensamiento norteamericano, en colaboración con el gabinete de abogados Brian Gaffney, son las organizaciones que lideran la demanda que se interpuso contra la agencia de inteligencia estadounidense ante la Corte Distrital de Washington. El investigador Michel Bowden, en su libro “Matando a Pablo”, sugirió conexiones entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Pablo Escobar Gaviria en 1993. También en 1994, en el libro, “¿A quién beneficia la cocaína?”, publicado por Tercer Mundo Editores, dos periodistas franceses sostuvieron que la agencia CIA había ayudado a crear el grupo Muerte A Secuestradores (MAS). Incluso llegaron a decir que les enseñó a los carteles a hacer terrorismo¹⁸⁴. Pero ahora con los documentos desclasificados por el grupo del investigador Michael Evans del National Security Archive se confirmó la relación entre la ayuda norteamericana de seguridad con un grupo paramilitar en

¹⁸² “La narco-policía secreta de Colombia”, *The Narco News Bulletin*, 1 de mayo de 2006.

¹⁸³ “Corrupción en la DEA”, *Revista Semana*, 20 de enero de 2006.

¹⁸⁴ ¿Cuál fue la relación de la DEA y la CIA con los Pepes? *El espectador*, 4 de junio de 2006.

Colombia¹⁸⁵. Estos documentos desclasificados certifican la relación entre la CIA de Estados Unidos, las Fuerzas Militares colombianas y el Bloque de Búsqueda creado por el Presidente Cesar Gaviria para dismantelar a Pablo Escobar y la relación a su vez con Fidel Castaño, líder y paramilitar del grupo los Pepes. Según Evans, los Pepes fueron un modelo de colaboración entre carteles de la droga, paramilitares y Fuerzas Militares colombianas que se convirtió, sobre todo una década después, en la mayor amenaza para la seguridad colombiana y para el programa de antinarcóticos de Estados Unidos. También señaló Evans que los Pepes fue el precursor del actual escándalo de la parapolítica¹⁸⁶.

Igualmente, la relación con el *Estado* permitió la creación y consolidación de grupos de autodefensa y paramilitares. Para ello no sólo se toleró el comportamiento de las instituciones del Ejército y la Policía, sino que incluso se adoptaron medidas legislativas que permitían a la población agruparse y armarse para su defensa en aquellas zonas donde la seguridad del Estado no podía hacerse presente. De estas apreciaciones surgieron la Ley 48 de 1968 que incluyó una norma que le permitió al Ministerio de Defensa armar a los civiles en apoyo a las Fuerzas Armadas y mediante el Decreto Ley 356, el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994) les dio vida a las denominadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Rural, Convivir. Sin embargo, hasta mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia declaró inexecutable la norma que permitía al Ministerio de Defensa armar a los civiles. El gobierno colombiano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en marzo de 2005, su responsabilidad por la violación a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las víctimas.

Las *autoridades políticas* también fueron penetradas por los grupos de paramilitares. Algunas eran afines al proyecto paramilitar y se aliaron en función de las exigencias de estos grupos. En otros casos, introdujeron a personas afines a los paramilitares en los concejos y alcaldías. Pero tras el proceso de desmovilización de estos grupos armados se evidenciaron las relaciones que estos grupos traían con determinados políticos. Las relaciones que hasta el momento se han puesto de manifiesto a través de las investigaciones de la Fiscalía y la Corte identifican que determinados políticos establecieron con los grupos paramilitares vínculos destinados a conformar grupos paramilitares, financiación de campañas electorales, negocios, contrataciones ilegales, desvío de fondos públicos a las arcas de los paras y establecieron ciertas reuniones en determinadas regiones. Según los datos del Gobierno, la Fiscalía adelantó en 2009 249 investigaciones, de los

¹⁸⁵ “Pacto con el diablo”, *Revista Semana*, 16 de febrero de 2008.

¹⁸⁶ Los documentos desclasificados por el National Security Archive pueden verse en <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB243/index.htm>

cuales 52 han sido condenados y 50 están siendo investigados. Cuarenta y ocho de ellos están capturados y treinta y dos están llamados a juicio. En las elecciones legislativas de 2006, el treinta y tres por ciento del Senado y el quince por ciento de la Cámara han sido judicializados por presuntos nexos paramilitares (Álvaro, 2009b). Posteriormente se tratará en profundidad este tema.

En último lugar, cabe señalar la implicación de ciertos miembros de la Iglesia con grupos paramilitares. El General retirado Rito Alejo del Río, investigado por nexos con grupos paramilitares, anunció que la Iglesia mantuvo relaciones con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia y que incluso recibió dádivas. Comentó que hay una escritura donde Carlos Castaño, jefe de las AUC, dio tierras a la Iglesia y que éste donó un terreno a monseñor Isaías Duarte¹⁸⁷. En otra ocasión el párroco Oscar Alberto Ortiz Henao de la Iglesia de San José del barrio El Limonar, en la localidad de San Antonio de Prado, cerca de Medellín, fue detenido por la Fiscalía por presuntos nexos con grupos paramilitares. Es la primera detención que se hace contra un religioso relacionado con estos grupos.¹⁸⁸

Estos aliados señalados se identifican con los constituyentes de la organización según la definición expuesta por Zald y McCarthy la cual los identifica como aquéllos que proporcionan recursos a la organización. De una u otra forma, estos apoyos contribuyeron con recursos materiales y humanos al desarrollo de estos grupos armados. Incluso, algunos de ellos pudieron pertenecer a los *constituyentes de conciencia*, es decir, aquellos que simpatizaban y contribuían con recursos. A este grupo pertenecían los narcotraficantes, algún miembro del Ejército y Policía y aquellos pertenecientes a las elites o autoridades gubernamentales que se identificaban con los grupos paramilitares.

En conclusión, la movilización de recursos es una herramienta indispensable para promover la organización y consolidación de un movimiento para el logro de sus objetivos. Los recursos forman parte de la estrategia de los movimientos para financiar sus actividades e invertirlas en negocios rentables para el grupo. Los grupos de paramilitares recurrieron a varias fuentes de financiación, tanto legales como ilegales, que pudieran otorgarle el financiamiento necesario para su movilización. El financiamiento obtenido fue debido en parte al apoyo de determinados sectores de la sociedad civil y militar que permitieron a estos grupos organizarse en redes

¹⁸⁷ RCN Radio, 2 de junio “General del Río afirma que la Iglesia apoyó a paramilitares”.

¹⁸⁸ El Espectador “Sacerdote fue detenido por presuntos nexos con paramilitares” 18 de abril 2010.

reticulares con un centro organizativo situado en las zonas rurales y elaborar las estrategias necesarias para controlar las zonas locales y regionales desde el punto de vista militar, económico y político.

García-Peña (2005) señala que en el diario *El Tiempo* publicó en el año 2000 una estimación del mantenimiento que suponían las operaciones y organización de los grupos paramilitares. Para ese año, la estimación de paramilitares era de 12.000 repartidos en 12 grupos, algo menos que lo estimado durante el proceso de desmovilización del gobierno de Uribe. Se evaluó que anualmente los grupos de paramilitares gastaban más de 100.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta que actualmente el número de paramilitares y de grupos es mayor, la cifra se doblaría considerablemente. Este volumen presupuestario nos indica el alto nivel de recursos que se precisa para el mantenimiento de estos grupos, pero por otro lado, esta cantidad revela el importante nivel organizativo indispensable para movilizar estos recursos en la consecución de la consolidación paramilitar.

4.4 Ideología y simbología paramilitar

Aunque en el apartado de ciclo de conflicto se citaron algunas ideas de los grupos paramilitares respecto a su origen y formación, en este apartado se estudia en profundidad las ideas y los símbolos de estos grupos paramilitares.

A través de informes, documentos y entrevistas se analizan las ideas y los símbolos de este grupo armado. A través de los testimonios escritos y verbales de los paramilitares se profundiza en su ideología, el surgimiento de estos grupos, su evolución y desmovilización. Mediante las cumbres, conferencias o comunicados de este grupo se describe el contenido del discurso, su posicionamiento frente a la opinión pública y se observa cómo piensan ellos de sí mismos, del Estado, de la Democracia y de otros actores. A través de estos elementos se observa que su discurso no es exclusivamente militar, sino también político, se perfilan objetivos de carácter político en su discurso. En este análisis de los documentos no se espera que exista una correspondencia, una relación entre lo que dicen y lo que hacen. Se asume que existen divergencias entre la teoría y la práctica y, por tanto, el objetivo de este apartado es evaluar cómo ellos miran al mundo y así mismos.

Los grupos paramilitares identificaron sus propios intereses y argumentaron que los intereses, las metas que persiguieron eran universales, pues beneficiaba a todos los colombianos. Ante la inoperancia del Estado y de las Fuerzas militares en su lucha contra la guerrilla, los paramilitares abanderaron esa lucha y se sacrificaron por la patria. Es decir, su lucha redundó en beneficio para la sociedad. Esta situación ahondó en su marco simbólico, en su ideología, al presentarse como defensores del Estado social de derecho y de la seguridad; ante esta situación señalaron a las guerrillas como principal adversario y posteriormente su discurso fue variando en su tratamiento al Estado y a las Fuerzas Militares y, en último lugar, las metas que perseguían redundaron en beneficio para la sociedad, al librarles de la guerrilla y a ayudar a instaurar el Estado. Así, y siguiendo a Touraine y Melucci (1996), estos grupos establecieron un marco simbólico respecto a su definición como grupo ante la situación indeseable, señalaron a sus adversarios e indicaron los beneficios de sus actuaciones para el resto de la sociedad colombiana. Por tanto, los paramilitares construyeron un marco simbólico sobre su origen, actuación, intereses y metas universales. Dentro del marco simbólico “el liderazgo de un movimiento proporciona los objetivos, el desarrollo de estrategias para la acción y para la formulación de la ideología” como recuerda Melucci (1996). Los diferentes líderes de las AUC o de sus frentes y bloques, como Castaño, Mancuso, Don Berna, Doblecerro etc., lideraron los intereses, estrategias, objetivos, representaron al grupo frente a sus adversarios y frente a la sociedad, como hicieron cuando fueron al Congreso. En definitiva, se establece una relación entre el líder y sus seguidores para lograr la cohesión del grupo, los recursos necesarios para la acción y reforzar su identidad y. Tiene que conseguir un equilibrio entre costes y beneficios.

Para estos grupos ha habido un cambio de concepción del Estado desde sus primeros documentos a los últimos. En la Primera Cumbre Nacional Movimiento Nacional de Autodefensas de Colombia se consideran aliadas del Estado, defensoras del sistema y respaldadas por el Estado en su creación. Sin embargo, después de la conformación de las AUC en 1997 su visión del Estado cambia pues se hace mucho más crítica sobre el papel que ha desempeñado en el desarrollo del país. Es decir, el abandono y la ineficiencia del Estado ha llevado a la creación de grupos armados con la diferencia de que la guerrilla quiere acabar con el Estado y los paramilitares quieren fortalecerlo para que se haga presente en todo el territorio nacional. En varios documentos, los paramilitares hacen alarde a que ellos surgieron dentro de la legalidad con el apoyo de la fuerza pública pero también de autoridades regionales y locales. Pero surgieron como grupos que proporcionaron defensa y seguridad ante la incapacidad del Estado y los abusos de la guerrilla. Por tanto, su origen se sitúa en la justificación de la defensa y seguridad de

determinados territorios y asumen obligaciones propias del Estado como el desarrollo de infraestructuras, seguridad y bienestar comunitario. En un documento emitido por el periódico El Tiempo manifiestan su afán de defensa de la sociedad y la inoperancia del Estado:

“...Ciertamente nosotros, ante el vacío negligente de Estado, luchamos contra un daño que lesionaba gravemente a la sociedad, causando igualmente mucho daño. Ahora, de ninguna manera queremos que este círculo perverso que un día nos atrapó a nosotros, mañana absorba la vida de otros colombianos...”¹⁸⁹

De igual manera, cuando Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza realizaron una visita al Congreso el 29 de julio de 2004, se produjo como parte de la negociación de paz entre las AUC y el gobierno del Presidente Álvaro Uribe y en medio de fuertes críticas de la izquierda:

"Como recompensa a nuestro sacrificio por la patria, haber liberado de la guerrilla a media república y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba, o la Nicaragua de otrora, no podemos recibir la cárcel," dijo Mancuso en su intervención ante congresistas y diplomáticos¹⁹⁰.

De esta manera, incluso antes del inicio del proceso de desmovilización, ellos han seguido manteniendo que se sacrificaron por los colombianos debido al terror producido por la guerrilla.

Sin embargo, los paramilitares también piensan que el Estado tiene que hacerse con las riendas de sus obligaciones, hacerse presentes en el territorio y garantizar seguridad y protección. Cuando un gobierno pueda asumir las responsabilidades de un Estado, ellos se retirarán. Mantienen que el Gobierno de Álvaro Uribe ha asumido por primera vez la lucha contra el terrorismo, el fortalecimiento del Estado y las instituciones. De esta manera lo explica Vicente Castaño a *Semana*:

“Convencer a todos los comandantes de entregar las armas. La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos El Estado sí puede garantizar la seguridad en las zonas en donde nosotros estamos. Si no lo hace es porque no quiere, le da pereza, o le da miedo cometer algún exceso de fuerza. Pero no es por

¹⁸⁹ Texto completo de la declaración emitida por los exjefes de las Autodefensas, El Tiempo, 23 de noviembre de 2006.

¹⁹⁰ “Paras en el Congreso” *Revista Semana*, 1 de agosto de 2004.

incapacidad. En donde el Estado quiere llegar, llega. Hay que obligar al Estado a que cumpla con sus funciones”¹⁹¹

En una carta del Bloque Central Centauros dirigida al Vicepresidente de la República Francisco Santos, hoy Presidente de Colombia, comenta que: “Hoy, Señor Vicepresidente, por primera vez en veintidós años, nuevamente tenemos la sensación de que existe el Estado (...) Nos sentimos desplazados y encandilados por el protagonismo central y dominante de las Fuerzas Armadas Institucionales (...) El Estado actual, vigoroso, presencial, tangible, personificado en el Gobierno del Presidente Uribe, nos ha hecho sentir algunas veces inútiles, innecesarios, insignificantes o indeseables en el conflicto armado colombiano. Esta impresión jamás la habíamos vivido, en el ya largo historial de veinte años de militancia armada en el campo de guerra. Por eso hoy, Señor Vicepresidente, nos entregamos por entero al propósito nacional de la reconciliación, con muestras muy sinceras de voluntad de paz” (BCB, 2003).

Junto con esta defensa de la sociedad, Carlos Castaño, también matiza que el secuestro y asesinato de su padre por las FARC fue el comienzo de todo. Así, comenzó su problema con las FARC. Durante los dos primeros años, los hermanos Castaño asesinaron a aquellos estuvieron involucrados en el asesinato de su padre pero después comenzaron a ser justicieros a tener una causa para defenderse de la guerrilla, por ello asumieron el papel de la defensa ante la inseguridad del Estado y los abusos de la guerrilla.

En “Mi confesión” (Aranguren, 2005), Carlos Castaño nos acerca a la vida de los grupos paramilitares a través de sus experiencias y recuerdos. Dentro de esta obra se detalla la ideología de este grupo armado. En esta obra, Castaño afirma que “somos un movimiento político militar de carácter civil antisubversivo respetuoso de las instituciones legales. Luchamos por alcanzar un Estado social de derecho”. Su objetivo es la subversión, según palabras de Castaño. Pues son las guerrillas las que han marcado la pauta y los paramilitares han respondido recíprocamente a esa agresión. Cuando convocaron la cuarta conferencia de las autodefensas afirmaron una serie de compromisos: entre ellos desligarse del narcotráfico y la reinstrucción de las tropas para reiterar que su único objetivo militar es la subversión y que “en ningún momento pueden perder el norte de que nuestra razón de ser Autodefensas es el Pueblo Colombiano, del cual somos parte”.

¹⁹¹ “Habla Vicente Castaño” *Revista Semana*, 16 de junio de 2005.

Efectivamente según estos discursos, la guerrilla es su objetivo. Pero este objetivo va cambiando pues evoluciona de un tratamiento militar a uno más político. En la Primera Cumbre se reflexiona sobre este actor y se pretende derrotarle militarmente para luego lograr una negociación con ellos. La guerrilla se observa como un actor principal en determinados territorios porque ha logrado espacios políticos. En la tercera y cuarta cumbre de las AUC realizadas en 1996 y 2001, respectivamente, y en la conformación de las AUC en 1997, se observa que la guerrilla aspira políticamente a tomar el poder, pero se considera que no tiene políticas para reformar la situación de los más débiles. Lo muestran como un actor que tiene intereses económicos y que le falta representatividad social y ha ido perdiendo en este proceso.

Dentro de esta obra destaca un comentario por relevante. En el capítulo sobre Salvatore Mancuso nos comenta que para Mancuso las autodefensas era una empresa: “Hay que buscar la excelencia, la competitividad, el desarrollo, la actuación y la armonía entre los empleados. Debe existir la autoevaluación y la toma de decisiones necesita ser compartida” dice Castaño. Mancuso fue empresario e impregnó a las autodefensas de este tipo de organización empresarial. Es decir, una organización donde se retribuya materialmente a los integrantes de la misma junto con una ideología, basados en este caso en un orden social perdido.

Respecto a su visión de la democracia, ellos se consideran defensores de este régimen. Sobre todo, a partir de su formación como AUC. De hecho demandan reformas sociales, económicas y culturales en el marco de la Constitución de 1991.

Aunque el origen de los paramilitares hay que buscarlo en su relación con las Fuerzas Militares, hay un cambio en su discurso respecto a esta institución. En los documentos de las primeras cumbres se denota un reconocimiento de su unión con esta institución pero ya aparece una crítica que se hace más evidente en documentos posteriores. Señalan la debilidad de las Fuerzas Militares para doblegar a la guerrilla por su incapacidad técnica, militar, estratégica y de recursos. Y por esta incapacidad es que los grupos paramilitares realizan el trabajo que esta institución no puede realizar. Por otra parte, intentan ganar independencia de esta institución para evitar que sigan refiriéndose a ellos como un apéndice de las Fuerzas Militares y mostrarse como un actor político independiente.

Desde el punto de vista de la táctica y la estrategia, hay diferencias en cada uno de sus discursos. En la Primera Cumbre nos habla de agrupar las autodefensas en torno a las Autodefensas de

Colombia conformando varios grupos como el Grupo de Autodefensa Urbano GRAU, El Grupo de Inteligencia GRIN y el Grupo de Apoyo Político GRAP. En la Tercera Cumbre es más específico y está relacionado con el tema central del encuentro sobre problemas estratégicos. Sin embargo, en el discurso de la formación de las AUC en 1997 denota la preocupación por los derechos humanos de la población civil e intenta no llevar el conflicto hacia ellos para crear un código de ética militar. Ya en 1997 se apela a buscar una salida civilizada al conflicto y desarrollar la convivencia y la seguridad ciudadana.

En numerosos comentarios Carlos Castaño hace alarde del progreso de los paramilitares en determinados territorios frente al fracaso de los políticos. En ese sentido comenta “en algunas regiones las autodefensas han demostrado que es posible mejorar las vías, la salud, el empleo, tener maestros y generar progreso en la región. Logramos lo que los políticos nunca alcanzaron, tener la región en el momento de desarrollo que nosotros la tenemos” (Aranguren, 2005). Un ejemplo que exponen es el desarrollo que ha sobrevenido en Urabá como consecuencia del asentamiento de los paramilitares del Bloque Central Bolívar. Según ellos el Urabá de hoy “rescatado para la economía nacional, zona de promisorias inversiones, de pujante comercio, refugio solaz de colombianos emprendedores, meca de gente laboriosa y laboratorio experimental de paz, entendimiento y armonía entre el capital como recurso privado de generación de empleo y los trabajadores, como recurso invaluable para la prosperidad de la empresa que lo genera.” De esta manera es como describen el Urabá con la llegada de los paramilitares del Urabá decadente, destruido y escenarios de peligrosas hostilidades entre el capital y el trabajo durante la época de la guerrilla (Bloque Central Bolívar, 2003).

En su relación con los políticos, ellos siempre han alardeado de la relación estrecha con los políticos de ámbito local, regional y nacional. De hecho en una entrevista a *Semana*, Vicente Castaño explica la relación entre ellos y los políticos¹⁹²:

“SEMANA: ¿Qué tan grande es la penetración de los paramilitares en la política?

Vicente Castaño: Hay una amistad con los políticos en las zonas en donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables.

¹⁹² “Habla Vicente Castaño” *Revista Semana*, 16 de junio de 2005

Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías.

SEMANA: Pero ahora que se avecinan las campañas políticas ¿cuál es la instrucción que le ha dado a los comandantes en las diferentes regiones?

Vicente Castaño: Tratar de aumentar nuestros amigos políticos sin importar el partido al que pertenezcan”.

En resumen, los paramilitares que han elaborado los diferentes discursos, reuniones, congresos etc., son, en su mayoría, discursos políticos. Es decir, se aprecia en estos documentos que quieren participar en política, apostar por el desarrollo del país. Comienzan a desarrollar una vocación política una vez que se han convertido en caciques locales. “Quieren participar en el desarrollo del país y porque empiezan con esa mentalidad, ven que tienen que mejorar las comunidades, como que adquieren esa vocación, eso lo van desarrollando cada uno de ellos cuando se convierten en caciques locales”, comenta la periodista Salud Hernández¹⁹³. Carlos Castaño, El Alemán, Doble Cero siempre tuvieron discurso político como el ejemplo del pacto de Ralito donde Jorge 40, Adolfo Paz, Santander Losada y Diego Vecino firmaron con otros políticos locales y regionales la creación de una Nueva Colombia “donde toda persona tiene derecho a la propiedad y tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad es nuestro desafío.”¹⁹⁴ Los jefes paramilitares se percataron de la utilidad del discurso político que produce en el resto de la tropa. Cuenta Salud Hernández que en los centros de entrenamiento paramilitar que duraban tres meses les daban clases de política, es decir, tenían un área de política. Es decir, fue una estrategia que montaron pues ellos no sólo tenían que tener “un ejército de matones” le dijo un comandante paramilitar a Salud Hernández en San Jorge (Antioquia). “Mire, usted no puede tener solamente matones, es que los mandos altos no se dan cuenta que tenemos que estar con la población ganándonosla, no solamente aterrorizándola, se la tiene que ganar. Todo eso se lo tienes que meter, les hay que decir que nosotros luchamos por un país mejor, en contra de la guerrilla...” Es decir, que el discurso político era parte del entrenamiento de la tropa de los paramilitares, era parte de su formación.

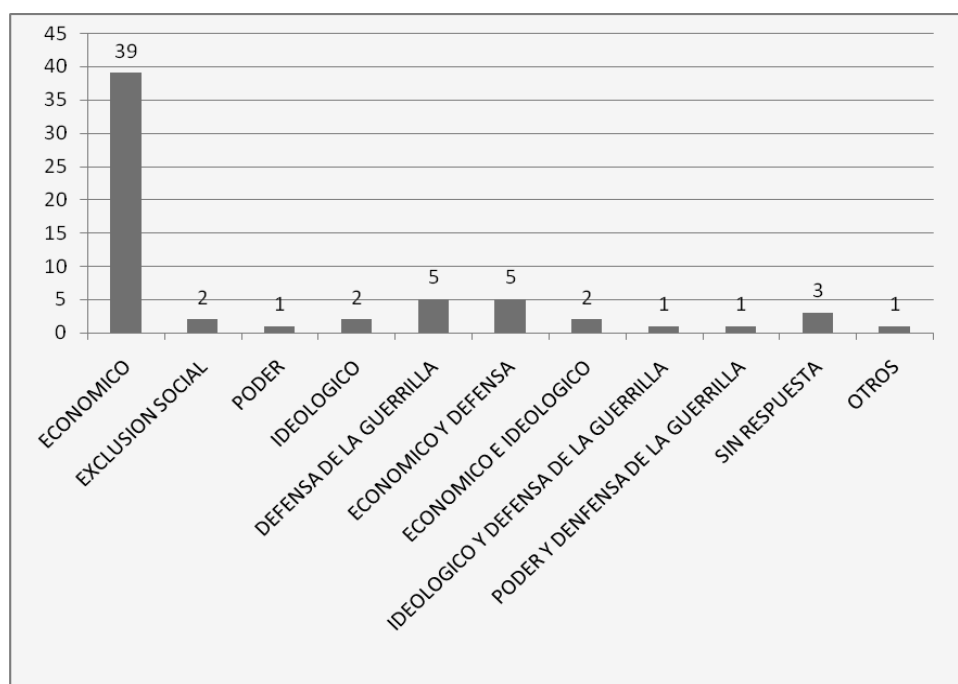
¹⁹³ Entrevista a Salud Hernández, 28 de julio de 2007, Bogotá.

¹⁹⁴ Pacto de Ralito, 23 de julio 2001.

Pero otra cuestión es pensar si el discurso político, era un aliciente para formar parte de un grupo armado. Es decir, si la política que ellos predicaban de crear un nuevo país, sin guerrilla, un nuevo pacto de Estado, era una idea tan convincente para la población colombiana como para ingresar en los grupos paramilitares. Según Salud Hernández mucha parte de la tropa entra por un salario, porque los paramilitares pagaban mejor que la guerrilla. Es decir, meterse a este grupo armado es una salida laboral para muchos. Además de darte un salario si morías en el campo de batalla, recogían su cuerpo y se lo enviaban a su casa. A la viuda le daban dinero por la pérdida de su esposo. Es decir, le daban derechos y permisos, como en el ejército. Hernández sigue comentando que ellos estaban convencidos de su pertenencia a las AUC, de su pertenencia a un buen ejército. A pesar de que la mayor parte entraba a este grupo por cuestiones económicas, según Salud Hernández, entre un 20% y un 30% ingresaba al grupo por cuestiones ideológicas o porque la guerrilla mató a un familiar, etc.

Esta idea que tiene la periodista Hernández se asemeja mucho a los resultados que derivaron de aplicar una encuesta realizada a sesenta y dos paramilitares del Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín en Moravia el 15 de agosto del 2007. En la encuesta anónima que se aplicó se preguntaba porqué motivo ingresaron al grupo paramilitar. El 62% de las respuestas coincidieron que habían ingresado por cuestiones económicas. Alguno señaló que no encontraba trabajo tras salir de prisión o porque no había mucha oferta laboral en su pueblo. El 3,2% ingresaron por cuestiones relacionadas con la exclusión social, es decir, se sentían marginados socialmente y encontraron en la incorporación a estos grupos armados una solución para salir de su marginalidad. Desde el punto de vista ideológico, tan sólo el 3.2% de los encuestados se unieron a estos grupos con el fin de crear un nuevo país, refundarlo, crear un nuevo contrato social entre los colombianos y el Estado. En este mismo orden de ideas el 8% se incorporó para defenderse de la guerrilla y defender a sus familias. Uno de los encuestados subrayó que le mataron a su padre, por eso se unió a los paramilitares. El 8% de los encuestados concluyen que se unieron por cuestiones económicas pero también de defensa de la guerrilla. Por tanto, se puede concluir que la mayor parte de los encuestados se unió a este grupo por cuestiones económicas y, en segunda opción, por defenderse de la guerrilla (Figura 28).

Figura 28. Motivos para incorporarse al grupo paramilitar



Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas a grupos paramilitares, Moravia (Antioquia), 2007.

En cuanto a los símbolos que utilizó este grupo armado, en primer lugar, fue reconocerse como un mismo grupo armado bajo unas mismas siglas: Autodefensas Unidas de Colombia. Y bajo un mismo líder, Carlos Castaño, aunque no el único. Uno de los símbolos determinantes de este grupo fue un mapa de Colombia con un campesino sembrando la tierra fue la imagen que vendieron (Figura 29). Junto a este símbolo, también utilizaron otras dos banderas relacionadas con las AUC. Una de ellas es el campesino sembrando con el fondo de la bandera tricolor colombiana y la otra se corresponde a las siglas de las AUC con fondo de color verde o con fondo de la bandera colombiana. Además, cada bloque o grupo de autodefensas tenía su propia bandera como el Bloque Central Bolívar, el Bloque Oriental, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el Bloque Tolima, Héroes de Granada, los Vencedores del Arauca, etc. De esta manera se ven como una organización estructurada y unificada alrededor de unas siglas pero que también conformada por otras organizaciones o bloques que representan el sentimiento de autonomía de cada uno de los grupos paramilitares.

Figura 29. Símbolo de las Autodefensas Unidas de Colombia



Su uniforme también fue objeto de distinción y asimilación como grupo de autodefensas. En sus acontecimientos públicos se les podía ver con uniforme de camuflaje, bien armados, y luciendo un brazalete con las siglas de las AUC o de cada bloque determinado. La impresión que querían dar es la de estar al frente de un ejército armado y bien organizado, sin perder detalle de su indumentaria (Figura 30 y 31).

Figura 30. Grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar



Fuente: Radio Francia Internacional, 2010.

Figura 31. Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Colombianas de Córdoba y Urabá



Fuente: El País, 2008.

Por tanto, para los grupos de paramilitares se hace importante tanto la identidad de grupo como el poder, es decir, la lógica expresiva e instrumental de Rucht (2003). Para este grupo es importante las decisiones, el control del poder político pero también la identidad personal, los roles de cada miembro. Se unen en estos grupos las dos lógicas de actuación.

4.5 El ascenso de los grupos paramilitares en el ámbito político

Para analizar la intromisión de los paramilitares en el ámbito político es imprescindible preguntarse por el contexto colombiano de los años ochenta y noventa. Las diversas informaciones que encontramos en la prensa sobre la relación de políticos y paramilitares tienen su origen en el desarrollo político-social colombiano de los años ochenta y noventa del siglo XX. Por tanto, en este apartado se encuentran las claves de la evolución y relación de estos dos actores y sus consecuencias sobre la política y sociedad colombiana. La crisis de legitimidad de los años ochenta y la elaboración de una nueva Constitución en 1991 acentuaron la polarización del conflicto armado y la búsqueda de nuevas opciones para expandir el control de los paramilitares sobre el territorio colombiano.

Durante los años ochenta, Colombia vivió una crisis generalizada de la vida política que tuvo su origen en la manera concreta en cómo se ha legitimado la actividad política desde los orígenes de la república en el siglo XIX hasta nuestros días y en la manera de cómo el Estado se ha relacionado con la sociedad civil a través de la actividad política. El resultado fue una crisis del

sistema bipartidista, aumento de la violencia por los vacíos que dejó el Estado en la sociedad, profundización del clientelismo y pérdida del monopolio de la fuerza legítima.

Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990) se intentó una relegitimación del régimen y la repolitización del país. Por primera vez, el gobierno de Betancur reconoció el carácter político de fenómenos que habían sido tratados de manera administrativa, técnica o burocrática, por ejemplo a las guerrillas se les dio un status político al igual que a otros problemas sociales como el desempleo. La estrategia de paz de Betancur con su insistencia en una salida negociada del conflicto y su reconocimiento de los factores objetivos de *La Violencia* y su rechazo a la represión como solución estaban dentro de esta perspectiva repolitizadora.¹⁹⁵

El gobierno de Barco (1986-1990) y su esquema gobierno-oposición pretendió repolitizar el país mediante la revitalización del sistema bipartidista que se lograba confrontando al partido del gobierno con el de la oposición, integrando todos los conflictos sociales y políticos analizados por una oposición institucionalizada. La elección popular de alcaldes y gobernadores fue un paso hacia la tan deseada repolitización¹⁹⁶. En este tiempo, la población colombiana ya había experimentado nuevas experiencias democráticas de participación. Con este ambiente, el gobierno de Barco impulsó la reforma de la Constitución de 1886. Esta apelación se presentó como un intento de repolitizar y relegitimar el régimen para solucionar el desfase entre la institucionalidad formal del Estado y los procesos de modernización social, cultural y económica que se estaban produciendo en la sociedad colombiana a través de mecanismos de democracia directa.

La Constitución de 1991 fue una respuesta a la situación política que progresivamente se deterioró desde la terminación del Frente Nacional y cuyo objetivo fue reforzar el proceso de

¹⁹⁵ Algunas figuras de la izquierda formaron parte del nuevo liberalismo que guiaron la reconstitución democrática del Partido Liberal. La situación de atomización y aparente desaparición de la nueva izquierda abrió nuevas perspectivas de reorganización de las fuerzas democráticas de izquierda. Durante este gobierno se registraron varios proyectos políticos de los grupos guerrilleros, así EPL proyectó el Frente Popular y el ELN, A Luchar. El resultado más positivo de su gobierno fue la creación y éxito político del partido Unión Patriótica (UP) y la reubicación de las fuerzas de la izquierda en la arena política.

¹⁹⁶ En las elecciones nacionales y regionales a partir de 1986 las fuerzas nuevas lograron avances significativos. Por ejemplo la UP triplicó la votación tradicional de las izquierdas y llevó al Congreso Nacional a 14 representantes. Pero la mejor votación en elecciones presidenciales la consiguió Jaime Pardo Leal en 1986 con un cuatro y medio por ciento bajo la Unión Patriótica (UP). Los representantes de MPR llegaron a un centenar de concejos y alcaldías. Sin embargo, la oligarquía bipartidista respondió con la violencia acostumbrada: la UP fue exterminada por sectores del Ejército, paramilitares y narcotraficantes enemigos de las FARC. Acabaron con la vida de Jaime Pardo y de tres mil militantes entre los que se encontraban congresistas, diputados, alcaldes y concejales.

modernización política y apertura democrática. La nueva Constitución llevó a cabo una reforma política con numerosos cambios en materia de principios, derechos y organización institucional para modernizar el sistema electoral, abrir el sistema de partidos a terceras fuerzas y promover la participación de los ciudadanos en política mediante mecanismos de democracia directa¹⁹⁷ (Hernández, 2006).

A pesar de estas consecuencias, la Constitución de 1991 contribuyó a complejizar el panorama del conflicto armado. Aunque tendió la mano a la desmovilización de determinados grupos armados, a largo plazo, aumentó el pie de fuerza tanto en las FARC, los paramilitares y como el ELN. Por su parte, los grupos paramilitares se expandieron y se consolidaron en determinados territorios. Además no sólo crecieron en número y expansión territorial, sino que fortalecieron sus redes en el ámbito político, con diferentes alianzas en el nivel local, regional y nacional de gobierno. Por otra parte, la Constitución dio vía libre para la creación de partidos políticos, de tal manera que personalizaron los partidos políticos en multientpresas electorales. Respecto a este tema, Rafael Pardo, Exministro de Defensa y Exsenador por el Partido Liberal, comentó que “Colombia tiene un sistema político individualista y fraccionado, donde los candidatos son los dueños de su propia campaña y su propia manera de hacer política. Los partidos le dan el nombre pero los que hacen la política son las personas. Este sistema hace que sea muy vulnerable a la penetración de grupos de intereses ilícitos, armados, ilegales o empresas legales que buscan tener captura parcial del Estado”¹⁹⁸. Por tanto, estas medidas provocaron un mayor acercamiento de los paramilitares al ámbito político. A continuación, se analiza esta situación.

La descentralización política llevada a cabo en Colombia para potenciar los gobiernos locales y regionales, complicó el sistema de partidos políticos en su dimensión regional y local desde el punto de vista de la distribución territorial del poder. Con la descentralización se produjo una mayor oferta de opciones político-partidistas¹⁹⁹ y la Constitución de 1991 otorgó mayor libertad

¹⁹⁷ Entre las reformas políticas introducidas en la carta destacaron: elección popular de gobernadores, circunscripción nacional del Senado, financiación pública de campañas, partidos y movimientos y representación de las minorías. Se crearon nuevas instituciones de gran significado político como la Vicepresidencia. Se tomaron medidas que restaron protagonismo a las instituciones informales como la prohibición de la re-elección presidencial, así se disminuyó el liderazgo de los expresidentes sobre sus partidos.

¹⁹⁸ Entrevista a Rafael Pardo, 29 de junio de 2009, Fundación José Ortega y Gasset, Madrid.

¹⁹⁹ Entre las nuevas opciones políticas destaca las siguientes opciones: PDA, Partido Convergencia Ciudadana (PCC), Partido Cambio Radical (PCR), Partido de Unidad Nacional o Partido 'De la U' (PUN), Partido Colombia Democrática (PCD), Movimiento Colombia Viva (MCV), Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), Movimiento Apertura Liberal (MAL), Movimiento Alas Equipo Colombia (A-EC), Partido Opción Centro (OC), Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Movimiento Alianza Social Indígena (ASI), Movimiento Político "AFROUNINCCA", Movimiento Alianza Social Afrocolombiana, Movimiento Dejen Jugar al

para organizar partidos políticos. El resultado fue que a partir de 1988 se configuraron subsistemas regionales de partido que van desde el bipartidismo hasta el multipartidismo atenuado (Guzmán, 2004).

En este contexto, la Constitución de 1991 no requirió la organización de partidos políticos pues la ley prohibió que se estableciera exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos. Sólo en algunos estatutos de éstos se recogieron disposiciones relativas a la participación de afiliados en la selección de candidatos y en el nombramiento de autoridades internas mediante consultas internas o mediante convenciones y congresos. Pero en la práctica las decisiones fueron adoptadas por las propias directivas de los partidos. Es decir, los partidos contaron con sus estatutos tal y como marca la ley, pero en realidad tan sólo era una mera formalidad.

Estas medidas tomadas sobre la organización interna de los partidos y movimientos políticos permitieron la precipitación de los partidos tradicionales en un proceso de desintegración interna en grupos organizados alrededor de notables, grandes electores y caudillos regionales. Es decir, liberales y conservadores constituyeron partidos y movimientos políticos nuevos con personería jurídica. Así, accedieron a la financiación directa del Estado, inscribieron a candidatos a las elecciones y usufructuaron espacios gratuitos en los medios de comunicación masiva del Estado. Siguiendo a Eduardo Pizarro (Pizarro, 2002), la consecuencia de este nuevo marco legal fue la atomización interna de los partidos en microempresas electorales. Este proceso de atomización partidista tuvo su origen ya en el Frente Nacional, pero fue en los años noventa cuando se disparó llegando a alcanzar en 1998 un total de 316 listas para el Senado en representación de 80 partidos, movimientos o coaliciones (Álvaro, 2007).

¿Pero qué supuso esta fragmentación de los partidos políticos? Para Eduardo Pizarro (2002) supuso la ruptura de toda lógica. Pues cada elite emergente pudo elegir al partido político que se iba a lanzar. Es decir, el partido político no eligió a las elites políticas, sino que son estas mismas

Moreno, Partido Comunista Colombiano (PCC), Unión Patriótica (UP), Partido Visionario con Antanas Mockus, Partido Nacional Cristiano, Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista (PC de C-ML), Presentes por el Socialismo (PPS), Polo Democrático Independiente (PDI), Alianza Democrática M-19 (AD M-19), Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (MODEP), Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido del Trabajo de Colombia (moirista) (PTC(M), Grupo Comunista Revolucionario (GCR), Partido Social Colombiano, Movimiento Revolucionario Liberal, Alianza Nacional Popular (ANAPO), Nueva Fuerza Democrática, Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad C-4 y El país que soñamos.

elites las que señalaron “yo me voy a lanzar con el apoyo de tal partido”²⁰⁰. Es decir, se fragmentaron los partidos políticos y cada elite emergente se lanzó por el partido que quiso. La consecuencia lógica de esta fragmentación fue la dificultad para controlar los ingresos financieros electorales de todas las listas de partidos políticos y para controlar desde el Estado la organización de cada partido político. Otra consecuencia de esta fragmentación fue que los partidos políticos perdieron su capacidad para constituirse y proyectarse como una opción política de poder. Los partidos políticos terminan absorbidos por el burocratismo y los liderazgos personalistas. Las propuestas políticas se llenan de intereses personales y fragmentados. De esta manera el papel de los candidatos y políticos individuales es supremo. Así, los partidos colombianos se encuentran entre los más personalistas y atomizados del mundo. Los partidos han financiado proyectos personalistas a través de candidatos presidenciales, parlamentarios, departamentales, locales y sus campañas electorales. Por tanto, los partidos han perdido legitimidad como instancia de representación política y se han convertido en pequeñas empresas a favor de los intereses de los dirigentes políticos (Medellín, 2005).

Para frenar esta situación se expidieron dos leyes. Mediante el Acto Legislativo n.º 1 de 2003 o reforma política de 2003 se modificaron las reglas de juego electoral para acceder a los cargos de elección popular. Con ello esta ley buscaba la agrupación de los políticos para el ejercicio de la política mediante la introducción de un umbral mínimo (2%). Igualmente se buscó acabar con las campañas electorales individuales y establecer mecanismos para hacer más transparentes la financiación de las campañas políticas. De igual manera, el Congreso expidió la Ley 974 del 22 de julio de 2005 para reglamentar la actuación en bancada de los miembros de las corporaciones públicas (Congreso de la República, asambleas departamentales, concejos municipales, juntas administradoras locales) elegidas por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos. De esta manera sus miembros actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar decisiones al interior de las corporaciones (Hernández, 2006). Pero, como indica Jesús Bernal Amoroch, el personalismo se concentra en el vocero del partido o jefe del partido, por lo que no disminuye²⁰¹.

Esta fragmentación facilitó el ascenso de los grupos paramilitares en el ámbito político que hubiera sido impensable con partidos políticos organizados. Al existir en Colombia la facilidad para crear partidos políticos personalistas, los grupos paramilitares vieron en esta apertura una

²⁰⁰Entrevista a Eduardo Pizarro, 4 de julio de 2007, en la sede de la CNRR, Bogotá.

²⁰¹ Senador del Polo Democrático Alternativo. Entrevista realizada el 3 de agosto de 2007, en su despacho del Congreso.

opción para adentrarse en política. La prueba de este hecho es que la gran mayoría de los partidos políticos que se crearon tras la Constitución de 1991, sus miembros han sido o detenidos o investigados por nexos con grupos paramilitares. Con datos de mayo de 2012, casi el 60% de los partidos políticos relacionados con grupos paramilitares se crearon tras la apertura política de 1991. Por tanto, la apertura política fue también una manera de vincularse con más facilidad a determinadas elites emergentes y participar en el ámbito político.

El desarrollo político posterior a la Constitución de 1991 dio como resultado la coexistencia de diferentes lógicas de acción política, entre ellas la modernización selectiva de las instituciones del Estado, la semiautonomía de poderes locales y regionales frente a ellas, la presencia de actores armados ilegales en vastas partes del territorio, la penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana, la crisis de representación política y los intentos de reformas, que corresponden a diferentes estilos de relación entre la ciudadanía, las instituciones estatales y las diferentes modalidades de violencia. Por tanto, Colombia tiene diversidad de lógicas que se corresponden al grado de integración de cada región: orden institucionalizado en las regiones centralmente integradas, orden negociado con los poderes locales y regionales en regiones integradas a medias y violencia en las que están en proceso de integración. Buen gobierno en las primeras, negociación entre funcionarios estatales y poderes regionales en las segundas y lucha violenta por el control territorial en las terceras.

En este contexto, y a pesar de que algunos grupos armados se han desmovilizado y apenas unos pocos se dedicaron a la política como medio de reivindicar sus ideales, el conflicto armado continuó así como los grupos armados más potentes²⁰². El conflicto continúa para los miembros de las FARC, ELN y Paramilitares. Es decir, guerrilla y paramilitares siguieron siendo actores claves en el escenario estratégico colombiano. Por su parte, las guerrillas del ELN y FARC crecieron y se expandieron durante la década de los 80 y 90, sobre todo, a partir del creciente flujo de recursos económicos del narcotráfico y de la extorsión a autoridades locales y regionales para que enviaran los fondos públicos a disposición de las guerrillas. A partir de estos hechos las

²⁰² Durante esta apertura democrática, el gobierno de Virgilio Barco y de Cesar Gaviria reconocieron y reinsertaron políticamente a los grupos armados guerrilleros del M-19, EPL, MQL, Corriente de Renovación Socialista (CRS) del ELN, Patria Libre, PRT perteneciente al EPL y Autodefensa Obrera (ADO), Comandos Ernesto Rojas, Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, Movimiento Independiente Revolucionario -Comandos Armados (MIR-COAR) pero con las FARC las negociaciones estuvieron interrumpidas. Es decir, reintegró a la vida política democrática a grupos armados que posteriormente se transformaron en organizaciones políticas. Entre ellas surgieron como organizaciones AD M-19 y Movimiento 19 de Abril, Frente Popular, Esperanza, Paz y Libertad, CRS (Pardo, 2004). La Alianza Democrática prosiguió en campaña por el nuevo pacto social, para reivindicar un futuro de paz y un proyecto democrático, participativo y pluralista inspirado en el socialismo de los años 80.

guerrillas crearon sus bases sociales. Utilizaban su poder armados para desarrollar beneficios económicos y sociales a una comunidad a cambio de su apoyo político. Las FARC se expandieron militarmente con 9.500 combatientes en 1994, modernizaron su armamento y adoptaron la técnica de la guerra móvil. Por otra parte, el ELN tuvo en 1994 a 2460 hombres. Llevó a cabo la misma táctica que las FARC pero con escaso éxito por el freno al desarrollo militar del grupo.

Como anteriormente se ha comentado, los grupos paramilitares crecieron en número y extensión por Colombia y se organizaron en las AUC en 1997. Aprovecharon el proceso de paz de Pastrana para consolidarse en los territorios del norte de Colombia como actor hegemónico. Sin embargo, tras el proceso de desmovilización colectiva e individual de grupos armados durante el gobierno de Álvaro Uribe, se observó que durante este proceso creció una *nueva generación de paramilitares* a la sombra de este proceso.

Por tanto, tras la Constitución de 1991 y a pesar de que algunos de los grupos armados fueron desmovilizados y se incorporaron a la sociedad civil, el conflicto armado se endureció y siguieron actuando los tres actores. A pesar de que los paramilitares se desmovilizaron militarmente, el resto de sus estructuras no fueron desmovilizadas e incluso surgieron otros grupos armados en las mismas zonas donde operaron los paramilitares.

4.5.1 La parapolítica

Además de esos acontecimientos, otro proceso relacionado con los grupos armados fueron los escándalos de los nexos entre políticos y grupos armados. Una consecuencia del proceso de desmovilización fue el llamado proceso de parapolítica. Las relaciones que hasta el momento se han evidenciado a través de las investigaciones de la Fiscalía y la Corte identifican que determinados políticos establecieron con los grupos paramilitares relaciones destinadas a conformar grupos paramilitares, financiamiento de campañas electorales, negocios, contrataciones ilegales, desvío de fondos públicos a las arcas de los paras y establecieron ciertas reuniones en determinadas regiones²⁰³.

²⁰³ Cuando las Fuerzas Militares realizaron la operación contra las FARC y examinaron el ordenador de Raúl Reyes, encontraron nexos entre miembros de las FARC con políticos, este proceso se llamó farcpolítica. En la actualidad los siguientes políticos están siendo investigados por relaciones con este grupo armado: Los senadores Alexander López Maya, del Polo Democrático Alternativo (PDA); Luis Enrique Dussán, senador del PDA; Luis Fernando Velasco, senador liberal del Cauca; Carlos Julio González, senador liberal; Gloria Ramírez, del PDA; y Piedad Córdoba, del

Según el Senador Jorge Robledo, tendríamos que definir de una manera más precisa a qué nos referimos cuando hablamos de parapolítica. Comenta el senador “Pero si uno observa con más detenimiento por ahí lo que hay es paramilitarismo, parajusticia, paraalcaldes, paraempresarios, para.... Con esto lo que estoy intentando decir es que es un poder que permea a toda la sociedad colombiana y a una parte inmensa del Estado”²⁰⁴. Es decir, aunque los medios crearan el concepto parapolítica, no es sólo un concepto que afecta a la política o a los políticos, sino que abarca diferentes áreas de vida local, regional y nacional. En este sentido, desde el gobierno de Estados Unidos se habla de Para Gate, es decir, es una manera de vincular el gobierno del Presidente Uribe con los paramilitares. Entonces, según el Senador Robledo, estaríamos ante un parauribismo. “Yo acuñé esta frase...Ahora hay cinco nuevos empapelados, o sea hay nuevos empapelados, uno en la cárcel y los otros están siendo llamados por la Corte Suprema o por la Fiscalía. Todos uribistas. Algo así como el 94% de los presos son uribistas. Cada día que pasa los hechos demuestran que la palabra precisa no es parapolítica sino parauribismo”²⁰⁵ Cómo después se verá, casi el 56% de los políticos investigados son uribistas. Pero si es imprescindible dejar claro que independientemente que se denomine parapolítica o parauribismo, la relación con los paramilitares van más allá de establecer lazos con los políticos. En verdad, los lazos de los paramilitares son muy amplios y alcanzan a diferentes sectores de la sociedad. En este mismo capítulo ya vimos como establecieron redes con empresarios locales, nacionales o con empresas internacionales como Chiquita Brands. Pero sin duda las redes que más han tejido los grupos paramilitares han sido con los diferentes grupos políticos, tanto locales, regionales o nacionales. A continuación se analiza la relación entre paramilitares y políticos.

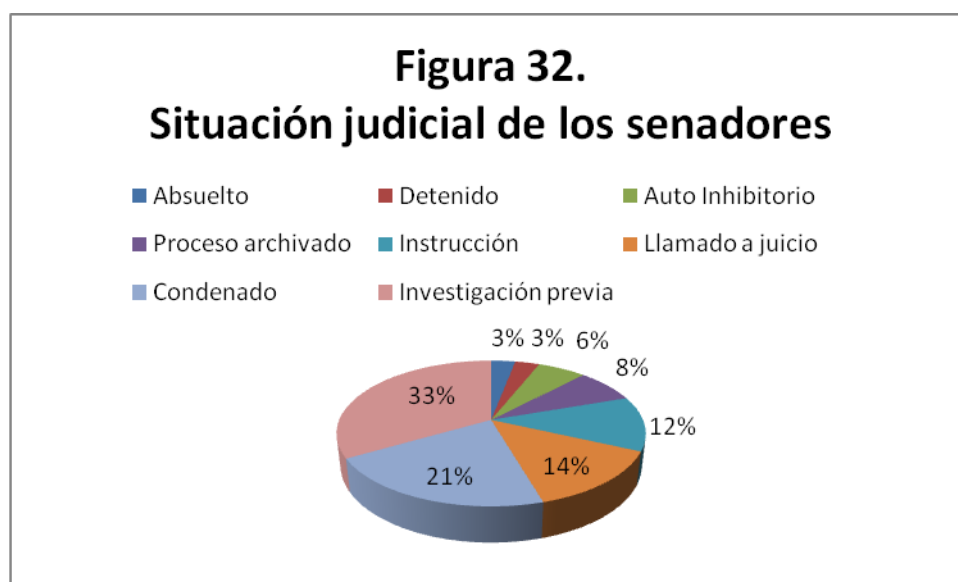
La siguiente investigación está basada en datos procedente de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Corporación Nuevo Arco Iris. Se ha recopilado esta información hasta mayo de 2012. Los siguientes datos no son absolutos pues las investigaciones sobre parapolítica siguen siendo investigadas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Por tanto es posible que las conclusiones que se muestran a continuación puedan modificarse por las futuras investigaciones que adelantan las instituciones mencionadas.

partido Liberal. Igualmente están vinculados los representantes Luis Fernando Almario, del Caquetá por el Movimiento de Participación Popular; y Wilson Borja, del PDA.

²⁰⁴ Entrevista al Senador Jorge Robledo, 24 de julio del 2007, Edificio Nuevo del Congreso, Bogotá.

²⁰⁵ Ibid.

La investigación de parapolítica con los senadores ha dado como resultado que sesenta y seis senadores hasta la fecha señalada desde la elección legislativa de 1998-2002 hasta la elección de 2006/2010 han sido investigados por nexos con grupos paramilitares. En la figura 32 se observa que el 33% de los senadores están siendo investigados, es decir, 22 senadores. El segundo dato relevante es que el 21% han sido condenados, es decir, 14 senadores han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia. A esta situación hay que añadir que dos senadores ya cumplieron su condena y están puestos en libertad. El tercer dato importante es que 8 senadores, que corresponde al 12% de éstos, están en la fase de instrucción sumarial. Tan sólo tres de los senadores, Guillermo Gaviria y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal y Carlos García del Partido de la U fueron absueltos por la Corte. Pero Guillermo Gaviria fue llamado nuevamente a juicio por la Corte Superior de Justicia (Listado 2, página 415).

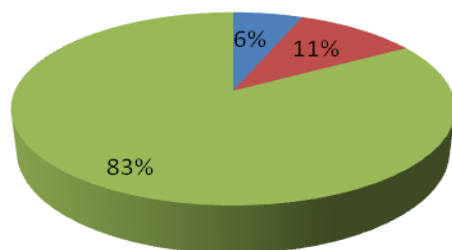


Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

Si analizamos las tres elecciones legislativas de 1998/2002, 2002/2006 y 2006/2010 se observa una evolución creciente en el número de senadores implicados. Si en las primeras elecciones fue del 6% lo que corresponde a cuatro senadores; en las elecciones de 2002/2006 aumenta a un 11% de los senadores (siete senadores) y finalmente, en la última elección asciende a un 83% de los senadores implicados, es decir a cincuenta y cinco senadores para un total de sesenta. En resumen, hay más senadores implicados en la relación con los paramilitares en la elección de 2006/2010. Estos resultados corresponden a los datos que hasta mayo de 2012 se ha recopilado (Figura 33).

Figura 33.
Senadores implicados en parapolítica

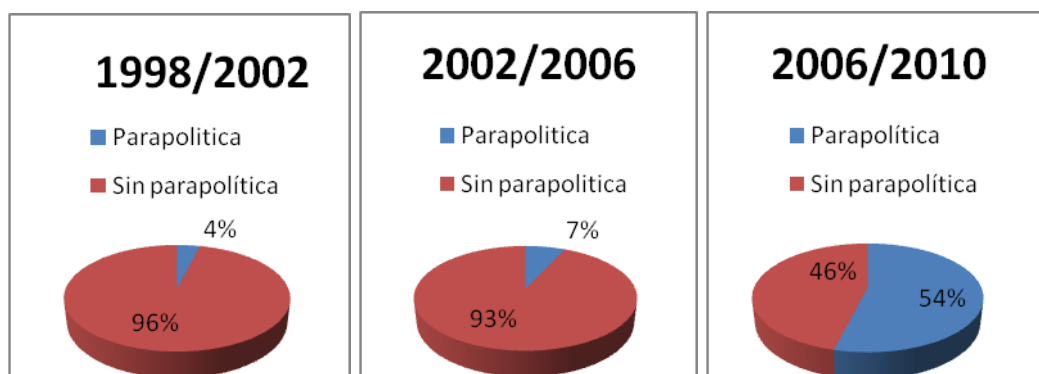
■ 1998/2002 ■ 2002/2006 ■ 2006/2010



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

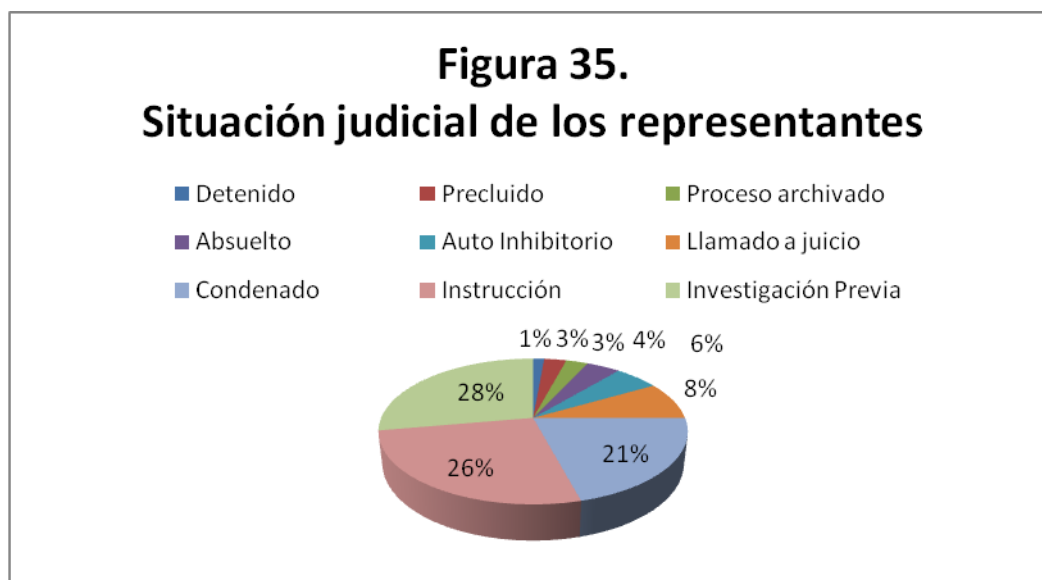
Si se compara el resultado de los senadores implicados por nexos con paramilitares al resto de los senadores que no han sido investigados, las conclusiones son muy relevantes. En la primera elección de 1998/2002 apenas un 4% de los senadores fueron implicados de parapolíticos, lo que corresponde a cuatro senadores. En la siguiente elección de 2002/2006 siete senadores fueron relacionados con paramilitares, lo que significa un 7%. Para la última elección de 2006/2010, el resultado es que el 54% de los senadores estaban implicados con nexos con grupos paramilitares, 55 senadores. Es decir, tan sólo el 46% de los senadores de esta última elección no han tenido relación con estos grupos hasta este momento. Este dato nos da una idea de la implicación a nivel nacional de este grupo armado. En su momento Salvatore Mancuso y Vicente Castaño relataron la gran red de amigos que tenían tanto en el Senado como en el Congreso. Esta investigación demuestra que al menos el 54% de los senadores durante la legislatura 2006/2010 tuvieron relación con estos grupos (Figura 34).

Figura 34. Senadores implicados en parapolítica



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

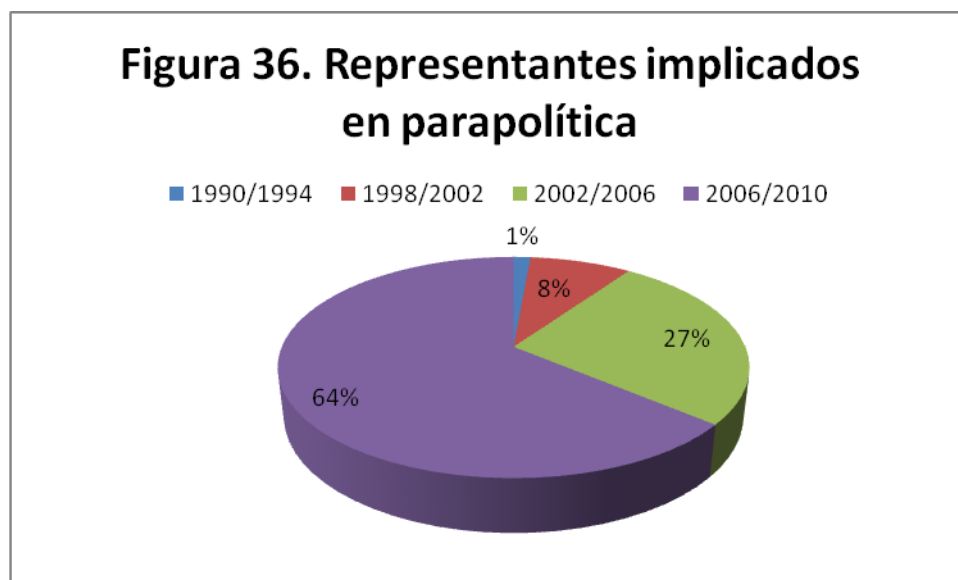
La investigación de parapolítica sobre los representantes a Cámara ha llevado a la conclusión hasta mayo de 2012 que setenta y dos representantes han sido investigados por nexos con grupos paramilitares desde la elección legislativa de 1990/1994 hasta 2006/2010 (Listado 3, página 423). Los datos más relevantes son que el 26% de los representantes investigados se encuentran en proceso de instrucción sumarial, es decir, 19 de ellos. El 28% de ellos están siendo investigados, lo que corresponde a 20 representantes y el 21% de ellos están condenados, un total de 15. El 4% de ellos han sido absueltos, 3 senadores. El senador de Tolima Gonzalo García, del Partido Conservador, fue absuelto, pero la Corte reabrió el caso y actualmente está condenado a 90 meses de prisión por su relación con el Bloque Tolima de las AUC (Figura 35).



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

Al analizar las diferentes elecciones legislativas se observa una evolución ascendente de menos representantes implicados en nexos con paramilitares a más representantes, al igual que en el caso de los senadores. Para la primera elección de 1990/1994 tan sólo uno ha sido acusado de nexos con los grupos paramilitares, el representante Cesar Pérez, del Partido Liberal. En la elección de 1994/1998 no se tiene ningún dato de representantes investigados por parapolítica. En la elección de 1998/2002 seis representantes fueron investigados, que corresponden al 8% del total de representantes investigados. Fueron los representantes del Partido Liberal Remberto Montes,

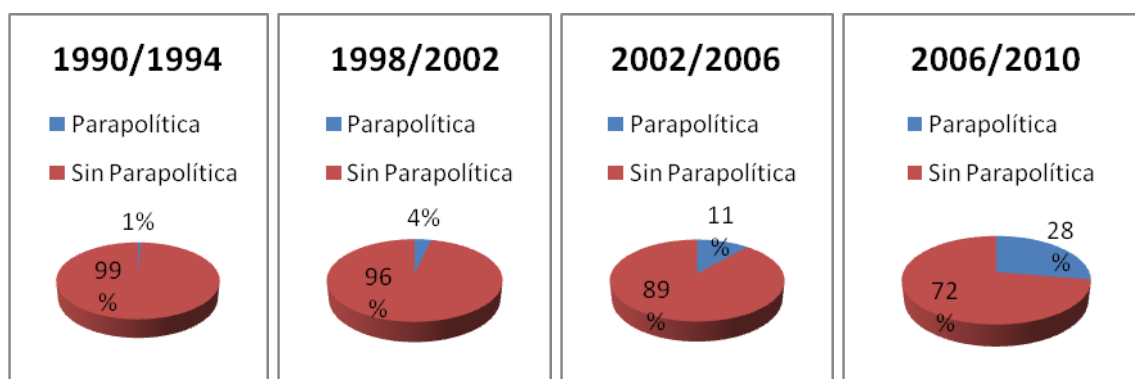
Luis José Álvarez, Enrique Rafael Caballero, Emilio Martínez, Francisco Rojas Birry de Alianza Social Indígena y José María Imbeth del Partido Conservador. En la elección del 2002/2006 el 27% de los representantes fueron investigados, 19 representantes. La última elección de 2006/2010, al igual que con los senadores, tiene el mayor porcentaje de representantes investigados, un 64%, que corresponde a 46 representantes a Cámara (Figura 36).



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

La comparación entre representantes que no se han visto implicados en los nexos con los grupos paramilitares y aquellos que sí mantuvieron alguna relación también es significativa, sobre todo, en la última elección. En el primer gráfico se observa que apenas un 1% de los representantes estaban implicados, es decir, sólo un representante. En la elección de 1998/2002 seis representantes estaban implicados, lo que corresponde al 4% de los representantes. En la tercera elección de 2002/2006, el 11% de los representantes, 19 en total, estuvieron implicados con estos grupos armados. Por último, la elección de 2006/2010, el 28% de los representantes estuvieron implicados, 46 representantes. Mientras que el 72% está, hasta este momento, libre de relación con los paramilitares (Figura 37).

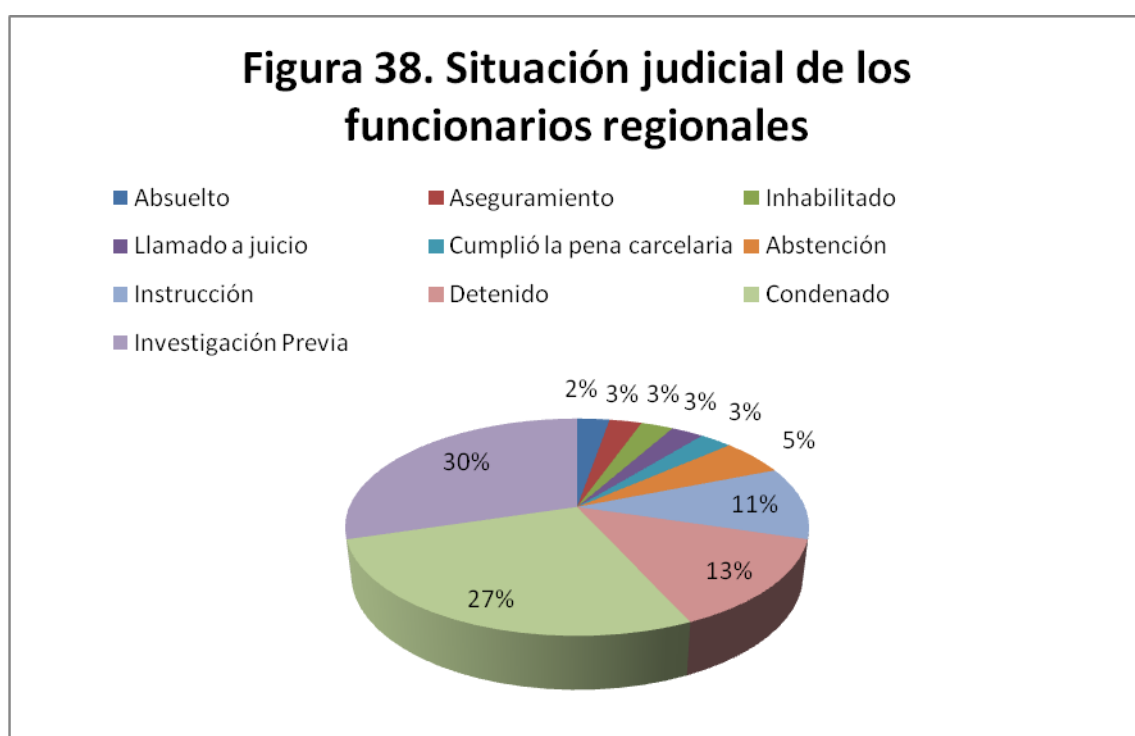
Figura 37. Representantes implicados en parapolítica



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

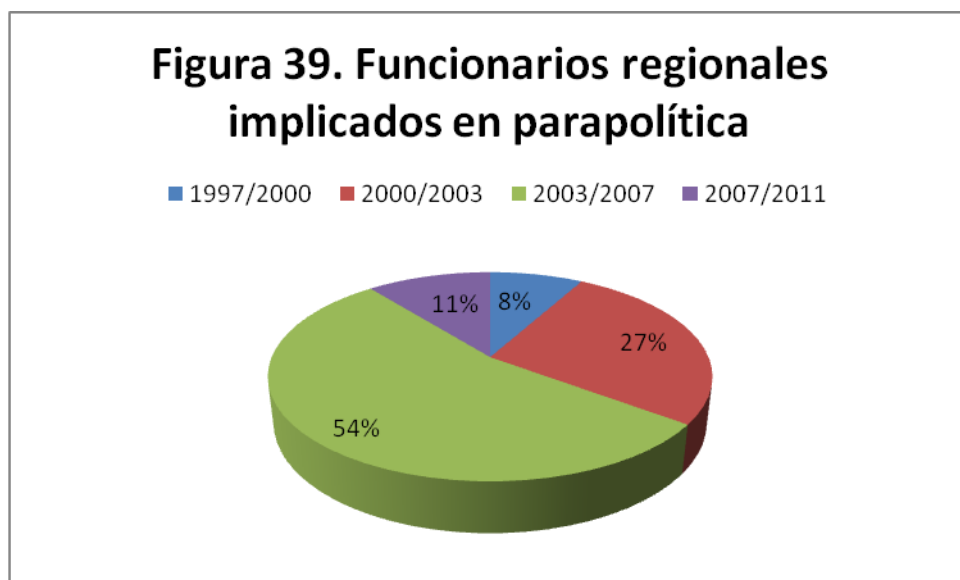
En el ámbito regional, los grupos paramilitares también establecieron nexos con funcionarios regionales que ahora son investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. En total, treinta y siete funcionarios regionales han sido investigados desde las elecciones de 1997/2000 hasta las del 2007/2011 (Listado 4, página 430). El 27% se encuentra condenado, 10 funcionarios. El 30% está siendo investigado por la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia y representa a 11 funcionarios. El 13% de los funcionarios implicados en parapolítica se encuentra detenidos. El 11% se encuentra en proceso de instrucción. Tanto gobernadores como exgobernadores y exdiputados han sido investigados (Figura 38).

Figura 38. Situación judicial de los funcionarios regionales



Fuente: elaboracion propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

Si se compara la relación de los funcionarios regionales entre los diferentes periodos legislativos, se observa que el 54% de los funcionarios investigados corresponden al periodo 2003/2007 que corresponde a veinte de los treinta y siete funcionarios implicados. El siguiente periodo con más funcionarios investigados es el 2000/2003 con el 27%. El periodo 2007/2011 supone el 11% de los funcionarios, es decir, cuatro funcionarios y para finalizar el periodo con menos funcionarios relacionados con paramilitares es 1997/2000 con un 8% de funcionarios implicados. A diferencia de la muestra de senadores y representantes, en esta muestra no hay una evolución de menos implicados a más implicados. Sino que el periodo 2003/2007 absorbe más de la mitad de los implicados, descendiendo en el siguiente periodo 2007/2011 (Figura 39).

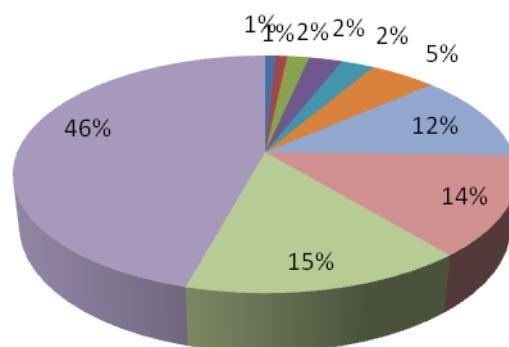


Fuente: elaboracion propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

En comparación con los funcionarios regionales, hasta este momento se han investigado a más funcionarios locales, en concreto a ciento dieciocho implicados en diferentes periodos legislativos y de diferentes departamentos (Listado 5, página 434). Alcaldes, exalcaldes, concejales y exconcejales han sido investigados por su relación con grupos paramilitares. De ellos el 46% está detenido, es decir hay cincuenta y cuatro funcionarios privados de su libertad. El 15 % está condenado, que corresponde a dieciocho funcionarios y el 14% está llamado a juicio. El 12 % está siendo investigado (Figura 40).

Figura 40. Situación judicial de los funcionarios locales

■ Destituido e inhabilitado ■ Cumplió la pena ■ Aseguramiento
 ■ Absuelto ■ Instrucción ■ Libertad provisional
 ■ Investigación Previa ■ Llamado a juicio ■ Condenado
 ■ Detenido

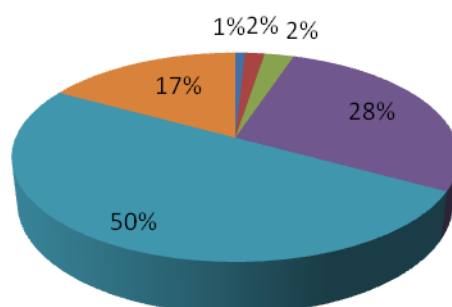


Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

Al igual que los funcionarios regionales, la mayor parte de los implicados de los funcionarios locales es para el periodo 2003/2007. El 50% de los implicados tuvieron relaciones con los grupos paramilitares. La influencia de la parapolítica en el ámbito local ha ido creciendo desde el periodo 1988/1991 hasta 2007/2011 como se aprecia en la siguiente figura.

Figura 41. Funcionarios locales implicados en parapolítica

■ 1988/1991 ■ 1994/1997 ■ 1997/2000 ■ 2000/2003 ■ 2003/2007 ■ 2007/2011



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

El análisis detallado de estos gráficos expuestos denota que el mayor número de funcionarios regionales y locales implicados fue durante el periodo 2003/2007. Sin embargo, el mayor número de senadores y representantes implicados fue durante el periodo 2006/2010. Es decir, es evidente que el objetivo inicial de los paramilitares es influir en el ámbito local y regional, sin descuidar el ámbito nacional. Pero este último ámbito fue más ampliamente influenciado una vez que consiguieron alcanzar el ámbito local y regional.

Por otro lado, el mayor porcentaje de implicados tanto en el ámbito local, regional y nacional corresponde al inicio del proceso de desmovilización paramilitar. Este proceso se inició en el año 2003 y culminó en diciembre de 2005. Durante este proceso la influencia de los paramilitares no dejó de crecer e incluso se acrecentó en el ámbito nacional pues el 64% de los representantes y el 83% de los senadores detenidos pertenecían al periodo posterior de la desmovilización, al periodo 2006/2010. Aunque en el ámbito local y regional se observa una reducción considerable de la influencia paramilitar para ese periodo, llegando al 16.9 % y 10.8 % de los funcionarios locales y regionales, sin embargo la influencia de parapolíticos regionales y locales es superior en las elecciones anteriores. Se evidencia que incluso también después del proceso de desmovilización siguió habiendo contactos y participación de los paramilitares en el ámbito local y regional. En resumen, durante el proceso de desmovilización y después de éste, paramilitares y políticos seguían ejerciendo influencia en el ámbito local, regional y nacional. Posiblemente el aumento de la influencia en el ámbito nacional tras el fin del proceso de desmovilización corresponda a la elección de una mayor consolidación y asentamiento de los paramilitares en un ámbito donde los recursos materiales son más cuantiosos y la influencia en la elaboración de políticas públicas a través de su influencia con los congresistas es más notoria y consecuente. Igualmente, como señala, Rafael Pardo, los paramilitares necesitaban tener presencia en el Congreso para que las normas sobre desmovilización les fueran favorables a ellos, por ello buscaron el acceso al poder político²⁰⁶.

Si analizamos el partido político al que pertenece cada senador se observa que el 82% pertenece a los partidos uribistas, es decir, al Partido de la U, Convergencia Ciudadana, Cambio Radical, ALAS, Partido Conservador, Colombia Viva, Apertura Liberal y Colombia Democrática.

²⁰⁶ Entrevista a Rafael Pardo, Exministro de Defensa y Exsenador del Partido Liberal, realizada en la Fundación José Ortega y Gasset, en Madrid, el 29 de junio de 2009.

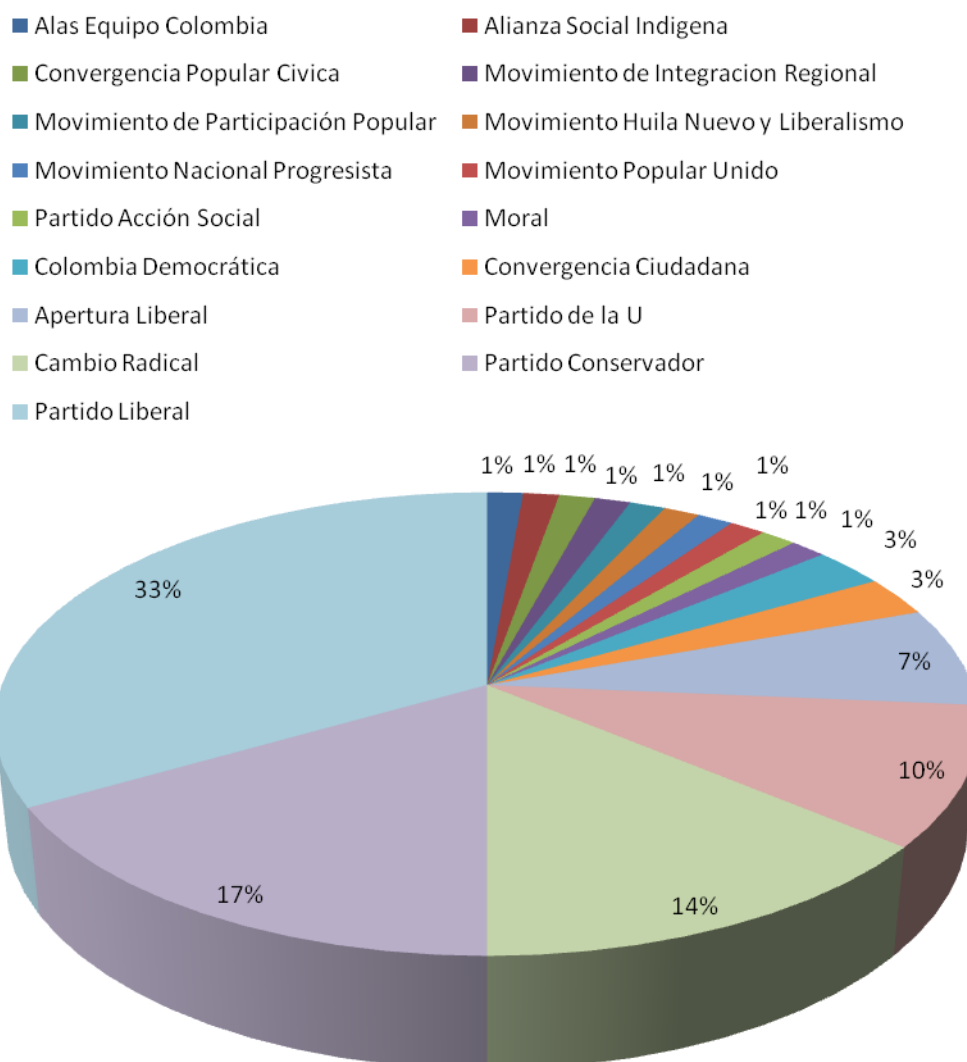
Cincuenta y cuatro senadores forman parte de esta coalición uribista implicados en nexos con grupos paramilitares. El 20% responden al Partido de la U y el 17% a Cambio Radical. El Partido Liberal está representado con un 15%, es decir, diez senadores están implicados con estos grupos (Figura 42).



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

De la misma manera, la suma de los representantes pertenecientes a los partidos uribistas es mayor que los representantes del Partido Liberal. A pesar de que el Partido Liberal cuenta con veinticuatro representantes implicados, la suma de los senadores uribistas alcanza los treinta y nueve senadores, lo que corresponde al 54% de los implicados. Aunque el porcentaje es menor que en los senadores, sin embargo no deja de asombrar que más del cincuenta por ciento de los representantes sean uribistas y estén implicados en parapolítica. El Partido Liberal asume el 33% de los representantes y el Partido Conservador, uribista, 17% de los representantes (Figura 43).

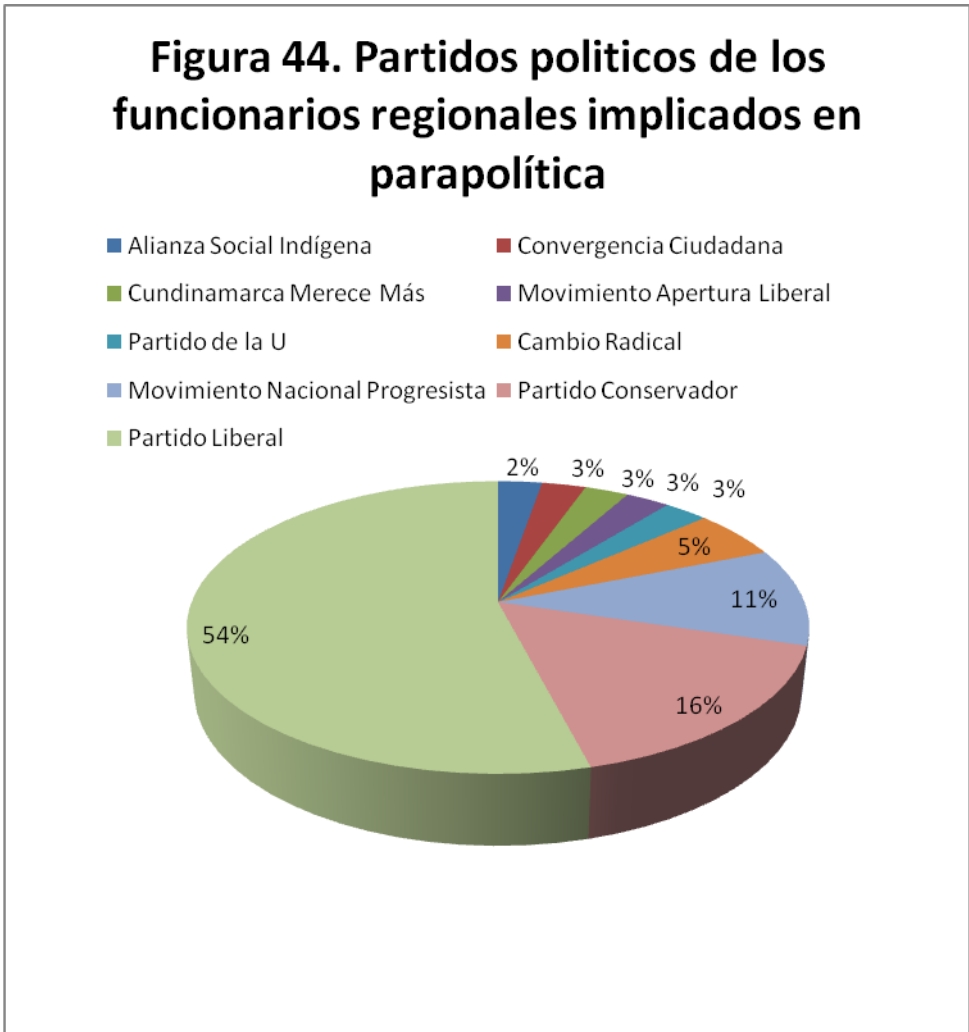
Figura 43. Partidos políticos de los Representantes a Cámara implicados en parapólica



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

Respecto a la implicación de los partidos políticos en el ámbito regional, más del cincuenta por ciento de los implicados pertenece al Partido Liberal, en concreto el 54% que corresponde a diecinueve representantes regionales. La suma de los partidos uribistas da un resultado del 29% de representantes implicados, siendo el partido conservador el que más representantes implicados tiene con seis representantes involucrados. Por tanto, en este análisis no se refleja que los partidos

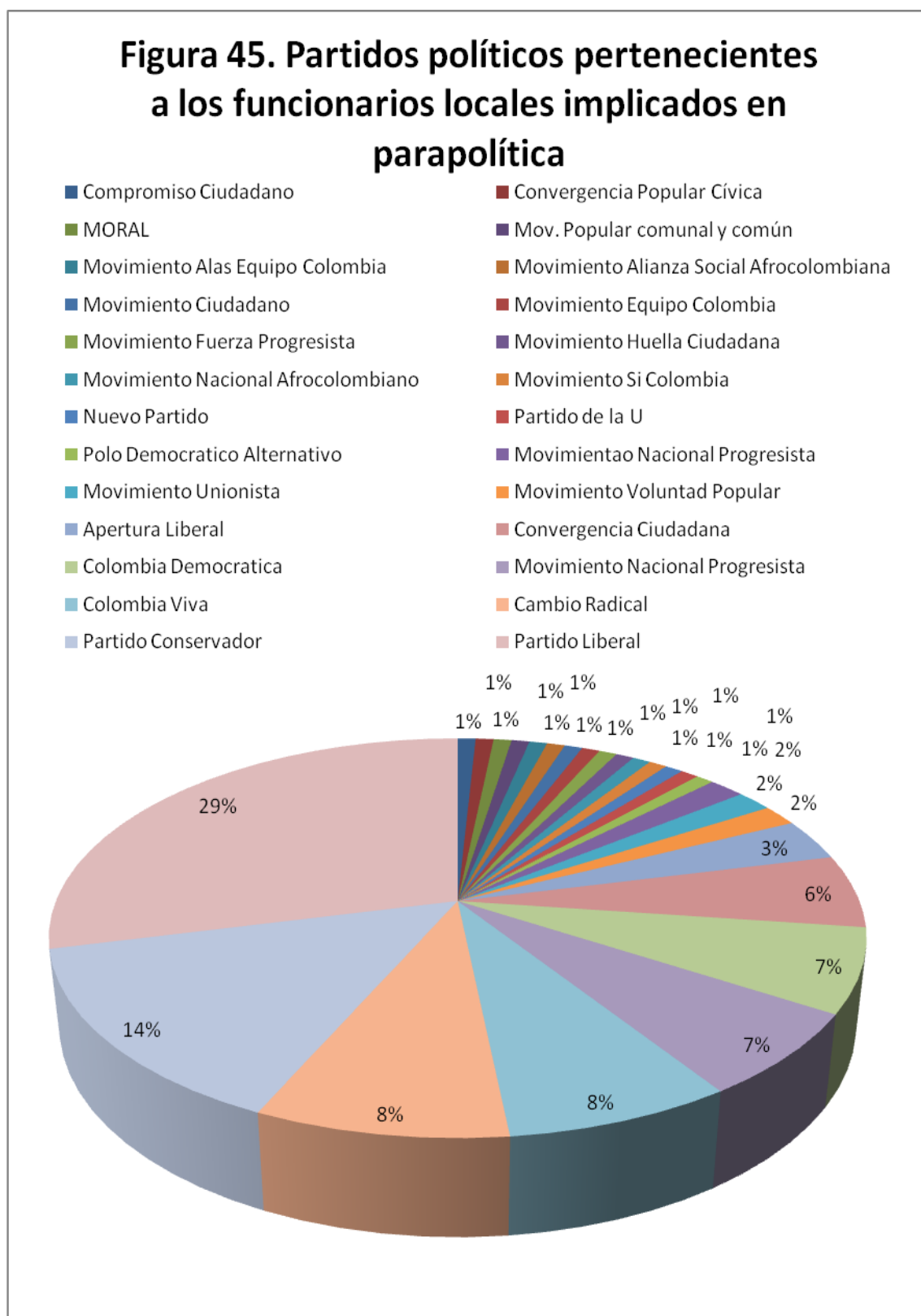
uribistas están más implicados que el resto de los partidos. En este caso el Partido Liberal tuvo más representantes comprometidos que el resto de partidos (Figura 44).



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

En el ámbito local, un 49% de los funcionarios locales implicados en nexos con grupos paramilitares pertenecieron a partidos uribistas. Irremediablemente después, el Partido Liberal se alzó con un 29% de los funcionarios locales. En este ámbito destaca la implicación de partidos pequeños a nivel local, pero que en consecuencia su peso es muy poco significativo. En este ámbito se encuentra por primera vez un representante del Polo Democrático Alternativo, partido de izquierda, Edgar Cote Gravino, investigado por nexos con los grupos paramilitares de Barrancabermeja comandados por “Ernesto Báez” que le apoyaron durante su campaña política y fue elegido director de la asociación AMIPAZ, asociación de ciento veinte alcaldes al servicio de

los grupos paramilitares para proteger su legado político de justificación de uso privado de la violencia (Figura 45).

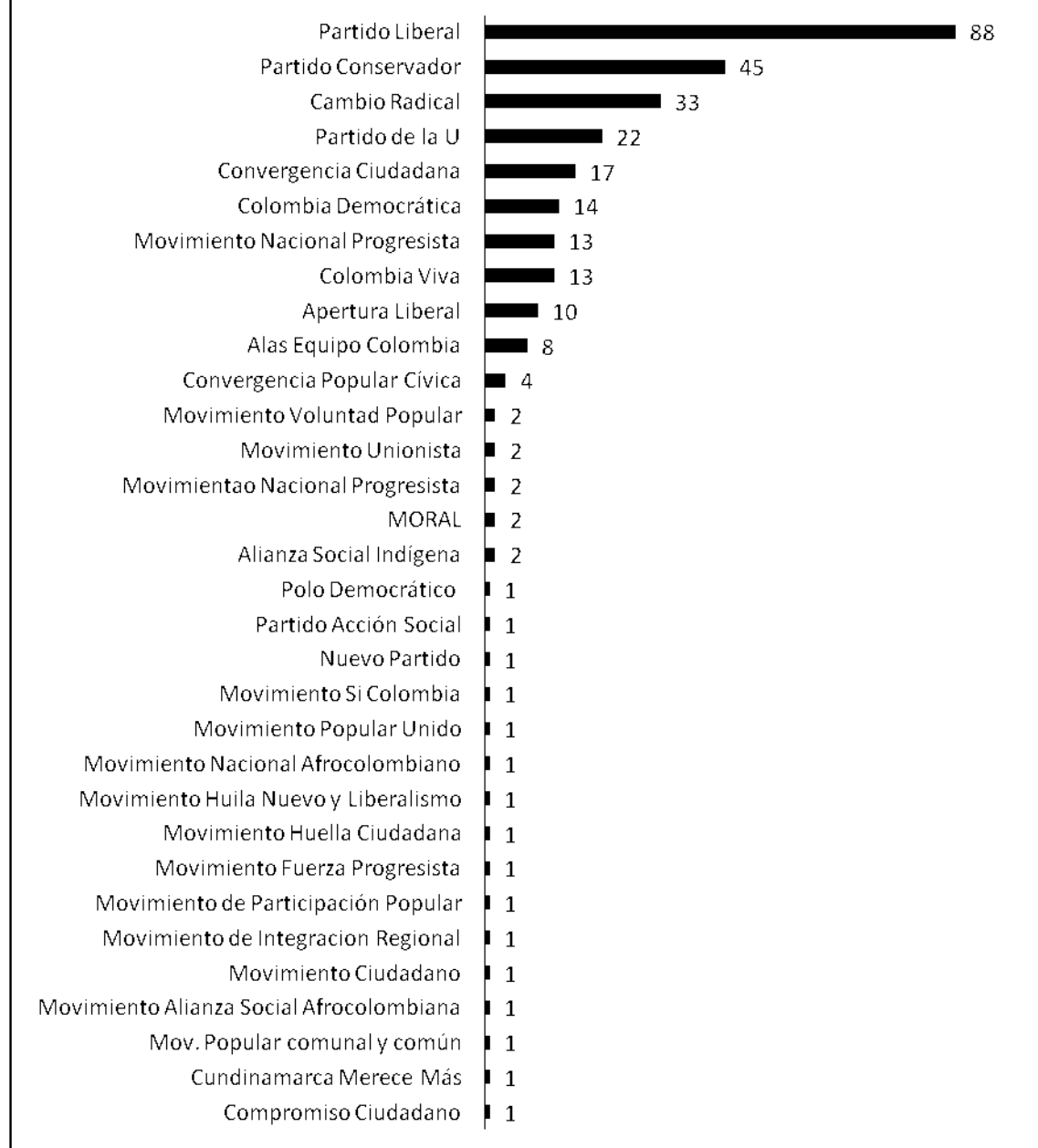


Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

Si se suma la totalidad de funcionarios políticos del ámbito nacional, regional y local se observa que el 55.29% de los implicados pertenece a la coalición uribista, siendo los partidos Cambio Radical y Partido Conservador los que más implicados tienen. Sin embargo, el partido con más implicados es el Partido Liberal, con ochenta y ocho funcionarios que corresponde al 30% del total. Por tanto, con los datos aportados es difícil evaluar y considerar que la mayor parte de los parapolíticos son uribistas, tal y como expresa algunos investigadores en la materia como Claudia López (2010). Se puede hablar de un cierto predominio pero no de un predominio absoluto de la coalición uribista frente a los grupos paramilitares.

En este punto, es importante recordar que, como se mencionó, los partidos políticos que hasta ahora sus miembros han sido señalados de apoyar a grupos paramilitares, fueron en su mayoría, salvo el Partido Liberal y el Partido Conservador, organizados tras la Constitución de 1991. Es decir, la Constitución permitió la apertura política que daba libertad para constituir un partido político. Tras esta medida hubo una explosión de nuevos partidos políticos o terceras fuerzas, avalados por esta Constitución. Así, durante la década de los noventa y hasta el año 2006, nacieron los treinta partidos implicados, que corresponden a un 57% del total de partidos implicados, mientras que los partidos tradicionales responden a un 43% del total. Por tanto, se puede decir que hay un ligero predominio de las terceras fuerzas en su influencia con grupos paramilitares. Sin embargo, los partidos tradicionales tienen un peso bastante importante en su cooperación con estos grupos, sobre todo del Partido Liberal, que no pertenece a la coalición uribista (Figura 46).

Figura 46. Partidos políticos y números de funcionarios implicados en parapolítica



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

En total, doscientos noventa y tres funcionarios han sido investigados por sus nexos con estos grupos. De ellos nueve han sido absueltos, cincuenta y siete han sido condenados, sesenta y siete están siendo investigados, sesenta y dos están detenidos, treinta y dos están llamados a juicio y treinta y cuatro se encuentran en fase de instrucción.

La mayor parte de estos funcionarios pertenecen a los departamentos del norte de Colombia, es decir, donde más influencia tuvo el fenómeno paramilitar. Destaca el departamento de Sucre con cincuenta y tres investigados. Le sigue Antioquia con treinta y seis, el Magdalena con treinta y dos, Córdoba con veintinueve y Santander con veinte. Los departamentos de mayor influencia de parapolítica corresponden a los departamentos tradicionales de mayor control de los grupos paramilitares como después se examina. Por tanto, hay una clara evidencia entre mayor control de un departamento con un número elevado de funcionarios implicados (Figura 47).



Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía, Corte Suprema y Corporación Arco Iris, 2012.

Los doscientos noventa y tres políticos acusado de relacionarse con estos grupos, participaron en diferentes cuestiones relacionadas con la organización y conformación de grupos paramilitares. El 47.1% de los funcionarios implicados fueron acusados de mantener relaciones electorales con grupos paramilitares para favorecerse en determinadas elecciones. Es decir, obtuvieron beneficios electorales por apoyar a los grupos paramilitares. El 35% de estos políticos participaron en algún momento en la conformación de grupos paramilitares. Es decir tuvieron cierta relación con los grupos paramilitares que operaban en la zona territorial donde tenían alcance los funcionarios. El 8% de los implicados financiaron económicamente a algunos grupos paramilitares. El 13% de los funcionarios acudieron a alguna reunión o firmaron algún pacto con los paramilitares. Casi el 10% también fue acusado de participar en algún homicidio perpetrado por estos grupos armados. En último lugar, algunos de estos funcionarios firmaron contratos en beneficios de estos grupos y se enriquecieron ilícitamente por los beneficios económicos del narcotráfico a través de estos grupos. En resumen, los políticos investigados hasta el momento denotan que casi la mitad de ellos se beneficiaron de los apoyos de estos grupos para seguir siendo elegidos en determinadas elecciones y beneficiarse de tal apoyo. No sólo tuvieron el apoyo electoral de ellos sino que también de alguna manera participaron en la organización y conformación de los grupos paramilitares que operaban en cada zona relacionada con los políticos. Todas estas medidas beneficiaron a ambos, a funcionarios y a grupos paramilitares. Ambos se lucraron en beneficios para su ámbito personal y profesional. Algunos de los funcionarios que sólo acudieron a alguna reunión con grupos paramilitares dicen que fueron obligados a participar en esas reuniones. Estos funcionarios sólo representan el 13% de los implicados por tanto, si tenemos en cuenta esta situación, casi la totalidad de los funcionarios implicados vieron una situación provechosa para lucrarse personalmente. Por tanto, se derriba la teoría que al principio de las investigaciones en parapolítica surgió sobre que los paramilitares habían obligado a los políticos a irrumpir en la vida política mediante el abuso y el terror. El resultado de estas investigaciones denota que hubo un beneficio mutuo, un aprovechamiento recíproco de esta situación donde los funcionarios ganaron en poder y posición y los paramilitares sumaron apoyos e influencia en el ámbito local, regional y nacional.

Para determinar el alcance de las relaciones entre paramilitares y políticos, la investigación coordinada por Claudia López (2010), llevó un análisis del comportamiento de los políticos implicados en parapolítica en la aprobación de determinadas leyes y reformas políticas, en concreto la reforma política de 2003, 2007, la reelección presidencial y las leyes forestales. La

reforma política de 2003, anteriormente citada, cuyo fin era solucionar la fragmentación de los partidos políticos, este estudio reveló que el comportamiento de los parapolíticos no fue ni activo ni diferenciado del de las mayorías parlamentarias o de los partidos políticos a los cuales representaban. Sin embargo, esta reforma política si benefició a los grupos paramilitares pues según el artículo 102 los parlamentarios electos en 2002 podrían agruparse para solicitar el reconocimiento de la personería jurídica de un nuevo partido o movimiento. Tales casos fueron los de Colombia Democrática, Colombia Viva, Partido Social de la Unidad Nacional, que albergaron un significativo número de congresistas implicados con grupos paramilitares. Para el caso del proyecto de Acto Legislativo de la Reección Presidencial tampoco se demostró que los políticos investigados tuvieran una lógica de intereses ilegales sino que respondieron a dinámicas de bancadas partidistas. Pero tanto el Presidente Álvaro Uribe, como su coalición parlamentaria, se vieron beneficiados pues aumentaron los curules en el Senado y en el Congreso tras su reelección²⁰⁷. La reforma de 2007 fue consecuencia de la evidencia de acuerdos entre políticos y grupos armados ilegales, de tal manera que se pudiera establecer un marco jurídico de responsabilidades y sanciones a las organizaciones políticas²⁰⁸. Sin embargo el proyecto quedó archivado por el gobierno de Uribe pues la propia coalición del gobierno concentraba al 67% de los investigados por su relación con estos grupos. Esta reforma fue reemplazada por la reforma de 2009 que permitió por dos meses el transfugismo, no permite sancionar actualmente a los partidos políticos investigados y no aclaró las sanciones que serían aplicadas a los partidos políticos, dejando su regulación al Congreso. Estos tres proyectos favorecieron a los actores ilegales pues se pudieron organizar partidariamente sus aliados políticos gracias a la reforma del 2003, se empoderaron electoralmente con el respaldo de la reelección y redujeron su responsabilidad política con la reforma de 2007.

Respecto a los proyectos agroeconómicos, el estudio concluye que no se puede sostener que los congresistas investigados tuvieran un interés de grupo pues su comportamiento fue muy heterogéneo²⁰⁹. Si estuvieron interesados en que estas reformas fueran aprobadas como leyes.

²⁰⁷ Pasaron de tener 56% de las curules en el Senado y 57% en la Cámara de Representantes en 2002 a obtener el 67% en el Senado y 61% en la Cámara tras la reelección gracias a la consolidación del Partido de la U, Cambio Radical, Colombia Democrática, Alas-Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana, Apertura Liberal y Colombia Viva.

²⁰⁸ Entre las principales sanciones iniciales destacaban la pérdida de curul y la posibilidad de reemplazarlo al congresista cuando haya sido o sea condenado; los votos obtenidos por el congresista serían descontados del partido; el partido perdería su personería jurídica si más del 50% resultaban implicados; el umbral para el reconocimiento de la personería jurídica aumentaba al 5%.

²⁰⁹ Elisabeth Ungar y Juan Felipe Cardona, de Congreso Visible, investigaron cuatro reformas: la Ley de combustibles, la Ley forestal, el Estatuto rural y la Ley de saneamiento de la titulación a la propiedad inmueble. La

También resume el estudio que el 28% de los ponentes, presidentes y vicepresidentes de las mesas directivas que tramitaron los proyectos fueron investigados pero, esto no significa que la aprobación de estos proyectos se dieran por ellos pues las votaciones de estos mismos no estuvieron cohesionadas, incluso sin sus votos, hubieran sido aprobados igualmente pues representaban entre el 3% y el 38% de los asistentes.

Con esta situación ¿se podría pensar en una bancada parapolítica? Ungar y Cardona (2010) responde a esta pregunta analizando el periodo legislativo 2002-2006 y 2006-2010 (para este último periodo, obtuvieron datos hasta agosto de 2008). Para el periodo 2002-2006 los congresistas investigados presentaron 250 proyectos, un 13% del total de las iniciativas presentadas y fueron aprobadas un 10%. Las propuestas presentadas giraban en torno a reformas legislativas (13%), temas presupuestales (8%), reformas electorales (6%) y del Estado (4%). Por tanto, existe un cierto interés de intento de realizar reformas a la Constitución, sobre todo en materia político-electoral, pues represento el 31% de las iniciativas. Para este periodo concluyen que la idea de tener una bancada se distorsiona debido a la diversidad temática y porque las iniciativas aprobadas no pueden ser parte de una estrategia de cooptación del Estado sobre todo porque esta investigación no conoce en detalle el alcance de los textos y su trámite legislativo. Igualmente para el cuatrienio 2006-2010 no se puede hablar tampoco de una bancada paramilitar pues tampoco se conoce el alcance de los proyectos presentados. Domina la dispersión temática en ellos y sobre todo se concentran en reformas políticas y electorales (23%), celebraciones y estampillas (11%), organización y autoridades electorales (10%), reformas a la justicia y al código penal (7%), entre otras. Si es importante destacar que las comisiones constitucionales que mayor presencia de congresistas investigados en estos dos periodos fueron aquellas relacionadas con las comisiones económicas y agrarias con el objetivo de beneficiarse económicamente y para validar

Ley de combustibles de 2004, beneficiaba a los cultivadores de biocombustible y reducía los términos de las exenciones para el cacao, caucho, cítricos y demás frutales y cambió la partida arancelaria para el trigo y morcajo. Para esta ley el 31% de los 19 congresistas se declararon impedidos a lo largo de los cuatro debates, estaban vinculados a procesos de parapolítica. El 33% de los ponentes y el 50% de los Presidentes de mesa directiva estaban siendo investigados. También fue sospechoso que seis de los parlamentarios participaran activamente, fueran también investigados y tuvieran plantaciones de ese tipo. La Ley forestal estableció un marco jurídico para la producción sostenible de los bosques y tierras forestales pero también para que su explotación fuera rentable y atractiva para los inversionistas privados. Esta ley recibió fuertes críticas porque se estaba beneficiando intereses de los paramilitares aliados con empresas comerciales madereras. En este caso, el 36% de los ponentes y el 50% de los vicepresidentes de mesas directivas fueron parte de las investigaciones por parapolítica. Los investigados por parapolítica fueron autores del 49% del total de las proposiciones al texto. La Ley de saneamiento de la titulación a la propiedad inmueble estableció que las personas que tuvieran un título inmobiliario de falsa tradición pudieran sanearlo. Esta ley no tuvo una presencia tan marcada como las anteriores, pues tan sólo el 14% de los ponentes y el 25% de los vicepresidentes y presidentes fueron investigados. En último lugar, el Estatuto de desarrollo rural proponía un estatuto único de desarrollo rural y regular las funciones del INCODER. En este caso el 37.5% de los ponentes y el 75% de los presidentes de mesa directiva tiene investigaciones por parapolítica.

sus intereses políticos y legales²¹⁰. Los proyectos de ley de saneamiento de la propiedad, las reformas políticas de 2003 y 2007, la reelección presidencial y la ley de justicia y paz, fueron tramitadas por la comisión primera, la más numerosa tras la comisión tercera, cuarta y quinta con un total de 16% congresistas investigados para el primer periodo de 2002-2006 y 15% para el 2006-2010. En último lugar, esta investigación estudió los reemplazos de congresistas durante el 2006-2010. El 20% de los investigados llegaron al Congreso mediante reemplazos temporales o definitivos. Esto, puede ser un indicio del control del paramilitarismo, tal y como afirmaron en su momento los paramilitares Ernesto Báez y el Alemán.

En resumen, esta investigación coordinada por Claudia López, comienza un camino para averiguar qué tan intensa fue la actividad de los congresistas investigados en la formulación de nuevas reformas y leyes en la Cámara y Senado. Por el momento, la investigación de López es clave porque arroja luz sobre el poder de este grupo y sus múltiples redes. Por tanto, las futuras investigaciones sería recomendable que analizaran el alcance de los textos y su trámite legislativo para así consolidar más la hipótesis de que los grupos paramilitares cooptaron diferentes ámbitos gubernamentales con el fin de obtener réditos, que como se comentó anteriormente, podrían estar relacionados con beneficios económicos y agrarios.

4.5.2 La influencia en los procesos electorales

Como se explicó anteriormente, los grupos paramilitares incidieron en el ámbito político de diferentes maneras. Intimidaron y asesinaron a gobernantes que se opusieron a sus reglas, influyeron en diferentes instituciones a nivel local, regional y nacional, como el caso del DAS e intervinieron en procesos electorales. En este apartado se estudia las relaciones que los grupos paramilitares tuvieron con los procesos electorales.

En el ámbito electoral los paramilitares también influyeron y desarrollaron diferentes estrategias. En algunas zonas restringieron la oferta política, es decir, prohibieron la participación de determinados candidatos para presentarse a las elecciones. En otros casos, establecieron impuestos a aquellos candidatos que querían presentarse. En otros, impusieron candidatos

²¹⁰ Entre las comisiones constitucionales que mayor presencia tuvieron de políticos investigados fueron la tercera con un 22% que trataron temas de hacienda, crédito público, impuestos, regulación económica y planeación nacional; la cuarta, también con un 22%, estuvo encargada de tramitar leyes organizadas de presupuestos, control fiscal, marcas y patentes, organización de establecimientos públicos, control de precios y contratación administrativas y la quinta comisión con un 22% de investigados, estuvo encargadas del régimen agropecuario, ecología, corporaciones autónomas regionales y medio ambiente.

propios mediante la aplicación de candidatura única, presión al electorado o manipulación de los votos.

De este modo, y como se ha visto anteriormente, el 47.1% de los implicados en parapolítica fue investigado por presunto apoyo electoral de los grupos paramilitares. En este sentido, el caso más relevante es la imposición de determinados candidatos afines a los intereses paramilitares. Estos grupos armados crearon distritos electorales en los que sólo se permitía votar por determinados candidatos. Este patrón de comportamiento se repite en algunos departamentos como el Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre y Antioquia.

En esta misma línea, un análisis de las elecciones legislativas del 2002, basado en la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, indica la conformación de distritos electorales en los que se promovió una pareja de candidatos, uno para la Cámara y otro para el Senado, que arrasaron en las zonas que pareciera haberles correspondido. Adicionalmente, las investigaciones llevadas a cabo por Claudia López y por la *Corporación Nuevo Arco Iris* denunciaron que Colombia vivió en 2002 y 2003, en los comicios para el Congreso y luego para mandatarios locales, un fenómeno atípico, pues hubo departamentos donde un candidato arrasó con un promedio del 70% de los votos de un municipio. Esta dinámica de actuación parece afirmar que en determinados departamentos se ejerció presión social para favorecer a ciertos miembros políticos vinculados al paramilitarismo.

Claudia López explica que los paramilitares crearon distritos electorales, es decir, crearon un distrito pero a la fuerza. En Colombia no hay distritos electorales. Aquí eso no existe, se supone que la elección al Senado es nacional, en cualquier municipio, cualquier candidato puede ir y hacer. Los paras lo que hicieron fue crear distritos como un mecanismo de constreñimiento y fraude electoral por alguna razón previa. Consistía básicamente en eso, en reunir, en distribuir sus votos de su zona de influencia de manera tal que le sacaran la mayor eficacia. Si tenemos una zona que dominamos y podemos manejar 80.000 votos para la Cámara y tenemos muchos amigos que quieren que los paras les representen, que hagan alianzas. Esos 80.000 votos pueden dar 3 curules. El problema es si hay competencia electoral, pues no es eficaz para ellos. La libre competencia democrática habría podido desperdiciar un voto que habría desperdiciado en teoría un curul²¹¹. Con esta explicación López nos explica de qué manera en algunos departamentos

²¹¹ Entrevista a Claudia López, columnista de El Tiempo, 29 de agosto de 2007, Bogotá.

ponen a figuras afines al paramilitarismo para evitar la competencia y la alternativa electoral y mantener su influencia política en una zona determinada.

Las elecciones legislativas y locales llevadas a cabo en el año 2002 y 2003 respectivamente, fueron antecedidas por masacres en determinados departamentos donde los paramilitares tenían el control militar de la zona. Mediante las masacres los paramilitares amedrentaron a la población para controlar militarmente esos territorios y para controlarlos políticamente tras las elecciones del 2002 y 2003. Según estadísticas del Observatorio del Programa Presidencial de DD. HH. y DIH, Vicepresidencia de la República, entre 1998 y el 2000 en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Magdalena César y La Guajira, las masacres crecieron un 140%. Pero de ellas, las cometidas por los paramilitares crecieron un 664%. Respecto de 1998, las masacres cometidas por los paramilitares sólo empezaron a bajar en 2002, el año de las elecciones al Congreso. Del total de masacres registradas en esos departamentos entre 1998 y el 2003, el 37% fue presuntamente cometido por los paramilitares, quienes serían responsables del 41% de las víctimas. El resto fue cometido por la guerrilla, que respondió a la ofensiva paramilitar con igual barbarie (Tabla 12).

Tabla 12. Masacres cometidas por grupos paramilitares de 1998 a 2003

DEPARTAMENTO	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Total Municipio
ANTIOQUIA	6	21	49	19	6		101
NORTE DE SANTANDER		9	3	5	1		18
GUAJIRA	1	1	1	1			4
CESAR		5	14	5			24
SANTANDER	2	2	3	1			8
SUCRE	1	2	6	2			11
CORDOBA		1					1
MAGDALENA	1	2	8	2	2	1	16

Fuente: Policía Nacional, Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003.

En regiones como Magdalena y Cesar, el comportamiento de los votantes varió mucho en las elecciones del 2000 y 2002. En el Magdalena, en las elecciones para alcaldes de 2000, 14 municipios, de los 29 que tiene el departamento, registraron candidatos únicos a las alcaldías y listas únicas al Concejo. Durante las elecciones de 2002 en este departamento, donde

tradicionalmente había una cerrada disputa por cada cargo, un sólo candidato arrasó con la votación para Senado y otro para Cámara en 22 municipios y se postuló un sólo contendor para la gobernación. Estos son los casos de los senadores Salomón Saade, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives y los representantes Jorge Luis Caballero, José Gamarra y Alfonso Campo y el gobernador Trino Luna.

El representante a la Cámara Jorge Luis Caballero, inscrito en 2002 como candidato por el Partido Liberal y ahora miembro del partido Cambio Radical, concentró su votación en los municipios ribereños del Río Magdalena en la zona norte del departamento. En municipios como El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza, y Tenerife, el representante Caballero obtuvo entre el 93% y el 97% del total de la votación del municipio, y en otros como Plato y Sitio Nuevo obtuvo entre el 70% y el 80%. Pero este mismo patrón de comportamiento se repite para el senador Salomón Saade, otro cacique de vieja data en el departamento quien coincide con el representante Caballero en altas concentraciones electorales en los mismos municipios de la ribera norte del Río Magdalena²¹².

Sin embargo, el retroceso de las votaciones para Caballero y Saade en unos municipios parece coincidir con la concentración electoral de otros dos candidatos en los municipios de la zona central del departamento. El representante José Gamarra obtuvo 49.899 en 2002, inscrito por el partido Cambio Radical. Y el senador Dieb Maloof, que nunca había tenido ningún cargo ni representación popular en el departamento, salió electo con 40.134 votos en Magdalena, inscrito por el Movimiento de Integración Popular (Mipol). Claudia López explica que “es muy difícil promover a una nueva figura en sitios que tienen una trayectoria política muy consolidada. Para sacar a Maloof de la nada y convertirlo en senador de la República, tuvieron que combinar todas las fuerzas de lucha, es decir, sacar a los posibles contrincantes por intimidación, no dejar que los aliados, aún siendo aliados, que compitan mucho, imponerlo como candidato, asegurar votos, hacer constreñimiento, etc.”²¹³

En resumen, Gamarra y Maloof coinciden en concentraciones electorales que oscilan entre el 79% y el 94% en los mismos municipios: Pivijai, Zapayan, Chivolo, Sabanas de Ángel, Ariguani, Algarrobo y, en dos municipios de la ribera norte del Río Magdalena, Remolino y Salamina, obtuvieron una victoria electoral arrasadora²¹⁴.

²¹² Claudia López, “Votaciones atípicas en las elecciones de congreso del 2002”, *Revista Semana* septiembre 11, 2005

²¹³ Entrevista a Claudia López, columnista de El Tiempo, 29 de agosto de 2007, Bogotá.

²¹⁴ Ibid.

Finalmente, en el sur del departamento, la pareja de candidatos fue Alfonso Campo a la Cámara y Luis Eduardo Vives al Senado. Campo era un dirigente conservador inscrito por una coalición que obtuvo 52.387 votos para Cámara, y Vives, candidato inscrito también por Mipol, obtuvo 47.794 votos para el Senado. Tanto Campo como Vives concentran votaciones entre el 71% y el 93% en los municipios de Guamal, Nueva Granada, San Sebastián de Buenavista, Santa Ana, San Zenón, Piñón del Carmen, Santa Bárbara del Pinto y el Banco. Todos ubicados al sur del Departamento²¹⁵.

Respecto a la elección de gobernador en 2003, no hubo competencia electoral. Varios interesados renunciaron a sus aspiraciones aduciendo falta de garantías. Trino Luna fue candidato único y electo con 237.800 votos, mientras se registraron 55.464 votos en blanco. Dado que la Ley sólo posibilita una nueva convocatoria electoral con candidatos diferentes si el voto en blanco supera el 50% de la votación total, Luna fue ratificado titular del cargo y vencedor en unas elecciones sin contrincantes²¹⁶.

En el departamento de Córdoba la pareja de candidatos para las elecciones de 2002 fue Eleonora Pineda, como Representante y el Senador Miguel Alfonso de la Espriella, que repitieron el patrón de concentración electoral en los municipios de Valencia, Tierralta, San Antero y Pueblo Nuevo. El caso más insólito es el de Eleonora Pineda, pues en el año 2000 fue elegida concejal de Tierralta con 748 votos. En las votaciones para representantes del año 2002 obtuvo 82.082 votos, de los cuales 16.233 los obtuvo en el municipio de Tierralta. Incrementó su votación en ese municipio en un 2.170% en sólo dos años.

En el departamento de Sucre destaca la figura del Senador Álvaro García, que aunque es un político bien arraigado y que fue representante por tres periodos y senador por dos, se unió a los grupos paramilitares. Actualmente es el funcionario con la condena más alta. Está condenado a cuarenta años por peculado por apropiación, presunto fraude electoral, presunta conformación de organizaciones paramilitares, ser miembro activo de una organización paramilitar y homicidio por la masacre de Chengue y Macayepo en este departamento. Por la similitud en el comportamiento electoral registrado, pareciera que su pareja a Cámara en las elecciones de 2002 fue Jorge Luis Feris Chadid, candidato inscrito por el Partido Liberal.

²¹⁵ Ibid.

²¹⁶ Ibid.

Un caso importante de estudio es el de la Representante Muriel Benito Rebollo. La representante Benito argumenta que sus votos son los mismos que obtuvo su hermano como diputado del departamento en las elecciones de 1998. Sin embargo, su hermano Édgar Benito Rebollo logró 9.258 votos, mientras que la representante Muriel obtuvo 44.365, casi cinco veces la votación de su hermano. De una a otra elección se nota la consolidación electoral en los municipios de Sincelejo, San Pedro, Ovejas y, sobre todo, San Onofre, donde concentró el 57,35% del total de la votación.

En el municipio de San Onofre se han encontrado fincas-cementerios en donde se han exhumado decenas de cadáveres. Esos asesinatos son aún objeto de investigación. Entre 1999 y 2000 se triplicaron las masacres presuntamente cometidas por los paramilitares en el departamento de Sucre, al pasar de dos a seis, de las cuales dos se registraron en San Onofre, dos en Ovejas, otra en Coloso y otra en Tolú Viejo.

En el departamento de Cesar se registra un patrón similar al del departamento de Magdalena, es decir, la conformación de distritos electorales con una pareja de candidatos para representante a la Cámara y senador en las elecciones de Congreso en 2002, aunque con concentraciones electorales mucho menores; en promedio del 60% y no del 90% como en Magdalena.

La concentración electoral en los municipios del norte, El Paso, Copey, Chimichagua, Bosconia, Astrea y Chiriguaná la tuvieron Mauricio Pimiento Barrera, senador inscrito por el Movimiento Sí Colombia, y el representante a la Cámara Jorge Enrique Ramírez, inscrito por el Partido Liberal Colombiano. El representante Ramírez fue alcalde de Bosconia entre los años 97 y 98, con una votación de 4.018 votos. En el año 2002, Ramírez obtuvo en Bosconia 6.769 votos, equivalentes al 82,83% del total de la votación. Un logro importante, aunque también sorprende que hubiera alcanzado niveles de aceptación promedio del 70% del total de votación en otros municipios como El Copey, Astrea, el Paso y la Jagua de Ibérico, y en promedio del 50%, en Chiriguaná y Chimichagua.

La concentración electoral en los municipios del sur del departamento, Tamalameque, González, San Martín, Gamarra, Pilitas y La Gloria la obtuvieron el senador Álvaro Araujo Castro, inscrito por el Movimiento Alternativo de Avanzada Social (ALAS), y el representante a la Cámara Miguel Ángel Duran. Álvaro Araujo está condenado a nueve años de prisión por constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales, presunto fraude electoral, apoyo en campaña

electoral, colaboración en la financiación de grupos paramilitares y secuestro extorsivo agravado. Por su parte, Miguel Angel Duran fue acusado de financiar grupos paramilitares. Actualmente su caso está archivado.

Del año 1999 al año 2000, las masacres presuntamente cometidas por los paramilitares se triplicaron, al pasar de 5 en el 99 a 14 en 2000.

En este departamento, también hubo candidato único a la Gobernación en las elecciones locales de 2003, Hernando Molina, gobernador de Cesar por el Partido Liberal, acusado de obtener apoyo electoral en esas elecciones y condenado a siete años de prisión.

Al igual que en el departamento de Magdalena, en Antioquia tiende a haber una concentración electoral en municipios de la ribera del Río Magdalena, eje estratégico del país y de esos departamentos en particular. La fortaleza electoral de la representante Rocío Arias, inscrita en 2002 por el Movimiento Convergencia Popular Cívica, se da en los municipios de Puerto Triunfo, donde concentró el 55% del total de la votación, pasando por Puerto Berrío, El Bagre, Yondó-Casabe, Puerto Nare y Zaragoza, donde obtuvo el 30,85% del total de la votación. La pareja de la representante Arias fue el senador Carlos Arturo Clavijo Vargas, inscrito también por el Movimiento Convergencia Popular Cívica, obtuvo un patrón de fortaleza electoral similar al de la Representante Arias en Antioquia.

Otra pareja de candidatos en este departamento fue el representante Manuel Darío Ávila Peralta y el Senador Rubén Darío Quintero ambos del Movimiento Cambio Radical, que tuvieron el mismo éxito electoral en el Urabá Antioqueño. En esta zona, el representante Manuel Darío Ávila Peralta, inscrito por el Movimiento Cambio Radical, obtuvo votaciones entre el 63% y 70% en los municipios de San Juan de Urabá, Arboletes y Necoclí, y votaciones entre el 30 y 40% en San Pedro de Urabá, Chigorodó, Turbo y Apartadó. Un comportamiento electoral similar lo obtuvo el senador Rubén Darío Quintero, quien renunció luego para lanzarse a la Gobernación de Antioquia, siendo derrotado en esas elecciones por Aníbal Gaviria. Actualmente ambos están acusados de obtener apoyo electoral en estas elecciones del año 2002.

A pesar del éxito electoral en Antioquia, el senador Clavijo, tuvo unas votaciones muy significativas en los departamentos de Boyacá y Santander. En total obtuvo 57.774 votos. En Puerto Boyacá obtuvo 6.379 votos, equivalentes al 59,16% del total de la votación. En ese mismo

municipio boyacense la concentración electoral para Cámara la obtuvo Jorge Eduardo Londoño, quien no resultó electo al Congreso, pero fue electo en 2003 como Gobernador de Boyacá. En el departamento de Santander, el senador Clavijo consiguió votaciones muy significativas en los municipios de El Carmen, Cimitarra, Santa Helena de Opón, Puerto Wilches, Puerto Parra, y votaciones menores en El Playón, Sabana de Torres, Rionegro y Barrancabermeja. Un patrón similar de fortaleza electoral lo obtuvo en Santander el representante a la Cámara José Manuel Herrera Cely. La Fiscalía capturó un video donde el paramilitar Ernesto Báez invita a decenas de líderes de Barrancabermeja a votar por Carlos Arturo Clavijo quien pertenecía a la “lista única del Magdalena Medio”. En 1999 se registraron en el departamento de Antioquia 21 masacres presuntamente cometidas por los paramilitares, y en el año 2000 la cifra se elevó a 49. En 2001 bajaron a 19, y en 2002, a seis.

Para evitar que el plan de Jorge 40 fracasara electoralmente, el congresista José Gamarra llamó Enrique Osorio de la Rosa, registrador y Rafael García, jefe de informática del DAS, para asegurar la elección de los candidatos impuestos por Jorge 40. Rafael García relató a la Revista Semana esta información: “Osorio diseñó un plan, diciéndonos que la forma de garantizar las elecciones era suplantando a los electores a través de los jurados y que para esto necesitábamos conseguir los listados de votantes. Una vez consiguieron los censos, el mismo García creó el software necesario para el fraude”²¹⁷. Así, Osorio y García explicaron a los jurados de la votación que tendrían que hacer después de la votación. “La idea era que al final de la jornada se marcaran tarjetones suplantando a alguno de los electores que no asistieran a votar, que a la vez, si en la urna había tarjetones marcados por un candidato diferente al que el Bloque Norte había definido para esa región, éstos, en su mayoría, deberían ser reemplazados por tarjetones marcados por el candidato nuestro”²¹⁸.

En resumen, durante las elecciones del 2002 y 2003 se produjo un aumento de las masacres en los departamentos donde los paramilitares comenzaban a ejercer un control militar. Estas masacres descienden sólo a partir de dichas elecciones. Es decir, los paramilitares utilizaron las masacres como un medio para obtener beneficios electorales en las elecciones de determinados departamentos, para infundir terror y evitar oposiciones a sus candidatos. En estas elecciones los paramilitares propusieron distritos electorales para determinados departamentos a fin de obtener réditos políticos en el control político de esos departamentos mediante la imposición de

²¹⁷ “El fraude electoral de 2002”, Revista Semana, 26 de noviembre de 2006.

²¹⁸ Ibid.

candidatos nuevos, en escasas ocasiones, pero sobre todo aliándose con candidatos tradicionales de cada zona. Los congresistas y gobernadores que se ha nombrado anteriormente, todos han sido investigados por parapolítica y acusados de delito de concierto para delinquir agravado. Algunos como se señaló ya fueron condenados a prisión por sus delitos.

Para las elecciones legislativas del 2006/2010 y locales y regionales del 2007/2011 la influencia paramilitar en las elecciones continuó. A pesar de que en el año 2006 terminó el proceso de desmovilización de grupos armados llevado a cabo por el gobierno de Álvaro Uribe, las masacres de los grupos paramilitares y su influencia en los comicios electorales persiguieron. Enmascarados detrás de la etiqueta de “nueva generación de paramilitares” o “bandas Bacrim”, los paramilitares siguieron desarrollando masacres y homicidios selectivos como se comentó anteriormente.

En las elecciones legislativas del 2006/2010 y en relación a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, el 54% de los senadores electos en este periodo electoral están relacionados con los grupos paramilitares. Esto supone que del número total de senadores implicados, el 88% corresponde a este periodo. El 60% de los senadores implicados en parapolítica de este periodo han sido acusados de apoyo electoral en sus elecciones. De igual manera, las elecciones legislativas de los representantes a Cámara estuvieron influenciadas por los grupos paramilitares. En este caso, el 69% de los representantes implicados con grupos paramilitares corresponde a las elecciones de 2006/2010. En cambio el porcentaje de representantes electos implicados en este periodo es menor que los senadores. En este caso el 26% de los representantes electos estaban implicados con estos grupos. El porcentaje es menor que los senadores pero no deja de ser sorprendente la influencia de este grupo armado en la cámara de representantes. Para el caso de los representantes el 64% de ellos están acusados de obtener apoyo.

En el caso de los funcionarios regionales y locales la perspectiva con los datos obtenido hasta el momento, es muy diferente de las elecciones legislativas del 2006/2010. Pues tanto para los funcionarios regionales y locales, la elección con mayor participación de funcionarios implicados con los grupos paramilitares en las elecciones de 2003/2007, seguida de los dos procesos electorales anteriores. Tan sólo el 14% de los funcionarios locales implicados en parapolítica corresponden al periodo 2007/2011. Para el caso de los funcionarios regionales, el 10% estuvo relacionado con estos grupos.

En resumen, los paramilitares siguieron entorpeciendo los procesos electorales independientemente de que se sometieran a un proceso de desmovilización. Queda patente sobre todo en las elecciones legislativas del 2006/2010 donde la presencia e influencia de senadores y representantes fue evidente tras los escándalos de la parapolítica.

4.5.3 ¿Por qué surge el escándalo de la parapolítica en el año 2006?

La desmovilización de los grupos armados paramilitares se llevó a cabo desde el año 2003 hasta agosto de 2006. Tras aparecer varias veces en prensa la desmovilización de estos grupos, la entrega de armas al Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, apareció un nuevo tema en prensa, la parapolítica. Durante el año 2006 comenzaron a salir en prensa varios debates acerca de la implicación de determinados políticos con paramilitares. Se trataba de averiguar mediante fotos, grabaciones o documentos, qué políticos estaban implicados con los paramilitares. En ese mismo año, comenzaron a circular testimonios de personajes claves en esta investigación. Entre ellos el Tribunal Supremo analizó la declaración de *Jairo Castillo Peralta* que fue escolta del ganadero Joaquín García, presunto patrocinador de grupos paramilitares en Sucre.²¹⁹ De igual importancia es el testimonio de *Rafael García*, exjefe de informática del DAS, que acusó a Jorge Noguera, exdirector de esta institución, de haber puesto la entidad al servicio de los paramilitares.²²⁰ Asimismo Édgar Fierro, 'don Antonio', fue capturado con un *computador del jefe paramilitar Jorge 40* donde encontraron grabaciones, fotos y documentos que demostrarían que los paramilitares apoyaron a congresistas en varias elecciones²²¹ A estos recursos hay que añadir el descubrimiento de otro computador del paramilitar Don Berna. Otras declaraciones que causaron estupor en los medios de comunicación fueron las del *senador Miguel de la Espriella* quien confesó haber mantenido relaciones con grupos paramilitares. También reveló que en 2001 los paramilitares organizaron una reunión en Ralito (Córdoba) en la que políticos de ese departamento y de otras

²¹⁹ Jairo es el principal testigo contra tres congresistas de Sucre que fueron detenidos por sus implicaciones en la conformación de grupos paramilitares. Los encarcelados son el senador Álvaro García responsable también de la masacre en Macayepo. El senador por Colombia Viva Jairo Merlano y el gobernador de Sucre Erick Morris.

²²⁰ En la Corte Suprema Rafael relacionó a varios congresistas con las AUC entre ellos el senador del Cesar Manuel Pimiento por el Partido de la U, los representantes del Magdalena Jorge Luis Caballero, Alfonso Campo y Luis Eduardo Vives, el exrepresentante José Gamarra y Salomón Saade.

²²¹ El resumen del informe final de la Fiscalía sobre el contenido del computador, incluye la lista de 558 personas que los paramilitares asesinaron en Atlántico, las entidades del Estado bajo su dominio y cómo sacaban el 10 por ciento a todos los contratos, los correos que prueban las trampas que le hicieron al Gobierno en su desmovilización, quiénes son los que les ayudan a traficar cocaína, y qué funcionarios del Estado están en su nómina. “Así opera el imperio criminal del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'”, *El Tiempo*, 8 de octubre de 2006.

regiones de la Costa Atlántica firmaron un documento en el que se comprometieron a defender las tesis políticas de las AUC.²²²

En esta misma línea, un análisis de las elecciones legislativas del 2002, basado en la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, indica la conformación de distritos electorales en los que se promovió una pareja de candidatos, uno para la Cámara y otro para el Senado, que arrasaron en las zonas que pareciera haberles correspondido. El caso del Magdalena es el más atípico pero el patrón se repite en César, Córdoba, Sucre, Antioquia, los Santanderes y algunas zonas de Boyacá. Adicionalmente, la *Corporación Nuevo Arco Iris* denuncia que Colombia vivió en 2002 y 2003, en los comicios para el Congreso y luego para mandatarios locales, un fenómeno atípico, pues hubo departamentos donde un candidato arrasó con un promedio del 70% de los votos de un municipio. Esta dinámica de actuación parece afirmar que en determinados departamentos se ha ejercido presión social para favorecer a ciertos miembros políticos vinculados al paramilitarismo.

Desde 2006 se sigue investigando la implicación de políticos con paramilitares hasta haberse convertido en una noticia habitual en la prensa colombiana. Pero si tenemos implicados desde 1990 ¿porqué se desató este tema a partir de dicho año?. Para responder a esta pregunta se tiene que tener en cuenta la organización paramilitar y la oposición a la misma.

Como se comentó en el apartado de la definición de grupos paramilitares, bajo este concepto se establece una dimensión muy heterogénea pues bajo el paraguas paramilitar se encuentran tres tipologías, a saber, autodefensas, paramilitares y narcoparamilitares, que son diacrónicos y sincrónicos en el tiempo. Podemos tener un grupo de autodefensas puros como fueron las Autodefensas de Ortega en el Cauca ó una grupo de autodefensas que terminaron siendo más paramilitares como las ACCU de los hermanos Castaño ó más narcoparamilitares como Jorge 40.

²²² "Estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados..." Como señaló el senador, en una finca recién construida a pocos kilómetros de Santa Fe Ralito se reunieron los jefes paramilitares, que estaban a la cabeza de un ejército ilegal de 15.000 hombres, con 11 congresistas, dos gobernadores, tres alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos. En total, 32 personas, custodiados por tres anillos de seguridad. Varios académicos presentaron el proyecto ideológico y político de las autodefensas. Después de un debate sobre los pilares para construir "una Nueva Colombia", Mancuso, como portavoz de los paramilitares, remató la reunión con unas palabras e invitó a sellar el compromiso con la firma de un documento confidencial y secreto. Es decir, políticos y paramilitares estaban fraguando, un nuevo pacto social y político antidemocrático a espaldas de la sociedad colombiana. "El de siempre", *Revista Semana*, n.º 1283, diciembre de 2006.

Los grupos paramilitares se insertaron en una vida social y local de manera diferenciada, sobre todo teniendo en cuenta los ritmos y los conflictos que existen en esa región previamente. Se insertaron por las fisuras que hay en esas sociedades locales y regionales, por las ausencias o por los problemas que hay en esas sociedades. El repertorio de acción, los métodos, los medios y los fines de los grupos paramilitares cambiaban según la región y las dinámicas regionales. Ellos se insertaban en las regiones pero las regiones los hacen cambiar de métodos y medios.

En términos históricos, el paramilitarismo en Colombia comenzó siendo una reacción de ciertas élites a los desafueros de la guerrilla. Es decir, estas elites económicas defendían intereses económicos en contra de los abusos de la guerrilla. Pero en el camino se convirtieron en actores políticos y buscaron un discurso político al que aferrarse. De ahí, comenzaron a trabar relaciones con los funcionarios políticos locales, regionales y nacionales.

La cuestión relevante es que los paramilitares se insertaron en las sociedades a través de las redes clientelares. Reforzaron las estructuras clientelares que culturalmente hay en Colombia en el ámbito local y regional. Ayudaron a reforzar las relaciones no pasadas por reglas de juego institucionales, sino las relaciones cara a cara y no las mediadas por la ley. Es decir, el acceso a los servicios se dio por el gamonal, por el patrón, en este caso el gamonal o patrón ha sido reemplazado o tiene una alianza con este grupo armado. Por tanto, se aprovecharon del clientelismo para controlar a la población y a los recursos tanto de la vía económica como de la vía estatal. Por tanto estos grupos armados se montan encima de las estructuras clientelistas que ya existían. Refuerzan y reforman esas relaciones porque les sirven para desarrollarse militar, política y socialmente en las regiones donde ellos tienen intereses.

Estos grupos paramilitares se aliaron con las elites regionales y locales, en otros casos los cooptaron y en otros casos los reemplazaron. Este fenómeno se conocía hace tiempo en Colombia. Era evidente en la costa atlántica, en Antioquia y en los llanos orientales. Y a partir de 2006, se introdujo en la agenda mediática a través de los escándalos de la parapolítica.

Aunque se comentó anteriormente que nacieron como un grupo en contra de las tropelías de la guerrilla y se armaron por la incapacidad de defensa del Estado, posteriormente la deriva los hizo rebasar esos propósitos iniciales. De su unión con las elites locales y regionales y el cambio a actor político, se podría interpretar el paramilitarismo en Colombia como la resistencia de las elites locales y regionales a cualquier proceso de modernización del estado central. Es decir, se

podría interpretar el paramilitarismo como una cierta resistencia de las elites al avance del proceso de modernización del Estado y de las instituciones democráticas y las reglas del juego de la democracia liberal. La resistencia viene dada porque al meterse en las reglas del juego democrático se desmoronarían las bases sociales, económicas y culturales de su orden. Los paramilitares defienden el orden establecido clientelar en esos ámbitos locales y regionales pues les resulta útil para mantener el control social, económico y político.

Al atrapar tantas regiones se dieron cuenta que podían dar el salto al ámbito nacional, cooptando a determinados representantes y senadores. En este momento es cuando saltó el problema de la parapolítica como un hecho importante. Rafael Pardo, Exministro de Defensa y precandidato presidencial por el Partido Liberal dio la voz de alarma. Era un hombre que en un principio estuvo con Álvaro Uribe. Creía en la Seguridad Democrática en el sentido de la lucha decidida del Estado con la guerrilla pero entre las reglas de juego del Estado burgués. Él pertenece a las elites bogotanas que creen en la modernización del Estado. Se dio cuenta que durante el proceso de desmovilización paramilitar lo que se iba a legitimar y a nacionalizar era ese poder local y regional de las elites clientelares decimonónicas. Ese acuerdo suponía el reforzamiento de las redes políticas, el reforzamiento de sectores absolutamente atrasados no viables en el sentido de latifundio e industria y la legitimación y legalización del narcotráfico que había adquirido los paramilitares.

Este momento supuso la ruptura entre las elites nacionales y las regionales aliadas con el paramilitarismo. Ante esto Rafael Pardo comenzó a tomar distancia de esta situación y ahora es uno de los máximos detractores del proceso de desmovilización. De esta manera surgió y vio la luz el escándalo de la parapolítica, por este desencuentro entre las elites regionales y nacionales.

Aunque los medios de comunicación han llamado a la influencia de políticos con paramilitares “parapolítica”, esta investigación demuestra que no solamente se tiene que referir a este hecho como la influencia de un grupo armado en política. Por ello, en Estados Unidos se hablaba de “Paragate” como una manera de vincular el paramilitarismo con el escándalo Watergate.

Se ha comprobado que los paramilitares han influido y se han beneficiado del ámbito local, regional y nacional. Por una parte influyeron a funcionarios locales y regionales, representantes y senadores. Además tuvieron relaciones con otros funcionarios como secretarios, miembros de la Fiscalía, Registraduría, del Ministerio, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), del

Drug Enforcement Administration (DEA) y del Central Intelligence Agency (CIA). También colaboraron estrechamente con las Fuerzas Militares, ejército y policía. Empresarios de empresas nacionales e internacionales estuvieron favoreciendo a estos grupos. Agricultores, ganaderos, periodistas ayudaron de una manera u otra a estos grupos armados.

Por tanto, no sólo influyeron en política, sino que se expandieron por más ámbitos y cooptaron tres niveles de gobierno. Con lo cual no se puede hablar de “parapolítica”. Como ya se comentó anteriormente, se considera que el concepto más acertado para analizarles es “paraestado”, porque los paramilitares cumplieron con los requisitos mínimos que se le debe poner a lo que uno llama “Estado”. Es decir, tuvieron funciones relacionadas con el monopolio “legítimo” de la fuerza, el monopolio “legítimo” de la administración de justicia y el monopolio “legítimo” de control de impuestos. Una vez que administraron estos monopolios y para evitar el desagravio de la población civil, comenzaron a capturar funciones estatales propias del Estado de Bienestar. Es decir, comenzaron a capturar salud, educación, vivienda, infraestructuras, en definitiva, controlaron directamente bienes y servicios para tener contenta a su base social. Por tanto capturaron el Estado como una vía para ir consolidando su base social. Esta manera de actuar se reforzaron las redes clientelares, las estructuras personales. En palabras del Prof. Teófilo Vásquez “ahora la gente ya no va a la alcaldía para afiliarse al sistema de salud, sino que la gente lo que hacía cuando los paramilitares se metieron a administrar salud, educación y vivienda, no iba al alcalde con una carta sino que iba directamente a hablar con el comandante paramilitar y éste hablaba directamente con el alcalde”²²³. Por tanto, los paramilitares se convirtieron en un estado que ofrecía bienes y servicios a su base social.

Muy diferente fue el comportamiento de la guerrilla. La guerrilla tuvo el monopolio legítimo de la fuerza, el monopolio de la administración de justicia y el de control de impuestos pero no era aliada del Estado. No tenía nada que ofrecer a su base social y no pudo convertirse en Estado. Los paramilitares ofrecieron una opción más práctica, más terrenal, mientras que la guerrilla ofrecía algo más relacionado con el nirvana, pues su consolidación estaba relacionada con el triunfo de la revolución ante el Estado. Pero tras más de cuarenta años la revolución y el triunfo de la guerrilla no llegaron.

²²³ Entrevista a Teófilo Vásquez, Investigador, CINEP, Bogotá, 6 de julio de 2007.

4.5.4. Casos de estudio

En este apartado se describe y analiza diferentes grupos paramilitares para comprobar la heterogeneidad de estos grupos y verificar los diferentes contextos en los que se desarrollaron así como los diferentes recursos y oportunidades que aprovecharon para llevar a cabo su movilización y consolidación de sus acciones. Por ello, se eligió a Jorge 40, como ejemplo de cacique del norte de Colombia, que aprovechó el clientelismo para adentrarse como una opción más de poder en la costa atlántica. Don Berna, narcoparamilitar, creó su propio bloque en Medellín, aprovechando toda la estructura de violencia y narcotráfico de la ciudad. El Bloque Central Bolívar, grupo paramilitar, aprovechó la oportunidad de influir en la arena política a través de promover dos partidos políticos. Por otra parte, las Autodefensas de Ortega, en el Cauca, fueron un ejemplo de autodefensas puras creadas para defenderse del acoso guerrillero. El último caso de estudio es la historia de los hermanos Castaño a través de las ACCU y las AUC. De autodefensas evolucionaron a paramilitares y de éstos a narcoparamilitares sobre todo en época de Salvatore Mancuso. Se beneficiaron de numerosas oportunidades coyunturales y estructurales sobre todo aquellas que se dieron durante el origen de las ACCU en Córdoba y Urabá. Se nutrieron de una gran red de cooperantes como militares, policías, elites, funcionarios públicos e influenciaron en diferentes elecciones electorales.

4.5.4.1. Los paramilitares en la costa atlántica: el caso de Jorge 40

La trayectoria política de la costa atlántica se caracteriza porque continúa con una tendencia de transgredir las normas reglamentarias del sufragio y de las disposiciones de los funcionarios con respecto al carácter democrático del sistema político. Es una tendencia aceptada en la práctica y por el colectivo aunque rechazada en el discurso formal público. El Caribe colombiano cuenta con un pasado político que acondicionó una cultura política de la no participación y de permisividad ante la transgresión, aceptando la idea de cómo es política todo vale (Álvarez, 2004).

El caso del paramilitarismo en la costa atlántica es un caso donde se puede apreciar la unión de los intereses de las redes clientelares con los grupos paramilitares. Claudia López, analista de El Tiempo, comenta que los paramilitares se aliaron con las redes clientelares de la costa y los volvieron funcionales dentro de esta relación clientelar. Se volvieron aliados de la estructura clientelar, fue lo que les permitió ir poniendo gente.²²⁴ Es decir, repitieron las mismas formas políticas que había en la costa, la forma clientelar, detalla el profesor Manuel Alonso. La costa en

²²⁴ Entrevista a Claudia López, columnista de El Tiempo, 29 de agosto de 2007, Bogotá.

Colombia es donde las formas clientelares más funcionan, donde mayores grados de corrupción había en las administraciones políticas, donde más tranzaban los políticos, donde son menores los compromisos políticos²²⁵.

En la costa atlántica el bloque paramilitar que más consolidación y expansión tuvo fue el Bloque Norte liderado por Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”. Este bloque se expandió a los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, Atlántico y Norte de Santander. Estuvo formado por diferentes frentes y bloques distribuidos en los departamentos citados,²²⁶ por tanto, cuenta con unos recursos organizacionales bien distribuidos por diferentes zonas y divididos en diferentes grupos.

Jorge 40 perteneció a una familia aburguesada de Valledupar. Su padre fue Mayor del Ejército Rodrigo Tovar Cordova y es sobrino del exgobernador Edgardo Pupo. Una lesión en la rodilla le impidió hacer carrera en el ejército. Estudió empresariales y se convirtió en un agricultor exitoso. Comenta que tras varias extorsiones de la guerrilla y tras secuestrar a su padre, se convirtió en autodefensa.²²⁷ Por tanto, este paramilitar aprovechó esta oportunidad de esta sufriendo el acoso de la guerrilla por varias partes para decidir ir por la vía del enfrentamiento. Muy parecido al caso que más adelante se analiza con los hermanos Castaño. Posteriormente se le presentó otra oportunidad política en 1996 cuando un general del Ejército reunió a varias familias importantes de la región con miras a crear un grupo de autodefensas en 1997. Desde entonces se enroló como autodefensa. Rodrigo Tovar viajó con otros dirigentes del Cesar para reunirse con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño en Córdoba y así convertirse en el jefe del Bloque Norte. Fue representante principal de la reunión con políticos en Ralito. Se desmovilizó en marzo de 2006 con un total de 4760 militantes de los cuales 540 se postularon a la ley 975, pero sólo 90 se encuentran cobijados bajo ella²²⁸. En mayo de 2008 fue extraditado a Estados Unidos para responder a los cargos de narcotráfico que se le imputan. En octubre de 2010 un juez de Santa Marta dictó condena de 47 años de prisión por la matanza de 40 personas en Sitio Nuevo

²²⁵ Entrevista a Manuel Alberto Alonso Espinal, Investigador, Universidad de Antioquia, Medellín, agosto, 2007.

²²⁶ El Bloque Norte estaba formado por las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar, Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando, Bloque Bananero, Bloque Catatumbo, Bloque Héroes de Tolova, Bloque Mineros, Bloque Montes de María, Bloque Noroccidental Antioqueño, Bloque Sinú-San Jorge, Bloque Suroeste Antioqueño, Frente Jhon Jairo López, Frente Mártires del Valledupar, Frente Pablo Díaz Zuloaga y Frente Resistencia Tayrona.

²²⁷ “Perfil del jefe paramilitar 'Jorge 40': de ‘patrullero de Mancuso’ a ‘señor’ de la Costa” El Tiempo, 29 de enero de 2006.

²²⁸ “La verdad hasta ahora contada por el Bloque Norte” Boletín CNRR, n° 6, 2008, Bogotá.

(Magdalena) en diciembre de 2000. Según la Fiscalía, este bloque es responsable de 768 víctimas desaparecidas²²⁹.

El contenido del ordenador Jorge 40, decomisado en marzo de 2006 a su lugarteniente, Edgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio”, supuso conocer la implicación del Bloque Norte en la costa caribeña colombiana. Este ordenador supuso conocer de primera mano los recursos que contaba esta organización. La Fiscalía analizó dicho ordenador y elaboró un informe del mismo. En el informe se especifica que hay una lista de 558 personas que estos paramilitares asesinaron en el Atlántico, las entidades estatales que controlaron, los contratos realizados y datos relacionados con el narcotráfico y la desmovilización²³⁰.

El listado de asesinados corresponde al departamento del Atlántico durante los años 2003 y 2005. Pero este bloque actuó en más de un departamento y en un tiempo mucho más prolongado que dos años. Por tanto, se estima que el número de asesinatos es más elevado que el listado de 558 asesinados.

El ordenador muestra como se hacían con los recursos de los hospitales, alcaldías, tiendas, etc. Cobraban un 10% por los contratos que establecían con estas entidades. Crearon una empresa falsa para desviar 1500 millones de pesos de la Alcaldía de Sabanagrande (Atlántico). Convirtieron el Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico) en una caja menor de los paramilitares. En Barranquilla tenían que pagar impuestos los tenderos, vendedores de frutas, ambulantes, pescadores y transportadores y otros pequeños comerciantes de todos los sectores de la ciudad, que tenían que pagar cada mes un 'impuesto' a hombres que aparecían puntualmente en motos y camionetas. Según los análisis de los documentos, las autoridades estiman que el grupo recogía entre los pequeños comerciantes un promedio de 35 y 45 millones de pesos al mes.

También menciona la colaboración de Jorge 40 con fiscales, policías, miembros del DAS y militares del municipio de Soledad. Respecto a Barranquilla aparecen pagos de móviles, gasolina y transporte a algunos miembros de las Fuerzas Militares. Además aparecen desembolsos para

²²⁹ “Jorge 40 es condenado por la matanza de 40 personas” W Radio, 28 de octubre de 2010.

²³⁰ “Así opera el imperio criminal del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40” El Tiempo, 8 de octubre de 2006.

abogados, tratamientos médicos de los 'paras', arreglos de carros y pistolas, 'informantes', 'préstamos', arreglos para libertades de los 'paras' y alimentación²³¹.

Desde el hallazgo del computador hasta este momento, se han realizado nuevas revelaciones sobre la implicación de políticos y paramilitares. A esta situación en la costa se le ha denominado el 8.000 costeño, haciendo relación al proceso 8000 que vivió el Presidente Ernesto Samper durante las elecciones por el pago con dinero proveniente del narcotráfico de su elección presidencial²³². Hasta este momento hay noventa y siete políticos implicados relacionados con el Bloque Norte de Jorge 40 que supone el 30% de los implicados en parapolítica. Hasta mayo de 2011 se contabilizó que al menos cuarenta y tres políticos están relacionados con fraude electoral o apoyo del Bloque Norte en la campaña electoral de cada candidato. Diecisiete políticos financiaron a grupos paramilitares de Jorge 40 y treinta y cuatro llevaron a cabo pactos con Jorge 40 como el Pacto de Chivolo, el Pacto de Pivijay y el Pacto de Ralito. Otros se encuentran relacionados directamente con Jorge 40 por cuestiones de narcotráfico, contrataciones ilícitas u homicidio y desplazamiento de la población.

Como se analizó anteriormente la influencia de los grupos paramilitares en las elecciones se observó el gran impacto que tuvo la implicación de estos grupos en las elecciones legislativas de 2002, en las locales y regionales de 2003 y en su evolución en las elecciones legislativas de 2006. Todos los candidatos políticos que fueron beneficiados en el proceso electoral de 2002 y 2003 por los grupos armados, fueron cooptados por el Bloque Norte de Jorge 40. Es decir, los diferentes departamentos donde se crearon distritos electorales únicos fueron llevados a cabo por este bloque dirigido por el jefe paramilitar Jorge 40. La consolidación en el ámbito político de este bloque comenzó en las elecciones legislativas de 2002 al comenzar a controlar a los funcionarios públicos para el interés del grupo paramilitar. Como se anotó anteriormente, antes de la cooptación política de esos determinados departamentos, hubo una cooptación militar mediante el terror y la violencia en esos departamentos donde ejerció su influencia Jorge 40. Por tanto, mediante el terror y la manipulación electoral y de funcionarios políticos, comenzó a consolidar su poder.

Mediante pactos con diferentes políticos y autóctonos de cada zona, comenzó a realizar reuniones o pactos entre ellos. Entre ellos destaca el pacto de Ralito, Pivijay y Chivolo.

²³¹ “Fiscalía descubrió listados con la nómina de colaboradores de Jorge 40 en Barranquilla”, *El Tiempo*, 26 de noviembre de 2006.

²³² “El 8000 de la costa”, *Semana*, edición 1271, 2006.

El pacto de Santa Fe Ralito (Córdoba) se reunieron treinta y dos políticos el 23 de julio de 2001. Entre los invitados a esta reunión se encontraban 11 congresistas, dos gobernadores, tres alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos. Firmaron el documento los senadores Juan Manuel López y Reginaldo Montes, José María López Gómez, tío de Juan Manuel y en ese entonces Gobernador del departamento de Córdoba; Luis Álvarez, Suplente en la Cámara de Representantes de Reginaldo Montes; Jaime García Exbrayat, exdirector de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge; Álvaro Cabrales, exdiputado conservador; Sigifredo Senior, exalcalde del municipio de Tierralta; Luis Carlos Ordosgoitia, exrepresentante a la Cámara de Córdoba; Eleonora Pineda, exconcejal de Tierralta, Marciano Argel, Secretario de Planeación del Departamento de Córdoba; Fredy Sánchez, exrepresentante a la Cámara por Córdoba; Wilmer Pérez, exalcalde del municipio de San Antero; José de los Santos Negrete, exgerente del Partido Conservador, Germán Ortiz, asesor de la alcaldía de San Antero.

Antes de este pacto, los paramilitares habían amenazado a la población colombiana. En los cinco años anteriores los paramilitares habían cometido más de 250 masacres que dejaron más de 1.700 muertos, según cifras de las propias autoridades. Destaca la masacre de Mapiripán, El Aro, la Granja, el Salado y Chengue.

Para ese momento, la expansión militar de las autodefensas ya había torturado al país. Con 10 bloques, un estado mayor y presencia en 20 departamentos, sólo faltaba dar el siguiente paso: consolidar el poder político. Y la reunión en Ralito se hizo para eso.²³³

Los políticos fueron convocados al cuartel general de las autodefensas por Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor de las AUC; Don Berna, inspector general de las AUC, y Jorge 40, comandante del Bloque Norte de esa organización, para sellar un acuerdo que buscaba refundar la patria colombiana y hacer un nuevo contrato social. A todos los que firmaron les fue bien en las elecciones de 2002 y 2003. Las invitaciones se extendieron a través del entonces gobernador de Córdoba, Jesús María López, a quien Mancuso consideraba como “su segundo padre” y se hicieron a nombre de las Auc semanas antes, y “de ninguna manera” se hizo bajo amenaza. Para el exjefe paramilitar, era más viable incluir a estos políticos tradicionales dentro del proyecto político de los paramilitares, en lugar de intentar lanzar candidatos propios y desconocidos a aspirar a puestos de elección popular. En la reunión también estuvieron presentes académicos que hablaron sobre temas como la globalización y conflicto armado. En la reunión hubo

²³³ “Pacto con el diablo” Revista Semana, 20 de enero de 2007.

alrededor de cien personas de las cuales firmaron el pacto al tercera parte. La Fiscalía llegó a la conclusión que esta reunión fue la puerta de entrada de los paramilitares a la última fase de su proyecto político. "La rápida expansión del paramilitarismo y de su poder militar se tradujo en un enorme poder económico, no sólo gracias al control de las rutas del narcotráfico, sino porque se convirtieron en coadministradores de los recursos públicos. Una vez consolidado ese poder militar y económico, las Auc iniciaron un proyecto político para infiltrar las instancias del poder público a niveles regionales y para el año 2001 y 2002, proyectándose a otras instituciones del nivel nacional"²³⁴.

El pacto de Pivijay y Chívolo se dio en el departamento de Magdalena. Tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos exalcaldes y cuatro concejales de la zona. El pacto de Chivolo fue firmado en ese mismo municipio del Magdalena por 13 candidatos a la alcaldía y 395 personas aspirantes a concejos y a asambleas en septiembre del año 2000, de los cuales han sido investigados 11 políticos. Esta reunión fue convocada por Jorge 40 y por Neyla Alfredina Soto Ruiz, jefa política de las Auc en Magdalena y conocida como 'La Sombrerona' o Sonia²³⁵. Esta reunión fue la primera del movimiento político multipartidista Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida, creada por Jorge 40²³⁶. En este movimiento, Jorge 40 les propuso crear un distrito electoral que les permitiría asumir el control de la Asamblea departamental y de los Concejos y Alcaldías de Tenerife, Plato, Chivolo, Nueva Granada, Ariguani, Remolino, Sabanas de Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo y El Piñón. Algunos firmantes advirtieron un error en el documento porque entonces Zapayán no tenía rango de municipio y por eso no elegía alcalde, pero según un testigo, 'Jorge 40' les dijo que firmaran porque la Asamblea iba a aprobar la ordenanza que creaba el nuevo municipio. Así ocurrió un mes después²³⁷. La mayoría de los asistentes firmaron un acta. Según el acta ese día 'Provincia Unida' decidió apoyar para la Gobernación del Magdalena al liberal José Domingo Dávila Armenta, quien obtuvo 266 votos entre los asistentes, ganándole al candidato José Alfredo

²³⁴ "La historia detrás del Pacto de Ralito", Revista Semana, 18 de enero de 2010.

²³⁵ La jefa política de las Auc constituyó una fundación en la región llamada Mujeres de la Provincia, que canalizaba los recursos de las diferentes administraciones para construir hospitales y escuelas. Incluso llegó a recaudar impuestos en varios municipios del centro del Magdalena. Pero no sólo celebraron contratos con municipios, también extendieron su oferta de servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con suscribieron contratos para el recaudo de la factura del servicio de energía empresas como Electricaribe. Jorge 40 la denominó como su brazo derecho, su gestora política.

²³⁶ "Pacto de Chivolo va a enredar a 410 políticos", El tiempo, 18 de mayo de 2007.

²³⁷ "Congresista Rodrigo Roncallo en la mira de la Corte Suprema por supuesta firma en Pacto Chívolo", Cambio, 26 de abril de 2011.

Ordóñez, que obtuvo 138. Así Dávila conquistó la gobernación en el 2003 y 12 de los asistentes a Chivolo resultaron elegidos alcaldes de igual número de municipios del Magdalena²³⁸.

Otro de los pactos que fue suscrito por Jorge 40 fue el Pacto de Pivijay, en el Magdalena. En julio de 2006 la Fiscalía encontró un documento en uno de los predios de Jorge 40 titulado Convenio político para el debate electoral del 10 de marzo de 2002, en la elección de Cámara de representantes y Senado de la República o ‘Pacto de Pivijay’, firmado entre otros, por José Gamarra Sierra, Dieb Maloof y Jorge Castro, y en el que aparece en manuscrito el nombre de Jorge 40. Este pacto fue firmado el 22 de noviembre de 2001 por varios candidatos al Congreso, alcaldes y algunos diputados para garantizar la elección de los congresistas Dieb Maloof, Jorge Castro, José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco, así como varios candidatos a las alcaldías de Pivijay, San Ángel, Algarrobo, Zapayán, Salamina, Remolino, Chivolo y Ariguaní. El documento establecía que los dineros obtenidos por la reposición de votos de los candidatos elegidos debían destinarse a la construcción de una obra del municipio que saliera elegido por sorteo. De igual modo, comprometía a los elegidos al Congreso a conseguir recursos para la inversión social en la región y a otorgarle participación burocrática a los colaboradores y baluartes del apoyo electoral. Además, quedaban conminados a ofrecer un apoyo logístico a los alcaldes y a ejercer presencia física durante los debates proselitistas que debían adelantarse en los pueblos integrados en el referido pacto político.²³⁹

Algunos medios como la Revista Semana denominaron la influencia de Jorge 40 en la costa como un verdadero imperio. Y en verdad construyó una tupida red de informantes y colaboradores de su proyecto en diferentes áreas. La colaboración con más repercusión ha sido la llevada a cabo por los funcionarios públicos, por los diferentes grados de implicación que tuvieron y también por las condenas que se están viendo sometidos en la actualidad. Después de realizar varias masacres y de ocupar militarmente la zona, procedió al control político mediante el fraude en las elecciones, la imposición de determinados candidatos, la utilización de distritos únicos y la realización de diferentes reuniones y contratos con diferentes actores políticos. Su control abarcó el ámbito local, regional y nacional. Por tanto, en relación con los recursos organizacionales, claramente se puede observar que se sirvió de las tres células, células soldados, células operativas y células de intercambio, es decir, utilizaron a células que se encargaron de administrar la violencia, de conseguir los beneficios económicos y de intercambiar bienes y conductas con

²³⁸ “Capturado exgobernador de Magdalena por firma Pacto Chivolo”, El Tiempo, 1 de diciembre, 2008.

²³⁹ “Chivolo y Pivijay, los otros pactos”, El Espectador, 15 de julio de 2008.

agentes de alto poder. Contaron con una buena red de recursos humanos fortalecidos, sobre todo, por funcionarios públicos. Utilizaron la violencia, el clientelismo como tácticas para adentrarse en los diferentes territorios donde se asentaron. Pero, sobre todo, contaron con un gran aliciente de la sociedad caribeña y fue el hecho de vivir en una sociedad clientelar, permisiva ante las transgresiones y la corrupción. Este hecho se presentó como una oportunidad estructural de estos grupos que aprovecharon al máximo y se metieron en la red clientelar y comenzaron a permearse en el resto de la sociedad colombiana. Jorge 40 es el exponente de autodefensa que se convirtió en paramilitar al comenzar a expandir sus redes por otros departamentos y por diferentes sectores de la sociedad, incluyendo el narcotráfico, por tanto es un ejemplo de cacique narcoparamilitar.

4.5.4.2. El paramilitarismo en Medellín

La criminalidad y la violencia tienen un largo historial en esta ciudad. Está asociada a la historia regional pero también a la modernización producida en el país en la segunda mitad del siglo XX. Los cambios demográficos, poblacionales y urbanísticos se dieron de manera simultánea con el incremento de la delincuencia juvenil y con la aplicación de nuevas formas de control social institucional. En la segunda mitad del siglo XX, la pérdida de hegemonía de la Iglesia y de los empresarios, de los partidos y de los líderes políticos, provocaron cambios cualitativos en la criminalidad, dando lugar a la asunción de la dimensión de actores colectivos, con niveles de organización más complejos y relacionado con empresas delictivas muy rentables. Esta violencia comenzó a ser problemática desde la década de los setenta (Pérez, Restrepo y Vélez, 1997).

En términos generales, Medellín ha sido una sucesión de guerras que se superponen. Bandas criminales²⁴⁰, milicias²⁴¹, sicarios²⁴², escuadrones de la muerte, grupos de limpieza social,

²⁴⁰ La banda tiene su origen en la “barra” que es como se conoce a los grupos no delincuenciales de adolescentes que tienen en común con las pandillas las experiencias grupales. Se diferencia de la banda que éstas no tienen manifestaciones violentas. Por tanto, las bandas están dentro de la cultura de la violencia. Las bandas pueden tener diferentes propósitos como lucrativos, de autodefensa de la comunidad, de milicias con un objetivo político o de vicios. Para saber más, Bedoya, Diego (1991), De la barra a la banda. Estudio cualitativo de la violencia juvenil en Medellín, Ed. El Propio Bolsillo, Medellín.

²⁴¹ Las milicias surgen en la década de los ochenta debido a la falta de justicia, al alto grado de corrupción institucional y a la irrupción de numerosas formas de violencia. En este contexto aparecen las milicias como grupos armados que brindan seguridad a las comunidades ante la incapacidad del Estado. Surgen en Medellín en el barrio popular perteneciente a la comuna uno de la zona nororiental de Medellín, pero no son un fenómeno exclusivo de las comunas populares ni de los sectores más pobres de la población. Entre las milicias más populares destaca: Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Bolivarianas, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas. El Presidente Gaviria realizó una desmovilización de 800 milicianos en 1994. Para saber más: Jaramillo, Ana M. (1993) “Milicias Populares en Medellín, entre lo privado y lo público”, Revista Foro, n°. 22,

combos²⁴³, mafiosos, bandas de oficina²⁴⁴, cárteles del narcotráfico²⁴⁵ y paramilitares se dieron cita en esta misma ciudad. Entre ellos se han producido muchas acciones por el control de territorio, por venganzas. La historia de violencia y de formación de grupos armados es muy extensa hasta el punto de que en la década de los ochenta fue considerada la ciudad con mayor índice de asesinatos del mundo. Aunque la violencia ha descendido, sigue siendo un gran problema para la ciudad. Por tanto, se contó ya con una oportunidad estructural como fue la violencia de diferentes grupos como medio para controlar el territorio.

El primer grupo de paramilitares en Medellín fue el MAS creado en 1981 inicialmente por narcotraficantes. Desde 1984 comenzaron a operar las autodefensas campesinas del Magdalena Medio que empezaron a realizar acciones y a relacionarse con algunas bandas de barrio en alianza con sectores del narcotráfico. Entre 1987 y 1988, aumentaron los asesinatos políticos donde participaron los paramilitares como los asesinatos de alumnos y profesores de la Universidad de Antioquia. A partir de la creación de las ACCU en 1994 utilizaron algunos combos y bandas de oficina como la Terraza, aunque hubo varios enfrentamientos entre ésta y las autodefensas. También llevaron a cabo acciones contra milicias, autodefensas. Desde 2001 los paramilitares comenzaron a organizar grupos urbanos de autodefensas en los barrios populares. Tras varias acciones contra las milicias, controlaron las autodefensas casi todos los barrios del área metropolitana de Medellín, en alianza con varias bandas. Los grupos de autodefensa que actuaban fueron el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro. Entre 2002 y 2003 hubo varios enfrentamientos entre éstos dos bloques, cuya consecuencia fue que el Bloque Metro se retiró de los barrios donde tenían presencia. El Bloque Cacique Nutibara tomó el control e impuso una “pacificación” a través de una serie de normas que prohibía las guerras entre bandas y conductas

Bogotá; Téllez, A. M. (1995) Las milicias populares. Otra expresión de la violencia social en Colombia. Ed. Rodríguez Quito, Bogotá.

²⁴² El sicariato está ligado al fenómeno de las bandas. El sicario tiene las mismas características psicológicas y sociales que el miembro de la banda, pero se diferencia de él que se especializa en la muerte. Es decir, es un pistolero al servicio de un postor el cual tiene que hacer la tarea de asesinar a una persona. El concepto de sicariato se utiliza cuando hay dinero de por medio para realizar un homicidio. El sicario opera con tres actores principales: el contratante, el organizador y el sicario.

²⁴³ Bandas juveniles dedicadas al cobro de extorsiones a conductores y comerciantes.

²⁴⁴ Son bandas que están patrocinadas por mafiosos, trabajan para las oficinas del narcotráfico. Realizan sus actividades delictivas fuera del barrio que controlan. También ejercen el control militar y a veces cumplen el papel de policías locales pero asumen una actitud más pasiva con la comunidad.

²⁴⁵ En la década de los ochenta, el comercio de la droga estaba dirigido por el cartel de Medellín cuyo jefe era Pablo Escobar. Inició una campaña de terror contra aquellos que supusieron una amenaza para su negocio. El gobierno creó un Bloque de Búsqueda para darle captura. Tras negociar con el gobierno pasó un tiempo en la cárcel pero se escapó. Se organizó un grupo en contra de Escobar y sus aliados, eran los Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES). Finalmente, Escobar fue muerto a tiros en diciembre de 1993.

violentas. Esta pacificación siguió con la Operación Orión y Mariscal por parte de la fuerza pública, las milicias se replegaron a otros sectores y los paramilitares ocuparon esos espacios.

Don Berna o Adolfo Paz, eran los alias de Don Diego Fernando Murillo Bejarano, jefe de seguridad de los hermanos Moncada y Galeano de Itagüí, en los años 80. Al ser asesinados por Pablo Escobar, se unió a los Pepes y después a las autodefensas de Carlos Castaño. Desde 1995 se convirtió en el jefe de la oficina principal de narcotráfico de Medellín en Envigado. Se convirtió en el jefe de la banda La Terraza desde 1995 hasta 2000 y de otras bandas metropolitanas. Tras una lucha que se desató con un sector de la banda La Terraza en el 2000 se trasladó a los campamentos centrales de las autodefensas. En el 2001 ayudó a crear el Bloque Cacique Nutibara que estaba formado por una buena parte de las bandas, paramilitares, narcotraficantes, combos y delincuentes aislados.

El Bloque Metro surgió como una fuerte presencia en Medellín a partir de 1998. Carlos Castaño asignó a este grupo armado la tarea de enfrentarse a las milicias de las guerrillas de Medellín. Era un bloque realmente contrainsurgente, comenta el profesor Manuel Alberto Alonso,²⁴⁶ formado fundamentalmente por gente que venía de muchas zonas de Antioquia, no habitantes de Medellín. Estaba dirigido por Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero o Rodrigo Franco, excapitán del Ejército, amigo personal de Carlos Castaño, principal táctico militar de las AUC y miembro de los PEPES. En el año 2000 había capturado a muchas de las bandas de la ciudad. Se convirtió en el grupo dominante de la ciudad. “Se enfrentó a dos cuestiones fundamentales, por una parte a unas guerrillas muy fortalecidas de la ciudad que había logrado controlar espacios y por otra parte se va a encontrar con el fenómeno del narcotráfico y la criminalidad de las bandas. De una o de otra forma, la expansión del paramilitarismo en Medellín a través de este bloque siempre se iba a encontrar con el obstáculo del narcotráfico, las bandas y la economía ilegal. Este es el punto de choque de este bloque, que era la línea que quería seguir Carlos Castaño”, explica Alonso. El Bloque Metro puede ser considerado un grupo contrainsurgente o de autodefensa, Doble Cero no se consideraba paramilitar. Comenzó a realizar limpieza social de delincuentes, vagos, prostitutas para luego luchar frente a la guerrilla y establecerse como grupo de autodefensa que brindaba seguridad frente al acoso guerrillero. Doble Cero prefería financiarse por el secuestro y vacunas, no por el narcotráfico.

²⁴⁶ Entrevista a Manuel Alberto Alonso Espinal, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, Medellín, 9 de agosto de 2007.

El enfrentamiento violento entre Don Berna y Doble Cero se produjo por las críticas de Doble Cero al creciente papel del narcotráfico y de los narcotraficantes dentro de las AUC incluyendo en Medellín, bajo Don Berna. En septiembre de 2002 Doble Cero retiró el Bloque Metro de las AUC. Tras meses de enfrentamientos en abril de 2004 anunció que desactivaría la rama militar del Bloque Metro. Pero en mayo Doble Cero fue asesinado. Según Alonso, el problema de este enfrentamiento estuvo en la reorganización paramilitar de 1997. En este año las AUC empiezan a vender franquicias paramilitares para que tuvieran presencia en todos los territorios donde la guerrilla tenía presencia. Pero empieza a entrar el narcotráfico muy fuerte dentro de las AUC. Las denuncias de Carlos Castaño frente a esta entrada del narcotráfico, su distancia respecto a estas franquicias y con la gente que estaba entrando en ellas provoca la pérdida de protagonismo de Castaño y toda esa gente nueva se reúne en torno a Salvatore Mancuso. Carlos Castaño tuvo reticencia a buscar la colaboración del narcotráfico para enfrentar a las guerrillas. En Medellín, se produce por esta cuestión una fractura entre las AUC y el Bloque Metro. Las AUC le declaran la guerra al Bloque Metro. Los sectores del narco en Medellín, la oficina de Envigado y las bandas se pliegan al proyecto de las AUC y forman el Bloque Cacique Nutibara que termina enfrentándose al Bloque Metro²⁴⁷.

Para 2001, los paramilitares consolidaron su poder en varias zonas de Medellín. Sin embargo las milicias seguían fuertes en el oeste de Medellín, en las Comunas 13 y Comuna 7 y en el nordeste, en las Comunas 1 y 3. Los paramilitares querían tomar esas zonas porque representaban controlar importantes rutas de acceso a la ciudad y de acceso a la zona industrial de Medellín. Las operaciones Oriol y Mariscal llevadas a cabo en el 2002 por la fuerza pública, con la participación de los paramilitares, puso fin al control de las milicias en las Comunas 13 y 7 y permitieron a los paramilitares hacerse con el control de esas zonas mediante esta oportunidad de unirse a la fuerza pública. Estas operaciones supusieron la desaparición, detención y asesinato de muchas personas acusadas de pertenecer a las milicias. Tras las operaciones, Amnistía Internacional tuvo constancia de violaciones de derechos humanos perpetrados por paramilitares. En particular, los paramilitares han amenazado, desplazado por la fuerza y matado a dirigentes comunitarios locales o a otras personas a las que han acusado de tener vínculos con grupos de milicia. Muchos de los que han sido blancos de estos ataques habían sido detenidos brevemente durante la Operación Orión u otras operaciones de las fuerzas de seguridad, y habían sido puestos en libertad por falta de pruebas. También se dirigieron ataques contra testigos de violaciones de derechos humanos

²⁴⁷ Entrevista a Manuel Alberto Alonso Espinal, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquía, Medellín, 9 de agosto de 2007.

cometidas por las fuerzas de seguridad, así como contra familiares de víctimas de estas violaciones. Los que se negaban a colaborar con los paramilitares también fueron blanco de amenazas y ataques de los paramilitares (Amnistía Internacional, 2005).

Tras aprovechar la oportunidad política de controlar los paramilitares las Comunas 13 y 7, trataron de penetrar en los distritos nororientales de Medellín. A consecuencia de ello, en 2003 se iniciaron en la zona nororiental de la ciudad una serie de operaciones de las fuerzas de seguridad en coordinación con los paramilitares.

El Bloque Cacique Nutibara (BCN) se desmovilizó el 25 de noviembre de 2003. Más de ochocientos paramilitares del BCN se desmovilizaron. Sin embargo la estructura militar se reorganizaba en el oriente antioqueño bajo el nombre de Héroes de Granada. En Medellín posteriormente se dio la desmovilización del Bloque Héroes de Granada, el cual se organizó con los mandos medios y las armas no entregadas del BCN. Articulaba su actividad narcotraficante por medio de la Oficina de Envigado. Sin embargo, se desmovilizó en agosto de 2005, con 2.033 integrantes y sólo 1120 armas.

En el año 2004, la Alcaldía de Sergio Fajardo creó el Programa de Paz y Reconciliación, para trabajar simultáneamente con el Programa del Gobierno Nacional de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR). Según Jorge Gaviria, director del Plan Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, el plan tiene tres ejes fundamentales, educación, acompañamiento psicosocial e incursión laboral de los desmovilizados. Todo el programa está enfocado a la reconciliación y reparación colectiva y directa²⁴⁸.

Los desmovilizados del BCN, avalados por el gobierno, crearon una ONG, Corporación Democracia. El Gobierno nacional reconoció a la Organización No gubernamental denominada "Corporación Democracia" como la organización representante de los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara, con quien se mantuvo una interlocución permanente para el seguimiento, desarrollo y apoyo del proceso de reincorporación. El Gobierno nacional, la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia diseñaron los programas de seguimiento, desarrollo y apoyo al proceso de reinserción. El Gobierno nacional, la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia diseñarán los programas de seguimiento, desarrollo y apoyo al proceso de

²⁴⁸ Entrevista a Jorge Gaviria, Director de Paz y Reconciliación, Alcaldía de Medellín, realizado el 27 de julio de 2007 en el Ministerio del Interior, Bogotá.

reinserción. El programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno Municipal, estuvo presente en múltiples aspectos de la reinserción de los jóvenes que provenían de las estructuras de las AUC. Giovanni Marín, líder político del BCN dirigió esta ONG. Agrupó a cuatro mil desmovilizados.

Pero aumentaron las denuncias de las comunidades sobre abusos y control social por parte de los reinsertados, hostigamiento a los líderes tradicionales, la connivencia con las actividades ilícitas y el manejo poco claro a los recursos obtenidos a través de la contratación con la Administración Municipal. Dichas denuncias fueron consignadas en su momento por entidades como la Personería de Medellín en sus informes de los años 2005, 2006 y 2007.

Sin embargo, en abril de 2009 esta ONG fue acusada de servir como brazo político de la banda criminal “Los Paisas” que era el componente rural de la Oficina de Envigado. La fiscal especializada señaló directamente a Giovanni Marín y a Fabio Acevedo, directivos de la Corporación Democracia, como representantes de los intereses de la banda Los Paisas dedicada a la extorsión y la fabricación, porte y distribución de estupefacientes, y responsable de desplazamientos masivos, homicidios y hurtos en un amplio sector del nororiente de Medellín²⁴⁹.

Tras la desmovilización del BCN en noviembre de 2003, las estructuras paramilitares de la ciudad permanecieron esencialmente intactas, y Amnistía Internacional siguió recibiendo informes de violaciones de derechos humanos cometidas por ellos. Continuaron sus acciones pues este bloque contaba con mucha ayuda venida de las bandas criminales, su poder residía en haber estado reforzado por estas bandas, pues formaban parte de sus recursos organizacionales. Por tanto, pudieron esconderse tras las bandas criminales y continuar su presencia en la ciudad. Tras esta desmovilización, el número de homicidios descendió pero fue porque los paramilitares antes de la desmovilización lograron ejercer un control socioeconómico y político y militar que fue consolidado antes de la desmovilización.

Además tras la desmovilización muchos fueron a parar en empresas de seguridad privada en el sector formal e informal. Según Amnistía Internacional, el número de estas empresas en el sector informal ha aumentado considerablemente, sobre todo aquellas relacionadas con el BCN pues según esta ONG están controlando las Mesas Barriales de Convivencia y la Junta de Acción

²⁴⁹ “La Corporación Democracia acorralada por la justicia” Agencia de Prensa IPC, 24 de junio de 2009.

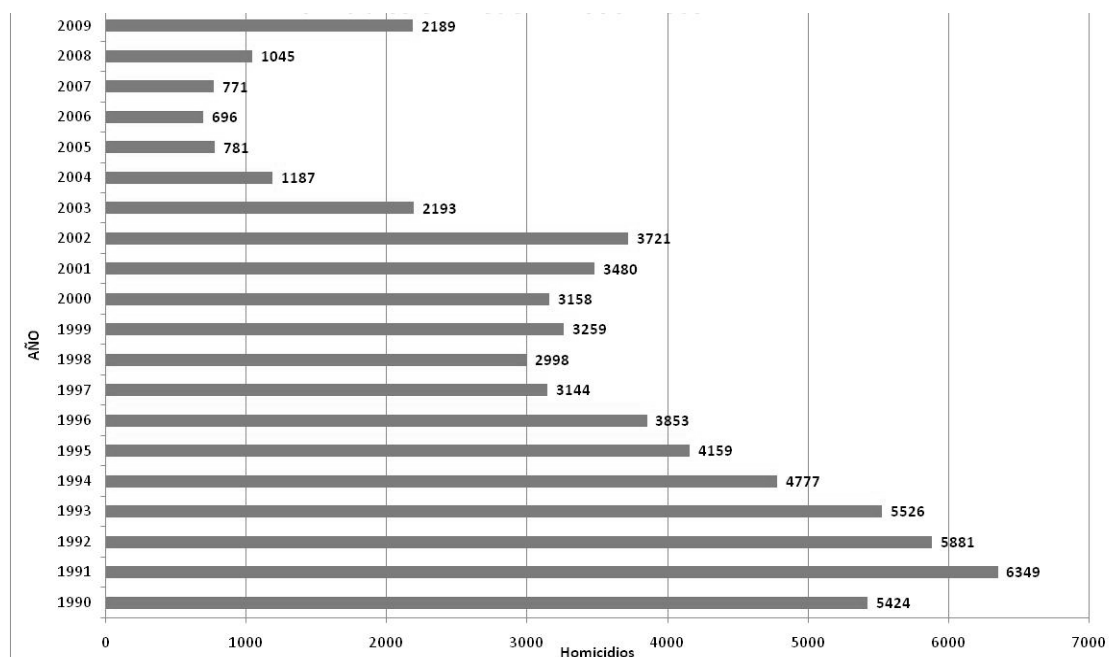
Comunal. Estas actividades muestra la preocupación de que los desmovilizados se estén reciclando en el conflicto mediante su incorporación a estas empresas.

A este conflicto hay que añadir la legislación vigente sobre este tema. Tanto Andrés Pastrana como Álvaro Uribe legislaron a favor de que lleven armas los ciudadanos y que los desmovilizados ayuden al gobierno en tareas de seguridad en colaboración con las fuerzas de seguridad. Según un acuerdo firmado el 10 de diciembre de 2003 entre el gobierno y el BCN, Metroseguridad, de la Alcaldía de Medellín, apoyará logísticamente el funcionamiento y dotación de la red de información preventiva que se deberá crear para tener alertas tempranas que protejan a los desmovilizados y sus sectores de retorno. Sin embargo, no existen garantías que garanticen que los paramilitares desmovilizados no han utilizado, y no están utilizando, esta red de información como mecanismo de acopio de información sobre defensores de derechos humanos y activistas comunitarios en el ámbito local (Amnistía Internacional, 2005).

Tras la desmovilización, comenzaron a descender los homicidios. El Plan Paz y Reconciliación creyó que se debía a la reincorporación de los desmovilizados a la sociedad civil. Sin embargo, el aumento de los homicidios desde 2008 es una prueba de la reactivación de los grupos paramilitares. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2010 Medellín tuvo 2024 homicidios y en el primer trimestre de 2011, 473 homicidios²⁵⁰. Por tanto, siguen utilizando la violencia como recurso táctico en sus operaciones (Figura 48).

²⁵⁰ Boletín estadístico mensual diciembre 2010 y abril 2011. Subdirección de Servicios Forenses. Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Figura 48. Homicidios en Medellín 1990-2009



Fuente: Personería de Medellín e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2011

Al aumento del homicidio en Medellín se añade el control social de la población, el desplazamiento forzado y la persecución de líderes comunitarios como también tácticas de este grupo. El control social y territorial de los paramilitares sobre las comunidades permanece intacto. Los paramilitares buscan legalizar el dinero ilegal, organizan los recursos públicos que las comunidades reciben y les obligan a invertirlos en las actividades que ellos quieren realizar. Las organizaciones comunitarias se encuentran bajo el control de los paramilitares, dependen de su autorización para realizar sus labores comunitarias. Los niños también se encuentran en peligro pues el reclutamiento forzado por parte de los paramilitares continúa siendo un grave problema. A través de obtener una mejora en su situación económica los paramilitares embaucan a los jóvenes. Desde el 2004 el desplazamiento interurbano de Medellín ha aumentado. Hasta febrero de 2010 se ha contabilizado 10.542 personas desplazadas como consecuencia de las disputas del control territorial de la estructura paramilitar.

Por tanto, a pesar del proceso de desmovilización que vivió Medellín, los paramilitares se reacomodaron al juego de la desmovilización pero siguieron ejerciendo control social, político y territorial. La violencia, el desplazamiento forzado y el control de la población son productos del fracaso del proceso de desmovilización por parte de las autoridades locales y las fuerzas militares.

Don Berna tuvo una influencia política más limitada que Jorge 40. Su influencia se extendió a Medellín y su área metropolitana. Comenzó a infiltrarse en las Juntas de Acción Comunal antes de desmovilizarse. Posteriormente su influencia se hizo más evidente cuando, al igual que Jorge 40, apoyó a la representante Rocío Arias en las elecciones de marzo de 2006.

En las ciudades de Envigado y Bello ha tenido mucha influencia. Como jefe de La Oficina de Envigado, Don Berna operaba tranquilamente en el departamento a cambio de favores. Durante años este municipio ha sido manejado por la familia Mesa, de estirpe liberal, que mantuvo hasta hace poco, representación parlamentaria. Jorge Mesa, quien falleció, fue representante a la Cámara de 1990 al 1991, cuando fue revocado por la Constituyente. Su hijo José Ignacio Mesa fue diputado del departamento entre 1992 y 1994, alcalde de Envigado 1995-1996, senador entre 1998 y el 2002, y representante a la Cámara en el periodo 2010-2014 por Cambio Radical. José Mesa está siendo indagado por nexos con Don Berna mediante la Oficina. Según declaraciones del paramilitar Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, la mayor parte de la clase dirigente de Antioquia recibió apoyo electoral mediante la Oficina de Envigado mediante material publicitario, camisetas, transporte y dinero²⁵¹.

En Bello, Don Berna reclutó a jóvenes sicarios, doblegó a las bandas y ejerció una gran influencia en este municipio. En este municipio estableció relación con dos parlamentarios Óscar Suárez Mira y Mauricio Parodi. El primero empezó como conductor de la alcaldía, Alcalde, representante a la Cámara y ahora senador. Parodi, por su parte, es un odontólogo y dirigente deportivo. A ambos se les liga con Hugo Albeiro Quintero, el dueño de Bellanita de Transporte, hombre conocido porque financia a varios políticos y mantiene lazos estrechos con varios de ellos. Está relacionado directamente con la Oficina de Bello dirigida por Don Berna²⁵². Entre aquellos que fueron beneficiados electoralmente por Don Berna y que se encuentran investigados por la Corte Suprema de Justicia está William Vélez, exrepresentante de Cámara de 2002 a 2006 y actual parlamentario andino le acusan de haber sido favorecido electoralmente por el apoyo de Don Berna²⁵³. También la senadora Olga Suarez Mira, hermana de Oscar Suarez Mira fue favorecida electoralmente. Los senadores Guillermo Zapata y Guillermo Gaviria, y el concejal de Medellín Diego Arango quien llegó al Concejo en el 2004 con votos de barrios de influencia de 'Don Berna'. El gobernador Luis Ramos y el alcalde Luis Pérez, obtuvieron también beneficios electorales de Don Berna.

²⁵¹ "Parapolítica: José Mesa", *El Nuevo Siglo*, 11 de marzo de 2011, Bogotá.

²⁵² "El turno de Antioquia" *Revista Semana*, 14 de abril de 2007.

²⁵³ "Por parapolítica, indagación contra el parlamentario andino William Vélez", *El Espectador*, 9 de febrero de 2011.

En resumen, el poder que desprende Don Berna es diferente al de Jorge 40. Don Berna es un paramilitar narcotraficante con un origen donde el narcotráfico y la violencia está muy presente y fue utilizado por él como unas oportunidades estructurales para adentrarse en Medellín y controlarlo. Es por tanto un narcoparamilitar que se impuso a las bandas, combos y milicias en Medellín controlando esta ciudad y su área metropolitana junto con la ayuda de algunas bandas y de la fuerza pública como parte de sus recursos humanos. Al control territorial también se une el control político mediante su influencia en determinados cargos públicos suficientes para que pueda seguir con su labor intimidatoria y de control territorial. Por tanto, dentro de su estructura, como Jorge 40, también se organizó mediante células soldados, operativas y de intercambio. En cambio, Doble Cero, era de la rama más autodefensa y contrainsurgente, opuesto a la introducción del narcotráfico en las AUC. Su Bloque se centralizaba en San Carlos y en poblaciones de alrededor de Medellín, por tanto su orientación no tendría a expandirse a otros departamentos.

4.5.4.3. El Bloque Central Bolívar

Este Bloque fue comandado por Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco, Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque Escobar alias Ernesto Báez. Ocuparon los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Santander, Caldas, Antioquia y Nariño. El origen de este bloque se remonta a las Autodefensas del Magdalena Medio y de Puerto Boyacá. Estas autodefensas nacieron en la década de los años setenta para combatir a la guerrilla de sus abusos principalmente de las FARC, EPL y el ELN. Se comenzaron a concentrar en el sur del departamento de Bolívar por el valor estratégico de la zona como punto de comunicación con el río Magdalena y la costa atlántica y por las explotaciones de oro y plantaciones de hoja de coca. Desde 1997, Carlos Castaño intentó varias veces ingresar al sur de Bolívar pero fue frenado por los ataques de la guerrilla. Julián Bolívar y Macaco fueron ayudados por las Autodefensas de Santander y del Cesar junto con las AUC para entrar en dicho territorio. Se asentaron en el corregimiento de San Blas, en el municipio de Simití, en Bolívar. Este corregimiento se transformó en el centro de sus operaciones. Por ello crearon un centro de comunicaciones y abastecimiento de ropa y accesorios para el combate. También crearon un centro de atención médica, una emisora paramilitar y una Escuela de Estudios Políticos Superiores al mando de Ernesto Báez para formar a los cuadros políticos de los paramilitares, a los líderes de las bases populares y del movimiento comunal, para prepararle en materias como la formación del Estado,

la evolución de las ideas políticas, las veedurías públicas y los mecanismos de participación democrática, entre otros temas. Es decir, comenzó a darles una identidad a esos paramilitares mediante la formación en temas políticos.

La fundación del Bloque Central Bolívar tuvo como contexto las protestas en contra de la zona de despeje de los municipios del Yondón en Antioquia y Cantagallo, San Pablo y Simití en Bolívar, para las conversaciones con el ELN durante el gobierno de Andrés Pastrana de 1999 a 2001. Los paramilitares, aprovecharon esta oportunidad y abanderaron este movimiento nacional en contra del despeje. Realizaron marchas y paros cívicos. Según la Fiscalía, este movimiento fue la base política de este bloque a cargo de Ernesto Báez y Jairo Ignacio Orozco González alias “Taraza” que convirtió este movimiento en un movimiento político por el que apostó a las elecciones al Congreso por medio del movimiento Convergencia Popular Cívica. Es decir, los paramilitares consolidaron a los líderes de ese movimiento con el objetivo de lanzar una lista al Senado en 2002. De este modo surgió bajo el auspicio del BCB el partido político Convergencia Popular Cívica. Por tanto, a través de este movimiento no sólo obtuvo recursos humanos capaces de influenciar, sino que se convirtieron en células de intercambio, al establecer relaciones en la esfera política.

Además, el 24 de julio de 1997 el Consejo Nacional Electoral le concede la personería jurídica número 171 a Convergencia Ciudadana, partido que nace bajo la dirigencia de Luis Alberto Gil Castillo, un licenciado en Sociales, presidente del Sindicato de Educadores de Santander y miembro de la Junta Nacional de Federación Colombiana de Educadores - FECODE. En ese mismo año Gil fue elegido para el cargo de diputado de la Asamblea Departamental de Santander y para las mismas elecciones Convergencia en coalición con los partidos Liberal y Conservador, avala al candidato Miguel Jesús Arenas, quien finalmente ganó las elecciones para la gobernación de Santander. En el año 2002 Convergencia fue el único en ganar dos curules en la Cámara de Representantes para Santander, con Luis Alfonso Riaño y José Manuel Herrera, mientras Luis Alberto Gil Castillo fue elegido senador de la República. Gil está detenido por concierto para delinquir agravado. Al senador Gil se le acusa de reunirse con Ernesto Báez y Julián Bolívar en Medellín, Puerto Berrio y Bucaramanga y se sospecha del origen de sus recursos para mantener este partido y numerosas empresas de su propiedad²⁵⁴.

²⁵⁴ De Convergencia al PIN, Observatorio del conflicto armado, Corporación Nuevo Arco Iris, disponible en http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/oca/analisis/Convergencia_PIN.pdf

En esta elección, el BCB también apoyó la candidatura de Carlos Higuera Escalante como senador. Otros políticos del partido Convergencia Ciudadana tuvieron apoyos del Bloque Central Bolívar. Entre ellos destaca los representantes Nelson Naranjo y José Manuel Herrera que obtuvieron apoyos de este bloque para las elecciones de 2002.

En 2003 Convergencia Ciudadana gana la gobernación del Santander con la candidatura de Hugo Aguilar quien obtuvo 300 mil votos. Ese mismo año Convergencia se hizo a 21 alcaldías y se convirtió en el noveno partido más votado del país. Logró las alcaldías de municipios con históricas alteraciones de orden público y fuerte presencia paramilitar como Arauca (Arauca), Puerto Wilches (Santander), Carepa (Antioquia), Puerto Boyacá y Muzo, en Boyacá. También triunfó en siete curules para las asambleas (cuatro en Santander, una en Tolima, una en Huila y una en Vaupés) y sacó 317 concejales, 143 de ellos en Santander.

Alcanzó en las elecciones de 2006, 567 mil votos en todo el país. Logró siete escaños en el Senado y tres de las siete curules que le corresponden a Santander en la Cámara. Para la Cámara subió de dos a tres curules a través de Alfonso Riaño, José Manuel Herrera y Edgar Gómez (hoy senador electo por el Partido Liberal). Riaño congresista del partido llamado por la Corte, obtuvo enormes mayorías en los municipios santandereanos aledaños a Puerto Berrío, el escenario de la reunión con Báez. De su mano, Convergencia se hizo al triunfo en municipios como Landazuri y en algunos, como Cimitarra, alcanzó el 77% de los votos del partido, que a su vez barrió a los demás.

También están siendo investigados el senador Oscar Josué Reyes por Convergencia Ciudadana. Los concejales apoyados durante las elecciones de 2007/2011 fueron Alcides Ruiz Mantilla y Etemilson Vásquez y los exconcejales del periodo 2003/2007 fueron Freddy Augusto Álvarez, Otoniel Isaza Gutiérrez, Henry Mantilla Sandoval y Mayvis Montes.

También apoyaron al alcalde Josué Jaimes Caballero de El Playón, en Santander a las elecciones de 2002 por Cambio Radical. Y al senador Carlos Clavijo de Convergencia Popular Cívica, apoyado también por Jorge 40 del Bloque Norte. Edgar Cote, exalcalde de Barrancabermeja por el Polo Democrático Alternativo, está detenido por apoyo electoral.

Luis José Arenas, exdiputado por el Partido Liberal también está acusado de mantener apoyo electoral con este grupo armado. Julio Cesar Ardila, exalcalde de Barrancabermeja, fue condenado

a veintiocho años y ocho meses por pagar 150 millones de pesos a los paramilitares del Bloque Central Bolívar por el asesinato del periodista Emeterio Rivas.

La mayor parte de los implicados y favorecidos por el Bloque Central Bolívar fueron apoyados en las elecciones a los diferentes puestos públicos. Hasta el momento hay veinte y un funcionarios implicados, siendo la mayor parte de ellos del departamento de Santander. La mayor parte de estos funcionarios provienen del partido Convergencia Ciudadana y Convergencia Popular Cívica, de nueva creación y con claras implicaciones de haber constituido una estructura de los grupos paramilitares. Estos partidos fueron un proyecto en sus zonas de influencia. En este caso prevaleció la creación de nuevas estructuras sobre viejas alianzas caciquiles. Por tanto el objetivo del Bloque Central Bolívar fue crear nuevas estructuras para poder competir por el poder local, regional y nacional con candidatos afines a sus propósitos a través de esta nueva fuerza política.

4.5.4.4. Las Autodefensas Campesinas de Ortega

Varios de los líderes de las Autodefensas Campesinas de Ortega fueron a hablar a Bogotá con el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, que desconocía de su existencia. Los líderes fueron para que se les incluyeran dentro del proceso de desmovilización que estaba llevando a cabo el gobierno de Álvaro Uribe. Mediante la resolución 224 del 5 de diciembre de 2003 se reconoce la existencia de estas autodefensas y como miembros representantes a Ruvinder Becoche y Lizardo Jair Becoche. De tal manera eran reconocidas como autodefensas y participaron en la negociación con el gobierno nacional.

Este grupo de autodefensas se creó en los años sesenta como respuesta a los ataques de las FARC y el ELN, en concreto de los frentes 6, 8 y de Jacobo Arenas de las FARC y el frente Lucho Quintero del ELN. Uno de los líderes de este grupo, Lizardo Becoche comenta que realmente como grupo armado no existían, sino que “a la hora de defendernos de la guerrilla, cogíamos las escopetas, nos uníamos y se armaba la plomacera. Nosotros no fuimos autodefensas de cultivar coca”. Según comenta Lizardo, "en realidad todo el pueblo estuvo armado"²⁵⁵. Por tanto, estamos ante un grupo armado de autodefensa pura sin contacto con el narcotráfico, totalmente defensivo y, hasta el momento, sin relación con funcionarios públicos para obtener beneficios. En la ceremonia de desarme, Luis Carlos Restrepo explicó la diferencia entre este

²⁵⁵ “Ortega y su historia contra las guerrillas”, *El colombiano*, mayo 2004. “Campesinos colombianos dejaron armas para producir café de alta calidad en el Cauca” *Guía del Café*, 15 de diciembre de 2007. Disponible en www.guiadelcafe.com

grupo y el de las AUC, desmovilizado semanas atrás. "Lo del Cauca es muy diferente a lo vivido en Medellín, porque éste es un grupo de autodefensas autónomo. Estas del Cauca son unas auténticas autodefensas campesinas, es una comunidad que se ha organizado, por fuera de la ley, para defenderse de los ataques de la guerrilla."²⁵⁶

Estas autodefensas llegaron hasta el corregimiento de El Carmelo. Para enfrentarse a la guerrilla cavaban túneles de hasta 500 metros para poder protegerse de las guerrillas y esconderse. Noris Pechené, líder de las familias de la región y campesina de Ortega comenta que mantenían a la guerrilla a raya para evitar que se hicieran con el pueblo.

Las autodefensas de Ortega no están dentro de la unión de diferentes grupos para militares bajos las siglas AUC. Aunque si tuvieron relación con este grupo en la zona pues Carlos Castaño mandó algunos bloques en el año 2000 a esta zona para prestar apoyo y respaldo. La relación no fue fructífera pues hubo problemas que hasta el momento se desconocen en profundidad, pero las AUC se fueron del territorio y arrastraron con ellas a diez miembros de las autodefensas de Ortega. Por tanto, utilizaron como recursos humanos a los mismos pobladores del Cauca.

Este grupo se desmovilizó el 7 de diciembre de 2003 con 167 miembros. Entregaron 49 armas, siendo dos armas cortas y el resto armas largas y 1517 unidades de munición de diferente calibre. Tras el proceso de desmovilización numerosas instituciones públicas y privadas están llevando a cabo proyectos de reconciliación como la Federación de Cafeteros de Colombia en el cual las comunidades de Ortega y Dinde para producir grano de café y venderlo como el Café de la Reconciliación en las tiendas Juan Valdéz. Los beneficios económicos que genere esta edición especial de café de navidad se invertirán en un programa de apoyo a la cultura y a la comunicación para los más de 700 niños y jóvenes de las comunidades de Ortega y Dinde.²⁵⁷

En resumen, las Autodefensas Campesinas de Ortega corresponde a un grupo de autodefensas con escasa relación con las AUC cuyo principal objetivo es defenderse frente al acoso guerrillero. Sin relación con el narcotráfico ni con la clase política a cambio de favores.

²⁵⁶ "Salvoconducto a paras desmentido", *BBC*, 9 de diciembre de 2003.

²⁵⁷ "Hoy se firmó alianza estratégica entre la ACR y la Federación de Cafeteros de Colombia", *Revista Café y Cultura*, 30 de octubre de 2007.

4.5.4.5. Carlos Castaño y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

Las ACCU fueron fundadas en 1994. Su consolidación como fuerza contrainsurgente en Urabá coincidió con la elección de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia entre 1995/1997 y su promoción de las cooperativas de seguridad, las Convivir. Esta consolidación de este grupo armado también coincidió con el nombramiento del general Alejo Rito del Río como comandante de la XVII Brigada del Ejército en 1995. Tanto las Convivir como la ayuda prestada por el General del Río a los paramilitares fueron dos oportunidades esenciales para el posterior desarrollo y expansión de las ACCU y la posterior creación de las AUC. Pero, para llegar a esta situación es importante tener en cuenta la historia de Córdoba y Urabá, cómo se forjó el liderazgo de los hermanos Castaño y las acciones regionales de resistencia y polarización que se vivieron en esa región.

Córdoba fue forjada como parte de la colonización de franceses, norteamericanos, sirio-libaneses, caribeños, italianos, belgas y antioqueños que se conformaron como parte de la elite empresarial cordobesa dedicada a los hatos ganaderos, agrícolas y a la explotación del oro del río Sinú.

Córdoba y Urabá vivieron conflictos sociales y movimientos alternativos al modelo bipartidista que provocaron la represión por parte de las fuerzas militares, guardianes de las instituciones, de las redes de poder bipartidistas que dominaba el Estado central y del orden local. El reformismo agrario de Lleras facilitó la movilización de campesinos y activistas políticos que habían sido marginados por la dinámica institucional. A este contexto se sumó la desconfianza cívica, tanto de las élites como de las clases subordinadas, ante el fracaso de la reforma agraria de la administración de Lleras Restrepo (1966-1970). Paros, marchas y acciones campesinas continuaron hasta 1974. A finales de los años setenta, la situación terminó con una clara polarización política entre la élite y el campesinado o las clases subordinadas. Por una parte, el campesinado estuvo expuesto a la represión por enfrentar sus reclamos frente a la reforma agraria, los efectos empobrecedores de la comercialización de la agricultura. Por su parte, las elites se sintieron atacadas ante la amenaza e inseguridad originada por el malestar campesino y por la desprotección por parte del Estado central. Ante esta situación apoyaron la mano dura del nuevo gobierno presidido por Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982). El gobierno de Turbay se caracterizó por la represión hacia el campesinado y las movilizaciones y por la corrupción. Las asociaciones ANUC, Ademacor, Festracor continuaban resistiéndose al cambio de políticas

reformistas a políticas endurecidas por nuevo gobierno férreo con cualquier atisbo de opción política por fuera del tradicionalismo bipartidista. Durante su administración emergieron nuevos políticos de origen sirio-libanés por fuera del sistema tradicional bipartidista. La corrupción llegó de la mano de la compra de votos, la adjudicación de las obras con nombre propio y del manejo del presupuesto público. Además, la inversión de nuevos terratenientes antioqueños en tierra cordobesa provocó una mayor fragmentación de las élites políticas del departamento. Compraron tierra en el alto Sinú, Montería y en la región de San Jorge. Muchos de estos nuevos inversionistas ganaderos eran narcotraficantes que llegaron en los ochenta para combatir a la guerrilla y ensanchar su negocio. Según una encuesta realizada por Alejandro Reyes a expertos en el comercio de tierras estimó que Córdoba fue el segundo departamento de Colombia con mayor número de municipios donde los narcotraficantes compraron tierras con un 84.6% de municipios con compra del total de municipios del departamento.

Esta situación se vio acrecentada con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) que aceptó la amnistía a casi quinientos guerrilleros y el inicio de conversaciones de paz. La elite ganadera cordobesa junto con las fuerzas militares se opusieron a este nuevo viraje por considerarlo perjudicial para la democracia y para la permanencia del status quo y el sistema bipartidista. Se sintieron amenazados por la influencia política y poder militar de la guerrilla y su redefinición política de las guerrillas mediante la negociación de paz y la movilización de determinados sectores sociales en busca de derechos, reconocimiento y apoyo estatal.

Fidel Castaño, antiguo narcotraficante antioqueño vinculado al Cartel de Medellín y al grupo MAS y uno de los nuevos inversionistas ganaderos en Córdoba, aprovechó este contexto y lideró las réplicas del sector ganadero sobre esta situación. Los propietarios rurales, empresarios y políticos del noroeste hicieron suyo el derecho a la defensa propia y establecieron una relación diferente con el Estado central y su supuesto monopolio de los medios de coerción. La seguridad y la recuperación del orden fueron las prioridades de estas élites. Castaño comenzó a organizar su grupo de autodefensa. Hizo retroceder a la guerrilla y controló la protesta social a cambio de las vidas de la población. Con su relación con el cartel de Medellín conoció las autodefensas del Magdalena Medio lideradas por Henry Pérez. Para finales de la década de los setenta Fidel, era un impulsor de las autodefensas en la región del Magdalena Medio y en el nordeste antioqueño gracias también a su relación con el Mayor Alejandro Álvarez Henao y el Batallón Bomboná que facilitaron la consolidación de las autodefensa y del MAS en esas regiones. A mediados de los ochenta Fidel también colaboró en la creación de Muerte a Revolucionarios del Nordeste en 1986

que atentaba contra las guerrillas y contra los simpatizantes del Partido Comunista y del MOIR que amenazaban los intereses de los empresarios antioqueños. Era un apéndice del MAS. El Batallón Bomboná recibió de los hermanos Castaño apoyo financiero para luchar en contra de estas organizaciones. A cambio este batallón preparaba a los hermanos en prácticas antisubversivas que realizaban conjuntamente.

A mediados de los ochenta, Fidel se compró la finca “Las Tangas”. Una finca de 6000 hectáreas conformado por diferentes haciendas en Valencia, Córdoba. Se empezó a conocer al grupo de Fidel como los “tangueros”, organización anterior a las ACCU que comenzó a sembrar el terror entre 1980 y 1993. El objetivo de Fidel era eliminar la base social de la guerrilla para así controlar territorialmente Córdoba y actuar como actor hegemónico. El resultado fue 40 masacres y 200 crímenes políticos. Estas consecuencias supuso el desplazamiento de parte de la población y la reorganización de las bases de apoyo a los tangueros.

Sin embargo, Fidel Castaño empezó a operar antes de 1994 en el Urabá. Empezó a operar en esta región en 1987. A pesar de encontrarse en una zona militarizada fue muy rápido tomar el norte del Urabá hasta la zona bananera utilizando como recurso táctico tanto el asesinato selectivo de sindicalistas, activistas o políticos de izquierda como las masacres. Estas dos medidas fueron utilizadas en el inicio de la elección de alcaldes. De estos asesinatos que se cometieron en el eje bananero fue acusado el alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio como dirigente de los grupos de autodefensa del Magdalena Medio además de a Fidel Castaño. Rubio fue vinculado a las masacres en las fincas de La Negra, Tres esquinas y Honduras en Antioquia y Córdoba. En la década de los 80 Rubio era uno de los dirigentes políticos del Magdalena Medio que se codeaban con los jefes narcotraficantes y gracias a sus gestiones éstos habrían logrado comprar grandes extensiones de tierra y crear en ellas sus grupos de justicia privada.

En la década de los noventa, los grupos paramilitares se consolidaron a raíz de varios acontecimientos. Entre ellos estaba la participación de la familia Castaño en la persecución de Pablo Escobar a través del grupo PEPES, Perseguidos por Pablo Escobar, las derrotas que afligieron a la guerrilla en Córdoba y Urabá, la conformación de las diferentes estructuras armadas bajo las ACCU y la utilización de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir) para operar a través de ellas y expandirse, consolidarse y legitimarse ante la sociedad.

Sin embargo, en 1990 el grupo de Fidel se desmovilizó y entregó al gobierno 300 armas y distribuyó mediante Funpazcor una serie de tierras de la hacienda de las Tangas para consolidar la paz nacional. Funpazcor fue creada para reincorporar a los desmovilizados por medio de ayudas sociales. Pero realmente fue utilizado para comprar armas para la guerra. A pesar de esta supuesta desmovilización, el grupo de Fidel siguió colaborando con el Ejército, sobre todo con el Batallón XI en Córdoba para lograra consolidarse en Córdoba. Fue muy importante este apoyo para luchar contra las guerrillas durante los ochenta y noventa y para consolidar las estructuras de las AUC durante los noventa. Antes de la desaparición de Fidel conformó las ACCU. Tras Fidel, su hermano Carlos se hará jefe de este nuevo grupo. Carlos perteneció al grupo de sicarios de Pablo Escobar.

De esta manera nacieron las ACCU como una organización político-militar que compitió con el Estado central y el proyecto político de las guerrillas. Construyó una sólida red de apoyos locales y regionales y que aterrorizaron a la población que mantenía relaciones con las guerrillas. Con sus acciones desplazaron a la guerrilla de determinadas áreas como el valle del Sinú en Córdoba, Magdalena Medio y el Urabá. Este desplazamiento no supuso la extinción de las guerrillas sino su acomodamiento en otras áreas del sur del país. Las ACCU fueron leales no al Estado central asentado en Bogotá sino a un orden regional surgido de la consolidación de un aparato militar no estatal y de una comunidad política que se redefinió como contrainsurgente.

Este grupo reemplazó a las fuerzas de seguridad del Ejército y montaron una red de comunicación que en Córdoba permitió estar en contacto permanente a 950 fincas ganaderas. Esta forma de organización fue el modelo que utilizaron para la propuesta de las cooperativas de seguridad, Convivir. El apoyo de los ganaderos a este grupo lo atestigua la carta que 75 ganaderos enviaron al Ministro de Defensa en 1997 donde resaltaban la figura de Carlos Castaño pues él les enseñó a no tener miedo y a enfrentarse a su enemigo.

La competencia armada se agudizó entre las ACCU y las FARC al igual que también se agudizó entre los nuevos poderes locales como la UP y las viejas elites políticas y económicas. Esta competencia no sólo fue electoral, pues estuvo cargada con los índices de homicidios más elevados de la historia de Urabá. Se paso de 400 homicidios en 1994 a 800 en 1995 y a 1200 en 1996, para luego descender a 700 en 1997 y a 300 en 1998. Entre 1995 y 1997, Álvaro Uribe ejerció de gobernador de Antioquia. Tras este aumento en el número de homicidios el senador conservador Fabio Valencia Cossio le acusó de aplicar un modelo radical de orden público que ha

incrementado los homicidios en Urabá en un 387% y está auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad Convivir.

Durante estos años el General del Río estuvo apoyando a los grupos paramilitares. Incluso el Departamento de Estados Unidos hizo un llamamiento a esta situación en el anuario de los derechos humanos en Colombia de 1998. Esto provocó que el Presidente Pastrana retirara al General del Río y al General Millán por la vinculación con estos grupos.

Carlos Castaño reunió bajo un mismo nombre una federación de grupos de autodefensas que estaban disgregados bajo el nombre de AUC en 1997. Para ello reunió a varios grupos asentados en Antioquia, Córdoba, Magdalena, Santander, Casanare, Meta y Boyacá para conformar una única organización bajo un jefe único, Carlos Castaño. Comenzaron a expandirse por la costa atlántica con Salvatore Mancuso y Jorge 40 y sur de Bolívar, Barrancabermeja y eje cafetero con la incursión de Macaco y Ernesto Báez.

Con la creación de las AUC en 1997 se perciben dos líneas diferentes. Por una parte, el objetivo de Carlos Castaño era enfocarse en la guerrilla. La segunda línea, dirigida por Mancuso, se concentraba en realizar acuerdos con los políticos para controlar políticamente las regiones, legitimar su apoyo a nivel nacional y obtener de esos apoyos políticos ingresos económicos. Este objetivo de capturar los espacios políticos fue llevado por Mancuso a través del Pacto de Ralito de 2001. La línea de Mancuso se impuso.

Tras la muerte de Carlos Castaño en el año 2004, asesinado por su hermano Vicente Castaño, Salvatore Mancuso se hizo con el control de las autodefensas. Mancuso, de origen italiano, fue una de las familias más prestantes del departamento de Córdoba. Fue ganadero y arrocero. Por las relaciones que tuvo con la elite económica departamental y por la extorsión que sufrió de la guerrilla, se convirtió en el intermediario entre el ejército y los ganaderos cordobeses, pues si sufrían algún tipo de extorsión la elite, ésta avisaba a Mancuso por radio-teléfono o enviaba Mancuso a alguno de sus hombres para que le brindara seguridad. La figura de héroe se empezó a gestar en el departamento, de esta época le sobrevino el apelativo de El cacique. Así era conocido por la elite cordobesa y por la Brigada XI. Tras un intento de secuestro de un hacendado, Salvatore logró salvarle gracias al grupo de quince hombres de seguridad. Este hecho fue conocido en todo el departamento y logró que muchos hacendados del Cesar, Sucre y Bolívar fueran a verle para explicarle el funcionamiento de su grupo. Entre ellos estaba el futuro

paramilitar Jorge 40. Por tanto, comenzó a nacer un liderazgo de Mancuso que posteriormente se convirtió en el Bloque Norte de las Autodefensas. La relación de Mancuso con los hermanos Castaño sirvió para consolidar las autodefensas. Comenzó su relación en 1994 cuando se crearon las ACCU y Mancuso era el jefe del Bloque Catatumbo bajo las ACCU. En ese mismo año y por la aprobación del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, creó la Convivir Horizonte dentro de la cual perpetró diez masacres hasta 1996.

Pronto comenzaron a introducirse en el ámbito local y a establecer sus lealtades en el departamento de Córdoba. Se comenzaron a introducir en la Universidad, con las elites políticas del departamento, realizando reuniones e introduciéndose en el Congreso y Senado. Comenzaron a influir a los hijos de los viejos barones electorales con mejoras electorales mediante pactos con los paramilitares. De esta manera encontraron su espacio vital para poder consolidarse como grupo hegemónico e influir y manejar desde el punto de vista económico, social, político y militar el departamento.

Los viejos barones electorales del Frente Nacional fueron sustituidos por los hijos de los viejos barones que fueron representantes de los partidos Mayorías Liberales de la familia López y de la Espriella, Movimiento de Integración Popular, de la familia Nader, Insurgencia Liberal de la familia Jattin, los tres de tendencia liberal. La tendencia conservadora pasó de la mano de Amaury García a Julio Manzur. Los hijos de estos barones, como Jesús María López, Zulema Jattin, Miguel de la Espriella, Julio Manzur, Mario Salomón Nader y Reginaldo Montes alcanzaron el poder legislativo desde la década de los noventa y fueron parte de la organización política de los paramilitares pues ellos se beneficiaron electoralmente de su relación con las AUC.

En Córdoba, los paramilitares comenzaron a doblegar a la elite tradicional cordobesa encabezado en la figura del liberal Juan Manuel López Cabrales de Mayorías Liberales. El primer hecho de este cambio fue la entrada de las AUC en la Universidad de Córdoba donde impusieron a figuras afines a los paramilitares e incluso a familiares de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Para ello desplazaron y asesinaron a trabajadores, directivos del claustro universitario, organizaciones sociales y profesores de la Universidad. Comenzó con la muerte del profesor Francisco Aguilar Madera en 1995, a la que le siguió la del profesor Alberto Alzate. Fue atacado el Presidente del sindicato de trabajadores de la Universidad. El Rector Víctor Hernández tuvo que dejar su ocupación en 2002. Hugo Iguarán, que se presentó a la rectoría junto con Víctor Hernández, fue

asesinado por órdenes de este último. El nuevo rector Claudio Sánchez Parra estaba relacionado con Mancuso²⁵⁸. Entre 1995 y 2000 asesinaron a 16 integrantes de la Universidad.

Posteriormente, el paramilitarismo comenzó a infiltrar a sus colaboradores en la Universidad. Infiltró a César Bedoya en el Consejo Estudiantil. A Víctor Hernández en la Rectoría y a éste le siguió Claudio Sánchez también nombrado por Mancuso en una reunión que tuvieron en Ralito en el año 2003. También incorporó a la Universidad a los siguientes afines al paramilitarismo: Enma Paola Gómez, Jefa de Bienestar Universitario, prima de Salvatore Mancuso, hija de Simón Gómez, hermano de la madre de Mancuso; Alina Gómez, Jefa de Archivo y Correspondencia, prima de Mancuso, hermana de Enma Paola; Gloria Torres, Empleada en la Oficina de Talento Humano, era la esposa de Antonio Mancuso, tío del jefe paramilitar; Claudia R. de Dereix, Administradora de las cafeterías, casada con Jorge Dereix, hermano de Martha Dereix, exesposa de Salvatore Mancuso; Carlos Castaño Puentes Profesional especializado de la sede de Berástegui, cuñado de Doménico Mancuso Hoyos, primo de Salvatore; Valenia Castaño, trabajaba en el Departamento de Educación Continuada, en el edificio de posgrados, es prima de Carlos Castaño Puentes; Hernán Gómez, miembro del Consejo Superior, padre de Hernancito Gómez, hombre de confianza de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; Manuel Anichiárico B. Jefe de Relaciones Internacionales, cuñado de Disney Negrete, amigo de Mancuso en el Alto Sinú; Rafael Castellanos Vicerrector Administrativo, es hermano de Alejandro Castellanos, cuñado del rector Claudio Sánchez Parra; Manuel Troncoso A. secretario de Salud de Córdoba, antes fue director de la Unidad Administrativa Especial de Salud, cuñado de S. Mancuso; Luis G. Mancuso H odontólogo del Fondo de Salud en la sede de Berástegui, Hijo de Pascual Mancuso, tío de Salvatore; John Jairo Gómez T, jefe de logística, primo de Mancuso, hijo de Simón, hermano de la mamá de Mancuso; Félix Manzur, exdelegado de Ministerio de Educación en el Consejo Superior de la Universidad; Manuel Cortina, vicepresidente del sindicato de profesores de la Universidad de Córdoba.²⁵⁹

También cooptaron la Corporación Regional de los Valles del Sinú y San Jorge dirigido por Jaime García Exbrayat del 2000 al 2008. Tanto él como más funcionarios que formaban parte del Consejo Directivos fueron cooptados por los paramilitares. Entre ellos estaba Libardo José López Cabrales, gobernador de Córdoba, el Exgobernador Jesús María López y los alcaldes de San Antero, San Andrés de Sotavento, Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Planeta Rica Puerto

²⁵⁸ “La Universidad y los Paras”, Revista Semana, 22 de septiembre de 2007

²⁵⁹ “Mancuso tiene 9 fichas en Unicórdoba: sindicato”, Revista El Tiempo, 15 de mayo de 2007.

Escondido, Cotorra, Montería, Montelíbano y Sahagún. Del Consejo Directivo también hacen parte el Viceministro de Ambiente, el gobernador del departamento, un representante del Presidente de la República, un representante de las comunidades negras, dos representantes de ONG y dos representantes del sector privado.

Otro hecho que comenzó a entorsearse fue la vinculación de los paramilitares con el poder político local. El Pacto de Granada fue un ejemplo de esta infiltración. Este pacto supuso el nombramiento de afines al paramilitarismo para ocupar un puesto público como fue la alcaldía del municipio de Tierralta en Córdoba. El pacto supuso la elección de alcaldes durante los periodos 2000, 2003 y 2007 bajo el nombramiento de Salvatore Mancuso según su versión libre. Para la primera elección nombraron a Sigifredo Senior, para la segunda Humberto Santos Negrete y para la última a Aníbal Ortiz.²⁶⁰ Aunque éste último niega estos nombramientos, en la versión libre de Salvatore Mancuso afirmó lo contrario, que él dispuso a los alcaldes en las sucesivas elecciones²⁶¹.

Aunque se mencionó anteriormente el Pacto de Ralito como estructura dentro del bloque paramilitar de Jorge 40, fue dirigido el pacto por Salvatore Mancuso que reunió a políticos en Tierralta, Córdoba, con la idea de refundar la patria, construir una Nueva Colombia, un nuevo contrato social y garantizar los fines del Estado. El objetivo era controlar políticamente la región de Córdoba e influir en las votaciones del año 2002. Los candidatos que fueron beneficiados del control de Mancuso de esta región por el lado liberal fue Miguel de la Espriella, Reginaldo Montés, Eleonora Pineda, Mario Salomón Náder Muskus, Juan Manuel López Cabrales, Freddy Ignacio Sánchez, Mussa Besaile, Zulema Jattin y por el lado conservador Julio Manzur y Luis Carlos Ordosgoitia.

Tras ser desmovilizado, Mancuso rindió una serie de versiones libres ante la Fiscalía. La segunda y tercera versión libre realizada en mayo de 2007, Mancuso afirmó que en las elecciones locales del año 2003 impuso a los siguientes candidatos: en Tierralta impuso a Sigifredo Señor y Humberto Santos Negrete. En Buenavista, a Ferney Bertel; en Lorica, a Rodolfo Montes; en La Apartada, tras una contienda apoyada por ganaderos afectos a las AUC, a Catalina Durango de Paz; en Puerto Libertador, a Julio Sánchez Moreno, en Montelíbano, a Moisés Nader; en Ayapel, a Pedro Julio Márquez; en San Pelayo, a Wilson Arroyo; en San Antero, Martín Morales Diz y a

²⁶⁰ Disponible en <http://www.verdadabierta.com/parapolitica/591-el-pacto-de-granada-cordoba-el-meridiano>

²⁶¹ “Firmé el Pacto de Granada encañonado por Mancuso, dice el Alcalde de Tierralta” El Tiempo, 26 de noviembre de 2008.

Wilmer Pérez; en San Bernardo del Viento, a Wilson Negrete Flores; en Chinú, a Julio Álvarez Turiso; en Chimá, a Carlos Rodríguez; Sahún, a Pedro Otero; en Ciénaga de Oro, a René Burgos; en San Andrés de Sotavento, a Juan Carlos Casado; y en Puerto Escondido, a Carlos Vergara²⁶². La información que proporcionó Radio Caracol Noticias²⁶³ agregó mas alcaldes relacionados con los paramilitares como fueron el alcalde de Momil, Ligia Mézquida; Pueblo Nuevo, José Inés Torres; Planeta Rica, Alejandro Cheij Narvaéz; San Carlos, Wilson Argüello Argumedo, de Chinú; Mario Prada²⁶⁴, en Valencia y Gecsy Casarrubia, de Purísima y el alcalde de Valencia Mario Pineda. De estos alcaldes mencionado por Salvatore Mancuso hay cuatro que han sido investigados, capturados y encarcelados. Se trata de Mario Prada, Wilfredo Pérez, Sigifredo Senior y Humberto Santos. Mario Prada estuvo relacionado con los paramilitares de Córdoba y en concreto con su primo el paramilitar Diego Vecino. Los tres últimos alcaldes fueron juzgados por concierto para delinquir por haber firmado pactos con los paramilitares. Una buena parte del resto de los alcaldes mencionados están siendo investigados por peculado por apropiación, contratos indebidos, manejo irregular de regalías durante su etapa como alcaldes²⁶⁵

Incluso, según una conversación telefónica que mantiene Mancuso con “Olga”, una paramilitar, relatada en el monográfico político electoral del departamento de Córdoba dirigido por Claudia López de la Misión de Observación Electoral, confirmaron que los paramilitares crearon en 2003 una veeduría para vigilar la situación administrativa de los municipios del departamento para observar los temas de salud, obras públicas y educación²⁶⁶. En esa conversación, Mancuso pregunta a “Olga” en qué municipios tiene más influencia las AUC, y ella respondió:

“Puerto Libertador: Julio Sánchez: problemas con los paramilitares debido que su hermano era guerrillero, éste fue uno de los que más corrupción generó; Puerto Escondido: El Cholo Vergara, con ese alcalde se tomó el control de ese municipio, también tuvo problemas con los paramilitares; Purísima: Betty, 100% paramilitar; Chimá: Carlos, 100% paramilitar; San Pelayo: Alicia Rubio, cercana; Planeta Rica: Alejandro Chaid, mantenía relación con Andrés; Buenavista: Leo, cercano; La Apartada: Manito Agudelo, cercano; Cotorra: Mario Nisperusa, 100%

²⁶² “Salvatore Mancuso vincula a más políticos con las autodefensas” Revista Semana, 16 de mayo de 2007.

²⁶³ “Pedirle a Mancuso que rinda versión bajo juramento es válido, dice jurista” Radio Caracol Noticias, 17 de mayo de 2007.

²⁶⁴ “Mario Prada acusado de paramilitarismo, solo pagó dos años de cárcel” El Tiempo, 22 de mayo de 2011.

²⁶⁵ Los alcaldes que se encuentran en esta situación son: Ferney Bertel, Rodolfo Montes, Catalina Durango, Pedro José Otero, Moisés Nader, Pedro Julio Márquez, Julio Cesar Sánchez y Wilson Argüello.

²⁶⁶ López, Claudia (Coor), (2007), Monografía Político Electoral de Córdoba de 1997 a 2007. Misión de Observación Electoral, Bogotá. Disponible en http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/cordoba.pdf

paramilitar; San Bernardo del Viento: Wilson Negrette, 100% paramilitar; Cereté: CAMI, sacaron al señor Otero; Lorica: Rodolfo Montes, es de los López; Sahagún: Pedro Otero, 100% paramilitar; San Andrés de Sotavento: los paramilitares le dieron el aval a Juan Carlos Casabas; Ciénaga de Oro: René Burgos, posiblemente hizo pactos; Montelíbano: es de Mussa Besaile, de los López; Ayapel, puesto por “Caliche”, al parecer 100% paramilitar; Chinú: Julio Álvarez, 100% paramilitar; Moñitos: Eleodora, a morir, al parecer muy cercana a los paramilitares”. Esta conversación ratifica la versión libre de Mancuso donde acusa a determinados alcaldes, que se señaló en el anterior párrafo, de tener influencia con los grupos paramilitares.

En resumen, este grupo paramilitar comenzó siendo autodefensa, pasó a paramilitar y finalmente, sobre todo durante la época de Mancuso, fue narcoparamilitar. Aprovechó varias oportunidades políticas durante la época de Álvaro Uribe como gobernador y el General Rito Alejo del Río. Pero, destacó como oportunidad estructural la división entre la élite y el campesinado en Urabá y Córdoba. Se vio arropado por las Fuerzas Militares, terratenientes, funcionarios públicos y élites que se aprovecharon recíprocamente. Para ello no sólo utilizaron la violencia sino que también mediante sus redes clientelares, impusieron funcionarios afines a su causa.

Conclusiones generales

En noviembre de 2011 el Presidente de Colombia Francisco Santos aseguraba ante los medios de comunicación que la fase final del conflicto armado interno estaba cerca²⁶⁷. En un primer momento se resalta de este titular que al menos este presidente si confirma la existencia del conflicto armado al contrario que el expresidente Uribe que lo negó. Por tanto, se podría decir que la noticia es interesante de analizar en ese sentido. Pero por otra parte, al finalizar la lectura de este artículo, se vislumbran más ideas pues el final del conflicto está íntimamente relacionado con el final de las FARC. Parece que una vez superado y finalizado la desmovilización paramilitar el 31 de diciembre de 2005 según aseguró Uribe, el siguiente grupo en armas en importancia sean las FARC. Es posible que así sea, pero la idea gubernamental de que a partir del 1 de enero de 2006 no hubiera paramilitares en Colombia, es poco creíble. Es más, durante su desmovilización se dieron diversas ceremonias donde los paramilitares entregaban las armas al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Entregaron 17.235 armas y se desmovilizaron hasta ese momento 30.944 paramilitares. Estos desmovilizados pertenecieron a la estructura militar de los paramilitares, es decir, el brazo armado. Pero dentro de la estructura paramilitar faltaron muchos brazos por desmovilizarse como el brazo económico y el brazo político. Incluso algunos grupos pertenecían al brazo militar, no se desmovilizaron, y otros que si lo hicieron volvieron a reincidir. Por tanto, se debe resaltar en el artículo periodístico mencionado que la realidad paramilitar es compleja y cambiante así como su devenir tras el final de la desmovilización anunciado por Uribe en el cual se hizo hincapié por averiguar el brazo político y económico de los paramilitares. En consecuencia, el conflicto armado interno no sólo cuenta con las FARC como grupo armado sino también con los diferentes brazos de los paramilitares sin desmovilizar y desmovilizados más aquellos que han reincidido en la lucha armada.

En esta misma línea, se ha considerado en esta investigación que los grupos paramilitares han tenido un proceso sostenido de crecimiento durante los últimos años, de hecho es el único grupo armado que ha crecido durante la administración uribista. El poder de estos grupos determina la política regional y local, acapara las administraciones locales y están infiltrándose en todos los niveles. La autonomía de los grupos paramilitares, sus lazos con el narcotráfico, el respaldo social y de las elites regionales y nacionales apunta a un fenómeno de gran poder militar, político, económico y social.

²⁶⁷ “Santos afirmó que se acerca el final del conflicto”, El Tiempo, 24 de noviembre, del 2012.

El análisis de estos grupos se ha realizado desde la sociología política pues se considera a los grupos paramilitares como un grupo de poder, como un actor con gran peso dentro de la sociedad colombiana que conversa con el Estado e incluso suplanta sus funciones en determinados territorios. Desde esta perspectiva, se analizaron diferentes teorías de acción colectiva. La relevancia de este análisis estriba en examinar en profundidad las diferentes teorías de acción colectiva a fin de encontrar aquella que mejor se ajuste al tema por investigar. Por ello se realizó un estudio de los antiguos paradigmas de los movimientos sociales, la teoría de la movilización de recursos, los nuevos movimientos sociales y la dinámica de la contienda política. En cada teoría se resaltó la relevancia de cada una y su aporte al estudio de los grupos paramilitares. El objetivo era que la teoría escogida respondiera a las preguntas de esta investigación, es decir, establecer un modelo de análisis que se pregunte por el cuándo, cómo y porqué de la acción colectiva de estos grupos con especial interés en el estudio de los recursos humanos de los paramilitares centralizado sobre todo en la clase política colombiana. Para ello se realizó una aproximación a este fenómeno paramilitar mediante diferentes paradigmas. Es necesario aproximarse a este fenómeno teniendo en cuenta factores culturales y estructurales o estratégicos mediante el estudio de los recursos organizativos, el contexto político y los aspectos identitarios. A través de los ciclos de acción colectiva o de conflicto de Sydney Tarrow se analiza la interacción de los grupos paramilitares en relación con otros actores dentro de un ciclo de conflicto armado interno. Mediante la Estructura de Oportunidad Política se ha puesto en evidencia las oportunidades políticas que el contexto colombiano ofreció para facilitar la movilización, expansión y consolidación del fenómeno paramilitar en el gobierno local. Estas oportunidades se han analizado cronológicamente siguiendo el origen, expansión y consolidación de los grupos paramilitares. La Movilización de Recursos hace referencia al tipo de recursos y organización que necesita un grupo para movilizarse, es decir, responde a la pregunta de cómo se organiza un grupo. También se examina la actuación del Estado frente a los paramilitares, el tratamiento que los ha dado a través de varias décadas. Se profundiza mediante el repertorio de la acción de Charles Tilly. En último lugar se examina la ideología y el proceso de enmarcamiento mediante la teoría de Melucci y Touraine. La elección de estas teorías diferentes pero complementarias entre sí se debe a que era necesario mostrar una historia dinámica del paramilitarismo en Colombia. Una historia donde se observaran diferentes actores interactuando entre sí, en un contexto cambiante, donde se incorporaran nuevos actores o instituciones al ciclo de conflicto. Un conflicto dinámico y no estático, cambiante, que pongan en movimiento las oportunidades, las estructuras de movilización, el enmarcamiento y los repertorios de la acción

dentro de un ciclo de conflicto donde interactúen los actores y el contexto para crear un escenario histórico dinámico de los grupos paramilitares. Por tanto, la unión de estos diferentes paradigmas ayuda a esclarecer el objetivo de esta investigación.

Un paso obligado en esta investigación fue establecer un marco contextual al fenómeno paramilitar mediante una revisión bibliográfica de las fuentes sobre la violencia en Colombia, seguido de un análisis de la literatura específicamente paramilitar tanto desde el punto de vista teórico y comparativo con otros fenómenos como desde un punto de vista más pragmático, examinando los autores más relevantes de la actualidad paramilitar. Esta aproximación ha dado un enfoque muy variado de opiniones, problemas conceptuales, evolución pragmática del fenómeno paramilitar en el tiempo, etc. Queda claro que el fenómeno paramilitar ha variado en el tiempo desde su origen en la década de los ochenta sobre todo por la incorporación del narcotráfico a sus filas y por la serie de oportunidades políticas que fue aprovechando a lo largo de su historia. Algunas de esas oportunidades están relacionadas con el Estado y, en concreto, con el tratamiento que cada gobierno le dio a este grupo armado. El crecimiento, la expansión en el terreno y las diferentes alianzas que alcanzó este grupo son consecuencia del papel tolerante del Estado.

En un primer lugar, el estudio del paramilitarismo estuvo vinculado a los estudios sobre violencia en Colombia. Dentro de esta época destacaron dos perspectivas. La perspectiva estructural que propuso un modelo de explicación global de la violencia desde diferentes perspectivas como la económica, institucional, social, política y legal. Entre los autores que comenzaron a estudiar el fenómeno de la violencia desde esta perspectiva estructural destaca Pizarro (1989), Leal (1991), Sarmiento (1991), Kalmanovitz (1989) o Pecaut (1987).

A finales de los ochenta, se comenzó a plantear un nuevo enfoque basado en una perspectiva diferente donde se admitió la existencia de diferentes tipos de violencia. El grupo de los llamados violentólogos llevó a cabo un informe para el Ministerio de Gobierno donde se observó una perspectiva de análisis más amplia basada en la teoría multicausal culturalista. Destacaron estudios sobre la dinámica regional, desde una perspectiva jurídica, cultural, relacionada con el narcotráfico, etc. Este nuevo planteamiento abrió el estudio hacia otros aspectos de la violencia que no habían sido tratados hasta entonces como las consecuencias de la violencia, el desplazamiento o el estudio de los actores del conflicto, como la sociedad civil, los actores armados ilegales o las Fuerzas Militares.

Desde la década de los ochenta se comenzó a profundizar en el análisis de los grupos paramilitares. Medina (1990), Téllez (1994) y Melo (1991), entre otros, estudiaron el fenómeno paramilitar desde una perspectiva historicista de debilidad estructural del Estado frente al monopolio de la violencia y la consecuente aparición de los grupos armados. En esta misma línea los investigadores del CINEP, Vásquez, González y Bolívar (2006) analizaron a los paramilitares bajo diferentes perspectivas, dedicando bajo la configuración del Estado una especial atención a la sociedad, la dimensión espacial, la ocupación de territorio, las formas de cohesión social y la articulación de los poderes locales de estos territorios con el poder nacional a través de los partidos políticos y los imaginarios de identidad. Es decir, vincularon diferentes estudios para darle una mirada más dinámica al estudio de estos grupos.

Desde una perspectiva sociológica del paramilitarismo, Romero (2003) estudió la relación de este grupo armado con alianzas locales y regionales y sus estrategias a través de las oportunidades políticas de estos “empresarios de la coerción”. También comenzaron a prosperar trabajos regionales sobre el paramilitarismo de la mano de diferentes analistas como por Alonso, Giraldo y Sierra (2007). Cubides (2005) mediante la perspectiva sociología de la teoría de la organización, analizó a los paramilitares como una estructura jerarquizada de poder, estructural y organizada.

Una vez que los grupos paramilitares se convirtieron en el tercer actor del conflicto, muchos investigadores se preguntaron a cerca de la autonomía del paramilitarismo frente al Estado. De esta aproximación surgió la obra de Rangel (2005), Vilma Franco (2002) y Gutiérrez y Barón (2006) y Tjodal (2002), quienes profundizaron en esta compleja relación.

La financiación de los grupos paramilitares, tanto de fuentes legales como ilegales y sobre todo su relación con el narcotráfico, sirvió de inspiración para muchos investigadores que vieron en los recursos materiales el principal eje de funcionamiento de los paramilitares. Entre los especialistas del narcotráfico destacan Thoumi (2002), Tokatlian (2001) y Krauthausen (1998). Otros numerosos investigadores analizaron las fuentes de financiación como Cubides (2004, 2005), Duncan (2005), Richani (2003) o Gallego (2005) con su síntesis sobre los diferentes recursos utilizados por los paramilitares.

El discurso paramilitar también fue objeto de análisis pues formaba parte de la confrontación armada como bien señaló Estrada (2001) y Bolívar (2006). Ignacio Cano (2001) y Kalyvas y

Arjona (2005) aportaron al estudio del paramilitarismo un acercamiento teórico sobre el grado de formalidad frente al Estado.

Otra serie de aportaciones fueron las biografías o autobiografías de algunos jefes paramilitares como la de Carlos Castaño (Aranguren, 2005) y Doble Cero (Castro, 1996) o Salvatore Mancuso (Martínez, 2004). En esta misma línea también destacaron las biografías de desmovilizados o de miembros de las Fuerzas Militares.

Además, otros medios para informarse de las últimas investigaciones son los artículos de opinión y de investigación de diferentes periódicos colombianos como *El Tiempo*, *Semana*, *El Espectador*, *El Colombiano* o de organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales que realizan investigaciones de varias temáticas paramilitares como la Comisión Colombiana de Juristas, Amnistía Internacional o International Crisis Group.

Una recién temática que se ha inaugurado debido a la actualidad de la aparición de la información fue la parapolítica. Aparecieron numerosas obras analizando este tema así como ahondando en los vínculos de los paramilitares con el poder local, regional y nacional, de tal manera que mostraron a los grupos paramilitares como un fenómeno más complejo e intrincado en la sociedad. Destaca la obra de López (2010) sobre este nuevo proceso de parapolítica.

Las investigaciones anteriores establecieron un conocimiento de los grupos paramilitares desde la perspectiva historicista, sociológica para luego adentrarse en el comportamiento del actor paramilitar, su financiación, estrategias, discursos y sus relaciones con sus aliados. Se obtuvo una visión compleja del fenómeno y sus transformaciones a lo largo de su evolución, paso necesario para comprender cómo evolucionaron los estudios sobre este grupo.

Un paso obligado de esta investigación fue determinar una conceptualización nueva del término paramilitar debido a las diferencias existentes sobre este término en la elaboración de cada especialista en paramilitarismo. Un primer paso fue comparar la realidad teórica colombiana de este término frente a otras realidades como la rusa, italiana o africana. Sin embargo, se puso más énfasis en la realidad colombiana. Posteriormente se elaboró una nueva definición que englobase la diversidad de tratamientos a este fenómeno.

Dentro de las investigaciones realizadas por los especialistas en paramilitarismo, se escogió a aquellos que trabajaron más la definición de paramilitares. Para esta cuestión se contó con entrevistas a varios especialistas en la materia como Mauricio Romero, Gustavo Duncan, Francisco Leal, Eduardo Pizarro, Camilo Echandía, Fernán González, Teófilo Vázquez y Claudia López. El tratamiento varió entre los principales especialistas en grupos paramilitares colombianos. Una serie de investigadores se postularon por la idea de que hubo una evolución de autodefensa a paramilitar y por ello diferenciaron entre autodefensa y paramilitar. Entre ellos destacan Romero, Pizarro, Cubides, Uprimny y López. Otros investigadores matizaron esta definición. Duncan los denominaba señores de la guerra, grupos de hegemonía político-militar. Leal señaló una evolución de autodefensa a estructuras mafiosas. Echandía también acogió el término de grupos mafiosos para referirse a los paramilitares pues según él sus estrategias y actuaciones no podían englobarse dentro de los modelos clásicos de autodefensa y paramilitarismo. Medina definió a los grupos paramilitares como un tipo de violencia parainstitucional que tras influenciarse con el narcotráfico creó una nueva modalidad, el narcoparamilitar. Rangel mantuvo la denominación de paramilitar para aquellos grupos con un proyecto contrainsurgente, autónomos del Estado, penetrados por el narcotráfico y con mando sobre un ejército privado. González y Vázquez establecieron que los grupos paramilitares eran sincrónicos y diacrónicos en el tiempo además que su estructura y estrategias estaban relacionadas con la sociedad y la economía de cada región en la que se asentaron.

Ante estas definiciones y para profundizar más en la definición de paramilitar, se establece una nueva definición de los grupos paramilitares. La realidad del fenómeno paramilitar es tan diversa y cambiante que resulta difícil englobar bajo un mismo paraguas, diferentes realidades. Esta definición engloba a los grupos de autodefensas, paramilitares y narcoparamilitares, siendo estos grupos sincrónicos y diacrónicos en el tiempo, por tanto se confirma la teoría de Vázquez y González. En función de la sociedad y la economía que se asienten, cada grupo paramilitar tiene unos rasgos determinantes. Estos grupos constituyen un actor más dentro de las relaciones clientelares que existen en el Estado. Pero no es un actor político del conflicto, pues cometieron graves delitos contra la sociedad civil y no son un fenómeno contraestatal sino que actúan con el Estado para mantener el status quo. Su modo de operar hace a este grupo diferente frente a los demás actores que se encuentran dentro de las relaciones clientelares con el Estado. Cooptaron diferentes ámbitos gubernamentales e influenciaron en diferentes sectores de la sociedad. Por ello, se hace difícil encasillarlos bajo el nombre de paramilitares pues no solo actuaron como un grupo militar que ayudó al Estado a enfrentarse a la guerrilla sino que actuaron en diferentes

frentes y llevaron a cabo las funciones mínimas del Estado, es decir, el monopolio legítimo de la fuerza, del control de los impuestos y de la administración de la justicia. Por tanto, para ajustarse ante estas actuaciones es más acorde denominarles grupos paraestatales.

Antes de profundizar en el desarrollo y evolución de los grupos paramilitares se tuvo en cuenta el análisis de dos épocas fundamentales para comprender el origen de estos grupos. Se llevó a cabo un análisis de la época de la Violencia y el Frente Nacional pues en estas dos épocas se construyó un régimen que facilitó la presencia de grupos armados y bandoleros ligados a la lucha bipartidista y a los gamonales. Comenzaron a crear sus propias reglas de juego. Surgieron de la confrontación entre liberales y conservadores pero muchos propietarios los hizo suyos ante el temor de enfrentarse al enemigo. Los pájaros o chulavitas fueron creados por el partido conservador y se convirtieron en asesinos a sueldo, en grupos de mafiosos. Pájaros, guerrilleros y bandoleros suplantaron el sistema de lealtades gamonales y construyeron una estructura de poder independiente mediante el robo de tierras, extorsión y usurpación del poder político. Los pájaros son el antecedente de los grupos paramilitares que evolucionaron de un poder ligado a un partido político hasta un poder autónomo.

Este contexto de violencia donde el Estado perdió su legitimidad, donde las instituciones se mostraron inoperantes y el poder se fragmentó dio paso a la construcción de un acuerdo político entre las elites liberales y conservadoras denominado Frente Nacional (1958-1974). Con este pacto se intentó solucionar la violencia política, pero se obvió la violencia social, es decir, la violencia individual, de luchas sociales, desquites y venganzas de sangre. Como consecuencia de esto se reanudó el bandolerismo y la lucha guerrillera, dando origen a las guerrillas revolucionarias de las FARC, ELN, EPL y M19.

Ante esta situación problemática, el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) convirtió en legislación permanente el decreto legislativo 3398 de 1965, en la Ley 48 de 1968 o Ley de Defensa Nacional, por el cual estableció el fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas. Esta ley fue el piso jurídico para la creación de los grupos paramilitares en la década de los ochenta.

Sin duda, estas dos épocas, reforzaron el bipartidismo como organizador de la sociedad. Se apoyó en el clientelismo que se vio ampliado y se extendió por todo el territorio nacional mediante el Congreso, las asambleas y los concejos.

Por tanto, se tienen dos referentes importantes en el origen de los paramilitares. Por una parte, el antecedente de los pájaros como un grupo de poder que sustituyó a los gamonales y por otra parte, la creación desde el Estado de una ley que permitía la formación de grupos de autodefensas en un contexto de conflicto armado interno.

El núcleo central de esta investigación se articula a través de la unión de varias perspectivas teóricas de la sociología política como son las oportunidades políticas, los recursos organizativos básicos, las ideas y los símbolos de los grupos paramilitares para legitimar sus actuaciones y el ciclo de conflicto. El resultado fue que estos grupos se adentraron en el ámbito político cooptando a las elites y ampliando el control de sus territorios, recursos y funciones.

Siguiendo la teoría desarrollada por Tarrow, el conflicto armado interno se enmarca en un ciclo de conflicto dinámico donde los actores se movilizan y se desmovilizan intensificando el conflicto dentro de un sistema social. Dentro de la movilización, el conflicto se fue intensificando y difundiendo en diferentes ámbitos. Los diferentes actores armados se fueron moviendo por la geografía colombiana desde regiones de colonización a las regiones estratégicas de gran potencial económico y aumentaron sus efectivos militares. En este sentido, los grupos paramilitares comenzaron a expandir sus frentes a todos los territorios donde se encontraban las guerrillas y lucharon contra ellas por dominar determinadas zonas económicas. La intensificación del conflicto agravó el número de homicidios realizados por los actores armados. Sobre todo aumentaron los homicidios de carácter político en dos momentos. En un primer momento, de 1982 a 1993, se asoció a las primeras elecciones de alcaldes y al surgimiento de partidos políticos de izquierda con motivo de la apertura política. El segundo momento de 1996 a 2004 estuvo asociado entre otras cuestiones a la expansión paramilitar en el Urabá y el Magdalena Medio. A finales de la década de los noventa, los paramilitares fueron responsables del 63% de los homicidios, de hecho este grupo causó más números de muertes entre 1988 y 2005 llegando a contabilizar un 48% del total de asesinatos producidos. Pero el punto más álgido de homicidios políticos fue en el año 2003 cuando alcanzó un 13.74% coincidiendo con el inicio del proceso de desmovilización paramilitar. Además de los homicidios de carácter político también se llevaron a cabo asesinatos contra jueces, funcionarios, periodistas y sindicalistas. Cabe mencionar que el conflicto armado también intensificó el número de desplazados, desaparecidos y otras víctimas de la violencia. Como consecuencia de la intensificación armada de los grupos paramilitares

ascendieron los combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados, en particular contra las FARC.

Los medios o los repertorios de la acción que utilizaron los grupos armados fueron la violencia y la alteración del orden público. La violencia ha sido una constante en el conflicto armado desde sus orígenes. Los paramilitares utilizaron la violencia de manera indiscriminada desde 1997 como medio para extender su dominio en el territorio y sobre la población. Una vez que comienza el proceso de desmovilización emplearon la violencia selectiva. Pero siempre fue la violencia el repertorio de acción más utilizado por este grupo. Además de alterar el orden público mediante los bloqueos de vía o las incursiones, utilizaron los medios de comunicación como medio para expresar sus acciones e ideología. Así utilizaron medios de comunicación escrita y oral como internet, radio, televisión, revistas y documentales.

Para legitimar su acción los grupos armados forjaron unas formas compartidas de ver el mundo. Tanto guerrilleros como paramilitares establecieron sus luchas en función de su historia personal. De este modo, los paramilitares construyeron un marco de la acción colectiva alrededor de su defensa ante la expansión guerrillera y la incapacidad del Estado para ofrecer seguridad en determinadas zonas de Colombia. Por ello se erigieron como defensores y protectores de la sociedad cumpliendo funciones del Estado e incluso en época de Carlos Castaño reformularon su visión del Estado en un proyecto de reconstrucción nacional.

Como elemento dinamizador del conflicto armado, a las viejas organizaciones del conflicto, como las FARC, ELN, EPL, M-19 que se movilizaron en los años sesenta y setenta, se sumaron nuevas organizaciones que dinamizaron e intensificaron el conflicto. Estas nuevas organizaciones fueron los grupos de autodefensa y paramilitares de los años ochenta, las Bandas Criminales Emergentes, herederas de los grupos paramilitares y los movimientos de paz que comenzaron a tener auge a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa.

Para cerrar el círculo del ciclo de conflicto, también se percibe en el conflicto armado un interés político y un aumento de la interacción entre grupos armados y entre éstos y las autoridades. El interés político comenzó durante la Presidencia de Belisario Betancur que aplicó soluciones políticas y no militares para la resolución del conflicto, desarrollando las primeras conversaciones de paz entre los grupos guerrilleros. Posteriormente continuaron con esta solución los gobiernos de los Presidentes Barco, Gaviria, Pastrana y Uribe. A esto también hay que añadir la expedición

de decretos y leyes relacionadas con la anulación de la Ley 48 de 1968 que le confería piso jurídico a la creación de grupos de autodefensas y la creación de las Convivir para garantizar la seguridad en determinados territorios y que fueron utilizados por los grupos paramilitares para expandirse. El interés político también se reflejó en la denominación de algunos de los grupos armados en actores políticos como a los grupos que se desmovilizaron entre los años 1991 y 1994. Alrededor de este término se creó una discusión en torno a si los paramilitares eran actores políticos; sin embargo no fueron catalogados de esta manera. Por último, la interacción entre los diferentes grupos armados, se dio en diferentes niveles regionales, a nivel macrorregional, mesorregional y microrregional.

En resumen, el conflicto colombiano es un ciclo de conflicto debido a que es un proceso dinámico, cambiante que intensifica la acción entre los diferentes actores. No obstante, aunque Colombia vive una situación de conflicto armado, algunos de los grupos armados han pasado por diferentes fases hasta que terminaron por desmovilizarse. Algunos grupos entraron en las fases de agotamiento, polarización, violencia o institucionalización. Y, frente a ellos, el Estado actuó de diferentes maneras, o bien los reprimió o bien facilitó el desarrollo de los grupos armados. De este análisis cabe destacar que los paramilitares se encuentran en todas las fases de desmovilización pues estuvieron en la fase de agotamiento al declararse favorables a la desmovilización; sin embargo algunos bloques paramilitares no se desmovilizaron, es decir, se polarizaron frente a aquellas que si se desmovilizaron. Tras la desmovilización algunos volvieron a reincorporarse a la sociedad civil, sin embargo otros volvieron a la actividad armada. Respecto a la actuación del Estado, tanto los reprimió como facilitó la creación, desarrollo y expansión de estos grupos. Para el caso del ELN se encuentra en todas las fase de la desmovilización menos en la fase de facilitación del Estado. Actualmente, al igual que las FARC y las BACRIM-Paramilitares se encuentran alzados en armas. En último lugar, los grupos guerrilleros del ELN (posterior CRS), EPL, M-19, QL y PRT se desmovilizaron y entraron en la fase de institucionalización a principios de la década de los noventa.

La dinámica del conflicto colombiano se dinamiza a través de las oportunidades políticas aprovechadas por los diferentes actores para desarrollarse y movilizarse así como los recursos utilizados para sus acciones. Tanto las oportunidades como los recursos son claves para el desarrollo de estos grupos y del ciclo de conflicto.

Para poder responder a la pregunta de cuándo los grupos paramilitares se adentraron en la esfera política se recurre al estudio de las oportunidades políticas, es decir, se estudian las dimensiones del entorno político, estructurales y coyunturales, aprovechadas por los paramilitares para movilizarse y consolidarse en el territorio colombiano.

Las oportunidades estructurales están relacionadas, en parte, con la construcción del Estado en Colombia. Ya desde la ruptura con la Corona española se evidenció una fragmentación del poder. Las clases dirigentes se fragmentaron hasta alinearse en dos grandes federaciones nacionales. Estas identidades partidistas se superpusieron a las identidades locales y regionales y proporcionaron un carácter sectario a los enfrentamientos. Después del Frente Nacional, los partidos políticos entraron en crisis y fragmentaron más el poder en una sociedad caracterizada por poderes privados favoreciendo la inserción de otros como los narcotraficantes, la guerrilla y los paramilitares. Estos partidos políticos tradicionales articularon la sociedad. A través del sistema bipartidista el Estado tenía presencia en las regiones y localidades. Los partidos políticos se apoyaron en el clientelismo para relacionarse con el Estado, así se aprovecharon del poder para obtener ventajas personales. De esta manera, el clientelismo también fue usado por los paramilitares para adentrarse en la esfera de poder. Este contexto de inserción de los paramilitares se vio favorecido porque en Colombia se vivieron épocas donde se cortaron los procedimientos democráticos directos y se vieron afectadas las iniciativas populares cerrando de esta manera el acceso al sistema desde otras vías.

El proceso de descentralización política, administrativa y fiscal provocó un cambio en el marco institucional del Estado al favorecer el ámbito municipal. Sin embargo, en un contexto de conflicto armado, el proceso de descentralización intensificó y expandió la violencia pues los diferentes grupos armados comenzaron a disputarse el poder local al aumentar la autonomía política y financiera de los municipios.

Otras oportunidades que favorecieron el desarrollo de los paramilitares fueron los procesos de colonización interna, la complejidad geográfica de Colombia y el monopolio de la violencia ejercido por el Estado. Colombia no tuvo la totalidad de los medios de explotación política. No terminó por afianzarse en todas las regiones y su presencia fue diferencial en el territorio nacional. Además, su complejidad geográfica, siendo el segundo país más complejo geográficamente del mundo hace difícil controlar completamente el territorio. La dinámica de la colonización campesina hizo que fuera difícil la expansión estatal en las regiones de Colombia

pues hasta mediados del siglo XX más de la mitad del territorio estaba considerado zona de frontera caracterizándose por ser áreas conflictivas y con una precaria presencia estatal.

La configuración de los grupos paramilitares también coincidió con determinadas oportunidades coyunturales que ayudaron a su movilización. Se dividen en tres momentos cronológicos: origen, expansión y consolidación del fenómeno paramilitar. El origen estuvo motivado por varias oportunidades. Una de esas oportunidades fue durante el gobierno de Betancur dado que inauguró los procesos de paz con varias guerrillas. Esta negociación provocó un distanciamiento entre las elites regionales y el gobierno central junto con la oposición de los mandos militares ante este proceso. Los opositores a estas negociaciones, propietarios, ganaderos, empresarios rurales, junto con las brigadas y batallones del Ejército organizaron las autodefensas para evitar un cambio en el equilibrio de poderes que trajeran las negociaciones con las guerrillas. Las primeras experiencias de autodefensas fueron en Puerto Boyacá, y el grupo Muerte a Secuestradores (MAS). La asociación campesina ACDEGAM también ayudó en la formación militar de los paramilitares mediante instructores británicos e israelíes. La creación del partido político Unión Patriótica (UP) podría haber frenado este desarrollo de las autodefensas debido a que rompía el equilibrio de poderes. Para evitar esto, los paramilitares con el apoyo de la policía y las Fuerzas Militares atacaron a los candidatos más visibles de la UP.

La expansión de los grupos paramilitares coincide con los gobiernos de los presidentes Barco, Gaviria y Samper. La expansión paramilitar comenzó en Córdoba. En este departamento la polarización entre la elite y el campesinado; el malestar del Ejército y los propietarios rurales y el apoyo de la clase política cordobesa, los terratenientes y las fuerzas de seguridad propiciaron la expansión de los paramilitares al mando de los hermanos Castaño por Córdoba, Sucre, Urabá y el Cauca antioqueño. El debilitamiento del cartel de Medellín y la creación de los Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES) alentó la reorganización y difusión del fenómeno paramilitar. Durante el gobierno de Barco se llevaron a cabo varios decretos para minimizar el paramilitarismo, entre ellos se eliminó la Ley 48 de 1968 que daba piso jurídico a la creación de los paramilitares. También creó un cuerpo de elite de la policía y un comité anti-sicarial para frenar su expansión. Carlos Gaviria siguió el mismo modelo de seguridad implantado por Barco, aplicó el modelo de negociación a otros grupos armados entre los cuales se encontraba algunos grupos paramilitares que se desmovilizaron. A pesar por tener una estrategia de seguridad diferente a la visión castrense, ésta última siguió manteniéndose sobre la seguridad nacional, siendo su mayor prioridad la lucha contra el narcotráfico y los grupos guerrilleros aunque reconoció por primera

vez las diferentes formas de violencia. Pero el gobierno de Samper (1994-1998) facilitó el aumento de los grupos paramilitares pues su gobierno se centró más en el narcotráfico que en los grupos armados. Durante su gobierno se crearon las ACCU y las AUC en dos cumbres en 1994 y 1997. Además la creación de las Convivir facilitó el desarrollo y expansión del paramilitarismo. Solo a partir de 1997 se empezaron a tomar medidas contra el paramilitarismo y a entenderlo desde una política de paz. En este momento se entra en la fase de consolidación de los grupos paramilitares que ocupa el final del gobierno de Samper, Pastrana y Uribe. Con Pastrana los paramilitares siguieron sin ser reconocidos como actores políticos. Se inició una modernización del Ejército y un aumento de la ayuda extranjera a la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas a través del Plan Colombia. Se registraron un aumento de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados. Los paramilitares y las guerrillas crecieron militarmente aprovechando el proceso de paz con las FARC.

Tras Pastrana, fue elegido Álvaro Uribe por dos mandatos, de 2002 a 2010. Su elección se centró en la seguridad como tema central de su gobierno mediante el plan de Seguridad democrática. Uribe continuó aumentando el enfrentamiento contra los grupos armados, sobre todo contra los paramilitares. El proceso de desmovilización de los grupos armados de manera colectiva o individual fue una de las medidas importantes en su gobierno. Tras los acuerdos de Santa Fe de Ralito con los grupos paramilitares, se produjo la desmovilización militar de cerca de 31.000 paramilitares conformados en 37 estructuras. Para dar marco jurídico a esta desmovilización el Congreso aprobó la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. La Corte Constitucional cambió varios puntos de la ley como que los paramilitares debían decir la verdad de sus crímenes sino querían perder la rebaja en las penas. Sin embargo esta desmovilización provocó varios problemas como sus conflictos, escándalos, crímenes y reciclaje en grupos de delincuencia viejos y nuevos. El arsenal que le fue incautado era en su mayoría inservible y muchas de estas armas fueron ocultadas. De más de 10.000 desmovilizados de 18 grupos, 4.000 no entregaron armas lo que supone un aumento en el mercado negro y la ocultación de las mismas para continuar con sus actividades ilícitas. Es posible que se desmovilizaran para evitar generar más costos militares por controlar militarmente un territorio y dejar esa función a la Fuerza Pública, pues como después se analiza, el control de las redes locales y regionales es evidente. A estas circunstancias hay que añadir el fracaso relativo del Plan Colombia respecto al control del narcotráfico y la producción de coca así como la puesta en marcha del cultivo de la palma y su relación con grupos paramilitares. Durante el segundo mandato de Uribe se produjo el escándalo de la parapolítica y farcpolítica, es decir, la relación de políticos con miembros de las FARC y los paramilitares.

Determinados políticos establecieron con los grupos paramilitares relaciones destinadas a conformar grupos paramilitares, financiamiento de campañas electorales, negocios, contrataciones ilegales, desvío de fondos públicos a las arcas de los paras y establecieron ciertas reuniones en determinadas regiones. Sin embargo la parapolítica no sólo se enfrenta a la relación de paramilitares con políticos o viceversa, sino que engloba a la relación que estos grupos tuvieron con la Fuerza Pública, militares y policías, empresarios, periodistas, hasta el momento. Los resultados de la Ley de Justicia y Paz durante este segundo mandato fueron escasos en función de la verdad, justicia y reparación. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 90% de los 28.000 procesados no aportaron datos relevantes sobre sus crímenes y actividades ilegales. Para este proceso el papel de la víctima fue fundamental para esclarecer los crímenes. Sin embargo el temor y la falta de información limitaron y redujeron su participación. Los bienes que los paramilitares entregaron directamente al FRV de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz y aquellos bienes que entregaron a Acción Social, FRV, mediante orden judicial, fueron muy pocos. Fue evidente el malestar con esta ley por la falta de garantías y protección a los reclamantes de tierras, el mantenimiento de las estructuras paramilitares y los obstáculos normativos establecidos en la Ley de víctimas y restitución de tierras. Respecto a la justicia, la ley 975 se hizo con el objetivo de llevar a la justicia a más criminales que muchos otros procesos de paz. Los desmovilizados tuvieron tres caminos desde el punto de vista judicial, la Ley 975, la justicia penal ordinaria y la Ley 1424 de 2010, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, ante el vacío legal que dejó la Ley 782 porque los paramilitares no eran delincuentes políticos. Pero tan solo 10 imputados paramilitares han sido sentenciados a 29 de febrero de 2012 según la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. A pesar del fortalecimiento de la Fuerza Pública, las Bacrim, los nuevos grupos de paramilitares, han seguido creciendo hasta el año 2011. Desde el año 2008 hasta el año 2011 han aumentado su presencia en los municipios colombiano hasta alcanzar 406 municipios de 31 departamentos en 2011 y su control territorial coincide con el de los grupos paramilitares. Por tanto, parece que el cese de las hostilidades con los grupos paramilitares no ha cesado independientemente de su desmovilización. Sino que han continuado en grupos bien estructurados con las mismas estructuras políticas y económicas que las AUC.

Uno de los éxitos de los grupos paramilitares fue el logro de recursos que alcanzaron, no solo materiales, sino también recursos humanos, tácticos y organizativos. Las diferentes fuentes de financiamiento, legales e ilegales, le reportaron importantes beneficios económicos. Pero sobre todo fue la inversión de éstas en el control territorial, en el control económico de los municipios y de las regiones y en la conformación de redes en el ámbito político. Lavaron su imagen

invirtiendo parte de sus beneficios en negocios legales para legitimar su dinámica de actuación. Para llegar a tener el control de determinadas regiones, utilizaron la violencia como estrategia para penetrar en las poblaciones. Posteriormente establecieron el control militar y continuaron con su penetración en política y en economía local mediante el *clientelismo armado* en zonas rurales y el *clientelismo mafioso* en zonas urbanas. Mediante estas dos tácticas penetraron en los municipios, desplazaron a los grupos guerrilleros y se establecieron como actor hegemónico.

Los grupos paramilitares se organizaron en frentes y bloques mantenían una autonomía financiera y operativa entre ellos, con relativa autonomía local y debilidad jerárquica. Las diferentes estructuras paramilitares respondieron más bien a intereses regionales e incluso personales más que a una línea nacional de pretendida unidad paramilitar. Sin embargo en la consecución de sus objetivos fueron muy importantes las redes que tejieron a lo largo de sus acciones.

Diferentes grupos e instituciones consideraron a estos grupos armados como aliados en la lucha contra la guerrilla, reforzando la protección a los propietarios y ejerciendo como una división más del Ejército ante la carencia y debilidad de la presencia del Estado en las zonas rurales. Según Human Rights Watch establece que hay una continua relación entre las brigadas tercera, cuarta, quinta, séptima, novena, decimocuarta, decimotercera, decimoséptima y vigésimo cuarta con grupos paramilitares. Contaron con apoyo de amplios sectores empresariales, hacendados, ganaderos, comerciantes, instituciones de seguridad del Estado- Fuerzas Armadas y Policía-, agencias estadounidenses (DEA, CIA), Fiscalía, el DAS colombiano y gobiernos locales y regionales, incluso tienen una significativa representación en el parlamento y su proceso ha permeado a diferentes sectores de la población que los consideran una autoridad.

El poder territorial, el control de recursos y el aprovechamiento de las oportunidades políticas fue esencial para movilizar y consolidar la acción de los paramilitares. Estas actuaciones fueron revestidas de ciertos matices ideológicos y simbólicos para “ganarse a la gente”, para legitimar y defender sus actuaciones frente a la sociedad y ganar adeptos. Por ello, unificaron unos mismos criterios ideológicos frente al Estado, sus adversarios y sus metas. Se presentaron como defensores del Estado social de derecho frente a la hostigación de las guerrillas y la incapacidad del Estado por proteger a la sociedad. Tras ocupar los territorios y asentarse en ellos se convirtieron en caciques locales y comenzaron a entrar en el poder político para comenzar a proveer a la sociedad de funciones propias del Estado. Intentaron alejarse de la imagen de un

poder unido a las Fuerzas Militares para pasar a tener una imagen más independiente de este poder, como si fueran un poder autónomo. Aunque los paramilitares tuvieron formación en política, la mayor parte de los que se incorporaban a sus filas no lo hicieron por un motivo ideológico, sino mas bien por cuestiones económicas, como una manera de ganarse un salario. Bajo unas mismas siglas, Autodefensas Unidas de Colombia, se mostraron como una misma organización estructurada bajo un mismo líder pero con diferentes grupos con capacidad de actuación independiente.

Una vez que los paramilitares se adentraron en una región determinada y lograron controlar su territorio ejercieron diferentes redes con las fuerzas políticas de cada región controlada. La Constitución de 1991 favoreció la creación de partidos políticos sin apenas contemplar una organización interna de los mismos. Por tanto, se crearon múltiples partidos personalistas que hicieron más fácil la entrada de los paramilitares a la arena política. Casi el 60% de los partidos políticos implicados con grupos paramilitares pertenecieron a los partidos creados después de 1991. A partir de 2006 se comenzaron a investigar las relaciones entre políticos y paramilitares. Este proceso fue llamado con el nombre de parapolítica. Aunque esta relación era bien conocida en Colombia mucho antes de hacerse pública en los medios de comunicación, vio la luz debido al desencuentro entre las elites regionales y las elites nacionales debido a que el paramilitarismo reforzaba las elites regionales clientelistas no modernizantes.

La parapolítica afectó sobre todo la relación entre senadores, congresistas, alcaldes, concejales y gobernadores. Con los datos disponibles hasta mayo de 2012, se identificó que sesenta y seis senadores estaban implicados con los paramilitares. Del total de senadores implicados, el 83% perteneció al periodo de 2006/2010. Durante esta legislatura, el 54% de los senadores estuvo relacionado con este grupo. Este dato da a conocer el poder de control de los grupos paramilitares de esta cámara. Al igual que los senadores, los representantes a cámara representan el 64% de los implicados con paramilitares en la legislación de 2006/2010. Durante esta legislatura, el 24% de los representantes estaban implicados en parapolítica. En el ámbito regional, los grupos paramilitares también establecieron nexos con funcionarios regionales que ahora son investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. En total treinta y siete funcionarios regionales han sido investigados desde las elecciones de 1997/2000 hasta las del 2007/2011. El mayor porcentaje de funcionarios regionales implicados corresponde al cuatrienio 2003/2007, por un total de 54%. Sin duda el mayor número de funcionarios involucrados fueron los funcionarios locales con un total de ciento dieciocho implicados. Al igual que los funcionarios

regionales, la mayor parte de los implicados de los funcionarios locales es para el periodo 2003/2007. El 50% de los implicados tuvieron relaciones con los grupos paramilitares. Se observa que en primer lugar los paramilitares influyeron en el ámbito local y regional sobre todo durante el cuatrienio 2003/2007 para posteriormente dar el salto al ámbito nacional y que se plasma en el alto número de senadores y representantes implicados durante la legislatura 2006/2010. Por tanto, desde el ámbito local y regional, cooptaron el ámbito nacional. El mayor número de funcionarios implicados se produjo durante el proceso de desmovilización paramilitar de 2003 a 2005 y posteriormente sobre todo en el ámbito nacional pues el 64% de los representantes y el 83% de los senadores detenidos pertenecían al periodo posterior de la desmovilización, al periodo 2006/2010. Es posible que el aumento del número de senadores y representantes tras la desmovilización corresponda a un intento por consolidarse y asentarse en un ámbito donde los recursos materiales son mayores y la influencia en la elaboración de políticas públicas favorables al interés paramilitar es más evidente. También es importante destacar que el 55.29% de los políticos implicados son uribistas, sobre todo hay mas senadores y representantes uribistas implicados que funcionarios regionales y locales. Pero en suma, la diferencia es muy pequeña si lo comparamos con los partidos que no son uribistas. Por lo tanto, se puede decir que hay un ligero predominio de uribistas implicados en parapolítica pero no un predominio absoluto de la coalición uribista.

En total, doscientos noventa y tres funcionarios han sido investigados por sus nexos con estos grupos. De ellos nueve han sido absueltos, cincuenta y siete han sido condenados, sesenta y siete están siendo investigados, sesenta y dos están detenidos, treinta y dos están llamados a juicio y treinta y cuatro se encuentran en fase de instrucción. La mayor parte de estos funcionarios pertenecen a los departamentos del norte de Colombia, es decir, donde más influencia ha tenido el fenómeno paramilitar. Por tanto hay una relación estrecha entre mayor control territorial y mayor número de políticos implicados. Las relaciones que los políticos tuvieron con los paramilitares en su mayoría estuvieron ligadas a conseguir apoyo electoral y beneficiarse electoralmente de su apoyo. Casi el 50% de los implicados gozaron de este apoyo electoral. El 35% de estos políticos participaron en algún momento en la conformación de grupos paramilitares. El 8% de los implicados financiaron económicamente a algunos grupos paramilitares. El 13% de los funcionarios acudieron alguna reunión o firmaron algún pacto con los paramilitares. Casi el 10% también declaró haber participado en algún homicidio perpetrado por estos grupos armados.

El apoyo electoral recibido por los funcionarios por parte de los paramilitares fue la actividad más visible hasta el momento. Casi el 50% de todos los investigados tuvieron beneficios electorales. Independientemente de que se sometieran a un proceso de desmovilización, continuaron favoreciendo a determinados funcionarios, sobre todo en las elecciones legislativas de 2006/2010. El patrón que siguieron fue primero realizar masacres y posteriormente influir en las elecciones a través de imponer funcionarios afines, candidatos únicos y realizar fraude electoral. En determinados departamentos crearon distritos electorales para las elecciones legislativas y locales de 2002 y 2003, respectivamente. Es decir, apostaron por una pareja de candidatos al senado y a la cámara que triunfaron en determinados municipios anteceditos de una masacre. Estos departamentos fueron Antioquia, Córdoba, Magdalena, Cesar y La Guajira. A pesar de la conformación de estos distritos electorales, es importante recordar que para las elecciones de 2006/2010, el 54% de los senadores y el 64% de los representantes están acusados de obtener apoyo electoral por su relación con los grupos paramilitares. A pesar de estas cifras, es importante destacar que no solo fue un fenómeno que afectó a la clase política colombiana, sino que también influyó en otros sectores de la sociedad y que finalmente reprodujeron mucha de las funciones del Estado. Por tanto, en función de sus actuaciones es más acorde denominarles paraestado.

Finalmente mediante los estudios de casos se observan las diferencias entre los grupos paramilitares en función del contexto en el que se muevan, sus objetivos personales y la estructura social donde se integran. Asimismo se ve la evolución de cada grupo paramilitar. Entre ellos se estudia al paramilitar Jorge 40, jefe del Bloque Norte. Jorge 40 creó alrededor de él todo un imperio sustentado en las redes clientelares de la costa atlántica. De autodefensa pasó a cacique. Para consolidar su poder en la costa atlántica realizó varias masacres y posteriormente comenzó a comprar políticos que le ayudaran a conseguir rentas. Así se hizo con los recursos de las alcaldías, hospitales, tiendas etc. Este grupo influyó en las elecciones legislativas de 2002, en las locales y regionales de 2003 y en las elecciones legislativas de 2006, reuniéndose varias veces con políticos para crear un nuevo contrato social en diferentes reuniones como Ralito, Chivolo o Pivijay. De esta manera controlaba el ámbito local, regional y nacional. Un caso diferente es el de Medellín. Ciudad caracterizada por la violencia, criminalidad de diferentes grupos armados, narcotraficantes...en esta ciudad se desarrolló una pelea por dos conceptos diferentes de paramilitarismo-autodefensas. Por una parte, el Bloque Metro liderado por Doble Cero era más contrainsurgente, autodefensa, realizaron varias limpiezas sociales pero se mantuvo reticente a que el narcotráfico influyera decisivamente en su organización. Frente a él se encontraba el Bloque Cacique Nutibara, liderado por Don Berna, reconocido paramilitar narcotraficante o

narcoparamilitar que se impuso a las bandas, combos y milicias en Medellín y se expandió por Medellín y su área metropolitana donde apoyó electoralmente a muchos candidatos que posteriormente han sido investigados por parapolítica. Sin embargo su influencia política fue menor que la ejercida por Jorge 40. El Bloque Central Bolívar, nació como autodefensa, para combatir los abusos de la guerrilla en el departamento de Bolívar, y evolucionó a grupo paramilitar expandiéndose por Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Santander, Caldas, Antioquia y Nariño. Su principal estrategia fue crear un partido político, Convergencia Ciudadana, y presentar candidatos propios más que seguir dentro de viejas alianzas caciquiles. También influyó en otros candidatos de partidos diferentes a Convergencia. Este grupo es muy diferente de las Autodefensas Campesinas del Ortega. Este grupo nació como una autodefensa pura en el sentido de lucha contra la guerrilla, en concreto de las FARC y el ELN. No tuvieron contacto con el narcotráfico ni influyeron en políticos para sacar réditos personales. Apenas tuvieron relación con las AUC, pero no están bajo éstas siglas.

El último caso de grupos paramilitares por estudiar fue el de las ACCU/AUC de los hermanos Castaño. De autodefensas, pasaron a paramilitares y de ahí tuvieron una gran influencia del narcotráfico sobre todo bajo el liderazgo de Mancuso. Tanto las Convivir como la influencia del General Alejo Rito del Rio, coincidencia con la etapa de gobernador de Álvaro Uribe, fueron esenciales para el desarrollo de las ACCU y su evolución en AUC. Los hermanos Castaño comenzaron a liderar el malestar de los ganaderos y hacendados de la región frente a la situación social de Córdoba y al malestar generado por la guerrilla. Con la ayuda del Batallón XI, consolidaron las estructuras de las ACCU en Córdoba y posteriormente expandieron este proyecto a otras regiones, con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia. Con la creación de las AUC en 1997 se perciben dos líneas diferentes. Por una parte, el objetivo de Carlos Castaño era enfocarse en la guerrilla. La segunda línea, dirigida por Mancuso, se concentraba en realizar acuerdos con los políticos para controlar políticamente las regiones, legitimar su apoyo a nivel nacional y obtener de esos apoyos políticos ingresos económicos. Sin embargo desde las elecciones a alcaldes de 2000, comenzaron a influir en las autoridades locales, en las elites regionales, en las Universidades, como en la Universidad de Córdoba, realizando reuniones e introduciéndose en el Congreso y Senado. Comenzaron a influir a los hijos de los viejos barones electorales con mejoras electorales mediante pactos con los paramilitares, como el Pacto de Ralito y el Pacto de Granada. Así comenzaron a consolidarse como actor hegemónico y a presionar en determinadas zonas desde el punto de vista político, social, económico, judicial y militar.

La aproximación al fenómeno paramilitar desde la sociología política ha permitido analizar diferentes aspectos de los grupos paramilitares desde cómo se organizaron; qué oportunidades aprovecharon para consolidarse, desarrollarse y movilizarse; cuándo se establecieron como un actor importante y cómo mostraron sus ideas a los demás. Dentro de este análisis se estudió la llamada parapolítica para observar el grado de infiltración paramilitar en las instituciones políticas. Sin descuidar sus relaciones con las Fuerzas Militares, empresarios, narcotraficantes, hacendados, y agencias nacionales o extranjeras como el DAS, DEA, CIA. Es decir, tejieron una gran telaraña con diferentes sectores de la sociedad, crearon un paraestado, que sigue tras el proceso de desmovilización del 2003. Mediante los diferentes casos de estudio se observaron las diferentes actuaciones y desarrollos de grupos paramilitares en contextos sociales diferentes y su relación con la clase política. Recientemente siguen saliendo noticias sobre la investigación de ciertos personajes públicos relacionados con los paramilitares, como el General del Ejército Mauricio Santoyo. La contemporaneidad de este estudio implica, entre otras cosas, nutrirse de las últimas investigaciones, de tal manera que puedan afectar al rumbo de la propia investigación y determinar así el alcance de este fenómeno. Sobre todo en la idea de su alcance e influencia en la clase política colombiana.

A futuro podía resultar interesante investigar el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y compararlo con el actual proceso de desmovilización de las FARC que recién comienza en el mes de octubre de 2012. Estudiar el tratamiento que van a recibir, sus redes, su incorporación a la sociedad civil etc, si realmente llegan hasta el punto de desmovilizarse. Asimismo el actual proceso de las víctimas con la nueva ley pueda sugerir una futura investigación de las consecuencias del proceso de desmovilización hacia este colectivo que desde un principio quedó aislado y poco a poco ha ido empoderándose. En último lugar, siguiendo con la investigación de Claudia López (2010), sería conveniente continuar el estudio realizado por ella sobre la actuación de los congresistas investigados por parapolítica y su actividad en la formulación de nuevas reformas y leyes en la Cámara y Senado para, de esta manera, adentrarse más en el poder paramilitar en el ámbito nacional.

Para terminar, es difícil asegurar algo respecto al conflicto armado interno que vive Colombia. Pues si se considera que el problema es un ciclo de conflicto armado, las dinámicas del propio ciclo impulsan a un conflicto duradero que, mientras se maquille con desmovilizaciones, sigue moviéndose, generando otras fuerzas como las bandas criminales de los grupos paramilitares y alimentando el conflicto, como si de una rueda se tratara.

Resumen/Summary

Introduction and objectives

Recently it has appeared in the Colombian press that army general Mauricio Santoyo during the presidency of Alvaro Uribe, was related to parapolitics, meaning, having connections with paramilitary groups¹. It appears that these contacts not only happen during the early 80's when the Castaño brothers were supported in Cordoba by the XI Battalion, Bombona Battalion and general Alejo del Rio, against the guerilla aggression and the uncontrolled situation by the state: He needed to rely on support from the six division of the paramilitary army. These connections have been ongoing on the course of time. Not only, with the paramilitary forces, but also with businessman, ranchers, politicians and national and international agencies, such as DAS, DEA and CIA. This means that we are dealing with a very dynamic and complex phenomenon, which cannot be interpreted as only an ally of the military of narcotrafic world.

The complexity of the paramilitary phenomena is analyzed in this research Project. Therefore, this work goes over the influence of the paramilitary groups in Colombia and its interference in the local government. It is a preliminary study that tries to point out the co-optation of the local government from the time of the government presided by Belisario Betancur (1980-1984) to the presidency of Alvaro Uribe (2002-2010).

The main part of this research Project is to analyze how the paramilitary groups got its power in the local government in Colombia, in which way they controlled the regional governments, and what were the main determinant factors that allowed the paramilitary phenomena to extend its influence over all the territory in Colombia; becoming a main player in some regions in Colombia, and how they extended its power from the local, to regional and national levels.

To carry out this study, the following questions arise that try to be answered throughout this paper:

- A) How do you define a Colombian paramilitary groups?
- B) What treatment received by different authors?
- C) Can you differentiate between Colombian paramilitary groups?
- D) What was the background of the rise in the eighties of the paramilitary groups in Colombia?
- E) What has been the dynamics of the internal armed conflict and how it has affected the paramilitaries?

- F) What have been cyclical and structural opportunities for the emergence and consolidation of these groups in certain provinces in Colombia?
- G) What strategies and resources have been developed to establish itself as hegemonic actor in certain departments?
- H) How did extend their networks from local, to regional and national level?
- I) What were the most visible political actions?
- J) Why erupted parapolitics scandal in 2006?
- K) What political parties and which departments have been identified by parapolitics?
- L) What can the study of paramilitary presence at the local level to improve the performance of Colombian democracy?

Therefore, the objective of this research is to describe, analyze and evaluate the paramilitary phenomenon in Colombia since the eighties to the present in order to diagnose the extent of penetration of paramilitary locally. Specific objectives include the following:

- a. Define and differentiate between paramilitary groups in Colombia.
- b. Set the background of the paramilitaries in Colombia.
- c. Diachronically analyze the dynamics of internal armed conflict, based on the specific characteristics of a particular political and institutional context.
- d. Describe the institutional and political environment in which the paramilitary phenomenon occurs from the structural and cyclical dimension Colombian political system.
- e. Identify action strategies of the Colombian authorities in terms of form and ability to act in the political institutions in situations of political conflict.
- f. Analyze the strategies, resources and organization that favor the emergence, development, strengthening and consolidation of paramilitary.
- g. Set different political actions of paramilitary groups and political parties and noted departments affected by the parapolitics.
- h. Addressing five illustrative case studies to corroborate and describe the type of relationship between paramilitaries and local level.

This research is examined under a sociologic perspective, to obtain the necessary tools for approaching this study, therefore becoming an analysis instrument that could be used in other situations. Using the sociologic perspective the issue is examined under "the theory of collective action". From this perspective, the main armed paramilitary players are analyzed as rational and

social actors, that operate collectively based on its interests after calculating cost and benefits of acting as an armed group outside of the legal institutional framework. Therefore, to study these players under the perspective previously mentioned and start to understand the paramilitary structure, a theoretical framework is proposed which describes and analyzes the political opportunities and limitations of the armed players to carry out its mobilization. As well as the flow of necessary resources for its survival, development, and consolidation of the activities, all under the constant presence of an internal armed conflict. Moreover, the symbols and ideas used by the paramilitary groups to legitimize its action are analyzed as a dynamic cycle where players and related institutions are interrelated.

Content and structure of the research

The structure of this research is divided in four chapters. The first chapter starts explaining the methodological aspects of the research. There are different analyses of the different paradigms of the theory of collective action, looking to get the best approach to analyze and study the paramilitary. From here is where the theory of resource mobilization, the structure of political opportunities, the cycle of conflict and the paradigm of the new social movements, conform all of them a relevant methodological development to analyze the paramilitary groups from the perspective of political sociology. Despite the fact that Tarrow, Tilly and MacAdam did an effort to present a dynamic analysis of the political confrontation to strengthen the relationships among the different players, institutions and context, they still need to toughen their new theoretic proposal. From the proposed methodology a deeper analysis was performed of the origin, development and consolidation of the paramilitary groups and their influence in the political arena. In this same chapter a summary is also available, explaining who the research was carried out, which details the institutions visited, the interviews done, and in general what was the information available to do this research.

In the second chapter, there is an attempt to respond of who are the paramilitary groups. To do this, there is initially an overview of the first studies available in Colombia about violence, going from the preoccupation about violence and its roots at National level. Subsequently, there is an analysis the bibliography most representative of paramilitary groups in different contexts and also more specifically in Colombia, in order to see the similarities and differences between different authors. From all the researchers specialized on paramilitary groups, only the ones that used most often the definition of paramilitary where chosen. For this issue, there were several

interviews carried out to several specialists in the subject, such as Mauricio Romero, Gustavo Duncan, Francisco Leal Eduardo Pizarro, Camilo Echandia, Fernan Gonzalez, Teofilo Vazquez and Claudia Lopez. They elaborated an opinion about the paramilitary according to the evolution of the information available of them. The opinion varied among the principal specialist on Colombia paramilitary groups. A group of investigators postulated the idea that there was an evolution from self-defense to paramilitary, and therefore they made a difference between self-defense and paramilitary. Among them, the main ones were Romero, Pizarro, Cubides, Uprimny and Lopez. Other investigators shifted this definition. Duncan called them the lords of ward as groups of political-military hegemony. Leal pointed out to an evolution from self-defense to mafia structures. Echandia also used the term of mafia groups to define the paramilitary since in his opinion their strategies and actions could not be considered as a classical model for self-defense and paramilitary. Medina defined the paramilitary groups as a type of parainstitutional violence, which after being influenced by the drug trafficking it became a new modality, the narcoparamilitar. Rangel, maintained the denomination of paramilitary for those groups with a contra insurgency project, independent from the state, infiltrated by the drug trafficking and with power over a private army. Gonzalez and Vasquez, established that the paramilitary groups were synchronic and diachronic in time. In addition, their structure and strategies were related to the economy and society of each region in which they were in control. From this comparative of authors, there is a proposal of a definition of paramilitary groups, their terminology and actions in Colombia. It is explained that the paramilitary phenomena is considerably more complex and dynamic than what can be implied from just the definition of paramilitary. The different groups that make up these phenomena, as well as their development and evolution confer to them more the status of para-state groups, substituting the state in several of its functions. However, they are not a political player since they committed grave crimes against civil society and also are not a contra-state phenomena, but instead they act with the state to maintain the status-quo. Their way of operating makes this group different from the other players that are under the clientele list of the government. They coopted different aspects of government and influenced in different sectors of society. Therefore, it is very difficult to just consider them as paramilitary since they not only acted as a military group that help the in the confrontation of the state with the guerrilla, but also took other functions doing minimum state functions, meaning the legitimate monopoly of force, the control of taxes, and administration of justice. Therefore, to reflect these actions is more consistent to denominate them para-state groups.

From a theoretical point of view and a state-of-the art overview of the paramilitary groups, a revision of the precedents of these groups is done, going to the times of violence and the National Front. The party sectarianism of violence provoked among other things the loss of legitimacy from the state and its precarious presence in Colombia. Local and regional power, some of them armed such as the “pajaros” or the “chulavitas”, substituted the state, and weaken even more the existing social structure. The pact of the National front (“Frente Nacional”), came to legitimize the bipartisanship and groups of interest. Against the weakening security from the state due to the rising of armed bands, worsened by the incorporation of guerrilla groups, a law was created the legitimize the formation of auto-defense groups under law 48 of 1968. Therefore, the state facilitated and justified the formation of these groups, which started to develop in the decade of the 80’s. The paramilitary groups took this opportunity to become part of the network of official clients and influence different sectors of society.

The last chapter corresponds to the core of the investigation. The armed conflict is analyzed from the cycle of conflict. Meaning from a dynamic and changing context where the institutions interact with the players. From this context it is studied the mobilization as well as the demobilization phase, in which it is observed that the paramilitary groups are under all the phases described about demobilization by Tarrow. Subsequently, it is researched the political opportunities that the paramilitary groups used to mobilize and consolidate in the Colombian territory. To these opportunities we have to add the mobilization of resources, drug trafficking and a repertoire of action to maintain these groups. The inclusion of paramilitary in the political arena started to be called para-politics with the idea that the paramilitary pressed the politicians to comply with their objectives. Posteriorly it was demonstrated, as is also done in this investigation, that the politicians received bribes and that many of them were not forced, but instead were part of the political network of the paramilitary phenomena. The big majority of them obtained electoral benefits, meaning, the paramilitary influenced selected elections to facilitate and favor some politicians. Senators as well representative, councilors, mayors, and governors were influenced by these groups. Lastly, an analysis of several case studies is done to compare the differences between these groups, such as the ones in the Atlantic Coast as is the case of Jorge 40, with Medellin with Mr. Berna, Cordoba with the brothers Castaño and the “Bloque Central Bolivar”, which occupied the regions of Bolivar, “Norte de Santander”, Arauca, Boyaca, Santander, Caldas, Antioquia and Nariño.

Conclusions

The main argument is that first, we need to start from a different conception of paramilitary groups. Due to the evolution they have had since the 80's, its organization and connection with the society in general, as well as other powers, and its own structure has changed. It is difficult to just consider them as counterinsurgency offensive that got the support of the army to stop the advances of the guerrilla. It can be considered that the previous definition was part of its origin, but not of the evolution it had, since the paramilitary groups had government functions, legitimizing its power; such as control of the justice and tax system. Its structure extended from the local to the national levels, influencing at the same time different sectors of the society, the economy and politics. Thus, it is a very dynamic phenomenon, with different paramilitary structures, that leads to the conclusion that it constituted a para-state. Likewise, they could be defined as para-state groups.

The main focus of this research work goes over the union of different theoretic perspectives of political sociology, such as: political opportunities, basic organizational resources, the ideas and symbols used to legitimize their actions and the cycle of conflict. The end result was that these groups infiltrated politics, coopting the elites, and expanding its control on territories, resources and responsibilities.

The influence of the paramilitary or para-state groups over the local territories was dependent on several factors. First, the presence of a cycle of arm conflict in Colombia provided a dynamic to the main players in a constantly changing environment that magnified and expanded the conflict. This facilitated the development of new players, increasing the interaction among them and establishing constantly changing strategies for action. Following the theory developed by Tarrow, the internal armed conflict is enclosed in a cycle of dynamic conflict where the players mobilize or demobilize intensifying the conflict inside the social system. From the mobilization, the conflict started to intensify and extend to different sectors. The different armed players started to extend in Colombia from colonization to strategic regions of great economic potential and therefore increased its military strength. In this regard, the paramilitary groups started to expand their fronts to all the territories occupied by the guerillas and fighting against them for the control of territories of economic value. The flare up of the conflict increased the number of homicides committed by both armed groups. The homicides of political meaning increased specially at two occasions. First, from 1982 to 1993, related to the elections for mayors, and the flourishing of

leftish political parties as a consequence of the political freedom. The second period was from 1996 to 2004, related to other issues and the paramilitary expansion in the Uraba and Magdalena Medio. At the end of the 90's the paramilitary was responsible for 63% of the homicides. In fact, this group was responsible for more deaths between 1988 and 2005 accounting for 48% of the total homicides committed. However, the highest point of political homicides was during 2003 reaching 13.74% of the total, coinciding with the beginning of the process for paramilitary demobilization. Besides the killings to politicians, there were also carried out homicides against judges, functionaries, union managers and journalists. It is worth mentioning, that the armed conflict also increased the number of displaced people, disappearances and other victims of violence. As a consequence of the heightened armed conflict from the paramilitary groups, the fighting between public forces of order (police) and the armed groups increased, especially with the FARC.

The action of the armed groups was implemented via violence and public disorder. Violence has been a constant of the armed conflict since its origins. The paramilitary used violence indiscriminately since 1997 as a way to assert its control over the territory and the population. Once the demobilization started, they used violence in a more selective way. Nevertheless, violence has always been the main way to exert its control by this group. In addition, to creating public disorder by cutting main communication roads and infiltrating the territories, they also used public broadcasting as a way to publicize their actions and express their ideology. This included written and oral ways of communication, such as internet, radio, television, magazines and documentaries.

To legitimize their actions the armed group established a shared way of looking at the world. Both, the guerrilla and the paramilitary established their fighting according to their own personal history. Therefore, the paramilitary opted to develop a framework of collective action around their defense from the guerrilla expansion and the incapability of the state to offer security in certain areas of the country. In this way they erected themselves as defenders and protectors of society even fulfilling government functions. Moreover, during the time of Carlos Castaño they reformulated their vision of the state in a National reconstruction project.

As an element to stir the armed conflict, to the older armed groups that started the conflict during the 60's and 70's, such as the FARC, ELN, EPL, M-19, newer groups joined the conflict intensifying and making it more dynamic. These new groups where the auto-defense

organizations, paramilitary of the 80's, emerging criminal bands coming from the paramilitary groups, and peace movements that started to gain strength during the 80's and beginning of the 90's.

In order to close the cycle of the conflict, it is also perceived a political interest in the armed conflict, and an increase in the interaction between different armed groups and of them with the authorities. The political interest started during the presidency of Belisario Betancur, who applied political and not military solutions to resolve the conflict. He started the peace negotiation with the guerrilla. Subsequently, this approach was also used by the governments of presidents Barco, Gaviria, Pastrana and Uribe. In addition, the political interest was seen in the approval of laws and decrees to override Law 48 from 1968, which legalized the creation of the self-defense groups, and the "Convivir" to guarantee security in certain territories of the country, and were used by the paramilitary to further expand. The political interest also was reflected in the denomination of some of these armed groups as political parties-groups, such as is the case with the groups that were demobilized between 1991 and 1994. Around this issue there was a big discussion; however, the paramilitary were never considered a genuine political force. Lastly, the interrelation among these armed groups happened at different levels, including local, regional and national.

Recapping, the Colombian conflict is a cycle of conflict since its dynamic and constantly changing which intensifies the action of the different groups-players involved on it. However, although in Colombia they are living in a situation of armed conflict, some armed groups have gone through several stages until they have finally demobilized. Some armed groups went through different phases including polarization, violence, institutionalization and exhaustion. To confront them the state acted in different ways: or they were repressed or facilitated the development of the paramilitary groups. Front this analysis is worth mentioning that the paramilitary groups are at all stages of demobilization, since they were at the stage of exhaustion after declaring themselves favorable to demobilization. However, a few paramilitary groups not only did not demobilize but became more polarized and radical. After demobilization a few paramilitary groups reincorporated into the social network, meaning they became institutionalized. By contrast, others returned to the armed conflict. In regards to the state, it did both things, repressing them and at other times facilitating the expansion and growth of older groups including development of new groups. In the case of the ELN it has gone through all the phases of demobilization except for being facilitated by the state. Currently, the FARC and the

BACRIM-Paramilitary are in armed conflict. Lastly, the guerrilla groups ELN (later CRS), EPL, M-19, QL and PRT demobilized and entered the phase of institutionalization in the 90's.

The paramilitary groups used all political opportunities that the situation brought to them to mobilize, expand, and consolidate their influence at the local and regional levels. Most of the structural opportunities came from the construction of the state of Colombia. The fragmentation of power, the crisis among the political parties, the influence of the by-partisan system in society and lobbying, favored the development in the society of other powers, such as the paramilitary groups. Among these opportunities stands out the decentralization process, that facilitated the expansion and the intensification of the paramilitary groups locally. The most visible consequences were the influence in the electoral processes, the increase in violence against political leaders, and the appropriation of goods and public resources. However, other conjunctural political opportunities favored the cooptation of the local power including among other things the division among the elites and the central government, the support of certain allies such as the landowners, ranchers, and rural businessman, and drug dealers. All these happened under the facilitating influence of the state including the forces of public order. Other opportunities that facilitated the development of the paramilitary groups were the processes of internal colonization, the complex geography of Colombia, and the monopoly of violence exerted by the State. In addition to these opportunities, since the creation of paramilitary groups, there were other favorable developments from the governments of Betancur to Alvaro Uribe such as the creation of the Convivir, Law 48 of 1968, the division among the elites, farmer unions in Cordoba and the weakening of the Medellin cartel, etc...

The widening of resources became part of strategy to finance their activities, investing in worthwhile business for the group. The paramilitary groups resorted to different financial sources, legal as well as illegal in order to achieve the financial strength necessary for the mobilization. The finance obtained by these groups was at least in part due to the support received from different sectors of the civil society and military establishment, which allowed these groups to get organized in a reticular network, with the headquarters located in the rural areas. From there they elaborated the necessary strategies to control locally and regionally the economic, military and political powers. At the same time they used the necessary logistic, human and tactic resources to become consolidated as an armed group.

Their actions were justified under part of their ideology and symbolic recreations. They elaborated a discourse to legitimize their actions in search of a new Colombia, a new social contract with the society with them being the keepers of peace. They dressed with the same uniform and used flags as their emblem.

One of the strategies of the paramilitary groups was to get involved in politics. To do this, they started coopting at the local level, subsequently escalating to the regional and national ones. They influenced the legislative elections of 1998/2002, 2002/2006 and 2006/2010, including the local and regional elections from 2000/2003, 2003/2007 and 2007/2011. They bribed candidates close to their ideals, enforced candidates in some elections, intimidated candidates to run for elections while at the same time they supported elections with only one candidate, and established close ties with some political parties. In this way they got to get together the politicians, making deals, business and imposing candidates in some institutions so they could still the moneys for the cause of the paramilitaries. They established a network of contacts in the political arena to control certain regions especially in Atlantic side of the country. This union was called para-politics, the relationship between politicians and paramilitary in Colombia that had its counterpart in the Farc-politics, being the connection between some politicians and the armed group FARC. Although it was a well-known fact in some regions, it was during 2006 when the first cases of parapolitics started to become apparent due to the disagreement between the regional and national elites.

In total, two hundred ninety three functionaries have been investigated due to their connections with these groups. Of them, nine have been acquitted, fifty seven were condemned, seventy seven are being investigated, sixty two are detained, thirty two have to go to court, and thirty four are awaiting sentence. The majority of these functionaries are from the departments of the north in Colombia, being the areas where the paramilitary had more influence. Therefore, there is a close relationship between a bigger territorial control and the number of implicated politicians. The relations of politicians with the paramilitary in its great majority consisted in allowing electoral support and benefiting from it. Almost 50% of the functionaries implicated had electoral support. And 35% of them at one time or another participated in the development of these paramilitary groups. Even 8% of them economically financed some paramilitary groups. 13% of the functionaries attended a meeting or signed some deals with the paramilitary. Almost 10% was accused of having participated in homicides carried out by these armed groups.

The electoral support received by the functionaries from the paramilitary was the most visible activity until now. Almost 50% of the people investigated had electoral benefits. Independently of whether they were in a process of demobilization they continue to favor some functionaries, especially in the legislative elections of 2006/2010. The pattern they followed was to carry out massacres and later exert influence in the elections by either imposing friendly functionaries, having only one candidate of their liking running for the election, or tampering the elections. In some areas of the country they created electoral districts for the legislative and local elections of 2002 and 2003, respectively. This means, they backed a couple of candidates for the senate and the camera which won in the municipalities that were preceded by a massacre. These regions were Antioquia, Cordoba, Magdalena, Cesar and The Guajira. In Magdalena we have the cases of senators Salomon Saade, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives and representatives Jorge Luis Caballero, Jose Gamarra and Alfonso Campo, and governor Trino Luna as only candidate. For the south of this region, the couple of candidates were Alfonso Campo for the camera and Luis Eduardo Vives for the senate. For the region of Cordoba the candidates for the elections of 2002 were Eleonora Pineda for the camera and Miguel Alfonso de Espriella for the senate. They repeated the pattern of electoral concentration in the municipalities of Valencia, Tierralta, San Antero and Pueblo Nuevo. In the region of Cesar we have Mauricio Pimiento Barrera, senator from the Movement Si Colombia, representative for the camera Jorge Enrique Ramirez from the "Liberal Colombiano" party and senator Alvaro Araujo from the "Movimiento Alternativo de Avanzada Social" (ALAS), and the representative for the camera Miguel Angel Duran. Alvaro Araujo is condemned to nine years in jail for tampering the results of the elections, supposed electoral fraud, support in the election campaign, collaboration with financing the paramilitary and kidnapping with aggravated extortion. In Antioquia the couple of candidates Rocio Arias representative and Carlos Arturo Clavija, senator for the "Movimiento Convergencia Popular Civica", won. Another couple of candidates from the same region, were representative Manuel Dario Avila Peralta and senator Ruben Dario Quintero both from the Movimiento Cambio Radical, also won the election in the Uraba Antioqueño. Regardless of the conformation of these electoral districts, it is important to remember that for the elections of 2006/2010, 54% of the senators and 64% of the representatives were accused of receiving election support due to their connections with the paramilitary groups. Besides these figures, it is important to point out that this was not a phenomenon that involved only the political class, but one that also influenced other sectors of the Colombian society, even assuming many of the functions of the state. Therefore, according to their actions it is better to call them para-state.

Continuing with the main subject, there are different types of structures inside the paramilitaries. Among them the more representative and different among them were selected. One that prevails is the empire created by Jorge 40 in the Atlantic coast, the narcoparamilitarisms of Mr. Berna in Medellín, the "Bloque Central Bolívar", the "Autodefensas Campesinas" of Ortega and the ACCU and AUC of the Castaño brothers. From case studies we can observe a difference among the paramilitary groups, according to the context in which they operate their objectives, and the social structure in which they are integrated. In addition, the evolution of each group can be observed. Among them we study the paramilitary group Jorge 40, chief of "Bloque Norte". Jorge 40, created around him a whole empire based on the client network of the Atlantic coast. From auto defense he became a "cacique". To consolidate his power in the Atlantic coast, he carried out several massacres, to subsequently start bribing politicians in order to get financial support. In this way he was able to control the resources of municipalities, hospitals, stores, etc... This group influenced in the legislative elections of 2002, and in the local and regional elections of 2003. From its evolution it also influenced the legislative elections of 2006, meeting in several occasions with politicians in order to create a new social contract, such as were the meetings of Ralito, Chivolo o Pivijay. In this exerted control at the local, regional and national levels. A case apart is the one of Medellín. City characterized by the violence, criminality from different armed groups, drug-traffickers, etc. In this city a conflict was developed from two different ways of understanding the concept of paramilitarisms-self-defense. From one side, the "Bloque Metro" led by Doble Cero was more contrainsurgent, autodefense, having carried out several social cleaning; however, not allowing drug-traffickers to influence their organization. On the other side was Bloque Cacique Nutibara, directed by Don Berna, widely known as a paramilitary, drug-traffickers, or narcoparamilitar, that imposed his will on bands, groups and militia in Medellín. He expanded his power over the metropolitan area of Medellín, where he provided electoral support to several candidates, which subsequently have been investigated for doing parapolitics. However, his political influence was less than the one exerted by Jorge 40. The Bloque Central Bolívar, was born as self-defense, to combat the abuses of the guerilla in the department of Bolívar, evolving to a paramilitary group expanding its influence in Norte of Santander, Arauca, Boyacá, Santander, Caldas, Antioquia, and Nariño. Its main strategy was to create a political party, Convergencia Ciudadana to present their own candidates, more than continue with old cacique alliances. It also influenced in candidates from other political parties different than Convergencia. This group is very different in comparison with the Self-defenses Campesinas del Ortega. This group was born as pure self-defense, in the sense of fighting against the guerrilla, specifically against the FARC

and ELN. They neither have contact with narcotraffic nor influenced the politicians to obtain to obtain personal benefit. They barely had contact with the AUC, however, not under these initials. The last case of paramilitary groups to be studied was the ACCU/AUC from the Castaño brothers. From self-defenses they changed to paramilitary having a big influence in drug trafficking specially during the leadership of Mancuso. Both, the Convivir and the influence of general Alejo Rito del Rio, during the time of Governor Alvaro Uribe, were essential for the development of the ACCU and posterior evolution into AUC. The Castaño brothers started to lead the resentment of big ranchers and farmers of the region from the social unrest in Cordoba and the tension generated by the guerrilla. With the help of battalion XI, the structures of ACCU were consolidated in Cordoba, to posteriorly expand this project to other regions, using the name of Autodefensas Unidas de Colombia. With the creation of the AUC in 1997 two different approaches were implemented. From one side the objective of Carlos Castaño was to be focused in the guerrilla. The second approach led by Mancuso was concentrated in establishing connection and deals with the politicians, in order to gain political influence in the regions, legitimize their support at National level and subsequently obtain economic benefit from these connections. Moreover, since the election for mayors of 2000, they started to gain influence in local authorities, with the regional elites, the University -such as the University of Cordoba-, organizing meetings and infiltrating in the Congress and Senate. They started to influence the sons of the old electoral “barons” with promises of electoral improvements through pacts with the paramilitary, such as the pact of “Ralito” and the pact of “Granada”. This is the way they started to become a major player and influence in determinate areas from the political, social, economic, judicial and military point of view.

The approach to the paramilitary phenomena from social politics has permitted to review different aspects of the paramilitary groups, such as how they got organized, which opportunities they had to consolidate, develop and mobilize. Including, when they became established as a mayor player and how they manage to divulgate their ideas to others. In this analysis it was also studied the so called para-politics, to determine the degree of infiltration of the paramilitary in the political institutions, without forgetting the connections with the military forces, business class, drug traffickers, ranchers, and national and international agencies such as the DAS, DEA and CIA. This is, they created a big network with different sectors of society, created a para-state which continues after the demobilization process of 2003. From the different case studies it can be seen the different actions and developments of the paramilitary groups, in different social contexts and its relationship with the political class. Recently, news keep surfacing about the

investigation of certain public figures related to the paramilitary, such army general Mauricio Santoyo. The contemporaneity of this study means –among other things- that it is supported by the latest investigations, to the point that can affect the direction of the own investigation and in this way determine the extent of this phenomena. Especially for determining the extend and influence in the Colombian political class.

An interesting issue to be investigated would be to compare the demobilization process of the different paramilitary groups with the current demobilization process for the FARC that will start in October 2012. Investigating the treatment they are going to receive, their networks, incorporation into civil society, etc. to determine if they really get to demobilize. Likewise, the current process of the victims with the new law can become a future investigation of the consequences of the demobilization process for this collective that used in the beginning to be isolated and lately has been little by little has been empowering.

To finish, it is difficult to asseverate something about the internal armed conflict that affects Colombia. If we consider that the conflict is a cycle of armed conflict, then the dynamics of the own cycle facilitates to become a prolong conflict; which while it is apparently diverted with demobilizations, it continues to move, generating other forces, such as the arm bands of the paramilitary groups which continue to fuel the conflict, as if it were a continuously moving wheel.

Bibliography

Álvaro, M. (2007): “La Parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política colombiana”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Número 7 - 2007, 15 de mayo de 2007, Ed. L'Ecole des Hautes Etudes en Ciencias Sociales ISSN 1626 0252. Disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/document4636.html>

González, Fernán; Bolívar, Ingrid J. y Vásquez, Teófilo (2003): *Violencia política en Colombia. De la Nación fragmentada a la construcción del Estado*, CINEP, Bogotá.

Kalyvas, S.; Arjona, A. (2005): “Una perspectiva teórica”, en Rangel, A., *El poder paramilitar*, Ed. Planeta, Bogotá.

Koopmans, Ruud, (2003): “A faille revolution but a worthy cause”, *Mobilization*, Vol. 8, n° 1, febrero 2003, San Diego State University.

López, Claudia (2010): *Y refundaron la patria. De cómo mafioso y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Corporación Nuevo Arco Iris, Congreso Visible, Dejusticia, Grupo Método, MOE. Ed. Debate, Bogotá.

Rangel, Alfredo (2005): *El poder paramilitar*, Ed. Planeta, Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá.

Romero, Mauricio (2007): *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, CEREC. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.

Romero, Mauricio (2003): *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*, IEPRI, Bogotá.

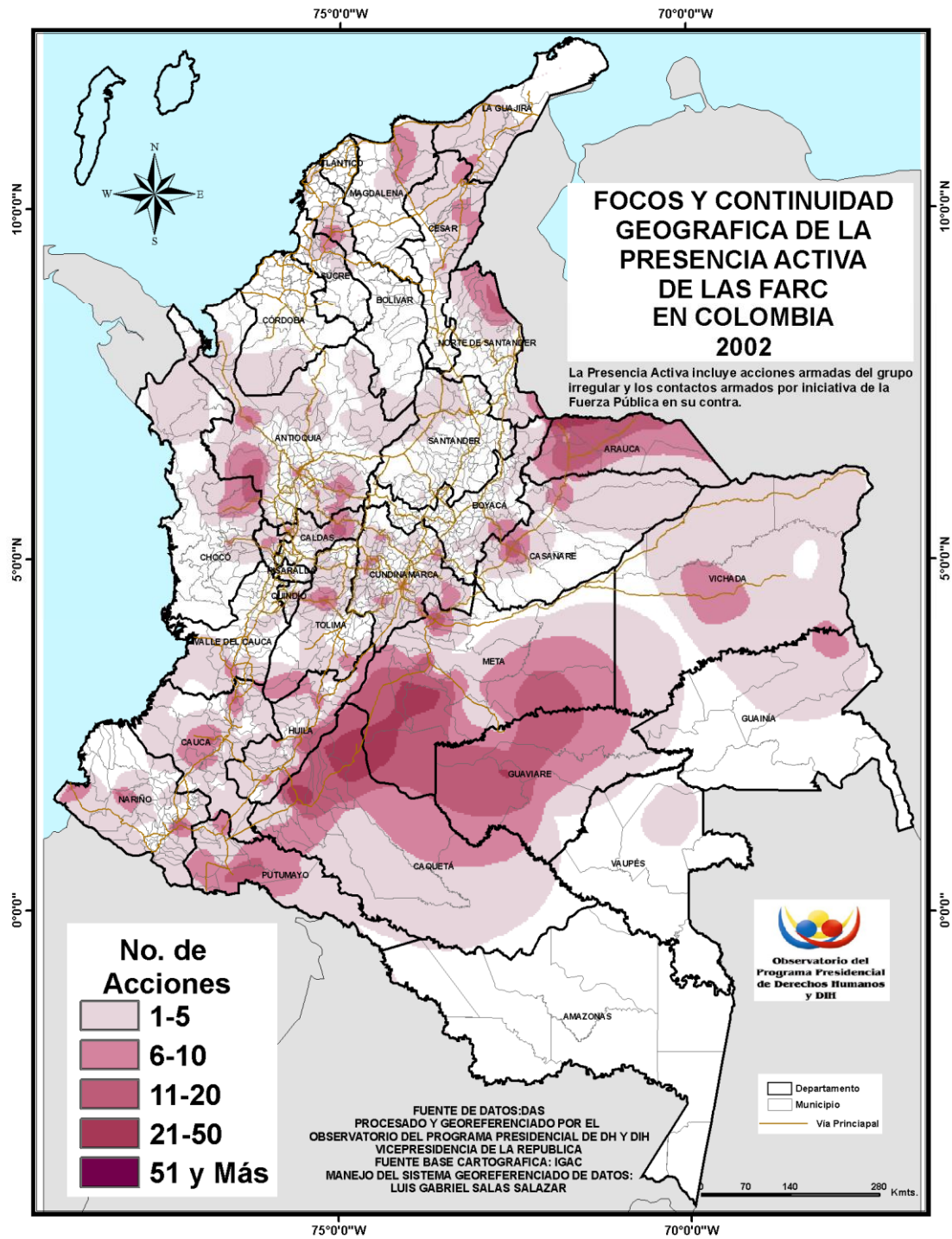
Tarrow, Sidney (1998): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza Universidad, Madrid.

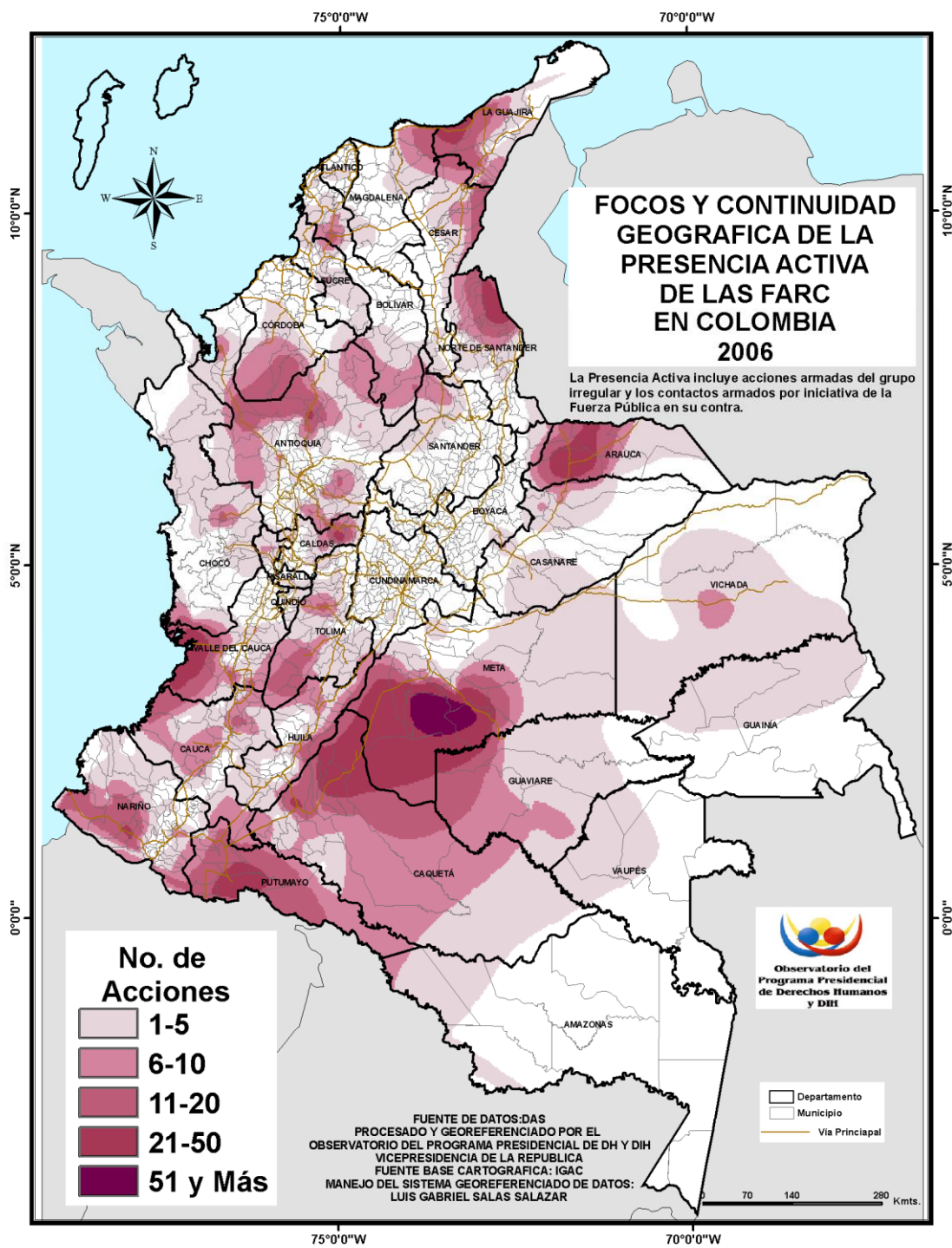
Tilly, Charles (2007): *Violencia colectiva*, Ed. Hacer, Barcelona.

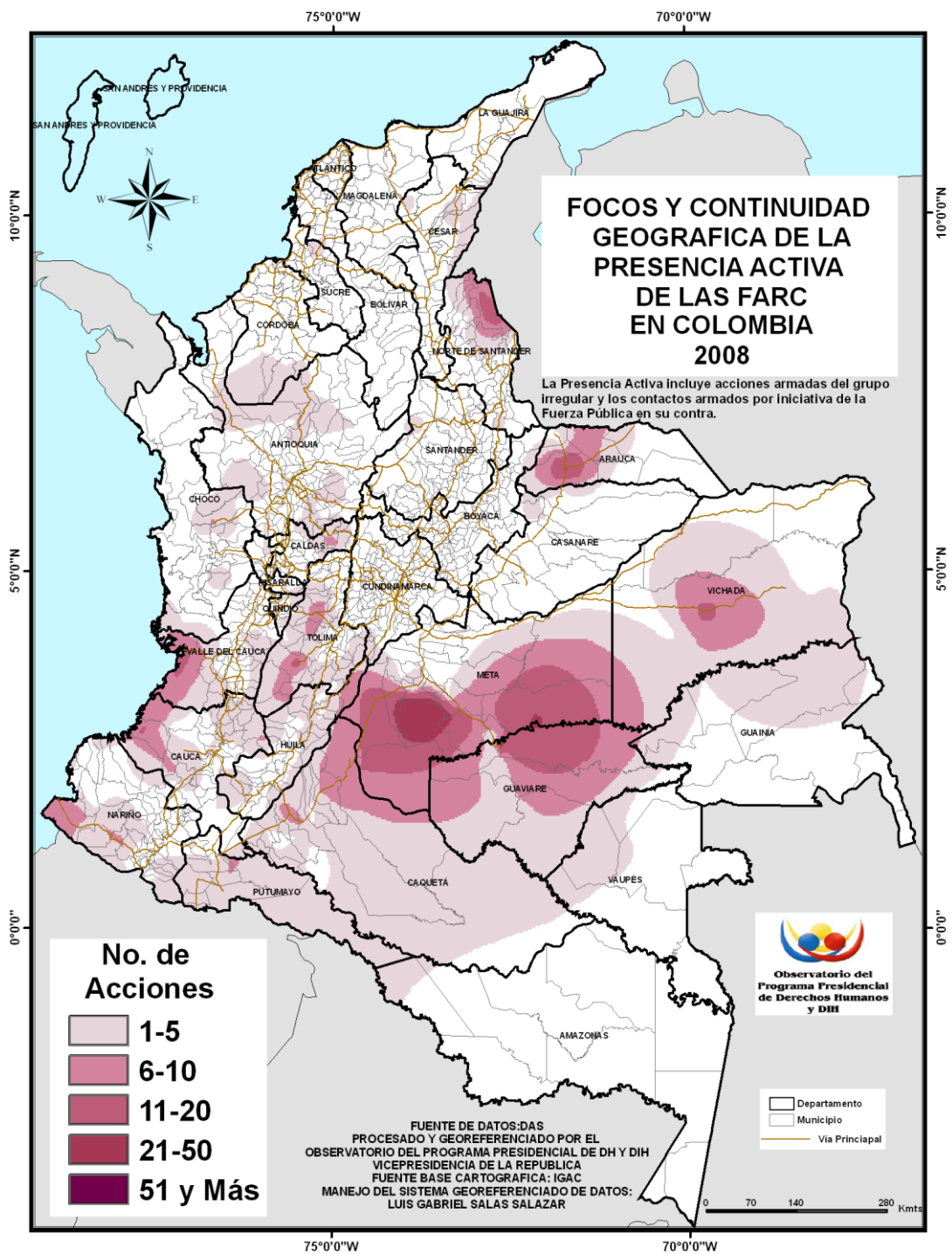
Tokatlian, Juan Gabriel (2009): *La guerra contra las drogas en el mundo andino: Hacia un cambio de paradigma*, Editorial del Zorzal, Buenos Aires.

Anexos

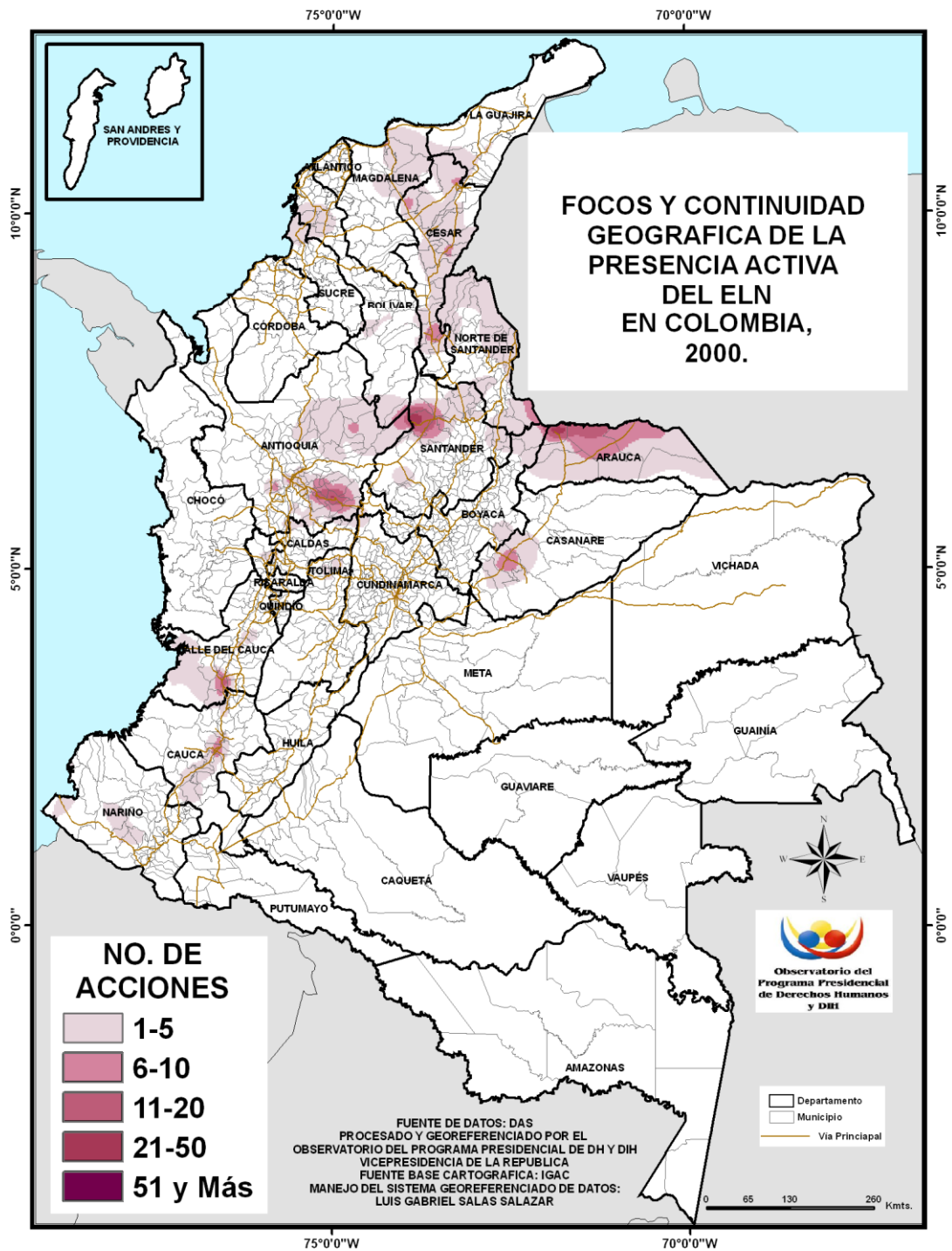
Anexo 1. Evolución de las FARC en el territorio colombiano

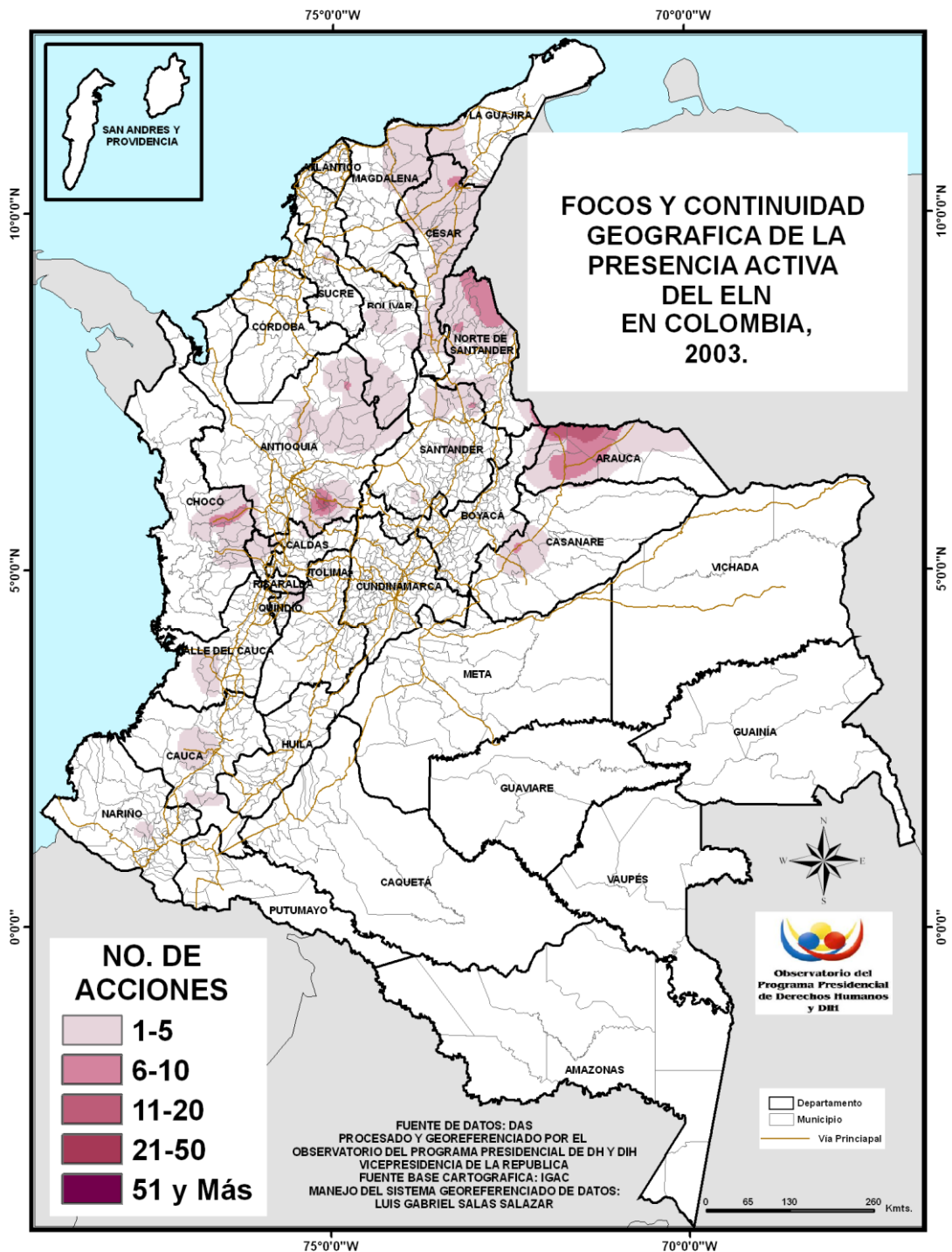






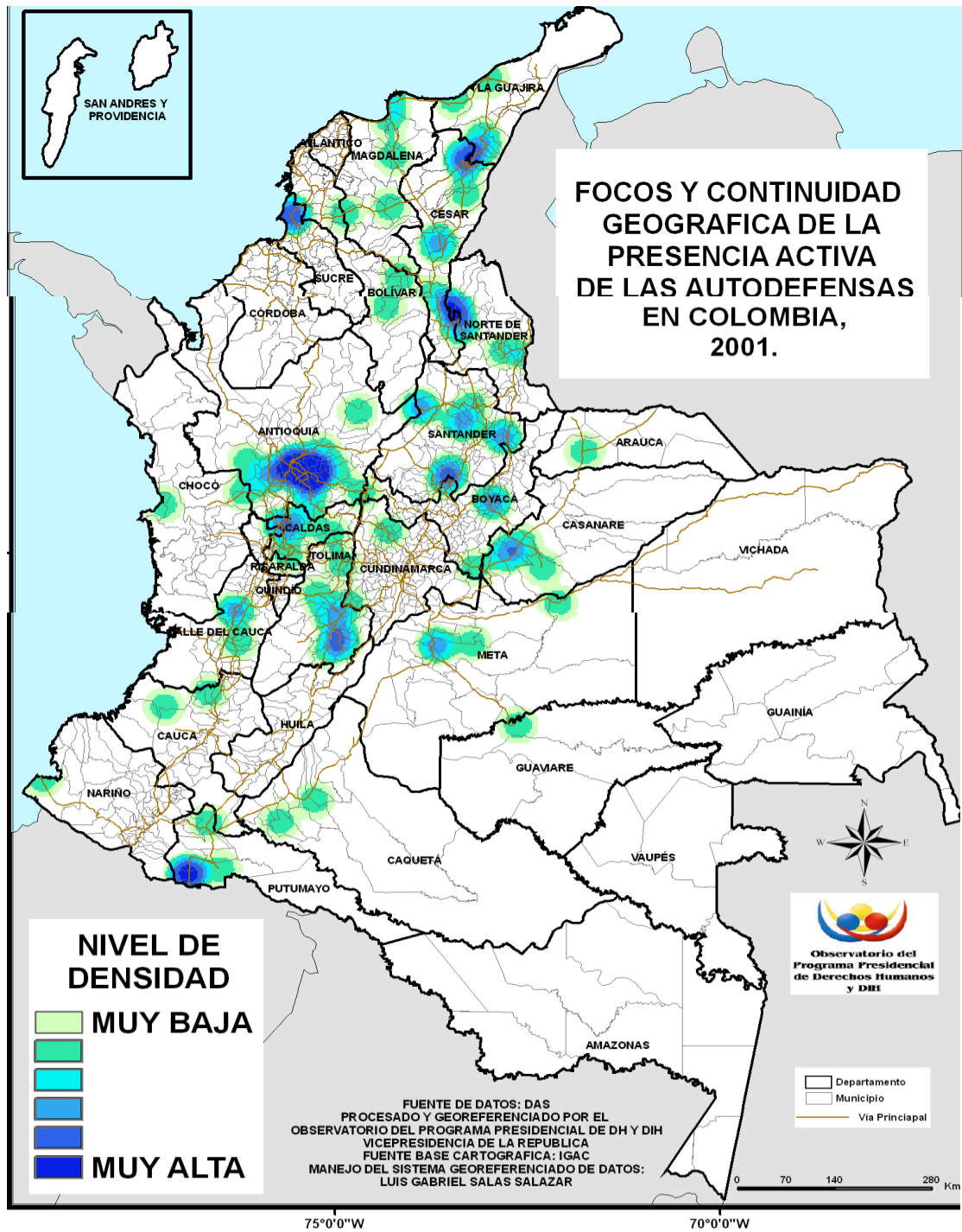
Anexo 2. Evolución del ELN en el territorio colombiano

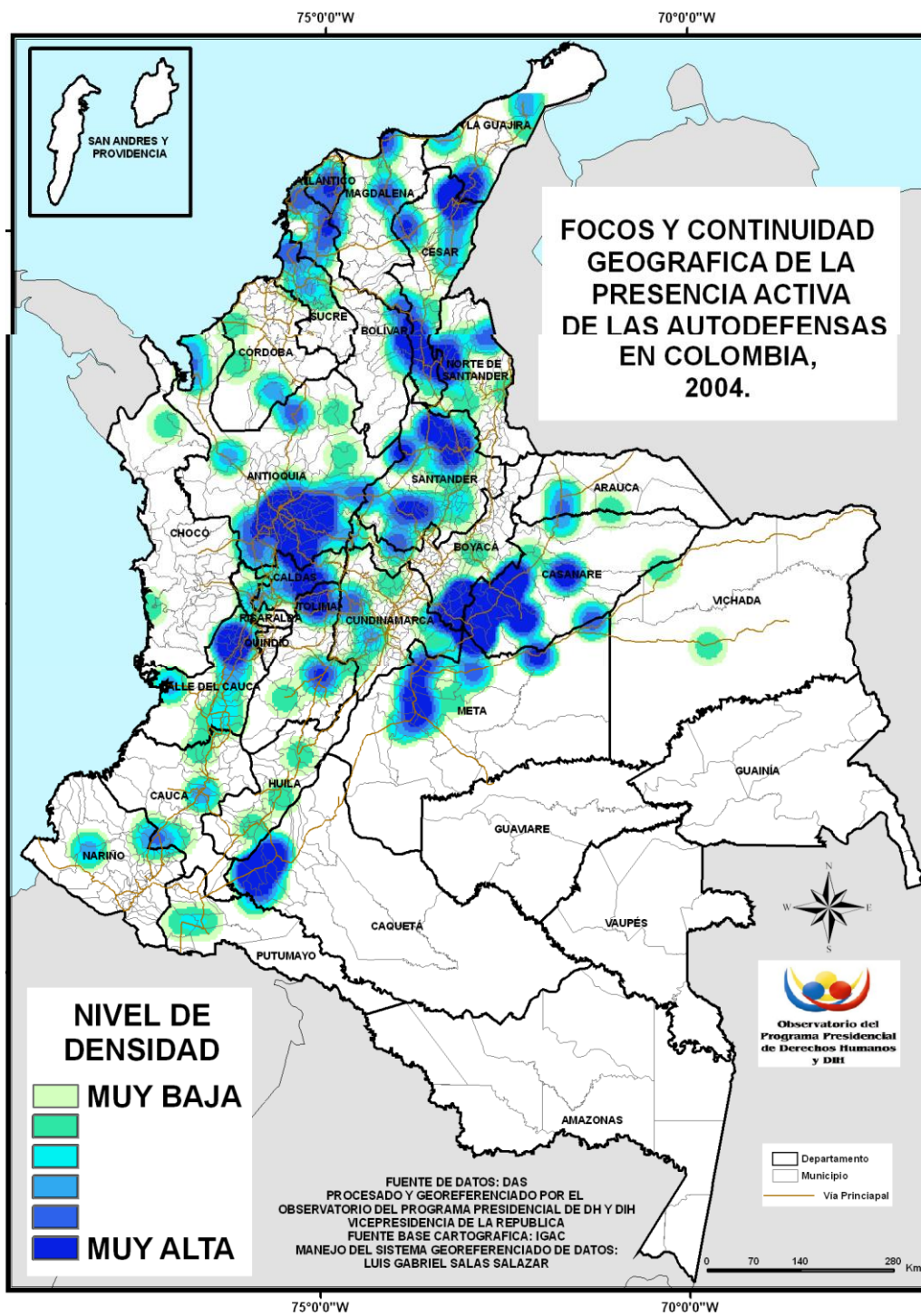


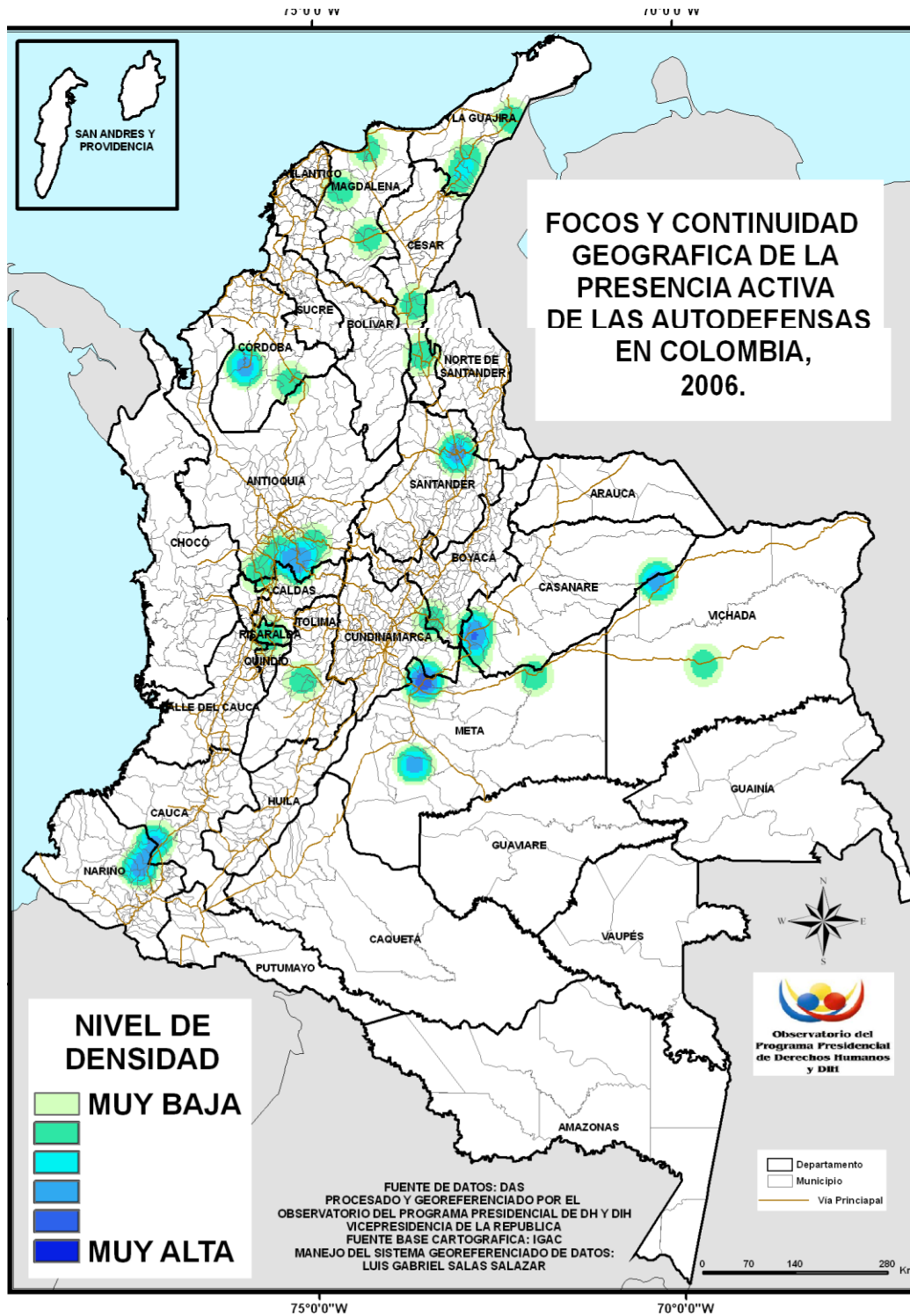




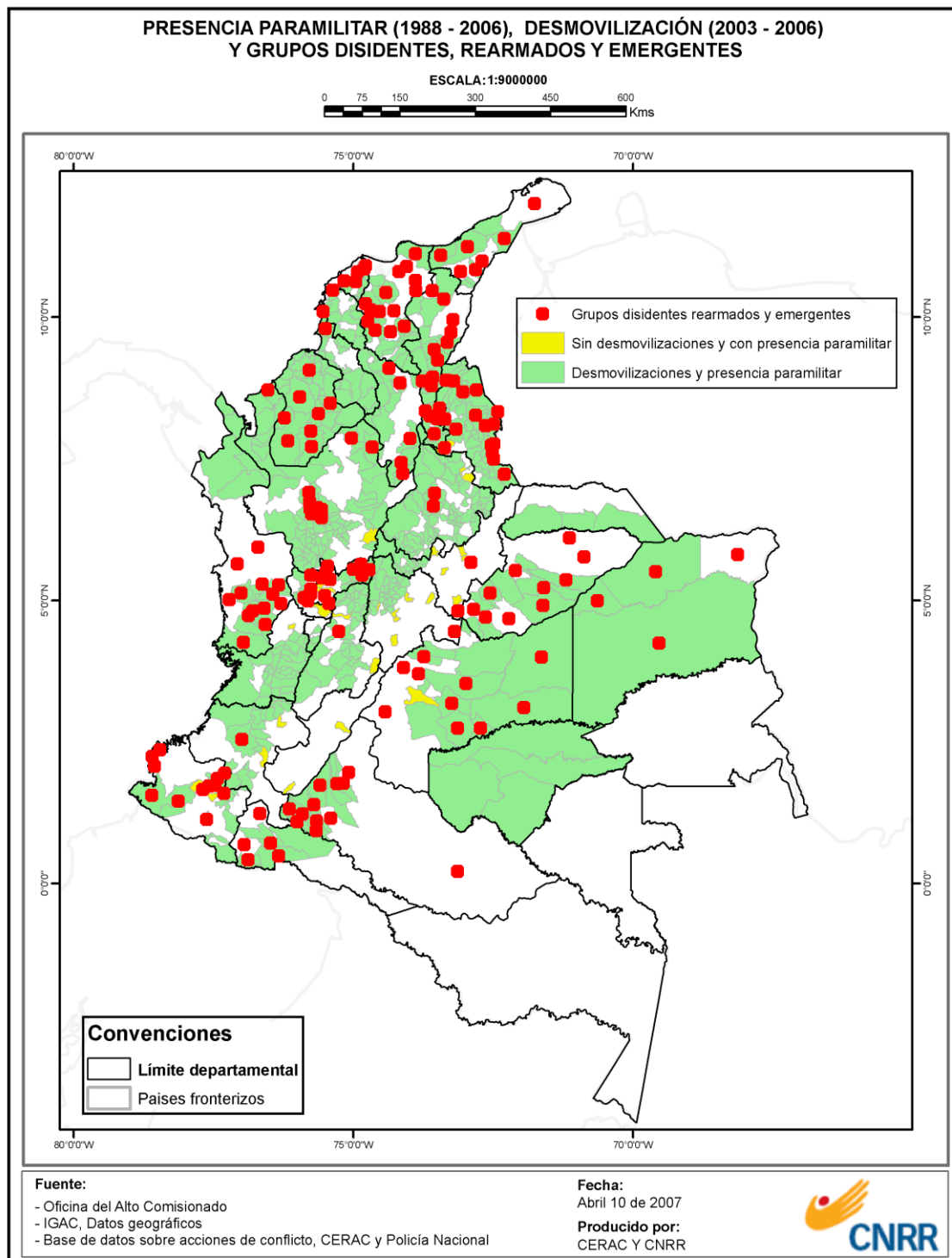
Anexo 3. Evolución de los grupos paramilitares en el territorio colombiano







Anexo 4. Distribución de los grupos paramilitares, desmovilizados y Bacrim (disidentes, rearmados y emergentes) en el territorio colombiano



LISTADOS

LISTADO 1. MILITARES DEL EJÉRCITO COLOMBIANO EN INVESTIGACIÓN POR NEXOS CON GRUPOS PARAMILITARES

N o	TITULAR DE LA NOTICIA	MEDIO	FECHA	NOMBRE DE LOS IMPLICAD OS	NOMBRA DO POR	MENCION	SITUACIÓN
1	Corte Suprema confirmó condena contra oficial del Ejército por vínculos 'paras'	www.elspectador.com	26/04/2007	Álvaro Cortes Murillo, Mayor del Ejército	Procuraduría	Cortés Murillo fue sentenciado por el delito de concierto para delinquir, luego de que se comprobara, según la Procuraduría General, su activa colaboración con miembros de las Autodefensas que actuaban en ese departamento, cuando el oficial se desempeñaba, primero, como jefe de operaciones del grupo de caballería Mecanizado Juan del Corral y luego como comandante del Batallón Macheteros del Cauca, entre 1990 y 2000.	La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena impuesta al mayor del Ejército Nacional Álvaro Cortes Murillo de 11 años de prisión como coautor del delito de concierto para delinquir, por su activa colaboración y apoyo a paramilitares que actuaban en el oriente de Antioquia.

2	<p>1.De autorizar Convivir a dos jefes 'paras' acusó senador Gustavo Petro a Álvaro Uribe</p> <p>2. Aquel 1997, año en que el paramilitar Salvatore Mancuso entró a una brigada militar</p> <p>3,Un vistazo a los años en los que el paramilitarismo inundó de sangre a Antioquia</p> <p>4, 'El paramilitarismo es una política de Estado', dice Mancuso en su versión libre</p> <p>5, Mancuso dice que los</p>	<p>www.semana.com, www.eltiempo.com</p>	<p>18/04/2007, 01/07/2007, 27/01/2007, 15/05/2007, 16/05/2007</p>	<p>Rito Alejo del Rio, se desempeñó como comandante de la Brigada XVII desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997</p>	<p>Gustavo Petro</p>	<p>En la conflictiva región de Urabá, el responsable militar era el general Rito Alejo del Río, que posteriormente también fue señalado tanto nacional como internacionalmente de claro violador de los derechos humanos.</p>	<p>El general está detenido sindicado del asesinato de Marino López, dentro de una operación ordenada por él. Pero un año después de la acusación no ha sido llevado a audiencia, por lo cual la justicia tendrá que liberarlo. Por vencimiento de términos, el general rito alejo del rio, quedaría libre, acusado por el crimen del afro descendiente, Marino López, ocurrido el 27 de febrero de 1997, en Cacarica, Chocó. Ha sido señalado de ser presuntamente uno de los apoyos más importantes del paramilitarismo en la región de Urabá desde la comandancia de la Brigada XVII del Ejército entre los años 1995 y 1997, algo que el exmilitar ha negado insistentemente</p>
---	---	---	---	--	----------------------	---	--

	generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo						
3	De autorizar Convivir a dos jefes 'paras' acusó senador Gustavo Petro a Álvaro Uribe	www.eltiempo.com	18/04/2007	Alfonso Plazas, Coronel en retiro	Gustavo Petro	También mencionó supuestas reuniones de Del Río, el coronel retirado Alfonso Plazas y gente de las Auc.	30 años de prisión por la desaparición de 11 personas durante el asalto al Palacio de Justicia. El 9 de junio del 2010, Plazas fue condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada por la Juez Tercera Especializada de Bogotá, María Stella Jara quien lo encontró culpable por la desaparición de los empleados de la cafetería del palacio y de la

							guerrillera Irma Franco, quienes salieron vivos del palacio y poco después desaparecieron luego de ser llevados hacia la Casa del Florero
4	1. Mancuso confiesa crímenes 2. Salvatore Mancuso involucró a un General del Ejército en masacre de El Aro 3. 'El paramilitarismo es una política de Estado', dice Mancuso en su versión libre	www.cmi.com.co , www.semana.com , www.eltiempo.com	15/01/2007, 02/01/2007, 15/05/2007	Alfonso Monsalva, General de la IV Brigada	Carlos Iván Lopera Director de Redepaz	Según Lopera, Mancuso dijo que un año antes de la masacre del Aro coordinaron directamente los detalles de la operación con el comandante de la cuarta brigada de aquel entonces, General Alfonso Monsalva. En versión libre cuando habló de las masacres de El Aro (Antioquia) y Mapiripán (Meta) en las que murieron casi 70 personas, de acuerdo con el ex para, facilitó información para que Carlos Castaño ejecutara el múltiple homicidio. Mancuso, que ha prometido contar toda la verdad, también reveló que sus hombres patrullaron con el general Martín Orlando Carreño y que a través de un general del B-11, al que identificó como Iván Ramírez, conoció al también general Alfonso Monsalva (fallecido) con quien se reunió al menos diez veces.	Fiscalía le acusa el 20 de febrero de 2006 de de homicidio y conspiración criminal en los asesinatos de Wilman Guillermo, Arriaga Arboleda y Jefferson Moreno López en julio de 2005 en Condoto, Chocó. Muerto en 2007
5	Alcalde pide explicaciones a general	www.cmi.com.co	18/04/2007	Daniel Castiblanco, Director de la Policía de Bogotá	Gustavo Petro	Gustavo Petro dijo que el General Daniel Ernesto Castiblanco, actual comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se reunía con Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Víctor Carranza, Ramón Isaza y alias 'Ariel Otero'.	Sin investigar

6	La fuerza para-pública	www.semana.com	19/11/2006	Miembros de la Policía y Ejército Nacional (por encontrarse en etapa de investigación, no se revelan nombres)	Fiscalía	En Barranquilla y Soledad, principalmente, la nómina mensual por sobornos pagados por los paramilitares a policías y miembros del Ejército estaba entre 32 y 40 millones de pesos. "Policía Soledad 700.000", "teléfono coordinación B2 (inteligencia Ejército) 200.000, "Gaula Ejercol (Ejército) 250.000". Pero si bien algunos policías ejercían labores de sicariato para las autodefensas, otros miembros del Ejército también hacían las mismas actividades, aunque, de acuerdo con los propios documentos de los paras, la principal ayuda que recibían era la de alertarlos sobre operaciones que la Fuerza Pública en contra de las autodefensas. SEMANA se abstiene de publicar los nombres de los uniformados por ser una investigación en desarrollo.	Investigados
7	Quién está detrás de los asesinatos de hombres de confianza de Salvatore Mancuso?	www.semana.com	2/01/2007	Jairo Andrés Angarita, exoficial de la Fuerza Aérea Colombiana, excontratista del Ejército y de la Policía	Fuentes Oficiales de investigación	Angarita sabía también muchos secretos de la política regional al extremo que hace unas semanas afirmó que el gabinete del gobernador López Cbrales fue negociado en el nudo de Paramillo con Salvatore Mancuso. Entre la información que tenía Angarita está, por ejemplo, los datos de las reuniones de los políticos con los 'paras'.	Asesinado en diciembre 2006
10	Pacto con el diablo	www.semana.com	26/01/2007	Faruk Yanine Díaz, General del Ejército Nacional	Salvatore Mancuso	Los militares que mencionó Mancuso son sólo la punta del iceberg. Desde el nacimiento del paramilitarismo en el Magdalena Medio en los 80, durante su crecimiento en los 90 y su consolidación en 2000	La Fiscalía llamó el jueves mayo 2008 a indagatoria al general retirado Faruk Yanine Díaz dentro del proceso de investigación por la masacre de la Rochela, ocurrida en enero de 1989. Fallecido en agosto 2009

11	1. Pacto con el diablo 2. Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo	www.semana.com	26/01/2007, 16/05/2007	Iván Ramírez, General del Ejército Nacional. Comandante de la XI Brigada en Montería y luego llegó a ser jefe de inteligencia del Ejército.	Salvatore Mancuso	Los militares que mencionó Mancuso son sólo la punta del iceberg. Desde el nacimiento del paramilitarismo en el Magdalena Medio en los 80, durante su crecimiento en los 90 y su consolidación en 2000. Mancuso, que ha prometido contar toda la verdad, también reveló que sus hombres patrullaron con el general Martín Orlando Carreño y que a través de un general del B-11, al que identificó como Iván Ramírez, conoció al también general Alfonso Mansalva (fallecido) con quien se reunió al menos diez veces. Mancuso dijo que en la medida que el proceso fue adquiriendo una dinámica mayor tuvo que pasar a las acciones. Entonces habló de tres reuniones con los generales del Ejército Iván Ramírez Quintero y con Rito Alejo del Río, en las que se planeó la expansión paramilitar por el norte de Colombia.	Está vinculado a las investigaciones por la desaparición de 11 civiles en el holocausto del Palacio de Justicia
12	Oscuridad en la mina	www.semana.com	26/03/2007	Luis Carlos Rodríguez, Coronel retirado del Ejército. Oficial del batallón La Popa, encargado de la protección de las minas de carbón	Fiscalía	En una declaración juramentada un ex empleado dijo algo similar. "Luis Carlos Rodríguez me dijo que él tenía una relación cercana con los grupos paramilitares en la región y que se mantenía en contacto frecuente con ellos. Según la Fiscalía un grupo de personalidades del Cesar, conformado con apoyo de un sector del Ejército y conocido como "guardianes de la Sierra", había contratado escuadrones de sicarios para asesinar a personas que consideraban aliadas de las Farc y el Eln.	Sin investigar

13	<p>1. Oscuridad en la mina</p> <p>2. Un vistazo a los años en los que el paramilitarismo inundó de sangre a Antioquia</p>	www.semana.com	<p>26/03/2007,</p> <p>27/01/2007</p>	<p>Hernán Mejía, Oficial del Batallón La Popa, encargado de la protección de las minas de carbón</p>	Fiscalía	<p>Su declaración, que se encuentra en el expediente contra Drummond en Estados Unidos, coincide con la reciente decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria a un excomandante de ese batallón, el coronel Hernán Mejía, por vínculos estrechos con las autodefensas al mando de 'Jorge 40' en Cesar. "En todas las unidades a las que era enviado, Mejía aumentaba dramáticamente los resultados operacionales. El problema es que para conseguir esas bajas a Mejía no le importaba si tenía que aliarse con el diablo", le dijo a SEMANA un oficial del Ejército. De 2000 a 2002, Drummond fue blanco de decenas de ataques de la guerrilla. Había frecuentes atentados al tren que transporta el carbón a la Costa Atlántica para su exportación e incluso la empresa alcanzó a amenazar con irse del país. El gobierno reaccionó y creó grupos militares especiales para proteger la vía férrea. Con la llegada del presidente Álvaro Uribe, dice la empresa, hubo un cambio de actitud del Ejército que empezó a patrullar. Para Drummond, este compromiso de la Fuerza Pública explica la gran mejoría en seguridad, lo que ha permitido invertir más de "mil millones de dólares en los últimos años".</p>	<p>Detenido por sus presuntos nexos con paramilitares de 'Jorge 40' en marzo 2009</p>
----	---	--	--------------------------------------	--	----------	--	---

14	Nunca he tenido tratos con paramilitares ”	www.semana.com	26/03/2007	Mario Montoya, Comandante del Ejército Nacional	Periódico Los Ángeles Times	La acusación es muy fuerte: “... Montoya y los grupos paramilitares planearon y condujeron conjuntamente una operación militar en 2002 para eliminar a las guerrillas marxistas de las áreas más pobres de Medellín, una ciudad al noroeste de Colombia que en una época fue el epicentro del narcotráfico”. Y fue publicada este domingo en el diario estadounidense ‘Los Ángeles Times’. La fuente es un informe de una agencia aliada de la CIA que habla sobre los supuestos nexos que en el pasado tuvo el general Mario Montoya, actual comandante del Ejército, con las AUC.	Tres coroneles acusaron al excomandante del Ejército Nacional y actual embajador de Colombia en República Dominicana, general retirado Mario Montoya Uribe como supuesto determinador de la masacre de 8 personas, entre ellos 3 menores, en San José de Apartadó, Antioquia, ocurrida el 21 de febrero de 2005. Entre los acusados figuran los subtenientes Jorge Humberto Milanés Vega, Édgar García Estupiñán y Alejandro Jaramillo Giraldo, los sargentos segundos Ángel María Padilla Petro, Henry Guasmayán Ortega, Darío José Brango Agamez y Óscar Jaime González y los cabos Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, Héctor Londoño Ramírez, Luis Gutiérrez Echeverría, Jesús David Cardona Casas, Yuber Carranza Rodríguez, Ramón Mican Guativa y José Carmona
----	--	--	------------	---	-----------------------------	---	--

16	Un vistazo a los años en los que el paramilitarismo inundó de sangre a Antioquia	www.semana.com	27/01/2007	David Hernández, Mayor de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional	Ramón Isaza	En efecto, antes de desmovilizarse, Ramón Isaza declaró ante la prensa que el responsable del hecho fue su hijo, Omar Isaza, pero que las órdenes las dieron el general Monsalva y el mayor David Hernández, también de la Cuarta Brigada. Con ese mismo general y ese mismo año se preparó también la masacre de El Aro, en Ituango, según lo declaró recientemente Salvatore Mancuso. Pero Monsalva no alcanzó a saber del desenlace de su plan porque murió el 16 de abril de 1997 como consecuencia de un aneurisma.	27 personas asesinadas y desaparecidas en la vereda La Esperanza, en Carmen de Viboral, Antioquia. Está muerto
18	Petro dice que en finca 'Las Guacharacas', de propiedad del Presidente Álvaro Uribe, los 'paras' asesinaron campesinos	www.semana.com	17/04/2007	Gabriel Díaz, Coronel	Gustavo Petro	Aseguró que el general Daniel Castiblanco, actual comandante de la Policía, estaba comprometido con el crecimiento de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, así como el coronel Gabriel Ramón Díaz	Sin investigar
23	1. 'El paramilitarismo es una política de Estado', dice Mancuso en su versión libre 2. Mancuso dice que los generales Rito Alejo	www.eltiempo.com , www.semana.com	15/05/2007, 16/05/2007	Martin Orlando Carreño, General	Salvatore Mancuso	Mancuso, que ha prometido contar toda la verdad, también reveló que sus hombres patrullaron con el general Martín Orlando Carreño y que a través de un general del B-11, al que identificó como Iván Ramírez, conoció al también general Alfonso Monsalva (fallecido) con quien se reunió al menos diez veces.	Muerto

	del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo						
26	Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo	www.semana.com	16/05/2007	Harold Bedoya, General en retiro del Ejército. Comandante General de la segunda división del Ejército en 1993, con sede en Bucaramanga	Salvatore Mancuso	Comenzó a explicar cómo desde la década de los 60 y hasta los 90 todos los manuales de contraguerrilla del Ejército Nacional justificaban e invocaban el pensamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así relató, cronológicamente, los nombres de estos comandantes del Ejército que este tiempo propugnaron las AUC. Mancuso suministró detalles inéditos. Después de entregar una documentación ante el Fiscal delegado de Justicia y Paz –incluyendo su carné que lo acreditaba como boy scout cuando era niño–, comenzó con una frase contundente y que tal vez podría resumir lo dicho durante la mañana: “Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia”..	Sin investigar
27	Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a	www.semana.com	16/05/2007	Luis Carlos Camacho Leyva, Comandante del Ejército	Salvatore Mancuso	Comenzó a explicar cómo desde la década de los 60 y hasta los 90 todos los manuales de contraguerrilla del Ejército Nacional justificaban e invocaban el pensamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así relató, cronológicamente, los nombres de estos comandantes del Ejército que este tiempo propugnaron las AUC. Mancuso suministró detalles inéditos. Después de entregar una	Sin investigar

	expandir el paramilitarismo					documentación ante el Fiscal delegado de Justicia y Paz –incluyendo su carné que lo acreditaba como boy scout cuando era niño–, comenzó con una frase contundente y que tal vez podría resumir lo dicho durante la mañana: “Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia”.	
28	Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo	www.semana.com	16/05/2007	Orlando Zafra, Comandante del Ejército	Salvatore Mancuso	Comenzó a explicar cómo desde la década de los 60 y hasta los 90 todos los manuales de contraguerrilla del Ejército Nacional justificaban e invocaban el pensamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así relató, cronológicamente, los nombres de estos comandantes del Ejército que este tiempo propugnaron las AUC. Mancuso suministró detalles inéditos. Después de entregar una documentación ante el Fiscal delegado de Justicia y Paz –incluyendo su carné que lo acreditaba como boy scout cuando era niño–, comenzó con una frase contundente y que tal vez podría resumir lo dicho durante la mañana: “Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia”.	Sin investigar
29	Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo	www.semana.com	16/05/2007	Fernando Landazábal, Exministro de Defensa y Comandante del Ejército	Salvatore Mancuso	Comenzó a explicar cómo desde la década de los 60 y hasta los 90 todos los manuales de contraguerrilla del Ejército Nacional justificaban e invocaban el pensamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así relató, cronológicamente, los nombres de estos comandantes del Ejército que este tiempo propugnaron las AUC. Mancuso suministró detalles inéditos. Después de entregar una documentación ante el Fiscal delegado de Justicia y Paz –incluyendo su carné que lo acreditaba como boy scout cuando era niño–,	Sin investigar

						comenzó con una frase contundente y que tal vez podría resumir lo dicho durante la mañana: “Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia”.	
30	Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo	www.semana.com	16/05/2007	Luis Arcesio Bohórquez, Comandante del Ejército	Salvatore Mancuso	Comenzó a explicar cómo desde la década de los 60 y hasta los 90 todos los manuales de contraguerrilla del Ejército Nacional justificaban e invocaban el pensamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así relató, cronológicamente, los nombres de estos comandantes del Ejército que este tiempo propugnaron las AUC. Mancuso suministró detalles inéditos. Después de entregar una documentación ante el Fiscal delegado de Justicia y Paz –incluyendo su carné que lo acreditaba como boy scout cuando era niño–, comenzó con una frase contundente y que tal vez podría resumir lo dicho durante la mañana: “Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia”.	Sin investigar
35	A cuatro generales y a la cúpula del Gobierno señaló Salvatore Mancuso en su versión libre	www.eltiempo.com	16/05/2007	Rosso José Serrano, Exdirector de la Policía Nacional y actual Embajador de Austria	Salvatore Mancuso	Según Mancuso, el oficial intervino para que él y 'Jorge 40' fueran liberados de una cárcel de La Guajira. Aseguró que Serrano envió al coronel Danilo González para que los ayudara, tras una conversación con 'Don Berna', a quien ellos habían llamado para que hiciera el contacto.	Sin investigar

LISTADO 2. SENADORES IMPLICADOS EN EL PROCESO DE PARAPOLÍTICA

No	DEPARTAMENTO	AÑOS	NOMBRE	CONDENA	PARTIDO POLITICO	ESTADO JUDICIAL	NUEVO PROCESO
1	Antioquia	2006/2010	Antonio Valencia	Presunta conformación de grupos paramilitares	Alas Equipo Colombia	Condenado a 45 meses de prisión.	
2	Antioquia	2006/2010	Jorge Enrique Vélez	Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Investigación Previa	
3	Antioquia	2006/2010	Manuel Ramiro Velásquez	Relación con el Bloque Central Bolívar	Partico Conservador	Investigación Previa	
4	Antioquia	2006/2010	Oscar Suarez Mira	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Presunto fraude electoral	Alas Equipo Colombia	Proceso Archivado	
5	Antioquia	2006/2010	Gabriel Zapata	Apoyo en campaña electoral	Alas Equipo Colombia	Auto Inhibitorio	
6	Antioquia	2006/2010	Rubén Darío Quintero	Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Llamado a Juicio	
7	Antioquia	2006/2010	Humberto Builes Correa	Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Condenado a 7 años y cinco meses	
8	Antioquia	2006/2010	Mario Uribe	Apoyo en campaña electoral. Presunta adquisición ilegal de tierras. Concierto para cometer homicidio	Colombia Democrática	Llamado a juicio	
9	Antioquia	2006/2010	Guillermo Gaviria	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Apoyo en campaña electoral. Enriquecimiento ilícito	Partido Liberal	Absuelto y vuelto a llamar a indagatoria por la CSJ 2011	
10	Antioquia	2002/2006	Carlos Clavijo	Apoyo en campaña electoral	Convergencia Popular Cívica	Condenado a 90 meses	
11	Antioquia	2002/2006	Luis Alfredo Ramos	Relación con el Bloque Central Bolívar	Alas Equipo Colombia	Investigación Previa	

12	Antioquia	1998/2002	José Ignacio Mesa	Apoyo en campaña electoral	Partido Liberal /Directorio de Envigado	Investigación Previa	
13	Atlántico	2006/2010	David Char	Celebración de contrato sin cumplimientos de requisitos legales. Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Investigación Previa	
14	Atlántico	2006/2010	Dieb Maloof	Presuntas irregularidades en materia de contratación. Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares	Colombia Viva	Condenado a 4 años y 9 meses de cárcel	Investigación previa por crímenes de lesa humanidad
15	Atlántico	2006/2010	Armando Benedetti	Presunto fraude electoral	Partido de la U	Investigación Previa	
16	Atlántico	2006/2010	Jorge Castro	Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares	Colombia Viva	Llamado a Juicio	
17	Bolívar	2006/2010	José David Name	Apoyo en campaña electoral	Partido de la U	Investigación Previa	
18	Bolívar	2006/2010	Javier Enrique Cáceres Lelal	Presunto fraude electoral. Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Detenido	
19	Bolívar	2006/2010	William Montes	Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Firmo Pacto de Ralito	Partido Conservador	Proceso Archivado	

20	Bolívar	2006/2010	Vicente Blel	Apoyo en campaña electoral. Enriquecimiento ilícito. Narcotráfico	Colombia Viva	Condenado a 7 años de prisión	
21	Bolívar	2002 - 2006	Carlos Julio Galvis Anaya	Relación con grupos paramilitares mediante su ONG ASOCIPAZ	Convergencia Popular Cívica	Instrucción	
22	Bogotá	2006/2010	Juan Carlos Restrepo	Relación con grupos paramilitares de Cundinamarca y Valle del Cauca. Nexos con narcotráfico	Cambio Radical	Investigación Previa	
23	Boyacá	2006/2010	Ciro Ramírez	Narcotráfico	Partido Conservador	Llamado a Juicio	
24	Caldas	2006/2010	Adriana Gutiérrez	Relación con el paramilitar Ernesto Báez	Partido de la U	Investigación Previa	
25	Caldas	2006/2010	Víctor Renán Barco	Negocios de tierras con Cuco Vanoy	Partido Liberal	Investigación Previa (Fallecido)	
26	Cauca	2006/2010	Luis Fernando Velasco	Apoyo en campaña electoral	Partido Liberal	Absuelto	
27	Cesar	2006/2010	Álvaro Araujo	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Presunto fraude electoral. Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Secuestro extorsivo agravado	Alas Equipo Colombia	Condenados a 9 años de prisión	

28	Cesar	2006/2010	Mauricio Pimiento	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Presunto fraude electoral. Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Homicidio. Desplazamiento forzoso de personas	Partido de la U	Condenado a 7 años de prisión	Investigación previa por crímenes de lesa humanidad
29	Cesar	1998/2002	Pepe Gnecco	Asistió y firmo el Pacto de Ralito	Partido Liberal	Proceso Archivado	
30	Córdoba	2006/2010	Reginaldo Montes	Asistió y firmo el Pacto de Ralito	Cambio Radical	Condenado a 6 años de prisión. Libertad condicional	
31	Córdoba	2006/2010	Julio Alberto Manzur	Nombrado por Mancuso en su declaración	Partido Conservador	Investigación Previa	
32	Córdoba	2006/2010	Zulema Jattin	Apoyo en campaña electoral	Partido de la U	Instrucción. En libertad por vencimiento de términos	
33	Córdoba	2006/2010	Juan Manuel López Cabrales	Asistió y firmo el Pacto de Ralito	Partido Liberal	Condenado a 74 meses	
34	Córdoba	2006/2010	Miguel de la Espriella	Presunto fraude electoral. Ser miembro activo de una organización paramilitar. Firma Pacto de Ralito	Colombia Democrática	Condenado a 45 meses de prisión.	
35	Córdoba	2002/2006	Mario Salomón Náder Muskus	Apoyo en campaña electoral	Partido Liberal	Detenido	
36	Córdoba	1998/2002	Rodrigo Burgos de la Espriella	Apoyo en campaña electoral. Firma Pacto de Ralito	Partido Conservador	Instrucción	
37	Córdoba	1998/2002	Luis Carlos Ordosgoitia	Asistió y firmo el Pacto de Ralito	Partido Conservador	Proceso Archivado	

38	Cundinamarca	2006/2010	Nancy Patricia Gutiérrez	Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Investigación Previa	
39	Magdalena	2006/2010	Miguel Pinedo	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Presunto fraude electoral. Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Llamado a Juicio	
40	Magdalena	2006/2010	Luis Eduardo Vives	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Presunto fraude electoral. Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares	Convergencia Ciudadana	Condenado a 7 años de prisión	Investigación previa por crímenes de lesa humanidad
41	Magdalena	2002/2006	Salomón Saade	Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares	Partido Liberal	Investigación Previa	Investigación Previa por crímenes de lesa humanidad
42	Nariño	2006/2010	Eduardo Enríquez Maya	Apoyo en campaña electoral	Partido Conservador	Auto Inhibitorio	
43	Meta	2006/2010	Luis Carlos Torres	Presuntas irregularidades en materia de contratación. Homicidio	Cambio Radical	Instrucción	
44	Norte de Santander	2006/2010	Ricardo Elcure Chacón	Crímenes de lesa humanidad	Colombia Democrática	Condenado a 6 años de prisión	
45	Norte de Santander	2006/2010	Carlos Barriga	Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Presunta adquisición ilegal de tierras	Convergencia Ciudadana	Investigación Previa	
46	Norte de Santander	2006/2010	Juan Manuel Corzo	Reunión con grupos paramilitares en Ralito	Partido Conservador	Auto Inhibitorio	

47	Norte de Santander	2006/2010	Manuel Guillermo Mora	Presunta adquisición ilegal de tierras	Partido de la U	Investigación Previa	
48	Risaralda	2006/2010	Habib Merheg	Presunto fraude electoral	Colombia Viva	Investigación Previa	
49	Santander	2006/2010	Iván Díaz Mateus	Organización de grupos paramilitares	Partido Conservador	Auto Inhibitorio	
50	Santander	2006/2010	Oscar Josué Reyes	Apoyo en campaña electoral	Convergencia Ciudadana	Instrucción	
51	Santander	2006/2010	Luis Alberto Gil	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Apoyo en campaña electoral	Convergencia Ciudadana	Llamado a Juicio	
52	Santander	2006/2010	Juan Manuel González Bustos	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales	Convergencia Ciudadana	Llamado a juicio	
53	Santander	2006/2010	Marco Alirio Cortes	Peculado por apropiación. Enriquecimiento ilícito. Homicidio	Partido de la U	Investigación Previa	
54	Santander	2002/2006	Aristidez Andrade	Apoyo en campaña electoral	Partido Liberal	Detenido. Instrucción	
55	Santander	2002/2006	Carlos Higuera Escalante	Apoyo en campaña electoral	Convergencia Ciudadana	Instrucción	
56	Sucre	2006/2010	Antonio Guerra de la Espriella	Relación con el paramilitar Antonio Mercado alias Cadenas. Firma Pacto de Ralito	Cambio Radical	Condenado a 6 años y tres meses. En libertad tras cumplir las tres quintas partes de su condena	

57	Sucre	2006/2010	Álvaro García Romero	Peculado por apropiación. Presunto fraude electoral. Presunta conformación de organizaciones paramilitares. Ser miembro activo de una organización paramilitar. Homicidio	Colombia Democrática	Condenado a 40 años de prisión	
58	Sucre	2006/2010	Jairo Merlano	Presunto desvió de contratos para organizaciones paramilitares. Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Apoyo en campaña electoral. Ser miembro activo de una organización paramilitar	Partido de la U	Proceso Archivado	
59	Sucre	2006/2010	Jorge Visbal	Presunta relación con Jorge 40	Partido de la U	Investigación Previa	
60	Sucre	2006/2010	Piedad Zuccardi	Reuniones con grupos paramilitares en Bolívar	Partido de la U	Investigación Previa	
61	Tolima	2006/2010	Luis Humberto Gómez	Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Concierto para cometer homicidio	Partido Conservador	Instrucción-detenido	
62	Tolima	2006/2010	Carlos García	Relación con el Bloque Tolima	Partido de la U	Absuelto	
63	Tolima	2006/2010	Mauricio Jaramillo	Apoyo en campaña electoral	Partido Liberal	Investigación Previa	
64	Valle	2006/2010	Juan Carlos Martínez	Apoyo en campaña electoral	Convergencia Ciudadana	Llamado a Juicio	
65	Valle	2006/2010	Dilian Francisco Toro	Apoyo en campaña electoral	Partido de la U	Investigación Previa	

66	Valle	2006/2010	Luis Elmer Arenas	Relación con Ernesto Báez, Bloque Central Bolívar	Partido de la U	Investigación Previa	
----	-------	-----------	-------------------	---	-----------------	----------------------	--

LISTADO 3. REPRESENTANTES A LA CÁMARA IMPLICADOS EN EL PROCESO DE PARAPOLÍTICA

N o	DEPAR TAMEN TO	AÑOS	NOMBRE	CONDENA	PARTIDO POLÍTICO	ESTADO JUDICIAL	NUEVO PROCESO
1	Amazonas	2006/2010	Manuel Antonio Carebilla	Relación con paramilitares en el Amazonas	Movimiento Nacional Progresista	Investigación Previa	
2	Antioquia	2006/2010	Jorge Ignacio Morales	Apoyo en campaña electoral	Partido Liberal	Absuelto	
3	Antioquia	2006/2010	William Vélez	Apoyo en campaña electoral	Partido de la U	Investigación Previa	
4	Antioquia	2006/2010	Oscar Arboleda	Apoyo en campaña electoral	Partido Conservador	Investigación Previa	
5	Antioquia	2006/2010	Mauricio Parody	Presunto fraude electoral	Partido Liberal	Instrucción	
6	Antioquia	2002/2006	César Augusto Andrade	Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Condenado a 90 meses	
7	Antioquia	2002/2006	Jesús Doval	Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Instrucción	
8	Antioquia	2002/2006	Manuel Darío Ávila	Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Instrucción	
9	Antioquia	2002/2006	Estanislao Ortiz	Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Instrucción	
10	Antioquia	2002/2006	Rocío Arias	Apoyo en campaña electoral. Ser miembro activo de una organización paramilitar. Homicidio	Convergencia Popular Cívica	Condenada a 45 meses de prisión cumplida. En libertad	
11	Antioquia	1990/1994	Cesar Pérez	Relacionado en la masacre paramilitar de Segovia en 1988	Partido Liberal	Investigación Previa	Investigación por la masacre de Segovia. Detenido
12	Atlántico	2006/2010	Alonso Acosta	Apoyo electoral	Partido de la U	Investigación Previa	
13	Atlántico	2002/2006	Jorge Gerlein	Apoyo electoral	Partido Conservador	Investigación Previa	
14	Bolívar	2006/2010	Héctor Julio Alfonso López	Presunto fraude electoral	Apertura Liberal	Instrucción	

15	Bolívar	2006/2010	Fernando Tafur	Apoyo en campaña electoral	Apertura Liberal	Investigación Previa	
16	Bolívar	2006/2010	Lidio García Turbay	Presunto fraude electoral. Apoyo en campaña electoral	Partido Liberal	Investigación Previa	
17	Bolívar	2006/2010	Miguel Angel Rangel	Relación política con el Bloque Central Bolívar y Héroes Montes de María	Partido de la U	Condenado a 90 meses	
18	Bolívar	1998/2002	Luis José Álvarez	Reunión con paramilitares en el Acuerdo de Ralito	Partido Liberal	Proceso Archivado	
19	Bolívar	1998/2002	José María Imbeth	Reunión con paramilitares en el Acuerdo de Ralito	Partido Conservador	Llamado a Juicio	
20	Caldas	2006/2010	Mauricio Lizcano	Apoyo en campaña electoral	Partido de la U	Investigación Previa	
21	Caldas	2006/2010	Emilio Enrique Angel	Apoyo en campaña electoral. Presunto fraude electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares	Partido Liberal	Condenado a 45 meses de prisión. En libertad por cumplimiento de pena	
22	Caldas	2006/2010	Dixon Tapasco	Apoyo en campaña electoral. Presunto fraude electoral	Partido Liberal	Condenado a 90 meses	
23	Caldas	2006/2010	Jairo Alberto Llanos	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Homicidio. Concierto para cometer homicidio	Partido Liberal	Investigación Previa	
24	Caldas	2006/2010	Juan Pablo Sánchez	Presunto responsable de la consolidación del aparato de guerra del Bloque Central Bolívar	Partido Liberal	Llamado a Juicio	
25	Caquetá	2006/2010	Luis Fernando Almario	Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Homicidio	Movimiento de Participación Popular	Instrucción	
26	Casanare	2006/2010	Oscar Wilches	Apoyo en campaña	Cambio Radical	Instrucción	

				electoral			
27	Casanare	2002/2006	Efrén Hernández	Apoyo en campaña electoral	Partido Liberal	Instrucción	
28	Cauca	2002/2006	Gloria Enith Montilla	Relacionada con el Bloque Tolima	Partido Liberal	Investigación Previa	
29	Cauca	1998/2002	Francisco Rojas Birry	Relacionado con el Frente Mineros y Bloque Pacífico	Alianza Social Indígena	Investigación Previa	
30	Cesar	2006/2010	Pedro Muvdi	fraude procesal y falsedad documental	Partido Liberal	Investigación Previa	
31	Cesar	2006/2010	Álvaro Morón	Presunto fraude electoral. Apoyo en campaña electoral	Alas Equipo Colombia	Llamado a Juicio	
32	Cesar	2006/2010	Alfredo Cuello Baute	Apoyo en campaña electoral	Partido Conservador	Instrucción	
33	Cesar	2002 -2006	Jorge Enrique Ramírez	Colaboración en la financiación de grupos paramilitares	Partido Liberal	Condenada a 45 meses de prisión	
34	Cesar	2002/2006	Jorge Luis Feris	Reunión con paramilitares en el Acuerdo de Ralito	Partido Liberal	Precluido	
35	Chocó	2006/2010	Odín Horacio Sánchez de Oca	Apoyo en campaña electoral	Partido de la U	Instrucción	
36	Chocó	2006/2010	Edgar Ulises Torres	Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Instrucción	
37	Chocó	2002/2006	Rober Mendoza	Relación con paramilitares en el Choco	Partido Liberal	Investigación Previa	
38	Córdoba	2006/2010	José de los Santos Negrete	Presunto fraude electoral. Firma Pacto de Ralito	Partido Conservador	Precluido	
39	Córdoba	2006/2010	Mussa Besaile	Reuniones con paramilitares en Córdoba	Partido Liberal	Investigación Previa	
40	Córdoba	2002/2006	Eleonora Pineda	Apoyo en campaña electoral. Ser miembro activo de una organización paramilitar. Firma Pacto de Ralito	Movimiento Popular Unido	Instrucción	

41	Córdoba	2002/2006	Freddy Sánchez	Reunión con paramilitares en el Acuerdo de Ralito	Partido Liberal	Condenada a 45 meses de prisión	
42	Córdoba	2002 -2006	Miguel Angel Duran	Colaboración en la financiación de grupos paramilitares	Movimiento de Integración Regional	Proceso Archivado	
43	Córdoba	1998/2002	Remberto Montes	Reunión con paramilitares en el Acuerdo de Ralito	Partido Liberal	Instrucción	
44	Guanía	2006/2010	Sandra Aravella Velazquez Salcedo	Presunta falsedad ideológica y estafa agravada	Cambio Radical	Investigación Previa (Condenada a 6 años por falsedad en documento público. Retomado por la Corte)	
45	Huila	2006/2010	Héctor Javier Osorio Botello	Apoyo en campaña electoral	Movimiento Huila Nuevo y Liberalismo	Investigación Previa	
46	La Guajira	2002/2006	Jaime Ezpelera	Narcotráfico	Partido Liberal	Investigación Previa	
47	Magdalena	2006/2010	Rodrigo de Jesús Roncallo	Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Homicidio	Apertura Liberal	Llamado a Juicio	
48	Magdalena	2006/2010	Jorge Luis Caballero	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Presunto fraude electoral. Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Homicidio. Concierto para cometer homicidio	Apertura Liberal	Condenado a 6 y 6 meses de prisión	
49	Magdalena	2006/2010	Karely Patricia Lara Vence	Presunto desvío de contratos para organizaciones paramilitares. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Homicidio	Cambio Radical	Condenada a 6 años de prisión	

50	Magdalena	2006/2010	Alonso de Jesús Ramírez	Presunto cohecho	Moral	Instrucción	
51	Magdalena	2006/2010	Luis Fernando Vanegas	Presuntas irregularidades en materia de contratación. Apoyo en campaña electoral. Enriquecimiento ilícito	Apertura Liberal	Investigación Previa	
52	Magdalena	2006/2010	Alfonso Campo Escobar	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Presunto fraude electoral. Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Firma Pacto Ralito	Partido Conservador	Condenado a 6 años de prisión	
53	Magdalena	2002/2006	José Gamarra	Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares	Cambio Radical	Instrucción	Investigación Previa por crímenes de lesa humanidad
54	Magdalena	2002/2006	Jorge Enrique Caballero	Relacionado con el Bloque Tayrona	Partido Liberal	Llamado a juicio	
55	Magdalena	1998/2002	Enrique Rafael Caballero	Relacionado con Resistencia Tayrona de las Autodefensas	Partido Liberal	Condenado a 5 años	
56	Nariño	2006/2010	Myriam Paredes	Reuniones con paramilitares en Nariño	Partido Conservador	Auto Inhibitorio	
57	Putumayo	2006/2010	Guillermo Rivera	Apoyo en campaña electoral	Partido Liberal	Auto Inhibitorio	
58	Santander	2006/2010	José Manuel Herrera	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales.	Convergencia Ciudadana	Instrucción	
59	Santander	2006/2010	Alfonso Riaño	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales. Homicidio	Convergencia Ciudadana	Instrucción	

60	Santander	31 de marzo 2004/30 de junio 2004	Yidis Medina	Constreñimiento al lector y alteración de resultados electorales	Partido Conservador	Condenada a 48 meses y 15 días	
61	Sucre	2006/2010	José María Conde	Homicidio	Colombia Democrática	Investigación Previa	
62	Sucre	2006/2010	Erick Morris	Presunto fraude electoral. Apoyo en campaña electoral. Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Presunta conformación de organizaciones paramilitares. Ser miembro activo de una organización paramilitar	Colombia Democrática	Condenado a 6 años de prisión	
63	Sucre	2006/2010	Jairo Fernández Quessep	Reuniones con paramilitares	Partido Acción Social	Absuelto	
64	Sucre	2002/2006	Muriel Benito Rebollo	Apoyo en campaña electoral	Partido Conservador	Instrucción	
65	Tolima	2006/2010	Pedro Pablo Trujillo	Relación con el Bloque Tolima	Partido Conservador	Auto Inhibitorio	
66	Tolima	2006/2010	Pompilio Avedaño	Relación con el Bloque Tolima	Partido Liberal	Absuelto	
67	Tolima	2006/2010	Jaime Armando Yepes	Apoyo en campaña electoral	Partido de la U	Investigación Previa	
68	Tolima	2006/2010	Javier Ramiro Devia	Apoyo en campaña electoral	Partido Conservador	Auto Inhibitorio	
69	Tolima	2006/2010	Gonzalo García	Colaboración en la financiación de grupos paramilitares. Homicidio	Partido Conservador	Absuelto (reabierto por la Corte, llamado a juicio)	
70	Tolima	1998/2002	Emilio Martínez	Apoyo en campaña electoral. Homicidio	Partido Liberal	Instrucción	
71	Valle	2006/2010	Luis Carlos Restrepo	Relación con el Bloque Calimas	Partido de la U	Detenido	

72	Vaupés	2006/2010	Fabio Arango Torres	Apoyo en campaña electoral	Cambio Radical	Condenado a 6 años de prisión	
----	--------	-----------	---------------------	----------------------------	----------------	-------------------------------	--

LISTADO 4. FUNCIONARIOS REGIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE PARAPOLÍTICA

GOBERNADORES

No	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PERIODO	SITUACIÓN	PARTIDO	CONDENA
1	Antioquia	Luis Alfredo Ramos	2007/2011	Investigación Previa	Partido Conservador	Apoyo en campaña electoral
2	Caquetá	Luis Francisco Cuellar	2007/2011	Investigación Previa	Alianza Social Indígena	Relación con grupos paramilitares (asesinado)
3	Guaviare	Oscar López	2007/2011	Condenado a siete años y seis meses	Partido Conservador	Conformación de grupos paramilitares en los Llanos Orientales y crímenes de lesa humanidad
4	Vichada	Blas Aurelio Ortiz	2007/2011	Investigación Previa	Partido de la U	Relación con grupos paramilitares

EXGOBERNADORES

No	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PERIODO	SITUACIÓN	PARTIDO	CONDENA
1	Arauca	Julio Acosta Bernal	2003/2007	Llamado a juicio	Cambio Radical	Homicidio. Apoyo electoral
2	Bolívar	Libardo Simancas	2003/2007	Investigación Previa	Partido Liberal	Apoyo electoral
3	Bolívar	Luis Daniel Vargas	2000/2003	Investigación Previa	Partido Liberal	Apoyo electoral
4	Casanare	Miguel Angel Pérez	2003/2007	Condenado a 6 años	Partido Liberal	Apoyo electoral
5	Casanare	William Pérez	2000/2003	Detenido	Movimiento Apertura Liberal	Conformación de grupos paramilitares. Financiamiento de grupos paramilitares
6	Cauca	Juan José Chaux	2003/2007	Detenido	Partido liberal	Apoyo electoral

7	Cesar	Hernando Molina	2003/2007	Condenado a 7 años de prisión	Partido Liberal	Apoyo electoral. Relación con el Bloque Norte de Jorge 40
8	Chocó	Juan B. Hinestroza	1997/2000	Investigación Previa	Partido Liberal	Apoyo electoral
9	Córdoba	Jesús María López	2003/2007	Condenado Casa por Cárcel	Partido Liberal	Relación con Salvatore Mancuso. Firmante Pacto de Ralito
10	Cundinamarca	Pablo Ardila	2003/2007	Investigación Previa	Cundinamarca Merece Más	Apoyo electoral
11	Guaviare	Nevio Hernández	2000/2003	Investigación Previa	Partido Conservador	Relación con grupos paramilitares
12	Magdalena	Trino Luna	2003/2007	Condenado a 44 meses y 15 días	Partido Liberal	Relación con el Bloque Norte. Homicidio. Apoyo electoral
13	Magdalena	José Domingo Dávila	2000/2003	Detenido	Partido Liberal	Relación con el Bloque Norte. Firma Pacto de Chívolo. Apoyo electoral
14	Meta	Edilberto Castro	2003/2007	Condenado a 40 años de cárcel	Cambio Radical	Apoyo electoral. Homicidio. Relación con grupos paramilitares
15	Meta	William Pérez Esquivel	2000/2003	Investigación Previa	Partido Liberal	Promover, auspiciar y financiar grupos paramilitares. Apoyo electoral
16	Risaralda	Carlos Alberto Botero López	2003/2007	Instrucción. Absuelto por la procuraduría	Partido Liberal	Apoyo electoral
17	Santander	Hugo Aguilar	2003/2007	Inhabilitado 20 años para ejercer cargos públicos	Convergencia Ciudadana	Apoyo electoral. Relación con el Bloque Central Bolívar y Bloque Puerto Boyacá

18	Sucre	Jorge Anaya	2003/2007	Condenado a 7 años de prisión	Movimiento Nacional Progresista	Promover, auspiciar y financiar al Bloque Héroes Montes de María. Apoyo electoral
19	Sucre	Miguel Nule Amin	1997/2000	Vinculado con medida de Abstención	Partido Liberal	Reuniones con grupos paramilitares
20	Sucre	Salvador Arana	2000/2003	Condenado a 40 años de cárcel	Partido Liberal	Conformación de grupos paramilitares. Financiamiento de grupos paramilitares. Homicidio. Firma Pacto de Ralito

FUNCIONARIOS

No	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PERIODO	SITUACIÓN	PARTIDO	CONDENA
1	Caldas	Ferney Tapasco	2003/2007	Llamado a juicio	Partido Liberal	Apoyo electoral
2	Córdoba	Álvaro Cabrales	1997/2000	Absuelto	Partido Conservador	Reunion Pacto de Ralito
3	Magdalena	Edgar Manuel Castro Castro	2000/2003	Instrucción	Partido Liberal	Reunion Pacto de Chivolo y Pivijay. Relación con el Bloque Norte
4	Magdalena	Fernando Jesús Mozo Ortiz	2000/2003	Instrucción	Partido Liberal	Reunion Pacto de Chivolo
5	Magdalena	Franklin Lozano Pimienta	2000/2003	Investigación Previa	Partido Liberal	Reunion Pacto de Chivolo y Pivijay. Relación con el Bloque Norte
6	Magdalena	Jorge Vega Barrios	2000/2003	Instrucción	Partido Liberal	Reunion Pacto de Chivolo y Pivijay. Relación con el Bloque Norte
7	Santander	Luis José Arenas	2003/2007	Investigación Previa	Partido Liberal	Relación con grupos paramilitares

8	Sucre	Jassik Farak Mendoza	2003/2007	Con medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía	Movimiento Nacional Progresista	Relación con el Bloque Héroes de Montes de María. Apoyo electoral
9	Sucre	Angel Villareal	2003/2007	Condenado a 47 meses de prisión. Cumplió con su pena	Movimiento Nacional Progresista	Relación con el Bloque Héroes de Montes de María. Apoyo electoral
10	Sucre	Nelson Stanp Berrio	2003/2007	Condenado 3 años	Movimiento Nacional Progresista	Apoyo electoral
11	Sucre	Walberto Estrada	2003/2007	Detenido	Partido Conservador	Reunion con grupos paramilitares de Jorge 40
12	Sucre	Jhony Guillermo Villa	2003/2007	Condenado. Cumplió su pena	Partido Liberal	Reunion con grupos paramilitares de Jorge 40
13	Valle	Rubén Darío Agudelo	2003/2007	Detenido	Partido Conservador	Homicidio y desaparición forzada

LISTADO 5. FUNCIONARIOS LOCALES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE PARAPOLÍTICA

ALCALDES

No	DEPARTAMENTO	CARGO	NOMBRE	PERIODO	SITUACIÓN	PARTIDO	CONDENA
1	Antioquia	Excandidato a la alcaldía de San Pedro de Urabá	Evelio Enrique Escobar	2007/2011	Investigación Previa	Partido Liberal	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
2	Antioquia	Exalcalde de Arboletes	Gustavo Germán Guerra	2007/2011	Investigación Previa	Cambio Radical	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
3	Caldas	Alcalde de La Dorada	Justo Capera	2007/2011	Condenado a 90 meses	Partido Liberal	Relación con AUC del Magdalena Medio
4	Casanare	Alcalde de Aguazul	José Mauricio Jiménez	2007/2011	Condenado a 29 años	Apertura Liberal	Relación con grupos paramilitares y desaparición forzadas
5	Cesar	Alcaldesa de Becerril	Yancy Bueno Contreras	2007/2011	Detenida	Convergencia Ciudadana	Apoyo electoral
6	Magdalena	Alcalde de Concordia	Miguel Angel Aragón	2007/2011	Investigación Previa	Movimiento Apertura Liberal	Firmo Pacto Chivolo y Pivijay
7	Sucre	Alcalde de San Onofre	Edgar Benito Rebollo	2007/2011	Investigación Previa	Partido Conservador	Apoyo electoral
8	Sucre	Alcalde de Coveñas	Sergio Tapias	2007/2011	Detenido	Colombia Democrática	Relación con grupo paramilitar de Rodrigo Cadenas

CONCEJALES

No	DEPARTAMENTO	CARGO	NOMBRE	PERIODO	SITUACIÓN	PARTIDO	CONDENA
----	--------------	-------	--------	---------	-----------	---------	---------

1	Antioquia	Concejal de Turbo	Jairo Alberto Banquet	2007/2011	Detenido	Movimiento Alas Equipo Colombia	Apoyo electoral del Bloque Central Bolívar
2	Caldas	Concejal de Pácora	Álvaro Escudero Gutiérrez	2007/2011	Instrucción	Partido liberal	Reuniones con el Frente Cacique Pipintá
3	Córdoba	Concejal de Los Córdoba	José Acosta Navarro	2007/2011	Detenido	Partido Liberal	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
4	Magdalena	Concejal de Santa Marta	Romualdo Macías	2007/2011	Detenido	Partido Liberal	Relacionado con el grupo paramilitar Resistencia Tayrona liderado por Hernando Giraldo
5	Santander	Concejal de Rio Negro	Etemilson Vázquez	2007/2011	Detenido	Convergencia Ciudadana	Apoyo electoral del Bloque Central Bolívar
6	Santander	Concejal de Rio Negro	Alcides Ruiz Mantilla	2007/2011	Detenido	Convergencia Ciudadana	Apoyo electoral del Bloque Central Bolívar
7	Sucre	Concejal de San Onofre	Robin Juve Lobo Garrido	2007/2011	Llamado a juicio	Movimiento Alianza Social Afrocolombiana	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
8	Sucre	Concejal de Sincelejo	José David González	2007/2011	Detenido	Colombia Viva	Relación con el grupo paramilitar Héroes de María liderado por Rodrigo Mercado alias Cadena
9	Sucre	Concejal de Coveñas	Carlos Alberto Olivera	2007/2011	Detenido	Colombia Democrática	Relación con el grupo paramilitar Héroes de María liderado por Rodrigo Mercado alias Cadena
10	Sucre	Concejal de Coveñas	Eladio Antonio Muentes	2007/2011	Detenido	Colombia Democrática	Relación con el grupo paramilitar Héroes de María liderado por Rodrigo Mercado alias Cadena
11	Sucre	Concejal de Coveñas	Bertilio Manuel Orozco	2007/2011	Detenido	Colombia Democrática	Relación con el grupo paramilitar Héroes de María liderado por Rodrigo Mercado alias Cadena
12	Sucre	Concejal de Coveñas	Abel Antonio Toscano	2007/2011	Detenido	Colombia Democrática	Relación con el grupo paramilitar Héroes de María liderado por Rodrigo Mercado alias Cadena

EXALCALDES

N o	DEPARTAMEN TO	CARGO	NOMBRE	PERIODO	SITUACIÓN	PARTIDO	CONDENA
1	Antioquia	Excalcalde de Medellín	Sergio Fajardo	2003/2007	Investigación Previa	Compromiso Ciudadano	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
2	Antioquia	Excalcalde de San Juan de Urabá	Carlos Náscar Pájaro	2003/2007	Condenado	Partido Liberal	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
3	Antioquia	Excalcalde de Arboletes	William Saleme	2003/2007	Investigación Previa	Partido Liberal	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
4	Antioquia	Excalcalde de Necoclí	Benjamin Eduardo Díaz	2003/2007	Condenado a 45 meses	Movimiento Equipo Colombia	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
5	Antioquia	Excalcalde de San Juan de Urabá	Miguel Angel Zuluaga	2000/2003	Condenado a 45 meses	Cambio Radical	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
6	Antioquia	Excalcalde de Necoclí	Rubén Díaz	2000/2003	Detenido	Partido Conservador	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
7	Antioquia	Excalcalde de Arboletes	Jorge Mario Monsalve	2000/2003	Detenido	Cambio Radical	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
8	Antioquia	Excalcalde de Carepa	Arnulfo Peñuela	2000/2003	Condenado a 6 años	Movimiento Nacional Afrocolombiano	Financiamiento grupos paramilitares
9	Antioquia	Excalcalde de Turbo	Guillermo Ceren	1994/1997	Detenido	Partido Liberal	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
10	Atlántico	Excalcalde de Soledad	Alfredo Arraut	2000/2003	Absuelto en primera instancia	Movimiento Voluntad popular	Contrataciones indebidas

11	Atlántico	Excalcalde de Barranquilla	Guillermo Hoenisberg	2003/2007	Investigación Previa	Movimiento Ciudadano	Apoyo electoral
12	Atlántico	Excalcalde de Sabanagrande	José Rafael Bolívar	2000/2003	Investigación Previa	MORAL	Contrataciones indebidas
13	Atlántico	Excalcalde de Soledad	Rosa Stella Ibañez	2000/2003	Condenada a 9 años	Movimiento Voluntad popular	Entregó rentas y el sector salud a las Autodefensas Unidas de Colombia
14	Bolívar	Excalcalde de Cartagena	Nicolás Curi	2003/2007	Condenado a 4 años	Cambio Radical	Celebración indebida de contratos
15	Bolívar	Excalcalde de Magangue	Jorge Luis Alfonso López	2003/2007	Destituido e inhabilitado por 20 años por la Procuraduría	Partido Liberal	Sobornaba a las autoridades para que los paramilitares cometieran sus crímenes sin obstáculos
16	Boyacá	Excalcalde de Puerto Boyacá	Luis Alfredo Rubio Rojas	1988/1988	Cumplió pena	Partido Conservador	Delitos de homicidio y concierto para delinquir
17	Caldas	Excalcalde de Manzanare	Celio Aristizabal	2003/2007	Instrucción	Partido Conservador	Contrataciones indebidas con el Frente Omar Isaza de las AUC del Magdalena Medio y homicidio
18	Caldas	Excalcalde de Pácora	Orlando Ríos	2003/2007	Detenido	Partido Liberal	Reuniones con el Frente Cacique Pipintá
19	Caldas	Excalcalde de Aguadas	Oscar Diego Trujillo Sánchez	2003/2007	Detenido	Partido Liberal	Relación con el Frente Cacique Pipintá y homicidio
20	Caldas	Excalcalde de Manzanare	Henry Ramírez Montes	2000/2003	Instrucción	Partido Conservador	Contrataciones indebidas con el Frente Omar Isaza de las AUC del Magdalena Medio y homicidio
21	Casanare	Excalcalde de Aguazul	Leonel Roberto Torres	2003/2007	Libertad provisional tras 25 meses en prisión	Cambio Radical	Relación con Autodefensas Campesinas del Casanare que dirigía alias “Martín Llanos

22	Casanare	Excalcalde de Monterrey	Aleider Castañeda	2003/2007	Libertad provisional tras 25 meses en prisión	Cambio Radical	Relación con Autodefensas Campesinas del Casanare que dirigía alias “Martín Llanos
23	Casanare	Excalcalde de Sabanalarga	Mauricio Chaparro	2003/2007	Libertad provisional tras 25 meses en prisión	Nuevo Partido	Relación con Autodefensas Campesinas del Casanare que dirigía alias “Martín Llanos
24	Casanare	Excalcalde de Tauramena	Jorge Eliecer Barreto	2003/2007	Libertad provisional tras 25 meses en prisión	Partido Liberal	Relación con Autodefensas Campesinas del Casanare que dirigía alias “Martín Llanos
25	Casanare	Excalcalde de Mani	Henry Montes	2003/2007	Libertad provisional tras 25 meses en prisión	Partido Liberal	Relación con Autodefensas Campesinas del Casanare que dirigía alias “Martín Llanos
26	Casanare	Excalcalde de Villanueva	Raúl Cabrera Barreto	2003/2007	Libertad provisional tras 25 meses en prisión	Partido Liberal	Relación con Autodefensas Campesinas del Casanare que dirigía alias “Martín Llanos
27	Cauca	Excalcalde de Mercaderes	Luis Hernando Guerrero	2003/2007	Condenado a 6 años	Movimiento Unionista	Apoyo electoral
28	Cesar	Excalcalde de Astrea	Garibaldís López Acuña.	2003/2007	Llamado a juicio	Partido Liberal	Contrataciones indebidas
29	Cesar	Excalcalde de Bosconia	Carlos Quinto Angarita	2003/2007	Llamado a juicio	Partido Liberal	Apoyo electoral
30	Córdoba	Excalcalde de Moñitos	Isaías Martínez Castro	2003/2007	Detenido	Colombia Viva	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
31	Córdoba	Excalcalde de los Córdobas	Bonifacio Contreras	2003 -2007 y 2011	Aseguramiento	Colombia Democrática	Apoyo electoral. Homicidio

32	Córdoba	Excalcalde de Tierralta	Humberto Santos Negrete	2003/2007	Detenido	Colombia Viva	Firma Pacto de Granada
33	Córdoba	Excalcalde de los Córdoba	Alfredo Arrieta	2000/2003	Detenido	Partido Liberal	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
34	Córdoba	Excalcalde de Moñitos	José Félix Martínez	2000-2003 y 2011	Aseguramiento	Partido de la U	Apoyo electoral. Pactos con El Alemán
35	Córdoba	Excalcalde de Valencia	Mario Prada	2000/2003	Condenado	Colombia Democrática	Relacionado con Diego Vecino
36	Córdoba	Excalcalde de Canalete	Mario Buendía Vásquez.	2000/2003	Detenido	Partido Liberal	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
37	Córdoba	Excalcalde de San Antero	Wilmer José Pérez	2000/2003	Detenido (Se acogió a sentencia anticipada) Asesinado en 2009	Partido Liberal	Firma Pacto de Ralito
38	Córdoba	Excalcalde de los Córdoba	Juan David Flórez	1997/2000	Detenido	Cambio Radical	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
39	Córdoba	Excalcalde de Tierralta	Sigifredo Senior	1997/2000	Detenido	Partido Liberal	Firma Pacto de Ralito, Pacto de Granada
40	Córdoba	Excalcalde de los Córdoba	Saúl Carriazo	1994/1997	Detenido	Partido Liberal	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño
41	Magdalena	Exalcaldesa de Algarrobo	Nazly Zambrano Guete	2003/2007	Detenido	Cambio Radical	Relacionada con el Bloque Norte
42	Magdalena	Excalcalde de Aracataca	Pedro Javier Sánchez Rueda	2003/2007	Detenido	Partido Liberal	Homicidio y apoyo electoral

43	Magdalena	Excalcalde Zona Bananera	Fulgencio Olarte Morales	2005/2005	Investigación Previa	Colombia Viva	Apoyo electoral conformación grupos paramilitares
44	Magdalena	Excalcalde - Fundación	Ivan de León Villa	2003/2007	Detenido	Cambio Radical	Apoyo electoral
45	Magdalena	Excalcalde-Santa Marta	José Francisco Zuñiga	2003/2007	Detenido	Colombia Viva	Apoyo electoral
46	Magdalena	Excalcalde del Guamal	Luis José Florez (2000-2002)	2000/2003	Detenido	Partido Conservador	Relación con el bloque norte de las Autodefensas
47	Magdalena	Excalcalde de Concordia	Aníbal Castro Martínez	2000/2003	Condenado	Partido Liberal	Firma Pacto de Chivolo y Pivijay
48	Magdalena	Excalcalde de Concordia	José Ignacio Mercado Colon	2000/2003	Investigación Previa	Partido Liberal	Firma Pacto de Chivolo y Pivijay
49	Magdalena	Excalcalde de Chivolo	José Lozano Andrade	2000/2003	Detenido	Partido Conservador	Reunión Pacto de Chibolo y Pavijai. Celebración indebida de contratos y peculado por apropiación
50	Magdalena	Excalcaldesa de Algarrobo	Martha Mercedes Miranda	2000/2003	Detenido	Partido Conservador	Financiamiento grupos paramilitares. Reunión Pacto de Chibolo
51	Magdalena	Excalcalde de Concordia	Pablo José Salas Orozco	2000/2003	Condenado	Partido Liberal	Firma Pacto de Chivolo y Pivijay
52	Norte de Santander	Excalcalde de Cúcuta	Ramiro Suarez Corzo	2003/2007	Absuelto en primera instancia	Colombia Viva	Apoyo electoral
53	Santander	Excalcalde Cimitarra	Domingo Navarro	2003/2007	Investigación Previa	Colombia Democrática	Apoyo electoral
54	Santander	Excalcalde de Barrancabermeja	Edgar Cote	2003/2007	Investigación Previa	Polo Democrático Alternativo	Relación con paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar. Apoyo electoral
55	Santander	Excalcalde del Playón	Josué Jaimes Caballero	2000/2003	Detenido	Cambio Radical	Apoyo electoral

56	Santander	Excalcalde de Barrancabermeja	Julio Cesar Ardila	2000/2003	Condenado a 28 años de prisión	Mov. Popular comunal y común	Homicidio agravado y conformación de grupos paramilitares
57	Sucre	Excalcalde de Toluviejo	Miguel Carrasquilla Padilla	2003/2007	Detenido	Apertura Liberal	Relacionado con el Bloque Héroes de Montes de María Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", que habría ordenado apoyarlos en 2003
58	Sucre	Excalcalde de Since	Oliverio Oscar Oliver Moreno	2003/2007	Llamado a juicio	Movimiento Si Colombia	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
59	Sucre	Excalcalde de San Onofre Sucre	Jorge Blanco Fuentes	2003/2007	Detenido	Partido Conservador	Relacionado con el Bloque Héroes de Montes de María Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", que habría ordenado apoyarlos en 2003
60	Sucre	Excalcalde de San Antonio del Palmito	Greysi Díaz Guevara	2003/2007	Detenida	Movimiento Nacional Progresista	Relacionado con el Bloque Héroes de Montes de María Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", que habría ordenado apoyarlos en 2003
61	Sucre	Excalcalde de Coloso	Manuel David Ruiz	2000/2003	Detenido	Apertura Liberal	Relacionado con el Bloque Héroes de Montes de María Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", que habría ordenado apoyarlos en 2003
62	Sucre	Excalcalde de ovejas	Edwin Mussy Restom	2000/2003	Investigación Previa	Movimiento Fuerza Progresista	Firma Pacto de Ralito
63	Sucre	Excalcalde de San Onofre	Sabas Balseiro	2000/2003	Investigación Previa	Partido Conservador	Firma Pacto de Ralito
64	Sucre	Excalcalde de San Onofre	Luis Salaiman	1997/2000	Absuelto	Partido Conservador	Firma Pacto de Ralito
65	Tolima	Excalcalde de Suárez	Jorge Enrique Suárez	2003/2007	Condenado	Movimiento Unionista	Conformación de grupos armados. Financiamiento y homicidio

66	Tolima	Excalcalde de Coello	Luz Yineth Sarta	2003/2007	Detenida	Partido Liberal	Relacionada con el Bloque Tolima
67	Tolima	Excalcalde de Falan	Edgar Vélez Hernández	2003/2007	Condenado a 3 años y medio	Partido Liberal	Relacionado con el Bloque Omar Isaza
68	Tolima	Excalcalde de Mariquita	Hernán Alberto Cuartas	2003/2007	Condenado a 6 años	Partido Liberal	Relacionado con el Bloque Omar Isaza
69	Tolima	Excalcalde de Armero-Guayabal	Blanca Yaneth Aldana	2000/2003	Condenada a 6 años	Partido Liberal (coalición MPC, P SOC, CR)	Relacionada con el grupo paramilitar Autodefensas del Magdalena Medio
70	Tolima	Excalcalde de San Luis	Silverio Góngora	2000/2003	Detenido	Partido Conservador	Financiamiento grupos paramilitares
71	Tolima	Excalcalde de San Luis	Efraín Acosta	2000/2003	Detenido	Partido Liberal	Financiamiento grupos paramilitares
72	Valle	Excalcalde de Florida	Humberto de Jesús López Correa	2000/2003	Detenido	Partido Conservador	Homicidio

EXCONCEJALES

No	DEPARTAMENTO	CARGO	NOMBRE	PERIODO	SITUACIÓN	PARTIDO	CONDENA
1	Antioquia	Exconcejal de Medellín	Diego Arango	2003/2007	Condenado a 9 años	Colombia Viva	Delito de lavado de activos agravado
2	Córdoba	Exconcejal de Moñitos	Isaías Martínez Castro	2003/2007	Detenido	Colombia Viva	Apoyo electoral. Relacionado con el Bloque Elmer Cárdenas para refundar el Urabá antioqueño

3	Magdalena	Exconcejal de Santa Marta	Héctor Ignacio Rodríguez	2003/2007	Detenido - Extraditado por narcotráfico.	Colombia Viva	Apoyo a organizaciones terroristas, tráfico de cocaína y hasta tráfico de armas
4	Santander	Exconcejal de Rionegro	Otoniel Isaza	2003/2007	Detenido	Convergencia Ciudadana	Apoyo electoral del Bloque Central Bolívar
5	Santander	Exconcejal de Rionegro	Henry Mantilla Sandoval	2003/2007	Detenido	Convergencia Ciudadana	Apoyo electoral del Bloque Central Bolívar
6	Santander	Exconcejal de Rionegro	Mayvis Montes	2003/2007	Detenido	Convergencia Ciudadana	Apoyo electoral del Bloque Central Bolívar
7	Santander	Exconcejal de Rionegro	Freddy Augusto Álvarez Pinto	2003/2007	Detenido	Convergencia Ciudadana	Apoyo electoral del Bloque Central Bolívar
8	Sucre	Exconcejal de Tolú	Clubín José González Escobar	2003/2007	Detenido	Movimiento Huella Ciudadana	Relacionada con los jefes paramilitares Rodrigo Mercado Peluffo, alias <i>Cadena</i> , y Eduar Cobo Téllez, alias <i>Diego Vecino</i> .
9	Sucre	Exconcejal de Sincelejo	Yair Acuña	2003/2007	Detenido	Movimiento Nacional Progresista	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
10	Sucre	Exconcejal de Tolú	Freddy de Jesús San Martín Buelvas	2003/2007	Detenido	Partido Liberal	Relacionada con los jefes paramilitares Rodrigo Mercado Peluffo, alias <i>Cadena</i> , y Eduar Cobo Téllez, alias <i>Diego Vecino</i> .
11	Sucre	Exconcejal de Tolú	Eliecer de Jesús Mercado Burgos	2003/2007	Detenido	Partido Liberal	Relacionada con los jefes paramilitares Rodrigo Mercado Peluffo, alias <i>Cadena</i> , y Eduar Cobo Téllez, alias <i>Diego Vecino</i> .
12	Sucre	Exconcejal de Tolú	Augusto Antonio Rivas Díaz	2003/2007	Detenido	Partido Liberal	Relacionada con los jefes paramilitares Rodrigo Mercado Peluffo, alias <i>Cadena</i> , y Eduar Cobo Téllez, alias <i>Diego Vecino</i> .
13	Sucre	Exconcejal de San Onofre	Guillermo Gómez Balseiro	2003/2007	Llamado a juicio	Movimiento Nacional Progresista	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
14	Sucre	Exconcejal de San Onofre	René Torrente	2003/2007	Llamado a juicio	Movimiento Nacional Progresista	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María

15	Sucre	Exconcejal de San Onofre	Pedro Claver Gómez	2003/2007	Llamado a juicio	Partido Conservador	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
16	Sucre	Exconcejal de San Onofre	Concepción Curi Guerrero	2003/2007	Llamado a juicio	Movimiento Nacional Progresista	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
17	Sucre	Exconcejal de San Onofre	José Andrés Julio Blanco	2003/2007	Llamado a juicio	Movimiento Nacional Progresista	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
18	Sucre	Exconcejal de San Onofre	Celia Rosa Blanco	2003/2007	Llamado a juicio	Movimiento Nacional Progresista	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
19	Sucre	Exconcejal de San Onofre	Felipe Goenaga	2003/2007	Llamado a juicio	Movimiento Nacional Progresista	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
20	Sucre	Exconcejal de San Onofre	Luis Manuel Primera Méndez	2003/2007	Llamado a juicio	Partido Conservador	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
21	Sucre	Exconcejal de San Onofre	Amparo Ortega Novoa	2003/2007	Llamado a juicio	Partido Conservador	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
22	Sucre	Exconcejal de San Onofre	Pablo Vásquez	2000/2003	Llamado a juicio	Movimiento Nacional Progresista	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
23	Sucre	Exconcejal de San Onofre	Jader Abud Jabid	2000/2003	Llamado a juicio	Movimiento Nacional Progresista	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
24	Sucre	Exconcejal de San Onofre	Hugo Carlos Hernández Gómez	2000/2003	Llamado a juicio	Partido Conservador	Relacionado con el grupos Bloque Héroes de los Montes de María
25	Sucre	Exconcejal de Tolú	Carmen Alicia de la Barrera	2000/2003	Detenido	Convergencia Popular Cívica	Relacionada con los jefes paramilitares Rodrigo Mercado Peluffo, alias <i>Cadena</i> , y Eduar Cobo Téllez, alias <i>Diego Vecino</i> .
26	Sucre	Exconcejal de San Antonio de	Fernando José Barrios	2000/2003	Detenido	Partido Liberal	Relacionado con paramilitares

		Palmito					
--	--	---------	--	--	--	--	--

Bibliografía

Ahumada, Consuelo (1996): *El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana*, El Ancora Editores, Bogotá.

Alonso, Manuel; Giraldo, Jorge; Sierra, Diego (2007): “Medellín: El complejo camino de la competencia armada” en Romero, Mauricio, *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, CEREC, Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.

Álvarez, Jaime (2004): “Prácticas políticas en el Caribe colombiano a principios de siglo XX” *Historia Caribe*, n°. 9, Universidad del Atlántico, Colombia, pp. 52-66.

Álvaro, Miriam (2009a): “El avance de la izquierda en Colombia”, *Quórum Revista Iberoamericana*, 22, Universidad de Alcalá, Madrid.

Álvaro, Miriam (2009b): “Actores armados e inclusión política en Colombia”, en Del Campo, Esther (Ed.), *Democracia y rendición de cuentas en Bolivia y Colombia*, Ed. Catarata, Madrid.

Álvaro, M. (2007): “La Parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política colombiana”, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, Número 7 - 2007, 15 de mayo de 2007, Ed. L'Ecole des Hautes Etudes en Ciencias Sociales ISSN 1626 0252. Disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/document4636.html>

Amnistía Internacional (2005): *Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legitimación?*. Disponible en http://www.dhcolombia.info/IMG/pdf/AMR2301905_paramilitares_en_Medellin.pdf

Aranguren, Mauricio (2005), *Mi confesión. Revelaciones de un criminal de guerra*, Editorial SEPHA, Madrid.

Behar, Olga (2011): *El clan de los Doce Apóstoles: conversaciones con el mayor Juan Carlos Meneses*, Ed. Icono, Bogotá.

Betancourt, D.; García, M. L. (1994), *Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia social de la mafia colombiana (1965-1992)*, Tercer Mundo Editores, Bogotá.

Bethell, Leslie (1990): *Historia de América Latina: los países andinos desde 1930*, Vol. 16, Cambridge University Press.

Bloque Central Bolívar y Bloque Aliado Vencedores de Arauca (2003): *Escenarios para la paz a partir de la construcción de regiones*, Colombia.

Bolívar, Ingrid J. (2006): *Discursos emocionales y experiencias de la política. Las FARC y las AUC en los procesos de negociación del conflicto (1998-2005)*, Uniandes-CESO, Bogotá.

Boudon, R.; Besnard, P.; Cherkaoui, M.; Lécuyer, B. (1995): *Diccionario de sociología*, Larousse Planeta, Barcelona.

Camacho, Álvaro (2006): “De narcos, paracracias y mafias”, *En la Encrucijada. Colombia en el siglo XXI*, Ed. Norma, Bogotá.

Casquete, Jesús (2006): *El poder de la calle. Ensayos sobre acción colectiva*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

Cepeda, Ivan y Jorge Rojas (2008): *A las puertas de “El Ubérrimo”*, Editorial Random House Mondadori, Bogotá.

Chihu, A.; López, A. (2007): “La construcción de la identidad colectiva en Alberto Melucci”, *Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*, Vol. 3, n° 1, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, pp. 125-159.

CNRR (2010): *La reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas*, II Informe, Área de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Bogotá.

CNRR (2007): *Disidentes, rearmados y emergentes ¿Bandas criminales o tercera generación paramilitar*, I Informe, Área de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Bogotá.

Cohen, J. L. (1985): “Strategy or identity: new theoretical paradigms and contemporary social movements”. *Social research*, Vol. 52, n° 4.

Comisión Colombiana de Juristas (2008a): “Todas las convivir eran nuestras” *Boletín 27: serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975*, Bogotá.

Comisión Colombiana de Juristas (2008b): “Neoparamilitarismo y nuevas masacres” *Boletín 29: serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975*, Bogotá.

Corporación Nuevo Arco Iris (2005), *Diez años después...Un balance del Proceso de Paz con la CRS*. Bogotá.

Cruz, Edwin (2007): “Los estudios del paramilitarismo en Colombia”, *Análisis Político*, n° 60, Bogotá.

Cubides, Fernando (2005): “Narcotráfico y paramilitarismo: ¿Matrimonio indisoluble?”, en Rangel, Alfredo: *El poder paramilitar*, Ed. Planeta, Bogotá.

Cubides, Fernando (2004): “Narcotráfico y guerra en Colombia: Los paramilitares” en Eric Lair y Gonzalo Sánchez, *Violencias y estrategias colectivas en la región andina: Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela*, IEFA-IEPRI-Norma, Bogotá.

Cubides, Fernando; Olaya, Ana Cecilia; Ortiz, Carlos Miguel (1998): *La violencia y el municipio colombiano 1980-1997*, Facultad de Ciencias Humanas UN, Colección CES, Bogotá.

Dávila, Andrés; Delgado, Natalia (2001): “La metamorfosis del sistema político colombiano: ¿clientelismo de marcado o nueva forma de intermediación? En Gutiérrez, Francisco (2001), *“Degradación o cambio? Evolución del sistema político colombiano*, Ed. Norma, IEPRI, Bogotá.

Deas, Malcolm; Gaitán Fernando (1995): *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, DNP, FONADE, Tercer Mundo Editores, Colombia.

Departamento Nacional de Planeación (2004): *Cifras de violencia extorsión 1998-2004*, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Justicia y Seguridad, Bogotá.

Departamento Nacional de Planeación (2003): *Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Hacia un Estado Comunitario*, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

Diani, Marco (2003): “The Terrestrial Emporium of Contentious Knowledge”, *Mobilization*, Vol. 8, n° 1, febrero 2003, San Diego State University.

Duncan, G. (2006): *Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*, Ed. Planeta, Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá.

Duncan, Gustavo (2005): *Del Campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra*, CEDE Universidad de los Andes, Bogotá.

Durán, Rafael (1995): “La literatura sobre lo Nuevos Movimientos Sociales. Una revisión”, *Revista de Estudios Políticos* (Nueva época), n°. 89, julio-septiembre.

Fernández, Francisco; Riechmann, Jorge (1994): *Redes que dan libertad. Introducción a los Nuevos Movimientos Sociales*, Paidós, Barcelona.

Fernández, C.; García, M.; Sarmiento, F. (2004), “Movilización por la paz en Colombia 1978-2002”, *Controversia*, número extraordinario 181, febrero. Disponible en <http://www.cinep.org.co/revistas/controversia/controversiaextraordinario/movilizacionporlapazencolombia.pdf>

Fundación Ideas para la Paz (2008): *Estadísticas sobre reinserción en Colombia*, Disponible en: [http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_documentos/estadisticas_reinsercion_colombia%20\(31%20enero%202008\).pdf](http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_documentos/estadisticas_reinsercion_colombia%20(31%20enero%202008).pdf)

Gaitán, Fernando (1995): “Una indagación sobre las causas de la violencia”, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, FONADE, Bogotá.

Gambetta, Diego. (1993): *The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection*, Harvard University Press.

Garrido, Javier (1996): *Redes de acción colectiva en Bogotá y Caracas*, Facultad Ciencias Políticas y Sociología, UCM, Tesis doctoral, Madrid.

Garvía, Roberto (1998): *Conceptos fundamentales de Sociología*, Alianza Editorial, Madrid.

García-Peña, D. (2005), “La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico”, *Análisis político*, n.º 53, enero-marzo.

Garzón, Juan Carlos (2005), “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica”, en Rangel, Alfredo (ed.), *El poder paramilitar*, Bogotá, Editorial Planeta-Fundación Seguridad y Democracia, pp. 47-135.

Giner, Salvador; Lamo de Espinosa, Emilio; Torres, Cristóbal (2006): *Diccionario de Sociología* (2ª ed.), Alianza Editorial, Madrid.

Giustozzi, Antonio (2005): “The Debate of Warlordism: The Importance of Military Legitimacy”, *Crisis States Discussion Papers*, n.º 13, London School of Economics, Londres.

González, Fernán; Bolívar, Ingrid J. y Vásquez, Teófilo (2003): *Violencia política en Colombia. De la Nación fragmentada a la construcción del Estado*, CINEP, Bogotá.

González, F. (2002): “Colombia entre la guerra y la paz. Aproximación a una lectura geopolítica de la violencia colombiana”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 8, n.º 2, mayo-agosto, pp. 13-49.

González, Fernán (1997): *Para leer la política. Ensayos de Historia Política Colombiana*, Tomo 1, CINEP, Bogotá.

González, Fernán (1993): “Tradición y modernidad en la política colombiana”, en González, Fernán: *Violencia en la región andina: el caso de Colombia*, Cine, Apep, Bogotá.

González, José Jairo (2007): “Los paramilitares y el colapso estatal en Meta y Casanare” en Romero, Mauricio (2007): *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, CEREC, Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.

Gusfield, Joseph (1994): “La reflexividad de los movimientos sociales: revisión de las teorías sobre la sociedad de masas y el comportamiento colectivo”. En: Laraña, E.; Gisfield, J: *Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

Guzmán, Álvaro; Moreno, Renata (2007): “Autodefensas, narcotráfico y comportamiento estatal en el Valle del Cauca” en Romero, Mauricio (2007): *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, CEREC, Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.

Guzmán, Carlos Enrique (2004): “Nuevas acciones, viejas prácticas: partidos, movimientos políticos y sistema de partidos en Colombia, 1974-2002”, *Reflexión política*, n°. 11, UNAB, Colombia.

Haugaard, Lisa (2008): *La cara oculta de la verdad. En busca de la verdad, justicia y reparación para las víctimas colombianas de la violencia paramilitar*, Latin America Working Group Education Fund, Disponible en www.lawg.org

Hernández, Augusto (2006): “Regulación jurídica de los partidos políticos en Colombia”, en Zovatto, Daniel: *Regulación jurídica de los partidos en América Latina*, UNAM, IDEA, Suiza.

Human Rights Watch (2001:): *La sexta división, relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia*, Nueva York.

Human Rights Watch (2000): *Los lazos que unen: Colombia y las relaciones militares-paramilitares*, Nueva York.

Ibarra, Pedro (2000): “Los estudios sobre los movimientos sociales: estado de la cuestión”, *Revista Española de Ciencia Política*, Vol. 1. Número 2, Abril, pp. 271- 290.

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2008, 2009 y 2010, Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Colombia

Jackson, P. (2005), *Warlords and states in Africa*, Texto sin publicar, International Development Departament, University of Birmingham, Inglaterra, disponible en: <http://www.gsdr.org/docs/open/CC88.pdf>

Jenkins, J. Craig (1994): “La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales”, *Zona Abierta* 69, pp. 5-49.

Kalyvas, S.; Arjona, A. (2005): “Una perspectiva teórica”, en Rangel, A., *El poder paramilitar*, Ed. Planeta, Bogotá.

Koopmans, Ruud, (2003): “A faille revolution but a worthy cause”, *Mobilization*, Vol. 8, n° 1, febrero 2003, San Diego State University.

Krauthausen, C. (1998): *Padrinos y mercaderes: crimen organizado en Italia y Colombia*, Espasa Hoy, Bogotá.

Kriesi, Hanspeter (1999): “La estructura organizacional de los nuevos movimientos sociales en su contexto político”. En: McAdam, D.; McCarthy, J. D. (eds.): *Movimientos sociales: perspectivas comparadas oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*, Ediciones Istmo, Madrid.

Kriesi, Hanspeter (1992): “El contexto político de los nuevos movimientos sociales en Europa occidental”. En: Benedicto, J.; Reinares, F. (eds.): *Las transformaciones de lo político*, Alianza Universidad, Madrid.

Leander, Anne (2002): “Global ungovernance: Mercenaries, States and the control over Violence” Copenhagen Peace Research Institute (COPRI), *COPRI Working Paper*, 4/2002, Documento presentado en el seminario “Private Military Companies”, Centre for Development Research, Copenhagen, 7 Dec. Disponible en <http://www.copri.dk/publications/WP/WP%202002/4-2002.pdf>

Leal, Francisco (2006): “La política de seguridad democrática 2002-2005”, *Análisis político*, 57, mayo-agosto.

Leal, Francisco (1995): *El oficio de la guerra: la seguridad nacional en Colombia*, Tercer Mundo, IEPRI, Bogotá.

Leal, Francisco; Dávila, Andrés (1991): *Clientelismo. El sistema político y su expresión regional*, Tercer Mundo Editores, IEPRI, Bogotá.

López, Claudia (2010): *Y refundaron la patria. De cómo mafioso y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Corporación Nuevo Arco Iris, Congreso Visible, Dejusticia, Grupo Método, MOE. Ed. Debate, Bogotá.

Martí i Puig, Salvador (2004): “Los movimientos sociales en un mundo globalizado: ¿alguna novedad?”, *América Latina Hoy*, 36, pp. 79-100.

McAdam, Doug: “Ehhh, What’s Up (with) DOC? Clarifying the Paradigm”, *Mobilization*, Vol. 8, n° 1, febrero 2003, San Diego State University.

McAdam, D.; Tarrow, S.; Tilly, C. (2005): *Dinámica de la contienda política*, Ed. Hacer, Barcelona.

McAdam, D. (1999): “Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación”. En: McAdam, D.; McCarthy, J. D. (eds.): *Movimientos sociales: perspectivas comparadas oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*, Ediciones Istmo, Madrid.

McCarthy, J. D.; Zald, M. N. (1977): “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory”, *American Journal of Sociology*, 82, n° 6, pp. 1212-1241.

Medellín, Pedro (2005): “De la crisis de la representación a la representación de la crisis en Colombia. Análisis de las alternativas de salida ofrecidas por el Acto Legislativo n° 1 de 2003 y la Ley de Bancadas de 2005”, en Cárdenas, Miguel, *La reforma política del Estado en Colombia. Una salida integral de la crisis*, FESCOL, CEREC, Bogotá.

Medina, Carlos (2008): *El narco-paramilitarismo. Lógicas y procesos en el desarrollo de un capitalismo criminal*. Ed. Universidad Nacional de Colombia, Instituto UNIJUS, Grupo de Investigación Theseus, Bogotá. Disponible en: <http://lahaine.org/b2-img08/medinac.PDF>

Medina, Carlos (2005): “La economía de guerra paramilitar: una aproximación a sus fuentes de financiación”, *Análisis Político*, 53, enero-marzo, pp. 77-87.

Medina, Carlos; Téllez, Mireya (1994): *La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia*, Ed. Rodríguez Quito, Bogotá.

Mejía, Daniel-, Restrepo, Pascual (2009): *La guerra contra la producción y tráfico de drogas: una evaluación económica del Plan Colombia*, Debates de coyuntura económica, Universidad de los Andes, Fedesarrollo, Bogotá.

Melo, Orlando (1991): “Los paramilitares y su impacto sobre la política”, en Leal, Francisco; Zamosc, León, *Al filo del caos. Crisis política en Colombia de los años 80*, Tercer Mundo Editores- IEPRI, Colombia.

Melucci, A. (1996): *Challenging Codes: Collective action in the information age*, Cambridge University Press, Cambridge.

Ministerio de Defensa (2010): *Entregas individuales y voluntarias durante el Gobierno de Uribe*, Programa de atención humanitaria al desmovilizado, Bogotá.

Ministerio de Defensa Nacional (2007): *Comunicado*, 16 de julio de 2007, Bogotá D. C.

Molano, Alfredo (2006): “Aproximaciones históricas al paramilitarismo”, *Jornadas Internacionales Quien no tiene memoria no tiene futuro*, Observatorio de Conflictos y Derechos Humanos, Universidad de Barcelona, Barcelona, Disponible en http://www.observatori.org/paises/pais_51/documentos/E_MOLANO.pdf

Montenegro, Armando y Posada, Carlos (2001): *La violencia en Colombia*, Alfaomega, Bogotá.

Ochoa, María (2011): *Horror sin nombre: impacto de la entrada de los paramilitares en territorio wayú*, Universidad de los Andes, Bogotá.

O'Donnell, Guillermo (1997): *Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Ed. Paidós, Buenos Aires.

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2010): *Buscando un equilibrio entre La justicia y la paz: Avances y perspectivas de la Ley 975*, Ed. Corporación Pensamiento Siglo XXI, Bogotá.

Oliver, Pamela E. (2003): “Mechanisms of contention”, *Mobilization*, Vol. 8, n° 1, febrero 2003, San Diego State University.

Ortiz, R. (2006): “La guerrilla mutante” en LEAL, F.: *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI*, Editorial Norma, Universidad de los Andes, Ceso, Bogotá.

Otero Prada, Diego (2007): *Las cifras del conflicto colombiano*, Uniciencia-Colciencia, Bogotá

Palacios, Marco; SAFFORD, F. (2002): *Colombia, país fragmentado, sociedad dividida. Su historia*, Ed. Norma, Bogotá.

PARDO, R. (2004): *La historia de las Guerras*, Bogotá, Ediciones B, Bogotá.

PAX CHRISTI (2002): *La industria del secuestro en Colombia ¿Un negocio que nos concierne?*, Pax Christi Holanda, La Haya.

Pecaut, Daniel (2006): *Crónica de cuatro décadas de política colombiana*, Ed. Norma, Bogotá.

Pecaut, Daniel (2001): *Orden y violencia: Colombia 1930-1954*, Ed. Norma, Bogotá.

Pecaut, Daniel (2001): *Guerra contra la sociedad*, Ed. Planeta, Bogotá.

Pecaut, Daniel (1998): “La contribución del IEPRI a los estudios sobre la violencia en Colombia”, *Análisis Político*, n°. 34, IEPRI,

Pérez, Bernardo (2007): “El paramilitarismo en Cundinamarca y Bogotá” en Romero, Mauricio (2007): *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, CEREC, Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.

Pérez, William Fredy; Restrepo, William; Vélez, Juan Carlos (1997): *Violencia homicida en Medellín*. Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Políticos, Medellín.

Pizarro, Eduardo (2004): “Una luz al final del túnel. Balance estratégico del conflicto armado en Colombia”, *Nueva Sociedad*, n° 192, julio-agosto, pp.72-84.

Pizarro, Eduardo (2002): *La atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las micro-empresas electorales*, Working Paper n° 292, Princeton University.

Pizarro, Eduardo (2001): *¿Guerra Civil? ¿Guerra contra los civiles? ¿Violencia generalizada?*, Fundación Ideas para la Paz, Bogotá.

Pizarro, Eduardo (1992): “Colombia: ¿hacia una salida democrática a la crisis nacional?”, *Análisis Político*, V.17, pp. 41-59.

Posada, Eduardo (2000): “La crisis política como crisis intelectual” en Ahumada, C.; Caballero, A.; Castillo, C.; Guhl, E.; Molaño, A.; Posada, E., *¿Qué está pasando en Colombia? Anatomía de un país en crisis*, Ed. Áncora, Bogotá.

Ramírez, Karmen (2007): *Desde el desierto: notas sobre paramilitares y violencia en territorio wayúu de la media Guajira*, Cabildo Wayuu, Maicao (La Guajira).

Ramírez, William (2005), “Autodefensas y poder local”, en: Rangel, Alfredo (ed.), *El poder paramilitar*, Editorial Planeta-Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá.

Rangel, Alfredo (2005): *El poder paramilitar*, Ed. Planeta, Fundación Seguridad y Democracia, Bogotá.

Rangel, Alfredo (2003): *Fuerzas militares para la guerra. La agenda pendiente de la reforma militar*, Ensayos de Seguridad y Democracia, Fundación Seguridad y Democracia, Colombia.

Rangel, Alfredo (2001): *Guerra insurgente: conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia*, Intermedio editores, Bogotá.

Revilla, Marisa. (1994): “El concepto de movimiento social: acción, identidad y sentido”, *Zona Abierta* 69, pp. 181-213.

Rivas, Pedro; Rey, Pablo (2008): “El proyecto político del paramilitarismo en Colombia. Desde la lucha contra la insurgencia hasta el desafío del Estado”, *Revista Política y Estrategia*, n.º 109, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago de Chile.

Rivera, José Manuel (1995): “Intereses, organización y acción colectiva”. En: Benedicto, J.; Morán, M.L.: *Sociedad y política. Temas de sociología política*, Alianza Editorial, Universidad textos, Madrid.

Rocha, Ricardo (2000): *La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico*, Siglo del Hombre Editores, UNDCP, Bogotá.

Rodríguez, Cesar (2004): “La nueva izquierda colombiana: orígenes, características y perspectivas” en: Rodríguez, C.; Barret, P.; Chávez, D.: *La Nueva Izquierda en América Latina*, Ed. Norma, Bogotá.

Romero, Mauricio (2007): *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, CEREC. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.

Romero, Mauricio (2003): *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*, IEPRI, Bogotá.

Romero, Mauricio (2000): “Autonomía militar, autodefensas y paramilitares en Colombia: es posible una salida democrática al conflicto armado?” en *The Peace Process in Colombia and the U.S. Policy*, Working Paper # 247, Latin American Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C.

Romero, Mauricio (1998), “Identidades políticas y conflicto armado en Colombia” en AA.VV, *Debate Político: conflictos regionales Atlántico y Pacífico*, ed. IEPRI, FESCOL, Bogotá.

Rozema, Ralph (2007): “Paramilitares y violencia urbana en Medellín, Colombia”, *Foro Internacional*, Vol. XLVII, Núm. 3, julio-septiembre, 2007, pp. 535-550, El Colegio de México, México.

Rubio García, A. (2004): “Perspectivas teóricas en el estudio de los movimientos sociales”, *Circunstancia: revista de ciencias sociales*, n° 3, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid.

Rucht, Dieter (2003): “Overcoming the Classical Model?”, *Mobilization*, Vol. 8, n° 1, febrero 2003, San Diego State University.

Sánchez, F. y M. Chacón (2005): “Conflicto, Estado y Descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002”, *Documento CEDE*, n.º 33, Universidad de los Andes, pp. 1-45.

Silva, Gabriel (1989): “El origen del Frente Nacional y el gobierno de la Junta Militar”, *Nueva Historia de Colombia*, tomo II, Ed. Planeta, Bogotá.

Silva, Gabriel (1989): “Carlos Lleras y Misael Pastrana: reforma del Estado y crisis del Frente Nacional”, *Nueva Historia de Colombia*, tomo II, Ed. Planeta, Bogotá.

Smelser, Neil J.; Baltes, Paul B. (2001): *International Encyclopedia of the social and behavioral sciences*, Vol. 1, Elsevier, Amsterdam.

Tarrow, Sidney (2003): “Confessions of a Recovering Structuralist”, *Mobilization*, Vol. 8, nº 1, San Diego State University.

Tarrow, Sidney (1998): *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza Universidad, Madrid.

Tarrow, Sidney (1991): *Struggle, politics, and reform: collective action, social movements, and cycles of protest*, New York, Cornell University.

Taylor, Verta (2003): “Plus ça change, plus c’est la même chose”, *Mobilization*, Vol. 8, nº 1, febrero 2003, San Diego State University.

Tilly, Charles (2007): *Violencia colectiva*, Ed. Hacer, Barcelona.

Tilly, Charles (2003): *The Politics of Collective Violence*, Cambridge University Press, Londres (Traducción Manuel Espinel Vallejo, Profesor Asociado, Departamento Sociología I, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid).

Tilly, Charles (2002): “Repertorios de acción contestataria en Gran Bretaña, 1758-1834”, En: Traugott, M: *Protesta social: repertorios y ciclos de acción colectiva*, Ed. Hacer, Barcelona.

Tilly, Charles (1992): *Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990*, Editorial Alianza, Madrid.

Tokatlian, Juan Gabriel (2009): *La guerra contra las drogas en el mundo andino: Hacia un cambio de paradigma*, Editorial del Zorzal, Buenos Aires.

Tokatlian, Juan Gabriel (2001): El Plan Colombia ¿Un modelo de intervención?, *Revista CIDOB D’Afers Internacionals*, nº 54-55, Fundación CIDOB, Barcelona.

Tokatlian, Juan Gabriel (2000): *Globalización, narcotráfico y violencia: Siete ensayos sobre Colombia*, Editorial Norma, Buenos Aires/Bogotá.

Tokatlian, Juan Gabriel (1995): *Drogas, dilemas y dogmas: Estados Unidos y la narcocriminalidad organizada en Colombia*, Universidad de los Andes/Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá.

Tovar, Bernardo (1994): *La historia al final del milenio*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Volkov, Vadim (2000): “The political economy of protection rackets in the past and the present”, *Social research*, vol. 67, n°. 3.

Ungar, Elisabeth y Cardona, Juan Felipe (2010): “¿Hubo una bancada parapolítica?”, en López, Claudia, *Y refundaron la patria. De cómo mafioso y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Corporación Nuevo Arco Iris, Congreso Visible, Dejusticia, Grupo Método, MOE, Ed. Debate, Bogotá.

Uprimny, Rodrigo; Saffon, María Paula (2008): “Usos y abusos de la justicia transicional en Colombia”, *Annuario de Derechos Humanos*, n°.4, Universidad de Chile, Santiago de Chile.

Zuñiga, Priscila (2007): “Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena” en Romero, Mauricio (2007): *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, CEREC. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá.